

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

REVISTA No. 35

Sexta Época

Año III Noviembre 2010

Derechos Reservados ©
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.
INSURGENTES SUR 881 TORRE 'O' PISO 12
COL. NÁPOLES. DELEG. BENITO JUÁREZ
C.P. 03810. MÉXICO, D.F.

Certificado No. 04-2001-012517410700-102

FIDEICOMISO PARA PROMOVER LA INVESTIGACIÓN DEL DERECHO FISCAL Y ADMINISTRATIVO

- **2010**
  Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta publicación, por medios electrónicos o mecánicos, incluyendo fotocopia, grabación magnetofónica y cualquier sistema de almacenamiento de información, sin la autorización expresa.

- El contenido de los artículos publicados son de la exclusiva responsabilidad de los autores.

- ISSN 1665-0086 50119

- Página Internet del T.F.J.F.A: www.tfjfa.gob.mx
  Correo Electrónico de la Revista: publicaciones@tfjfa.gob.mx

REVISTA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
NOVIEMBRE DE 2010. No. 35

CONTENIDO:

- **Primera Parte:**
  Jurisprudencias de Sala Superior 5

- **Segunda Parte:**
  Precedentes de Sala Superior 73

- **Tercera Parte:**
  Criterios Aislados de Sala Superior y de Salas Regionales 459

- **Cuarta Parte:**
  Acuerdos Generales de Sala Superior y Acuerdos Generales y Específicos de la Junta de Gobierno y Administración 561

- **Quinta Parte:**
  Índices Generales 625

PRIMERA PARTE

JURISPRUDENCIAS DE SALA SUPERIOR

* Las Jurisprudencias del Pleno de la Sala Superior de este Tribunal que faltan en número consecutivo se publicarán en una Revista posterior.

PLENO

JURISPRUDENCIA NÚM. VI-J-SS-65

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

JEFE DE LA UNIDAD DE REVISIÓN Y LIQUIDACIÓN FISCAL, DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. ES INNECESARIA LA INVOCACIÓN DE LA FUNDAMENTACIÓN DE SU COMPETENCIA TERRITORIAL, DADO SU CARÁCTER DE AUTORIDAD FEDERAL Y ENCONTRARSE ESTABLECIDAS SUS ATRIBUCIONES EN EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.- Para cumplir con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 constitucional, es necesario que la autoridad, sea fiscal o administrativa, precise su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida. Así, la competencia en cuanto es territorial, encuentra su razón en la organización propia del ente que esté ejerciendo esas atribuciones; en relación a ello, debe partirse de la consideración de que las autoridades federales tienen a priori competencia en todo el territorio nacional, porque tienen jurisdicción federal. En consecuencia, debe distinguirse la manera en la cual las autoridades de carácter federal y las locales atienden el requisito de fundamentación y motivación de su competencia por razón del territorio en el que pueden ejercer las facultades otorgadas; las hipótesis que deben distinguirse son: a) Cuando existe el precepto jurídico que expresamente dispone el ámbito espacial de competencia de las autoridades federales, es claro que aunque las mismas tienen originariamente competencia en todo el territorio nacional, cumplen con el requisito de fundamentación y motivación referido con la cita del precepto legal o reglamentario correspondiente; b) Cuando la norma reglamentaria establece a una determinada unidad administrativa federal el ejercicio de alguna atribución -prevista originariamen-

te en la ley-, sin distinguir su ámbito de aplicación o cuando el Reglamento omite indicar que su ejercicio abarca todo el territorio nacional, debe entenderse que su aplicación puede efectuarse en todo ese ámbito espacial, dado el carácter federal de la autoridad de que se trate y, por ende, con jurisdicción en todo el territorio nacional, por lo que es lógico concluir que no existe el deber de citar precepto alguna relativo a la competencia espacial, al no existir el mismo y, sobretodo, porque tal competencia la tiene originariamente en todo el territorio nacional, dado su carácter de autoridad federal; c) En el supuesto de las autoridades locales o regionales, se exige indefectiblemente la invocación de los instrumentos normativos que especifican su circunscripción territorial, mediante la invocación de los preceptos previstos en ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida. Por tanto, el Jefe de la Unidad de Revisión y Liquidación Fiscal, de la Comisión Nacional del Agua, no requiere citar los preceptos jurídicos que le conceden competencia en todo el territorio nacional, pues aunque el Reglamento en estudio omite precisar el ámbito de aplicación de las atribuciones previstas en los artículos 45, fracción XI, y 55, fracciones IV, V, VI, IX, XI, y XIV, del Reglamento Interior de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, lo cierto es que por tener el carácter de autoridad federal y no el de una autoridad regional, puede ejercer esas facultades en todo el ámbito del territorio nacional, al ser esa unidad depositaria de las atribuciones que la Comisión Nacional del Agua, tiene conferidas específicamente y que le son otorgadas sin limitación de territorio. Lo anterior, sin perjuicio de estar obligada a fundar debidamente su competencia material, a través de la cita de los artículos mencionados, el último en la fracción que corresponda a la facultad que la autoridad ejerza, así como los demás que corresponda.

Contradicción de Sentencias Núm. 20394/06-17-06-7/Y OTRO/211/09/PL-09-01.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 16 de junio de 2010, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretario: Lic. Juan Carlos Mateo Leyva.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/28/2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

TERCERO.- [...]

Después de practicar un análisis preliminar de las sentencias materia de estudio, considerando los elementos señalados anteriormente, esta juzgadora llega a la convicción de que sí existe contradicción de criterios, conforme a los siguientes razonamientos:

En primer término, los dos asuntos coinciden en lo siguiente:

- Las resoluciones impugnadas fueron emitidas por el Jefe de la Unidad de Revisión y Liquidación Fiscal, de la Comisión Nacional del Agua.

- Se hace valer la competencia territorial de la autoridad que emitió dichas resoluciones.

- La autoridad emisora de las resoluciones impugnadas invocó para fundar su competencia, entre otros, los artículos 45, fracción XI y 55, fracciones, IV, V, VI, IX, XI, y XIV, del Reglamento Interior de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado el 21 de enero de 2003.

Conforme a lo anterior, tenemos claramente como elementos coincidentes de los juicios, los siguientes:

1.- Que las resoluciones impugnadas fueron emitidas por una misma autoridad.

2.- Que en las demandas respectivas, se hizo valer como ilegalidad de las resoluciones combatidas la fundamentación de la competencia territorial de la autoridad emisora de dichas resoluciones.

3.- Que la autoridad invocó los mismos preceptos legales para fundar su competencia.

Asimismo, las sentencias emitidas en los referidos juicios coinciden en una parte de la litis a resolver, siendo ésta determinar si el Jefe de la Unidad de Revisión y Liquidación Fiscal, de la Comisión Nacional del Agua debe fundar su competencia territorial, o si basta con fundar su competencia material, por tratarse de una autoridad federal con jurisdicción en todo el territorio nacional.

En tal sentido, las cuestiones planteadas y analizadas en dichas sentencias son esencialmente iguales, siendo las siguientes:

- En la sentencia emitida en el juicio 20394/06-17-06-7, se analizó el planteamiento de la actora consistente en que la autoridad emisora de las resoluciones impugnadas, en el caso el Jefe de la Unidad de Revisión y Liquidación Fiscal, de la Comisión Nacional del Agua, no fundó su competencia por razón de territorio en el cuerpo de dichas resoluciones, sino exclusivamente su competencia material.

- En la sentencia del juicio 16833/06-17-02-9, se analizó el planteamiento de la demandante en el sentido de que la autoridad emisora del acto impugnado, esto es el Jefe de la Unidad de Revisión y Liquidación Fiscal, de la Comisión Nacional del Agua, no precisó los preceptos legales con los que fundara su competencia territorial, sino solamente su competencia material.

Los criterios de resolución de los asuntos difieren en lo siguiente:

- Siendo idéntica la cuestión que se resuelve, ello se efectúo de manera diversa, ya que en la sentencia emitida en el juicio 20394/06-17-06-7, se consideró que el Jefe de la Unidad de Revisión y Liquidación Fiscal, de la Comisión Nacional del Agua, con independencia de su carácter de órgano

desconcentrado, omitió fundar su competencia territorial en la resolución controvertida, pues los preceptos invocados en ella únicamente justifican su competencia material, por lo que la citada resolución se encuentra indebidamente fundada y motivada.

- A su vez, en la sentencia emitida en el juicio 16833/06-17-02-9, se resolvió que si bien el Jefe de la Unidad de Revisión y Liquidación Fiscal, de la Comisión Nacional del Agua, no fundó su competencia territorial, ello no es menester, pues en la especie se trata de una autoridad con competencia en todo el territorio nacional, por lo que bastaba la cita de los preceptos que le confieren competencia material para actuar, para tener por debidamente fundada la resolución controvertida.

Conforme a lo expuesto, resulta que sí existe contradicción de criterios y es procedente determinar cuál de ellos debe imperar, toda vez que derivan de juicios similares en los que se resuelve una misma cuestión respecto de la cual es necesario definir el sentido procedente a seguir en lo subsecuente, a fin de no causar confusión e inseguridad jurídica a las partes que pudieran verse involucradas en juicios similares que puedan presentarse.

Así, el tema de la presente contradicción comprende determinar lo siguiente:

- Si es necesario que el Jefe de la Unidad de Revisión y Liquidación Fiscal, de la Comisión Nacional del Agua, funde su competencia territorial para determinar y liquidar créditos fiscales, imponer sanciones, emitir y notificar adeudos fiscales y para imponer multas, con independencia de ser un órgano desconcentrado, o si no es necesario en vista de que es una autoridad con competencia en todo el territorio nacional.

CUARTO.- RESOLUCIÓN Y DETERMINACIÓN DEL CRITERIO QUE DEBE PREVALECER.

Corresponde entonces dilucidar si las resoluciones emitidas por el Jefe de la Unidad de Revisión y Liquidación Fiscal, de la Comisión Nacional del Agua, en las cuales se determinen y liquiden créditos fiscales, se impongan sanciones, y se emitan y notifiquen adeudos fiscales, además de imponer multas, deben estar debidamente fundadas, en cuanto a su competencia territorial, con independencia de ser un órgano desconcentrado, o si basta con que en las mismas se encuentre debidamente fundada su competencia material para emitirlas, por tener competencia en todo el territorio nacional.

En primera instancia, es de precisarse que en términos del artículo 16 Constitucional, la autoridad tiene como obligación motivar y fundar los actos de molestia, lo que implica necesariamente expresar los hechos o situaciones concretas que motivan la emisión del acto y precisar los artículos legales aplicables; esto significa que todo acto de autoridad, no sólo debe de contener la fundamentación y motivación que sirve para sustentar la resolución que afecta al particular, sino que necesariamente debe de ser emitido por autoridad competente, y que dicha competencia sea debidamente fundada en el propio acto de molestia, lo cual constituye un reflejo de la garantía de legalidad que deben cumplir los actos de autoridad que afectan la esfera jurídica de los particulares conforme al primer párrafo del citado artículo.

Ahora bien, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 constitucional, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o **territorio**, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; y que en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden.

Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 57/2001, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, correspondiente al mes de noviembre de 2001, página 31, que es del tenor siguiente:

"***COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO"***.[N.E. Se omite transcripción]

Así como la tesis de jurisprudencia **2a./J. 115/2005**, misma que se encuentra visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, correspondiente al mes de septiembre de 2005, página 310, cuyo texto y rubro es el siguiente:

"***COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.***" [N.E. Se omite transcripción]

De esta manera, no obstante que la autoridad emisora del acto impugnado sea competente para dictarlo, ello **no le releva** del requisito *sine qua non* de todo acto de autoridad, sea fiscal o administrativa; es decir, de fundar y motivar dicha competencia, por mandato del artículo 16 constitucional.

Sirve de apoyo por analogía, la jurisprudencia VI.3o.A. J/50, sostenida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XXII, Septiembre de 2005, Página: 1233, que a la letra dice:

"***COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD FISCAL. AUNQUE NO SE DESCONOZCA QUE LA TIENE, DEBE FUNDARLA.***" [N.E. Se omite transcripción]

En esa misma tesitura, no pasa inadvertida para el Pleno de este Tribunal, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 83/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, junio de 2010, página 272, cuyo rubro y texto son:

> "**SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. ES INNECESARIA LA INVOCACIÓN DE LOS ACUERDOS POR LOS QUE SE ESTABLECE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COMO FUNDAMENTO DE SU COMPETENCIA EN ESE ÁMBITO, AL ENCONTRARSE ESTABLECIDA EN EL REGLAMENTO INTERIOR DE AQUÉL.**" [N.E. Se omite transcripción]

Es pertinente considerar por analogía dicho criterio jurisprudencial, pues aunque alude al Servicio de Administración Tributaria, lo cierto es que el contenido conceptual de la misma se adecua al que es objeto de análisis en este fallo; ello, en virtud de referirse a las autoridades que de ese organismo desconcentrado tienen su sede en la Ciudad de México y ejercen sus facultades en todo el territorio nacional, así como a las Administraciones Locales o Regionales del citado organismo, diferenciando los términos conforme a los cuales se entiende cumplido el requisito de fundamentación de la competencia según se trate de una u otra de las autoridades mencionadas.

Exigencia que en relación a las autoridades de carácter federal, se satisface suficientemente con la cita de las disposiciones del Reglamento relativo que prevea que la autoridad general mencionada y las centrales dependientes de ella, tendrán su sede en la Ciudad de México y ejercerán sus facultades en todo el territorio nacional, siendo innecesaria, por ello, la invocación de las disposiciones contenidas en los Acuerdos que establecen la circunscripción territorial de las unidades administrativas, por tratarse de instrumentos normativos dirigidos a especificar la circunscripción territorial de las autoridades Locales o Regionales del citado organismo.

Entonces, es en el supuesto de las autoridades locales o regionales cuando de manera exclusiva se exige la invocación de los instrumentos normativos que especifican su circunscripción territorial.

En otras palabras, esa jurisprudencia fija la manera en la cual las autoridades de carácter federal y las locales atienden el requisito de fundamentación y motivación de su competencia.

En complemento a lo anterior, los Magistrados integrantes del Pleno de la Sala Superior de este Tribunal consideran que las autoridades federales tienen *a priori* competencia en todo el territorio nacional, porque tienen jurisdicción federal.

Es decir, la competencia en cuanto es territorial, encuentra su razón en la organización propia del ente que esté ejerciendo esas atribuciones y que por eso, se divide pues la competencia la tiene de origen.

De esta manera, debido a que las autoridades federales tienen originariamente competencia en todo el territorio nacional, es claro que el requisito de fundamentación y motivación de la misma se cumple con la cita de tal precepto, cuando existe el precepto jurídico que expresamente la dispone así.

Sin embargo, cuando la norma reglamentaria establece a una determinada unidad administrativa federal el ejercicio de alguna atribución –prevista originariamente en la ley-, sin distinguir su ámbito de aplicación o cuando el Reglamento omite indicar que su ejercicio abarca todo el territorio nacional, debe entenderse que su aplicación puede efectuarse en todo ese ámbito espacial, dado el carácter federal de la autoridad de que se trate y, por ende, con jurisdicción en todo el territorio nacional.

Ergo, al no requerirse indefectiblemente la existencia de norma reglamentaria que atribuya esa competencia en todo el territorio nacional, por ser la autoridad de jurisdicción federal y sus facultades otorgadas en todo el territorio nacional, es a todas luces claro que la autoridad de carácter federal no está obligada a citar el

precepto jurídico que defina el ámbito espacial de su competencia, pues la misma la tiene originariamente en todo el territorio nacional.

En apoyo de lo expuesto, es pertinente recordar que la Administración Pública está conformada por el conjunto de organismos a los cuales el poder político les atribuye, fundamentalmente, la función administrativa del Estado. Y que para ello, tal Administración se organiza, en torno al Poder Ejecutivo, de acuerdo a los órganos cuya creación está establecida puntualmente en la ley.

En el ámbito del derecho administrativo mexicano, el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que la Administración Pública es Centralizada y Paraestatal y, además indica quiénes integran cada una de esas divisiones de organización administrativa, lo que es corroborado por los numerales 2 y 3 de ese ordenamiento, de los cuales se desprende que las Secretarías de Estado forman parte de la administración pública federal centralizada.

Además, esa Ley, en su artículo 17, contempla la posibilidad de que las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos cuenten con órganos administrativos desconcentrados, como es el caso de la Comisión Nacional del Agua, que les estarán jerárquicamente subordinados y **tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso**, **de conformidad con las disposiciones legales aplicables**, a fin de obtener una más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia.

La característica de la desconcentración es que, para tener vida, tiene su origen en la centralización administrativa, y supone una relación entre órganos de la misma entidad jurídica, en la que el poder de decisión y **la competencia legal para realizar los actos jurídicos que corresponden a la persona pública centralizada, son atribuidos a órganos que le están subordinados jerárquicamente**.

En otras palabras, la desconcentración implica una delegación de ciertas facultades del titular de una dependencia en favor de órganos que le están subordinados

jerárquicamente, por ello los inferiores a quienes se otorgan esas facultades **carecen de personalidad jurídica propia, por no ser independientes del órgano central, ya que le están subordinados jerárquicamente**.

En esa tesitura, el Pleno de esta Sala Superior, desprende la siguiente conclusión fundamental: la competencia legal para realizar los actos jurídicos que corresponden a la persona pública centralizada, son atribuidos a los órganos desconcentrados que le están subordinados jerárquicamente, de manera que, en principio, tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que corresponde originalmente al órgano del cual dependen, pues es a él a quien auxilian para el debido despacho de los asuntos a cargo de su superior jerárquico y, en segundo lugar, dicha competencia puede determinarse en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Es entonces bajo este contexto que debe esclarecerse la cuestión planteada, en relación con el análisis del contenido de los artículos 45, fracción XI, y 55, fracciones IV, V, VI, IX, XI, y XIV, del Reglamento Interior de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que son los preceptos en los que la autoridad se apoyó para fundar su competencia en las resoluciones controvertidas en los juicios cuyas sentencias son materia de esta contradicción, y que además son de interés para la misma.

Cabe precisar que en el fallo del juicio 16833/06-17-02-9, visible a fojas 7 a 59 de las copias certificadas del mismo, existe un error en la cita de la fracción del referido artículo 45, pues se alude a la VI, cuando en realidad se trata de la fracción XI, lo cual se constata de tal resolución, visible a foja 10 de las copias certificadas del expediente citado; por tanto, para la resolución de la presente contradicción se tomará en cuenta la fracción invocada en la resolución aludida, sin que ello conlleve modificar los términos del citado fallo, pues aunque equivocadamente se indicó la fracción VI, lo cierto es que enseguida se señaló que lo era en relación con la Unidad de Revisión y Liquidación Fiscal, lo que constata que solamente se trató de un error en la cita de la fracción pero no en el análisis de la cuestión examinada.

Dichos artículos señalan a la letra lo siguiente:

[N.E. Se omiten transcripciones]

Del artículo 45 reproducido líneas arriba, se advierte que la Comisión Nacional del Agua, para ejercer sus atribuciones, contará con un Consejo Técnico y con diversas unidades administrativas, cuya existencia se prevé en sus diversas fracciones.

Entre las unidades administrativas con las que cuenta dicha Comisión, se encuentra, en la fracción XI del mencionado precepto, la Unidad de Revisión y Liquidación Fiscal.

Además, en las últimas tres fracciones, esto es, la XIX, XX y XXI, se precisa también que tal Comisión contará con Gerencias Nacionales, Gerencias Regionales y Gerencias Estatales.

Por su parte, del artículo 55 se advierte que la Unidad de Revisión y Liquidación Fiscal estará a cargo de un Jefe de Unidad, el cual tendrá diversas atribuciones.

Dichas atribuciones consistirán, entre otras, en determinar, actualizar y liquidar créditos fiscales que corresponda cubrir a los usuarios y contribuyentes; notificar a los mismos las resoluciones que emita; imponer las sanciones que procedan y que constituyan créditos fiscales por violación a las disposiciones jurídicas aplicables; así como revisar la situación fiscal de los usuarios y contribuyentes; emitir y notificar los adeudos fiscales que tengan los mismos con la citada Comisión; e imponer las multas que procedan por infracciones a las disposiciones fiscales en materia hidráulica.

Ahora, resulta que en los juicios cuyas sentencias se analizan, las resoluciones impugnadas fueron emitidas por el Jefe de la Unidad de Revisión y Liquidación Fiscal, de la Comisión Nacional del Agua, considerándose en uno de dichos fallos que a pesar de tratarse de un órgano desconcentrado, dicho Jefe no fundó su competencia territorial y, en el otro, que no tenía por que fundarla por tener competencia en

todo el territorio nacional, siendo que en los dos casos se citaron los mismos preceptos legales.

Así pues, este Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no comparte el criterio aplicado en la sentencia 20394/06-17-06-7 dictada por la Sexta Sala Regional Metropolitana, en la cual se resolvió que el Jefe de Unidad referido a pesar de estar obligado a fundar su competencia territorial, no cumplió con tal obligación al citar solamente los preceptos jurídicos que le confieren las facultades ejercidas; en virtud de lo siguiente:

Como ya se precisó, el Jefe de la Unidad citada, para fundar su competencia en las resoluciones impugnadas, invocó los artículos 45, fracción XI, y 55 fracciones IV, V, VI, IX, XI, y XIV, del Reglamento Interior de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Del citado artículo 45 se desprende que la Comisión Nacional del Agua, para el ejercicio de sus atribuciones, contará entre otras unidades administrativas con la Unidad de Revisión y Liquidación Fiscal, señalando el orden jerárquico de las mismas, pero sin determinar expresamente el territorio en el que podrán ejercer tales atribuciones.

Sin embargo, en la hipótesis contemplada en las últimas tres fracciones del numeral referido, se precisó como parte de las unidades administrativas que auxiliarían a la Comisión Nacional del Agua, a las Gerencias Nacionales, a las Gerencias Regionales y a las Gerencias Estatales, las cuales como su propia denominación lo indica evidentemente actuarían en toda la República, o en partes específicas regionales o locales de la misma, según se trate de la primera o de las dos siguientes, respectivamente; como inclusive lo corroboran los diversos numerales 62, 104, párrafo primero, y 107, del ordenamiento referido, que establecen precisamente la competencia a nivel nacional, regional y estatal, mismos que precisan:

[N.E. Se omiten transcripciones]

Por otro lado, del artículo 55, transcrito anteriormente, se advierte que la Unidad de Revisión y Liquidación Fiscal, estaría a cargo de un Jefe de Unidad, que en la especie fue quien emitió la resolución controvertida en los juicios cuyas sentencias se analizan.

De todo lo anterior, se concluye que el Presidente de la República al ejercer su facultad reglamentaria no consideró, salvo la excepción señalada con antelación, necesario determinar la circunscripción territorial en donde las unidades administrativas con que cuenta la Comisión Nacional del Agua ejercerían las atribuciones de esa Comisión, pues cuando así lo consideró oportuno señaló expresamente dicho territorio.

En efecto, de los citados preceptos se desprende que la Unidad de Revisión y Liquidación Fiscal es un auxiliar de la Comisión Nacional del Agua, en el cumplimiento de sus atribuciones; por tanto, al igual que la Comisión Nacional del Agua, tiene competencia en todo el territorio nacional.

Por tanto, esta Juzgadora comparte el criterio de la Segunda Sala Regional Metropolitana porque, como lo consideró, al tratarse de una autoridad con jurisdicción federal y no de una autoridad regional, el Jefe de la Unidad de Revisión y Liquidación Fiscal, de la Comisión Nacional del Agua no requiere citar los preceptos jurídicos que le conceden competencia en todo el territorio nacional, pues aunque el Reglamento en estudio omite precisar el ámbito de aplicación, lo cierto es que por ser una autoridad federal, se entiende que la tienen originalmente en todo el territorio nacional.

Por lo que, es en tal ámbito espacial donde está facultada a ejercer las atribuciones previstas en los artículos 45, fracción XI, y 55, fracciones IV, V, VI, IX, XI, y XIV, del Reglamento Interior de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales conceden al Jefe de Unidad de Revisión y Liquidación Fiscal, de la Comisión Nacional del Agua, siendo innecesario la cita de algún precepto normativo para fundar su competencia territorial, dado su carácter de autoridad federal.

Consecuentemente, debe entenderse satisfecho el requisito de fundamentación y motivación de la competencia con la cita de los artículos 45, fracción XI, y 55, del

Reglamento Interior de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, éste último en la fracción que corresponda a la facultad que la autoridad ejerza, en virtud de que si bien en los mismos no se hace alusión expresa a la competencia territorial de la autoridad en estudio, la misma la tiene por ser una autoridad federal, depositaria además de las atribuciones que la Comisión Nacional del Agua tiene conferidas de manera específica en todo el territorio nacional.

Por lo tanto, en razón de la presente contradicción, la tesis que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, en términos del artículo 77 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es la siguiente:

"***JEFE DE LA UNIDAD DE REVISIÓN Y LIQUIDACIÓN FISCAL, DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. ES INNECESARIA LA INVOCACIÓN DE LA FUNDAMENTACIÓN DE SU COMPETENCIA TERRITORIAL, DADO SU CARÁCTER DE AUTORIDAD FEDERAL Y ENCONTRARSE ESTABLECIDAS SUS ATRIBUCIONES EN EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.-*** *Para cumplir con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 constitucional, es necesario que la autoridad, sea fiscal o administrativa, precise su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida. Así, la competencia en cuanto es territorial, encuentra su razón en la organización propia del ente que esté ejerciendo esas atribuciones; en relación a ello, debe partirse de la consideración de que las autoridades federales tienen a priori competencia en todo el territorio nacional, porque tienen jurisdicción federal. En consecuencia, debe distinguirse la manera en la cual las autoridades de carácter federal y las locales atienden el requisito de fundamentación y motivación de su competencia por razón del territorio en el que pueden ejercer las facultades otorgadas; las hipótesis que deben distinguirse son: a) Cuando existe el precepto jurídico que expresamente dispone el ámbito espacial de competencia de las autoridades federales, es claro que aunque las mismas tienen*

originariamente competencia en todo el territorio nacional, cumplen con el requisito de fundamentación y motivación referido con la cita del precepto legal o reglamentario correspondiente; b) Cuando la norma reglamentaria establece a una determinada unidad administrativa federal el ejercicio de alguna atribución –prevista originariamente en la ley-, sin distinguir su ámbito de aplicación o cuando el Reglamento omite indicar que su ejercicio abarca todo el territorio nacional, debe entenderse que su aplicación puede efectuarse en todo ese ámbito espacial, dado el carácter federal de la autoridad de que se trate y, por ende, con jurisdicción en todo el territorio nacional, por lo que es lógico concluir que no existe el deber de citar precepto alguno relativo a la competencia espacial, al no existir el mismo y, sobretodo, porque tal competencia la tiene originariamente en todo el territorio nacional, dado su carácter de autoridad federal; c) En el supuesto de las autoridades locales o regionales, se exige indefectiblemente la invocación de los instrumentos normativos que especifican su circunscripción territorial, mediante la invocación de los preceptos previstos en ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida. Por tanto, el Jefe de la Unidad de Revisión y Liquidación Fiscal, de la Comisión Nacional de Agua, no requiere citar los preceptos jurídicos que le conceden competencia en todo el territorio nacional, pues aunque el Reglamento en estudio omite precisar el ámbito de aplicación de las atribuciones previstas en los artículos 45, fracción XI, y 55, fracciones IV, V, VI, IX, XI, y XIV, del Reglamento Interior de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, lo cierto es que por tener el carácter de autoridad federal y no el de una autoridad regional, puede ejercer esas facultades en todo el ámbito del territorio nacional, al ser esa unidad depositaria de las atribuciones que la Comisión Nacional del Agua, tiene conferidas específicamente y que le son otorgadas sin limitación de territorio. Lo anterior, sin perjuicio de estar obligada a fundar debidamente su competencia material, a través de la cita de los artículos mencionados, el último en la fracción que corresponda a la facultad que la autoridad ejerza, así como los demás que corresponda."

Conforme a lo expuesto y con fundamento en los artículos 77 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 18 fracción IX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se

RESUELVE:

I.- Ha resultado procedente la contradicción de sentencias denunciada por el Presidente de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por las razones expuestas en el presente fallo;

II.- Debe prevalecer la tesis expuesta en la presente resolución con carácter de jurisprudencia.

III.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de dieciséis de junio de dos mil diez, por mayoría de diez votos a favor de los Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Nora Elizabeth Urby Genel, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Jorge Alberto García Cáceres, Alejandro Sánchez Hernández, Alfredo Salgado Loyo, Silvia Eugenia Díaz Vega, Olga Hernández Espíndola, Juan Manuel Jiménez Illescas y Francisco Cuevas Godínez. Estuvo ausente el Magistrado Luis Carballo Balvanera. Y, el texto de la Jurisprudencia relativa fue aprobado por el Pleno en sesión del veinte de septiembre de dos mil diez.

Fue Ponente en el presente asunto el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, cuya ponencia modificada se aprobó.

Se elaboró el engrose el veinte de septiembre de dos mil diez y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, fracción V, y 47, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

JURISPRUDENCIA NÚM. VI-J-SS-68

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN. CUANDO SE OMITE PRESENTAR LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS EN IDIOMA DISTINTO, EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ESTÁ OBLIGADO A REQUERIR AL INTERESADO PARA QUE SUBSANE ESA OMISIÓN.- Conforme a lo dispuesto por los artículos 3, 26 y 39 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), y los artículos 38, 38 bis, 40, 41 y 50 de la Ley de la Propiedad Industrial, se puede presentar una solicitud de registro de patente, incluyendo una solicitud internacional (PCT), en cualquier Estado que sea parte de aquél, y en el caso de nuestro país ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Instituto), quien deberá realizar un examen de forma a la solicitud y a la documentación anexa. Ahora bien, existe coincidencia entre las estipulaciones del Tratado y de la Ley referidos, en el sentido de que ninguna solicitud de patente (internacional o local), puede desecharse o considerarse abandonada por el incumplimiento de algún requisito establecido en tales ordenamientos, sin dar previamente al solicitante la oportunidad de corregir, subsanar o cumplir el requisito faltante. En tal virtud, como el tratado mencionado remite a la legislación nacional para que se dé al solicitante de una patente la oportunidad referida, es completamente válido considerar lo que al respecto establece el artículo 50 de la Ley de la Propiedad Industrial, por el ser el precepto legal que de manera específica regula la situación relativa a que cuando una solicitud de patente y la documentación anexa a la misma resulte imprecisa u omisa en algún aspecto, como no adjuntar la traducción al español de una solicitud anterior que se pretenda sea reconocida como prioridad, el Instituto pueda requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario, o se subsanen las omisiones detectadas, dentro de un plazo de dos meses, y que si el solicitante no cumple ese requerimiento, su solicitud se considerará abandonada, es decir, que no puede desecharse de plano o considerarse abandonada una solicitud con omisiones, sin ese requerimiento previo. Cabe señalar que el vocablo “podrá” utilizado en el numeral 50 en comento no significa que

se trate de una facultad discrecional para el Instituto, sino que esa expresión se refiere a la obligación de hacerlo en caso de ser necesario; esto es, el precepto aludido señala con certeza los casos en que procede el requerimiento respectivo, para que se precise o aclare la solicitud o para que se subsanen sus omisiones, y ese señalamiento obliga al Instituto a dar la oportunidad al solicitante de subsanar lo que corresponda a su solicitud de patente, como también lo establece el artículo 26 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, sin que deba aplicarse lo que establece el artículo 5° del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, en su antepenúltimo párrafo, en virtud de que es la propia ley, en su artículo 50, la que de manera específica regula la situación concreta.

Contradicción de Sentencias Núm. 24665/06-17-02-1/106/09-PL-05-10/Y OTRO/2440/09-PL-01-01.- Resuelta por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 30 de junio de 2010, por mayoría de 9 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. Andrés López Lara.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/20/2010)

JURISPRUDENCIA NÚM. VI-J-SS-69

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN. LEGISLACIÓN APLICABLE AL REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OMISIÓN DE PRESENTAR LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE LOS DOCUMENTOS QUE LA ACOMPAÑEN.- El artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece que cuando los escritos que presenten los interesados no contengan los datos o no cumplan con los requisitos aplicables, la dependencia u organismo descentralizado correspondiente deberá prevenirlos, por escrito y por una sola vez, para que subsanen la omisión dentro del término que establezca la dependencia u organismo descentralizado, el cual no podrá ser menor de cinco días

hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación; transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar la prevención, se desechará el trámite. También establece que de no realizarse la prevención referida dentro del plazo aplicable, no se podrá desechar el trámite argumentando que está incompleto. Al respecto cabe destacar que conforme al artículo 1º de la citada ley, ésta resulta aplicable a los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal Paraestatal, como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de conformidad con el artículo 6º de la Ley de la Propiedad Industrial. Además, tratándose de solicitudes de registro de patentes de invención, internacionales o locales, el artículo 50 de la Ley de la Propiedad Industrial, que es la ley especial que regula ese trámite, establece que una vez que se presenta la solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, éste debe realizar un examen de forma de la documentación, con la obligación de requerir al solicitante que se precise o aclare en lo que considere necesario, o se subsanen sus omisiones, así como que sólo en el caso de que el solicitante no cumpla dicho requerimiento en un plazo de dos meses, se considerará abandonada la solicitud, lo que corrobora la obligación que tiene la autoridad de prevenir o requerir al particular para que aclare o subsane cualquier solicitud cuando ésta sea imprecisa, poco clara o no cumpla con todos los requisitos necesarios, en forma previa a desechar aquélla, como lo establece, de forma general, el artículo 17-A, referido en primer término.

Contradicción de Sentencias Núm. 24665/06-17-02-1/106/09-PL-05-10/Y OTRO/2440/09-PL-01-01.- Resuelta por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 30 de junio de 2010, por mayoría de 9 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. Andrés López Lara.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/30/2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

SEGUNDO.- [...]

Transcritos los fallos materia de la contradicción que nos ocupa, se observa que en su sentencia del 27 de mayo de 2009 (juicio 24665/06-17-02-1/106/09-PL-05-10), el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal **reconoció la validez** de la resolución impugnada que desechó la solicitud internacional de patente PCT de la empresa actora, porque ésta no presentó, dentro del plazo de dos meses, la traducción al español de la solicitud internacional de patente, como estaba obligada a hacerlo, sin que mediara requerimiento alguno por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ya que así lo establecen los artículos 39 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), 179 de la Ley de la Propiedad Industrial y 5°, fracción VII y antepenúltimo párrafo, del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, considerándose inaplicable el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en el sentido de prevenir a la actora para que subsanara esa omisión, antes de desechar de plano su solicitud.

Por otro lado, en su sentencia del 7 de septiembre de 2009 (juicio 790/08-EPI-01-8/1116/09-PL-06-10), el Pleno de esta Sala Superior **declaró la nulidad** de la resolución impugnada que desechó de plano la solicitud internacional de patente PCT presentada por la actora en ese juicio, porque además de lo que establecen los artículos 39 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), 179 de la Ley de la Propiedad Industrial y 5°, fracción VII y antepenúltimo párrafo de su Reglamento, también el artículo 50 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que tratándose de una solicitud de patente, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial está obligado a requerir que se precise o aclare la solicitud en lo que considere necesario, o que se subsanen sus omisiones, dentro del plazo de dos meses, y sólo en caso de no cumplirse ese requerimiento dentro del citado plazo, la solicitud se considerará abandonada, considerando tal ordenanza coincidente con el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley de la Propiedad Industrial, que establece que se debe prevenir al interesado para que subsane cualquier omisión del escrito que presente y sólo si transcurre el plazo

otorgado para que se cumpla esa prevención, sin que desahogue ésta, puede desecharse el trámite correspondiente.

Es decir, la sentencia dictada el 27 de mayo de 2009 por el Pleno de la Sala Superior en el juicio 24665/06-17-02-1/106/09-PL-05-10, **es contradictoria** con la dictada por la mismo Pleno el 7 de septiembre de 2009 en el juicio 790/08-EPI-01-8/1116/09-PL-06-10, en la medida en que en ambas sentencias se analizó un mismo problema jurídico (la obligación o no de requerir al solicitante de una patente la traducción al español de los documentos que presentare en idioma distinto), así como la aplicación supletoria o no del mismo precepto normativo (artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo), al resolver los argumentos que hizo valer la parte demandante en cada juicio, en el sentido de que resultaba ilegal que la autoridad demandada hubiese desechado de plano la solicitud internacional de patente PCT que cada una presentó, sin que mediara requerimiento alguno para que dentro del plazo legal exhibieran la traducción al español de su respectiva solicitud de patente, a que se refieren los artículos 39 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y 179 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Con base en lo anterior es posible afirmar que el tercer requisito para la procedencia de la contradicción de sentencias denunciada se cumplió cabalmente, toda vez que en las sentencias referidas se examinaron situaciones jurídicas esencialmente iguales (la obligación o no de requerir la traducción al español de documentos presentados en idioma distinto), y se adoptaron posiciones o criterios jurídicos diferentes en su parte considerativa, concluyendo en forma diversa sobre la aplicación supletoria del artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el propósito de una contradicción de sentencias es establecer el criterio que debe prevalecer sobre determinado tema cuando existen opiniones encontradas en torno a la misma situación. En la especie el tema de la contradicción consiste en determinar si se debe prevenir o requerir al interesado

para que presente la traducción al español de la solicitud internacional de patente a que se refieren los artículos 39 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y 179 de la Ley de la Propiedad Industrial, y en caso de ser así, si esa prevención o requerimiento debe hacerse aplicando de manera supletoria el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Expuesto lo anterior, este Pleno considera que el criterio que debe regir y prevalecer es el siguiente:

Como ya se ha mencionado, las resoluciones impugnadas en los juicios en los que se dictaron las sentencias que son la materia de la presente contradicción, derivan de las solicitudes internacionales de patente que conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), presentaron ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial las empresas actoras en esos juicios. El citado tratado establece en sus artículos 1, 26 y 39 lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Conforme a los numerales transcritos del tratado en comento, se podrán presentar solicitudes para la protección de las invenciones en cualquier Estado contratante como solicitudes internacionales, **sin que** alguna oficina designada conforme a aquél **pueda rechazar una solicitud internacional por el incumplimiento de los requisitos del mismo** y de su Reglamento (como lo son proporcionar a la oficina designada una copia de la solicitud internacional y su traducción), **sin dar previamente al solicitante la oportunidad de corregir dicha solicitud**, en la medida y de conformidad con el procedimiento previsto **por la legislación nacional para situaciones idénticas o comparables respecto de solicitudes nacionales**.

Por su parte, los artículos 38, 38 Bis, 40, 41 y 50 de la Ley de la Propiedad Industrial, ubicados en el Título Segundo, De las Invenciones, Modelos de Utilidad y

Diseños Industriales, Capítulo V, De la Tramitación de Patentes, establecen lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

A su vez, el artículo 179 de la misma Ley de la Propiedad Industrial, que se localiza en el Título Sexto, De los Procedimientos Administrativos, Capítulo I, Reglas Generales de los Procedimientos, estatuye a la letra:

[N.E. Se omite transcripción]

En resumen, los numerales transcritos establecen lo siguiente:

• Que para obtener una patente deberá presentarse solicitud escrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Instituto), en la que se indicará el nombre y domicilio del inventor y del solicitante, la nacionalidad de este último, la denominación de la invención, y demás datos que prevengan la ley de la materia y su reglamento (artículo 38).

• Que el Instituto reconocerá como fecha de presentación de una solicitud de patente a la fecha y hora en que la solicitud sea presentada, si cumple con los requisitos previstos en los artículos 38, 47, fracciones I y II, 179 y 180 de la Ley de la Propiedad Industrial, o en su defecto, se tendrá como fecha de presentación aquella en la que se dé el cumplimiento correspondiente (artículo 38 Bis).

• Que también se podrá reconocer como fecha de prioridad la de presentación previa en otros países, siempre que se presente en México dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales (en el caso PCT) o, en su defecto, dentro de los doce meses siguientes a la solicitud de patente en el país de origen (artículo 40), y que se cumplan ciertos requisitos (artículo 41).

• Que presentada la solicitud, el Instituto realizará un examen de forma de la documentación y podrá requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario, o se subsanen sus omisiones, y en caso de que el solicitante no cumpla ese requerimiento en un plazo de dos meses, se considerará abandonada la solicitud (artículo 50).

• Que toda solicitud o promoción dirigida al Instituto, deberá presentarse por escrito y redactada en idioma español, **y que los documentos que se presenten en idioma diferente deberán acompañarse de su traducción al español** (artículo 179).

Por su parte, el artículo 5° del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial establece en su parte conducente lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Concatenando las disposiciones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes con las de la Ley de la Propiedad Industrial, se tiene que con motivo de la presentación de una solicitud de registro de patente, incluyendo una solicitud internacional (PCT), el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial realizará un examen de forma de la documentación presentada por el solicitante y en caso de que el solicitante hubiese incurrido en omisiones, o la misma resultare imprecisa o poco clara, de conformidad con el artículo 50 de la citada ley, el Instituto podrá requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario, o se subsanen sus omisiones. Si no se cumple ese requerimiento dentro de un plazo de dos meses, se considerará abandonada la solicitud.

De modo que es clara la coincidencia y concordancia entre las estipulaciones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y la Ley de la Propiedad Industrial, en el sentido de que ninguna solicitud de patente (internacional o local), puede desecharse o considerarse abandonada por el incumplimiento de algún requisito establecido en tales ordenamientos, **sin dar previamente al solicitante la oportunidad de corregir, subsanar o cumplir el requisito faltante**.

Ahora bien, toda vez que el tratado mencionado remite a la legislación nacional para que se dé al solicitante de una patente la oportunidad referida, **en la medida y de conformidad con el procedimiento previsto por aquélla para situaciones idénticas o comparables respecto de solicitudes nacionales**, es completamente válido considerar lo que al respecto establece el artículo 50 de la Ley de la Propiedad Industrial, por ser el que regula de manera exacta la hipótesis en la que examinada de forma una solicitud de patente y la documentación anexa a la misma, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial detecta que resulta imprecisa, poco clara o incompleta (con omisiones), y dicho precepto señala que en esos casos el Instituto podrá requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario, o se subsanen sus omisiones, dentro de un plazo de dos meses, y que si el solicitante no cumple ese requerimiento, su solicitud se considerará abandonada.

Lo anterior es así, en virtud de que el vocablo "podrá" utilizado en el numeral 50 en comento no significa que se trate de una facultad discrecional para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que puede o no ejercer, sino que esa expresión se refiere a la obligación de hacerlo en caso de ser necesario, cuando el solicitante haya incurrido en omisiones en su solicitud o documentación anexa, o la misma haya resultado imprecisa, poco clara o ambigua; esto es, el precepto aludido señala con certeza los casos en que procede el requerimiento respectivo (para que se precise o aclare la solicitud o para que se subsanen sus omisiones), y ese señalamiento **obliga al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a dar la oportunidad al solicitante de subsanar lo que corresponda** a su solicitud de patente (como también lo establece el artículo 26 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes).

Interpretar lo contrario equivaldría a dejar al arbitrio de la autoridad el otorgar o no la oportunidad de corrección, creando con ello una posibilidad de desigualdad al otorgar a unos y no a otros dicha oportunidad; más aún, carecería de sentido la norma en cuestión si el requerimiento correspondiente dependiera únicamente de la voluntad de la autoridad, la que actuaría bajo parámetros inciertos y subjetivamente.

Al respecto, resulta aplicable la tesis por contradicción de sentencias aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de publicación, rubro y texto se transcriben a continuación:

> "**PODER. EL USO DE ESTE VERBO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES, NO NECESARIAMENTE IMPLICA UNA FACULTAD DISCRECIONAL.** [N.E. Se omite transcripción consultable en S.J.F. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. VI, Agosto de 1997. Tesis: 2a. LXXXVI/97. Tesis Aislada. Materia(s): Administrativa. Página: 217]

En este contexto se puede acudir a lo que la doctrina ha denominado "principio de reserva de ley", el cual consiste en que, conforme a la Constitución, hay materias que sólo pueden ser reguladas por una ley, de modo que ésta contenga expresamente los elementos fundamentales que sirvan de base para la determinación de la existencia y cuantía de una obligación, evitando toda arbitrariedad de la autoridad.

Así, la doctrina ha clasificado la reserva de ley en absoluta y relativa, señalando que la primera surge cuando la regulación de una determinada materia queda acotada en forma exclusiva a la ley formal, ya sea que la emita el poder legislativo federal o local, pero sin que esa materia pueda ser regulada por otras fuentes, como un reglamento. Mientras que la reserva relativa permite que otras fuentes de la ley vengan a regular parte de cierta materia, pero a condición de que la ley sea la que determine expresa y limitativamente las directrices a las que dichas fuentes deberán ajustarse; esto es, la regulación de las fuentes secundarias debe quedar subordinada a las líneas esenciales que la ley haya establecido para la materia normativa.

Ahora bien, la facultad reglamentaria conferida al presidente de la República por el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal, consiste, exclusivamente, en la expedición de disposiciones generales, abstractas e impersonales que tienen por objeto la ejecución de la ley, desarrollando y completando en detalle sus normas, pero sin que, a título de su ejercicio, pueda excederse el alcance de sus mandatos o contrariar o alterar sus disposiciones, por ser precisamente la ley su medida y justificación, y

porque de acuerdo con el llamado “principio de primacía de la ley”, las normas contenidas en una ley de carácter formal, no pueden ser modificadas por un reglamento.

De tal suerte que no puede considerarse que la regulación del artículo 5° del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, en su antepenúltimo párrafo, tenga mayor jerarquía que la propia ley, cuyo artículo 50 de manera específica rige la situación concreta de que una solicitud de patente contenga alguna omisión (como no adjuntar la traducción al español de una solicitud anterior que se pretenda sea reconocida como prioridad), estableciendo la obligación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de requerir que se subsane esa omisión dentro del plazo de dos meses, sin que pueda desecharse de plano o considerarse abandonada su solicitud sin ese requerimiento previo.

Continuando con este orden de ideas, se debe tener en cuenta lo que establece el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo:

[N.E. Se omite transcripción]

El precepto transcrito establece que cuando los escritos que presenten los interesados no contengan los datos o no cumplan con los requisitos aplicables, la dependencia u organismo descentralizado correspondiente deberá prevenir a los interesados, por escrito y por una sola vez, para que subsanen la omisión dentro del término que establezca la dependencia u organismo descentralizado, el cual no podrá ser menor de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación; transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar la prevención, se desechará el trámite.

Señala asimismo el precepto en comento que de no realizarse la prevención referida en el párrafo anterior dentro del plazo aplicable, no se podrá desechar el trámite argumentando que está incompleto.

Al respecto cabe destacar que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo resulta aplicable a los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal Paraestatal respecto de, entre otros, sus actos de autoridad, según lo establece su artículo 1° que en su parte conducente se reproduce:

[N.E. Se omite transcripción]

También cabe apuntar que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal Paraestatal, tal como lo dispone el artículo 6° de la Ley de la Propiedad Industrial:

[N.E. Se omite transcripción]

No obstante lo anterior, con base en los argumentos desarrollados en párrafos anteriores, este Cuerpo Colegiado considera que en el caso a estudio (presentación de solicitudes de registro de patente), debe prevalecer la aplicación del artículo 50 de la Ley de la Propiedad Industrial, por tratarse de una disposición específicamente aplicable respecto de ese tema, al señalar que una vez que se presenta la solicitud el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe realizar un examen de forma de la documentación y podrá requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario, o se subsanen sus omisiones, así como que sólo en el caso de que el solicitante no cumpla dicho requerimiento en un plazo de dos meses, se considerará abandonada la solicitud.

En cambio, el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se refiere genéricamente al supuesto en que los escritos que presenten los interesados no contengan los datos o no cumplan con los requisitos aplicables, caso en el que la dependencia u organismo descentralizado correspondiente deberá prevenirlos, por escrito y por una sola vez, para que subsanen la omisión dentro del término que establezca, el cual no podrá ser menor de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación, transcurrido el cual sin el desahogo de la prevención, se desechará el trámite.

Por tanto, aun cuando se trata de disposiciones con contenido similar, se debe aplicar el artículo 50 de la Ley de la Propiedad Industrial, por tratarse de la norma específica de la ley que regula la materia de las patentes y su registro, así como la que otorga, de manera precisa, la posibilidad al particular de corregir los errores u omisiones que la autoridad competente detecte durante el examen de forma practicado a ese tipo de solicitudes y a la documentación anexa, para proseguir con el procedimiento correspondiente o considerar abandonada la solicitud de que se trate, por ser ésta la consecuencia que el numeral referido prevé para el caso de que no se cumpla el requerimiento.

De acuerdo con las consideraciones anteriores, y con fundamento en el artículo 77 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se fijan como Jurisprudencias del Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, las siguientes tesis:

"**SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN. CUANDO SE OMITE PRESENTAR LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS EN IDIOMA DISTINTO, EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ESTÁ OBLIGADO A REQUERIR AL INTERESADO PARA QUE SUBSANE ESA OMISIÓN.-** Conforme a lo dispuesto por los artículos 3, 26 y 39 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), y los artículos 38, 38 Bis, 40, 41 y 50 de la Ley de la Propiedad Industrial, se puede presentar una solicitud de registro de patente, incluyendo una solicitud internacional (PCT), en cualquier Estado que sea parte de aquél, y en el caso de nuestro país ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Instituto), quien deberá realizar un examen de forma a la solicitud y a la documentación anexa. Ahora bien, existe coincidencia entre las estipulaciones del Tratado y de la Ley referidos, en el sentido de que ninguna solicitud de patente (internacional o local), puede desecharse o considerarse abandonada por el incumplimiento de algún requisito establecido en tales ordenamientos, sin dar previamente al solicitante la oportunidad de corregir, subsanar o cumplir el requisito faltante. En tal virtud, como el tratado mencionado remite a la legislación nacional para que se dé al solici-

tante de una patente la oportunidad referida, es completamente válido considerar lo que al respecto establece el artículo 50 de la Ley de la Propiedad Industrial, por ser el precepto legal que de manera específica regula la situación relativa a que cuando una solicitud de patente y la documentación anexa a la misma resulte imprecisa u omisa en algún aspecto, como no adjuntar la traducción al español de una solicitud anterior que se pretenda sea reconocida como prioridad, el Instituto pueda requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario, o se subsanen las omisiones detectadas, dentro de un plazo de dos meses, y que si el solicitante no cumple ese requerimiento, su solicitud se considerará abandonada, es decir, que no puede desecharse de plano o considerarse abandonada una solicitud con omisiones, sin ese requerimiento previo. Cabe señalar que el vocablo "podrá" utilizado en el numeral 50 en comento no significa que se trate de una facultad discrecional para el Instituto, sino que esa expresión se refiere a la obligación de hacerlo en caso de ser necesario; esto es, el precepto aludido señala con certeza los casos en que procede el requerimiento respectivo, para que se precise o aclare la solicitud o para que se subsanen sus omisiones, y ese señalamiento obliga al Instituto a dar la oportunidad al solicitante de subsanar lo que corresponda a su solicitud de patente, como también lo establece el artículo 26 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, sin que deba aplicarse lo que establece el artículo 5° del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, en su antepenúltimo párrafo, en virtud de que es la propia ley, en su artículo 50, la que de manera específica regula la situación concreta."

"**SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN. LEGISLACIÓN APLICABLE AL REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OMISIÓN DE PRESENTAR LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE LOS DOCUMENTOS QUE LA ACOMPAÑEN.-** El artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece que cuando los escritos que presenten los interesados no contengan los datos o no cumplan con los requisitos aplicables, la dependencia u organismo descentralizado correspondiente deberá prevenirlos, por escrito y por una sola vez, para que subsa-

nen la omisión dentro del término que establezca la dependencia u organismo descentralizado, el cual no podrá ser menor de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación; transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar la prevención, se desechará el trámite. También establece que de no realizarse la prevención referida dentro del plazo aplicable, no se podrá desechar el trámite argumentando que está incompleto. Al respecto cabe destacar que conforme al artículo 1° de la citada ley, ésta resulta aplicable a los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal Paraestatal, como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de conformidad con el artículo 6° de la Ley de la Propiedad Industrial. Además, tratándose de solicitudes de registro de patentes de invención, internacionales o locales, el artículo 50 de la Ley de la Propiedad Industrial, que es la ley especial que regula ese trámite, establece que una vez que se presenta la solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, éste debe realizar un examen de forma de la documentación, con la obligación de requerir al solicitante que se precise o aclare en lo que considere necesario, o se subsanen sus omisiones, así como que sólo en el caso de que el solicitante no cumpla dicho requerimiento en un plazo de dos meses, se considerará abandonada la solicitud, lo que corrobora la obligación que tiene la autoridad de prevenir o requerir al particular para que aclare o subsane cualquier solicitud cuando ésta sea imprecisa, poco clara o no cumpla con todos los requisitos necesarios, en forma previa a desechar aquélla, como lo establece, de forma general, el artículo 17-A, referido en primer término."

En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 77 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; y 18, fracción IX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se resuelve:

I. Ha resultado procedente la contradicción de sentencias denunciada, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo.

II. Deben prevalecer los criterios sustentados en el presente fallo.

III. Se fijan como Jurisprudencias del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, las tesis que han quedado consignadas en la parte final del presente fallo, ordenándose su publicación en la Revista de este órgano jurisdiccional.

IV. NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión celebrada el día 30 de junio de 2010, por mayoría de nueve votos a favor de los Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Nora Elizabeth Urby Genel, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Alfredo Salgado Loyo, Silvia Eugenia Díaz Vega, Olga Hernández Espíndola, Juan Manuel Jiménez Illescas, Luis Carballo Balvanera y Francisco Cuevas Godínez, y dos votos en contra de los Magistrados Jorge Alberto García Cáceres y Alejandro Sánchez Hernández, quienes se reservaron su derecho para formular voto particular. Y el texto de la segunda jurisprudencia fue aprobado por el Pleno en sesión del veinte de septiembre de dos mil diez.

Fue Ponente en el presente asunto el Magistrado Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, cuya ponencia fue aprobada.

Se elaboró el presente engrose el 20 de septiembre de 2010 y con fundamento en los artículos 30, fracción V, y 47, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL C. MAGISTRADO JORGE ALBERTO GARCÍA CÁCERES EN LA CONTRADICCIÓN DE SENTENCIAS NÚM. 24665/06-17-02-1/106/09-PL-05-10/Y OTRO/2440/09-PL-01-01

El Magistrado Jorge Alberto García Cáceres, se reservó su derecho para formular voto particular en el presente asunto, el cual se expresa en los siguientes términos:

V O T O P A R T I C U L A R

La mayoría de los integrantes del Pleno de la Sala Superior, estimó que en el presente asunto existe la contradicción entre dos sentencias dictadas por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, la primera de fecha 27 de mayo de 2009, en el juicio 24665/06-17-02-1/106/09-PL-05-10, y la segunda de fecha 07 de septiembre de 2009, en el juicio número 790/08-EPI-01-8/1116/09-PL-06-10.

Respetuosamente discrepo del criterio mayoritario que me he permitido sintetizar en el párrafo precedente, pues considero que no procede la contradicción de sentencias que se analiza, ya que, jurídicamente, no puede existir contradicción entre resoluciones emitidas por un mismo Órgano Jurisdiccional, como en el caso lo es el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal.

En primer lugar, es importante precisar que la contradicción de sentencias constituye un mecanismo jurídico que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en su carácter de órgano impartidor de justicia a nivel federal, tiene a su alcance para unificar los criterios sustentados por sus Salas Regionales y las Secciones, al interpretar los diversos ordenamientos jurídicos que regulan las materias de su competencia de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14 de su Ley Orgánica; Salas Regionales y Secciones que cuentan con la libertad de jurisdicción inherente a todo Juzgador, las cuales ante el elevado número de sentencias que emiten, generan criterios que pueden resultar contradictorios al interpretar preceptos jurídicos que regulan situaciones idénticas o similares.

Entonces, la finalidad de proveer sobre la determinación del criterio que debe prevalecer, es el de preservar la unidad de interpretación de las normas que conforman el orden jurídico, decidiendo cuál o cuáles deben prevalecer cuando existe oposición entre los que sustenten dos o más Salas en torno a un mismo problema legal, sin que se afecten las situaciones jurídicas específicas de los juicios en los cuales se emitieron tales criterios.

Ahora bien, en la actualidad, la contradicción de sentencias se encuentra regulada en el artículo 77 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, precepto legal en el cual no se menciona si la contradicción de sentencias puede darse entre resoluciones de un mismo órgano jurisdiccional, en la práctica se ha aceptado resolver las contradicciones planteadas entre sentencias dictadas por el Pleno de la Sala Superior, como en el caso que nos ocupa, y donde radica mi motivo de desacuerdo.

Lo anterior es así, pues el Pleno de la Sala Superior, materialmente tiene asignada competencia especial que da el carácter de órgano rector de los criterios jurisdiccionales de este Tribunal, regulándose dichas atribuciones en los numerales 48, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 18, fracción IX, de la Ley Orgánica de este Tribunal, preceptos legales cuyos textos citan:

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

"**Artículo 48.- El Pleno** o las Secciones del Tribunal, de oficio o a petición fundada de la Sala Regional correspondiente, de los particulares o de las autoridades, podrán ejercer la facultad de atracción, para resolver los juicios con características especiales.
"I. Revisten características especiales los juicios en los que:
"a) Por su materia, concepto de impugnación o cuantía se consideren de interés y trascendencia.

"Tratándose de la cuantía, el valor del negocio deberá exceder de tres mil quinientas veces el salario mínimo general del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, elevado al año, vigente en el momento de la emisión de la resolución combatida.
"b) Para su resolución sea necesario establecer, por primera vez, la interpretación directa de una ley, reglamento o disposición administrativa de carácter general; **fijar el alcance de los elementos constitutivos de una contribución, hasta fijar jurisprudencia.** En este caso el Presidente del Tribunal también podrá solicitar la atracción."

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

"**ARTÍCULO 18**.- Son facultades del Pleno, las siguientes:
"(...)
"**IX.** Establecer, modificar y suspender la jurisprudencia del Tribunal conforme a las disposiciones legales aplicables, aprobar las tesis y los rubros de los precedentes y ordenar su publicación en la Revista del Tribunal;
"(...)"

Conforme a las disposiciones anteriores, se desprende que, dada la competencia por razón de materia de la Sala Superior, el Pleno está en posibilidad de establecer criterios por primera interpretación en asuntos cuantiosos, novedosos o de importancia para el interés nacional, resultando así cuestionable la posibilidad de que uno de estos criterios definidos por el Pleno de la Sala Superior pueda enfrentarse a otro diverso criterio, también, sustentado por el propio Pleno, pues ello limitaría la función jurisdiccional del órgano superior de este Tribunal, dado que, propiamente, se le estaría impidiendo que, con posterioridad, revise y afine su criterio considerando otros elementos jurídicos surgidos con motivo del nuevo asunto o de una nueva integración, que le llevara a tomar una decisión diversa a la establecida en el precedente anterior.

De lo anterior se deduce que, contrario a la decisión mayoritaria, y de conformidad con las disposiciones vigentes, la contradicción de sentencias sólo es procedente entre las sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales distintos, lo cual resulta lógico en la medida en que la resolución de la contradicción, por decisión del Pleno de la Sala Superior, fijara jurisprudencia.

Por lo tanto, es evidente que de conformidad a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la contradicción de sentencias sólo se presenta o puede configurarse respecto de diferentes órganos jurisdiccionales, y no respecto de dos sentencias suscritas por el Pleno del propio Tribunal.

En esa tesitura, el suscrito considera que, propiamente, no se está ante una contradicción de sentencias, sino ante un cambio de criterio. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P. XLIX/94 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente:

"No. Registro: 205,419
"Tesis aislada
"Materia(s): Común
"Octava Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"83, Noviembre de 1994
"Tesis: **P. XLIX/94**
"Página: 35

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LOS CRITERIOS QUE SE CONSIDERAN CONTRARIOS DEBEN PROVENIR DE ÓRGANOS DIFERENTES.- El planteamiento de una contradicción de tesis en el ámbito de la justicia federal, ya sea en juicios de amparo o en revisiones de contenciosos administrativos, supone por esencia la existencia de criterios diferentes al conocer de un determinado problema jurídico de condiciones similares. Así,

puesto que en aras de la seguridad jurídica, un tribunal jerárquicamente superior debe decidir cuál de las tesis contrarias debe prevalecer con características obligatorias, los razonamientos a examen deben provenir de órganos diferentes.

"Contradicción de tesis 8/93. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito (en la actualidad Tribunal Colegiado en Materia Penal). 13 de abril de 1994. Unanimidad de veinte votos. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Juan Carlos Cruz Razo."

Por todo lo expuesto, a mi juicio, resulta improcedente la contradicción de sentencias planteada entre las emitidas por el propio Pleno de la Sala Superior de este Tribunal.

MAG. JORGE ALBERTO GARCÍA CÁCERES

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL C. MAGISTRADO ALEJANDRO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ EN LA CONTRADICCIÓN DE SENTENCIAS NÚM. 24665/06-17-02-1/106/09-PL-05-10/Y OTRO/2440/09-PL-01-01

El suscrito se aparta del criterio mayoritario que antecede, en virtud de que la denuncia de contradicción de sentencias debió declararse improcedente, por lo siguiente.

El artículo 77 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé la "*contradicción de sentencias*", con la finalidad de que el Pleno de este Tribunal fije jurisprudencia, en la que se defina el criterio que deben adoptar las Salas Regionales y las Secciones de la Sala Superior, al resolver problemas jurídicos similares.

También se deduce del precepto legal en comento, que es condición para que se surta la procedencia de la contradicción, que contiendan sentencias firmes emitidas por diferentes órganos jurisdiccionales.

En ese tenor, resulta improcedente la contradicción de sentencias que nos ocupa, toda vez que en la misma contienden resoluciones sustentadas por el propio Pleno de la Sala Superior, al resolver los juicios 24665/06-17-02-1/106/09-PL-05-10 y 790/08-EPI-01-8/1116/09-PL-06-10, esto es, que provienen del mismo órgano jurisdiccional, de manera que sólo podría estarse ante el cambio o abandono del criterio, en su caso.

Sirven de sustento a lo anterior, las tesis del Pleno y de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente:

"No. Registro: 205,419
"Tesis aislada
"Materia(s): Común
"Octava Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"83, Noviembre de 1994
"Tesis: P. XLIX/94
"Página: 35

"**CONTRADICCIÓN DE TESIS. LOS CRITERIOS QUE SE CONSIDERAN CONTRARIOS DEBEN PROVENIR DE ÓRGANOS DIFERENTES.-** El planteamiento de una contradicción de tesis en el ámbito de la justicia federal, ya sea en juicios de amparo o en revisiones de contenciosos administrativos, supone por esencia la existencia de criterios diferentes al conocer de un determinado problema jurídico de condiciones similares. Así, puesto que en aras de la seguridad jurídica, un tribunal jerárquicamente supe-

rior debe decidir cuál de las tesis contrarias debe prevalecer con características obligatorias, los razonamientos a examen deben provenir de órganos diferentes.

"Contradicción de tesis 8/93. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito (en la actualidad Tribunal Colegiado en Materia Penal). 13 de abril de 1994. Unanimidad de veinte votos. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Juan Carlos Cruz Razo.

"El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el martes dieciocho de octubre en curso, por unanimidad de dieciocho votos de los señores Ministros Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, Ignacio Magaña Cárdenas, Diego Valadés Ríos, Miguel Montes García, Carlos Sempé Minvielle, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, José Antonio Llanos Duarte, Victoria Adato Green, Samuel Alba Leyva, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez y Juan Díaz Romero: aprobó, con el número XLIX/94, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. Ausentes: Noé Castañón León, Mariano Azuela Güitrón y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. México, Distrito Federal, a veinte de octubre de mil novecientos noventa y cuatro."

"No. Registro: 206,428
"Tesis aislada
"Materia(s): Común
"Octava Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"X, Agosto de 1992
"Tesis: 2a. VI/92

"Página: 42

"**CONTRADICCIÓN DE TESIS. LOS CRITERIOS QUE SE CONSIDERAN CONTRARIOS DEBEN PROVENIR DE ÓRGANOS DIFERENTES.-** El planteamiento de una contradicción de tesis en el ámbito de la justicia federal, ya sea en juicios de amparo o en revisiones de contenciosos administrativos, supone por esencia la existencia de criterios diferentes al conocer de un determinado problema jurídico de condiciones similares. Así, en aras de la seguridad jurídica, un tribunal jerárquicamente superior debe decidir cuál de las tesis contrarias debe prevalecer con características obligatorias, por lo que los razonamientos a examen deben provenir de órganos diferentes. Ello es así porque cuando los criterios que se consideran en pugna provienen de un mismo tribunal se está en presencia de una modificación o variación de criterio, mas no de una contradicción de tesis.

"Contradicción de tesis. Varios 14/89. Entre las sustentadas por el Segundo, Tercero y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito. 15 de junio de 1992. Cinco votos. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Juan Carlos Cruz Razo."

MAG. ALEJANDRO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

JURISPRUDENCIA NÚM. VI-J-SS-70

LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

CIRCULARES EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO. SU LEGALIDAD.- De conformidad con el artículo 5, fracción II, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro tiene facultades para emitir reglas de carácter general a las que deben sujetarse los participantes de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, por lo cual, si la Comisión en uso de esas atribuciones determina en una Circular que los formatos de solicitud de registro y de constancia de registro deben incluir determinados íconos, como lo son la leyenda "siembra y cosecha", la precisión del sitio web "e-sar" y la identificación de la página de internet del Sistema, con la especificación de que es factible cambiar de Afore por internet, no puede considerarse que ello exceda el esquema de la ley de la materia, pues la Comisión tiene facultades expresamente conferidas por el legislador para tales efectos, máxime que el manejo de estos fondos se considera de interés público, por lo cual si la incorporación de los elementos descritos tiende a mantener informados a los trabajadores respecto al estado de sus respectivas cuentas, e incluso les brinda información para que puedan cambiar de Afore si así lo consideran pertinente, la emisión de la Circular no constituye una actuación de la Comisión que vaya más allá de lo establecido en ley, sino que precisamente en uso de una facultad específicamente delegada por el legislador y atendiendo al interés público de que está revestido el Sistema de Ahorro para el Retiro, es que puede emitir este tipo de reglas que tienden a hacer más claro y transparente para los trabajadores el manejo de los fondos que aportan.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/22/2010)

PRECEDENTES:

V-P-SS-38
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 17240/06-17-05-6/1049/07-PL-03-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y

Administrativa, en sesión de 23 de enero de 2008, por mayoría de 9 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretario: Lic. Enrique Orozco Moles.
(Tesis aprobada en sesión de 28 de mayo de 2008)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 9. Septiembre 2008. p. 57

VI-P-SS-76
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 13821/07-17-05-7/634/08-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 18 de agosto de 2008, por mayoría de 10 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 18 de agosto de 2008)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 11. Noviembre 2008. p. 461

VI-P-SS-259
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 35821/07-17-01-6/907/09-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de agosto de 2009, por mayoría de 8 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 24 de agosto de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 26. Febrero 2010. p. 120

Así lo acordó el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día ocho de septiembre de dos mil diez, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

JURISPRUDENCIA NÚM. VI-J-SS-71

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN.- Para la aplicación de Convenios de esta naturaleza, no sólo se deben reunir los requisitos que establece el artículo 5° de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sino que es conveniente que además se analicen los siguientes elementos: a) Si el ingreso está o no gravado conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta en México; b) Apreciar si existe en el Convenio respectivo algún beneficio respecto del gravamen que en su caso se genere; c) Analizar si es factible o no aplicar el beneficio, a la luz de los requisitos que se establezcan en la Ley del Impuesto sobre la Renta; y, d) Estudiar los efectos del beneficio. Una vez valorados estos requisitos se podrá concluir si el Convenio en cuestión es aplicable o no al caso concreto.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/23/2010)

PRECEDENTES:

VI-P-SS-248
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 27939/07-17-06-3/1329/08-PL-03-09.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 1° de julio de 2009, por mayoría de 9 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretario: Lic. Enrique Orozco Moles.
(Tesis aprobada en sesión de 19 de octubre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 26. Febrero 2010. p. 64

VI-P-SS-249
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3687/06-17-06-5/418/09-PL-08-09.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administra-

tiva, en sesión de 19 de agosto de 2009, por unanimidad de 9 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 19 de octubre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 26. Febrero 2010. p. 64

VI-P-SS-250
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 28006/07-17-02-6/358/09-PL-01-09.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de agosto de 2009, por mayoría de 7 votos a favor y 3 votos en contra.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretaria: Lic. Magdalena Judith Muñoz Ledo Belmonte.
(Tesis aprobada en sesión de 19 de octubre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 26. Febrero 2010. p. 64

Así lo acordó el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día ocho de septiembre de dos mil diez, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

JURISPRUDENCIA NÚM. VI-J-SS-72

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 5° DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- De la lectura del artículo 5º de la Ley del Impuesto sobre la Renta se desprende con claridad que los beneficios de los Tratados para evitar la doble tributación sólo serán aplicables a los contribuyentes que acrediten ser residentes en el país de que se trate, y cumplan con las disposiciones del propio Tratado, de donde se concluye que cuando en un Convenio de esta naturaleza se establece un porcentaje de retención menor al que se señala en la Ley de la Materia, no se está en presencia del establecimiento de una nueva tasa impositiva, sino de la aplicación de un beneficio derivado del Tratado y reconocido con ese carácter por el legislador en el artículo 5º citado.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/24/2010)

PRECEDENTES:

VI-P-SS-213
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 27939/07-17-06-3/1329/08-PL-03-09.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 1° de julio de 2009, por mayoría de 9 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretario Lic. Enrique Orozco Moles.
(Tesis aprobada en sesión de 21 de septiembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 23. Noviembre 2009. p. 27

VI-P-SS-279
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3687/06-17-06-5/418/09-PL-08-09.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administra-

tiva, en sesión de 19 de agosto de 2009, por unanimidad de 9 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 21 de septiembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 27. Marzo 2010. p. 101

VI-P-SS-280
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 28006/07-17-02-6/358/09-PL-01-09.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de agosto de 2009, por mayoría de 7 votos a favor y 3 votos en contra.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretaria: Lic. Magdalena Judith Muñoz Ledo Belmonte.
(Tesis aprobada en sesión de 21 de septiembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 27. Marzo 2010. p. 101

Así lo acordó el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día ocho de septiembre de dos mil diez, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

JURISPRUDENCIA NÚM. VI-J-SS-73

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

REGALÍAS. EL PAGO POR EL USO DE CUALQUIER TIPO DE SOFTWARE LAS GENERA.- El artículo 15-B del Código Fiscal de la Federación, en su primer párrafo señala que se consideran regalías, entre otros, los pagos de cualquier clase por el uso o goce temporal de patentes, certificados de invención o mejora, marcas de fábrica, nombres comerciales, derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas y grabaciones para radio o televisión, así como de dibujos o modelos, planos, fórmulas, o procedimientos y equipos industriales, comerciales o científicos, así como las cantidades pagadas por transferencia de tecnología o informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, u otro derecho o propiedad similar; es decir, abarca todo el género de creaciones científicas como regalías. Y, en su segundo párrafo, hace una distinción precisando que incluye a los programas o conjunto de instrucciones para computadoras. De esta forma, es válido apuntar que el software utilizado para el funcionamiento de conmutadores telefónicos genera regalías. Por ello, debe entenderse que dichos programas de software comparten la calidad de obra científica, y forman parte del género al que el primer párrafo del artículo 15-B considera como regalía. El hecho de que el segundo párrafo se refiera a los programas de cómputo es a manera de ejemplo, puesto que utiliza el vocablo “entre otros”, lo cual evidencia que no son los únicos que abarca. De esta forma, no puede circunscribirse la aplicación del artículo 15-B únicamente a los programas de computadoras, porque no resulta congruente con la finalidad del ordinal, que solamente los programas para computadoras u ordenadores generen el pago de regalías, y que cualquier otro software para algún otro dispositivo no las genere.

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/25/2010)

PRECEDENTES:

VI-P-SS-214
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 27939/07-17-06-3/1329/08-PL-03-09.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 1° de julio de 2009, por mayoría de 9 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretario Lic. Enrique Orozco Moles.
(Tesis aprobada en sesión de 21 de septiembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 23. Noviembre 2009. p. 27

VI-P-SS-282
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3687/06-17-06-5/418/09-PL-08-09.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de agosto de 2009, por unanimidad de 9 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 21 de septiembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 27. Marzo 2010. p. 102

VI-P-SS-283
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 28006/07-17-02-6/358/09-PL-01-09.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de agosto de 2009, por mayoría de 7 votos a favor y 3 votos en contra.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretaria: Lic. Magdalena Judith Muñoz Ledo Belmonte.
(Tesis aprobada en sesión de 21 de septiembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 27. Marzo 2010. p. 102

Así lo acordó el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día ocho de septiembre de dos mil diez, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

JURISPRUDENCIA NÚM. VI-J-SS-74

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO DE UN CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN.- De conformidad con el artículo 5º de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para poder aprovechar los beneficios derivados de los tratados para evitar la doble tributación, es necesario que el contribuyente que pretende acogerse a los mismos acredite ser residente del país con el que se celebró el Convenio. Para ello, el citado precepto establece que será el propio contribuyente que pretende obtener esos beneficios el que debe solicitar a quien realice el pago de los bienes o servicios que le efectúe la retención correspondiente, o solicitar con posterioridad la devolución correspondiente, lo cual, en el primer caso, implica que es el propio residente en el extranjero el que debe solicitar que se efectúe la retención a una menor tasa, de lo que válidamente se puede inferir que en vez de que se le aplique la tasa correspondiente, se acoge al beneficio.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/26/2010)

PRECEDENTES:

VI-P-SS-215
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 27939/07-17-06-3/1329/08-PL-03-09.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 1° de julio de 2009, por mayoría de 9 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretario Lic. Enrique Orozco Moles.
(Tesis aprobada en sesión de 21 de septiembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 23. Noviembre 2009. p. 28

VI-P-SS-285
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3687/06-17-06-5/418/09-PL-08-09.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administra-

tiva, en sesión de 19 de agosto de 2009, por unanimidad de 9 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 21 de septiembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 27. Marzo 2010. p. 104

VI-P-SS-286
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 28006/07-17-02-6/358/09-PL-01-09.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de agosto de 2009, por mayoría de 7 votos a favor y 3 votos en contra.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretaria: Lic. Magdalena Judith Muñoz Ledo Belmonte.
(Tesis aprobada en sesión de 21 de septiembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 27. Marzo 2010. p. 104

Así lo acordó el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día ocho de septiembre de dos mil diez, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

JURISPRUDENCIA NÚM. VI-J-SS-76

LEY DE AMPARO

JURISPRUDENCIA DEL PODER JUDICIAL FEDERAL. RESULTA OBLIGATORIA PARA EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA CUANDO SEA APLICABLE A LA HIPÓTESIS CONCRETA SOMETIDA A SU CONSIDERACIÓN.- Los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo disponen que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en Pleno o en Salas, así como la jurisprudencia que establezca cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito, es obligatoria para los Tribunales Administrativos, como lo es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Por tal motivo, si el Poder Judicial ha declarado la inconstitucionalidad de una norma legal, este Tribunal Federal al aplicar la jurisprudencia no realiza pronunciamiento alguno relativo a la inconstitucionalidad de la norma, ni la aplica en forma retroactiva, ni suple la deficiencia de la queja, sino únicamente se constriñe a dar acatamiento a lo señalado por los referidos artículos de Ley de Amparo aplicando la jurisprudencia conducente. Por lo antes expuesto, la obligatoriedad que el artículo 192 de la Ley de Amparo dispone en la aplicación de las jurisprudencias que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, no supone la suplencia de la deficiencia de la queja en los juicios contencioso administrativos cuando el acto cuya nulidad se reclama se funda o pretende escudarse en leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia, pues tal situación está supeditada a que en el caso concreto sea procedente su aplicación.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/32/2010)

PRECEDENTES:

VI-P-SS-306
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 427/08-18-01-8/2798/09-PL-07-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administra-

tiva, en sesión de 10 de marzo de 2010, por unanimidad de 7 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 10 de marzo de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 30. Junio 2010. p. 66

VI-P-SS-307
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4249/08-07-01-8/3004/09-PL-07-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 de abril de 2010, por mayoría de 8 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 7 de abril de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 30. Junio 2010. p. 66

VI-P-SS-308
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 952/07-09-01-8/575/08-PL-03-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de mayo de 2010, por unanimidad de 9 votos a favor.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretaria: Lic. Alma Rosa Navarro Godínez.
(Tesis aprobada en sesión de 19 de mayo de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 30. Junio 2010. p. 66

Así lo acordó el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día veinte de septiembre de dos mil diez, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

JURISPRUDENCIA NÚM. VI-J-SS-77

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

MARCAS INDICATIVAS O DESCRIPTIVAS.- NO SE DA ESE SUPUESTO CUANDO SUS ELEMENTOS NO SON CARACTERÍSTICOS DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE PRETENDEN PROTEGER.- El artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial establece en su primer párrafo y fracción IV que no serán registrables como marcas, las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en ese supuesto las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción. La fracción VI de dicho precepto establece que no serán registrables como marca la traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables. Por lo que, si del estudio integral de una marca se advierte que sus elementos no son indicativos ni descriptivos de los productos que pretende proteger en una clase determinada, esto en relación a la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen o la época de producción, además de que la traducción de los elementos de dicha marca no se advierta que son indicativos de los productos a proteger, es evidente que debe concederse el registro de la misma.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/33/2010)

PRECEDENTES:

VI-P-SS-135
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 28876/07-17-01-3/1816/08-PL-07-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 4 de marzo de 2009, por mayoría de 8 votos a favor, 1

voto con los puntos resolutivos y 2 votos en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista.
(Tesis aprobada en sesión de 4 de marzo de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 17. Mayo 2009. p. 116

VI-P-SS-238
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1589/08-EPI-01-7/1449/09-PL-08-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 28 de octubre de 2009, por mayoría de 8 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 28 de octubre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 24. Diciembre 2009. p. 197

VI-P-SS-312
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 992/08-EPI-01-1/2620/09-PL-08-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 14 de abril de 2010, por mayoría de 9 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé.
(Tesis aprobada en sesión de 14 de abril de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 30. Junio 2010. p. 78

Así lo acordó el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día veinte de septiembre de dos mil diez, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

JURISPRUDENCIA NÚM. VI-J-SS-78

LEY ADUANERA

AGENTE ADUANAL. PARA QUE OPERE LA EXCLUYENTE DE SU RESPONSABILIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN III, DE LA LEY ADUANERA, BASTA CON QUE SE ACREDITEN LOS REQUISITOS EXPRESAMENTE CONTEMPLADOS EN LA NORMA.- El precepto mencionado establece que el agente aduanal no será responsable de las contribuciones omitidas que se deriven de la aplicación de un arancel preferencial, cuando de conformidad con algún tratado o acuerdo internacional del que México sea parte se requiera de un certificado de origen que ampare las mercancías, siempre que conserve copia del mismo y se asegure que se encuentra en el formato oficial aprobado, que ha sido llenado en su totalidad conforme a su instructivo y se encuentra vigente a la fecha de la importación. En este sentido, basta con que estén acreditados en autos los anteriores supuestos normativos para que opere la excluyente de responsabilidad relativa, sin que puedan exigirse requisitos adicionales, como el consistente en que el agente aduanal conserve y presente la documentación comprobatoria de la custodia de las mercancías por parte de la autoridad de un país no miembro del tratado o acuerdo internacional correspondiente, o bien, del cumplimiento de todas las formalidades que, a pesar de resultar necesarias para la aplicación del trato arancelario preferencial, sean diversas a certificados de origen. Adoptar un criterio distinto implicaría agregar requisitos diversos a los expresamente establecidos por el legislador federal para que opere una excluyente de responsabilidad, en contravención al principio de legalidad al que deben ajustarse los actos de autoridad.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/34/2010)

PRECEDENTES:

VI-P-SS-227
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 981/08-06-01-9/1440/09-PL-06-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administra-

tiva, en sesión de 30 de septiembre de 2009, por mayoría de 10 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Ernesto Christian Grandini Ochoa.
(Tesis aprobada en sesión de 4 de noviembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 24. Diciembre 2009. p. 157

VI-P-SS-295
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 14767/06-17-03-9/1729/09-PL-08-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 6 de enero de 2010, por mayoría de 8 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Manuel Ángel Sánchez.
(Tesis aprobada en sesión de 6 de enero de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 27. Marzo 2010. p. 173

VI-P-SS-325
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 770/08-18-01-8/363/09-PL-08-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 17 de mayo de 2010, por mayoría de 8 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 17 de mayo de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 30. Junio 2010. p. 109

Así lo acordó el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día veinte de septiembre de dos mil diez, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

SEGUNDA SECCIÓN

JURISPRUDENCIA NÚM. VI-J-2aS-53

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

COMPETENCIA POR RAZÓN DEL TERRITORIO. SI LA DEMANDA SE ENVÍA POR CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO, LA SALA REGIONAL DEBE RESOLVER SOBRE SU COMPETENCIA, APLICANDO LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN LA FECHA EN QUE SE DEPOSITÓ LA DEMANDA EN EL SERVICIO POSTAL MEXICANO.- De acuerdo con el criterio adoptado por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la tesis de jurisprudencia V-J-SS-41, la competencia territorial de las Salas Regionales debe ser analizada a la luz de las disposiciones legales vigentes en la fecha en que se presentó la demanda, ya que es en este momento cuando las Salas pueden declararse legalmente incompetentes para conocer del asunto. Bajo este contexto, si la parte actora envía su demanda por correo certificado con acuse de recibo satisfaciendo las exigencias previstas en el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es inconcuso que la Sala Regional respectiva deberá resolver sobre su competencia territorial, aplicando las disposiciones vigentes en la fecha en que se depositó el escrito de demanda en el Servicio Postal Mexicano, no así en la fecha en que materialmente se recibió en la Oficialía de Partes correspondiente.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/24/2010)

PRECEDENTES:

VI-P-2aS-94
Incidente de Incompetencia Núm. 2171/07-14-01-5/3019/08-17-08-7/523/08-S2-09-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia

Fiscal y Administrativa, en sesión de 12 de junio de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Ponencia asumida por el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretario: Lic. Oscar Elizarrarás Dorantes.
(Tesis aprobada en sesión de 1 de julio de 2008)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 10. Octubre 2008. p. 435

VI-P-2aS-95

Incidente de Incompetencia Núm. 3148/07-09-01-3/2624/08-17-08-4/595/08-S2-07-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de julio de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de julio de 2008)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 10. Octubre 2008. p. 435

VI-P-2aS-157

Incidente de Incompetencia Núm. 9/08-18-01-1/9963/08-17-04-8/1057/08-S2-09-06.- Resuelto por Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 23 de octubre de 2008, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretaria: María Teresa Martínez García.
(Tesis aprobada en sesión de 23 de octubre de 2008)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 15. Marzo 2009. p. 362

VI-P-2aS-321

Incidente de Incompetencia Núm. 1568/08-02-01-1/34054/08-17-06-4/340/09-S2-06-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 6 de agosto de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Ernesto Christian Grandini Ochoa.
(Tesis aprobada en sesión de 6 de agosto de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 22. Octubre 2009. p. 191

VI-P-2aS-542

Incidente de Incompetencia Núm. 844/09-12-03-1/1512/09-S2-09-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 11 de mayo de 2010, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretario: Lic. Juan Carlos Mateo Leyva.

(Tesis aprobada en sesión de 11 de mayo de 2010)

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 31. Julio 2010. p. 157

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el martes diecinueve de octubre de dos mil diez.- Firman para constancia, el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

JURISPRUDENCIA NÚM. VI-J-2aS-54

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

INCOMPETENCIA TERRITORIAL.- CONOCERÁN DEL INCIDENTE LAS SECCIONES DE LA SALA SUPERIOR QUE POR TURNO CORRESPONDA.- Con fundamento en el artículo 23, fracción VII de la Ley Orgánica de este Tribunal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, en vigor desde el 7 siguiente del mismo mes y año, son facultades de las Secciones, entre otras resolver los conflictos de competencia que se susciten entre las Salas Regionales. En ese orden de ideas, si una de las partes en el juicio plantea la incompetencia en razón del territorio a que se refiere el artículo 30, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, vigente desde enero de 2006, corresponderá conocer de la misma a las Secciones de la Sala Superior que por turno corresponda.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/25/2010)

PRECEDENTES:

VI-P-2aS-142
Incidente de Incompetencia Núm. 30742/06-17-07-8/1052/08-S2-07-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 16 de octubre de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez.
(Tesis aprobada en sesión de 16 de octubre de 2008)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 14. Febrero 2009. p. 373

VI-P-2aS-226
Incidente de Incompetencia Núm. 1937/08-07-02-9/18381/08-17-08-3/404/09-S2-08-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de

Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 23 de abril de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 23 de abril de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 18. Junio 2009. p. 639

VI-P-2aS-250
Incidente de Incompetencia Núm. 5531/08-11-02-9/99/09-S2-08-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 26 de mayo de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 26 de mayo de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 20. Agosto 2009. p. 233

VI-P-2aS-403
Incidente de Incompetencia Núm. 4919/09-17-02-9/1274/09-S2-07-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de octubre de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 22 de octubre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 25. Enero 2010. p. 162

VI-P-2aS-545
Incidente de Incompetencia Núm. 72/09-21-01-3/2688/09-S2-10-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 20 de mayo de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla.
(Tesis aprobada en sesión de 20 de mayo de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 31. Julio 2010. p. 163

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el martes diecinueve de octubre de dos mil diez.- Firman para constancia, el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

JURISPRUDENCIA NÚM. VI-J-2aS-55

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO IMPUGNADO EN JUICIO. NO PROCEDE CONCEDERLA CUANDO SE PRETENDE GARANTIZAR MEDIANTE EL EMBARGO PRECAUTORIO, EN VIRTUD DE QUE ESTE ÚLTIMO TIENE UNA FINALIDAD DIVERSA DEL EMBARGO EN LA VÍA ADMINISTRATIVA Y DEL EMBARGO EN LA VÍA EJECUTIVA, ESTOS DOS ÚLTIMOS RESPECTO DE LOS CUALES SÍ SURTE EFECTOS DICHA MEDIDA CAUTELAR.- Con fundamento en el artículo 28 fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se establece que surtirá efectos la suspensión del acto impugnado relativo a la ejecución de créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Ahora bien, las leyes fiscales establecen como formas de garantías fiscales las previstas en el artículo 141, del Código Fiscal de la Federación, que en su fracción V, alude al embargo en la vía administrativa ofrecido por el propio interesado ante la autoridad ejecutora, así como la prevista en el artículo 144, penúltimo párrafo en relación con los artículos 145 y 151, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación, referente al embargo en la vía ejecutiva que es practicado de oficio por la propia autoridad interesada dentro del procedimiento administrativo de ejecución, por el que se permite no exigir garantía adicional si en el procedimiento administrativo de ejecución ya se hubieran embargado bienes suficientes para garantizar el interés fiscal. Por su parte, el embargo precautorio sobre mercancías tiene como fin garantizar el respeto al orden público y la satisfacción del interés social que exige el acatamiento de las normas legales respectivas, ello conforme a lo dispuesto en los artículos 146 de la Ley Aduanera, en relación con los artículos 60, 144 fracción X, 151 fracción III y 155, de la Ley Aduanera. Máxime, que las mercancías embargadas precautoriamente como una sanción impuesta en la resolución liquidatoria correspondiente pasan a propiedad del fisco federal, con fundamento en el artículo 183-A, de la Ley Aduanera. Por todo ello,

las mercancías embargadas precautoriamente no constituyen una forma de garantizar el interés fiscal. En consecuencia dicho embargo precautorio no permite que surta efectos la suspensión de la ejecución de un crédito fiscal.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/26/2010)

PRECEDENTES:

VI-P-2aS-15
Recurso de Reclamación Núm. 9054/06-11-02-2/1265/07-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 de febrero de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez.
(Tesis aprobada en sesión de 7 de febrero de 2008)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 3. Marzo 2008. p. 145

VI-P-2aS-62
Recurso de Reclamación Núm. 2085/07-14-01-1/429/08-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 6 de mayo de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 6 de mayo de 2008)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 7. Julio 2008. p. 165

VI-P-2aS-168
Recurso de Reclamación Núm. 707/08-14-01-8/1807/08-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 27 de enero de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.-

Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista.
(Tesis aprobada en sesión de 27 de enero de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 15. Marzo 2009. p. 428

VI-P-2aS-432
Recurso de Reclamación Núm. 17816/07-17-09-2/1902/08-S2-09-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 27 de noviembre de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretaria: Lic. Thelma Semíramis Calva García.
(Tesis aprobada en sesión de 27 de noviembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 26. Febrero 2010. p. 248

VI-P-2aS-517
Recurso de Reclamación Núm. 758/08-02-01-7/154/10-S2-10-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 23 de marzo de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera**.-** Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.
(Tesis aprobada en sesión de 23 de marzo de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 30. Junio 2010. p. 170

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el martes diecinueve de octubre de dos mil diez.- Firman para constancia, el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

SEGUNDA PARTE

PRECEDENTES DE SALA SUPERIOR

PLENO

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

VI-P-SS-384

REGLAMENTOS EXPEDIDOS POR EL PODER EJECUTIVO.- EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ES INCOMPETENTE PARA CONOCER DE LOS MISMOS.- El artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa señala en su penúltimo párrafo, que el Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos, o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación. Asimismo, el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece en su segundo párrafo, que el juicio contencioso administrativo procede contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos de los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Por lo que la legalidad de un reglamento no es motivo de estudio en el juicio contencioso administrativo, en razón de que no existe fundamento legal alguno que otorgue competencia al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para conocer de los reglamentos emitidos con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4632/08-05-02-4/2179/09-PL-02-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 13 de enero de 2010, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María Vianey Palomares Guadarrama.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de septiembre de 2010)

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

VI-P-SS-385

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.- ESTÁ FACULTADA PARA EMITIR UNA NORMA OFICIAL MEXICANA SOBRE EL PESO Y DIMENSIONES MÁXIMAS CON LOS QUE PUEDEN CIRCULAR LOS VEHÍCULOS DE AUTOTRANSPORTE QUE TRANSITAN EN LAS VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN DE JURISDICCIÓN FEDERAL.- El artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal establece que a través del Reglamento específico, el Ejecutivo de la Unión establecerá las condiciones de peso, dimensiones, capacidad y otras especificaciones, así como los límites de velocidad que deberán cumplir los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga. Asimismo, el artículo 70 de la misma Ley señala que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes inspeccionará o verificará en centros fijos de verificación de peso y dimensiones, que tanto el autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado que operen en los caminos y puentes, cumplan con las disposiciones sobre pesos, dimensiones y capacidad de los vehículos, de acuerdo con lo establecido en las normas oficiales mexicanas respectivas. Del contenido de dichos dispositivos se advierte que si bien el Poder Ejecutivo tiene la obligación de establecer, de forma reglamentaria, las condiciones de peso, dimensiones, capacidad, así como otras especificaciones que deben cumplir los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga; ello no implica que dichas condiciones deban ser desarrolladas de manera detallada y específica en el Reglamento respectivo, pues únicamente tiene la obligación de establecer los términos en que dichas especificaciones serían cumplidas, mas no así que dichas condiciones de peso, serían desarrolladas en el propio Reglamento. De esta manera, el Poder Ejecutivo a través de la Ley de la materia otorgó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la facultad para establecer a través de una norma oficial las condiciones de peso, dimensiones, capacidad y otras especificaciones, así como los límites de velocidad

que deberán cumplir los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4632/08-05-02-4/2179/09-PL-02-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 13 de enero de 2010, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María Vianey Palomares Guadarrama.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de septiembre de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

TERCERO.- [...]

De la lectura integral de los argumentos de anulación transcritos al inicio de este Considerando, se observa que la demandante esencialmente, sostiene lo siguiente:

a) Que la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2008 Sobre el Peso y Dimensiones Máximas con los que pueden Circular los Vehículos de Autotransporte que Transitan en las Vías Generales de Comunicaciones de Jurisdicción Federal, resulta violatorio de los artículos 16, 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 3°, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

b) Que del artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal se desprende que las condiciones de peso, dimensiones, capacidad y otras especificaciones, así como los límites de velocidad deberán estar establecidos en los

Reglamentos que emanen de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; es decir, que en términos del artículo 89, fracción I de la Carta Magna, dicha facultad reglamentaria recae en el Poder Ejecutivo, y sólo en los Reglamentos emitidos por éste es en donde se pueden establecer las especificaciones que deben cumplir los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, y no en una Norma Oficial Mexicana.

c) Que la facultad reglamentaria está conferida exclusivamente al Presidente de la República, por tanto, si el numeral 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal establece que los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga deberán cumplir con las condiciones de peso, dimensiones, capacidad y otras especificaciones, así como los límites de velocidad en los términos que establezcan los Reglamentos respectivos, es claro que el legislador pretendió que esas especificaciones fueran determinadas por el Presidente de la República mediante los reglamentos respectivos, y no por el Subsecretario de Transporte y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre mediante una Norma Oficial Mexicana, pues al hacerlo así se contraviene claramente el contenido del invocado artículo 39, de lo que se colige, que la Norma Oficial Mexicana que se controvierte no puede ser considerada para determinar especificaciones y requerimientos distintos a los previstos por la Ley y sus Reglamentos, pues en dicha Norma se establecen diversas obligaciones en cuanto al cumplimiento de especificaciones que deben cumplir los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal.

d) Que de los artículos 43, 44, 46, 51 A y demás relativos de la Ley Federal de Metrología y Normalización, se desprende que la expedición de una Norma Oficial Mexicana sigue un proceso diferente a la expedición de un Reglamento, lo cual hace evidente que la facultad reglamentaria emanada directamente del artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es diferente a la facultad de las dependencias del Ejecutivo Federal para expedir una Norma Oficial Mexicana, pues ambas disposiciones persiguen fines diversos, pues el Reglamento tiene como objeto el establecer el exacto alcance y cumplimiento de la Ley, y la

Norma Oficial Mexicana persigue fines diversos por disposición expresa de la Ley Federal de Metrología y Normalización.

e) Que la creación de una Norma Oficial Mexicana, persigue fines muy específicos que están acotados precisamente en la Ley Federal de Metrología y Normalización, estableciendo incluso para ello un procedimiento diverso a lo que en conjunto establece el diverso 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal en relación a que los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga, deberán cumplir con las condiciones de peso, dimensiones, capacidad y otras especificaciones, así como con los límites de velocidad en los términos que establezcan los reglamentos respectivos.

f) Que en atención al principio de derecho que establece que la ley especial rige sobre la general, debe considerarse que la Ley aplicable al caso que nos ocupa para efectos de regular o establecer las condiciones de peso, dimensiones, capacidad y otras especificaciones de los vehículos destinados al autotransporte federal de carga, es la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la cual deberá ser la aplicable en específico, por lo que la Ley Federal de Metrología y Normalización al ser una Ley General a la materia que nos ocupa, no tiene el requisito de especialidad para la determinación de los requisitos mencionados en la Norma Oficial Mexicana que controvierte.

g) Que en el caso de un Reglamento, contrario a la Norma Oficial Mexicana que versa sobre materias muy específicas acotadas a la Ley Federal de Metrología y Normalización, este puede versar sobre cualquier materia en base a ley que en específico se pretende regular, pues no debe pasar por alto para esta Sala que la facultad reglamentaria está limitada por los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica.

h) Que el Reglamento desenvuelve la obligatoriedad de un principio ya definido por la ley y, por tanto, no puede ir más allá de ella, ni extenderla a supuestos distintos ni mucho menos contradecirla, sino que sólo debe concretarse a indicar los

medios para cumplirla y, además, cuando existe reserva de ley no podrá abordar los aspectos materia de tal disposición.

De los argumentos expuestos por la autoridad demandada en refutación al concepto de impugnación esgrimido por la demandante se desprende esencialmente lo siguiente:

Que las afirmaciones de la demandante versan exclusivamente sobre la interpretación del artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y además de ser inexacta, involucra el desconocimiento de las disposiciones que conforman dicho ordenamiento y que soportan la emisión de la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2008 Sobre el Peso y Dimensiones Máximas con los que pueden Circular los Vehículos de Autotransporte que Transitan en las Vías Generales de Comunicaciones de Jurisdicción Federal.

Que lo anterior es así toda vez que uno de los fundamentos que soporta la emisión de la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2008, es el artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, sin embargo, también dan sustento a la misma, otras disposiciones como lo son: la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley Federal sobre Metrología y Normalización; Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares; Ley Federal de Procedimiento Administrativo; Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Reglamento sobre el Peso y Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal.

Que del artículo 70 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, mismo que también soporta la expedición de la Norma Oficial Mexicana cuya legalidad por esta vía se cuestiona, se advierte que las disposiciones sobre pesos, dimensiones y capacidad de los vehículos serán establecidos mediante las normas oficiales mexicanas respectivas.

Que lo anterior es congruente con el objeto de las Normas Oficiales Mexicanas que, según precisa el artículo 40, fracción XVI de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización es la de regular las características y/o especificaciones que deben reunir, entre otros, los vehículos de transporte para proteger las vías generales de comunicación y la seguridad de sus usuarios.

Que es la propia Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en sus artículos 39 y 70 como resultado del ejercicio de la facultad legislativa del Congreso de la Unión, la que determina dos vías para regular las disposiciones sobre pesos, dimensiones y capacidad de los vehículos, según se advierte del siguiente cuadro comparativo:

"Artículo 39. Los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga, deberán cumplir con **las condiciones de peso, dimensiones, capacidad y otras especificaciones**, así como con los límites de velocidad **en los términos que establezcan los reglamentos respectivos."**	**"Artículo 70.** (...) La Secretaría inspeccionará o verificará en centros fijos de verificación de peso y dimensiones, que tanto el autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado que operen en los caminos y puentes, cumplen con **las disposiciones sobre pesos, dimensiones y capacidad de los vehículos, de acuerdo con lo establecido en las normas oficiales mexicanas respectivas."**

Que el reconocimiento por parte del Legislador relativo a que las disposiciones sobre pesos, dimensiones y capacidad de los vehículos, en los dispositivos citados lejos de contradecirse, se complementan, toda vez que se reconoce la necesidad de crear regulaciones que estén acordes con la rapidez en que la tecnología y la ciencia avanzan, máxime que, se trata de aspectos técnicos que pudieran variar constantemente.

Que en relación con lo anterior, contrariamente a lo aducido por la parte actora, no se trata de una facultad exclusiva del C. Titular del Ejecutivo Federal en términos del artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ello implicaría el desconocimiento de un precepto contenido en el mismo

Ordenamiento Legal (artículo 70), a partir de la incorrecta interpretación que la parte actora efectúa al término "reglamentos respectivos".

Que restringir el término "reglamento", únicamente para aludir a la potestad reglamentaria conferida al Titular del Ejecutivo Federal que deriva de la fracción I, del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, involucra como primer punto, el desconocimiento del orden jurídico mexicano, concretamente, a disposiciones generales que se reúnen en un ordenamiento jurídico cuyo calificativo igualmente es un "reglamento" (*verbigracia* el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), y por otro lado, el desconocimiento de una disposición prevista en la propia Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, esto es, el artículo 70 de la referida Ley.

Que por lo tanto, es inexacta la interpretación restringida que realiza la parte actora, pues el precepto en el que soporta la supuesta ilegalidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-012-5CT-2-2008, esto es, el artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal no indica que las especificaciones de peso, dimensiones y capacidad de los vehículos de autotransporte federal deban establecerse **en su Reglamento,** supuesto en el que, acertadamente se aludiría a la Potestad Reglamentaria conferida al Titular del Ejecutivo Federal, al ser dicha reglamentación correspondiente a una Ley Federal expedida por el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo 73, fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que en efecto, el artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, tan sólo enuncia que todas las cuestiones relativas al peso, dimensiones y capacidad de los vehículos de autotransporte federal y privado, deberán estar reguladas a través de los reglamentos respectivos, mismos que constituyen cualquier cuerpo normativo que concentre reglas generales, como en el presente caso, lo es una Norma Oficial Mexicana.

Que a partir de la premisa de que el Poder Judicial de la Federación ha considerado a las Normas Oficiales Mexicanas, como reglas generales, es de afirmarse

que su compilación constituye un ordenamiento jurídico reglamentario, que se incluye en la denominación "reglamentos respectivos" aludida en el artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que permite el desarrollo del orden jurídico mexicano al disponer en su diverso artículo 70, segundo párrafo que, las condiciones de peso, dimensiones y capacidad de los vehículos se establecerán en Normas Oficiales Mexicanas.

Que aunado a lo anterior, la parte actora pierde de vista que la interpretación correcta del artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, es en el sentido de remitir al Reglamento respectivo, esto es al Reglamento sobre Peso, Dimensiones y Capacidad, mismo que en su artículo 5° señala expresamente que los pesos y dimensiones se ajustarán a las Normas Oficiales correspondientes expedidas de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Que por lo anterior, tanto en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal como en el Reglamento sobre Peso, Dimensiones y Capacidad se dispone que en la Norma Oficial Mexicana respectiva se señalen los pesos y dimensiones de los vehículos que transiten en carreteras federales.

Que suponiendo sin conceder que a partir del artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal las cuestiones relativas a los pesos, dimensiones y capacidades del autotransporte federal y privado necesariamente deberán regularse a través de Reglamentos y por ende, por conducto del C. Titular del Ejecutivo Federal en ejercicio de su facultad reglamentaria prevista en el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe pasarse por alto la incorporación a nuestro sistema jurídico por parte de nuestro Máximo Tribunal de las denominadas "cláusulas habilitantes", por virtud de las cuales el Presidente de la República habilita a un Órgano de la administración para regular una materia concreta y específica, de acuerdo con los propios lineamientos contenidos en la propia norma habilitante y sin prejuzgar sobre la constitucionalidad de tales cláusulas.

Que así las cosas, es claro que, fue intención del Ejecutivo Federal delegar dicha facultad, a través de una cláusula habilitante comprendida en el Reglamento de referencia, el establecimiento de las cuestiones relativas a los pesos, dimensiones y capacidades del autotransporte federal y privado, a las autoridades administrativas que tengan competencia para expedir una Norma Oficial Mexicana.

Este Cuerpo Colegiado, una vez analizados los argumentos de las partes y las constancias que integran los autos, llega a la convicción de que los agravios planteados por la demandante son INFUNDADOS E INSUFICIENTES para declarar la nulidad de la Norma Oficial Mexicana controvertida, atento a las consideraciones que enseguida se expresan:

Esta Juzgadora, antes de realizar el estudio de los agravios vertidos por la parte actora en el concepto de anulación analizado; para la mejor comprensión y resolución del presente asunto, estima conveniente realizar algunas consideraciones en relación con:

- ✓ El objeto de la Ley Federal de Metrología y Normalización.
- ✓ La definición o conceptualización de las Normas Oficiales Mexicanas;
- ✓ La finalidad de las Normas Oficiales Mexicanas;
- ✓ El contenido de las Normas Oficiales Mexicanas; y
- ✓ El procedimiento de creación de las Normas Oficiales Mexicanas.

Para lo anterior, es necesario llevar a cabo la transcripción de los artículos 2º, fracción II, 3º, fracción XI, 38 fracciones II y IV, 40, fracciones II y XVI y 41 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 1º de julio de 1992; numerales que son del tenor literal siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Del contenido del artículo 2º de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, previamente transcrito, se desprende, entre otras cuestiones, que la citada Ley tiene como objeto, en materia de normalización:

- Fomentar la transparencia y eficiencia en la elaboración y observancia de Normas Oficiales Mexicanas;

- Instituir a la Comisión Nacional de Normalización para que coadyuve en las actividades que sobre normalización corresponde realizar a las Dependencias de la Administración Pública Federal;

- Establecer un procedimiento administrativo uniforme para la creación de Normas Oficiales Mexicanas por las Dependencias referidas;

- Promover la concurrencia de los sectores público, privado, científico y de consumidores en la elaboración y observancia de Normas Oficiales Mexicanas; y

- En general, divulgar las acciones de normalización.

Para el caso en estudio, cabe destacar que la mencionada **Ley Federal sobre Metrología y Normalización tiene como objeto**, entre otros, el regular un procedimiento administrativo uniforme de creación de las Normas Oficiales Mexicanas (procedimiento administrativo uniforme de creación, que la misma Ley contempla en sus artículos 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 51); así como promover la concurrencia de los sectores público, privado, científico y de consumidores en la elaboración y observancia de dichas Normas Oficiales Mexicanas.

Por su parte el artículo 3º de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización en sus fracciones X y XI, **define a la Norma Oficial Mexicana como la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las Dependencias de la Administración Pública Federal competentes, conforme a las finalidades esta-**

blecidas en el artículo 40 de dicha Ley, y en la que se establecen, entre otras cuestiones: las características y/o especificaciones que deban reunir los servicios cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal o el medio ambiente general y laboral o cuando se trate de la prestación de servicios de forma generalizada para el consumidor **así como las características y/o especificaciones que deban reunir los aparatos, redes y sistemas de comunicación, así como vehículos de transporte, equipos y servicios conexos para proteger las vías generales de comunicación y la seguridad de sus usuarios**.

En este sentido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 38, fracciones II y IV de la misma Ley, corresponde a las Dependencias de la Administración Pública Federal, según su ámbito de competencia, expedir Normas Oficiales Mexicanas en las materias relacionadas con sus atribuciones; y constituir y presidir los Comités Consultivos Nacionales de Normalización.

En cuanto a la finalidad de las Normas Oficiales Mexicanas, el artículo 40 de la citada Ley Federal sobre Metrología y Normalización, prevé que es, entre otras, establecer las características y/o especificaciones que deban reunir los servicios cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal o el medio ambiente general y laboral o cuando se trate de la prestación de servicios de forma generalizada para el consumidor, así como las características y/o especificaciones que deban reunir los aparatos, redes y sistemas de comunicación, así como vehículos de transporte, equipos y servicios conexos para proteger las vías generales de comunicación y la seguridad de sus usuarios.

En este punto, es importante destacar que las finalidades de las Normas Oficiales Mexicanas tienen que ver con la regulación de las materias objeto de las mismas, y al efecto, el artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, es claro al señalar en su último párrafo que los criterios, reglas, instructivos, manuales, circulares, lineamientos, procedimientos u otras disposiciones de carácter obligatorio que requieran establecer las Dependencias y se refieran a las materias y finali-

dades que se establecen en dicho numeral, sólo podrán expedirse como Normas Oficiales Mexicanas conforme al procedimiento establecido en la citada Ley.

Así, como se desprende del precitado numeral, la razón de ser de las Normas Oficiales Mexicanas es regular cuestiones técnicas con precisión, con el fin de proteger a las personas en su salud, vida y el mundo en el que viven. Es decir, la principal finalidad es garantizar que en la realización de ciertos procesos, en la elaboración de productos o la prestación de servicios, no existan riesgos, impidiendo accidentes y estableciendo condiciones mínimas de seguridad.

Es decir, mediante las Normas Oficiales Mexicanas **se regulan las actividades desempeñadas por los sectores tanto privado como público**, en materia de salud, medio ambiente en general, seguridad al usuario, información comercial, prácticas de comercio, industrial y laboral a través de las cuales se establece la terminología, la clasificación, las directrices, las especificaciones, los atributos, **las características, o las prescripciones aplicables a un producto, proceso o servicio**.

En tal virtud, la finalidad de las Normas Oficiales Mexicanas es regular con detalle cuestiones técnicas, estableciendo especificaciones técnicas de un alto grado de precisión para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en los Reglamentos o en la Ley.

En relación con lo anterior, es importante señalar que las Normas Oficiales Mexicanas tienen la ventaja, sobre la legislación, de ser más flexibles y por ello en éstas, las regulaciones técnicas que se contienen se pueden desarrollar con mucho mayor detalle; además, pueden variar de manera constante y rápida, por lo cual la dinámica de las mismas permite una respuesta pronta que evidentemente ni el Legislador, ni el Poder Ejecutivo, pueden dar a tiempo, es por ello que la tarea de crear dichas Normas Oficiales Mexicanas se encomienda a las Dependencias de la Administración Pública Federal.

En efecto, el artículo 38, fracción II de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, determina que corresponde a las Dependencias de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su competencia (contemplada por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal), expedir Normas Oficiales Mexicanas.

Ahora bien, por lo que se refiere al **contenido formal de las Normas Oficiales Mexicanas**, el artículo 41 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, precisa que las mismas deberán reunir los requisitos siguientes:

1. La denominación de la norma y su clave o código, así como la finalidad de la misma conforme al artículo 40;

2. La identificación del producto, servicio, método, proceso, instalación o, en su caso, del objeto de la norma conforme a lo dispuesto en el artículo 40;

3. Las especificaciones y características que correspondan al producto, servicio, método, proceso, instalación o establecimientos que se establezcan en la norma en razón de su finalidad;

4. Los métodos de prueba aplicables en relación con la norma y en su caso, los de muestreo;

5. Los datos y demás información que deban contener los productos o, en su defecto, sus envases o empaques, así como el tamaño y características de las diversas indicaciones;

6. El grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales y con las normas mexicanas tomadas como base para su elaboración;

7. La bibliografía que corresponda a la norma;

8. La mención de la o las dependencias que vigilarán el cumplimiento de las normas cuando exista concurrencia de competencias; y

9. Las otras menciones que se consideren convenientes para la debida compresión y alcance de la norma.

De acuerdo con lo señalado hasta este punto, es posible establecer que las Normas Oficiales Mexicanas, al ser creadas por las Dependencias de la Administración Pública Federal, **formalmente** las convierte en **actos administrativos** (carácter que les es reconocido expresamente por el artículo 4º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo); y **materialmente**, es decir, en cuanto a su contenido, reúnen las características de los **actos legislativos**, **al tratarse de reglas administrativas de carácter técnico, general, abstracto, impersonal y de observancia obligatoria, toda vez que se dirigen a la generalidad de sujetos a quienes son aplicables, y se componen de supuestos abstractos e impersonales, por lo que se trata de auténticas disposiciones jurídicas generales**.

Se puede entonces concluir hasta este punto, que las Normas Oficiales Mexicanas son disposiciones generales, abstractas, impersonales y de observancia obligatoria; expedidas respecto de las materias que específicamente señala la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, por diversas Dependencias de la Administración Pública Federal, entre las que se encuentra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Sin embargo, y a pesar de tener las Normas Oficiales Mexicanas, las características de generalidad, abstracción, impersonalidad y obligatoriedad, siguen siendo actos administrativos, tomando en consideración que el acto administrativo es una declaración externa de voluntad, que expresa una decisión de una autoridad administrativa competente, en ejercicio de la potestad pública.

Al respecto de lo anterior, el autor Miguel Acosta Romero, en su obra Teoría General del Derecho Administrativo, señala lo siguiente: "*Generalmente, la situación*

de derecho creada por el acto administrativo es particular o concreta; no obstante, ello no excluye la posibilidad de que, en ciertas ocasiones, se cree una situación jurídica general, o en ciertos casos, una combinación de ambas.".

En opinión de los autores Jean Claude Tron Petit y Gabriel Ortiz Reyes (en su obra titulada La Nulidad de los Actos Administrativos, Editorial Porrúa, Primera Edición, 2005): "... *el concepto de acto administrativo con efectos generales es un tema controvertido y discutible, sobre todo en lo concerniente a la eficacia o ineficacia; y su problemática deriva de algunas notas peculiares de los actos normativos como son los reglamentos, pero no deja, por ello, de ser un acto administrativo que también comparte, por supuesto, la naturaleza fundamental de los actos con efectos individuales.*".

Cabe resaltar que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en su artículo 4º, expresamente señala:

[N.E. Se omite transcripción]

Observando lo razonado en párrafos anteriores y el contenido del numeral transcrito, **se puede afirmar válidamente que las Normas Oficiales Mexicanas son actos administrativos de carácter general.**

Finalmente, **en cuanto al procedimiento de creación de las Normas Oficiales Mexicanas**, la Dependencia de la Administración Pública Federal competente, deberá seguir el procedimiento administrativo que contempla la misma Ley Federal sobre Metrología y Normalización, específicamente en sus artículos 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 51; numerales que son del tenor literal siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Como se puede observar, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización prevé todo un procedimiento tanto para la creación, como para la modi-

ficación de las Normas Oficiales Mexicanas; entendiéndose por éste, el conjunto de formalidades y actos realizados por la autoridad administrativa, conforme a ciertas reglas para producir un acto administrativo, como lo es en el caso una Norma Oficial Mexicana, dado que con su expedición precisamente se da fin o se resuelve el procedimiento administrativo contemplado en los artículos 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 51 de la Ley en cita.

Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 43 de la invocada Ley (antes transcrito), en la elaboración de las Normas Oficiales Mexicanas participarán las Dependencias de la Administración Pública Federal a las que corresponda la regulación o control del producto, servicio, método, proceso, actividad o materia a normalizarse.

Así, en principio, de acuerdo a lo que prevé el artículo 44 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, las Dependencias elaborarán el anteproyecto y lo someterán a la consideración del Comité Consultivo Nacional de Normalización correspondiente (constituido por las propias Dependencias), mismo que formulará el proyecto de Norma Oficial Mexicana, para lo cual deberá tomar en cuenta las normas mexicanas e internacionales existentes y que tengan reconocimiento jurídico en nuestro país, en los términos del derecho internacional.

Además, pueden presentar a las Dependencias, propuestas de Normas Oficiales Mexicanas, las personas interesadas (personas físicas y personas morales), caso en el cual dichas Dependencias harán la evaluación correspondiente y en su caso, presentarán al Comité Consultivo Nacional de Normalización respectivo el anteproyecto de que se trate.

Cabe señalar en este punto, que en el caso referido en el párrafo anterior, la persona física o moral que presente a las Dependencias la propuesta de Norma Oficial Mexicana, no requiere que su interés sea directo; es decir, no necesariamente debe pertenecer o ser miembro de un sector económico regulado, sino simplemente puede tratarse de alguien interesado en preservar el medio ambiente o la salud de

manera genérica, tal y como lo señala el artículo 44 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Ahora bien, de acuerdo a lo que se indica en el artículo 45 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, los anteproyectos que se presenten ante los Comités Consultivos Nacionales de Normalización se acompañarán de una manifestación de impacto regulatorio (la cual se encuentra prevista en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo), con el fin no solamente de sustentar científica y económicamente la necesidad de la expedición de la Norma Oficial Mexicana, sino principalmente desde la perspectiva regulatoria, por lo que dicha manifestación de impacto regulatorio deberá contener una explicación de la finalidad y contenido de la norma.

La manifestación de impacto regulatorio en comento, por tanto, deberá permitir la evaluación del impacto de la Norma Oficial Mexicana (nueva o reformas a la vigente), en la economía; es decir, la citada manifestación de impacto regulatorio tiene como objetivo evaluar el costo y la efectividad de las medidas regulatorias que se contendrán en la norma.

Las reglas específicas de elaboración y modificación de las Normas Oficiales Mexicanas, se encuentran previstas en los artículos 46 y 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; numerales de los que se desprende la existencia de dos etapas específicas, a saber:

a) ETAPA DE ANTEPROYECTO Y APROBACIÓN DE ÉSTE.

b) ETAPA DE PROYECTO Y APROBACIÓN DE ÉSTE.

Las etapas en comento tienen las siguientes reglas:

ETAPA DE ANTEPROYECTO Y APROBACIÓN DEL MISMO

1).- La Dependencia competente presentará el anteproyecto directamente ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización correspondiente, el que deberá formular sus observaciones en un plazo no mayor a 75 días naturales.

2).- La Dependencia responsable de la formulación del anteproyecto deberá dar respuesta a las observaciones del citado Comité y, en su caso, realizará las modificaciones pertinentes al anteproyecto en un plazo no mayor a 30 días naturales, contados a partir de la fecha en que le sean presentadas.

3).- En el caso de que la Dependencia no considere justificadas las observaciones presentadas por el Comité Consultivo Nacional de Normalización correspondiente, podrá solicitar a la presidencia de éste, sin modificar su anteproyecto, ordene la publicación del proyecto en el Diario Oficial de la Federación.

ETAPA DE PROYECTO Y APROBACIÓN DEL MISMO

Concluida la etapa anterior, con base en el anteproyecto de norma o de su modificación, el Comité Consultivo Nacional de Normalización correspondiente elaborará el proyecto, y éste deberá sujetarse a lo siguiente:

- ✓ **El proyecto deberá publicarse íntegramente en el Diario Oficial de la Federación a efecto de que los "interesados" puedan presentar sus comentarios al Comité Consultivo Nacional de Normalización correspondiente, dentro de un plazo no mayor a 60 días naturales. Durante dicho plazo, la manifestación de impacto regulatorio permanecerá a disposición del público para su consulta en dicho Comité.**

- ✓ Al término del plazo señalado en el punto anterior, el mencionado Comité estudiará los comentarios que hubieren presentado los interesados, y po-

drá, si así lo considera conveniente, realizar modificaciones al proyecto inicial en un plazo no mayor a 45 días naturales.

- ✓ Se deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación las respuestas a los comentarios que hubieran presentado los interesados, **así como las modificaciones al proyecto inicial**, cuando menos 15 días naturales antes de la publicación de la norma oficial mexicana.

- ✓ Una vez que el Comité Consultivo Nacional de Normalización respectivo apruebe la Norma Oficial Mexicana, o su modificación, la Dependencia competente la expedirá, y el presidente del citado Comité ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Cabe señalar en este punto, que lo dispuesto en los artículos 46 y 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, no se aplicará en los casos de emergencia, ya que en este supuesto, la Dependencia competente podrá elaborar directamente, aún sin haber mediado anteproyecto o proyecto y, en su caso, con la participación de las demás Dependencias competentes, la Norma Oficial Mexicana, misma que ordenará se publique en el Diario Oficial de la Federación, con una vigencia máxima de seis meses.

Finalmente, se precisa que el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, establece que para la modificación de las Normas Oficiales Mexicanas deberá cumplirse con el mismo procedimiento administrativo que para su elaboración.

Por otro lado este Órgano Colegiado considera importante precisar lo referido por el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los principios que rigen la facultad reglamentaria del Presidente de la República Mexicana:

[N.E. Se omite transcripción]

El precepto legal transcrito faculta al Presidente de la República para expedir normas reglamentarias de las Leyes emanadas del Congreso de la Unión.

Así, el Ejecutivo de la Unión se encuentra facultado para proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, disposiciones generales, abstractas e impersonales y de observancia obligatoria que tiene por objeto la ejecución de la ley y aunque desde el punto de vista ésta y los Reglamentos materialmente son similares, éstos se distinguen de las Leyes, básicamente, en que provienen de un Órgano que al emitirlas no expresa la voluntad general, sino que está instituido para acatarla en cuanto dimana del Poder Legislativo, de donde por definición, son subordinadas, de lo cual se sigue que la facultad reglamentaria se rige por dos principios:

a) El de reserva de ley y
b) Subordinación jerárquica

a) El principio de reserva de ley encuentra su justificación en la necesidad de preservar los bienes de mayor valía de los gobernados, en tanto que prohíbe que en el Reglamento se aborden materias reservadas en exclusiva a las Leyes del Congreso de la Unión, como son las relativas a la definición de tipos penales, las causas de expropiación y la determinación de los elementos de los tributos.

b) El principio de subordinación jerárquica, exige que el Reglamento esté precedido por una Ley cuyas disposiciones desarrolle, complemente o pormenorice y en las que encuentre su justificación y medida.

Las razones antes precisadas explican en lo general que la Ley Fundamental impone ciertas limitaciones a la facultad reglamentaria, entre ellas la prohibición de que el reglamento aborde materias reservadas en forma exclusiva a las leyes emanadas del Congreso de la Unión, conocida como el principio de reserva de ley; y, por otra, la exigencia de que el Reglamento siempre esté precedido de una ley, cuyas disposiciones desarrolle, complemente o detalle y en los que encuentre su justificación y medida.

En efecto, el aludido principio de reserva de ley forma parte de uno de carácter general, como es la legalidad, que impide que el Reglamento invada materias que de manera expresa la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reserva a la Ley formal y, en cambio, el principio de subordinación jerárquica del Reglamento a la Ley, constriñe al Jefe del Ejecutivo Federal a expedir sólo aquellas normas que tiendan a hacer efectiva o a pormenorizar la aplicación del mandato legal, pero sin contrariarlo, modificarlo o excederlo.

Asimismo, resulta necesario señalar que la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2008 Sobre el Peso y Dimensiones Máximas con los que pueden Circular los Vehículos de Autotransporte que Transitan en las Vías Generales de Comunicaciones de Jurisdicción Federal, controvertida en el presente juicio contencioso administrativo se sustentó en las siguientes disposiciones legales:

[N.E. Se omite transcripción]

Dichos preceptos legales son del tenor literal siguiente:

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

"**ARTÍCULO 36**". [N.E. Se omite transcripción]

LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

"**ARTÍCULO 3o**" [N.E. Se omite transcripción]
"**ARTÍCULO 38**" [N.E. Se omite transcripción]
"**ARTÍCULO 40**" [N.E. Se omite transcripción]
"**ARTÍCULO 43**" [N.E. Se omite transcripción]
"**ARTÍCULO 47**" [N.E. Se omite transcripción]

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

"**ARTÍCULO 28**" [N.E. Se omite transcripción]
"**ARTÍCULO 34**" [N.E. Se omite transcripción]

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

"**ARTÍCULO 1o**." [N.E. Se omite transcripción]
"**ARTÍCULO 5o**." [N.E. Se omite transcripción]
"**ARTÍCULO 39**" [N.E. Se omite transcripción]
"**ARTÍCULO 60**" [N.E. Se omite transcripción]
"**ARTÍCULO 70**" [N.E. Se omite transcripción]
"**ARTICULO 70 Bis**" [N.E. Se omite transcripción]

REGLAMENTO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y SERVICIOS AUXILIARES

"**ARTÍCULO 41**" [N.E. Se omite transcripción]

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

"**ARTÍCULO 6**" [N.E. Se omite transcripción]

REGLAMENTO SOBRE EL PESO, DIMENSIONES Y CAPACIDAD DE LOS VEHÍCULOS DE AUTOTRANSPORTE QUE TRANSITAN EN LOS CAMINOS Y PUENTES DE JURISDICCIÓN FEDERAL

"**ARTÍCULO 1**" [N.E. Se omite transcripción]
"**ARTÍCULO 3**" [N.E. Se omite transcripción]

"**ARTÍCULO 4**" [N.E. Se omite transcripción]
"**ARTÍCULO 5**" [N.E. Se omite transcripción]
"**ARTÍCULO 6**" [N.E. Se omite transcripción]

Del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se desprende que le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país; así como fijar normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes.

Por su parte el artículo 3° de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, antes transcrito establece que debe entenderse por Norma Oficial Mexicana la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las Dependencias competentes a fin de establecer reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación.

El artículo 38 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, señala que corresponde a las Dependencias expedir Normas Oficiales Mexicanas en las materias relacionadas con sus atribuciones y determinar su fecha de entrada en vigor.

El numeral 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, dispone que las Normas Oficiales Mexicanas tiene la finalidad de establecer entre otras: las características y/o especificaciones que deban reunir los servicios cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas cuando se trate de la prestación de servicios de forma generalizada para el consumidor; así como las características y/o especificaciones que deban reunir los aparatos, redes y sistemas de comunicación, así como vehículos de transporte, equipos y servicios conexos para proteger las vías generales de comunicación y la seguridad de sus usuarios.

Por su parte el artículo 43 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización señala que en la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas participarán las Dependencias a quienes corresponda la regulación o control del servicio a normalizarse.

El artículo 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, establece el procedimiento a que se sujetaran los proyectos de las Normas Oficiales Mexicanas.

Por cuanto hace al Reglamento la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en su artículo 28 señala el contenido a que las Normas Oficiales Mexicanas deberán sujetarse.

El artículo 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, establece que la entrada en vigor de las Normas Oficiales Mexicanas será determinada por las Dependencias respectivas, la cual no podrá ser inferior a 60 días naturales.

Por su parte la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal señala en su artículo 1° que el objeto de dicha Ley será, entre otros, el de regular los servicios de autotransporte federal que operen en las vías generales de comunicación, sus servicios auxiliares y el tránsito en dichas vías.

En el artículo 5° de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal establece que todo lo relacionado con los caminos, puentes, así como el tránsito y los servicios de autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios auxiliares, será de jurisdicción federal. Asimismo, establece que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tendrá la facultad de vigilar, verificar e inspeccionar que los caminos y puentes, así como los servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares, cumplan con los aspectos técnicos y normativos correspondientes; así como expedir las Normas Oficiales Mexicanas de caminos y puentes, y de vehículos de autotransporte y sus servicios auxiliares.

El artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal dispone que los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de

pasajeros, turismo y carga, deberán cumplir con las condiciones de peso, dimensiones, capacidad y otras especificaciones, así como con los límites de velocidad en los términos que establezcan los reglamentos respectivos. Asimismo, están obligados a contar con dispositivos de control gráficos o electrónicos de velocidad máxima.

Ahora bien, el artículo 60 del mismo Dispositivo Legal establece que los vehículos nacionales y extranjeros destinados a la prestación de servicios de autotransporte internacional de pasajeros, turismo y carga a que se refiere el artículo anterior, deberán cumplir con los requisitos de seguridad establecidos por esta Ley y sus reglamentos.

Por su parte, el artículo 70 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal señala que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tendrá a su cargo la inspección, verificación y vigilancia de los caminos y puentes, así como de los servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado, en sus aspectos técnicos y normativos, para garantizar el cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas que expida de acuerdo con la misma. Asimismo, dispone que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes inspeccionará o verificará en centros fijos de verificación de peso y dimensiones, que tanto el autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado que operen en los caminos y puentes, cumplan con las disposiciones sobre pesos, dimensiones y capacidad de los vehículos, de acuerdo con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas respectivas.

El artículo 70 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal dispone que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Seguridad Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán en la vigilancia, verificación e inspección de los servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado.

Por su parte, el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares en su artículo 41 señala que el servicio de carga especializada comprende el transporte de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos, objetos voluminosos o

de gran peso, fondos y valores, grúas industriales y automóviles sin rodar en vehículo tipo góndola, y tratándose de objetos voluminosos o de gran peso determinados en la norma correspondiente, se requerirá permiso especial por viaje que otorgue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En cuanto al artículo 6°, fracción XIII del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, el mismo dispone que es facultad de los Subsecretarios, Coordinadores Generales y Coordinador del Sistema Nacional de México, expedir las normas oficiales mexicanas y difundir normas mexicanas en el ámbito de su competencia.

El artículo 1° del Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal, establece el objeto del mismo, consistente en regular el peso, dimensiones y capacidad a que se deben sujetar los vehículos de autotransporte de pasajeros, de turismo y de carga que transiten en los caminos de jurisdicción federal.

En su artículo 3° dispone que compete a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la aplicación del Reglamento en mención.

Por su parte, el artículo 4° del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares dispone que las características o especificaciones de los vehículos se emitirán como norma en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

En relación al artículo 5° del Reglamento en comento, este señala que el peso, dimensiones y capacidad máximos de los vehículos, así como las configuraciones o combinaciones vehiculares, según el tipo de caminos y puentes por el que transiten, y la presión de inflado de las llantas deberán ajustarse a las normas correspondientes expedidas de conformidad con lo previsto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

En su artículo 6° señala que para efectos del Reglamento aludido la clasificación de los caminos y puentes se sujetará a lo establecido en el Apéndice del mismo.

Efectuadas las anteriores precisiones este Órgano Jurisdiccional procede a dilucidar las cuestiones efectivamente planteadas por la parte actora atendiendo a los siguientes elementos de convicción:

En primer término esta Juzgadora considera relevante precisar el hecho de que la legalidad del Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que Transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal no es motivo de estudio en el presente juicio contencioso administrativo, ello en razón de que no existe fundamento legal alguno que otorgue competencia a este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para conocer de los Reglamentos emitidos con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además de que en la instancia el acto controvertido lo constituye la Norma Oficial Mexicana NOM-012-STC-2-2008.

Ahora bien en relación a los argumentos esgrimidos por la actuante descritos en los incisos **a), b) y c)** citados en párrafos anteriores de este fallo, consistentes en que si el artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, establece que los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga deberán cumplir con las condiciones de peso, dimensiones, capacidad y otras especificaciones, así como los límites de velocidad en los términos que establezcan los Reglamentos respectivos, es claro que el Legislador pretendió que esas especificaciones fueran determinadas por el Presidente de la República mediante los Reglamentos respectivos, y no por el C. Subsecretario de Transporte y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre mediante una Norma Oficial Mexicana, los mismos resultan **INFUNDADOS**.

Se determina lo anterior, en virtud de que el artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal dispone lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

De lo anteriormente transcrito se advierte que si bien es cierto que las condiciones de peso, dimensiones, capacidad y otras especificaciones, así como con los límites de velocidad que deberán cumplir los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga, estarán sujetos a los términos establecidos en los reglamentos respectivos, lo es también, que tal y como lo aduce la autoridad demandada, dicha disposición quedó debidamente colmada en el precepto 5° del Reglamento sobre el Peso y Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que Transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal, en el cual el Titular del Poder Ejecutivo estableció lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Así, de los preceptos legales transcritos, se evidencia el cumplimiento del Ejecutivo Federal en relación a la carga impuesta por el Legislador en el artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en relación a que de forma reglamentaria estableciera las condiciones de peso, dimensiones, capacidad, así como otras especificaciones que deben cumplir los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga.

Ahora bien este Órgano Jurisdiccional estima que contrario a lo argumentado por la demandante, con la expedición de la Norma Oficial Mexicana no se transgrede de forma alguna la disposición legal establecida en el artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal multicitada, ello en virtud de que en primer término dicha Norma tuvo su sustento precisamente en el artículo 39 mencionado, en el cual la carga impuesta al Titular del Ejecutivo Federal en dicho precepto legal fue cumplimentada al “reglamentar” que las condiciones de peso, dimensiones, capacidad así como otras especificaciones que deben cumplir los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga serían establecidas en la Norma Oficial Mexicana expedida de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, siendo preciso señalar que como lo aduce la enjuiciada, el multicitado artículo 39 no dispone específicamente que dichas condiciones deban ser desarrolladas de manera detallada y específica en el propio

texto legal contenido en el Reglamento respectivo, pues del numeral aludido, únicamente se advierte la obligación a cargo del Titular del Poder Ejecutivo de **establecer los términos en que dichas especificaciones serían cumplidas**, mas no así que dichas condiciones de peso, dimensiones, capacidad y otras especificaciones serían desarrolladas en el propio Reglamento aplicable a la materia.

Lo anterior tiene su sustento en razón de que como ha sido señalado en los primeros párrafos del presente Considerando, la finalidad de las Normas Oficiales Mexicanas es la de **regular con detalle cuestiones técnicas, estableciendo especificaciones de alto grado de precisión para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas precisamente en los Reglamentos o en las Leyes**; además de que las Normas Oficiales Mexicanas tienen la ventaja sobre dichas Disposiciones Legales, de ser mayormente flexibles y por ello en éstas las resoluciones técnicas como lo son en el caso: las condiciones de peso, dimensiones, capacidad así como otras especificaciones que deben cumplir los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga, fueron desarrolladas en dichas Normas con mucho mayor detalle que como lo hubiera sido en el Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que Transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal.

Asimismo, no debe pasarse por alto lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el cual a la letra dispone:

[N.E. Se omite transcripción]

Precepto legal del cual se advierte que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene a su cargo la inspección, verificación y vigilancia de los caminos y puentes, así como de los servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado, en sus aspectos técnicos y normativos, **para garantizar el cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas que expida de acuerdo con la misma.**

Asimismo, en dicho numeral el Legislador dispuso que la citada Secretaría **inspeccionará o verificará en centros fijos de verificación de peso y dimensiones, que tanto el autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado que operen en los caminos y puentes, cumplan con las disposiciones sobre pesos, dimensiones y capacidad de los vehículos, de acuerdo con lo establecido en las normas oficiales mexicanas respectivas**.

En las relatadas circunstancias, resulta infundada la supuesta ilegalidad de la Norma Oficial Mexicana controvertida, ello en virtud de que, si bien es cierto que como lo aduce la parte actora la facultad reglamentaria establecida en el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es exclusiva del Ejecutivo de la Unión, y que el artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, establece que a través del Reglamento específico éste establecerá las condiciones de peso, dimensiones, capacidad y otras especificaciones, así como los límites de velocidad que deberán cumplir los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga; de igual forma, ha sido acreditado que dicha disposición fue atendida por el Ejecutivo Federal al expedir el Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que Transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal.

Asimismo, se considera que al tener la Norma Oficial Mexicana controvertida en el presente juicio, su sustento en los transcritos artículos 39 y 70 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la misma resulta apegada a derecho pues en los mismos el Poder Ejecutivo otorgó plenas facultades a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para establecer a través de una Norma Oficial las condiciones de peso, dimensiones, capacidad y otras especificaciones, así como los límites de velocidad que deberán cumplir los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga, debiendo reiterarse que en el presente juicio contencioso administrativo la resolución controvertida lo es únicamente la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2008 Sobre el Peso y Dimensiones Máximas con los que pueden Circular los Vehículos de Autotransporte que Transitan en las Vías Generales de Comunicaciones de Jurisdicción Federal, y no así el Reglamento

sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que Transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal, respecto del cual este Órgano Jurisdiccional resulta incompetente para conocer del mismo.

Por las razones expuestas es que esta Juzgadora considera infundada la pretensión de la parte actora en el sentido de que sea declarada ilegal la Norma Oficial Mexicana controvertida en razón de que la misma se aboca al desarrollo de especificaciones que el Legislador confirió de manera exclusiva al Titular del Poder Ejecutivo.

Lo anterior, en razón de que como ha sido señalado la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2008, tiene su fundamento en el artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, del cual se advierte de manera contundente el pleno otorgamiento de facultades que el propio Ejecutivo Federal dispuso para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en relación al establecimiento de las condiciones de peso, dimensiones, capacidad y otras especificaciones, así como los límites de velocidad que deberán cumplir los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga, a través de una Norma Oficial con lo cual se evidencia que el acto controvertido resulta apegado a derecho.

Por otro lado, en cuanto a los argumentos esgrimidos por la parte actora en su escrito de demanda inicial, detallados por este Órgano Jurisdiccional en los incisos **d), e)** y **f),** los mismos resultan **INFUNDADOS** en razón de las siguientes consideraciones de derecho:

En efecto, se consideran infundados los argumentos esgrimidos por la parte actora en los cuales adujo que de los artículos 43, 44, 46, 51 A y demás relativos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se desprende que la expedición de una Norma Oficial Mexicana sigue un proceso diferente a la expedición de un Reglamento, lo cual hace evidente que la facultad reglamentaria emanada directamente del artículo 89 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es diferente a la facultad de las dependencias del ejecutivo federal para expedir una Norma Oficial Mexicana, pues ambas disposiciones persiguen fines diversos, ello en

virtud de que la creación de una Norma Oficial Mexicana persigue fines específicos que están acotados en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, estableciendo incluso para ello un procedimiento diverso a lo que en conjunto establece el diverso 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal en relación a que los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga, deberán cumplir con las condiciones de peso, dimensiones, capacidad y otras especificaciones, así como con los límites de velocidad en los términos que establezcan los reglamentos respectivos.

Lo anterior, toda vez que como se ha precisado a lo largo del presente fallo, el artículo 38, fracciones II y IV de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización señala que las Normas Oficiales Mexicanas serán emitidas por las Dependencias de la Administración Pública Federal, cuyo procedimiento administrativo de creación se contempla en sus artículos 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 51; mientras que la expedición de los Reglamentos es facultad exclusiva del titular del Poder Ejecutivo al señalarlo expresamente el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo que, si bien es cierto los procedimientos de creación de los Reglamentos son distintos a los de las Normas Oficiales Mexicanas, ello no incide en la esfera jurídica del particular, ni provocó la ilegalidad de la Norma Oficial Mexicana controvertida, toda vez que la misma se expidió en apego a lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, tal y como se desprende de los dispositivos legales en los que se fundamentó, los cuales ya fueron objeto de análisis en párrafos anteriores del presente fallo.

En ese tenor, el seguir procedimientos de creación distintos no se traduce en la ilegalidad de la Norma Oficial Mexicana controvertida, puesto que la facultad reglamentaria que el artículo 89, fracción I Constitucional otorga al Ejecutivo de la Unión, tiene como finalidad proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, mientras que las Normas Oficiales Mexicanas expedidas por las Dependencias

de la Administración Pública tienen diversas finalidades señaladas expresamente en el artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Ahora bien, es conveniente señalar que las fracciones III y XVI del artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización determinan lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

De lo anterior se colige que, contrario a lo señalado por la parte actora, las Normas Oficiales Mexicanas pueden establecer las **características y/o especificaciones que deban reunir los servicios cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad** de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal o el medio ambiente general y laboral o **cuando se trate de la prestación de servicios de forma generalizada para el consumidor**; así como las **características y/o especificaciones que deban reunir los aparatos, redes y sistemas de comunicación, así como vehículos de transporte, equipos y servicios conexos para proteger las vías generales de comunicación y la seguridad de sus usuarios**.

Con lo anterior puede concluirse que contrario a lo aducido por la accionante, en las fracciones III y XVI del artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, señaladas como fundamento en la Norma Oficial Mexicana controvertida, sí se contempla como finalidad de las Normas Oficiales Mexicanas el establecer las condiciones de peso, dimensiones, capacidad y otras especificaciones, así como los límites de velocidad que deberán cumplir los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga, de donde se advierte lo infundado de las pretensiones aducidas por la parte actora.

Sin que pase inadvertido para este Órgano Jurisdiccional, el argumento esgrimido por la accionante, en el sentido de que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización al ser una ley general a la materia que nos ocupa, no tiene el requisito de especialidad para la determinación de los requisitos mencionados en la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2008 Sobre el Peso y Dimensiones Máximas con

los que pueden Circular los Vehículos de Autotransporte que Transitan en las Vías Generales de Comunicaciones de Jurisdicción Federal, toda vez que si bien es cierto que la ley que rige la materia de que se ocupa, lo es la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, también lo es, que Ley Federal sobre Metrología y Normalización tiene como objeto entre otros, el regular un procedimiento administrativo uniforme de creación de Normas Oficiales Mexicanas, proveyendo la concurrencia de los sectores público, privado, científico y de consumidores en la elaboración y observancia de dichas Normas, **correspondiendo a las Dependencias según su ámbito de competencia, como en el caso lo fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, expedir dichas Normas Oficiales Mexicanas en las materias relacionadas con sus atribuciones**, razón por la cual la circunstancia de que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, no sea una norma especializada en la materia que aborda la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, no conlleva la ilegalidad de la Norma Oficial Mexicana controvertida en el presente juicio, toda vez que la aplicación de la citada Ley Federal sobre Metrología y Normalización se justifica legalmente en razón de que en la misma se establecen los lineamientos de expedición y finalidad de las propias Normas Oficiales Mexicanas.

[...]

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 49, 50, y 52, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

I.- La parte actora no probó su acción, en consecuencia;

II.- Se reconoce la legalidad de la Norma Oficial Mexicana, identificada en el Resultando 1° de este fallo.

III.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del 13 de enero de 2010, por unanimidad de 11 votos a favor de los CC. Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Nora Elizabeth Urby Genel, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Jorge Alberto García Cáceres, Alejandro Sánchez Hernández, Alfredo Salgado Loyo, Silvia Eugenia Díaz Vega, Olga Hernández Espíndola, Juan Manuel Jiménez Illescas, Luis Carballo Balvanera y Francisco Cuevas Godínez.

Fue aprobada la ponencia formulada por la C. Magistrada **Nora Elizabeth Urby Genel**.

Se formuló el presente engrose el día 25 de enero de 2010, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, fracción V y 47, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en vigor a partir del día 7 de diciembre de 2007, firma el C. Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

VI-P-SS-386

VALOR PROBATORIO DE LAS ACTAS CONSULARES, CUANDO UN PARTICULAR SE RETRACTA DE LO INICIALMENTE MANIFESTADO ANTE UN CÓNSUL DE MÉXICO.- De conformidad con los artículos 129 y 130 del Código Federal de Procedimientos Civiles, las actas consulares son documentos públicos y hacen fe en el juicio sin necesidad de legalización, por ello, si la autoridad aduanera en el auxilio de sus funciones, solicita a un Cónsul de México verificar si un proveedor en el extranjero ha emitido diversos documentos como lo son: el certificado de origen y factura comercial, con los que el demandante pretende acreditar el origen de las mercancías importadas, y el proveedor en respuesta al requerimiento formulado por el Consulado Mexicano, en primer término niega conocer o tener relaciones comerciales con el actor, y con posterioridad el mismo proveedor acude ante el Consulado Mexicano a retractarse de lo inicialmente declarado, y manifiesta que sí conoce y tiene relación comercial con el demandante y además señala que sí expidió los documentos aludidos, en ese sentido, esta última declaración contenida en un Certificado a Petición de Parte, tiene pleno valor probatorio por tratarse de un documento público que contiene una manifestación de un particular, y que si bien es cierto no prueba la verdad de lo declarado, también es verdad que sí es prueba en contra de su primera declaración, de conformidad con el artículo 202 del Código citado. En consecuencia, si es desvirtuado el único elemento que tuvo la autoridad aduanera para negar el trato preferencial arancelario consistente en que son documentos falsos el certificado de origen y la factura comercial, en ese sentido se acredita el origen de las mercancías del país con el cual México celebró un tratado comercial, y que gozan de un trato arancelario preferencial.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 621/09-03-01-6/2624/09-PL-04-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 de abril de 2010, por mayoría de 9 votos a favor 1 voto en

contra.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. Javier Armando Abreu Cruz.
(Tesis aprobada en sesión de 27 de septiembre de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

TERCERO.- [...]

A juicio de los Magistrados integrantes de este Pleno de la Sala Superior, consideran **fundados** los argumentos del demandante por las siguientes consideraciones:

En efecto a lo anterior, se estima pertinente tener presente el contenido de la resolución impugnada con número de oficio 800-04-01-02-01-2008-34163 de fecha 21 de noviembre de 2008, emitida por el Administrador de Contabilidad y Glosa "1" en suplencia por ausencia del Administrador Central de Contabilidad y Glosa del Servicio de Administración Tributaria, misma que a letra señala:

[N.E. Se omiten imágenes]

De lo anterior se desprende que María Dinora Corona Flores, mediante pedimento de importación número 03 18 0648 3001534, realizó la importación de diversas mercancías, siendo que la Administración Central de Contabilidad y Glosa "1", en ejercicio de sus facultades procedió a la revisión del pedimento de importación así como de la documentación anexa al mismo, del cual pudo advertir que en el campo 22 de las partidas se declaró un ad-valorem del 0.00%, correspondiente a la tasa preferencial establecida para las fracciones arancelarias de las mercancías importadas al amparo del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, deduciendo que la misma fue declarada toda vez que en el campo 11 de todas las partidas,

correspondiente en el presente caso al país de origen de las mercancías o donde se produjeron, se asentó como país de origen la clave USA, refiriéndose a "Estados Unidos de América", también es que en los campos correspondientes a identificadores de las partidas se declaró la clave "TL", que de acuerdo al Apéndice 8 del Referido Anexo 22., hace alusión a mercancía originaria al amparo de tratados de libre comercio, declarando además como complemento la clave "USA", la cual corresponde a Estados Unidos de América.

Que de la revisión del pedimento de importación, pudo observarse que en el campo 2 del bloque de datos del proveedor/comprador, y el cual se refiere a "NOMBRE, DENOMINACIÓN o RAZÓN SOCIAL, se declaró como proveedor de las mercancías "BAMBOO", con domicilio en "S. Maple Ave. (Alley), Ext. 1051, C.P. 90015, Los Ángeles, CA (USA), Estados Unidos de América", encontrándose además que se anexó copia de la factura 0735 de fecha 14 de diciembre de 2003, presuntamente expedida por dicha compañía a favor de la importadora.

Asimismo, se advierte que la autoridad observó que al pedimento de importación fue anexado el documento denominado "NORTH AMERICAN FREE TRADE AGREEMENT CERTIFICATE OF ORIGIN", con la finalidad de gozar el beneficio que otorga el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, beneficio que se traduce en la exención del pago correspondiente por concepto de impuesto general de Importación, documental del cual se advirtió que el exportador de las mercancías importadas es la compañía BAMBOO.

Que a efecto de verificar si el proveedor "Bamboo" emitió el certificado de origen con período de validez del 1º de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2003, así como la factura comercial número 0735 de fecha 14 de diciembre de 2003, documentos que fueron anexados al pedimento de importación, la Administración Central de Investigación Aduanera dependiente de la Administración General de Aduanas, mediante oficio 326-SAT-II-7089 de fecha 23 de enero de 2006, solicitó al Consulado General de México en los Ángeles, California, E.U.A. verificar entre otra información

si el proveedor “Bamboo” había emitido dichos documentos, así como validar los datos contenidos en los mismos.

Que en atención a la solicitud, el Cónsul General de México, en los Ángeles, C. Rubén Beltrán Guerrero, emitió el oficio número LAN-6331 de fecha 12 de octubre de 2006, dirigido a Mr. Jae Ok Kang, presidente de la empresa Bamboo USA, solicitándole confirmara la autenticidad de la factura y el certificado de origen e informara si ha tenido relación comercial con María Dinora Corona Flores, siendo que el Sr. Jae Ok Kang, mediante escrito de 20 de octubre de 2006, dio respuesta por escrito presentado ante el Cónsul General el 8 de noviembre de 2006, carta emitida en inglés de fecha 20 de octubre de 2006, mediante el cual declara no haber expedido la factura comercial número 735 y su respectivo certificado de origen, así como el desconocimiento de la relación comercial entre la compañía Bamboo USA, Inc. Dba Style Me, y el importador María Dinora Corona Flores.

En virtud de lo anterior, de conformidad con el artículo 502, numeral 2, inciso a), contenido en el Capítulo V, Sección A del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en relación con la Regla 28 de la Resolución en materia aduanera del Tratado citado, la autoridad demandada presumió que no procede el trato arancelario preferencial de las mercancías en estudio al no cumplir el importador con la obligación de no contar con un certificado de origen válido, en consecuencia procedió a determinarle el crédito fiscal en cantidad de $436,050.98, por concepto de cuota compensatoria, impuesto al valor agregado, impuesto general de importación, derecho de trámite aduanero, multas y recargos

Ahora bien, la parte actora a efecto de desvirtuar la legalidad de la resolución impugnada, en el escrito inicial de demanda ofreció y exhibió como pruebas las marcadas con los numerales 4 y 6 respectivamente consistentes en: copia certificada del “Certificado a Petición de la Parte” expedida por el Consulado General de México” visible a foja 157 y 158 de autos, al cual fue anexado el escrito de fecha 25 de mayo de 2007, suscrito por el Sr. Jae Ok Kang y que obra a foja 160 de autos en copia certificada, asimismo, ofreció y exhibió copia simple del escrito de 25 de mayo

de 2007, certificado por Conny B. Macormack, Diputado de Registro/Clérigo del Condado de los Ángeles, Estado de California, Estados Unidos de Norteamérica, documentales que si bien no fueron exhibidas ante la autoridad aduanera en el plazo concedido de conformidad con el artículo 152 de la Ley Aduanera, en el escrito de hechos y omisiones de fecha 24 de septiembre de 2008, también es cierto que esta Juzgadora se encuentra obligada a valorar tales probanzas.

Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 69/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XIV, del mes de diciembre de 2001, misma que a la letra señala:

> "**CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LAS PRUEBAS DEBEN ADMITIRSE EN EL JUICIO Y VALORARSE EN LA SENTENCIA, AUN CUANDO NO SE HUBIERAN OFRECIDO EN EL PROCEDIMIENTO.**" [N.E. Se omite transcripción]

En ese sentido las documentales señaladas en los numerales 4 y 6 de la demanda, consistentes en copia certificada del "Certificado a Petición de la Parte" expedida por el Consulado General de México" al cual fue anexado el escrito de fecha 25 de mayo de 2007, suscrito por el Sr. Jae Ok Kang y que obra a foja 160 de autos en copia certificada, y copia simple del escrito de 25 de mayo de 2007, certificado por Conny B. Macormack, Diputado de Registro/Clérigo del Condado de los Ángeles, Estado de California, Estados Unidos de Norteamérica, a la letra se digitalizan:

[N.E. Se omiten imágenes]

De lo anterior, se advierte que mediante escrito de fecha 25 de mayo de 2007, el Sr. Jae Ok Kang, en su carácter de presidente de la empresa Bamboo USA, Inc. Dba Style Me, señaló que quiere rectificar que sí conoce a la señora María Dinora Corona Flores, con domicilio fiscal en Mazatlán Sinaloa, y que reconoce tener relaciones comerciales con ella y que sí le expidió la factura 0735 de fecha 14 de diciem-

bre de 2003, con un importe de $2,554.00 dólares americanos, de la empresa Bamboo USA, Inc. Dba Style Me, con domicilio en los Ángeles, California, así como también le proporcionó el certificado de origen que señala que la ropa es hecha en los Estados Unidos de América con fecha de expedición de 1° de diciembre de 2003, y que está firmado por su puño y letra.

Asimismo, hace del conocimiento que en octubre de 2006, manifestó al Consulado en México en la Ciudad de los Ángeles, California, no haber conocido, así como no tener relaciones comerciales con la señora María Dinora Corona Flores, por lo que se retracta de su dicho ya que cometió una equivocación involuntaria, así como aclara que sí reconoce y aclara que todo lo escrito y dicho en el escrito en cuestión es verdad.

De igual manera del "Certificado a Petición de la Parte" antes digitalizado se desprende que con fundamento en el artículo 78 fracción VII del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, el Vicecónsul, de Protección y Asuntos Legales en la Ciudad de los Ángeles California, certifica que el día 26 de octubre de 2007, se presentó en la Oficina Consular General de México, en los Ángeles, California, el Sr. Jae Ok Kang, en su carácter de Presidente de la Compañía Bamboo USA, Inc. Dba Style Me, para ratificar el contenido del escrito de fecha 25 de mayo de 2007, cuya fotocopia presentó y solicitó que se adjuntara a dicho certificado.

Asimismo, señaló que se retracta nuevamente de lo expresado en su comunicación de octubre de 2006, a la petición de colaboración que recibiera el Consulado General de México en los Ángeles, California, ya que por dar una pronta respuesta omitió en forma involuntaria revisar cuidadosamente todo los listados de clientes y transacciones comerciales del año de 2003, ya que es humanamente imposible identificar los nombres de los clientes con sus rasgos fisonómicos, por lo que cuando la señora María Dinora Corona Flores, acudió a su establecimiento comercial en mayo de 2007, se dio cuenta que había cometido un error involuntario por lo que a fin de reparar el daño causado firmó bajo juramento de decir verdad con su puño y letra el escrito de 25 de mayo de 2007.

Aunado a lo anterior se desprende que el Sr. Jae Ok Kang, para esclarecer la confusión creada en agravio de su cliente hizo las siguientes precisiones:

a) Que ha tenido relación comercial con María Dinora Corona Flores.

b) Que reconoce haber expedido la factura 735 de fecha 14 de diciembre de 2003, con un valor de $2,554.00 dólares a la señora María Dinora Corona Flores, y que dicha factura ampara la mercancía ahí descrita.

c) Que reconoce haber expedido el correspondiente certificado de origen.

d) Que solicita que lo expresado en su escrito de respuesta de octubre de 2006, se rectifique con lo que manifestó en el presente certificado y pare el agravio que ha causado involuntariamente a la C. María Dinora Corona Flores.

Al respecto también fueron exhibidas copias certificadas de la factura 0735 y el certificado de origen que el actor señala en su escrito de 25 de mayo de 2007 haberlo suscrito de su puño y letra, mismas documentales que refieren:

[N.E. Se omiten imágenes]

Una vez precisado lo anterior, se estima necesario tener presente lo que disponen los artículos 44 fracción VI de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, 78 fracciones VII y VIII del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, 5 inciso f) y m) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, y artículo 3 de la Ley Aduanera.

[N.E. Se omite transcripción]

De lo anterior se advierte que corresponde a los Jefes de las Oficinas Consulares, ejecutar los actos administrativos que requiera el ejercicio de sus funciones y actuar como delegado de las dependencias del Ejecutivo Federal en los casos previs-

tos por las leyes o por orden expresa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, asimismo, los Jefes de Oficina Consular podrán delegar en funcionarios subalternos el ejercicio de una o varias de las facultades señaladas en el artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, sin perder por ello su ejercicio ni eximirse de la responsabilidad por su ejecución.

Por otra parte se advierte que corresponde a los Jefes de las Oficinas Consulares, expedir en su circunscripción, **certificados a petición de parte dentro del ámbito de sus atribuciones**, así como practicar las diligencias que les encomienden las autoridades judiciales, administrativas o del trabajo cuando de conformidad con la legislación interna del país receptor no exista impedimento para ello; y,

Aunado a lo anterior se advierte que el artículo 5 de la Convención de Viena Sobre Relaciones Consulares, establece que son funciones consulares, entre otras, actuar en calidad de Notario, en la de funcionario de Registro Civil y en funciones similares y ejercitar otras de carácter administrativo, siempre que no se opongan las leyes y reglamentos del Estado receptor; ejercer las demás funciones confiadas por el Estado que envía a la oficina consular que no estén prohibidas por las leyes y reglamentos del Estado receptor o a las que éste no se oponga, o las que le sean atribuidas por los acuerdos internacionales en vigor entre el Estado que envía y el receptor.

Acorde a lo anterior, contrario a lo sostenido por la autoridad demandada el acta circunstanciada de fecha 30 de noviembre de 2006, levantada por el Cónsul General de México en los Ángeles California, en atención al oficio 326-SAT-II-7089 de fecha 23 de enero de 2006, emitido por la Administración Central de Investigación Aduanera, así como el “Certificado a Petición de la Parte” emitida por el Vicecónsul de Protección y Asuntos Legales, del Consulado General de México en Los Ángeles, California, ambas documentales constituyen documentales públicas.

En efecto, a lo anterior se estima pertinente tener presente lo que señalan los artículos 129 y 130 del Código Federal de Procedimientos Civiles, mismos que disponen:

[N.E. Se omite transcripción]

De lo anterior se advierte que son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, asimismo los documentos públicos expedidos por autoridades de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y Territorios o de los Municipios, harán fe en el juicio, sin necesidad de legalización.

En este orden de ideas y en base a los artículos 44 fracción VI de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, 78 fracciones VII y VIII del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, 5 incisos f) y m) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, se desprende que el acta circunstanciada de fecha 30 de noviembre de 2006, así como el "Certificado a Petición de la Parte" emitidos por el Consulado General de México en Los Ángeles, California, Estados Unidos de Norteamérica, fueron emitidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, razones por las cuales ambas documentales tienen el carácter de documentos públicos.

Así, en el caso si bien es cierto que el acta circunstanciada de fecha 30 de noviembre de 2006, levantada por el Cónsul General de México en los Ángeles, California, se realizó en atención al oficio 326-SAT-II-7089 de fecha 23 de enero de 2006, emitido por la Administración Central de Investigación Aduanera, a efecto de que se verificara si la empresa "Bamboo" había emitido dichos documentos así como validar los datos contenidos en la factura 0735 de fecha 14 de diciembre de 2003, así como en el certificado de origen con período de validez del 1º de enero al 31 de diciembre de 2003; y que el "Certificado a Petición de Parte", se levantó como su nombre lo dice a petición de parte, también es cierto que en ambos casos, se hizo

constar la declaración realizada por el Sr. Jae Ok Kang, en su carácter de presidente de la compañía Bamboo USA, Inc. Dba Style Me", ya que en el primer caso manifestó por escrito de fecha 20 de octubre de 2006, presentado el 8 de noviembre de 2006 ante el Consulado, que no reconocía la transacción comercial, que dicha factura y certificado de origen no existen en sus registros contables, mientras que en el segundo caso por escrito de fecha 25 de mayo de 2007 y ratificado el día 26 de octubre de 2007, ante el Consulado citado, manifestó que se retractaba de lo declarado en su escrito del mes de octubre de 2006, y que sí reconocía haber tenido relación comercial con la C. María Dinora Corona Flores, así como haber expedido la factura 0735 y el certificado de origen respectivo.

En este orden de ideas, y contrario a lo sostenido por la autoridad demandada en su contestación, no sólo en el "Certificado a Petición de Parte" se realizó por virtud de la declaración del Sr. Jae Ok Kang, sino que en ambos casos se asentó lo declarado por el Sr. Jae Ok Kang, ante el propio Consulado General de México, en el primer caso por virtud de la investigación que solicitó a la autoridad aduanera, y en el segundo caso a solicitud de parte.

Ahora bien, se estima pertinente transcribir la parte que nos ocupa del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, mismo que a la letra señala:

[N.E. Se omite transcripción]

De lo anterior se advierte que los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado.

Asimismo, las declaraciones o manifestaciones de que se trata prueban plenamente contra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas, y se

manifestaron conformes con ellas, y en caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su valor queda a la libre apreciación del Tribunal.

En el caso, tal y como quedó precisado anteriormente en el acta circunstanciada de fecha 30 de noviembre de 2006, como el "Certificado a Petición de Parte" contienen declaraciones realizadas por la misma persona, en ese sentido y tomando en consideración lo que dispone el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles antes transcrito, si ambas declaraciones son contradictorias, en ese orden de ideas queda al prudente arbitrio de esta Juzgadora la libre apreciación de las mismas.

Entonces, debe tomarse en consideración que al haber declarado el C. Jae Ok Kang ante el Consulado General de México, en los Ángeles, California, el día 26 de octubre de 2007 (Certificado a Petición de la Parte) que ratifica el escrito de fecha 25 de mayo de 2007, en el que manifestó que se retractaba de su dicho realizado mediante escrito de 20 de octubre de 2006, presentado ante el propio consulado, para posteriormente afirmar que ha tenido relación comercial con María Dinora Corona Flores y que reconoce haber expedido la factura 735 de fecha 14 de diciembre de 2003, con un valor de $2,554.00 dólares, así como reconoce haber expedido y firmado de su puño y letra el correspondiente certificado de origen, es claro que tal manifestación hace prueba en contra de la propia manifestación que realizó en primera ocasión ante el Consulado General de México, a través del escrito presentado el 20 de octubre de 2006, tal y como lo dispone el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles al señalar que "las declaraciones o manifestaciones de que se trata prueban plenamente contra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas, y se manifestaron conformes con ellas."

En este orden de ideas, y toda vez que al haber quedado desvirtuado el único elemento que tomó en consideración la autoridad demandada para negar el trato preferencial arancelario solicitado por la parte actora en el pedimento de importación 03 18 0648 3001534, fue que no se acreditaba con documento válido el origen de las mercancías, esto es de Estados Unidos de Norteamérica, ya que del acta circunstan-

ciada levantada el 30 de noviembre de 2006, por el Cónsul General de México, en los Ángeles, California, el Sr. Jae Ok Kang mediante escrito de 20 de octubre de 2006 declaró no haber expedido la factura comercial número 735 y su respectivo certificado de origen, así como el desconocimiento de la relación comercial entre la compañía Bamboo USA, Inc. Dba Style Me, y el importador María Dinora Corona Flores.

Ahora bien, respecto de la prueba superveniente exhibida por la parte actora consistente en la sentencia el 27 de abril de 2009, emitida por la Sala Regional del Noroeste III en el juicio 318/08-03-01-5, en el cual se declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada contenida en el oficio 325-SAT-25-III-2-00722 emitida el 29 de noviembre de 2007, por el Administrador Local Jurídico de Mazatlán, a través del cual se resolvió el recurso de revocación número RR000104/07, en la que se confirmó la resolución contendida en el oficio 326-SAT-IV-3-45222, emitido el 4 de septiembre de 2007, en la que se suspende del padrón de importadores a la C. María Dinora Corona Flores; documental que aporta a efecto de acreditar que los mismos hechos que originaron la emisión de los actos declarados nulos, son los mismos que motivaron la resolución impugnada en el presente juicio.

Al respecto es de señalarse que la resolución impugnada en el presente juicio es distinta a la impugnada en el juicio 318/08-03-01-5 resuelto por la Sala Regional del Noroeste III, por lo que aun cuando los hechos que motivaron dichas resoluciones pudieran ser los mismos, el criterio sostenido por la Sala Regional en comento, de ninguna manera obliga al Pleno de la Sala Superior de este Tribunal a acatarlo.

En las relatadas consideraciones, la resolución impugnada no se encuentra debidamente fundada y motivada de conformidad con el artículo 38 fracción IV del Código Fiscal de la Federación y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo procedente declarar su nulidad lisa y llana de conformidad con los artículos 51 fracción IV y 52 fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 49, 50, 51 fracción IV y 52 fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; 14, fracciones I y XIII, y 18 fracción XV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, se resuelve:

I.- La parte actora acreditó su pretensión, en consecuencia;

II.- Se declara la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada descrita en el Resultando 1º del presente fallo.

III.- NOTIFÍQUESE.- Con copia autorizada de esta resolución, devuélvanse los autos del juicio de nulidad a su Sala de origen una vez que haya quedado resuelto en definitiva y, en su oportunidad, archívese este expediente.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 de abril de 2010, por mayoría de 9 votos a favor de los Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Nora Elizabeth Urby Genel, Manuel L. Hallivis Pelayo, Alejandro Sánchez Hernández, Alfredo Salgado Loyo, Silvia Eugenia Díaz Vega, Olga Hernández Espíndola, Luis Carballo Balvanera y Juan Manuel Jiménez Illescas y 1 voto en contra del Magistrado Jorge Alberto García Cáceres, quien se reservó su derecho para formular voto particular. Estando ausente el Magistrado Francisco Cuevas Godínez.

Fue Ponente en este asunto el Magistrado Jorge Alberto García Cáceres, cuya ponencia se aprobó.

Se elaboró el presente engrose el 18 de mayo de 2010, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, fracción V y 47 fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa vigente, firma el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Adminis-

trativa, ante la C. Lic. Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL C. MAGISTRADO JORGE ALBERTO GARCÍA CÁCERES EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 621/09-03-01-6/2624/09-PL-04-10

El Magistrado Jorge Alberto García Cáceres, se reservó su derecho para formular voto particular en el presente asunto, el cual se manifiesta en los siguientes términos:

En el Considerando Tercero de la presente sentencia, la mayoría de los integrantes del Pleno de la Sala Superior consideraron fundado el único concepto de impugnación planteado por la actora, toda vez que para declarar la nulidad de la resolución impugnada, le dieron pleno valor probatorio al "Certificado a Petición de la Parte", expedido por el Cónsul General de México, en el que hizo constar que el 26 de octubre de 2007, se presentó el Sr. Jao Ok Kang en su carácter de presidente de la empresa Bamboo USA, Inc. Dba Style Me, y declaró que se retractaba de lo manifestado inicialmente al Consulado en México en la Ciudad de los Ángeles, California, en el mes de octubre de 2006, en el sentido de no haber conocido, así como no tener relaciones comerciales con la señora María Dinora Corona Flores, toda vez que cometió una equivocación involuntaria, señalando posteriormente que sí conoce a la señora María Dinora, y reconoce tener relaciones comerciales con ella, asimismo, le expidió la factura 0735 de fecha 14 de diciembre de 2003, con un importe de $2,554.00 dólares americanos de la empresa Bamboo USA, Inc. Dba Style Me, con domicilio en los Ángeles, California, así como también le proporcionó el certificado de origen que señala que la ropa es hecha en los Estados Unidos de América con fecha de expedición de 1° de diciembre de 2003, y que está firmado por su puño y letra.

Respetuosamente discrepo del criterio mayoritario que me he permitido sintetizar en el párrafo precedente, toda vez que, el acta circunstanciada de fecha 30 de

noviembre de 2006, levantada por el Cónsul General de México en los Ángeles California, deriva de las facultades de la autoridad fiscal de auxiliarse de cualquier funcionario o empleado público federal y local de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, segundo párrafo y 144 fracción IV de la Ley Aduanera en relación con los artículos 10, fracción XXI del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.

Por tanto, una vez que la autoridad aduanera contaba con la citada acta, a través del escrito de hechos u omisiones con número GC-08108I-005 de fecha 24 de septiembre de 2008, notificado el 1º de octubre de 2008 a la parte actora, se le hizo del conocimiento las irregularidades detectadas, concediéndole un plazo de 10 días hábiles a efecto de que ofreciera las pruebas y expresara los alegatos tendientes a desvirtuar las irregularidades, de conformidad con el artículo 152 de la Ley Aduanera, derecho que no fue ejercido por la demandante, y acto seguido la autoridad demandada procedió a emitir la resolución impugnada.

En ese sentido es claro que la autoridad aduanera le dio la consecuencia legal al acta circunstanciada de 30 de noviembre de 2006, esto es, de que la actora no acreditó contar con un certificado de origen válido, como lo establece el artículo 502, numeral 1, inciso b), en relación con la regla 25 de la Resolución por la que se establecen las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, toda vez que la parte actora dentro del plazo previsto en el artículo 152 de la Ley Aduanera, no desvirtuó las irregularidades atribuidas por la autoridad demandada, momento procesal oportuno para hacerlo.

Por lo que, precluyó el derecho del demandante para desvirtuar las irregularidades atribuidas, sin que sea válido que se le dé valor probatorio a una nueva prueba exhibida por el demandante en el presente juicio, que no fue aportada ante la autoridad aduanera dentro del plazo que dispone del artículo 152 de la Ley Aduanera, en consecuencia, lo procedente era reconocerse la validez de la resolución impugnada.

En efecto, toda vez que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia 1a./J. 21/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XV, Abril de 2002, la cual es de observancia obligatoria para este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, ha sostenido que la preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente; tal y como se aprecia a continuación:

> "**PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO.-** La preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del juicio.

MAG. JORGE ALBERTO GARCÍA CÁCERES

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-P-SS-387

CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.- ALCANCE DE LA CLÁUSULA "TAL CUAL ES".- El artículo 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial constriñe a los países de la Unión a admitir y proteger, tal cual es, toda marca regularmente registrada en el país de origen, salvo que el signo propuesto encuadre en alguno de los cuatro supuestos de excepción: 1.- Cuando sea capaz de afectar derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama; 2.- Cuando esté desprovisto de todo carácter distintivo; 3.- Cuando esté formado exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción, o que haya llegado a ser usual en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama; y 4.- Cuando sea contrario a la moral o al orden público y, en particular, cuando sea capaz de engañar al público. En virtud de ello, se debe otorgar el registro de la marca propuesta al amparo del artículo 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, si se actualizan simultáneamente las condiciones: 1.- Que su otorgamiento no contravenga la moral o el orden público; y en particular no sea capaz de engañar al público; 2.- Que la marca propuesta a registro sea suficientemente distintiva; 3.- Que no sea descriptiva de los productos o servicios que pretenda proteger; y 4.- Cuando se acredite que en el país de origen se concedió el registro de la marca propuesta. Por lo que si del análisis realizado a la solicitud del registro de marca se desprende que con su otorgamiento no se contraviene la moral o el orden público; y en particular no es capaz de engañar al público; que es distintiva de los productos o servicios a proteger; que no los describe y además, queda acreditado que en el país de origen ya está registrada la marca, debe otorgarse el registro tal y como fue registrada en el propio país de origen.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1790/08-EPI-01-4/2562/09-PL-02-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de abril de 2010, por mayoría de 7 votos a favor y 4 votos en contra.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Beatriz Rodríguez Figueroa.
(Tesis aprobada en sesión de 27 de septiembre de 2010)

EN EL MISMO SENTIDO:

VI-P-SS-388

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1828/08-EPI-01-5/659/10-PL-02-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 4 de agosto de 2010, por mayoría de 9 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas.
(Tesis aprobada en sesión de 27 de septiembre de 2010)

VI-P-SS-389

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1959/08-EPI-01-3/323/10-PL-02-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 4 de agosto de 2010, por mayoría de 7 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 3 votos en contra.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas.
(Tesis aprobada en sesión de 27 de septiembre de 2010)

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-P-SS-390

MARCAS EVOCATIVAS.- PROCEDE OTORGAR SU REGISTRO SI LA DENOMINACIÓN EN SU CONJUNTO GOZA DE SUFICIENTE DISTINTIVIDAD.- Si del estudio que se realice a una solicitud de registro marcario, se advierte que una de sus acepciones es evocativa del producto o servicio que pretende amparar, ello no es suficiente para negar el registro respectivo, toda vez que el análisis de distintividad debe realizarse considerando la suma de todos los elementos que integran la marca propuesta a registro. Por lo que si la marca cuyo registro se pretende, se compone de una palabra extranjera, la cual resulta evocativa de la naturaleza o destino de los productos o servicios a proteger, pero además cuenta con otro elemento distintivo, es procedente otorgar el registro de la marca.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1790/08-EPI-01-4/2562/09-PL-02-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de abril de 2010, por mayoría de 7 votos a favor y 4 votos en contra.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Beatriz Rodríguez Figueroa.
(Tesis aprobada en sesión de 27 de septiembre de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

CUARTO.- [...]

En relación a esto último, en el caso concreto, tenemos que la autoridad demandada, en la resolución que se controvierte, sostiene que el signo marcario "**BANK OF OPORTUNITY**" propuesto a registro por la empresa hoy actora, no es suscep-

tible de ser registrado como marca, atento a que al ser traducido al idioma español resulta indicativo de que los servicios que ampara tales como operaciones bancarias, servicios de tarjetas de crédito y servicios financieros relacionados, que se pretenden proteger, son servicios ofrecidos por un banco, el cual brinda sus servicios con exactitud, puntualidad y en tiempo, forma y lugar conveniente; es decir, un banco de oportunidad.

Por lo que concluye la demandada dicha denominación resulta carente de distintividad, actualizando con ello la hipótesis prevista en las fracciones IV y VI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, numeral este último que, como ya se ha sostenido, establece categóricamente todos aquellos signos que legalmente no pueden ser registrados como marcas.

Ahora bien, en el artículo y fracciones en comento, expresamente se señala:

[N.E. Se omite transcripción]

De la lectura al precepto legal citado con antelación, se observa que existen diversos supuestos que no son registrables como marcas, dentro de las que encontramos:

a).- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, **considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos** o servicios **que se traten de proteger como marca.**

b).- Las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción.

c).- La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables.

En este sentido, los CC. Magistrados que integran el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, estiman que de una interpretación armónica a las fracciones del artículo ya citado de la Ley de la Propiedad Industrial a las que nos hemos estado refiriendo, se desprende que las denominaciones, figuras o formas tridimensionales no son registrables como marcas, cuando éstas, considerando el conjunto de sus características, describen los productos o servicios que se tratan de proteger como marca; así como tampoco será registrable como marca la traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de las palabras que por disposición legal son no registrables; es decir, si una denominación que se pretendiera registrar como marca fuera descriptiva de los productos o servicios que se trataran de proteger con la misma, ésta no sería registrable ni en idioma español, ni en ningún otro idioma, y tampoco lo sería la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de las palabras que integraran esa denominación.

Se desprende también de las fracciones en comento, que tampoco serán registrables como marcas, las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción, así como tampoco lo será la traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de dichas palabras; es decir, si una palabra que se pretendiera registrar como marca, fuera descriptiva o indicativa, tal y como se usara o sirviera para designar en el comercio la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción, ésta no sería registrable ni en idioma español, ni en ningún otro idioma, y tampoco lo sería la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de dicha palabra.

Cabe señalar en este punto, que atendiendo al texto del artículo 90, fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial, lo relevante para determinar si una denominación, considerando el conjunto de sus características, es descriptiva, son los productos o servicios que se traten de proteger con ella; es decir, aquellos en los que se

esté usando o se pretenda usar la marca y que por tanto se estén comercializando, y no los productos o servicios identificados o listados en la clase en la que se registrará la marca.

Efectivamente, del contenido del artículo 90, fracciones IV y VI de la Ley de la Propiedad Industrial, que fueron transcritos en líneas anteriores, se desprende que dentro de lo que estableció el legislador como impedimento para registrar una marca, están, entre otras cuestiones:

• Las denominaciones que sean descriptivas de los productos o servicios que se traten de proteger con la marca;

• La traducción a otros idiomas de las denominaciones que sean descriptivas de los productos o servicios que se traten de proteger con la marca;

• La variación ortográfica caprichosa de las denominaciones que sean descriptivas de los productos o servicios que se traten de proteger con la marca; y

• La construcción artificial de las palabras que integran una denominación que sea descriptiva de los productos o servicios que se traten de proteger con la marca.

Por lo que se evidencia que dicho numeral y fracciones no se refieren, en ninguna de sus partes, a que las denominaciones y palabras citadas, deberían usarse para distinguir los productos protegidos por la marca, que en todo caso serían aquellos para los cuales fue registrada la misma, de acuerdo a la clasificación internacional.

Lo anterior tiene lógica, si se toma en consideración que de sostener que el límite de la prohibición para registrar una marca, sea el que no se refiera al concepto genérico contenido en la clase en que se ubiquen los artículos, productos o servicios que ampara el respectivo registro marcario, desencadenaría una serie de solicitudes de registro respecto de artículos, productos o servicios que respetando la mera

denominación de la clasificación a la que pertenezcan, aun cuando se ubiquen en las hipótesis de prohibición antes especificadas, haría que la autoridad administrativa no pudiera negarse a otorgarlos, dada la inexistencia de mayores impedimentos para su obtención, perdiéndose con ello el sentido de la regulación emitida por el legislativo en la Ley de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, Edición Décima Novena, define la palabra "descriptivo" de la siguiente forma:

- "Descriptivo, va (del Lat. Descriptivus) Adj. Dícese de lo que describe.- Narración descriptiva." (Pág. 448).

- "Describir (del lat. Describere) Tr. Delinear, dibujar, figurar una cosa, representándola de modo que dé cabal idea de ella. 2. Representar a personas o cosas por medio del lenguaje, refiriendo o explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias. 3. Definir imperfectamente una cosa, no por sus predicados esenciales, sino dando una idea general de sus partes o propiedades."

Por tanto, descriptivo "se aplica a lo que describe", y por describir se entiende "delinear, dibujar, figurar una cosa, representándola de modo que de cabal idea de ella".

En este sentido, una marca descriptiva es aquella que se presenta de manera tal, que da cabal idea de los productos o servicios que ampara.

Así las cosas, cuando se pretenda registrar como marca una **denominación que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos que trate de amparar la marca,** o bien evoque sus cualidades o sea sugestiva de cierta cualidad o característica, **la misma resulta ser descriptiva, y por lo tanto está prohibido legalmente su registro**.

A este respecto el Poder Judicial de la Federación ha emitido diversos criterios relacionados con las marcas descriptivas, mismos que a continuación se transcriben:

"**MARCAS. DESCRIPTIVIDAD**" [N.E. Se omite transcripción consultable en SJF. Octava Época. III. Segunda Parte-1. Enero a Junio de 1989. p. 454]

"**MARCAS DESCRIPTIVAS**" [N.E. Se omite transcripción consultable en SJF. Séptima Época. Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia TCC. P. 476]

De las tesis transcritas se advierte que no son registrables como marca las frases descriptivas de los productos o servicios que traten de ampararse, incluyendo aquellas que pueden servir para designar la calidad de esos productos y una denominación descriptiva no se considerará distinta por el hecho de ostentar una ortografía caprichosa. Asimismo, que una marca no es distintiva si la denominación respectiva se integra por dos o más palabras que al ser analizadas en forma aislada resultan descriptivas de los productos o de los servicios correspondientes y las mismas continúan siendo descriptivas en su conjunto; en tal caso la denominación propuesta para registro en esos términos, debe ser rechazada.

Entonces, de lo previsto por el artículo 90, fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial, y de la definición del vocablo "describir", se deduce que la prohibición de utilizar denominaciones o figuras descriptivas, **está condicionada al hecho de que esas denominaciones o figuras se encuentren vinculadas con la naturaleza de los productos que se tratan de proteger precisamente con el registro marcario, indicando cualesquiera de sus elementos, cualidades, características, destino, etcétera; prohibición cuyo objetivo fundamental es impedir el monopolio de palabras o figuras comunes que pudieren evitar su uso cotidiano por los demás.**

Enseguida se procede a efectuar el análisis en torno a la descriptividad de la marca, atendiendo a todos los productos que la referida marca pretende proteger,

dado que la reserva del derecho exclusivo que confiere todo registro marcario, atañe a todos los productos o servicios que se pretenden amparar con la misma.

Al efecto, se considera el contenido de la solicitud del registro marcario presentada por la ahora actora ante la autoridad el 29 de enero de 2007, visible a foja 01 del expediente administrativo del cual emana la resolución controvertida y autos, que a continuación se reproduce:

[N.E. Se omite imagen]

En el caso a estudio, tal como se advierte del contenido de la solicitud previamente reproducida, la **marca** que se pretende registrar es **nominativa,** pues está formada por un elemento fonético o palabra y la misma protegería productos comprendidos en la clase 36 internacional, vigente al momento de la presentación de la referida solicitud; es decir, el 29 de enero de 2007.

Se estima entonces necesario transcribir el contenido de los artículos 93 de la Ley de la Propiedad Industrial y 59 de su Reglamento, los cuales son del tenor siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

De los numerales apenas transcritos, se desprende que las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados, según la clasificación que establezca el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial; previéndose en este último, que la clasificación de productos y servicios en comento será la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas vigente, establecida en virtud del Arreglo de Niza; y que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicará en su Gaceta, las clases de productos y servicios comprendidos en la clasificación vigente, así como la lista alfabética de los mismos, con indicación de la clase en la que esté comprendido cada producto o servicio.

En el propio Reglamento en comento, se indica que los productos o servicios incluidos en la lista alfabética de la clasificación se considerarán especies; y que se entenderá que los productos y servicios ordenados en su respectiva clase no agotan ésta; es decir, que no obstante que en la clase respectiva no se encuentre expresamente "listado" o "señalado" un producto o servicio, esto no quiere decir que dicho producto o servicio no pueda ser incluido en la misma, quedando en todo caso a cargo del Instituto, el establecer los criterios de interpretación y aplicación de la clasificación en comento.

Ahora bien, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicó la Clasificación Internacional en los siguientes términos:

[N.E. Se omite transcripción]

De todo lo anteriormente precisado y, de la revisión del contenido de la solicitud de registro marcario que la empresa actora presentó el día 27 de enero de 2007 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, señaló que los productos pertenecientes a la clasificación 36 Internacional que pretendía proteger eran los consistentes en: **OPERACIONES BANCARIAS, SERVICIOS DE TARJETAS DE CRÉDITO Y SERVICIOS FINANCIEROS RELACIONADOS**.

Así, este Órgano Jurisdiccional concluye que el signo BANK OF OPORTUNITY se trata de un término en efecto traducido al castellano significa BANCO DE OPORTUNIDAD, el cual en forma alguna puede considerase como una marca que resulte descriptiva de los servicios que pretende amparar, los cuales se encuentran amparados en la clase 36 del Nomenclator Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, servicios tales como operaciones bancarias, servicios de tarjetas de crédito y servicios financieros relacionados.

Se afirma lo anterior toda vez que si bien es cierto, que como lo señaló la demandada en el oficio controvertido, con dicha denominación se indica que dichos servicios son ofrecidos por una banco; también lo es, que forma alguna resulta evi-

dente la apreciación de la demandada en el sentido de que con dicha denominación se indica que los servicios que se ofrecen son con exactitud, puntualidad y en tiempo, forma y lugar conveniente, lo cual se traduce en un BANCO DE OPORTUNIDAD.

Se arriba a la anterior consideración, toda vez que en el supuesto sin conceder de que como lo determinó la demandada, la acepción "oportunidad" indicara que los servicios se ofrecen con exactitud, puntualidad y en tiempo, forma y lugar conveniente, tales características en forma alguna pueden identificarse directamente con los servicios amparados en la clase 36 del Nomenclator Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, servicios tales como operaciones bancarias, servicios de tarjetas de crédito y servicios financieros relacionados. Es decir; en forma alguna el público consumidor podría al escuchar la denominación BANCO DE OPORTUNIDAD determinar contundentemente que con dicha acepción se hace referencia sin lugar a dudas que los servicios que se amparan con dicha marca se ofrecen con exactitud, puntualidad y en tiempo, forma y lugar conveniente.

Aunado a lo anterior este Cuerpo Colegiado estima que como acertadamente lo refiere la parte actora en su escrito de demanda inicial, la denominación BANK OF OPORTUNITY no es como el público consumidor percibe los servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional, en especifico: OPERACIONES BANCARIAS, SERVICIOS DE TARJETAS DE CRÉDITO Y SERVICIOS FINANCIEROS RELACIONADOS; es decir, un servicio financiero nunca ha sido designado con el término BANK OF OPORTUNITY o BANCO DE OPORTUNIDAD.

Por otra parte, si bien es cierto que la acepción banco puede evocar al público consumidor la prestación de servicios llevada a cabo por una Institución Financiera, también lo es que analizando dicha acepción en su conjunto; es decir BANCO DE OPORTUNIDAD, dicha denominación en su conjunto goza de suficiente distintividad, pues no puede pasar desapercibido que si a una palabra extranjera que resulta evocativa de los productos o de su naturaleza o destino, se le agrega otro elemento suficiente para establecer la distinción, de manera que la parte evocativa no venga a resultar el elemento único o substancial de la marca, ésta sí es susceptible de registro, tal y

como sucede con la marca en cuestión BANK OF OPORTUNITY o BANCO DE OPORTUNIDAD.

Por todo lo expuesto se arriba a la consideración de que si bien es cierto la finalidad del artículo 90, fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial es la de prohibir que un particular se apropie para su uso exclusivo la enunciación de una cualidad que le es aplicable a toda a una clase de productos o servicios; es decir, prohibir que surjan con ello monopolios y prácticas de competencia desleal, no puede considerarse que con la denominación BANK OF OPORTUNITY o BANCO DE OPORTUNIDAD se este autorizando la existencia de algún monopolio o práctica de competencia desleal, lo cual en todo caso podría actualizarse de autorizarse el registro como marca de la denominación banco o servicios financieros, lo cual no sucede en la especie, pues por el contrario como se ha señalado a lo largo de este fallo, este Órgano Jurisdiccional estima que la denominación materia de estudio goza de suficiente distintividad.

En este orden de ideas, resulta incorrecta la determinación de la demandada en el sentido de que de otorgarse el registro se obtendría un privilegio injustificado.

Ahora bien, en este orden de ideas, es importante tomar en consideración el siguiente criterio jurisprudencial:

> "**MARCAS DESCRIPTIVAS**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en el S.J.F. Séptima Época. 133-138 Sexta Parte. pág. 286]

Bajo este contexto, es inconcuso que la autoridad demandada debió conceder el registro solicitado, al encontrarse satisfecha la exigencia prevista en el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, pues dicho precepto legal dispone que se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, como acontece en la especie, ya que el signo "**BANK OF OPORTUNITY**", tiene la cualidad de distinguir servicios de la clase 36, de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Por lo anterior esta Juzgadora advierte que es inconcuso que no se actualizan los supuestos previstos en el artículo 90, fracciones IV y VI de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que la determinación de la autoridad demandada para negar el registro como marca del signo "**BANK OF OPPORTUNITY**" se sustentó en que traducido al idioma español resulta indicativo de una característica o cualidad de los productos y carente de distintividad, lo que como ya quedó demostrado no acontece en el caso concreto.

QUINTO.- [...]

A consideración de este Órgano Jurisdiccional es **FUNDADO** el argumento de agravio de la parte actora, relativo a que la resolución controvertida es ilegal ya que la autoridad demandada no aplicó correctamente lo establecido en el artículo 6 quinquies, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del que México es signatario, el cual dispone lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Como se advierte, el artículo transcrito de cuya violación se duele la actora, constriñe a los países de la Unión a admitir y proteger, tal cual es, toda marca regularmente registrada en el país de origen, y sólo permite se rehúse el registro a las marcas desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde se reclama la protección.

De acuerdo con lo anterior le asiste la razón a la parte actora, porque no es válido negar el registro de la marca cuando, como se ha visto, no está desprovista de todo carácter distintivo.

Por otra parte, cabe precisar que la parte actora ofreció como prueba superveniente de su parte la declaración de Janet E. Sullivan, Vicepresidenta de Bank of America Corporation, así como el certificado de registro marcario 3,402,579 "BANK OF OPORTUNITY" otorgado por la Oficina de Patentes y Marcas de los estados Unidos de America.

En tal virtud y para dar claridad a lo anterior enseguida se detallan los elementos de prueba aportados por la parte actora:

[N.E. Se omiten imágenes]

De un análisis practicado a las documentales reproducidas, se arriba a la conclusión de que la hoy actora es propietaria del registro marcario BANK OF OPORTUNITY que ampara productos y servicios comprendidos en la clase 36 internacional, registro que fue concedido además de en su país de origen en diversos países.

Lo anterior se desprende la declaración de Janet E. Sullivan en su carácter de Vicepresidenta de "BANK OF OPORTUNITY" en la cual se hace constar que en diversos países tales como: AUSTRIA, BENELUX, CHILE, FINLANDIA, FRANCIA, IRLANDA, JAPÓN, MONACO, PERÚ Y ESPAÑA, consta la inscripción de la marca materia del presente asunto.

Siendo ilegal la resolución controvertida, ya que la autoridad demandada omitió dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 6, quinquies, inciso A subsección 1 e inciso B del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, pues se negó a registrar la marca tal cual fue registrada en el país de origen.

En conclusión, tomando en cuenta que en el presente fallo lo procedente es declarar la nulidad de la resolución controvertida con fundamento en los artículos 51, fracciones I, II, IV y penúltimo y último párrafo y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, **para el efecto de que en el plazo**

de cuatro meses se emita otra por autoridad competente que funde y motive debidamente la misma, y otorgue a la actora el registro como marca del signo BANK OF OPORTUNITY, en los términos en que lo solicitó.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 49, 50 51, fracciones I, II, IV y penúltimo y último párrafo y 52, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

I.- Resultó fundado el estudio oficioso de la competencia del oficio de impedimento legal, de fecha 22 de junio de 2007.

II.- La parte actora acreditó los extremos de su acción; en consecuencia,

III.- Se declara la nulidad de la resolución controvertida en el presente juicio, misma que ha sido descrita en el Resultando 1° de esta sentencia, para los efectos precisados en el último Considerando de la misma.

IV.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del 19 de abril de 2010, por mayoría de 7 votos a favor de los CC. Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Nora Elizabeth Urby Genel, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Jorge Alberto García Cáceres, Alfredo Salgado Loyo, Juan Manuel Jiménez Illescas y Luis Carballo Balvanera; y 4 votos en contra de los CC. Magistrados Alejandro Sánchez Hernández, Silvia Eugenia Díaz Vega, Olga Hernández Espíndola y Francisco Cuevas Godínez.

La C. Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega se reservó su derecho para formular voto particular.

Fue aprobada la ponencia formulada por la C. Magistrada **Nora Elizabeth Urby Genel**.

Se formuló el presente engrose el día 17 de mayo de 2010, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, fracción V y 47, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en vigor a partir del día 7 de diciembre de 2007, firma el C. Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA C. MAGISTRADA SILVIA EUGENIA DÍAZ VEGA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 1790/08-EPI-01-4/2562/09-PL-02-10

La C. Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega se aparta del criterio de la mayoría toda vez que en el caso considera "Bank of Oportunity" es descriptiva de los servicios de la clase 36 internacional en la que se pretende registrar la marca mencionada, toda vez que en dicha clase se comprende operaciones bancarias servicios de tarjeta de crédito y servicios financieros relacionados, es decir, la marca la idea de los servicios que pretende proteger aun cuando su traducción al castellano significa banca de oportunidad, pues con ello hace referencia a la calidad de los servicios que se pretenden proteger.

Por lo anterior se considera que en la especie si se violó lo dispuesto por el artículo 90 fracciones IV y VI de la Ley de la Propiedad Industrial.

MAG. SILVIA EUGENIA DÍAZ VEGA

PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-P-SS-391

CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.- ALCANCE DEL ARTÍCULO 6 QUINQUIES TRATÁNDOSE DE MARCAS DESCRIPTIVAS QUE HAYAN SIDO REGISTRADAS EN UN PAÍS QUE LO SUSCRIBIÓ.- El artículo 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, contempla que toda marca regularmente registrada en el país de origen, debe ser registrada como tal en los demás países que lo suscribieron, salvo que el signo propuesto encuadre en alguno de los cuatro supuestos de excepción: 1.- Cuando sea capaz de afectar derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama; 2.- Cuando esté desprovisto de todo carácter distintivo; 3.- Cuando esté formado exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción, o que haya llegado a ser usual en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama; y 4.- Cuando sea contrario a la moral o al orden público y, en particular, cuando sea capaz de engañar al público. Por lo que, si la parte actora en el juicio contencioso administrativo argumenta que la marca propuesta para registro no es descriptiva de los productos que pretende proteger, y que es procedente otorgar el registro de la marca propuesta de conformidad con el artículo 6 Quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; se debe analizar la marca, con la finalidad de determinar si ésta es o no descriptiva del producto o servicio que se pretende amparar. Es por ello que si se determina que la marca propuesta a registro es descriptiva, no será procedente ordenar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que otorgue el registro de la misma, dado que aun cuando en un país que lo suscribió se hubiera otorgado el registro, seguro que ello ocurrió porque cumplió con la legislación respectiva de dicho país; sin embargo, la determinación de un país extranjero no puede tener injerencia en el análisis de descriptividad de la marca que se realice en México.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 785/08-EPI-01-1/19/10-PL-02-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de mayo de 2010, por mayoría de 10 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María del Consuelo Hernández Márquez.
(Tesis aprobada en sesión de 27 de septiembre de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

QUINTO.- [...]

Una vez precisado todo lo anterior, este Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa estima necesario precisar que la ***litis*** a dilucidar en el presente juicio contencioso administrativo, consiste en **determinar si la denominación propuesta a registro de marca "THE TOMATO LOVER´S TOMATO", es descriptiva de los productos que pretende amparar dentro de la clase 30 internacional, los cuales son: tomates y productos hechos de tomates, incluyendo salsa; y por ende si se actualiza lo dispuesto por el artículo 90, fracciones IV y VI de la Ley de la Propiedad Industrial**.

Ahora bien, el artículo 90, fracciones IV y VI de la Ley de la Propiedad Industrial, en que la autoridad demandada sustentó la negativa del registro marcario es del tenor literal siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Como se desprende del precepto legal transcrito, respecto a las fracciones IV y VI, se advierte categóricamente que no serán registrables como marca lo siguiente:

- **Las denominaciones**, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, **sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca**.

- **Las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad**, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción.

- **La traducción a otros idiomas**, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial **de palabras no registrables**.

De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que el artículo 90, fracción IV, en relación con la fracción VI de la Ley de la Propiedad Industrial, **contempla la prohibición de inscribir una marca que sea descriptiva o indicativa del producto o servicio que trata de amparar, sus características íntimas o particulares, y que sea descriptiva en general de cualquier cosa, por lo que si se pretende registrar como marca un adjetivo calificativo que traducido en un idioma extranjero al español, su significado describa en sí mismo el producto o servicio; o bien, sea indicativo de cierta cualidad o característica del producto o servicio que ampara la marca, el mismo resulta ser descriptivo y por lo tanto, está prohibido su registro**.

Ahora bien, es correcto el argumento que sostiene la parte actora identificado en el presente Considerando con la letra **C)**, visible en la página 22, referente a que para determinar si un signo consistente en una expresión compuesta de dos o más palabras es descriptiva o no, de los productos que pretende amparar, de su origen, cualidades, destino, etcétera, se le debe analizar tal como fue solicitada, sin que sea correcto estudiar por separado cada palabra, para ver si en alguno de sus sentidos es descriptiva.

En la especie, del análisis practicado con anterioridad a la resolución controvertida, esta Juzgadora estima que la autoridad demandada realizó un estudio en su

totalidad del signo THE TOMATO LOVER´S TOMATO, pues en la Consideración Cuarta de la resolución aludida visible a folios 26 y 27 del expediente principal en que se actúa, indicó que el signo propuesto THE TOMATO LOVER´S TOMATO no podía ser registrado como marca, porque incurría en las prohibiciones previstas en las fracciones IV y VI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, porque el público consumidor al estar frente a la denominación aludida dentro del mercado en el que se venden "TOMATES", inmediata e irrefutablemente genera la idea inequívoca de que los productos de que se va a hacer, tienen como cualidad o característica ser una especie de tomate con características especiales o diferentes al resto de los tomates que existen en el mercado, así como que cumple con las exigencias de quien es conocedor o gusta mucho de este vegetal.

En esa razón, se considera **INFUNDADO** el argumento identificado en el presente Considerando con la letra **L)**, visible en la página 24, pues la autoridad demandada analizó el signo tal cual fue propuesto a registro, esto es, THE TOMATO LOVER´S TOMATO y no palabra por palabra.

En efecto, la parte actora se duele de que la autoridad demandada realizó un estudio incorrecto del signo THE TOMATO LOVER'S TOMATO, ya que realizó la traducción de éste al idioma español separando sus elementos; situación que en la especie no aconteció, puesto que como se advierte de la resolución controvertida, específicamente de lo digitalizado en las hojas 34 a la 35 de la presente sentencia, la autoridad demandada dentro de la resolución controvertida en ningún momento seccionó, dividió o separó los vocablos que componen el signo a registrar, por el contrario consignó expresamente en la Consideración Cuarta de la resolución controvertida, visible a folios 26 del expediente en que se actúa, lo siguiente: "*Atendiendo al caso particular, tenemos que el signo propuesto THE TOMATO LOVER´S TOMATO, no es registrable como marca en virtud de que incurre en las prohibiciones previstas en la consideración que antecede, al resultar ser una denominación que al ser traducida, a nuestro idioma es indicativa del producto a distinguir, toda vez que la traducción a nuestro idioma de la denominación propuesta THE TOMATO LOVER´S TOMATO, de acuerdo al traductor en línea..., es EL TOMA-*

TE PARA LOS AMANTES DEL TOMATE, las cuales son palabras no registrables, al ser indicativas de los productos a distinguir, en cuanto a la especie y cualidad...Es importante señalar que, el signo propuesto en el ámbito agrícola, el signo propuesto, se resume como una especie de tomate con características especiales o diferentes al resto de los tomates que existen en el mercado, que cumple con las exigencias de quien es conocedor o que gusta mucho de este vegetal..."; **además de que sí señaló que resultaba indicativo de su cualidad porque**: "*...no se atiende sólo al significado literal de las palabras que conforman el signo, sino al signo que será usado dentro de la rama del comercio en que serán distribuidos los productos a los cuales desea aplicarse el signo...*", de ahí que devenga **INFUNDADO** el argumento en cuanto a que la autoridad demandada realizó un estudio incorrecto del signo propuesto para marca, pues como quedó evidenciado, no realizó la traducción al idioma español separando los elementos de la denominación THE TOMATO LOVER´S TOMATO.

Así, se tiene que la autoridad al denegar el registro marcario solicitado, consideró en su totalidad la traducción del signo THE TOMATO LOVER´S TOMATO, tal y como se describió en párrafos anteriores, por lo que resulta inocuo el que la demandante apunte que no solicitó el registro de las denominaciones EL TOMATE PARA LOS AMANTES DEL TOMATE, THE TOMATO FOR TOMATO LOVER´S, ni TOMATO, ni LOVER´S, sino la denominación THE TOMATO LOVER'S TOMATO; pues la autoridad se refirió al mismo signo propuesto por la hoy demandante, sólo que realizó la traducción correspondiente para evidenciar la improcedencia del registro solicitado, de ahí que también resulte **INFUNDADO** el argumento identificado en el presente Considerando con la letra **D)**, visible en la página 22.

Ahora bien, respecto al argumento identificado en el presente Considerando con la letra **K)**, visible en la página 23, esta Juzgadora lo considera **INFUNDADO**, pues si bien es cierto que el público consumidor no está obligado a realizar la traducción de vocablos extranjeros que identifiquen los diversos productos existentes en el mercado, también lo es, que la autoridad administrativa antes de otorgar un registro marcario debe realizar un estudio de fondo para asegurarse que el signo propuesto a

registrar no encuadre en ninguno de los supuestos de prohibición contemplados en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial; en esa razón, **si la fracción VI del numeral aludido establece que no serán registrables como marca la traducción a otros idiomas de palabras no registrables, es evidente que la autoridad administrativa cuenta con la facultad de traducir las denominaciones propuestas para registro de marca, para observar si éstas al ser traducidas al español encuadran dentro de alguna de las hipótesis previstas en el artículo 90 del Ordenamiento Legal citado**.

Conforme a la fracción VI, del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial no son registrables como marca las denominaciones descriptivas, de la especie o calidad de los productos que traten de protegerse, así como la traducción de otros idiomas de las palabras no registrables; por lo que **el carácter descriptivo de una denominación propuesta a registro no sólo se restringe a vocablos en el idioma español, sino a aquellos que siendo en lengua extranjera su traducción corresponda a palabras no registrables en lengua española**, por lo que independientemente de que el público consumidor no se encuentre obligado a traducir los vocablos extranjeros que identifiquen los diversos productos existentes en el mercado, la autoridad administrativa se encuentre compelida a hacerlo de conformidad con los argumentos antes expuestos.

Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación:

> "**MARCAS. CARÁCTER DESCRIPTIVO DE UNA DENOMINACIÓN EN IDIOMA EXTRANJERO. NO ES REGISTRABLE.** [N.E. Se omite transcripción consultable en SJF. Octava Época. V. Segunda Parte-1. Enero a Junio de 1990. p. 291]

En relación a los argumentos identificados en el presente Considerando con las letras **B)**, y **M)**, visibles en las páginas 21 y 24, esta Juzgadora los considera **INFUNDADOS** por lo siguiente:

1.- Mediante acuerdo de 3 de septiembre de 2007 la C. Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, entre otros actos, admitió a trámite la demanda de anulación, tuvo por admitidas las pruebas ofrecidas y **por lo que hacía a la prueba pericial en materia de traducción en idioma inglés al español, tuvo como perito de la parte actora al C. Willy de Winter Gallegos (sic), por lo que requirió a la autoridad demandada para que al momento de dar contestación a la demanda designara su perito y en su caso adicionara el cuestionario ofrecido por la parte actora**.

2.- Por auto de 16 de febrero de 2009 **la C. Magistrada Instructora de la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, acordó** que toda vez que mediante proveído de 3 de septiembre de 2007 se le había requerido a la autoridad demandada para que en el momento de contestar la demanda designara perito de su parte, en relación a la prueba pericial ofrecida por la parte actora y en su caso adicionara el cuestionario correspondiente, sin que en la especie lo hubiera hecho; **tuvo como perito y único cuestionario al nombrado y proporcionado por la parte actora, requiriendo en el término legal a esta última, para que presentara su perito a aceptar y protestar el cargo conferido**.

3.- Mediante acta de 18 de marzo de 2009 la C. Magistrada Instructora de la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, asistida por la Secretaria de Acuerdos adscrita a la Ponencia 1 de la Sala aludida, **hicieron constar la comparecencia del perito designado por la parte actora, así como la aceptación del cargo de perito en materia de traducción**.

4.- Por acuerdo de 31 de marzo de 2009 la C. Magistrada Instructora de la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, **concedió término legal al perito designado por la**

parte actora para que rindiera y ratificara en el mismo escrito su dictamen atendiendo al cuestionario propuesto.

5.- Mediante proveído de 5 de agosto de 2009 la C. Magistrada Instructora de la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, **tuvo por rendido y ratificado el dictamen en materia de traducción del perito propuesto por la parte actora**.

Una vez precisado lo anterior, y en atención que mediante proveído de 16 de febrero de 2009 **la C. Magistrada Instructora de la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, tuvo como perito y único cuestionario al nombrado y proporcionado por la parte actora,** esta Juzgadora procede al estudio y valoración de la prueba pericial en materia de traducción en idioma inglés al español, ofrecida por MATRONARDI PRODUCE LTD.

De un análisis al dictamen rendido por el C. Willy Isidor de Winter Gallegos quien se ostentó como perito traductor, visible a folio 109 del expediente en que se actúa, prueba que se valora con fundamento en los artículos 43 y 46, fracción III de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se aprecia lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

De la transcripción anterior se aprecia que el perito traductor respondió un cuestionario conformado por 5 preguntas, dentro de las cuales esta Juzgadora se percata que en dos de ellas existe una estrecha relación con lo aquí controvertido; en ese sentido, se estima necesario indicar que en la pregunta número 1 el perito traductor respondió que la traducción de la denominación THE TOMATO LOVER´S TOMATO al español, era EL TOMATE (PREFERIDO) DEL AMANTE DE LOS TOMATES.

Asimismo, en la pregunta número 3 correspondiente a que si "TOMATE PARA LOS AMANTES DEL TOMATE" es la traducción al español de THE TOMATO LOVER´S TOMATO, el perito traductor respondió que la oración **TOMATE PARA LOS AMANTES DEL TOMATE podía ser una de las traducciones posibles al español del signo THE TOMATO LOVER´S TOMATO**.

En esa razón, **si la autoridad demandada dentro de la resolución controvertida consideró que la traducción del signo THE TOMATO LOVER´S TOMATO al español era EL TOMATE PARA LOS AMANTES DEL TOMATE**, este Órgano Jurisdiccional concluye que la parte actora no desvirtuó de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de aplicación supletoria a la materia, la legalidad de la traducción realizada por aquélla dentro de la resolución combatida, puesto que el perito traductor de la parte actora al contestar la pregunta número 3 del cuestionario elaborado por ella misma, respondió que la oración **TOMATE PARA LOS AMANTES DEL TOMATE si es una de las traducciones al español del signo THE TOMATO LOVER´S TOMATO**, al ser una de las posibles traducciones.

Además, esta Juzgadora observa que la traducción realizada por el perito traductor al signo THE TOMATO LOVER´S TOMATO al español **EL TOMATE (PREFERIDO) DEL AMANTE DE LOS TOMATES** dentro de la pregunta número 1, no varía en mucho a la traducción realizada por la autoridad demandada en la resolución controvertida, esto es **EL TOMATE PARA LOS AMANTES DEL TOMATE**; de ahí que se considere que la parte actora en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, mismo que establece que: "*el acto administrativo será válido hasta en tanto su invalidez no haya sido declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según sea el caso*", no desvirtuó la legalidad de la resolución controvertida referente a que fuera equívoca la traducción realizada por la autoridad demandada del signo que propuso a registro de marca; **en esa razón, se considera legal la traducción que realizó la autoridad demandada sobre el signo THE TOMATO LOVER´S TOMATO al español, o sea EL TOMATE PARA LOS AMANTES DEL TOMATE**.

No pasa desapercibido para esta Juzgadora el argumento formulado por la parte actora, referente a que la autoridad demandada realizó una traducción incorrecta al signo propuesto a registro, ya que es evidente que si las autoridades de Canadá no consideraron que éste fuera descriptivo, mucho menos lo puede hacer quien no habla el idioma; mismo que se considera **INFUNDADO**, pues el hecho de que el Estado de Canadá haya otorgado el registro marcario del signo THE TOMATO LOVER´S TOMATO para amparar los productos contenidos en la clase 30 internacional, consistentes en: tomates y productos hechos de tomates, incluyendo salsa; ello no significa, que la autoridad administrativa de México esté obligada o bien, deba de conceder en los términos que se solicitó la marca del signo aludido, toda vez que si el Estado de Canadá autorizó el registro de la marca THE TOMATO LOVER´S TOMATO para amparar los productos descritos en la clase internacional aludida, fue seguramente porque se cubrieron los requisitos de su legislación y ellos no necesariamente son legales en nuestra normatividad, de ahí que la autoridad administrativa en México deba de observar y aplicar lo que indique la legislación doméstica para autorizar el registro de una marca; en ese sentido, si el artículo 90, fracción IV de la Ley en cita **contempla la prohibición de inscribir una marca que al ser traducido de un idioma extranjero al español, su significado describa en sí mismo el producto o servicio; o bien, sea indicativo de cierta cualidad o característica del producto o servicio que ampara la marca, el mismo resulta ser descriptivo y en consecuencia no procede su autorización**.

Bajo tales consideraciones, y como ha quedado evidenciado en párrafos anteriores, **la autoridad administrativa cuenta con la facultad de traducir las denominaciones propuestas para registro de marca, para observar si éstas al ser traducidas al español encuadran dentro de alguna de las hipótesis previstas en el artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial, sin obligarse a registrar el signo propuesto a registro sólo porque en otro país en donde se habla la lengua ya fue registrado éste**, y en la especie, la autoridad demandada dentro de la resolución controvertida en uso de su facultad para traducir al español denominaciones propuestas a registro, realizó la traducción del signo THE TOMATO LOVER´S TOMATO, tal y como se advierte en la Consideración Cuarta de la resolución aludi-

da, visible a folios 26 y 27 del expediente en que se actúa, lo siguiente: "*Atendiendo al caso particular, tenemos que el signo propuesto THE TOMATO LOVER´S TOMATO, no es registrable como marca en virtud de que incurre en las prohibiciones previstas en la consideración que antecede, al resultar ser una denominación que al ser traducida, a nuestro idioma es indicativa del producto a distinguir... porque el público consumidor al estar frente del signo THE TOMATO LOVER´S TOMATO dentro del mercado en el que se venden 'TOMATES', inmediata e irrefutablemente genera la idea inequívoca de que los productos de que se va a hacer, tienen como cualidad o característica ser una especie de tomate con características especiales o diferentes al resto de los tomates que existen en el mercado, así como que cumple con las exigencias de quien es conocedor o gusta mucho de este vegetal.*".

Con independencia de lo anterior, no pasa desapercibido para esta Juzgadora el argumento identificado en el presente Considerando con la letra **A),** visible en la página 21, referente a que se debe de conceder el registro del signo THE TOMATO LOVER´S TOMATO, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial en relación con el artículo 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, puesto que el signo propuesto a registro ya es una marca registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de Canadá; además, que al estar compuesto por palabras en idioma distinto al español y haber sido registradas en el país donde se habla precisamente el idioma en que se encuentra la denominación, es evidente que el signo aludido no es descriptivo, esta Juzgadora lo considera **INFUNDADO**, por los siguientes razonamientos jurídicos:

El artículo 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, dispone lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Como se advierte, el artículo 6 quinquies contempla que toda marca regularmente registrada en el país de origen debe ser registrada como tal en

los demás países que constituyen la Unión, países a los que se les aplica el Convenio, salvo que el signo propuesto encuadre en alguno de los tres supuestos de excepción que establece el aludido numeral, los cuales son los siguientes:

1.- Cuando sean capaces de afectar derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;

2.- Cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o estén formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama; y,

3.- Cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público.

De acuerdo con lo anterior, esta Juzgadora considera que no le asiste la razón a MASTRONARDI PRODUCE LTD, al manifestar que de conformidad con el artículo 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, se le debe de conceder el registro del signo THE TOMATO LOVER´S TOMATO como marca para amparar los productos descritos en la clase 30 internacional, a saber: tomates y productos hechos de tomates, incluyendo salsa, bajo el argumento de que la Oficina de la Propiedad Intelectual en Canadá registró con anterioridad el signo aludido.

Lo anterior es así, ya que si bien la parte actora ofreció en este juicio contencioso administrativo la traducción al español del Título de registro marcario emitido por la Oficina de la Propiedad Intelectual de Canadá sobre la denominación THE TOMATO LOVER´S TOMATO para proteger tomates y los productos hechos con tomates, es decir la salsa, probanza que se encuentra agregada a folios 043 al 046 del

expediente en que se actúa, **también lo es, que en el presente caso se surte la hipótesis de excepción prevista en el numeral 2, contenido en el inciso B, del artículo 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial antes transcrito, toda vez que el signo propuesto a registro THE TOMATO LOVER´S TOMATO para amparar los productos descritos en la clase 30 internacional, a saber: tomates y productos hechos de tomates, incluyendo salsa, describe directamente el producto a proteger e indica la especie de tomate con características especiales al resto de los tomates del mercado, cualidad ubicada dentro de la rama del comercio en que se distribuyen los productos a los cuales se desea aplicar el signo, por lo que se relaciona de forma directa al indicar cualidad, esto es, al tomate; de ahí que también se surtan los supuestos de prohibición contemplados en el artículo 90, fracciones IV y VI de la Ley de Propiedad Industrial y por ende no sea procedente ordenar a la autoridad demandada conceder el registro como marca del signo THE TOMATO LOVER´S TOMATO**.

Asimismo, se estima **INFUNDADO** el argumento consistente en que el signo THE TOMATO LOVER´S TOMATO al estar compuesto por palabras en idioma distinto al español y haber sido registradas en el país donde se habla precisamente el idioma, a saber Canadá, es evidente que el signo aludido no es descriptivo, por los motivos y fundamentos indicados con anterioridad en el presente Considerando.

Robustece lo anterior a la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, misma que se reproduce a continuación:

> "**MARCAS DESCRIPTIVAS.**" [N.E. Se omite transcripción consultable en SJF. Séptima Época. 133-138 Sexta Parte. p. 286]
>
> [...]

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracciones I, II y penúltimo párrafo y 52, fracción III de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

I.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción.

II.- Ha resultado **FUNDADO** el análisis oficioso de la indebida fundamentación de la competencia de la autoridad que emitió la resolución controvertida.

III.- Se declara la nulidad de la resolución controvertida descrita en el Resultando 1° de esta sentencia, en los términos y para los efectos precisados en el **QUINTO Considerando** de la misma.

IV.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de mayo de 2010, por mayoría de **10 votos a favor** de los CC. Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Nora Elizabeth Urby Genel, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Jorge Alberto García Cáceres, Alfredo Salgado Loyo, Silvia Eugenia Díaz Vega, Olga Hernández Espíndola, Juan Manuel Jiménez Illescas, Luis Carballo Balvanera y Francisco Cuevas Godínez y **1 voto con los puntos resolutivos** del C. Magistrado Alejandro Sánchez Hernández.

Fue Ponente en el presente asunto la C. Magistrada Dra. Nora Elizabeth Urby Genel, cuya ponencia se aprobó.

Se formuló el presente engrose el día **15 de junio de 2010**, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, fracción V y 47, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en vigor a partir del día 7 de diciembre de 2007, firma el C. Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-P-SS-392

SEMEJANZA ENTRE SIGNOS.- LA SEMEJANZA FONÉTICA ACTUALIZA EL IMPEDIMENTO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 90, FRACCIÓN XVI DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al realizar el estudio de fondo de una marca respecto de la cual se solicitó su registro, debe analizar si existe confusión de tipo fonético, gráfico e ideológico respecto de otras marcas, a efecto de determinar si es susceptible de registrarse. Por lo que si de su pronunciación se advierte que resulta similar en el golpe de voz a otra marca, se configura la causal de negativa de registro prevista en el artículo 90, fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial, sin que la variación de vocales y consonantes implique una distintividad fonética, puesto que este tipo de confusión se configura cuando las palabras se pronuncian en modo semejante.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 686/09-EPI-01-9/202/10-PL-02-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de mayo de 2010, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María del Consuelo Hernández Márquez.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de septiembre de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

CUARTO.- [...]

De la resolución anteriormente digitalizada se aprecia que la C. Subdirectora Divisional de Signos Distintivos “B” de la Dirección Divisional de Marcas del Institu-

to Mexicano de la Propiedad Industrial, determinó negar el registro marcario del signo "VENZIDAL", con fundamento en el artículo 90 fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial, numeral que es del contenido siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

De conformidad con el anterior precepto legal, no serán registrables como marca, aquella que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en virtud de que quedaría nulo el objeto que tiene por sí mismo la marca, el cual es el de *distinguir* productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, en términos del artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

Se observa que a efecto de establecer la confusión entres ambas marcas, la autoridad precisó que atendería a sus elementos similares y no a aquellos que las distinguen, apoyando su determinación con base en la tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es "***MARCAS, CONFUSIÓN DE, PROCEDIMIENTO PARA DETERMINARLA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS***", por lo cual procedió a analizar el aspecto fonético, determinando que existe confusión al reproducir el signo propuesto "VENZIDAL" con la marca registrada "VINCIDAL", debido al hecho de que la solicitante pretende cambiar la vocal "I" por "E" y la letra "C" por "Z", lo que no hace a su propuesta original y única, dado que a primer golpe de voz, suenan muy similar y por tanto podría pensarse que se trata de la marca ya registrada; que en el caso particular, se actualiza la semejanza fonética, toda vez que la denominación propuesta "VENZIDAL", es muy similar a la denominación del registro que fue citado como anterioridad "VINCIDAL".

De igual forma, la autoridad demandada consideró que el signo propuesto a registro "VENZIDAL" pretendía amparar preparaciones farmacéuticas para uso humano, mismas que se encuentran incluidas en la clase 05 internacional, y puntualizó

que la marca ya registrada "VINCIDAL", protege los productos farmacéuticos indicados en la misma clase 05 internacional.

Finalmente, la autoridad demandada apoyó su determinación con base en lo dispuesto por el artículo 23, fracción I del Reglamento de Insumos para la Salud, puesto que al tratarse de productos farmacéuticos, no puede existir semejanza tal, que haga pensar al consumidor que se trata del mismo producto médico o de alguno muy parecido, por el riesgo para la salud que implica confundir dos fármacos distinguidos por una denominación semejante.

Ahora bien, una vez que quedaron precisados los argumentos vertidos por las partes del presente juicio contencioso administrativo y con ello la **litis** del mismo, la cual tal como quedó precisada en párrafos precedentes, **consiste en determinar si la denominación propuesta a registro de marca "VENZIDAL" amparando la clase 5 internacional que corresponde a: PREPARACIONES FARMACÉUTICAS PARA USO HUMANO, es semejante en grado de confusión respecto de la marca previamente registrada "VINCIDAL", que protege los productos descritos en la clase 05 internacional y por ende, sí se actualiza lo dispuesto por el artículo 90, fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial,** este Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, procede a resolver en los siguientes términos:

Respecto al argumento identificado en el presente Considerando con la letra **A)**, referente a que según la parte actora la autoridad demandada no realizó un estudio exhaustivo de los signos "VENZIDAL" y "VINCIDAL"; además, de que no consideró los argumentos que presentó al desahogar la vista que le fue otorgada en el oficio con número de folio 118,156 de fecha 17 de junio de 2008, esta Juzgadora lo considera **INFUNDADO**, ya que tal como se aprecia en la Consideración Quinta de la resolución controvertida, visible a folios 14 al 19 del expediente principal en que se actúa, se aprecia que la autoridad demandada indicó lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

De la transcripción anterior se advierte, que contrario a las aseveraciones de la parte actora, la autoridad demandada dentro de la resolución controvertida realizó un estudio exhaustivo del signo propuesto a registro "VENZIDAL" para proteger los productos indicados en la clase 05 internacional y de la marca ya registrada "VINCIDAL" que ampara los productos identificados en la misma clase internacional, puesto que indicó los motivos y fundamentos por los cuales consideraba que el signo propuesto a registro era similar en grado de confusión a la marca ya registrada, como lo es la **similitud fonética del signo y la marca citados, la confusión que éstos pudieran causar en el público consumidor; además de comprender productos coincidentes**; asimismo, apoyó su determinación en la doctrina y varios criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación.

Por otra parte la autoridad demandada sostiene que sí consideró los argumentos que Jonson & Johnson hizo valer a través del escrito de contestación al impedimento legal de 17 de junio de 2008; y, resulta necesario hacer mención, que la hoy actora en ningún momento precisa en la presente instancia, qué argumento en específico fue el que la demandada supuestamente omitió analizar y que de haberlo hecho, hubiera cambiado el sentido de la resolución que combate, pues como se aprecia de párrafos anteriores, su afirmación es genérica, lo que conlleva a esta Juzgadora a determinar que con tales argumentos en modo alguno logra desvirtuar la presunción de legalidad de que goza la resolución combatida, en términos del artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

En otro orden de ideas, respecto a los argumentos identificados en el presente Considerando con las letras **B)**, **C)** y **D)**, esta Juzgadora los estima **INFUNDADOS**, por lo siguiente:

La parte actora pretende resaltar las diferencias fonéticas que existen entre el signo propuesto a registro "VENZIDAL" y la marca registrada "VINCIDAL"; en esa razón, a efecto de determinar si una marca es semejante a otra en grado de confusión, esta Juzgadora estima que se deben analizar sus semejanzas y no sus diferencias,

atendiendo a que éstas son las únicas susceptibles de provocar confusión al público consumidor, induciéndolo al error respecto de alguna de ellas.

A efecto de resolver los argumentos expuestos, tanto por la parte actora, como por la autoridad demandada, este Órgano Jurisdiccional, procede a su estudio apoyándose en lo establecido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la Tesis Aislada número I.3o.A.581 A, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo XV-I, Febrero de 1995, página 207, cuyo contenido es el siguiente:

> "**MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSIÓN, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACIÓN O ESPECIE.**" [N.E. Se omite transcripción]

Del contenido de la tesis transcrita, esta Juzgadora observa que de ella se desprende para el caso en concreto, que a efecto de determinar la semejanza entre el signo propuesto a registro y la marca registrada, es necesario atender a las siguientes reglas:

1.- La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto.

2.- La comparación debe hacerse en su conjunto tomando principalmente en cuenta sus semejanzas y no las diferencias.

3.- La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una al lado de la otra.

4.- La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión pueda sufrirla el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria.

Ahora bien, de lo anterior se colige que la confusión puede ser de tipo **fonética**, gráfica y conceptual o ideológica, siendo suficiente con que se actualice alguno de los tres tipos, para determinar que en el caso existe confusión.

Asimismo, se observa que siguiendo las anteriores reglas, la autoridad demandada procedió al estudio de la semejanzas entre el signo propuesto a registro y la marca ya registrada, concluyendo del mismo, que la semejanza que se actualiza entre ellas, es de tipo fonético, atendiendo a que el signo propuesto VENZIDAL, es muy similar a la denominación del registro VINCIDAL, puesto que la circunstancia de que el solicitante cambie la vocal "I" por "E" y la letra "C" por "Z", no hace a su propuesta original y única, siendo que ello es una de las características que deberían de reunir los signos, y dado que el primer golpe de voz de ambas suena muy similar, concluyó que no era procedente autorizar la marca solicitada.

En ese sentido, la confusión de tipo fonética, se configura cuando las palabras en cuestión se pronuncian de modo similar.

En este aspecto, tal y como ha quedado previamente puntualizado, la autoridad demandada en la resolución controvertida determinó que sí existía similitud entre el signo propuesto a marca "VENZIDAL" para amparar los productos de la clase 05 internacional, con la marca ya registrada "VINCIDAL" que también protege los productos de la clase 05 internacional, puesto que el signo propuesto a registro únicamente varió la vocal "I" por la "E" y la letra "C" por la "Z"; sin que tal circunstancia sea controvertida por la hoy parte actora, ya que únicamente argumenta que el registro marcario "VINCIDAL" tiene una pronunciación en forma grave y fuerte por su prefijo "VIN" que no tiene la marca solicitada; sin embargo, tal circunstancia atiende principalmente a las diferencias entre ambas marcas y no así, a sus semejanzas; aunado a que con dicho análisis, la accionante no desvirtúa la determinación de la demandada, en el sentido de que en la marca propuesta a registro, únicamente se cambiaron una vocal y una letra de forma arbitraria, lo cual resulta insuficiente para tratar de obtener una variación fonética, ya que al pronunciarse ambas marcas al primer golpe de voz, suenan muy similar.

En efecto, esta Juzgadora considera que entre el signo de marca solicitada y el registro de marca existente, como lo son "VINCIDAL" y "VENZIDAL", respectivamente, **existe una gran semejanza fonética, toda vez que los vocablos fuertes o**

destacados en la marca existente y el signo solicitado, son semejantes en ese aspecto, ya que suenan de una forma muy similar, sin que con el cambio de la vocal "I" por la "E" y la letra "C" por la "Z", respectivamente, se pueda considerar que cambia la impresión del oyente, respecto a la gran semejanza fonética de las mismas; pues con dicho cambio, no se logra la fuerza distintiva del elemento fonético, el cual resulta indispensable para lograr su originalidad y distintividad, y consecuentemente, su viabilidad para obtener un registro.

En ese orden de ideas, esta Juzgadora determina que ambas palabras, VINCIDAL y VENZIDAL son similares en cuanto a su vocalización, al existir similitud fonética entre ambas, tal y como lo determinó la autoridad demandada en la resolución controvertida, ya que si bien es cierto existe una variación en su forma escrita, como quedó precisado en párrafos precedentes, también lo es, que ello no es suficiente para darle la distintividad que requiere una marca para ser considerada como tal, a efecto de que el público consumidor a la que va dirigida no incurra en error y las confunda o asocie; desvirtuándose la función primordial del registro marcario establecida en el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, numeral que se estima necesario transcribir:

[N.E. Se omite transcripción]

Por lo que hace a los argumentos formulados por la parte actora identificados en el presente Considerando con la letra **E)**, respecto a que en lo conceptual o ideológico el signo VENZIDAL y la marca VINCIDAL no pueden designar la misma idea y por ende no puede haber confusión entre el público consumidor en cuanto a su conceptualización y significado, los mismos resultan **INFUNDADOS**, toda vez que basta con que exista algún tipo de confusión entre el signo solicitado y otro ya autorizado como marca, para determinar que en el caso existe semejanza entre ambos y por ende la actualización de la hipótesis prevista en la fracción IV, del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial; y en la especie, se considera que el signo propuesto VENZIDAL y la marca VINCIDAL **tienen una gran semejanza fonética, toda vez que los vocablos fuertes o destacados en la marca existente y el signo pro-**

puesto son semejantes, ya que suenan de una forma muy similar, sin que con el cambio de la vocal "I" por la "E" y la letra "C" por la "Z", se pueda considerar que cambia la impresión del oyente respecto a la gran semejanza fonética del signo propuesto y la marca aludidos; además que el signo propuesto a registro pretende amparar los mismos productos que protege la marca ya registrada; esto es, la clase 05 internacional, los cuales son: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS; por lo que es de concluirse que los argumentos expuestos en tal sentido por la parte actora, resultan infundados y por tanto en modo alguno logran desvirtuar la presunción de legalidad de que goza la resolución impugnada conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Por otra parte, respecto al argumento identificado en el presente Considerando con la letra **F)**, esta Juzgadora lo considera **INFUNDADO**, pues si bien la parte actora citó varios registros en los que la autoridad demandada resolvió otorgar el registro marcario correspondiente, no obstante tener en común el sufijo "DAL" u otro; también lo es, que la autoridad administrativa debe llevar a cabo el estudio de los signos propuestos para registro de marca, **de manera individual, atendiendo al caso concreto**; es decir, al registro del signo propuesto como lo es el de "VENZIDAL", de cuyo análisis la autoridad administrativa estimó que existía un grado de confusión fonética con una marca ya registrada "VINCIDAL"; además de que la denominación propuesta a registro pretendía amparar los mismos productos que protegía el registro marcario aludido, esto es, la clase 05 internacional consistentes en: productos farmacéuticos; en ese sentido, es inexacto que la responsable esté obligada a registrar las denominaciones propuestas, por el solo hecho de haber registrado otras parecidas a aquéllas; por lo que se estima correcto la determinación de la demandada, al precisar que realizó un examen de forma y fondo completamente individual, sin importar si se han registrado o no, las demás solicitudes existentes.

[N.E. Se omite transcripción]

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 49, 50 y 52, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

I.- La parte actora no probó su acción, en consecuencia,

II.- Se reconoce la legalidad de la resolución controvertida en el presente juicio, misma que ha sido descrita en el Resultando 1° de esta sentencia.

III.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de mayo de 2010, por unanimidad de 11 votos a favor de los CC. Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Nora Elizabeth Urby Genel, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Jorge Alberto García Cáceres, Alejandro Sánchez Hernández, Alfredo Salgado Loyo, Silvia Eugenia Díaz Vega, Olga Hernández Espíndola, Juan Manuel Jiménez Illescas, Luis Carballo Balvanera y Francisco Cuevas Godínez.

Fue Ponente en el presente asunto la C. Magistrada Dra. Nora Elizabeth Urby Genel, cuya ponencia se aprobó.

Se formuló el presente engrose el día **15 de junio de 2010**, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, fracción V y 47, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en vigor a partir del día 7 de diciembre de 2007, firma el C. Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-P-SS-393

ORDEN DE INSPECCIÓN EMITIDA POR LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, CUANDO ÉSTA ES ILEGAL POR AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN DE SU COMPETENCIA TERRITORIAL, PROCEDE DECLARAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN SANCIONADORA, SIN NECESIDAD DE ANALIZAR LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN DEL ACTOR.- Si del análisis oficioso realizado por este Órgano Jurisdiccional, en términos del artículo 238, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, a la competencia de la autoridad emisora de la orden de inspección, se advierte que se omitió la cita de los preceptos que permiten ejercer la facultad de verificación dentro de la circunscripción en que se encuentra domiciliado el demandante; lo procedente es declarar la nulidad tanto de la resolución impugnada como de la recurrida, dado que esta última proviene de actos viciados desde su origen, por lo que no pueden causar ninguna afectación en la esfera jurídica del particular y, por ende, no es necesario el estudio de los argumentos de defensa expresados por la actora pues esa declaratoria deja insubsistentes los actos del procedimiento administrativo de verificación, así como todas sus consecuencias legales.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 125/07-18-01-4/38/10-PL-02-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 16 de junio de 2010, por mayoría de 9 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas.
(Tesis aprobada en sesión de 16 de junio de 2010)

PRECEDENTE:

VI-P-SS-82
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 17683/00-11-03-6/1022/02-PL-05-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 11 de agosto de 2008, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alejandro Sánchez Hernández.- Secretaria: Lic. Sonia Sánchez Flores.
(Tesis aprobada en sesión de 27 de octubre de 2008)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 12. Diciembre 2008. p. 91

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL C. MAGISTRADO JORGE ALBERTO GARCÍA CÁCERES EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 125/07-18-01-4/38/10-PL-02-10

El Magistrado Jorge Alberto García Cáceres, se reservó su derecho para formular voto particular en el presente asunto, el cual se manifiesta en los siguientes términos:

V O T O P A R T I C U L A R

En el Considerando Tercero de la presente sentencia, la mayoría de los Magistrados integrantes del Pleno de la Sala Superior, analizaron de oficio la competencia de la autoridad que levantó la Orden de Inspección número OII-316/06 de fecha 07 de agosto de 2006, actuación antecedente de la resolución impugnada, y declaran que es ilegal, toda vez que no se encuentra debidamente fundada la competencia territorial de la autoridad emisora, ya que para fundar debidamente su competencia territorial, debió señalar el numeral 27, del artículo 1°, del Acuerdo por el que se señala nombre, sede y circunscripción territorial de las Delegaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en las Entidades Federativas.

Discrepo del criterio mayoritario que me he permitido sintetizar, en virtud, que de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sólo puede hacer analizar de oficio, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada o para ordenar o tramitar el procedimiento del que derive y la ausencia total de fundamentación o motivación en dicha resolución, tal y como y se aprecia a continuación:

> "**ARTÍCULO 51.-** Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales:
> "(...)
> "El Tribunal podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada o para ordenar o tramitar el procedimiento del que derive y la ausencia total de fundamentación o motivación en dicha resolución.
> "(...)"

Pero dicho numeral, no faculta a este Tribunal a llevar a cabo el análisis oficioso de la competencia de la autoridad que haya emitido un acto que no forma parte del procedimiento administrativo, del cual deriva la resolución impugnada.

En el caso, se analiza de oficio la competencia de la autoridad que emitió la Orden de Inspección número OII-316/06 de fecha 07 de agosto de 2006, que tiene por objeto verificar las afectaciones y/o daños ocasionados al suelo, flora, fauna y vegetación por fugas y/o derrames de hidrocarburos por la paraestatal PEMEX Exploración y Producción Activo Integral de Producción Poza Rica-Altamira, Área Altamira, en la zona donde se ubica el Pozo Barcodon B-29, en el predio denominado el "Guajolote", señalando que los inspectores actuantes verificarán la veracidad de los hechos, así como verificarán que la Paraestatal deberá apegarse a lo establecido en los resolutivos derivados de dichos estudios para en su caso determinar si dicha paraestatal cumple con lo establecido en diversos preceptos legales de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; Ley General para la

Prevención y Gestión Integral de los Residuos, del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos, Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación de Impacto ambiental y en diversas Normas Oficiales Mexicanas.

Es decir, el Delegado en el Estado de Tamaulipas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ejerció sus facultades de inspección y vigilancia, de conformidad con los artículos entre otros, 161 al 169 del Título Sexto, Capítulo II denominado "Inspección y Vigilancia", de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y 62 al 69 del Título Tercero del Capítulo Décimo Primero, denominado "De las visitas de verificación" de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a efecto de revisar el debido cumplimiento por parte de la actora, a las disposiciones normativas antes citadas, siendo que derivado del procedimiento de inspección se levantó el Acta de Inspección 28-003-047/2006, concluyendo con tal actuación, las facultades de verificación de la autoridad.

Posteriormente, mediante acuerdo de emplazamiento de fecha 14 de septiembre de 2006, se instauró el procedimiento administrativo en el que se determinó las infracciones cometidas y la aplicación de la sanción administrativa correspondiente, otorgándole un plazo de 15 días para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación a los hechos u omisiones circunstanciados en el acta de inspección, y una vez que concluyó dicho término la autoridad emitió la resolución impugnada, imponiéndole una multa en cantidad $90,039.00

Resulta de lo anterior, que la resolución impugnada deriva del procedimiento administrativo instaurado por la autoridad a partir del acuerdo de emplazamiento de fecha 22 de agosto de 2006, siendo que respecto de la autoridad que inició dicho procedimiento, tramitó y dictó la resolución impugnada, este Tribunal se encuentra facultado para analizar de oficio la fundamentación de la autoridad que emitió tales actos de conformidad con el artículo 51 penúltimo párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Pero, la orden de inspección constituye un acto de autoridad emitido en ejercicio de sus facultades de verificación, que no forma parte del procedimiento administrativo del cual deriva la resolución impugnada, por lo que este Tribunal no se encuentra facultado para analizar de oficio la competencia de la autoridad emisora de dicha orden, ya que no se está en los supuestos del artículo 51 invocado.

Por tanto, no es procedente el estudio oficioso de la competencia de la autoridad que emitió la orden de inspección por ser un acto que no forma parte del procedimiento administrativo del cual deriva la resolución impugnada, por tales razones discrepo de lo resuelto por la mayoría de los Magistrados Integrantes del Pleno de la Sala Superior.

Resulta aplicable por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 201/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, página 543, que dispone:

> "**NULIDAD. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ESTÁN FACULTADAS PARA ANALIZAR DE OFICIO NO SÓLO LA INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD QUE EMITIÓ LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, SINO TAMBIÉN LA DE QUIEN ORDENÓ O TRAMITÓ EL PROCEDIMIENTO DEL CUAL DERIVÓ ÉSTA**.- De la interpretación armónica y relacionada del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, se concluye que las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa están facultadas para analizar oficiosamente la incompetencia tanto de la autoridad que emitió la resolución impugnada en juicio, como de la que ordenó o tramitó el procedimiento relativo del cual deriva aquélla. Ello es así, porque la competencia de las autoridades es una cuestión de orden público, como lo establece el penúltimo párrafo del referido precepto, por lo cual no sería factible que de una interpretación estricta y literal se sostuviera que los mencionados órganos sólo están facultados para analizar de oficio la incompetencia de la autoridad emi-

sora de la resolución impugnada, pues en el supuesto de carecer de competencia legal **el funcionario que ordenó o tramitó el procedimiento relativo del cual derivó la resolución definitiva, ésta estaría afectada desde su origen** y, por ende, sería ilegal, al incidir el vicio de incompetencia directamente en la resolución emanada de un procedimiento seguido por autoridad incompetente. Esto es, admitir una postura contraria y sostener que las mencionadas Salas sólo están facultadas para analizar oficiosamente la incompetencia de la autoridad emisora, propiciaría la subsistencia de resoluciones que derivan de un procedimiento viciado en virtud de haberlo iniciado o instruido una autoridad sin competencia legal.

"Contradicción de tesis 184/2004-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 1o. de diciembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Marcia Nava Aguilar.

"Tesis de jurisprudencia 201/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del ocho de diciembre de dos mil cuatro."

MAG. JORGE ALBERTO GARCÍA CÁCERES

LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

VI-P-SS-394

DERECHO DE OPOSICIÓN A LA DISTRIBUCIÓN DE LA OBRA.- AGOTAMIENTO INTERNACIONAL.- Una de las limitantes a los derechos de propiedad intelectual, es el agotamiento del derecho de oposición a la distribución de las obras. Entendiéndose por agotamiento, la limitación de los derechos patrimoniales de los titulares de las obras, dado que con la primera comercialización se extinguen ciertas prerrogativas; como lo es, oponerse al derecho de distribución, debido a que después de la primera venta autorizada por el titular de la obra, el control que puede ejercerse sobre la distribución de ésta se agota. Al respecto, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), ha identificado que una de las modalidades en las que se puede actualizar el agotamiento del derecho de oposición a la distribución de las obras, es el llamado "agotamiento internacional", el cual consiste en que una vez que el titular de los derechos patrimoniales ha puesto su obra en el comercio, pierde cualquier posibilidad de control o intervención sobre el destino de la misma, siendo irrelevante el territorio en el que se haya realizado la venta de la obra, puesto que el titular del derecho intelectual carece de las herramientas legales para intervenir en las subsiguientes etapas de comercio de la obra.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 183/08-EPI-01-6/2727/09-PL-02-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 16 de junio de 2010, por mayoría de 7 votos a favor, 2 votos con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de septiembre de 2010)

LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

VI-P-SS-395

DERECHO DE OPOSICIÓN A LA DISTRIBUCIÓN DE OBRAS.- ES IRRELEVANTE EL TERRITORIO DENTRO DEL CUAL SE EFECTÚE LA PRIMERA VENTA.- El artículo 6 del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derecho de Autor, tratándose del agotamiento del derecho para oponerse a la distribución de las obras, estableció dos condicionantes: 1) Que la distribución se lleve a cabo mediante venta autorizada por el titular del derecho y 2) Que se haya efectuado la primera venta. Ahora bien, toda vez que dicho Tratado dejó al arbitrio de cada Estado contratante el señalamiento de las condiciones en las que se aplicará el agotamiento del derecho de distribución, hay que atender a lo dispuesto por la Ley Federal del Derecho de Autor, la cual en su artículo 27, fracción IV, señala que tratándose de la distribución de obras mediante venta, el derecho de oposición se entenderá agotado efectuada la primera venta. Esto es, la legislación nacional y el Tratado Internacional únicamente establecen como condicionante el que se lleve a cabo la primera venta con autorización del titular del derecho, sin establecer el territorio dentro del cual tenga que darse esa primera venta para tener por agotado el derecho de oposición. Por lo que si se realiza la primera venta con autorización del titular del derecho de una obra en un país extranjero, el titular de los derechos patrimoniales de la obra ya no podrá oponerse a su distribución en México, puesto que con el hecho de haberse realizado la primera venta con su autorización, queda agotado el derecho para oponerse a la distribución de la obra.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 183/08-EPI-01-6/2727/09-PL-02-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 16 de junio de 2010, por mayoría de 7 votos a favor, 2 votos con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de septiembre de 2010)

LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

VI-P-SS-396

DERECHO MORAL Y DERECHO PATRIMONIAL.- DIFERENCIAS.- El artículo 11 de la Ley Federal del Derecho de Autor establece: "el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta Ley, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos, el patrimonial". Entendiéndose por el primero, como aquel que está unido al autor y es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable. Por su parte, el derecho patrimonial, es aquel a través del cual corresponde al autor explotar de manera exclusiva sus obras, o de autorizar a otros a su explotación en cualquier forma, dentro de los límites que establece la Ley Federal del Derecho de Autor, sin menoscabo de la titularidad de los derechos morales.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 183/08-EPI-01-6/2727/09-PL-02-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 16 de junio de 2010, por mayoría de 7 votos a favor, 2 votos con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de septiembre de 2010)

LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

VI-P-SS-397

OPOSICIÓN AL DERECHO DE DISTRIBUCIÓN DE LA OBRA.- DOCTRINA DE LA PRIMERA VENTA.- El Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre derecho de autor, establece en su artículo 6, las

directrices en relación al derecho de distribución, señalando en su inciso (2), que el derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición de la obra mediante venta u otra transferencia de propiedad, se agotará después de la primera venta que se haga con autorización del autor; de lo que se concluye que este agotamiento es una limitante del derecho patrimonial que tiene conferido el autor de la obra. Lo anterior se conoce como "doctrina de la primera venta", en la que se establece que si una obra protegida por un derecho de propiedad intelectual, se comercializa con el consentimiento del titular de ese derecho, éste ya no podrá oponerse a la distribución de la obra, puesto que esta prerrogativa se agota después de la primera venta de la misma.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 183/08-EPI-01-6/2727/09-PL-02-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 16 de junio de 2010, por mayoría de 7 votos a favor, 2 votos con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de septiembre de 2010)

LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

VI-P-SS-398

TRATADO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) SOBRE DERECHO DE AUTOR.- TRATÁNDOSE DEL DERECHO DE DISTRIBUCIÓN, REMITE A LA LEGISLACIÓN INTERNA DE CADA PAÍS.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre derecho de autor, el derecho de distribución consiste, en que los autores de obras literarias y artísticas gocen del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público de sus obras, mediante venta u otra transferencia de propiedad; sin embargo, el derecho de oponerse a su distribución, se agota con la primera venta u otra transferencia de propiedad de la obra que se realice con autorización del autor. Al respecto

el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre derecho de autor, señala que los Estados contratantes determinarán las condiciones, si las hubiere, en las que se aplicará el agotamiento del derecho de distribución; es decir, remite a la legislación de cada país para establecer las formas y condiciones en las que se agotará el derecho de distribución. Estas condiciones se encuentran contenidas en el artículo 27, fracción IV de la Ley Federal del Derecho de Autor, el cual señala que los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir la distribución de la obra, incluyendo la venta u otras formas de transmisión de la propiedad, de los soportes materiales que la contengan, así como cualquier forma de transmisión de uso o explotación, siendo la única condicionante, el que tratándose de distribución mediante venta, este derecho de oposición se entenderá agotado efectuada la primera venta.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 183/08-EPI-01-6/2727/09-PL-02-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 16 de junio de 2010, por mayoría de 7 votos a favor, 2 votos con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de septiembre de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

CUARTO.- [...]

Ahora bien, a juicio de los CC. Magistrados integrantes del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, **los argumentos de la empresa actora son FUNDADOS**, en atención a las siguientes consideraciones de derecho:

De la resolución controvertida en la presente vía, dictada dentro del expediente administrativo número PCV/0003/04 el 03 de diciembre de 2004, misma que fue digitalizada en el Considerando anterior, se advierte que el C. Jefe de Departamento de Control de Procedimiento, en suplencia del Director de Procedimiento contra la Violación del Derecho de Autor del Instituto Nacional del Derecho de Autor, de la Secretaría de Educación Pública, determinó lo siguiente:

• Que la empresa PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V., comete actividades infractoras al distribuir dentro de los Estados Unidos Mexicanos las obras cinematográficas en formato DVD Región 1, sin autorización legal de las titulares de los derechos patrimoniales de las mismas.

• Que resulta improcedente la excepción opuesta por la empresa PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V. inherente a la caducidad del derecho como consecuencia del agotamiento del mismo, en virtud de que el acto de consumación de la venta tuvo lugar fuera del territorio nacional.

• Que de la valoración de los hechos argumentados por las partes y las pruebas ofrecidas, se desprende que el acto de venta consumado de las obras tituladas "The Brotherhood of the Wolf", "Scooby Doo", "Death of Smoochy" y "Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood", tuvo lugar dentro de los Estados Unidos de Norteamérica, y no en territorio nacional.

• Que el acto de venta a que hace referencia la fracción IV, del artículo 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor, no puede entenderse realizado fuera del territorio nacional, por lo que no opera el argumento esgrimido por la empresa PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V. para indicar que el derecho de las empresas quejosas para oponerse a la distribución de las obras cinematográficas, se agotó por el hecho de que éstas habían sido previamente vendidas en territorio de los Estados Unidos de América.

• Que el soporte material en el cual se encuentran realizadas las obras cinematográficas "The Brotherhood of the Wolf", "Scooby Doo", "Death of Smoochy" y

"Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood", corresponden al formato DVD, cuya delimitación geográfica para su distribución se constriñe al territorio de los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, de conformidad con las políticas de mercadotecnia que las empresas quejosas diseñaron para distribuir sus obras a nivel mundial, por lo que dichos formatos tienen como identificación de Región autorizada la conocida como "1", la cual no corresponde a la Región inherente al territorio mexicano, toda vez que la Región aplicable es la conocida como "4".

• Que al quedar acreditada la distribución no autorizada de las obras cinematográficas tituladas "The Brotherhood of the Wolf", "Scooby Doo", "Death of Smoochy" y "Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood", se violenta el legítimo derecho patrimonial de las empresas quejosas COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC., WARNER BROS. ENTERTAINMENT, INC., TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, UNIVERSAL CITY STUDIOS, INC. y DISNEY ENTERPRISES, INC.; por lo que se impuso a la empresa PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V. una sanción administrativa consistente en multa de diez mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

En primer término, **debe precisarse que el concepto de impugnación de la parte actora en análisis, exclusivamente se encauzó a señalar que el derecho de oposición a la distribución de las obras cinematográficas, se agotó con la primera venta que de las mismas se realizó en los Estados Unidos de Norteamérica, y por ello no requería de la autorización de las empresas COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC., WARNER BROS. ENTERTAINMENT, INC., TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, UNIVERSAL CITY STUDIOS, INC. y DISNEY ENTERPRISES, INC. para su distribución en México**.

Ahora bien, una vez determinado lo anterior, se advierte que **la *litis*** en el presente juicio contencioso administrativo consiste en dilucidar si el derecho de oponerse a la distribución en México de las obras cinematográficas tituladas "Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood", "Scooby Doo", "Death of Smoochy" y "The

Brotherhood of the Wolf", se agotó con la primera venta realizada en los Estados Unidos de Norteamérica.

Bajo este orden de ideas, y una vez precisado el contenido de la resolución determinante de la multa recurrida, debe establecerse la diferencia existente entre derecho patrimonial y derecho moral, al controvertirse precisamente una supuesta violación al derecho patrimonial de las empresas COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC., WARNER BROS. ENTERTAINMENT, INC., TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, UNIVERSAL CITY STUDIOS, INC. y DISNEY ENTERPRISES, INC., el que se alega transgredido.

La Ley Federal del Derecho de Autor, establece que derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos, el patrimonial.

Es decir, el derecho de autor se integra por el derecho moral y el derecho patrimonial; entendiéndose por el primero el que está unido al autor y es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable. Por su parte, el derecho patrimonial es aquél a través del cual corresponde al autor el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras, o de autorizar a otros su explotación, en cualquier forma, dentro de los límites que establece la Ley Federal del Derecho de Autor y sin menoscabo de la titularidad de los derechos morales.

Bajo este orden de ideas, debe precisarse que de la resolución recurrida a la cual recayó la resolución negativa ficta controvertida, se advierte que la autoridad emisora de la misma consideró en relación al agotamiento del derecho de oposición, lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

De lo anterior se desprende que la autoridad demandada resolvió en relación al derecho de oposición a la distribución de las obras cinematográficas tituladas "Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood", "Scooby Doo", "Death of Smoochy" y "The Brotherhood of the Wolf", que el acto de venta consumado de las mismas que fue materia del procedimiento administrativo, tuvo lugar dentro de los Estados Unidos de América y no en México, por lo que no se configuraba el supuesto de la fracción IV, del artículo 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor y por ello no se podía considerar agotado el derecho de las empresas COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC., WARNER BROS. ENTERTAINMENT, INC., TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, UNIVERSAL CITY STUDIOS, INC. y DISNEY ENTERPRISES, INC. para oponerse a la distribución de las obras en México.

Ahora bien, la empresa actora PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V. aduce que se transgredió en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 6 del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derecho de Autor.

Al respecto, es de destacarse que en el artículo 133 Constitucional existe mandato expreso en el sentido de que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados por el Presidente de la República con aprobación del Senado, son parte integrante de la Ley Suprema de la Nación, ubicados jerárquicamente por encima de las leyes generales, federales y locales.

La conclusión anterior, tiene sustento en la tesis P. IX/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, del mes de abril de 2007, página 6, cuyo contenido se reproduce a continuación:

"**TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERA-**

LES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL." [N.E. Se omite transcripción]

En conjunción con lo anterior, se invoca el criterio contenido en la tesis P. VIII/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, del mes de abril de 2007, página 6 que precisa:

"**SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y LEY SUPREMA DE LA UNIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.**" [N.E. Se omite transcripción]

En el mismo orden de ideas, es de acudir al contenido de la tesis 2a. LXXXIV/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, del mes de julio de 2007, página 384, del siguiente tenor:

"**TRATADOS INTERNACIONALES. DEBEN PRESUMIRSE APEGADOS AL TEXTO CONSTITUCIONAL HASTA EN TANTO SE DEMUESTRE SU INCONSTITUCIONALIDAD EN LA VÍA PROCEDENTE.**" [N.E. Se omite transcripción]

Además cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 1a./J. 80/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, del mes de octubre de 2004, página 264, que señala:

"**SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO NORMATIVO, PRINCIPIOS DE. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE.**" [N.E. Se omite transcripción]

Bajo esta tesitura, cabe señalar que México es país miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, organismo responsable de fomentar entre los Estados miembros una evolución equilibrada de la legislación, las normas y los procedimientos en materia de propiedad intelectual. Ello incluye un mayor desarrollo de la legislación internacional y los tratados sobre patentes, marcas, diseños industriales, indicaciones geográficas, derecho de autor y derechos conexos.

En virtud de lo anterior, es que a partir del 18 de diciembre de 1997 México firmó el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derecho de Autor, el cual entró en vigor el 06 de marzo de 2002, por lo que sus disposiciones son aplicables en nuestro país, de conformidad con el artículo 133 Constitucional.

Cabe mencionar que el Tratado en comento se creó en atención a que los Estados contratantes deseaban desarrollar y mantener la protección del derecho de autor de forma eficaz y uniforme, al reconocer la necesidad de introducir nuevas normas internacionales y clarificar la interpretación de ciertas normas vigentes, y ante la notable significación de la protección del derecho de autor como incentivo para la creación literaria y artística, y la necesidad de mantener un equilibrio entre los derechos de los autores y los intereses del público en general, en particular en la educación, la investigación y el acceso a la información; fue por ello que los Estados parte del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derecho de Autor, con el interés de proteger los derechos de autor, señalaron como preámbulo del Tratado lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Dicho Tratado, el cual aduce la parte actora dejó de aplicarse, señala en su artículo 6, lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

De la transcripción anterior, se desprende que el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derecho de Autor, establece:

• Que el derecho de distribución consiste en que los autores de obras literarias y artísticas, gozarán del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus obras, mediante venta u otra transferencia de propiedad.

• Que ese derecho de distribución tiene una limitante, en virtud de que **el derecho de oponerse a la distribución de las obras se agota con la primera venta u otra transferencia de propiedad** del original o de un ejemplar de la obra con autorización del autor.

• **Que los Estados contratantes determinarán las condiciones, si las hubiere en las que se aplicará el agotamiento del derecho de distribución, sin que nada en el Tratado afecte esa facultad.**

Es decir, el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derecho de Autor, si bien contempla el agotamiento del derecho de distribución de las obras, también lo es, que deja al arbitrio de cada Estado contratante el señalamiento de las limitantes o condiciones al agotamiento de este derecho; esto es, tratándose de las formas en las que se agota el derecho de distribución, el propio Tratado remite a la legislación interna de cada país.

En este orden de ideas, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa adopta los criterios que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha fijado en relación al tema del agotamiento del derecho de distribución, los cuales se reflejan en el documento publicado en el sitio web del Organismo http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/export/international_exhaustion.htm, intitulado “El agotamiento de los derechos a escala internacional”.

De dicho documento, esta Juzgadora advierte que en relación al concepto del principio de "agotamiento" la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), ha establecido que esta figura se refiere a una de las limitaciones de los derechos de propiedad intelectual. Esto es, una vez que un producto protegido por un derecho de propiedad intelectual ha sido comercializado con el consentimiento del titular de ese derecho, ya no puede ejercer los derechos de propiedad intelectual de la explotación comercial o distribución sobre ese producto, puesto que **éstos finalizan con la primera venta que se haga de la obra, salvo que la legislación nacional disponga específicamente lo contrario**.

De lo anterior, esta Juzgadora colige que el agotamiento del derecho es una limitación a los titulares de los derechos patrimoniales de las obras, dado **que con la primera comercialización se extinguen o agotan ciertas prerrogativas, como lo es oponerse al derecho de distribución, debido a que después de la primera venta de la obra, el control que puede ejercerse sobre la distribución de ésta se agota**; el documento en análisis señala, que esta limitación es conocida también como "**doctrina de la primera venta**".

En ese tenor es que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha identificado que una de las modalidades en las que se puede actualizar el agotamiento del derecho de oposición a la distribución de las obras, es el llamado "agotamiento internacional", el cual consiste en que una vez que el titular de los derechos patrimoniales ha puesto su obra en el comercio, pierde cualquier posibilidad de control o intervención sobre el destino de la misma, **siendo irrelevante el territorio en el que se haya realizado la venta de la obra, puesto que el titular del derecho intelectual carece de las herramientas legales para intervenir en las subsiguientes etapas de comercio de la obra**.

No pasa desapercibido para esta Juzgadora, el hecho de que en la Conferencia Diplomática de 20 de diciembre de 1996 se adoptaron las "Declaraciones concertadas relativas al Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor"; sin embargo, las mismas no se refieren al tema del agotamiento del derecho de oposición a la distribu-

ción de las obras, puesto que en relación al artículo 6 del Tratado únicamente se manifestó lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Tal y como se advierte de las declaraciones concertadas, en relación al artículo 6 del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derecho de Autor, se señaló que las expresiones "copias" y "originales y copias" se refieren a las copias fijadas que se pueden poner en circulación como objetos tangibles; aspecto que no es substancial para resolver la cuestión efectivamente planteada en el presente juicio contencioso administrativo.

Una vez precisado lo anterior, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa colige que, el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derecho de Autor remite a la legislación de cada país para establecer las formas y condiciones en las que se agotará el derecho de distribución de las obras; es decir, remite a lo que al respecto contempla la legislación nacional, específicamente al artículo 27, fracción IV de la Ley Federal del Derecho de Autor, el cual dispone:

[N.E. Se omite transcripción]

Del artículo anterior, se desprende que los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir la distribución de la obra, incluyendo la venta u otras formas de transmisión de la propiedad de los soportes materiales que la contengan, así como cualquier forma de transmisión de uso o explotación. **Cuando la distribución se lleve a cabo mediante venta, este derecho de oposición se entenderá agotado efectuada la primera venta**. Sin que se actualice la excepción contemplada en el artículo 104 de la Ley Federal del Derecho de Autor, toda vez que ésta se refiere a los programas de computación o base de datos.

Es decir, los titulares del derecho patrimonial sobre la obra, tienen la prerrogativa de prohibir o autorizar que se ponga a disposición del público el original o copia de la obra mediante venta, arrendamiento y, en general, cualquier otra forma; sin embargo, el artículo 6 del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derecho de Autor, tratándose del agotamiento del derecho para oponerse a la distribución de la obra, estableció dos condicionantes:

1) Que la distribución se lleve a cabo mediante venta

2) Que se haya efectuado la primera venta.

De lo hasta lo aquí expuesto, se advierte que no existe controversia en el sentido de que la primera venta o comercialización de bienes, trae como consecuencia ineludible la extinción de ciertas prerrogativas, como lo es el oponerse a la distribución de obras, las cuales en el presente asunto consisten en obras cinematográficas en formato DVD; sin embargo, **ni el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derecho de Autor, ni la Ley Federal del Derecho de Autor, señalan el territorio dentro del cual tiene que darse esa primera venta para tener por agotado el derecho de oposición**.

Al respecto, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa concluye que si bien el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derecho de Autor le dio pauta a México a efecto de establecer los criterios a seguir tratándose del agotamiento del derecho de oposición a la distribución de las obras, también lo es, que en la Ley Federal del Derecho de Autor, no se condicionó dicho derecho a que la primera venta se tiene que realizar en territorio nacional para considerar extinto el derecho de oposición a la venta.

Es por ello que, atendiendo al principio general del derecho que reza “donde la ley no distingue, no es dable distinguir”, y en virtud de que la legislación nacional no establece que para considerar agotado el derecho de oposición a la venta del producto, la primera venta deba realizarse en el territorio nacional; esta Juzgadora adquiere

convicción en el sentido de **que como quedó señalado, al ya haberse realizado la primera venta de las obras cinematográficas** tituladas "The Brotherhood of the Wolf", "Scooby Doo", "Death of Smoochy" y "Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood", **el derecho de oposición** por parte de las empresas COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC., WARNER BROS. ENTERTAINMENT, INC., TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, UNIVERSAL CITY STUDIOS, INC. y DISNEY ENTERPRISES, INC., **se ha agotado**.

Lo anterior es así, toda vez que en el Considerando Sexto de la resolución que culmina el procedimiento de declaración administrativa de infracción en materia de derechos de autor número PCV/0003/04, la autoridad demandada señaló expresamente lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

De la anterior transcripción se desprende que **la autoridad demandada, al valorar los hechos y las pruebas ofrecidas por las partes, reconoció que el primer acto de venta de las obras cinematográficas tituladas "The Brotherhood of the Wolf", "Scooby Doo", "Death of Smoochy" y "Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood", se realizó en los Estados Unidos de Norteamérica**, manifestación que es valorada por esta Juzgadora en términos del artículo 46, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dispositivo que es del tenor literal siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Del artículo en comento, se advierte que los hechos afirmados por la autoridad en documentos públicos, harán prueba plena; por lo que si la autoridad demandada reconoció expresamente que el primer acto de venta se realizó en los Estados Unidos de Norteamérica, habiendo concordancia de las partes en relación a ello, es evidente que se agotó el derecho de oposición a la distribución de las obras cinematográficas tituladas "The Brotherhood of the Wolf", "Scooby Doo", "Death of Smoochy" y

"Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood"; por lo que al no existir controversia al respecto, esta Juzgadora considera que la primera venta ya se realizó.

Sin que sea óbice a lo anterior lo resuelto por la autoridad demandada en el sentido de que no se actualiza el supuesto de la fracción IV, del artículo 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor al haberse realizado la venta en los Estados Unidos de Norteamérica, y no en México, puesto que, como se ha expuesto a lo largo del presente Considerando, ni la Ley Federal del Derecho de Autor, ni el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derecho de Autor, establecen delimitación territorial alguna dentro de la cual deba realizarse la primera venta, para tener por agotado el derecho de oposición, por lo que es suficiente que se realice dicha primera venta con autorización del titular de los derechos patrimoniales del derecho de autor en cualquier parte, para tener por agotado el derecho de oposición a la venta respectiva.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 49, 50, 51, fracciones I y IV y 52, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con los numerales 14, fracción XI y 18, fracción X de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007 vigente a partir del día siguiente, se resuelve:

I.- La parte actora acreditó su acción, en consecuencia;

II.- Se declara la nulidad de la resolución recurrida así como de la controvertida en este juicio contencioso administrativo.

III.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de fecha 16 de junio de 2010, por mayoría de 7 votos a favor de la ponencia de los CC. Magistrados Nora Elizabeth Urby Genel, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Jorge Alberto García Cáceres, Alfredo Salgado Loyo,

Silvia Eugenia Díaz Vega, Olga Hernández Espíndola y Juan Manuel Jiménez Illescas; 2 votos con los puntos resolutivos de los CC. Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez y Francisco Cuevas Godínez; y un voto en contra del C. Magistrado Alejandro Sánchez Hernández.

El C. Magistrado Luis Carballo Balvanera se encontraba ausente.

Fue aprobada la ponencia formulada por la C. Magistrada **Nora Elizabeth Urby Genel**.

Se formuló el presente engrose el día 12 de julio de 2010, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, fracción V y 47, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en vigor a partir del día 7 de diciembre de 2007, firma el C. Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-SS-399

INCOMPETENCIA POR MATERIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA PARA CONOCER DEL JUICIO INTERPUESTO EN CONTRA DE DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL EN EJERCICIO DE SU FACULTAD REGLAMENTARIA.- El párrafo segundo del artículo 2º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que procede el juicio contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general diversos a los reglamentos; sin embargo, si se impugna un decreto que fue emitido por el Presidente de la República, con fundamento en la facultad reglamentaria que le confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conteniendo disposiciones de observancia general, que cumplen con los requisitos de generalidad, permanencia y abstracción, estamos en presencia de un acto formalmente administrativo, pero materialmente legislativo, que constituye una expresión de la facultad reglamentaria que le confiere ese precepto constitucional, independientemente de la denominación que se le otorgue; en consecuencia, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, resulta incompetente para conocer del mismo, debiendo sobreseerse, en términos de lo dispuesto en los artículos 2, párrafo segundo y 8 fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; pues además, en términos del artículo 114, fracción I de la Ley de Amparo, es competencia exclusiva de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 12584/06-17-08-9/438/10-PL-06-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 5 de julio de 2010, por mayoría de 8 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Carlos Augusto Vidal Ramírez.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de septiembre de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

TERCERO.- Esta Juzgadora plantea de oficio la procedencia del juicio contencioso administrativo, en términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 8º, fracción II y 9º, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Dichos preceptos establecen lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

En primer lugar es necesario analizar la naturaleza del decreto impugnado, el que se reprodujo en el Considerando Segundo de esta sentencia.

De dicho decreto se observa que fue emitido por el Presidente de la República, con fundamento en los artículos 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28 de la propia Constitución, 7, fracción I de la Ley Federal de Competencia Económica y 31, 33 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Dichos preceptos establecen:

[N.E. Se omite transcripción]

Ahora bien, de dicho acuerdo se observa que fue emitido por el Presidente de la República con los siguientes objetivos, según se desprende del Considerando de dicho Decreto:

- Que conforme a la Ley Federal de Competencia Económica es facultad exclusiva del Ejecutivo Federal determinar mediante decreto cuáles bienes y servicios podrán sujetarse a precios máximos;

- Que el gas licuado de petróleo (gas L.P.) tiene una gran importancia social ya que alrededor del 63% del consumo nacional de gas licuado de petróleo se destina para uso doméstico y se utiliza en aproximadamente el 80% de los hogares mexicanos;

- Que durante la vigencia de los Decretos publicados el 12 de marzo y el 5 de septiembre de 2001, el 4 de septiembre de 2002 y el 27 de febrero de 2003, la venta a usuarios finales del gas licuado de petróleo ha quedado sujeta a precios máximos, lo que ha evitado un detrimento mayor en la economía de las familias mexicanas;

- Que las condiciones de incertidumbre en los mercados energéticos han persistido y se han agravado por los fenómenos meteorológicos, impactando sensiblemente el precio del gas licuado de petróleo;

- Que como resultado del incremento en el precio del gas licuado de petróleo, es necesario continuar moderando el efecto de la volatilidad del precio de este producto con el propósito de preservar la economía de las familias mexicanas;

- Que con el propósito de continuar con el reordenamiento del mercado nacional de gas licuado de petróleo, lograr en la medida de lo posible un equilibrio en los resultados comerciales vinculados con las ventas de primera mano de gas licuado de petróleo y a efecto de evitar la insuficiencia en el abasto del combustible, es responsabilidad del Ejecutivo Federal, tomar las medidas pertinentes para continuar regulando temporalmente los precios máximos de este producto, así como los criterios para su determinación con el propósito de alcanzar, en la medida de lo posible, los objetivos del Decreto del 27 de febrero de 2003;

- Que para cumplir con el compromiso contenido en el punto Tercero del paquete de medidas energéticas anunciado el 12 de septiembre de 2005 (Decálogo Energético) que establece un máximo del 4% en el incremento del gas licuado de petróleo a usuarios finales, se considera conveniente ampliar la vigencia del Decreto por el que se sujeta el gas licuado de petróleo a precios máximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales, publicado el 27 de febrero de 2003 en el Diario

Oficial de la Federación y reformado mediante diversos publicados en el mismo medio informativo los días 10 de julio y 27 de noviembre de 2003, 30 de junio y 24 de diciembre de 2004;

- Que se expide ese decreto con la finalidad de que el gas licuado de petróleo y los servicios involucrados en su entrega, queden sujetos a precios máximos de venta de primera mano y de venta al usuario final, por razones de orden público e interés social, ya que se trata de bienes y servicios necesarios para la economía del país y que utiliza la gran mayoría de la población.

Del análisis anterior se observa que el Decreto de referencia incluye disposiciones de observancia general. Al respecto sobre el concepto de generalidad, como característica esencial de los actos materialmente legislativos, lo indica el maestro Gabino Fraga, en su libro "Derecho Administrativo" Editorial Porrúa, S.A., México, 1982, página 31, lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

De igual forma el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas, señala:

[N.E. Se omite transcripción]

En estas condiciones, por generalidad debe entenderse que el acto jurídico no desaparezca después de su aplicación, de ahí que, además, deba aplicarse cuantas veces se dé el supuesto previsto, sin distinción de persona. En cambio, por particularidad se entiende que el acto jurídico está dirigido a una situación concreta, por lo que, una vez aplicado, se extingue.

Con relación a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado en qué consiste el carácter general de las leyes, en oposición a las leyes privativas, destacando que:

a) Una norma será de carácter general y abstracto cuando no desaparece después de aplicarse a un caso previsto y determinado de antemano, sino que pervive y rige sin consideración de especie o de persona para todos los casos idénticos al que prevén, en tanto no sea abrogada.

b) Por el contrario, será privativa si se refiere a personas individualmente determinadas, atendiendo a criterios subjetivos y por el hecho de que después de aplicarse al caso previsto y determinado de antemano, pierde su vigencia.

Tales principios están contenidos en las jurisprudencias cuyos rubros, textos y datos de identificación son los siguientes:

"**LEYES PRIVATIVAS.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en el S.J.F. Tomo XXVIII. Quinta Época. pág. 1959]

"**LEYES PRIVATIVAS. SU DIFERENCIA CON LAS LEYES ESPECIALES.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en el S.J.F. Tomo VII. Marzo de 1998. Novena Época. Tesis: P./J. 18/98. pág. 7]

En esa virtud, debe estimarse que el Decreto en cuestión contiene disposiciones de observancia general que cumplen con los requisitos de generalidad, permanencia y abstracción, dado que establece que la Secretaría de Energía por conducto de la Comisión Reguladora de Energía y considerando la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá la metodología para la determinación del precio de venta de primera mano del gas licuado de petróleo y la Secretaría de Economía, sin modificar el margen comercial actual, fijará los precios máximos de venta del gas licuado de petróleo al usuario final de manera que el precio mensual promedio ponderado nacional aumente 0.327374% respecto al precio promedio ponderado nacional del mes anterior. En efecto el Artículo Tercero de dicho Decreto establece:

[N.E. Se omite transcripción]

Es decir, en dicho Decreto se establece cómo se fijarán los precios máximos de venta del gas licuado de petróleo al usuario final de manera que el precio mensual promedio ponderado nacional aumente en el porcentaje ahí establecido respecto del precio promedio ponderado nacional del mes anterior.

Por otra parte, es importante señalar que el acto jurídico por el cual el Presidente de la República emite disposiciones de observancia general, con el fin de desarrollar o ejecutar lo dispuesto en una Ley, con independencia de la denominación que se le dé, constituye una expresión de la facultad reglamentaria que le confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la doctrina han señalado que la facultad reglamentaria del titular del Ejecutivo Federal consiste en la realización de actos jurídicos formalmente administrativos pero materialmente legislativos, pues participa de los atributos de la ley, sólo en cuanto a que ambos ordenamientos, ley y reglamento, son de naturaleza impersonal, general, abstracta y permanente.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 287 correspondiente a la Séptima Época, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo I, Parte SCJN, página 268, que dice:

> "**REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS. FACULTAD DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA EXPEDIRLOS. SU NATURALEZA.**"

Asimismo la jurisprudencia 2a./J. 29/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Abril de 1999, página 70, que señala:

> "**FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN.**" [N.E. Se omite transcripción]

En atención a que la jurisprudencia y la doctrina, examinan las funciones del Estado desde dos puntos de vista: formal y material, conviene destacar que el criterio formal atiende al órgano que emite el acto para calificarlo, con independencia de los elementos esenciales del mismo, en tanto que con el criterio material, se alude a las cualidades intrínsecas del acto, prescindiéndose del órgano que lo emite, para conceptuarlo.

Deriva de lo anterior, que el reglamento es un acto formalmente administrativo porque proviene de un órgano de esa naturaleza y desde el punto de vista material es un acto legislativo en razón de que participa de los atributos de la ley, por tanto, un acto jurídico emitido por el Presidente de la República en el ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal, con independencia de la denominación que tenga, entra en el campo de los actos formalmente administrativos que pueden equipararse a un reglamento si tiene por objeto desarrollar, mediante reglas generales, abstractas e impersonales, las normas contenidas en la ley para hacer posible y práctica su aplicación.

En ese orden de ideas, como se puede apreciar del "Decreto que reforma al diverso por el que se sujeta el gas licuado de petróleo a precios máximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales, publicado el 27 de febrero de 2003", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2005, encuentra su fundamento entre otros preceptos legales, en el artículo 89, fracción I Constitucional, ya invocado.

[N.E. Se omite transcripción]

Efectivamente como se advierte de la transcripción anterior el Decreto en cuestión fue emitido por el entonces Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en ejercicio de la facultad reglamentaria que le confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Federal, el cual ya quedó transcrito con antelación.

Por lo que el Decreto aludido fue emitido con la finalidad de que el gas licuado de petróleo y los servicios involucrados de su entrega queden sujetos a precios máxi-

mos de venta de primera mano y de venta al usuario final, por razones de orden público e interés social, al tratarse de bienes y servicios necesarios para la economía del país y que utiliza la gran mayoría de la población y al ser expedido por el Presidente de la República con fundamento en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye una expresión de la facultad reglamentaria que le confiere la Carta Magna, en virtud de que contiene disposiciones de observancia general que ejecutan o desarrollan la Ley Federal de Competencia Económica, dado que su emisión tuvo sustento, además en dicha Ley, concretamente el artículo 7, fracción I y en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículos 31, 33 y 34, preceptos que ya fueron reproducidos con antelación en esta sentencia.

De lo anterior se observa que la emisión del Decreto en cuestión tuvo como finalidad determinar los bienes y servicios que podrán sujetarse a precios, siempre y cuando no haya condiciones de competencia efectiva en el mercado, en el caso, tratándose de determinación del precio de venta de primera mano del gas licuado de petróleo y los precios máximos de venta del gas licuado de petróleo al usuario final, por lo que formalmente constituye un reglamento expedido por el Presidente de la República dado que participa de los atributos de la ley en sentido material.

Lo anterior es así porque a través del citado Decreto el Presidente de la República establece cómo se debe determinar el precio de venta de primera mano del gas licuado de petróleo, sin modificar el margen comercial actual fijará los precios máximos de venta del gas licuado de petróleo al usuario final, con intervención de la Comisión Reguladora de Energía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de Economía. En ese sentido dicho acto jurídico está integrado por un conjunto de disposiciones abstractas e impersonales de observancia general, dado que el ejercicio de tales atribuciones no se agota con su aplicación a un caso concreto, de donde se sigue que se trata de un acto emitido en ejercicio de la facultad reglamentaria prevista en el artículo 89, fracción I, constitucional.

En ese sentido resulta improcedente el juicio en términos de lo dispuesto en los artículos 2, párrafo segundo y 8, fracciones II y IX de la Ley Federal de Procedi-

miento Contencioso Administrativo, en relación con el artículo 114, fracción I de la Ley de Amparo. Los primeros dos preceptos citados ya fueron transcritos con antelación, el artículo 114, fracción I de la Ley de Amparo consigna:

[N.E. Se omite transcripción]

Si bien conforme lo dispuesto en el artículo 2, párrafo segundo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es procedente el juicio contencioso administrativo federal en contra de decretos de carácter general, también lo es que ese mismo párrafo establece como excepción los Reglamentos, en virtud de que dicha competencia se encuentra reservada a los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y toda vez que el Decreto impugnado en el presente juicio, tiene la naturaleza de un Reglamento emitido por el Presidente de la República, en ejercicio de la facultad reglamentaria prevista en el artículo 89, fracción I, constitucional, tal y como ha quedado establecido a lo largo del presente fallo, no obstante su decisión, es evidente la improcedencia del presente juicio, en virtud de que este Tribunal no es competente para conocer de su impugnación y, en consecuencia, con fundamento en el artículo 9, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, resulta procedente sobreseer el presente juicio.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 8, fracción II y 9, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 18, fracción X de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, se resuelve:

R E S O L U T I V O S

I.- Ha resultado fundado el estudio de oficio de la improcedencia del juicio, en consecuencia;

II.- Se sobresee el presente juicio, conforme a los razonamientos expresados en el último considerando de esta sentencia.

III.- NOTIFÍQUESE.- Con copia autorizada de la presente resolución, devuélvase el expediente a la Sala Regional de origen, una vez que se haya resuelto en definitiva y, en su oportunidad, archívese como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 5 de julio de 2010, se aprobó la ponencia por mayoría de ocho votos a favor de los CC. Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Nora Elizabeth Urby Genel, Jorge Alberto García Cáceres, Alejandro Sánchez Hernández, Alfredo Salgado Loyo, Silvia Eugenia Díaz Vega, Juan Manuel Jiménez Illescas y Francisco Cuevas Godínez; y, dos votos en contra de los Magistrados Olga Hernández Espíndola y Luis Carballo Balvanera, quienes se reservaron su derecho a formular voto particular. Estando ausente el Magistrado Manuel Luciano Hallivis Pelayo.

Fue Ponente en este asunto el Magistrado Alfredo Salgado Loyo, cuya ponencia fue aprobada.

Se formuló el presente engrose el 6 de agosto de 2010 y con fundamento en los artículos 30, fracción V, y 47, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, en vigor a partir del día 7 del mismo mes y año, firma el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del propio Tribunal, ante la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-SS-400

CERTIFICADO DE CIRCULACIÓN EUR-1. CUANDO NO SEA ACEPTADO POR MOTIVOS TÉCNICOS, DEBERÁ DEVOLVERSE PARA SU CORRECCIÓN, ANTES DE QUE CONCLUYAN LOS TRES AÑOS DE SU VIGENCIA.- Si en uso de las facultades de comprobación, la autoridad aduanera detecta que el certificado de circulación EUR.1, que en original se acompaña a los pedimentos de importación de que se trate, no se encuentra llenado de conformidad con el Anexo III de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y cuestiones relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 04 de mayo del 2001, actualizándose una causa de rechazo del mencionado certificado por "razones técnicas", se encuentra constreñida a devolverlo para su corrección, siguiendo el procedimiento regulado en el artículo 17 del Acuerdo por el que se dan a conocer las notas explicativas a que se refiere el artículo 39, en relación con el diverso 27 ambos del citado Anexo, así como con el artículo 44 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas en Materia de Certificación de Origen de la referida Decisión, antes de concluidos los tres años con que cuentan las autoridades aduaneras del país de importación para su conservación, pues al no ser así tiene como consecuencia declarar la nulidad de la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo, tramitado ante este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para el efecto de que la demandada, devolviera el referido certificado de circulación; sin embargo, agotado dicho plazo, ello imposibilita jurídicamente al actor, para obtener uno nuevo, lo que implica que al dejarse de acatar la normatividad del Tratado Internacional antes citado, respecto a la devolución del certificado de circulación en comento antes de que concluyan los tres años de que se trata, configura la hipótesis de nulidad tanto de la resolución impugnada, como de la que le haya dado origen, en los términos previstos en la fracción IV, del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Cumplimiento de Ejecutoria dictado en el Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5176/07-11-02-8/1604/08-PL-10-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 de julio 2010, por mayoría de 8 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de septiembre de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

OCTAVO.- [...]

Para resolver el agravio del actor, en relación al procedimiento que debió haber seguido la autoridad antes de negarle el trato arancelario preferencial, esto es, si el establecido en el Código Fiscal de la Federación, o bien el señalado en la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino Sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, es necesario puntualizar lo siguiente:

En el Considerando Sexto de este fallo quedó transcrito el oficio 324-SAT-15-I-26701, de fecha 4 de noviembre de 2004, visible a fojas 109 y 110 de autos, del que se advirtió que, conforme a lo dispuesto, entre otros, por los artículos 42, fracción II y último párrafo y 48 fracciones I, II y III del Código Fiscal de la Federación, el Administrador Local de Auditoría Fiscal de Naucalpan, inició facultades de comprobación, requiriendo al hoy actor, información y documentación, por el periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2002, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras, a que está afecto como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales: cuotas compensatorias, derechos de trámite aduanero, impuesto general de importación, impuesto sobre la renta e

impuesto al valor agregado, así como de las regulaciones y restricciones no arancelarias que correspondan.

Los artículos 42, fracción II y último párrafo y 48 fracciones I, II y III del Código Fiscal de la Federación, vigentes al 4 de noviembre de 2004, fecha en que se emitió el requerimiento de que se trata, disponen:

[N.E. Se omite transcripción]

Derivado de lo anterior, la autoridad demandada, emitió el oficio de observaciones 324-SAT-15-I-8-F-10933, de fecha 28 de abril de 2005, que obra agregado a folios 112 a 115 de autos, mismo que es del tenor literal siguiente:

[N.E. Se omiten imágenes]

De la reproducción que antecede, se desprende que el Administrador Local de Auditoría Fiscal de Naucalpan, hizo saber al actor, que la Administración Central de Contabilidad y Glosa, de la Administración General de Aduanas, le proporcionó copia certificada de los pedimentos de importación 3003-2000186 y 3003-2000187, ambos de 26 de febrero de 2002, factura comercial No. 199 de fecha 30 de noviembre de 2001 y certificado de circulación EUR.1 FI N.A. 384352.

Por lo que se advirtió al contribuyente revisado, hoy actor, en el referido oficio de observaciones que se analiza, que las copias certificadas de los pedimentos de importación definitiva en comento y demás documentación anexa a cada uno de ellos, se encuentran integrados en el expediente abierto a su nombre, el cual obra en los archivos de esa Administración Local de Auditoría Fiscal de Naucalpan.

Precisándose, además, que el **certificado de origen EUR.1 FI N.A. 384352**, no se encuentra debidamente requisitado en los campos 3 y 6, y que en cuanto al campo 8, no se describió la fracción arancelaria por lo menos a nivel partida, **por lo que se considera no válido**, al incumplir con lo señalado en el Decreto por el que se

aprueba el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos por una parte y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra; **la Decisión del Consejo Conjunto de dicho Acuerdo; y la Decisión del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, desconociendo el trato arancelario preferencial**, por el cual importó la mercancía con los pedimentos 3003-2000186 y 3003-2000187, debiendo haber declarado la taza arancelaria del 23% de acuerdo a la Ley de la Tarifa del Impuesto General de Importación, **ya que no presentó el certificado de origen EUR.1 válido**.

Conforme lo anterior y **con fundamento en lo previsto por el artículo 48, fracciones IV y VI del Código Fiscal de la Federación**, el Administrador Local de Auditoría Fiscal de Naucalpan, señaló al contribuyente revisado, hoy actor, que contaba con un plazo de veinte días, a partir del día siguiente al que surtiera efectos la notificación del referido oficio de observaciones, para presentar ante esa Administración, los documentos, libros o registros, pólizas y auxiliares que desvirtuaran los hechos y omisiones asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal.

Bajo ese contexto, resulta evidente que la observación de que se trata al certificado de circulación EUR.1 FI N.A. 384352, no se realizó al momento de llevar a cabo el despacho aduanero de las mercancías con los pedimentos de importación 3003-2000186 y 3003-2000187, de fechas de entrada de 18 de enero y 8 de febrero de 2002, respectivamente y ambos, con fecha de pago del 26 de febrero de 2002, sino que se realizó con motivo de la revisión de gabinete a que fue sujeto el hoy actor, en los términos precisados en el oficio 324-SAT-15-I-26701 de 4 de noviembre de 2004, con el que se dio inicio a las facultades de comprobación de la autoridad, y del que se derivó el oficio 324-SAT-15-I-8-F-10933, por el que se dieron a conocer las observaciones de la citada revisión.

Ahora bien, es incuestionable que tratándose de la aplicación de Tratados Internacionales, como en el caso lo es el Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, suscrito el 8 de diciembre de 1997, aprobado por el Senado de la República el 23 de abril de 1998 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 1998; así como la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, firmada el 23 y 24 de febrero de 2000, aprobada por el Senado el 20 de marzo de ese mismo año y publicada en el Órgano Informativo referido el 6 de junio de 2000, en los que se sustenta la autoridad para considerar no válido el certificado de circulación EUR.1 FI N.A. 384352, los procedimientos previstos en él, deben ser aplicados de forma preferente a los establecidos en la normatividad secundaria.

Lo anterior es así, atento a lo dispuesto por los artículos 26 y 27, contenido en la Parte III, Sección 1: "Observancia de los Tratados", de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, con entrada en vigor para México el 27 de enero de 1980, que a la letra prevé:

[N.E. Se omite transcripción]

De la interpretación conjunta y armónica a lo previsto por los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena, en el caso se tiene, que la Decisión 2/2000, del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, la cual al revestir el carácter de un Tratado Internacional, obliga a las Partes a su cumplimiento, sin que puedan invocar las disposiciones de su derecho Interno.

En ese contexto, le asiste razón al actor, en cuanto a que los procedimientos establecidos en el Anexo III, del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexi-

canos y la Comunidad Económica, son preferentes, dado que dichas disposiciones se encuentran por encima de las leyes generales aplicables en México.

Lo que resulta acorde, con la interpretación que ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 133 Constitucional, respecto a que, si se acepta que las Leyes del Congreso de la Unión, a las que aquél se refiere, corresponden, no a las leyes federales, sino a aquellas que inciden en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano y cuya emisión deriva de cláusulas constitucionales que constriñen al legislador para dictarlas, el principio de "supremacía constitucional" implícito en el texto del artículo en cita, ello se traduce en que la Constitución General de la República, las leyes generales del Congreso de la Unión y los **tratados internacionales** que estén de acuerdo con ella, constituyen la "Ley Suprema de la Unión", esto es, conforman un orden jurídico superior, de carácter nacional, en el cual la Constitución se ubica en la cúspide y, por debajo de ella los **tratados internacionales** y las leyes generales.

El criterio de que se trata, se encuentra contenido en la tesis **P. VIII/2007**, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Abril de 2007, página 6, cuyo texto refiere:

> "**SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y LEY SUPREMA DE LA UNIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.**" [N.E. Se omite transcripción]

De lo que se sigue, que a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios de derecho internacional dispersos en el texto constitucional, así como con las normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, en la medida en que el Estado Mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organiza-

ciones Internacionales, **atendiendo al principio fundamental de derecho internacional consuetudinario "pacta sunt servanda", contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional, en este caso, la Comunidad Europea, que no puede ser desconocida por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Naucalpan, invocando normas de derecho interno**.

Cobra aplicación la tesis **P. IX/2007**, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Abril de 2007, página 6, misma que señala:

> "**TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.**" [N.E. Se omite transcripción]

Por lo tanto, al ser un tratado internacional la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Económica, ésta se encuentra por encima de las leyes generales, y por ende, no puede ser descocida por la autoridad demandada, invocando normas del derecho interno, que no puede estar por encima de las disposiciones del Tratado Internacional en comento.

Bajo ese contexto, se procede al análisis del artículo 31, del Anexo III del referido Tratado Internacional, para establecer si en el caso, la autoridad se encontraba o no, obligada a llevar a cabo el procedimiento establecido en dicho precepto.

[N.E. Se omite transcripción]

El párrafo 1, del artículo transcrito, establece que la verificación de las pruebas de origen se realizará al azar por las autoridades aduaneras del país de importación o cuando tenga dudas razonables, en los siguientes supuestos:

a) De la autenticidad de los documentos;

b) Del carácter originario de los productos, o;

c) De la observancia de los demás requisitos establecidos en el Anexo III del Tratado Internacional de que se trata.

En el párrafo 2, del mismo artículo 31, se establece que, las autoridades aduaneras del país de importación, a efectos de la aplicación a las disposiciones del párrafo 1, estarán a lo siguiente:

I. Devolverán a las autoridades aduaneras o a la autoridad gubernamental competente del país de exportación, los siguientes documentos:

a. El certificado de circulación EUR.1 y la factura;
b. La declaración en factura, si se ha presentado, o;
c. Una copia de estos documentos.

II. Indicarán en su caso, los motivos que justifican la investigación y;

III. Acompañarán a la solicitud de verificación, todos los documentos y la información obtenida que sugieran que los datos recogidos en la prueba de origen son incorrectos.

El párrafo 3, establece que compete el encargo de llevar a cabo la verificación de origen, a las autoridades aduaneras o la autoridad gubernamental, competente del país de exportación, a quienes, además, faculta para:

1. Exigir cualquier tipo de prueba;
2. Inspeccionar la contabilidad del exportador, o;
3. Llevar a cabo cualquier otra comprobación que considere necesaria.

Por su parte el párrafo 4, del precepto internacional que se analiza, dispone que, si las autoridades aduaneras deciden suspender el trato preferencial a los productos, en espera de los resultados de la verificación de origen, ofrecerán al importador la liberación de las mercancías condicionado a cualesquier medida precautoria que consideren necesaria.

El párrafo 5, establece que las autoridades aduaneras, deberán ser informadas lo antes posible, de los resultados de la verificación de origen que hayan solicitado, y que, estos resultados deben indicar claramente, lo siguiente:

a) Si los documentos son auténticos;

b) Si los productos en cuestión, pueden ser considerados como originarios de México o de la Comunidad y;

c) Si reúnen los demás requisitos dispuestos en el referido Anexo III.

Por último, el párrafo 6, del mismo artículo 31, del Anexo III, del Tratado Internacional de cuenta señala, que las autoridades aduaneras que haya solicitado la verificación de origen, podrán negar todo beneficio del régimen preferencial:

➢ Si en caso de duda razonable:

- No reciben una respuesta en el plazo de 10 meses, a partir de la fecha de solicitud de verificación, o;

- Si la respuesta no contiene la información suficiente para determinar la autenticidad del documento de que se trate o el origen real de los productos.

Conforme a lo anterior, esta Juzgadora llega a la convicción de que el agravio que se resuelve, resulta **parcialmente fundado, pero insuficiente** para considerar

ilegal el acto que se controvierte, pues en el caso, no resulta aplicable el procedimiento establecido por el artículo 31 del Anexo III, de la Decisión 2/2000, del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, ya que es incuestionable que la autoridad no está desconociendo el origen de las mercancías, sino que, en uso de sus facultades de comprobación, al llevar a cabo la revisión de gabinete a que sujetó al hoy actor, advirtió que el certificado de circulación EUR.1 FI N.A. 384352, no se encuentra debidamente requisitado, pues en el campo 8, se omitió precisar la fracción arancelaria por lo menos a nivel de partida (4 dígitos) conforme al sistema armonizado, tal como quedó precisado en el Considerando inmediato anterior.

No obstante lo anterior, es substancialmente **fundado** el agravio del actor, resumido por esta Juzgadora, en el punto **3** que anteceden, respecto a que la autoridad dejó de aplicar lo dispuesto en el inciso b), del punto 1, del artículo 17 del Anexo III de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, por una Parte, y la Comunidad Europea, por Otra, en relación con el artículo 17 del Acuerdo por el que se dan a conocer las notas explicativas a que se refiere el artículo 39 del citado Anexo III, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 2000 y 4 de mayo de 2001, que en lo conducente disponen:

[N.E. Se omite transcripción]

De la interpretación armónica a lo previsto por el artículo 17, de la Decisión en comento, se tiene que, se puede expedir un certificado de circulación EUR.1, si se demuestra a satisfacción de las autoridades aduaneras o de las autoridades gubernamentales competentes que se expidió **un certificado que no fue aceptado a la importación por motivos técnicos**.

Por su parte, el artículo 17, del Acuerdo por el que se dan a conocer las notas explicativas a que se refiere el artículo 39 del Anexo III de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto México-Comunidad Europea, establece que:

➢ Podrá rechazarse un certificado de circulación EUR.1 por "razones técnicas", cuando no se encuentre cumplimentado conforme a las disposiciones previstas; incluyéndose dentro de esta categoría, entre otras situaciones, las siguientes:

• Cuando no se haya llenado alguna de las casillas obligatorias del certificado de circulación EUR.1.

• Cuando la clasificación arancelaria de la mercancía al menos al nivel de partida (4 dígitos) no vaya indicada en la casilla 8.

➢ Deberá marcarse el documento con la mención "Documento rechazado", en uno de los idiomas oficiales del Acuerdo, indicando la razón o razones.

➢ **El certificado será devuelto al importador, con el fin de que pueda obtener un nuevo certificado expedido a posteriori**, pudiendo la Administración aduanera conservar eventualmente una fotocopia del certificado rechazado para efectuar una verificación posterior al despacho o si tiene motivos para sospechar fraude.

En párrafos anteriores, se dejó debidamente establecido que la autoridad debe aplicar de forma preferente, las disposiciones del Tratado Internacional de que se trata, a la legislación Nacional, razón por la que, atendiendo a la omisión detectada en el certificado de circulación EUR.1 supracitado, se encontraba obligada a devolver dicho certificado al hoy actor, para que estuviera en aptitud de obtener uno nuevo.

Lo anterior es así, sin que soslaye esta Juzgadora el hecho de que la omisión detectada por la autoridad no se llevó a cabo el 26 de febrero de 2002, esto es, en el momento en que se realizó el despacho aduanero, sino a través de la revisión de gabinete que iniciara el hoy actor, mediante el oficio 324-SAT-15-I-26701 de 4 de noviembre de 2004, sin embargo ello no impedía a la autoridad de forma alguna, cumplir debidamente lo establecido por el Tratado Internacional de que se trata, devolviendo al actor el certificado de circulación EUR.1 FI N.A. 384352, a fin de que obtuviera uno nuevo, conforme lo dispuesto por el punto 1; inciso b) del artículo 17

del Anexo III de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, en relación con lo establecido por el artículo 17, del Acuerdo por el que se dan a conocer las notas explicativas a que se refiere el artículo 29 del Anexo III de la referida Decisión 2/2000.

Máxime, que dicho certificado de circulación fue solicitado por el hoy actor, mediante escrito recibido el 20 de mayo de 2005, en la Oficialía de Partes de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Naucalpan, según se advierte en la resolución recurrida, contenida en el oficio 324-SAT-15-I-6-A-f-20944, fojas 126 y 127 de autos, en la que al efecto se precisa:

[N.E. Se omite transcripción]

De lo transcrito, se evidencia que no obstante que fue la Administración Local de Auditoría Fiscal de Naucalpan, la autoridad que invalida el certificado de circulación supracitado, por no encontrarse debidamente requisitado y a quien el hoy actor le solicita su devolución, en los términos de las disposiciones legales del Tratado Internacional en comento, para subsanar las omisiones detectadas, dicha autoridad niega tal devolución al referir que no es la autoridad facultada para ello, con lo que, no sólo vulnera las defensas del particular, sino también violenta la normatividad internacional de cuenta.

Ello es así, pues conforme a lo previsto por el artículo 27, del Anexo III, de la Decisión de referencia, la conservación de la prueba de origen y los documentos que lo justifican, como lo es, el certificado de circulación EUR.1, tal como lo refiere el actor en el agravio resumido por esta Juzgadora en el punto **4**, tiene una vigencia de tres años, al disponer el artículo en comento, lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

El artículo transcrito, en sus puntos 1 y 2, establece que el exportador que solicite la expedición de un certificado de circulación EUR.1, y el que extienda una declaración en factura, conservará tres años como mínimo, los documentos contemplados en el párrafo 3 del artículo 16, así como los previstos en el párrafo 3, del artículo 20, esto es, toda la documentación apropiada que demuestre el carácter originario de los productos de que se trate, y que se satisfacen todos los demás requisitos del citado anexo III.

En el punto 3, del artículo 27, que se analiza, prevé que las autoridades aduaneras o la autoridad gubernamental competente del país de exportación que expida un certificado de circulación EUR.1, conservarán, durante tres años, como mínimo, el formulario de solicitud referido en el párrafo 2, del artículo 16.

Por último, el punto 4, del mismo precepto, dispone que las autoridades aduaneras del país de importación conservarán durante tres años, como mínimo, los certificados de circulación de mercancía EUR.1 y las declaraciones en factura que le hayan presentado.

Siendo acorde a lo anterior, el artículo 44, del Acuerdo por el que se establecen las Reglas en Materia de Certificación de Origen de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 2000, que dispone:

[N.E. Se omite transcripción]

De lo anterior, se sigue, que tanto el certificado de circulación EUR.1, la declaración en factura, así como toda la documentación apropiada que demuestre el carácter originario de los productos de que se trate, deben conservarse como mínimo tres años.

En ese contexto, se tiene que del certificado de circulación EUR.1 FI N.A. 384352, visible a fojas 224 de autos, cuyo texto quedó debidamente reproducido en el Considerando que antecede, se desprende que en la casilla 11, se anota como fecha de su expedición el 18 de diciembre de 2001, por tanto, la autoridad aduanera Italiana, se encontraba obligada a conservar el referido certificado como mínimo hasta el 18 de diciembre de 2004, por lo que resulta substancialmente **fundado** el agravio del actor, respecto a que, aun cuando esta Juzgadora obligara a la autoridad a devolverle el certificado de circulación de que se trata, para obtener uno nuevo, a la fecha, se encuentra jurídicamente imposibilitado para obtener uno nuevo.

Bajo ese contexto, esta Juzgadora concluye, que es correcta la aseveración del actor en el sentido de que en el caso concreto, al detectarse por parte de la autoridad aduanera que el certificado de circulación EUR.1 FI N.A. 384352, que en original se acompañara a los pedimentos de importación 3003-2000186 y 3003-2000187, ambos de fecha de pago de 26 de febrero de 2001, no se encontraba llenado de conformidad con el Anexo III de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y cuestiones relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, lo anterior atento a que en éste se había omitido llenar, entre otros, el campo 8; se actualiza una causa de rechazo del certificado de circulación por “razones técnicas”, específicamente, el que en dicho documento no se había llenado alguna de las casillas obligatorias del certificado de circulación EUR.1; y por ello es que la citada autoridad se encontraba obligada a seguir el procedimiento regulado en el artículo 17 del Acuerdo por el que se dan a conocer las notas explicativas a que se refiere el artículo 39 del anexo III de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto México-Comunidad Europea, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 04 de mayo del 2001.

Lo que en el caso concreto no fue hecho de esta manera, evidenciando una flagrante contravención a lo dispuesto por el precisado en el párrafo que antecede, en relación con el diverso 27, del Anexo III, de la Decisión supracitada, así como con el artículo 44 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas en Materia de Certificación de Origen de la referida Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo

Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, lo que trasciende a la resolución impugnada, dado que, al pretender determinar un crédito fiscal al demandante, como consecuencia de no desvirtuar los hechos y omisiones que se le dieran a conocer en el oficio de observaciones, a pesar de que dicho incumplimiento fue originado por el hecho de que la ahora actora, al no habérsele devuelto el original del certificado de circulación que acompañó a sus pedimentos de importación y que fue invalidado por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Naucalpan, al llevarse a cabo la revisión de gabinete al que lo sujetó, no se encontró en posibilidades de enviarlo al exportador en el extranjero, para que este último emitiera uno nuevo debidamente requisitado en el que se subsanaran las irregularidades detectadas por la autoridad; es decir, el incumplimiento al requerimiento en comento fue motivado por la propia autoridad aduanera, lo que tendría como consecuencia, declarar la nulidad para el efecto de que la demandada, devolviera el referido certificado de circulación.

Sin embargo, dado el plazo de tres años, como mínimo, en los que la autoridad aduanera debe conservar la documentación concerniente a la comprobación de origen, como lo es al caso el certificado de circulación EUR.1 FI N.A. 384352, cuya expedición data del 18 de diciembre de 2001, a la fecha de emisión de este fallo han transcurrido por demás, lo que, como ya se dijo, imposibilita jurídicamente al actor, para obtener uno nuevo, por lo que es evidente que el haber dejado de acatar la normatividad del Tratado Internacional antes citada, respecto a la devolución del certificado de circulación de que se trata, configura la hipótesis de nulidad tanto de la resolución impugnada, como de la recurrida, prevista en la fracción IV, del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

[...]

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 18, fracción XV, de la Ley Orgánica de este Tribunal, 50, 51 fracciones I, II y IV, y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

I.- En cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo **D.A. 350/2009**, en el Considerando Tercero se **dejó insubsistente la sentencia dictada el 19 de enero de 2009**.

II. Resultó procedente el presente juicio, en el que la parte actora acreditó su pretensión, por lo tanto;

III. Se declara la nulidad lisa y llana de la resolución negativa ficta impugnada, así como de la recurrida, precisadas en el Resultando 1º de este fallo, por los fundamentos y motivos vertidos en los Considerandos Sexto y Octavo del mismo.

IV.- Mediante atento oficio que al efecto se gire al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, por conducto del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, comuníquese la presente sentencia como cumplimiento a su ejecutoria emitida el 12 de noviembre de 2009, dentro del juicio de amparo directo **D.A. 350/2009.**

V.- NOTIFÍQUESE.- Con copia autorizada de la presente resolución, remítase el expediente a la **Segunda Sala Regional Hidalgo México,** una vez que se haya resuelto en definitiva y, en su oportunidad, archívese como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 de julio de 2010, por mayoría de ocho votos a favor de los CC. Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Nora Elizabeth Urby Genel, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Alfredo Salgado Loyo, Silvia Eugenia Díaz Vega, Olga Hernández Espíndola, Luis Carballo Balvanera y Francisco Cuevas Godínez y uno en contra del C. Magistrado Alejandro Sánchez Hernández. Estuvieron ausentes los Magistrados Jorge Alberto García Cáceres y Juan Manuel Jiménez Illescas.

Fue Ponente en el presente asunto el Magistrado Luis Carballo Balvanera, cuya ponencia se aprobó.

Se formuló el presente engrose el 12 de julio de 2010 y con fundamento en los artículos 30, fracción V y 47, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-P-SS-401

OFICIO DE IMPEDIMENTO LEGAL. SU INDEBIDA MOTIVACIÓN NO AFECTA LAS DEFENSAS DEL PARTICULAR CUANDO EN EL JUICIO SE DETERMINA QUE EL SIGNO PROPUESTO ES REGISTRABLE.- Los artículos 122 y 122 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, disponen que una vez efectuado el examen de forma, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial procederá a efectuar el examen de fondo cuya finalidad es verificar si la marca es o no registrable. Se establece también que, en el caso de que se encuentre algún impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades, el Instituto deberá comunicarlo por escrito al solicitante, otorgándole un plazo de dos meses a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas. Asimismo, el Instituto para resolver en definitiva sobre el registro marcario, emite una resolución de conformidad con el artículo 125 segundo párrafo de la propia ley, misma que el interesado podrá controvertir por sus propios motivos y fundamentos en el juicio contencioso administrativo, instancia que brinda la oportunidad para demostrar que el signo propuesto es susceptible de registro, evitando el reenvío al Instituto y la consiguiente dilación del asunto. En este contexto, la indebida motivación del oficio de impedimento legal no afecta las defensas del particular, dado que la autoridad administrativa le concede al interesado el término de ley para manifestar lo que a su derecho convenga, en donde tiene la oportunidad de sustentar su pretensión de registro y si para negarlo, se insiste en la existencia del impedimento, tal denegación del registro será materia de juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, donde en observancia del principio de mayor beneficio, se resolverá si la actora tiene el derecho a obtener el registro que le negó el demandado.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 498/09-EPI-01-8/361/10-PL-04-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 de julio de 2010, por mayoría de 9 votos a favor y 1 voto en

contra.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. Francisco Enrique Valdovinos Elizalde.
(Tesis aprobada en sesión de 27 de septiembre de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

CUARTO.- En términos de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se analizan a continuación los conceptos de anulación de la actora frente a los argumentos de defensa de la autoridad en su debido enlace con las constancias de autos y en particular con las pruebas rendidas de manera oportuna por las partes.

A. De la reproducción digital del concepto de anulación identificado en el escrito de demanda como **PRIMERO**, se desprende que la actora argumentó:

a) Que la demandada transgredió el principio de debido proceso legal ya que por éste se entiende el caso cuando, previo a la emisión del acto de afectación para que esté debidamente fundado y motivado, existe un procedimiento en que el afectado es oído en defensa de sus derechos.

b) Que mediante oficio de impedimento legal, con el código de barras 20080012263 de 16 de enero de 2008, la Coordinadora Departamental de Examen de Marcas “B”, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, comunicó de manera arbitraria y sin fundamento legal: que en términos de lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial, el expediente en trámite “incurre en la prohibición del artículo 90 fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial, toda vez que es una forma tridimensional de uso común que carece de originalidad, ya que su forma es usual y corriente de los productos que pretende distinguir”, sin hacer un pronuncia-

miento completo, claro y abierto respecto de los motivos o causas especiales que tomó en consideración para determinar que se incurría en tal prohibición.

B. La demandada sostuvo la legalidad de la resolución impugnada argumentando que de la simple lectura al oficio de impedimento legal, se pueden advertir las cuestiones de hecho y los fundamentos legales, que de conformidad con el artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial, sostienen la legalidad del comunicado en comento, toda vez que al iniciar el examen de fondo de la solicitud, se vio impedida a continuar con el mismo, de conformidad con la hipótesis contenida en la fracción III, del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

C. Una vez precisados los argumentos de las partes, resulta necesario conocer el contenido del oficio de impedimento legal, con código de barras 20070007853 de fecha 16 de enero de 2008, emitido por la Coordinadora Departamental de Examen de Marcas "B", del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que obra a folio 94 de autos:

[N.E. Se omite imagen]

De la transcripción del oficio folio 20080012263 de 16 de enero de 2008, en el que se comunica a la hoy actora el impedimento legal para continuar con el trámite del registro de marca solicitado, se advierte que la demandada concedió un plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho oficio, para que manifestara lo conducente en relación al impedimento legal encontrado, ello con fundamento en los artículos 122 y 122 bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

En este punto resulta importante señalar que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es la autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, encargada de tramitar y, en su caso, otorgar registros de marcas, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial. El procedimiento para el registro de una marca se encuentra regulado en el Capítulo V, "Del registro de marcas" de la Ley de la Propiedad Industrial, en el que se establecen los requisitos

que debe cumplir una solicitud de registro marcario, así como el trámite que debe seguirse en virtud de la presentación de una solicitud.

El procedimiento de registro de marcas, inicia con la presentación de la solicitud correspondiente, a la que se procederá a efectuar un examen de forma y de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene la Ley de la materia y su reglamento. Si en el examen de forma se observa que la solicitud satisface lo requerido por la Ley, se continuará con el examen de fondo a que se refieren los artículos 122 y 122 bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

Los artículos mencionados establecen lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Los preceptos transcritos disponen que, una vez efectuado el examen de forma, el Instituto procederá a efectuar el examen de fondo cuya finalidad es verificar si la marca es o no registrable.

Se establece también que, en el caso de que se encuentre algún impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades, el Instituto deberá comunicarlo por escrito al solicitante, otorgándole un plazo de dos meses a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas.

Esto es, la finalidad del referido oficio de “impedimento legal”, es precisamente comunicar a quien pretende obtener un derecho de uso exclusivo de un signo distintivo, los elementos encontrados durante el examen de forma, que impiden el otorgamiento del registro de marca en los términos en que fue solicitado.

Ahora bien, el oficio de impedimento legal cuestionado por la hoy actora, señala que al practicarse el examen correspondiente, se encontró que el elemento de carácter tridimensional que integra el signo distintivo, incurre en la prohibición previs-

ta en la fracción III, del artículo 90, de la Ley de la Propiedad Industrial, toda vez que carece de originalidad y es de uso común, contraviniendo así, lo dispuesto en los artículos 88 y 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Por tanto, contrario a lo argumentado por la actora, el oficio 20080012263 de 16 de enero de 2008, a través del cual la Coordinadora Departamental de Examen de Marcas "B" comunicó la existencia de un impedimento legal, se encuentra debidamente fundado y motivado, ya que se citan con precisión los preceptos legales aplicables al caso y, se señalaron, las circunstancias especiales y razones particulares que se tomaron en consideración para la emisión del oficio, existiendo, además, adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables.

Al respecto resulta aplicable la tesis de Jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito que a continuación se transcribe:

> "**FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en el S.J.F. Tomo 64. Abril de 1993. Octava Época. Tesis: VI. 2o. J/248. pág. 43]

Asimismo, debe señalarse que, la demandada concedió a través del oficio en cuestión, un plazo de dos meses a fin de que se manifestara lo que a su derecho conviniese con relación al impedimento comunicado, derecho que fue ejercido mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el 13 de mayo de 2008, con folio de entrada 0092832 y que obra a páginas 95 a 108 de los autos que integran el expediente en el que se actúa.

En el escrito en cuestión, la hoy actora tuvo oportunidad de expresar las razones que consideró pertinentes respecto del impedimento citado, así como de subsanar dicho impedimento.

Por tanto, considerando que en el oficio 20080012263 de fecha 16 de enero de 2008, la demandada señaló las razones por las cuales consideró que existía un impe-

dimento legal para registrar el signo distintivo solicitado, los preceptos legales aplicables y cumplió con la finalidad de comunicar dicho impedimento a la actora, esta Juzgadora considera que el agravio en estudio deviene **infundado**.

Este aspecto ha sido explorado por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual de este Tribunal emitiendo la tesis publicada en la Revista que edita este Tribunal, Sexta Época, Año II, No. 20, Agosto 2009, p. 329, que señala:

"**VI-TASR-EPI-27**

"**PROPIEDAD INDUSTRIAL. LA INDEBIDA MOTIVACIÓN DEL OFICIO DE IMPEDIMENTO LEGAL NO AFECTA LAS DEFENSAS DEL PARTICULAR.**" [N.E. Se omite transcripción]

En razón de lo anterior, y en virtud de que el agravio de la actora resultó infundado, se procede al estudio de los restantes conceptos de impugnación propuestos en el escrito de demanda.

[...]

Por lo expuesto y, con fundamento en los artículos 49, 50 y 52, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en relación con los diversos 14 fracciones XI, XIII, y 18 fracción XV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, vigente a partir del 7 de diciembre de 2007, se resuelve:

I.- La parte actora no probó su pretensión; en consecuencia,

II.- Se reconoce la validez de la resolución impugnada misma que ha quedado detallada en el Resultando Primero de este fallo.

III.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 07 de julio de 2010, por mayoría de nueve votos a favor de los Magistrados, Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Jorge Alberto García Cáceres, Alejandro Sánchez Hernández, Alfredo Salgado Loyo, Olga Hernández Espíndola, Juan Manuel Jiménez Illescas, Luis Carballo Balvanera y Francisco Cuevas Godínez, y uno en contra de la Magistrada Nora Elizabeth Urby Genel, estando ausente la Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega.

Fue Ponente en el presente asunto el Magistrado Jorge Alberto García Cáceres, cuya ponencia se aprobó.

Se elaboró el presente engrose el 18 de agosto de 2010, y con fundamento en los artículos 30, fracción V y 47, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, firma el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos que da fe.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-SS-402

TERCERO INTERESADO.- TIENE ESE CARÁCTER EL TITULAR DEL DERECHO DE AUTOR, POR SER INCOMPATIBLE CON LA PRETENSIÓN DEL ACTOR Y POR ENDE DEBE SER EMPLAZADO A JUICIO.- Atento a lo dispuesto por el artículo 3º, fracción III de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo es tercero interesado en el juicio contencioso administrativo, quien tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante; de manera que si se impugna vía juicio contencioso administrativo ante este Tribunal, una resolución definitiva derivada de un procedimiento en el que se determinó una infracción administrativa en materia de derechos de autor, de conformidad a la Ley Federal de Derechos de Autor, tiene el carácter de tercero interesado el titular de esos derechos. En consecuencia, como lo dispone el artículo 18 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, vinculado a los preceptos fracción VII y 67, segundo párrafo, del mismo ordenamiento, el tercero interesado debe ser emplazado personalmente corriéndole traslado de la demanda y anexos para que se apersone a juicio y manifieste lo que a su derecho convenga en el plazo de ley.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1409/09-EPI-01-7/458/10-PL-06-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 de julio de 2010, por unanimidad de 9 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Carlos Augusto Vidal Ramírez.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de septiembre de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

TERCERO.- [...]

Así, a juicio de los Magistrados que integran el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, se advierte que en la instrucción referida, se incurrió en una violación substancial del procedimiento, que impide su resolución, misma que a continuación se explica:

El artículo 3° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece con precisión quiénes son considerados como parte en el juicio contencioso administrativo, y al efecto señala:

[N.E. Se omite transcripción]

Como se desprende del contenido del precepto legal apenas transcrito, aquel tercero que tenga un interés incompatible con la pretensión del demandante, debe necesariamente ser considerado como parte en el juicio.

Ahora bien, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no contiene una definición del término "tercero", por lo que se hace necesario recurrir al concepto doctrinario, para determinar el alcance de dicho elemento del procedimiento contencioso administrativo.

Así entonces, tenemos que el maestro Cipriano Gómez Lara, en su obra titulada "Teoría General del Proceso"[1], manifiesta respecto del tercero lo siguiente:

> "Frente a esos terceros ajenos a la relación substancial existen otros terceros que no son ajenos a dicha relación, es decir, que su esfera jurídica puede verse afectada por la resolución que en el proceso se dicte. Hay pues ocasiones en que un tercero es llamado a juicio y la relación substancial yacente, es decir, la relación litigiosa, le podrá afectar".

[1] GÓMEZ Lara, Cipriano, "Teoría General del Proceso", p. 233

Por su parte, en el "Diccionario Jurídico Mexicano"[2] editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México se define al tercero interesado como:

> "(...) la persona que sin ser parte en un juicio interviene en él para deducir un derecho propio, para coadyuvar con alguna de las partes si es llamada a ello, o cuando tenga conocimiento de que cualquiera que sea la resolución que se dicte por la autoridad judicial competente pueda causarle algún perjuicio (...) El tercero interesado es, en resumen, un ser litigante que se encuentra obligado en todo tiempo, a prestar auxilio a los tribunales en la averiguación de la verdad (...)".

Así, de las transcripciones que anteceden se desprende que por tercero debe entenderse a "aquella persona que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante", es decir, aquella persona que comparece a juicio a fin de deducir un derecho propio, **o bien, porque pueda ser afectada en su esfera jurídica con la resolución que se dicte en el mismo**.

En el caso particular, la resolución de negativa ficta impugnada en el juicio, deriva de la emitida por el Jefe de Departamento de Control de Procedimientos de la Dirección de Protección contra la violación del derecho de autor del Instituto Nacional del Derecho de Autor de la Secretaría de Educación Pública PVC/002/04, de tres de diciembre de dos mil cuatro, en la cual se impuso a la actora una sanción económica de $468,000.00 equivalente a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal por violación a la Ley Federal del Derecho de Autor, en contra de la cual se interpuso recurso de revisión, que no fue resuelto, actualizándose en consecuencia la señalada negativa ficta mencionada.

Cabe señalar también que el procedimiento administrativo se inició a virtud de que **Columbia Pictures Industries, Inc., Warner Bros. Entertainment Inc., Twen-**

[2] "Diccionario Jurídico Mexicano", 13a. ed., Porrúa, México, 1999, p. 3066

tieth Century Fox Film Corporation, Universal City Studios Inc. y Disney Enterprises, Inc. el cinco de marzo de dos mil cuatro, presentaron un escrito mediante el cual solicitaron el procedimiento de declaración administrativa de infracción en materia de derechos de autor en contra de la hoy actora; esto es, que a tales quejosas la resolución que se adopte en este juicio les repercutirá efectos que inciden en su esfera jurídica, por lo que válidamente debe tenérseles como terceros interesados, toda vez que alegan la presunta comisión de actividad infractora consistente en la distribución no autorizada de las obras cinematográficas formato DVD Región 1 tituladas "XXX" "Scooby Doo", "Death of Smoochy" "The Brotherhood of the Wolf", sin el consentimiento o autorización de las señaladas empresas, así como la distribución de las obras cinematográficas en cuestión en formato DVD, en una región no autorizada para ser comercializada en México; lo que hace su derecho incompatible con el de la actora.

Ahora bien, al tener el carácter de **terceros interesados**, lo cual fue soslayado por la instructora, debieron ser emplazadas a juicio las empresas que manifiestan ser afectadas, y al no haberse procedido de esa manera, es patente la violación substancial de procedimiento en que se incurrió, puesto que con dicha omisión se les privó de ser oídos en el juicio, impidiendo además dicha omisión la resolución del juicio, lo que a su vez conlleva a este Cuerpo Colegiado a ordenar la reposición del procedimiento del juicio contencioso administrativo, a fin de que el C. Magistrado Instructor de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual lleve a cabo las acciones necesarias tendentes a emplazarlos, para que en el plazo de ley se les tenga por apersonados en el mismo, o bien, se tenga por precluído su derecho para hacerlo.

[...]

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria, 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 18, fracción X, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, en vigor a partir del día siguiente al de su publicación, se resuelve:

R E S O L U T I V O S

I.- Por existir una violación substancial en el procedimiento; devuélvanse los autos del presente juicio a la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, para el efecto de que se regularice el procedimiento, en los términos precisados en el Considerando Tercero del presente fallo.

II.- En su momento, y una vez integrado debidamente el expediente, la Sala en cita deberá remitir los autos a esta Sala Superior a efecto de que se resuelva lo que conforme a derecho proceda.

III.- NOTIFÍQUESE.- Con copia autorizada de la presente resolución, devuélvase el expediente a la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 de julio de 2010, se aprobó la ponencia por unanimidad de nueve votos a favor, de los CC. Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Nora Elizabeth Urby Genel, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Alejandro Sánchez Hernández, Alfredo Salgado Loyo, Silvia Eugenia Díaz Vega, Olga Hernández Espíndola, Luis Carballo Balvanera y Francisco Cuevas Godínez. Estando ausentes los Magistrados Jorge Alberto García Cáceres y Juan Manuel Jiménez Illescas.

Fue Ponente en este asunto el Magistrado Alfredo Salgado Loyo, cuya ponencia fue aprobada.

Se formuló el presente engrose el 9 de agosto de 2010 y con fundamento en los artículos 30, fracción V, y 47, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, en vigor a partir del día 7 del mismo mes y año, firma el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del propio Tribunal, ante la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-P-SS-403

FUNCIÓN DISTINTIVA DE UNA MARCA.- FORMA DE CONSTATACIÓN PARA SU REGISTRO.- El artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial dispone, que se entiende por marca, todo signo visible que distingue productos y servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, de lo cual se sigue que una de las funciones esenciales de una marca, sea la distintiva, pues permite al consumidor o usuario, por virtud de la marca, dirigir su atención al producto o servicio considerado en sí mismo, por su distinción frente a otros de su misma especie o clase; característica sustantiva que mediante su registro oficial, confiere al titular de la marca derecho a su uso exclusivo. Para este efecto, el examen de su puntual configuración, se debe realizar relacionando la marca a la clase y especie de los productos y servicios de que se trate, conforme a la clasificación internacional del Arreglo de Niza para el registro de las marcas, según lo disponen el artículo 93 de la citada ley y 59 de su reglamento.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 559/09-EPI-01-6/2455/09-PL-10-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 9 de agosto de 2010, por mayoría de 9 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.
(Tesis aprobada en sesión de 9 de agosto de 2010)

PRECEDENTE:

VI-P-SS-317
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2205/08-EPI-01-9/27/10-PL-10-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 14 de abril de 2010, por mayoría de 9 votos a favor y 1 voto en

contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.
(Tesis aprobada en sesión de 14 de abril de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 30. Junio 2010. p. 82

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-P-SS-404

MARCAS.- DEBE OTORGARSE EL REGISTRO SI NO SE REFIEREN A ELEMENTOS ESENCIALES DEL PRODUCTO O SERVICIOS AL QUE SE PROPONEN DESTINAR, NI A SUS APLICACIONES GENERALES.- El artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, dispone que marca es todo signo que distingue un producto o servicios de otros; función distintiva que consiste en identificar y diferenciar un producto o servicio de otro del mismo género o clase en el mercado. Por su parte, el diverso numeral 90, fracción IV, de la misma ley, establece que no son registrables como marcas las denominaciones descriptivas de los productos o servicios, de donde se sigue que las palabras, aun en idioma extranjero, son registrables como marcas si no se refieren a las cualidades esenciales o predominantes del producto o servicio que denomina, entendiendo que el estudio de la distinción debe efectuarse relacionando la denominación solicitada con los productos o servicios a que se refiere la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas vigente, establecida en virtud del Arreglo de Niza.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 559/09-EPI-01-6/2455/09-PL-10-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 9 de agosto de 2010, por mayoría de 9 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.
(Tesis aprobada en sesión de 9 de agosto de 2010)

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-P-SS-405

MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO.- SI AL TRADUCIRSE NO SON DESCRIPTIVAS DE LOS SERVICIOS QUE PRETENDE PROTEGER DEBEN REGISTRARSE.- El artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece diversos supuestos cuando la marca no es registrable, la fracción IV, previene las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca, quedando incluidas las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción, la fracción VI indica la traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables. Ahora bien, si del análisis que efectúa este Tribunal del conjunto de los elementos de una marca incluyendo su traducción advierte que no es descriptiva de los servicios que pretende proteger, es decir, no son signos o indicaciones que pueden servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, ni tampoco evoca conexión directa con el servicio a proteger, es evidente que dicha marca sí es registrable.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 559/09-EPI-01-6/2455/09-PL-10-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 9 de agosto de 2010, por mayoría de 9 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.
(Tesis aprobada en sesión de 9 de agosto de 2010)

PRECEDENTE:

VI-P-SS-241
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 917/08-EPI-01-4/772/09-PL-07-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de agosto de 2009, por mayoría de 7 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista.
(Tesis aprobada en sesión de 21 de septiembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 25. Enero 2010. p. 7

VI-P-SS-326
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2407/08-EPI-01-2/2725/09-PL-01-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de mayo de 2010, por unanimidad de 9 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretaria: Lic. Magdalena Judith Muñoz Ledo Belmonte.
(Tesis aprobada en sesión de 19 de mayo de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 30. Junio 2010. p. 111

VI-P-SS-361
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 606/09-EPI-01-2/77/10-PL-04-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de mayo de 2010, por mayoría de 9 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. Francisco Enrique Valdovinos Elizalde.
(Tesis aprobada en sesión de 24 de mayo de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 34. Octubre 2010. p. 281

VI-P-SS-362
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1828/08-EPI-01-5/659/10-PL-02-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y

Administrativa, en sesión de 4 de agosto de 2010, por mayoría de 9 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas.
(Tesis aprobada en sesión de 4 de agosto de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 34. Octubre 2010. p. 281

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-P-SS-406

MARCAS INDICATIVAS O DESCRIPTIVAS.- NO SE DA ESE SUPUESTO CUANDO SUS ELEMENTOS NO SON CARACTERÍSTICOS DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE PRETENDE PROTEGER.- El artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial establece en su primer párrafo y fracción IV que no serán registrables como marcas, las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en ese supuesto las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción. La fracción VI de dicho precepto establece que no serán registrables como marca la traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables. Por lo que, si del estudio integral de una marca se advierte que sus elementos no son indicativos ni descriptivos de los productos que pretende proteger en una clase determinada, esto en relación a la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen o la época de producción, además de que la traducción de los elementos de dicha marca no se advierta que son indicativos de los productos a proteger, es evidente que debe concederse el registro de la misma.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 559/09-EPI-01-6/2455/09-PL-10-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y

Administrativa, en sesión de 9 de agosto de 2010, por mayoría de 9 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.
(Tesis aprobada en sesión de 9 de agosto de 2010)

PRECEDENTES:

VI-P-SS-135
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 28876/07-17-01-3/1816/08-PL-07-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 4 de marzo de 2009, por mayoría de 8 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 2 votos en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista.
(Tesis aprobada en sesión de 4 de marzo de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 17. Mayo 2009. p. 116

VI-P-SS-238
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1589/08-EPI-01-7/1449/09-PL-08-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 28 de octubre de 2009, por mayoría de 8 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 28 de octubre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 24. Diciembre 2009. p. 197

VI-P-SS-312
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 992/08-EPI-01-1/2620/09-PL-08-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 14 de abril de 2010, por mayoría de 9 votos a favor, 1

voto con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé.
(Tesis aprobada en sesión de 14 de abril de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 30. Junio 2010. p. 78

VI-P-SS-313
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1938/08-EPI-01-6/2709/09-PL-01-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 17 de mayo de 2010, por mayoría de 8 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. Andrés López Lara.
(Tesis aprobada en sesión de 17 de mayo de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 30. Junio 2010. p. 78

VI-P-SS-314
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2294/08-EPI-01-4/2651/09-PL-01-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de mayo de 2010, por unanimidad de 9 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. Andrés López Lara.
(Tesis aprobada en sesión de 19 de mayo de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 30. Junio 2010. p. 78

VI-P-SS-315
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2407/08-EPI-01-2/2725/09-PL-01-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de mayo de 2010, por unanimidad de 9 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretaria: Lic. Magdalena Judith Muñoz Ledo Belmonte.
(Tesis aprobada en sesión de 19 de mayo de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 30. Junio 2010. p. 78

VI-P-SS-375

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1035/08-EPI-01-9/22/10-PL-08-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 21 de junio de 2010, por mayoría de 7 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé.

(Tesis aprobada en sesión de 21 de junio de 2010)

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 34. Octubre 2010. p. 336

VI-P-SS-376

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 852/09-EPI-01-7/3036/09-PL-07-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de mayo de 2010, por mayoría de 8 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 2 votos en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista.

(Tesis aprobada en sesión de 24 de mayo de 2010)

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 34. Octubre 2010. p. 336

VI-P-SS-377

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1858/08-EPI-01-2/358/10-PL-07-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 16 de junio de 2010, por mayoría de 9 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.

(Tesis aprobada en sesión de 16 de junio de 2010)

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 34. Octubre 2010. p. 336

VI-P-SS-378

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 606/09-EPI-01-2/77/10-PL-04-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de mayo de 2010, por mayoría de 9 votos a favor y 2 votos

en contra.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. Francisco Enrique Valdovinos Elizalde.
(Tesis aprobada en sesión de 24 de mayo de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 34. Octubre 2010. p. 336

VI-P-SS-379
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1828/08-EPI-01-5/659/10-PL-02-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 4 de agosto de 2010, por mayoría de 9 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas.
(Tesis aprobada en sesión de 4 de agosto de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 34. Octubre 2010. p. 336

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-P-SS-407

MARCAS PROPUESTAS A REGISTRO EN IDIOMA EXTRANJERO. NO EXISTE IMPEDIMENTO LEGAL PARA QUE LA AUTORIDAD SUSTENTE SU ESTUDIO EN DEFINICIONES O TRADUCCIONES OBTENIDAS EN LA INTERNET.- Las unidades administrativas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pueden apoyarse, no sólo en las definiciones o traducciones contenidas en un diccionario enciclopédico, para establecer el significado de las palabras que en idioma extranjero componen el signo marcario cuyo registro se pretenda, sino también en las definiciones incluidas a través de las páginas electrónicas, localizadas en Internet, al no existir precepto legal alguno que lo prohíba, mientras se dé a conocer al interesado los datos de localización suficientes con los que pueda cerciorarse de la existencia de tales definiciones o traducciones.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 559/09-EPI-01-6/2455/09-PL-10-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 9 de agosto de 2010, por mayoría de 9 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.
(Tesis aprobada en sesión de 9 de agosto de 2010)

PRECEDENTE:

VI-P-SS-351
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1263/08-EPI-01-6/2333/09-PL-10-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 17 de mayo de 2010, por mayoría de 9 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla.
(Tesis aprobada en sesión de 17 de mayo de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 34. Octubre 2010. p. 211

VI-P-SS-352
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1708/09-EPI-01-3/613/10-PL-09-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 de julio de 2010, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretaria: Lic. Thelma Semíramis Calva García.
(Tesis aprobada en sesión de 7 de julio de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 34. Octubre 2010. p. 211

C O N S I D E R A N D O :

[...]

TERCERO.- [...]

a) La resolución combatida es ilegal, al ser consecuencia de una indebida motivación y fundamentación y de una incongruencia por parte de la demandada, al no haber estudiado la marca de su representada bajo la estricta aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial, pues no analizó el escrito mediante el cual se dio contestación al supuesto impedimento contenido en el oficio 20070418510 de 26 de septiembre de 2007, donde a juicio de la autoridad marcaria, la marca es descriptiva de una característica de los productos a proteger. Advierte que el registro de la marca "**ROCKBAND**" Y DISEÑO, no es indicativa de ninguna característica de los productos que ampara, ni constituye la traducción de palabras no registrables, y es suficientemente distintiva como para constituirse en un registro que dote de derechos de exclusividad a su poderdante.

Señala que las aseveraciones de la demandada consistentes en que la marca "**ROCKBAND**" **Y DISEÑO,** traducida al español, significa "**BANDA de ROCK**", por lo que en su conjunto carece de distintividad por ser indicativa de una característica de los productos que pretende amparar; carecen de sustento, ya que resultan ajenas a los preceptos legales que la propia demandada cita como fundamento de su decisión. Que la fracción IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que una marca no será registrable cuando, considerando el conjunto de sus características, sea descriptiva de los productos que con ella traten de protegerse, lo que no acontece en la especie, pues la marca "**ROCKBAND**" **Y DISEÑO**, solicitada a registro no delinea ni define a los productos para los que fue solicitada, ni en inglés ni traducida al español, pues fue solicitada para proteger: "*Aparatos de entretenimiento para juegos que se usan con una pantalla de televisión o un monitor de video; aparatos de entretenimiento computarizados o electrónicos; aparatos de entretenimiento eléctricos u electrónicos operados con monedas o fichas para usarse con una computadora, televisión o teléfonos móviles; software (programas) de computadora; juegos para computadora; juegos electrónicos; video juegos; juegos en CD-ROM (discos compactos sólo de lectura de memoria); juegos con salida de audio; cartuchos de video juegos para computadoras y máquinas de juegos con*

salida de vídeo; casetes de juegos para computadora; programas (software) de juegos de computadora; cintas grabadas de juegos de computadora; teléfonos móviles y todo tipo de equipos de teléfonos móviles inalámbricos y accesorios para los mismos (no comprendidos en otras clases), incluyendo carátulas para teléfonos móviles; tonos de timbre, música, mp3, gráficas, juegos e imágenes de videos descargables para dispositivos inalámbricos móviles de comunicación; aparatos para la transmisión inalámbrica y dispositivos móviles de comunicación que permiten votar y recibir mensajes de voz y texto con otros dispositivos móviles de comunicación; juegos electrónicos interactivos para usarse con computadoras". Por lo que no es descriptiva de alguno de los productos para los que fue solicitada, en atención a que no hace referencia a ninguna característica inherente de los mismos.

b) Señala que su representada presentó solicitud de registro el 24 de julio de 2007, de la marca mixta "**ROCKBAND**", para amparar diversos productos de la clase 9 internacional, y entre esos productos se encuentran los: *tonos de timbre, música, mp3, gráficas, juegos e imágenes descargables para dispositivos inalámbricos móviles de comunicaciones,* pues su representada está interesada en proteger aplicaciones descargables para dispositivos inalámbricos móviles de comunicaciones, entre las que se encuentran los tonos de timbre para teléfono móvil, los archivos electrónicos en formato mp3, aplicaciones musicales, gráficas, juegos e imágenes de video, a efecto de evitar la existencia de competencia desleal en contra de los derechos subjetivos de su representada, por lo que la autoridad demandada debió haber considerado la totalidad de los productos para los que fue solicitada la marca, contrario a la elección aislada y sin sentido que hizo de algunos productos para determinar si "**ROCKBAND**" y DISEÑO era descriptiva.

Señala que aún considerando válido el estudio aislado e incompleto de la demandada, tampoco es válido pensar que "**ROCKBAND**" Y DISEÑO, describe una característica esencial de las aplicaciones descargables para dispositivos inalámbricos móviles de comunicaciones, pues estas aplicaciones no tienen como parte esencial ser de algún tipo de música en específico, por lo que no pueden ser consideradas como descriptivas de ellos.

Que el público consumidor al que se encuentran dirigidos los productos que se identifican con el signo marcario "**ROCKBAND" Y DISEÑO**, especialmente el sector adolescente, que tiene un conocimiento vasto respecto de dichas aplicaciones para los teléfonos móviles, estando en posibilidades de asociar la marca "**ROCKBAND**" **Y DISEÑO**, con un único origen comercial y en consecuencia, cumplir la función identificadora de las marcas. Que la marca de su representada goza de relevancia, preferencia y posicionamiento en el mercado, lo que se traduce en la identificación plena de la que goza dicho signo marcario.

c) Señala que la prohibición contenida en la fracción VI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, debe ser entendida para aquellos signos marcarios cuya traducción guarde una estrecha e indefectible relación con los productos que se buscan proteger.

Que el error de la demandada radica en que las denominaciones sujetas a estudio deben analizarse de forma global y no seccionada. Que el vocablo "**ROCK**", cuyo significado en español es la abreviación de "rock and roll", de forma aislada no evoca las cualidades o característica de los productos para los que fue solicitada, y el elemento fonético "BAND", traducido como "BANDA" o "GRUPO", tampoco evoca las cualidades o característica de los productos.

Que "BANDA DE ROCK" podría evocar, *a priori*, en la mente del público consumidor productos como discos de música, cintas grabadas, más no videojuegos, software de computadora, aplicaciones descargables para dispositivos inalámbricos móviles de comunicación; juegos electrónicos interactivos para usarse con computadoras, que constituyen algunos de los productos para los que fue solicitada la marca.

d) Señala que dicha marca ya fue registrada en los Estados Unidos de América, no considerándose que fuese descriptiva de los productos, como se desprende de la traducción de la copia simple del certificado de marca expedido por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, lo cual debe ser valorado al tenor del

artículo 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, por lo que la marca debe ser respetada y reconocida por la autoridad demandada, acorde por la normatividad internacional.

Por su parte, la autoridad contesta que los argumentos de la actora son infundados e improcedentes, pues la marca del actor es una construcción artificial y traducción a otro idioma de palabras no registrables, al ser éstas descriptivas de una característica de los servicios que con ella se pretendían amparar, y contrario a lo que alega el demandante, esta autoridad expresó los motivos y razonamientos por los cuales llegó a tal conclusión. Señala que de la fracción IV, del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, se advierte que ROCKBAND es una construcción artificial que en español se percibe como BANDA DE ROCK, y de entre los productos que se pretenden distinguir se comprenden: *servicios de entretenimiento, incluyendo un videojuego interactivo provisto en línea*; por lo que es irrefutable que el signo propuesto describe precisamente que los servicios de entretenimiento que ofrece son una BANDA DE ROCK, o que el video juego se refiere a una BANDA DE ROCK (entretenimiento), que es una cualidad o característica que perfectamente se puede atribuir a dichos servicios, resultando una ventaja indebida el que un sólo agente comercial pueda indicar en forma exclusiva que los servicios que ofrece cuentan con esa cualidad, a la cual expresamente hace referencia la marca citada al rubro, y la sola descripción de que los servicios de entretenimiento que ofrece son una banda de rock, o que el video juego se refiere a una banda de rock, no es suficiente para que el consumidor al que van dirigidos, los distinga de otros productos de su misma especie o clase, de conformidad con el artículo 88 de la ley de la materia.

Manifiesta que al de analizar si un signo es o no registrable, se debe atender no sólo al significado literal de palabras o términos que conforman el signo que se desea registrar, sino también al sentido en el que será usado dentro de la rama del comercio en que serán comercializados los servicios a los cuales desea aplicarse el signo que se propone. De tal manera, que el consumidor de los servicios de entretenimiento, incluyendo un videojuego interactivo provisto en línea, al estar frente a la construcción ROCKBAND, que en español se percibe como BANDA DE ROCK, indudable-

mente concluirá que los servicios de entretenimiento que intenta proteger son una banda de rock, o que el video juego se refiere a una banda de rock, siendo ésta, una cualidad o característica que perfectamente se atribuye a dichos servicios, resultando por ende, una traducción de términos que en su conjunto describen una cualidad o característica de dichos productos. Manifiesta que el examen que se practicó fue en su conjunto.

Señala que el Convenio de París prevé que no pueden ser registradas aquellas marcas que lleguen a considerarse descriptivas por el país donde se pretende su registro, por lo que si se solicita un registro de marca en nuestro país, se debe sujetar el interesado a los requerimientos legales y reglamentarios domésticos, pues con base en lo dispuesto por el Convenio de París para la Protección a la Propiedad Industrial el principio de trato nacional ahí contenido, le hace extensivas las condiciones y formalidades que prevé la ley doméstica para los nacionales de este país para obtener un derecho de monopolio, exigencias tales como la distintividad, de la que carece la marca citada al rubro de conformidad con los fundamentos de derecho y consideraciones lógico jurídicas que obran en el oficio controvertido.

En los alegatos, la actora básicamente reitera sus argumentos planteados en la demanda.

Mientras que la autoridad en sus alegatos señaló que el acto impugnado fue emitido con la correcta fundamentación legal y motivación, por lo cual procede declarar la validez de la resolución sujeta a nulidad.

Previo a determinar si resultan o no fundados los argumentos planteados por las partes en el presente juicio contencioso administrativo, se considera pertinente identificar primero las características del signo propuesto, consistente en "**ROCKBAND" Y DISEÑO**, como sigue:

[N.E. Se omite imagen]

Efectuado lo anterior, a continuación se procede a precisar que la litis se constriñe a determinar si la marca que se solicitó registrar es descriptiva del producto que se pretende distinguir por el actor, perteneciente a la clase 9 internacional en la que se solicita su registro; y si tal signo es distintivo de los productos que pretende amparar; en el entendido que de ser descriptiva y no distintiva, ésta no sería susceptible de ser registrada al actualizarse los supuestos de prohibición previstos por las fracciones IV y VI, del artículo 90, de la Ley de la Propiedad Industrial.

Este Pleno de la Sala Superior, considera que los argumentos a estudio resultan ser **parcialmente fundados y suficientes para declarar la nulidad de la resolución impugnada**, como a continuación se explica.

En primer término es necesario precisar la definición legal de lo que se entiende por "***marca***", conforme se establece en el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, que acota:

[N.E. Se omite transcripción]

Del precepto legal antes citado, se desprende que la marca constituye todo signo que se utilice para distinguir un producto o servicios de otros, y su principal función es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo. En ese sentido, la función de distinción del signo marcario, consiste precisamente en el objetivo de identificar y diferenciar un producto o servicio de otro del mismo género o clase en el mercado, cuya protección del derecho al uso de forma exclusiva se encuentra además supeditada a que se realice el registro correspondiente ante la autoridad competente, esto en términos del artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra señala:

[N.E. Se omite transcripción]

Es necesario puntualizar que la marca es el signo que distingue una mercancía o servicio, lo cual permitirá al público consumidor realizar una consciente y reflexio-

nada selección de los satisfactores más adeudados para afrontar sus necesidades. Es decir, la marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros, y su principal función es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo.

Tiene aplicación a lo anterior, la siguiente tesis de jurisprudencia, que ha sustentado el siguiente criterio referente a las características de una marca.

"**MARCA, CARACTERÍSTICAS DE LA.**" [N.E: Se omite transcripción, consultable en S.J.F. Tomo III. Apéndice de 1995. Séptima Época. pág. 503]

Asimismo, el signo marcario es el vehículo que utilizan las empresas para competir legalmente en los mercados, y desempeña un papel primordial en la comercialización de las mercancías y servicios. El incremento en el número y variedad de bienes y servicios que genera el aparato productivo, fortalece la presencia de las marcas en el mercado, porque ellas constituyen el único instrumento que tiene a su disposición el consumidor para identificarlos y poder seleccionar el de su preferencia.

Ahora bien, dentro de las principales funciones que pueden atribuirse a un signo marcario de acuerdo a la doctrina son:

a) Distinción;
b) Protección;
c) Garantía de calidad; y,
d) Propaganda.

La función de distinción deriva de la esencia misma de la marca, por cuanto que su objeto está destinado a *distinguir* un producto de otro de la misma clase o especie. De acuerdo con tal función, es a través de la marca que el producto o servicio considerado en sí mismo se distingue frente a otros de su misma clase o especie y por virtud de ella, es que el consumidor dirige normalmente su atención.

La función de protección de la marca tiende a identificar a su titular frente a sus presuntos concurrentes, protegiendo simultáneamente al público consumidor de los usurpadores, dado que es en virtud de la marca que el comprador reclama el producto o servicio.

La función de garantía de calidad, radica, como su nombre lo indica, en la calidad del producto o servicio, y esto es lo que intrínsecamente lo califica, ya que el comprador busca, al adquirir un producto, una calidad determinada, con independencia de la empresa que lo fabrica, cuyo conocimiento es algo secundario para el consumidor.

Finalmente, la función de propaganda constituye un reclamo del producto, es decir, la marca es el único nexo que existe entre el consumidor del producto o el servicio y su titular, y es a través de la misma que su titular, recogerá los beneficios o no, de su aceptación por parte del público consumidor, de tal manera que la marca es lo que el comprador ha de pedir y es lo que el titular de la misma tratará que pida, y para ello la buena calidad del producto o servicio debe ir acompañada de una publicidad adecuada, dado que serían vanos los esfuerzos para lograr la mejor calidad si el producto o servicio es desconocido.

Ahora bien, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten; sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad correspondiente, según así lo establece el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial.

En esa tesitura, para que cualquier signo pueda constituir una marca, es necesario que reúna dos requisitos, a saber:

a) Que tenga una eficacia distintiva; y

b) Que sea jurídicamente tutelable como marca.

El primero de estos requisitos surge de la propia conceptuación y funciones de la marca a registrar, ya que el signo marcario está destinado a **identificar** un producto o un servicio entre los productos y servicios de la misma especie o clase ofrecidos por los competidores.

La demanda de un producto o servicio es posible mediante la **fuerza distintiva** que tiene la marca; de ahí, la capacidad que tienen los consumidores de poder realizar directamente sus propias elecciones y adquirir el producto o servicio preferido; además permite al productor o prestador de servicios acudir al proceso de identificación en el resultado material de su trabajo.

Luego entonces, la marca debe ser distintiva por sí misma, es decir, que debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, además esa distinción debe ser objetiva o real.

Ahora bien, se debe atender a lo previsto por el artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial, que establece de manera general el tipo de signos que podrán constituir una marca registrada, el cual prescribe lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

El anterior precepto establece los diversos "**signos**" que pueden constituir una marca, de los que destacan para efectos del asunto en estudio, los previstos en la fracción I, entre ellos, las denominaciones, las cuales deben ser distintivas a fin de identificar a los productos o servicios que amparen.

En ese tenor, cabe señalar que en términos generales las marcas se clasifican en:

Nominativas: las que permiten identificar un producto mediante una palabra o un conjunto de palabras; éstas deben distinguirse fonéticamente y pueden consistir en nombres propios de las personas físicas, susceptibles de registrarse como marca, siempre que no se confundan con una registrada o un nombre

comercial publicado, pudiendo carecer de significado y ser caprichosas o de fantasía, tenerlo y ser sugestivas de la naturaleza y características del producto o servicio o, incluso, resultar arbitrarias;
Innominadas: son figuras que cumplen con la función de una marca y pueden reconocerse en forma visual pero no fonéticamente, ya que su peculiaridad consiste en ser símbolos, diseños, logotipos o cualquier elemento figurativo que sea distintivo;
Mixtas: combinan palabras con elementos figurativos que muestran a la marca como un elemento o como un conjunto distintivo; y,
Tridimensionales: aquellas que protegen los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos en sí mismos, si éstos resultan distintivos de otros de su misma especie o clase.

En la especie, la autoridad demandada negó en la resolución impugnada, el registro del signo marcario nominativo "**ROCKBAND**" **Y DISEÑO**, solicitado por la actora, bajo los argumentos de que el conjunto de las características del signo no es distintivo y resulta ser descriptivo de los productos que se tratan de proteger, actualizándose las hipótesis previstas en las fracciones IV y VI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, numeral que establece categóricamente todos aquellos signos que legalmente no pueden ser registrados como marcas, y el cual prescribe lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Del precepto legal precisado, se desprende que existen diversos supuestos que no son registrables como marcas dentro de los cuales se encuentran las denominaciones que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de proteger como marca.

Ahora bien, la autoridad al resolver sostiene "*que la denominación que constituye el signo propuesto a registro al conservar el significado que naturalmente le corresponde, contribuye a una clara y directa alusión al describir característica de*

algunos de los productos a distinguir," y que "*sólo describe cualidades de algunos de los productos que desea ofrecer, lo cual, no es una característica específica y exclusiva que ofrezca la solicitante.*".

A lo cual, el agravio del actor sostiene que es todo lo contrario el propósito que lo anima, ya que es esta distintividad del signo, lo que se persigue.

Es fundado el agravio relativo, dado que el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, pone en relieve que el signo que define a la marca es todo aquel que sea visible y que tenga la cualidad de distinguir al producto o servicio de que se trate, de otros de su misma especie o clase en el mercado; en tanto que el diverso numeral 89, fracción I, de la propia ley, alude a que pueden constituir una marca, entre otros signos, las denominaciones suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.

En cambio, la autoridad erróneamente sostiene que dicha denominación no es un signo a través del cual se identifique los productos que pretende amparar, pues para que pueda registrarse una marca, debe poseer algún otro elemento fonético que le aporte la distintividad necesaria para considerarse como novedosa, original, singular y especial, y la marca "ROCKBAND" (BANDA DE ROCK), no lo es, porque carece de algún elemento fonético para poderla individualizar respecto a otras de su misma clase, en razón de que sólo describe cualidades de algunos de los productos que desea ofrecer, lo cual, no es una característica específica y exclusiva que ofrezca la solicitante; tales argumentos son infundados, dado que no describe ninguna cualidad de los productos bajo los cuales se pretende registrar.

Ahora bien, atendiendo al texto de la fracción IV, del artículo 90 en comento, se desprende que para determinar si una denominación, figura o forma tridimensional es susceptible de registrarse, debe atenderse al conjunto de sus características para identificar si el signo distintivo es o no descriptivo de los productos o servicios que proteja o pretenda proteger.

En tal sentido, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, define la palabra "descriptivo" de la siguiente forma:

[N.E. Se omite transcripción]

Por tanto, descriptivo "*se aplica a lo que describe*" y por describir se entiende "*delinear, dibujar, figurar una cosa representándola de modo que dé cabal idea de ella, ya sea refiriéndose o explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias o bien dando una idea general de sus partes o propiedades*".

Así, por una marca descriptiva debe entenderse aquella que se presenta de tal manera que da cabal idea de los productos o servicios que ampara, ya sea refiriéndose o explicando en qué consiste el producto o servicio, o bien sus cualidades o circunstancias dando una idea general de sus partes o propiedades.

Sirve de apoyo a lo anterior los siguientes criterios del Poder Judicial de la Federación, que a continuación se citan:

"**MARCAS. DESCRIPTIVIDAD.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en S.J.F. Tomo III. Segunda Parte. Enero a Junio de 1989. Octava Época. pág. 454]

"**MARCAS DESCRIPTIVAS.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en S.J.F. Tomo III. apéndice 2000. Séptima Época. pág. 476]

Es por ello que, para efecto de determinar si se actualiza la prohibición prevista en las fracciones IV y VI, del artículo 90 en comento, y en consecuencia si la marca solicitada por la actora es susceptible de registro, enseguida se procede a efectuar el análisis en torno a la distintividad y descriptividad de la marca, atendiendo a los productos que la referida marca pretende proteger, dado que la reserva del derecho exclusivo que confiere todo registro marcario debe atañer a todos los productos o servicios que se pretenden amparar con la misma.

En consecuencia, toda vez que, las partes están contestes, la autoridad en la resolución impugnada y la actora en su demanda, en que la ahora demandante presentó **solicitud del registro marcario** ante la autoridad demandada el 24 de julio de 2007, el cual dio origen a la resolución impugnada en el presente juicio, y donde se señaló que los productos a proteger por la marca solicitada "**ROCKBAND**" **Y DISEÑO**, que pretende proteger productos comprendidos en la clase 09 internacional, a saber: "*Aparatos de entretenimiento para juegos que se usan con una pantalla de televisión o un monitor de video; aparatos de entretenimiento computarizados o electrónicos; aparatos de entretenimiento eléctricos u electrónicos operados con monedas o fichas para usarse con una computadora, televisión o teléfonos móviles; software (programas) de computadora; juegos para computadora; juegos electrónicos; video juegos; juegos en CD-ROM (discos compactos sólo de lectura de memoria); juegos con salida de audio; cartuchos de video juegos para computadoras y máquinas de juegos con salida de vídeo; casetes de juegos para computadora; programas (software) de juegos de computadora; cintas grabadas de juegos de computadora; teléfonos móviles y todo tipo de equipos de teléfonos móviles inalámbricos y accesorios para los mismos (no comprendidos en otras clases), incluyendo carátulas para teléfonos móviles; tonos de timbre, música, mp3, gráficas, juegos e imágenes de videos descargables para dispositivos inalámbricos móviles de comunicación; aparatos para la transmisión inalámbrica y dispositivos móviles de comunicación que permiten votar y recibir mensajes de voz y texto con otros dispositivos móviles de comunicación; juegos electrónicos interactivos para usarse con computadoras*".

Para entender lo relativo a la clasificación de los productos es necesario transcribir el contenido de los artículos 93 de la Ley de la Propiedad Industrial y 59 de su Reglamento, los cuales son del tenor siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Del primero de los numerales transcritos, se desprende que las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados, según la clasifica-

ción que establezca el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, previéndose en este último ordenamiento, específicamente en el precepto transcrito en segundo término, que *la clasificación de productos y servicios en comento, será conforme a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas vigente, establecida en virtud del Arreglo de Niza*; del mismo Reglamento se advierte que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicará en su Gaceta las clases de productos y servicios comprendidos en la clasificación vigente, así como la lista alfabética de los mismos, con indicación de la clase en que esté comprendido cada producto o servicio.

Adicionalmente, el precepto del Reglamento en comento, establece que los productos o servicios incluidos en la lista alfabética de la clasificación se considerarán especies, y que dicha lista no es limitativa sino enunciativa; es decir, que no obstante que en la clase respectiva no se encuentre expresamente listado o señalado un producto o servicio, esto no implica necesariamente que no pueda ser incluido en la misma, quedando en todo caso a cargo del Instituto, el establecer los criterios de interpretación y aplicación de la clasificación en comento.

Así, de conformidad con el contenido de la Gaceta Extraordinaria del citado Instituto, número 52, puesta en circulación el 15 de diciembre de 2005,[1] mediante la cual se publicó la Novena Edición de la Clasificación de Niza,[2] Parte I, en vigor a partir del 01 de enero de 2007, aplicable a la fecha de la solicitud del actor, esto es, aplicable al 24 de julio de 2007, en lo que respecta a la clase 9, ésta se describe en los siguientes términos:

[N.E. Se omite transcripción]

---

[1] http://siga.impi.gob.mx/work/sites/SIGA/gacetas/historico/extraordinarios/MA_EX_2006_12_052.pdf

[2] ARREGLO DE NIZA RELATIVO A LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS, del 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979.

La Lista de Productos, publicada en el mismo medio de comunicación oficial, que contiene los productos y servicios que corresponden a la clase 9, señala lo siguiente en los rubros que interesan:

[N.E. Se omite transcripción]

Por su parte, los productos que pretende amparar el hoy actor, son: "*Aparatos de entretenimiento para juegos que se usan con una pantalla de televisión o un monitor de video; aparatos de entretenimiento computarizados o electrónicos; aparatos de entretenimiento eléctricos u electrónicos operados con monedas o fichas para usarse con una computadora, televisión o teléfonos móviles; software (programas) de computadora; juegos para computadora; juegos electrónicos; video juegos; juegos en CD-ROM (discos compactos sólo de lectura de memoria); juegos con salida de audio; cartuchos de video juegos para computadoras y máquinas de juegos con salida de vídeo; casetes de juegos para computadora; programas (software) de juegos de computadora; cintas grabadas de juegos de computadora; teléfonos móviles y todo tipo de equipos de teléfonos móviles inalámbricos y accesorios para los mismos (no comprendidos en otras clases), incluyendo carátulas para teléfonos móviles; tonos de timbre, música, mp3, gráficas, juegos e imágenes de videos descargables para dispositivos inalámbricos móviles de comunicación; aparatos para la transmisión inalámbrica y dispositivos móviles de comunicación que permiten votar y recibir mensajes de voz y texto con otros dispositivos móviles de comunicación; juegos electrónicos interactivos para usarse con computadoras*".

En relación a lo anteriormente precisado y de lo señalado por la actora en su demanda, se advierte que la descripción de los productos que pretende proteger la actora, efectivamente son pertenecientes a la clasificación 9, del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

Así las cosas, de la valoración de los argumentos y elementos probatorios aportados por las partes en el juicio, esta Juzgadora estima que la marca solicitada

"**ROCKBAND" Y DISEÑO** no es descriptiva ni indicativa de los productos que pretende proteger, y que a saber son aquellos incluidos en la clase 9 internacional.

Por tanto, a efecto de determinar lo infundado de las manifestaciones vertidas por la autoridad demandada para negar el registro solicitado por la actora, esta Juzgadora estima pertinente hacer el estudio de la marca propuesta a registro, considerando los elementos que la conforman, dentro de su conjunto.

Al respecto, del contenido del artículo 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, previamente citado en el presente fallo, se advierte que el legislador estableció un método de valoración para identificar la función distintiva o no distintiva de las denominaciones, figuras, formas tridimensionales en oraciones que pretendan registrarse como marcas; método que permite relacionar a éstas con uno de los caracteres esenciales que toda marca debe reunir, como lo es su condición distintiva.

Este método consiste en considerar que ***una marca está desprovista de tal requisito de distintividad, si la denominación, figura u oración respectiva, es o no descriptiva de los productos o de los servicios*** *que traten de protegerse como marca, para lo cual deberá valorarse ésta, considerando el conjunto de sus características; como lo designa el artículo 90, fracción IV, de la ley de la materia.*

Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis:

"**MARCAS COMPUESTAS. DESCRIPTIVIDAD Y CONDICIÓN DISTINTIVA DE LAS.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en S.J.F. Tomo VIII. Septiembre de 1991.Octava Época. pág. 155]

También sirve de apoyo el precedente VI-P-SS-238, sostenido por este Pleno de la Sala Superior, que aparece publicado en la Revista número 24, Sexta Época, Año II, diciembre de 2009, páginas 197 y 198, que acota:

"**MARCAS INDICATIVAS O DESCRIPTIVAS.- NO SE DA ESE SUPUESTO CUANDO SUS ELEMENTOS NO SON CARACTERÍSTICOS DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE PRETENDE PROTEGER**." [N.E. Se omite transcripción]

El registro solicitado se conforma de la denominación "**ROCKBAND**", que al corresponder al idioma inglés, esta Juzgadora atenderá a la fuente de información utilizada en la resolución impugnada por la autoridad demandada, http://www.wordreference.com.es/Traducciónd, al no existir en el caso controversia respecto a su traducción al idioma español, por lo que a continuación se reproduce la traducción contenida en dicha resolución:

[N.E. Se omite transcripción]

También sirve de apoyo el precedente VI-P-SS-226, sostenido por este Pleno de la Sala Superior, que aparece publicado en la Revista número 24, Sexta Época, Año II, diciembre de 2009, página 150, que acota:

"**MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO.- SI AL TRADUCIRSE NO SON DESCRIPTIVAS DE LOS SERVICIOS QUE PRETENDE PROTEGER DEBEN REGISTRARSE.**" [N.E. Se omite transcripción]

En párrafos precedentes se transcribió la clase 9 de la Clasificación Internacional de los productos, entre los cuales se encuentran los "*aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes*"; y en la Nota Explicativa se señala que esta clase comprende en particular, entre otros, "*los aparatos recreativos que se utilicen con pantallas de visualización externas o monitores; los programas informáticos y el software de todo tipo, independientemente de su soporte de grabación o medio de difusión, incluido el software grabado en soportes magnéticos o descargado de una red informática remota.*".

De igual manera, en párrafos anteriores se precisaron los productos que pretende amparar la actora con el registro solicitado, y que se presentan en forma de lista, a continuación:

- Aparatos de entretenimiento:
  - para juegos que se usan con una pantalla de televisión o un monitor de video;
  - computarizados o electrónicos;
  - eléctricos u electrónicos operados con monedas o fichas para usarse con una computadora, televisión o teléfonos móviles;
- software (programas) de computadora;
- juegos para computadora;
- juegos electrónicos;
- video juegos;
- juegos en CD-ROM (discos compactos sólo de lectura de memoria);
- juegos con salida de audio;
- cartuchos de video juegos para computadoras y máquinas de juegos con salida de vídeo;
- casetes de juegos para computadora;
- programas (software) de juegos de computadora;
- cintas grabadas de juegos de computadora;
- teléfonos móviles y todo tipo de equipos de teléfonos móviles inalámbricos y accesorios para los mismos (no comprendidos en otras clases), incluyendo carátulas para teléfonos móviles; tonos de timbre, música, mp3, gráficas, juegos e imágenes de videos descargables para dispositivos inalámbricos móviles de comunicación;
- aparatos para la transmisión inalámbrica y dispositivos móviles de comunicación que permiten votar y recibir mensajes de voz y texto con otros dispositivos móviles de comunicación;
- juegos electrónicos interactivos para usarse con computadoras.

De donde se desprende, en primer lugar, que los productos contenidos en el listado anterior, son de los referidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional.

En segundo lugar, si la traducción de la marca solicitada es "**BANDA DE ROCK**", esta Juzgadora, al analizarla **en su conjunto**, estima que no resulta descriptiva de los productos que se pretenden amparar en la clase 9 internacional, pues "**ROCKBAND**" no es descriptiva de los aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, ni de los aparatos recreativos que se utilicen con pantallas de visualización externas o monitores; los programas informáticos y el software de todo tipo, independientemente de su soporte de grabación o medio de difusión, incluido el software grabado en soportes magnéticos o descargado de una red informática remota. Esto es, si tal denominación hace referencia al tipo de música que en tales aparatos pueda ver y/o escuchar el público consumidor, esta circunstancia no se traduce en una violación a la ley, pues no es descriptiva de aparatos, programas y software alguno, pues la clase 9 no se refiere a los aparatos, programas y software de rock, sino que se refiere en términos generales a diversos aparatos, programas informáticos y software, por lo que si un particular se interesa por distinguir a los mismos con un género musical, adicionando el registro que se pretende con la combinación de la palabra **BAND**, resulta ser que tal combinación no está prohibida por la ley, pues el término analizado en su conjunto hace suficientemente distintiva a la marca de los productos que pretende proteger.

De lo anterior se desprende que el registro solicitado del signo nominativo "**ROCKBAND**" Y DISEÑO o "**BANDA DE ROCK**", de una parte, es suficientemente distintivo como expresión para identificar y diferenciar a los productos de la clase y especie solicitados; y de la otra, que la misma no es descriptiva de la finalidad de los mismos, pues únicamente evoca el tipo de música, pero no describe a las cualidades o características de los aparatos, programas y software.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis con número de registro 231,557, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito,

publicada en el Semanario Judicial de la Federación I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988, Octava Época, página: 403, que establece:

"**MARCAS, NATURALEZA DE LAS.**" [N.E. Se omite transcripción]

En ese sentido, el signo distintivo "**ROCKBAND**" Y DISEÑO no es ni siquiera evocativo de los productos relacionados con la clase y especie en la que se pretende registrar la marca, o sea, la clase 9 internacional, menos aún es descriptiva de los mismos, por lo que no puede argumentarse impedimento para su registro como marca, ya que ese supuesto no está contemplado en las fracciones IV y VI, del artículo 90, de la Ley de la Propiedad Industrial, que fue el fundamento en el que la autoridad demandada se apoyó para negar el registro de dicho signo distintivo.

Asimismo, la autoridad refiere concretamente en la resolución impugnada, que la denominación **ROCKBAND** se concibe como **BANDA DE ROCK**, por lo que dicha frase no resulta registrable, dado que aplicada a productos tales como tonos de timbre, música, y mp3, que entre otros pretende proteger la marca propuesta, describe que los mismos tienen la característica de que la música que de ellos se emite, es de una BANDA DE ROCK.

Tal aseveración no es correcta, toda vez que, contrario a lo señalado por la autoridad, la expresión **BANDA DE ROCK** no es descriptiva de los tonos de timbre, música y mp3, pues el registro solicitado no es "timbre de rock", "música de rock" o "mp3 de rock", en cuyo caso sí sería descriptiva; sin embargo, la expresión **BANDA DE ROCK**, se encuentra compuesta de dos conceptos; así, el primero tiene acepciones semánticas multívocas, entre ellas la referente a un grupo de personas; y el segundo, alude a un ritmo de baile y música determinados; de ahí que tal expresión no describe el servicio que se pretende aplicar, concretamente los tonos de timbre, música y mp3; dado que ninguna relación directa tiene dicho signo con tales productos, ni aún con sus aplicaciones que, en todos los casos, se establecen de manera general y nunca específica a un determinado y concreto tipo de música.

Conforme a lo antes apuntado, es de concluirse que el signo "**ROCKBAND**" Y DISEÑO sólo puede causar en el público consumidor una idea del objeto que se puede proteger con dicha denominación, más no una descripción acertada del producto que se protege, por lo que si el signo propuesto a registro se trata de una denominación no descriptiva, resulta procedente su registro al no existir impedimento legal para ello.

Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía e interpretada en sentido contrario, la tesis l.4o.A.659 A, del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, con número de registro 168438, de fecha noviembre de 2008, página 1375, cuyo texto es:

> "**PROPIEDAD INDUSTRIAL. LOS ADJETIVOS (INCLUYENDO PALABRAS EXTRANJERAS) SON REGISTRABLES COMO MARCAS SI NO SE REFIEREN A LAS CUALIDADES ESENCIALES O PREDOMINANTES DEL PRODUCTO O SERVICIO QUE DENOMINAN, AL TRATARSE DE SIGNOS EVOCATIVOS O SUGESTIVOS.**" [N.E. Se omite transcripción]

Es importante señalar que la limitación de registrar una marca descriptiva del servicio o producto que se pretenda amparar, tiene como finalidad que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante frente a sus competidores, pues éstos estarían impedidos de utilizar dicha denominación.

En tal sentido, se considera que cualquiera que se dedique a la producción o comercialización de los aparatos de entretenimiento, software y programas de computadora; no va a sufrir una desventaja frente al hoy actor por no poder utilizar la denominación "**ROCKBAND" Y DISEÑO**, para identificar sus productos, pues se insiste, dicha denominación no es de modo innegable y categórico la descripción específica y exclusiva de los productos amparados, por lo que resulta que la naturaleza descriptiva alegada por la autoridad demandada deviene en inexistente.

Ahora bien, en relación con lo previsto por la fracción VI, del artículo 90, de la Ley de la Propiedad Industrial, también invocada por la autoridad demandada para sustentar su determinación, esta Juzgadora estima que tampoco se actualiza, toda vez que, al no ser descriptiva la denominación propuesta como signo distintivo de los productos que pretende proporcionar, la misma es registrable y por lo tanto el hecho de que la denominación este compuesta por elementos en idioma extranjero, esto es, en inglés, no la hace improcedente.

Bajo este contexto, le asiste la razón a la actora en cuanto a que la citada marca no se ubica en los supuestos previstos en las fracciones IV y VI, del artículo 90, de la Ley de la Propiedad Industrial, pues el signo "**ROCKBAND**" **Y DISEÑO** no es descriptivo de los productos que pretende proteger con la misma.

[...]

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 49, 50, 51, fracción IV, y 52, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; se resuelve:

I.- La parte actora probó parcialmente los extremos de su pretensión, en consecuencia;

II.- Se **DECLARA LA NULIDAD** de la resolución impugnada, la cual ha quedado precisada en el resultando primero, **PARA LOS EFECTOS** ordenados en el Considerando Cuarto de este fallo.

III.- NOTIFÍQUESE.- Con copia autorizada de la presente resolución, devuélvase el expediente a la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, y en su oportunidad, archívese como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión celebrada el día 09 de agosto de 2010, por

mayoría de 9 votos a favor de los CC. Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Jorge Alberto García Cáceres, Alejandro Sánchez Hernández, Alfredo Salgado Loyo, Silvia Eugenia Díaz Vega, Olga Hernández Espíndola, Juan Manuel Jiménez Illescas y Magistrado Presidente Francisco Cuevas Godínez; 1 con los puntos resolutivos de la C. Magistrada Nora Elizabeth Urby Genel; y 1 en contra del C. Magistrado Luis Carballo Balvanera.

El C. Magistrado Luis Carballo Balvanera se reservó su derecho para formular voto particular.

Fue Ponente en el presente asunto el C. Magistrado Luis Carballo Balvanera, cuya ponencia se aprobó.

Se formuló el presente engrose el día 1° de septiembre de 2010 y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, fracción V y 47 fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Secretaria General de Acuerdos, Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, quien da fe.

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

VI-P-SS-408

COMPETENCIA DEL PLENO DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SE SURTE CUANDO LA DEMANDANTE FORMULA CONCEPTO DE IMPUGNACIÓN RESPECTO DE LA VIOLACIÓN AL CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.- De conformidad con el artículo 18, fracción XV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada el 6 de diciembre de 2007, el Pleno de la Sala Superior es competente para resolver los juicios en los casos en que, la resolución impugnada se encuentre fundada en un tratado o acuerdo internacional en materia comercial suscrito por México, o bien, cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos. Por lo tanto, si la parte actora en su demanda argumenta esencialmente respecto de la violación o falta de aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, tratado internacional suscrito por México para facilitar que los nacionales obtengan la protección en otros países para sus creaciones intelectuales mediante derechos de propiedad intelectual, se surte plenamente la competencia del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que la formulación de conceptos de impugnación respecto de la violación de un tratado comercial como infringido por la autoridad demandada en la resolución impugnada, es suficiente para que el asunto en cuestión sea de la competencia exclusiva del Pleno de la Sala Superior, quien deberá conocer del juicio respectivo.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 968/09-EPI-01-7/433/10-PL-07-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 9 de agosto de 2010, por mayoría de 7 votos a favor y 4 votos en

contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 9 de agosto de 2010)

PRECEDENTES:

VI-P-SS-231
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1741/08-EPI-01-2/1118/09-PL-07-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de octubre de 2009, por mayoría de 7 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 2 votos en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 19 de octubre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 24. Diciembre 2009. p. 187

VI-P-SS-309
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 992/08-EPI-01-1/2620/09-PL-08-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 14 de abril de 2010, por mayoría de 9 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé.
(Tesis aprobada en sesión de 14 de abril de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 30. Junio 2010. p. 76

VI-P-SS-310
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1637/08-EPI-01-4/39/10-PL-07-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 14 de abril de 2010, por mayoría de 8 votos a favor, 2 voto con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 14 de abril de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 30. Junio 2010. p. 76

VI-P-SS-311

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 214/09-EPI-01-7/239/10-PL-07-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 12 de mayo de 2010, por mayoría de 9 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.

(Tesis aprobada en sesión de 12 de mayo de 2010)

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 30. Junio 2010. p. 76

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

VI-P-SS-409

MANUALES DE PROCEDIMIENTOS. SON OBLIGATORIOS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS A QUIENES VAN DIRIGIDOS.- Los manuales de procedimientos tienen como finalidad optimizar el funcionamiento de las unidades administrativas de una dependencia, estableciendo los procedimientos a seguir para una eficaz prestación del servicio público, lo que desde luego implica obligatoriedad para aquellos servidores públicos que, de acuerdo a sus funciones, deben acatarlos. Ello es así, porque si bien no tienen la calidad de leyes o reglamentos, no dejan de ser obligatorios, cuenta habida de que constituyen un catálogo de normas o reglas obligatorias para los servidores públicos, los que no tienen posibilidad alguna de no acatarlas bajo el pretexto de que no se trata de leyes, pues aun cuando no vinculan ni trascienden a terceros particulares, esto no es óbice para que su cumplimiento sea inexcusable, por contener normas de aplicación interna, de carácter obligatorio y general, cuya observancia no se deja al libre arbitrio del servidor público a quien van dirigidos, máxime cuando en el juicio contencioso administrativo el servidor público afirma conocer el manual que se le aplicó.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 968/09-EPI-01-7/433/10-PL-07-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 9 de agosto de 2010, por mayoría de 7 votos a favor y 4 votos en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 9 de agosto de 2010)

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-P-SS-410

MARCAS EVOCATIVAS. DEFINICIÓN.- Las marcas evocativas son aquellas que derivan de la palabra "evocar" y que implican traer a la memoria o a la imaginación una cosa, sin embargo, esto no es sinónimo del término describir, que se refiere a la representación cabal detallada y por partes de una cosa. De tal suerte que las marcas evocativas son las denominaciones y/o figuras visibles formadas de un modo arbitrario que despiertan la idea del producto o sugieren su naturaleza o utilidad, y que se relacionan de un modo remoto o indirecto con la mercancía, sin embargo, no conducen directa e inmediatamente a una característica del producto o servicio, pues designan o describen una cualidad o elemento secundario o accidental de éstos. En consecuencia, en los casos de las marcas evocativas, se exige al consumidor, para llegar a comprender qué producto o servicio ampara la marca, hacer uso de la imaginación y del entendimiento, generándose un proceso deductivo entre la marca y el producto o servicio; es por ello, que los signos evocativos son registrables marcariamente, pues no cumplen con el requisito de descriptividad previsto por el artículo 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 968/09-EPI-01-7/433/10-PL-07-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 9 de agosto de 2010, por mayoría de 7 votos a favor y 4 votos en

contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 9 de agosto de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

SEXTO.- [...]

Expuesto lo anterior, para este Cuerpo Colegiado son INFUNDADOS los argumentos de la actora en estudio, conforme a las siguientes consideraciones.

Este Pleno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ha determinado que, los manuales de procedimientos tienen como finalidad optimizar el funcionamiento de las unidades administrativas de una dependencia, estableciendo los procedimientos a seguir para una eficaz prestación del servicio público, lo que desde luego implica obligatoriedad para aquellos servidores públicos que, de acuerdo a sus funciones, deben acatarlos.

Asimismo, ha estimado que, si bien los manuales de procedimientos no tienen la calidad de leyes o reglamentos, no dejan de ser obligatorios, cuenta habida de que constituyen un catálogo de normas o reglas obligatorias para los servidores públicos, los que no tienen posibilidad alguna de no acatarlas bajo el pretexto de que no se trata de leyes, pues aun cuando no vinculan ni trascienden a terceros particulares, esto no es óbice para que su cumplimiento sea inexcusable, por contener normas de aplicación interna, de carácter obligatorio y general, cuya observancia no se deja al libre arbitrio del servidor público a quien van dirigidos, máxime cuando en el juicio contencioso administrativo el servidor público afirma conocer el manual que se le aplicó.

Dicho criterio ha sido recogido en el precedente cuyos rubro, contenido y datos de identificación se transcriben a continuación:

> "**MANUALES DE PROCEDIMIENTOS. SON OBLIGATORIOS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS A QUIENES VAN DIRIGIDOS.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en R.T.F.J.F.A. 5a. Época. Año V. No. 50, Febrero 2005. Tesis V-TASS-171. pág. 141]

Es el caso que el 09 de agosto de 2004, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el *Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*, emitido por el Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con fundamento en los artículos 17, 22 y 59 fracciones I, V, VI, XII y XIV de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; 6o. fracción XXII, 7o., 7o. Bis 1 y 7o. Bis 2 de la Ley de la Propiedad Industrial, y 3o. de su Reglamento, disposiciones que señalan lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

De las disposiciones anteriormente transcritas, en lo que interesa a la resolución de los agravios en estudio se desprende lo siguiente:

a) El artículo 6o., fracción VI de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá, entre otras facultades, prestar los demás servicios y realizar las actividades necesarias para el debido cumplimiento de sus facultades conforme a dicha Ley y a las demás disposiciones legales aplicables;

b) El artículo 7 Bis 2 de la Ley de la Propiedad Industrial señala que, *corresponde al Director General del Instituto el ejercicio de las facultades a que se refiere el artículo 6 de dicha Ley*;

c) El artículo 3o., del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial establece que, el Director General del Instituto expedirá, mediante Acuerdo, las reglas y especificaciones de los documentos en los cuales se contenga la información relativa a las descripciones, reivindicaciones, dibujos y resúmenes para poder ser admitidos; ***asimismo, podrá establecer procedimientos y requisitos específicos para facilitar la operación del Instituto y garantizar la seguridad jurídica de los particulares***.

Ahora bien, en el caso a estudio, la actora señala la violación al artículo 25 del *Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*, sin embargo, para su debida comprensión es necesario reproducir los artículos 19 a 25 del propio Acuerdo, mismos que disponen lo siguiente:

[N.E. se omite transcripción]

De las disposiciones anteriormente transcritas, en lo que interesa a la resolución del agravio en estudio se desprende lo siguiente:

a) Los artículos antes transcritos forman parte de las Reglas de Examen de Fondo de las Reglas Aplicables a las Solicitudes de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales;

b) El artículo 24 dispone que, ***el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tendrá un plazo máximo de tres meses, contado a partir de la aprobación del examen de forma de la solicitud, para comunicar al solicitante de algún impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades, o bien, señalar que la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios, relacionados con el examen de fondo de la misma, a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial***.

c) El artículo 25 señala que, ***el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tendrá un plazo máximo de seis meses, contado a partir de la contestación del requerimiento a que se refiere el artículo anterior, para responder al solicitante por escrito acerca de la procedencia o improcedencia del registro correspondiente***.

De conformidad con lo anteriormente, expuesto, en términos de los artículos 24 y 25 del *Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en un plazo máximo de seis meses contado a partir de la contestación al requerimiento de examen de fondo, deberá responder al solicitante acerca de la procedencia o improcedencia del registro solicitado.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, en el apartado de hechos de la demanda la enjuiciante señala que el oficio de impedimento legal emitido el 15 de noviembre de 2007 con folio de salida 20070512105, le fue notificado el 17 de enero de 2008; y que el 19 de mayo de 2008 cumplimentó en tiempo y forma dicho oficio de impedimento legal.

Sin embargo, la actora es omisa en acreditar documentalmente lo afirmado anteriormente, no obstante que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40, primer párrafo y 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, **le correspondía la carga de ofrecer y aportar en juicio las pruebas que demostraran su afirmación a efecto de que este Órgano Jurisdiccional procediera al análisis de la violación aducida**.

No obstante lo anterior, este Cuerpo Colegiado estima que, aun en el caso de que la autoridad hubiere notificado la resolución que resolvió sobre la solicitud de la marca fuera del plazo señalado en el artículo 25 del *Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*, ello no puede llevar a la ilegalidad de la resolución relati-

va, ya que con esa decisión se perjudicaría a la hoy actora, quien quedaría sin respuesta la solicitud formulada por la hoy actora.

En efecto, el cumplimiento tardío de la autoridad en emitir la resolución que resolviera la solicitud de registro de marca formulada por la hoy actora, implicaría no una sanción para la autoridad, sino un perjuicio para el particular al impedir la reparación de la violación que fue cometida en su perjuicio.

Por ello, el supuesto del cumplimiento tardío de la resolución impugnada no debe afectar al administrado, lo cual sucedería si se considerara que la resolución a través de la cual se resuelve la solicitud de registro de marca es ilegal por haberse dictado por la autoridad fuera del plazo legal.

Por lo anterior, la actora no logra desvirtuar la presunción de legalidad de que goza la resolución impugnada, en términos del artículo 8o., de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, máxime que en la resolución impugnada no se indica la fecha en que le fue notificado el oficio de impedimento legal así como la fecha en que la actora expresó sus consideraciones por escrito respecto de dicho oficio de impedimento legal.

SÉPTIMO.- [...]

Expuesto lo anterior, y previamente al análisis de los agravios en estudio este Cuerpo Colegiado estima conveniente señalar lo siguiente.

El artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial define a la marca como **todo signo que se utiliza para distinguir** un producto o servicio de otros, cuya principal función es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo, en los términos siguientes:

[N.E. Se omite transcripción]

Al respecto, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, sustentó la siguiente jurisprudencia referente a las características de una marca:

"**MARCA, CARACTERÍSTICAS DE LA.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en S.J.F. 7a. Época. 60. Sexta Parte. pág. 57]

Dentro de las principales funciones que pueden atribuirse a un signo marcario, de acuerdo a la doctrina son: ***distinción; protección; garantía de calidad; y propaganda***.

La función de distinción deriva de la esencia misma de la marca, por cuanto que su objetivo está destinado a distinguir un producto de otro del mismo género; de acuerdo con tal función, es el producto considerado en sí mismo a lo que el consumidor dirige normalmente su atención.

La función de protección de la marca tiende a identificar a su titular frente a sus presuntos concurrentes, protegiendo simultáneamente al público consumidor de los usurpadores, dado que es en virtud de la marca que el comprador reclama el producto.

La función de garantía de calidad, radica en la calidad del producto y esto intrínsecamente lo califica, ya que lo que el comprador busca al adquirir un producto es una calidad determinada, con independencia de la empresa que lo fabrica, cuyo conocimiento es algo secundario para el consumidor.

Finalmente, **la función de propaganda** constituye un reclamo del producto, es decir, la marca es el único nexo que existe entre el consumidor del producto o el servicio y su titular, y es a través de la misma que su titular recogerá los beneficios o no, de su aceptación por parte del público consumidor, de tal manera que la marca es lo que el comprador ha de pedir y es lo que el titular de la misma tratará que pida, y para ello la buena calidad del producto o servicio debe ir acompañada de una publicidad adecuada, dado que serían vanos los esfuerzos para lograr la mejor calidad si el producto o servicio es desconocido.

Ahora bien, el derecho al uso exclusivo de la marca se obtiene mediante su registro ante la autoridad correspondiente, según así lo establece el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra señala:

[N.E. Se omite transcripción]

En este sentido, el artículo 89 de la citada Ley, establece de manera general el tipo de signos que podrán constituir una marca registrada:

[N. E. Se omite transcripción]

Por su parte, **el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial establece categóricamente todos aquellos signos que legalmente NO pueden ser registrados como marcas, cuyas fracciones IV y VI ya fueron analizadas anteriormente**.

En el caso a estudio, la actora solicitó el registro del signo "**SIMPLY GOURMET SELECTION y diseño**" para amparar con dicha marca los productos correspondientes a la clase internacional 30 que son los siguientes:

[N.E. Se omite transcripción]

De la anterior transcripción se desprende que, la clase internacional 30 *comprende* principalmente los productos relacionados con alimentos de origen vegetal preparados para su consumo o conservación, así como los aditivos para realzar el sabor de los alimentos.

En el caso particular, la actora solicitó la marca para amparar ***café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café, harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvo para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias y hielo***.

Expuesto lo anterior, debido a la estrecha relación que guardan entre sí, se procede al análisis conjunto de los argumentos de agravio en los cuales la actora sostiene esencialmente lo siguiente:

➢ *Que considerada en su conjunto, la denominación a estudio no resulta descriptiva debido a que no señala las características intrínsecas: especie, cantidad, calidad, destino, valor, lugar o época de producción, de los productos que se amparan en la clase 30 internacional, ni en el mercado existe servicio identificado con el nombre de la denominación propuesta, por tanto, cuando el consumidor observe la marca SIMPLY GOURMET Y DISEÑO, en ningún momento le describe los productos que se ofrecen con dicha marca;*

➢ *Que la denominación, en todo caso, podría ser evocativa de los productos a los que trata de aplicarse ya que no existe en el idioma castellano ningún género de artículos con esa denominación; en cambio, las denominaciones evocativas no están incluidas en la prohibición que contempla el artículo 90, fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial, razón por la cual, jurídicamente no es aceptable la aplicación de dicho precepto para negar el registro de la marca solicitada.*

Para este Cuerpo Colegiado son **INFUNDADOS** los anteriores argumentos, por las razones que se exponen a continuación.

El artículo 90, fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial anteriormente transcrito dispone que, ***no serán registrables como marca las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, la calidad, la cantidad, la composición, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos, o la época de producción***.

El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, Edición Décima Novena, define la palabra “descriptivo”, de la siguiente forma:

[N.E. Se omite transcripción]

Por tanto, descriptivo "se aplica a lo que describe", y por describir se entiende "***delinear, dibujar, figurar una cosa, representándola de modo que dé cabal idea de ella***"; por tanto, una **marca descriptiva** es aquella que se representa de manera tal, que da completa idea de los productos o servicios que ampara.

Entonces, de lo previsto por el artículo 90 fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial, y de la definición del vocablo "describir", se deduce que la prohibición de utilizar denominaciones o figuras descriptivas, está condicionada al hecho de que esas denominaciones o figuras se encuentren vinculadas con la naturaleza de los productos que se traten de proteger precisamente con el registro marcario, indicando cualesquiera de sus elementos, cualidades, características, etc., **prohibición cuyo objetivo fundamental es impedir el monopolio de palabras o figuras comunes que pudieren evitar su uso cotidiano por los demás**.

El Poder Judicial de la Federación se ha referido a la descriptividad de las marcas en las tesis que se transcriben a continuación:

> "**MARCAS. DESCRIPTIVIDAD.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en S.J.F. 8a. Época. T. III. Segunda Parte-1. Enero a Junio de 1989. pág. 454]
>
> "**MARCAS DESCRIPTIVAS.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en S.J.F. 7a. Época. T. III. Tesis 431. pág. 476]
>
> "**MARCAS COMPUESTAS. DESCRIPTIVIDAD Y CONDICIÓN DISTINTIVA DE LAS.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en S.J.F. 8a. Época. T. VIII. Septiembre 199. pág. 155]

De las tesis transcritas con antelación se advierte que, no serán registrables como marca las frases descriptivas de los productos o servicios que traten de ampararse con la marca, **incluyendo aquellas que pueden servir para designar la calidad de esos productos** y una denominación descriptiva no se considerará distinta por el hecho de ostentar una ortografía caprichosa; asimismo, que una marca no es

distintiva si la denominación respectiva se integra por dos o más palabras que al ser analizadas en forma aislada resultan descriptivas de los productos o de los servicios correspondientes y las mismas continúan siendo descriptivas en su conjunto; en tal caso la denominación propuesta para registro en esos términos, debe ser rechazada.

En la resolución impugnada se niega el registro marcario al considerar que se actualizan los supuestos de prohibición contenidos en la fracción IV, en relación con la fracción VI, ambas correspondientes al artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, al considerar que la denominación "**SIMPLY GOURMET SELECTION y diseño**" **es descriptiva de la calidad de los productos que pretende proteger** y que se encuentran incluidos en la clase 30, que se refiere a ***café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café, harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvo para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias y hielo***.

Para este Cuerpo Colegiado **sí** se actualiza la prohibición contenida en la fracción IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, pues contrariamente a lo señalado por la enjuiciante la denominación "**SIMPLY GOURMET SELECTION y DISEÑO**" **sí** es descriptiva de los productos que pretende proteger y que se encuentran incluidos en la clase 30, ya que efectivamente, considerando el signo distintivo en su conjunto, éste **sí** es indicativo, ya que existe una relación de la denominación propuesta a registro con **la calidad de los productos** que se pretenden amparar con dicha denominación, como se demuestra a continuación.

Este Cuerpo Colegiado advierte que, considerada en su conjunto, la marca propuesta a registro "**SIMPLY GOURMET SELECTION**" se compone de tres elementos fonéticos el primero y el último correspondientes al idioma inglés mientras que el segundo al idioma francés, que en una traducción libre al castellano se refiere a **SÓLO SELECCIÓN GURMET**, tal como ha sido aceptado por la partes contendientes en el presente juicio.

Específicamente, la voz GURMET es de origen francés, que en una traducción libre al castellano se refiere a gastrónomo, es decir, persona conocedora o aficionada a las comidas exquisitas.

En esos términos, considerando en su conjunto las voces que componen la denominación propuesta a registro, **da una idea completa de que los productos a proteger son seleccionados para conocedores de comida exquisita**, por tanto, si la denominación propuesta a registro **hace referencia a la calidad** de los productos que pretende proteger, resulta ser ***descriptiva o indicativa de dichos productos,*** circunstancia que pretende evitar la fracción IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial al prohibir la utilización de denominaciones que indiquen cualesquiera de los elementos, cualidades o características de los productos a proteger.

Por lo anterior, si la marca "**SIMPLY GOURMET SELECTION y DISEÑO**" **sí hace referencia a la calidad de los productos que se pretenden amparar, el término solicitado no tiene distintividad para la clase señalada, siendo ajustado a derecho que la autoridad en la resolución impugnada hubiere negado el registro solicitado**.

En efecto, conforme al artículo 90 fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial, y de la definición del vocablo "describir", se deduce que la prohibición de utilizar denominaciones o figuras descriptivas, está condicionada al hecho de que esas denominaciones o figuras se encuentren vinculadas con la naturaleza de los productos que se traten de proteger precisamente con el registro marcario, indicando cualesquiera de sus elementos, cualidades, características, prohibición que se actualiza en el caso a estudio, pues la denominación solicitada a registro **sí es indicativa** de los productos a amparar, lo que la torna genérica, y por tanto, se actualiza el impedimento del registro solicitado.

En ese orden de ideas, el impedimento al registro de una marca descriptiva de los productos que pretende amparar, es una **prohibición cuyo objetivo fundamental es impedir el monopolio de palabras o figuras comunes que pudieren evitar**

su uso cotidiano por los demás, es decir, impedir que la marca repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante frente a sus competidores, pues éstos estarían impedidos de utilizar dicha denominación.

En esta tesitura, en el caso a estudio, es improcedente el registro como marca de la denominación "**SIMPLY GOURMET SELECTION y DISEÑO**", pues de concederse se otorgaría al hoy actor el uso exclusivo de una expresión que describa productos de la clase 30 internacional, en perjuicio de los demás, pues dicha denominación **sí** resulta descriptiva de esos productos.

Al respecto, resulta aplicable ***a contrario sensu*** el precedente **VI-P-SS-238** sustentado por este Cuerpo Colegiado, el cual se transcribe a continuación:

> "**MARCAS INDICATIVAS O DESCRIPTIVAS.- NO SE DA ESE SUPUESTO CUANDO SUS ELEMENTOS NO SON CARACTERÍSTICOS DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE PRETENDE PROTEGER.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en R.T.F.J.F.A. 6a. Época. Año II. No. 24, Diciembre 2009. pág. 197]

Por lo anteriormente expuesto, se considera que quien tenga una actividad económica relacionada con la producción o comercialización de ***café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café, harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvo para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias y hielo***, sufriría una desventaja frente a la hoy actora por no poder utilizar la denominación "**SIMPLY GOURMET SELECTION y DISEÑO**", para identificar los productos que se pretenden amparar con dicha denominación, pues se insiste, dicha denominación **sí** es de modo innegable y categórico la descripción específica y exclusiva **de la calidad** de los productos amparados, por lo que resulta que la descriptibilidad alegada por la autoridad demandada, es plenamente ajustada a derecho.

Por lo anteriormente expuesto, se concluye que en el caso a estudio **sí** se actualiza el supuesto de impedimento de registro de marca previsto en el artículo 90, fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial, pues como ha quedado demostrado, la denominación "**SIMPLY GOURMET SELECTION y DISEÑO**", propuesta a registro, resulta descriptiva de los productos que desean proteger, por tal razón, se considera que es apegado a derecho negar el registro de la denominación propuesta a registro al resultar indicativa de los servicios que se pretenden amparar con la misma.

Por otra parte, para este Cuerpo Colegiado la marca propuesta a registro no puede ser considerada evocativa de los productos a proteger, conforme a las razones siguientes.

El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, Edición Décima Novena, define la palabra "evocar", como **traer algo a la memoria o a la imaginación**, en los términos siguientes:

[N.E. Se omite transcripción]

Por otra parte, como se dijo anteriormente, por describir se entiende "***delinear, dibujar, figurar una cosa, representándola de modo que dé cabal idea de ella***".

Por tanto, se considera que un signo distintivo es evocativo cuando no describe de manera directa el producto que se pretende proteger; esto es**, la marca da la idea imprecisa del producto**, sin embargo no describe el producto.

Al respecto, resulta aplicable la tesis aprobada por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, cuyo rubro, contenido y datos de identificación se transcriben a continuación:

"**MARCAS EVOCATIVAS.- DEFINICIÓN.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en R.T.F.J.F.A. 6a. Época. Año II. No. 24. Diciembre 2009. Tesis VI-TASR-EPI-157. pág. 261]

En ese orden de ideas, para este Cuerpo Colegiado, la denominación propuesta a registro que se traduce al castellano como **SÓLO SELECCIÓN PARA CONOCEDORES**, **SÍ** resulta indicativa de los productos de la clase 30 internacional, pues **deriva una conexión directa de la calidad de los productos que pretende proteger** por lo que dicha denominación resulta ser descriptiva y no evocativa, por tanto, no puede ser registrable.

Siguiendo con el estudio de los argumentos contenidos en el agravio formulado por la demandante, se procede a continuación al análisis de los argumentos en los que sostiene esencialmente lo siguiente:

Que no obstante estar en idioma inglés, ello no implica que se actualice la hipótesis normativa de la fracción VI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, máxime que el signo cuenta con la distintividad necesaria para ser susceptible de registro.

Para este Cuerpo Colegiado es carente de sustento el argumento de la actora, atento a que el artículo 90 fracción VI de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que, ***no será registrable como marca la traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa, o la construcción artificial de palabras no registrables***.

Para este Cuerpo Colegiado, en el caso a estudio **sí** se actualiza el supuesto de impedimento del registro de marca, pues como se determinó anteriormente, la denominación "**SIMPLY GOURMET SELECTION y DISEÑO**" propuesta a registro, que se traduce al castellano como **SÓLO SELECCIÓN PARA CONOCEDORES**, **SÍ** resulta indicativa de los productos de la clase 30 internacional que se pretende proteger con dicho signo.

En efecto, de la traducción de la voz que conforman la marca **deriva una conexión directa de la calidad de los productos que pretende proteger** por lo que dicha denominación no puede ser registrable; sin pasar por alto que el examen de dicha marca debe examinarse en su conjunto, ya que es así como se percibe por el público consumidor y de manera global como en el caso "**SIMPLY GOURMET SELECTION y DISEÑO**".

En ese contexto, la denominación propuesta por el actor no resulta registrable, al ser indicativa de los productos que pretende proteger, resultando aplicable ***a contrario sensu*** el precedente **VI-P-SS-226** sustentado por este Cuerpo Colegiado, el cual se transcribe a continuación:

> "**MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO.- SI AL TRADUCIRSE NO SON DESCRIPTIVAS DE LOS SERVICIOS QUE PRETENDE PROTEGER DEBEN REGISTRARSE.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en R.T.F.J.F.A. 6a. Época. Año II. No. 24. Diciembre 2009. pág. 150]

Asimismo, resulta aplicable la tesis del Poder Judicial de la Federación que se transcribe a continuación:

> "**MARCAS. CARÁCTER DESCRIPTIVO DE UNA DENOMINACIÓN EN IDIOMA EXTRANJERO. NO ES REGISTRABLE.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en S.J.F. 8a. Época. T. V. Segunda Parte-1. Enero a Junio de 1990. pág. 291]

En ese contexto, es ajustado a derecho que la autoridad hubiera negado el registro solicitado, al no encontrarse satisfecha la exigencia señalada en el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, pues dicho precepto dispone que se entiende como marca todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, como acontece en la especie, ya que la denominación "**SIMPLY GOURMET SELECTION y DISEÑO**" **no** tiene la calidad

de distinguir productos de la clase internacional 30 de otros de la misma especie y clase en el mercado.

Tiene aplicación a lo anterior la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se transcribe a continuación:

> **"MARCAS, NATURALEZA DE LAS."** [N.E. Se omite transcripción, consultable en S.J.F. T. I. Segunda Parte-1. Enero a Junio de 1988. p. 403]
>
> [...]

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 49, 50 y 52, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con los artículos 14, fracción XIII y 18, fracción XV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa vigente a partir del 07 de diciembre de 2007, se resuelve:

I. La actora no acreditó los fundamentos de su pretensión, en esta virtud;

II. Se reconoce la VALIDEZ de la resolución impugnada, precisada en el Resultando 1° de este fallo, por los fundamentos y motivos vertidos a lo largo de la presente resolución;

III. NOTIFÍQUESE. Con copia autorizada de la presente resolución, devuélvanse los autos del Juicio Contencioso Administrativo a la **Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual**, una vez que haya quedado firme o en su caso se resuelva en definitiva el presente asunto y, en su oportunidad archívese este expediente.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 09 de agosto de 2010, por mayoría de 7 votos a favor de los Magistrados Jorge Alberto García Cáceres, Alejandro Sánchez Hernández, Alfredo Salgado Loyo, Silvia Eugenia Díaz Vega, Olga Hernández Espíndola, Juan

Manuel Jiménez Illescas y Francisco Cuevas Godínez y 4 votos en contra de los Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Nora Elizabeth Urby Genel, Manuel Luciano Hallivis Pelayo y Luis Carballo Balvanera.

Fue Ponente en el presente asunto la Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, cuya ponencia se aprobó.

Se elabora el presente engrose el 30 de agosto de 2010, y con fundamento en lo previsto en los artículos 30, fracción V, y 47, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en vigor, firma el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

VI-P-SS-411

COMPETENCIA DEL PLENO DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.- SE SURTE CUANDO EN LA DEMANDA SE INVOCA LA VIOLACIÓN A DISPOSICIONES CONTENIDAS EN UNA REGLA DE CARÁCTER GENERAL PARA LA APLICACIÓN DE DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS TRATADOS EN MATERIA COMERCIAL.- El artículo 18, fracción XV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establece que, compete al Pleno de la Sala Superior resolver los juicios en los que la resolución impugnada se encuentre fundada en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se hubiere aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos. Por tanto, si el enjuiciante en su demanda invoca a su favor o bien, en la resolución impugnada en el juicio, se funda en reglas de carácter general relativas a la aplicación de disposiciones en materia aduanera relativa a los Tratados de Libre Comercio suscritos por México, se actualiza la competencia exclusiva del Pleno de la Sala Superior, en virtud de que si bien no se invoca el tratado respectivo sí se hace respecto de las reglas que sirven para interpretar, aplicar y administrar los capítulos respectivos de dichos Tratados Comerciales internacionales.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 9362/09-17-01-4/497/10-PL-07-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 16 de agosto de 2010, por mayoría de 8 votos a favor y 2 votos con los puntos resolutivos.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 16 de agosto de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO.- [...]

De la revisión a los autos se advierte que la actora en el tercer agravio de su demanda manifiesta que, ***al rectificar los pedimentos de importación dentro del plazo de 10 meses a que se refieren las reglas 2.2.3 y 2.3.3 de la Resolución en Materia Aduanera de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, las importaciones adquieren el trato arancelario preferencial otorgado por el Tratado de Libre Comercio suscrito con la Comunidad Europea***.

Como se advierte, en su agravio la actora se refiere a la aplicación del ***Tratado de Libre Comercio suscrito con la Comunidad Europea*** conjuntamente con la ***Resolución en Materia Aduanera de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea***.

[...]

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 49, 50 y 52, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con los artículos 14, fracción IV y 18, fracción XV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa vigente a partir del 07 de diciembre de 2007, se resuelve:

I. La actora no probó los hechos constitutivos de su pretensión;

II. Se reconoce la validez de la resolución impugnada;

III. NOTIFÍQUESE. Con copia autorizada del presente fallo, devuélvanse los autos a la Sala Regional de origen una vez que hubiere quedado firme o en su

caso se resuelva en definitiva el presente asunto, y en su oportunidad archívese el presente expediente.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 16 de agosto de 2010, por mayoría de 8 votos a favor de los Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Nora Elizabeth Urby Genel, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Jorge Alberto García Cáceres, Alejandro Sánchez Hernández, Silvia Eugenia Díaz Vega, Olga Hernández Espíndola y Juan Manuel Jiménez Illescas y 2 votos con los puntos resolutivos de los Magistrados Alfredo Salgado Loyo y Francisco Cuevas Godínez, estando ausente el Magistrado Luis Carballo Balvanera.

Fue Ponente en el presente asunto la Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, cuya ponencia se aprobó.

Se elabora el presente engrose el 24 de agosto de 2010, y con fundamento en lo previsto en los artículos 30, fracción V, y 47, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en vigor, firma el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

LEY ADUANERA

VI-P-SS-412

CANCELACIÓN DE PATENTE DE AGENTE ADUANAL. EL PROCEDIMIENTO QUE LO PREVÉ ES INDEPENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA ADUANERA.- Del artículo 165, primer párrafo, de la Ley Aduanera, que establece las causas de cancelación de la patente de agente aduanal, se advierte que el procedimiento relativo se sustanciará independientemente de las sanciones que procedan por las infracciones cometidas. Así, la determinación de legalidad o no, recaída a la resolución dictada con sustento en el procedimiento en materia aduanera, derivado del reconocimiento aduanero de mercancías, por una autoridad jurisdiccional, no debe tomarse en cuenta para determinar la legalidad o ilegalidad de la resolución del procedimiento de cancelación de la patente de agente aduanal, ya que la autoridad aduanera, en uso de sus facultades, puede establecer la existencia de lesión al fisco federal, al evaluar el correcto ejercicio de la función del agente aduanal, con independencia al crédito fiscal que se le finque en su carácter de responsable solidario del importador, pues el procedimiento de cancelación de patente reviste cualidades distintivas, enfocadas primordialmente al cuidado del servicio de despacho aduanero. Por lo tanto, no obstante que el agente aduanal, acredite dentro del juicio contencioso administrativo tramitado ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que el referido procedimiento en materia aduanera, fue dejado sin efectos, así como sus consecuencias jurídicas, ello no es suficiente para considerar ilegal la resolución impugnada derivada del procedimiento en el que se determinó la cancelación de su patente, dado que, dicha cancelación, no puede considerarse como pena ni como sanción administrativa, sino como la pérdida de los atributos para desempeñar la función de agente aduanal, por las conductas que despliega en las operaciones de comercio exterior, toda vez que las casuales establecidas en el artículo de que se trata, son previsiones legales que tienden a garantizar la prestación regular de su actividad como agente o los atributos personales que siempre debe conservar como parte de su estatus.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 30812/08-17-02-2/2862/09-PL-10-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 1 de septiembre de 2010, por mayoría de 8 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla.
(Tesis aprobada en sesión de 1º de septiembre de 2010)

COMERCIO EXTERIOR

VI-P-SS-413

CANCELACIÓN DE PATENTES DE AGENTE ADUANAL.- ES COMPETENTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA PARA CONOCER DE ELLAS.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es competente por materia para conocer de los juicios en los que se controvierta la resolución definitiva de cancelación de patente de agente aduanal, al actualizarse la hipótesis jurídica contenida en el artículo 14, fracción XV de la Ley Orgánica de este Órgano Colegiado, en relación con la prevista en el artículo 203, de la Ley Aduanera. En efecto, la fracción XV del precepto citado, establece que este Tribunal conocerá de los juicios en que se impugnen aquellas resoluciones definitivas señaladas en las demás leyes como de su competencia, mientras que el artículo 203 de la Ley Aduanera, dispone que en contra de las resoluciones definitivas que dicten las autoridades aduaneras, procederá el recurso de revocación establecido en el Código Fiscal de la Federación, de interposición optativa para el interesado antes de acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de lo que se sigue que, por mandato de las disposiciones citadas, este Tribunal cuenta con atribuciones para conocer de las controversias que versen sobre las resoluciones definitivas a que se ha hecho mención, entre las que se incluyen las de cancelación de patente de agente aduanal de que se trata.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 30812/08-17-02-2/2862/09-PL-10-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 1 de septiembre de 2010, por mayoría de 8 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla.
(Tesis aprobada en sesión de 20 de septiembre de 2010)

GENERAL

VI-P-SS-414

FUNDAMENTO INDEBIDO.- LA CITA EQUIVOCADA DE UN PRECEPTO NO LLEVA NECESARIAMENTE A QUE LA RESOLUCIÓN SE ENCUENTRE INDEBIDAMENTE FUNDADA, PUES PUEDEN SEÑALARSE OTROS QUE SEAN SUFICIENTES PARA SUSTENTARLA.- Si al fundarse una resolución se citan diversos preceptos y uno de ellos no es exactamente aplicable al caso, no por ello debe considerarse incorrecta, siempre y cuando alguno de los demás preceptos sean suficientes para sustentar la conclusión de la resolución, lo que haría irrelevante la mención equivocada de una norma legal.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 30812/08-17-02-2/2862/09-PL-10-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 1 de septiembre de 2010, por mayoría de 8 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla.
(Tesis aprobada en sesión de 1º de septiembre de 2010)

PRECEDENTE:

VI-P-SS-182
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3344/08-06-02-7/251/09-PL-09-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 20 de abril de 2009, por mayoría de 9 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretaria: Lic. María Teresa Martínez García.
(Tesis aprobada en sesión de 20 de abril de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 20. Agosto 2009. p. 149

COMERCIO EXTERIOR

VI-P-SS-415

TRATO ARANCELARIO PREFERENCIAL DE MERCANCÍAS IMPORTADAS DESDE LA COMUNIDAD EUROPEA. ES APLICABLE AUN CUANDO NO SEAN TRANSPORTADAS DIRECTAMENTE ENTRE EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y EL DE MÉXICO, SIEMPRE QUE SE ACREDITE QUE PERMANECIERON BAJO VIGILANCIA DE LA AUTORIDAD ADUANERA DEL PAÍS DE TRÁNSITO.- Atento a lo dispuesto por el Decreto por el que se aprueban el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra; la Decisión del Consejo Conjunto de dicho Acuerdo; y la Decisión del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, por una parte y la Comunidad Europea, por otra; y por el artículo 13, del Anexo III, de la Decisión 2/2000 del mencionado Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, por una parte y la Comunidad Europea, por la otra; el trato arancelario preferencial de esta Decisión se aplicará exclusivamente a los

productos que satisfagan los requisitos del referido Anexo y "que sean transportados directamente entre el territorio de la Comunidad y el de México". No obstante, la propia disposición establece que ese régimen se haga extensivo a los productos que constituyan un único envío, supuesto en que "podrán ser transportados en tránsito por otros territorios con trasbordo o depósito temporal en ellos, si fuera necesario, siempre que los productos hayan permanecido bajo la vigilancia de las autoridades aduaneras del país de tránsito o de depósito". De lo que se sigue que, tratándose de mercancía procedente de cualquier país miembro de la Comunidad Europea, que haya transitado por un país no miembro, le es aplicable el trato arancelario preferencial, siempre que se acredite que la mercancía permaneció vigilada por las autoridades aduaneras en el país de tránsito sin haberse sometido a operaciones distintas a las de descarga, carga o cualquier otra destinada a mantenerlas en buen estado.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 30812/08-17-02-2/2862/09-PL-10-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 1 de septiembre de 2010, por mayoría de 8 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla.
(Tesis aprobada en sesión de 20 de septiembre de 2010)

COMERCIO EXTERIOR

VI-P-SS-416

TRATO ARANCELARIO PREFERENCIAL DE MERCANCÍAS IMPORTADAS DESDE LA COMUNIDAD EUROPEA.- PRUEBA IDÓNEA DE LA VIGILANCIA POR LAS AUTORIDADES ADUANERAS DEL PAÍS DE TRÁNSITO HACIA MÉXICO.- Atento a lo dispuesto por el Decreto por el que se aprueban el Acuerdo de Asociación Económica, Concentración Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra; la Decisión del Consejo Conjunto de dicho Acuer-

do; y la Decisión del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, por una parte y la Comunidad Europea, por otra; y por el artículo 13, del Anexo III, de la Decisión 2/2000 del ya citado Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, por una parte y la Comunidad Europea, por la otra; se tiene que, el trato arancelario preferencial aplica exclusivamente a los productos importados desde la propia Comunidad Europea, cuando, por regla general sean transportados directamente entre el territorio de aquella y el de México, siendo extensivo ese régimen, en el caso de que los productos constituyan un único envío y hayan sido transportados en tránsito por otros territorios con trasbordo o depósito temporal en ellos, siempre que se acredite que los productos permanecieron bajo la vigilancia de las autoridades aduaneras del país de tránsito o de depósito. Por tanto, basta que en el juicio contencioso administrativo, tramitado ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la parte actora exhiba la prueba idónea de esa situación, como resulta ser el oficio expedido por la autoridad aduanera del país de tránsito, en el que se dé fe, de que la mercancía importada permaneció durante el traslado por su territorio, bajo control y supervisión de la misma, desde su arribo hasta su salida, en las mismas condiciones en que fue recibida, para acreditar que la mercancía importada a territorio nacional, es sujeta de trato arancelario preferencial.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 30812/08-17-02-2/2862/09-PL-10-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 1 de septiembre de 2010, por mayoría de 8 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla.
(Tesis aprobada en sesión de 20 de septiembre de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

CUARTO.- [...]

Atendiendo puntualmente los agravios vertidos por el actor en el concepto de impugnación que se resuelve, así como las manifestaciones que en su contra vierte la autoridad, esta Juzgadora considera necesario establecer de forma prioritaria, si las resoluciones dictadas dentro del procedimiento administrativo en materia aduanera, regulado en el artículo 152 de la Ley de la materia y, dentro del procedimiento de cancelación de patente de agente aduanal, previsto en el artículo 165, de la misma ley, resultan independientes, debiendo precisar para ello, los siguientes **hechos** que se desprenden de las actuaciones que forman el presente juicio:

1.- Con fecha 24 de abril de 2003, el **C. Manuel Grañen Maynez, en su carácter de agente aduanal**, de la empresa **Geomundo, S.A. de C.V.** presentó ante el mecanismo de selección automatizado de la Aduana de Ciudad del Carmen, el **pedimento de importación 03 06 3727-3000092**, y su **rectificación** número **03 06 3737 3000124**, con guía de embarque número 97603217561, a través del cual introdujo al territorio nacional bajo trato arancelario preferencial, la mercancía de procedencia extranjera, consistente en:

[N.E. Se omite imagen]

2. La Administración Central de Contabilidad y Glosa, de la Administración General de Aduanas, del Servicio de Administración Tributaria, en uso de sus facultades de comprobación llevó a cabo la revisión del pedimento de importación precisado en el punto que antecede, del que advirtió hechos y omisiones, los que se hicieron constar en el oficio con número de referencia GC-0506I-001 de fecha 28 de abril de 2005, visible a fojas 153 de autos, en el que se asentó como motivo esencial de irregularidad, la consistente en:

[N.E. Se omite transcripción]

3. Mediante resolución contenida en el oficio 326-SAT-IV-4-56378, de fecha 5 de agosto de 2005, la Administración Central de Contabilidad y Glosa, determinó sendos créditos fiscales a la empresa Geomundo, S.A. de C.V., en su carácter de

importador y al C. **Manuel Grañen Maynez en su calidad de agente aduanal y, por ende, responsable solidario**, por el despacho de la mercancía de que se trata.

4. Por oficio 325-SAT-09-I-D-III-432 de fecha 31 de enero de 2006, el Administrador Local Jurídico del Norte, de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, resolvió dejar sin efectos la resolución precisada en el punto que antecede, así como las consecuencias jurídicas derivadas de dicha actuación, en razón de que la misma se emitió fuera del plazo de cuatro meses establecido por el artículo 152 de la Ley Aduanera.

5. Mediante Acuerdo contenido en el oficio **800-00-00-00-00-2008-333 de fecha 11 de abril de 2008**, firmado por la Administradora Central de Regulación Aduanera, en suplencia por ausencia del Administrador General de Aduanas y del Administrador Central de Operación Aduanera y notificado previo citatorio al agente aduanal, hoy actor, el 15 de ese mismo mes y año, se le hizo saber la conducta irregular que se le atribuye, de la que se deriva una lesión al fisco federal, otorgándole un plazo de 10 días para que por escrito ofreciera pruebas y expresara lo que a su derecho conviniera.

El Acuerdo en comento obra agregado a fojas 352 a 359, del expediente en que se actúa, mismo que fue exhibido por la autoridad al contestar la demanda, y cuyo texto digitalizado se reproduce a continuación.

[N.E. Se omiten imágenes]

6. Por escritos presentados el 29 de abril y 14 de agosto de 2008, el C. Manuel Grañen Maynez, presentó las pruebas y manifestó lo que a su derecho convino, con relación al Acuerdo precisado en párrafos que anteceden.

7. Mediante oficio 800-02-00-00-00-2008-10999 de fecha 25 de agosto de 2008, visible a fojas 60 a 78 del expediente en que se actúa, firmado por el Administrador de Regulación Aduanera “2”, en suplencia por ausencia del Administrador

Central de Regulación Aduanera y del Administrador de Regulación Aduanera "1", de la Administración General de Aduanas, del Servicio de Administración Tributaria, resolvió cancelar la patente de agente aduanal número 1363, adscrita a la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y número de autorización 3727, para actuar en aduanas distintas a la de su adscripción, otorgada a favor del C. Manuel Grañen Maynez, hoy actor, constituyendo dicho oficio la resolución que es impugnada en este juicio y cuyo contenido quedó debidamente digitalizado en el Considerando Segundo de este fallo.

De los hechos precisados, se tiene que al momento de llevarse a cabo el despacho aduanero de las mercancías importadas consistentes en un kilo de software, bajo el pedimento número 03 06 3727 3000092, su correspondiente rectificación 03 06 3727 3000124 de fecha de pago del 24 de abril de 2003, la autoridad advirtió irregularidades que la llevaron a iniciar los procedimientos antes señalados, esto es:

1) El procedimiento administrativo en materia aduanera, regulado por el artículo 152 de la ley de la materia, y

2) El procedimiento de cancelación de patente de agente aduanal, regulado en los artículos 164, fracción IV, 165, fracción II, inciso a), **167, párrafos**, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y noveno de la Ley Aduanera.

Ahora bien, a fin de precisar si los procedimientos de que se trata, son independientes entre sí, es relevante, dejar establecido lo dispuesto por los artículos 40, 41, primer párrafo, 43, primero y noveno párrafos, 46, 52, primero y cuarto párrafos, 53, primer párrafo, fracción II y último párrafo, 54, primer párrafo, 15º, 151, primer párrafo, 153, primer párrafo, 152, 164, 165, fracción II, inciso a) y 167 de la Ley Aduanera, vigente en la fecha en que se originaron los hechos, esto es, el 24 de abril de 2003, los cuales en la parte que es de interés disponen:

[N.E. Se omite transcripción]

Aplicados los artículos transcritos, de forma concatenada, se tiene lo siguiente:

➢ Los agentes aduanales que actúan como consignatarios o mandatarios de un importador o exportador, así como los apoderados aduanales, son los únicos que pueden llevar a cabo los trámites relacionados con el despacho de mercancías.

➢ Los agentes y apoderados aduanales son representantes de los importadores y exportadores:

- Cuando sus actuaciones deriven del despacho aduanero, siempre que se celebren dentro del recinto fiscal.

- Cuando se trate de notificaciones derivadas del despacho aduanero de las mercancías, y;

- Cuando se trate del acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera o, del escrito o acta circunstanciada de hechos y omisiones.

➢ Por tanto, los agentes aduanales y sus mandatarios, son responsables solidarios del pago de los impuestos al comercio exterior y de las demás contribuciones, así como de las cuotas compensatorias que originen con motivo de las importaciones o exportaciones en cuyo despacho intervengan personalmente o por conducto de sus empleados autorizados, comprendiendo dicha responsabilidad los accesorios, con excepción de las multas.

➢ **El agente aduanal es responsable:**

- De la veracidad y exactitud de los datos e información proporcionada;

- De la determinación del régimen aduanero de las mercancías y de su correcta clasificación arancelaria y;

- De asegurarse que el importador o exportador cuenta con los documentos que acrediten el cumplimiento de las demás obligaciones que en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias rijan para dichas mercancías, conforme a la Ley Aduanera y demás disposiciones aplicables

➢ Elaborado el pedimento y efectuado el pago de las contribuciones y cuotas compensatorias determinadas por el interesado, las mercancías deben presentarse conjuntamente con dicho pedimento para su despacho, activando el mecanismo de selección automatizado, el cual determinará si debe o no practicarse el reconocimiento aduanero, en cuyo caso de ser afirmativo, la autoridad aduanera, procederá a llevar a cabo tal reconocimiento ante quien presente las mercancías en el recinto fiscal y, concluido éste, se activará nuevamente dicho mecanismo, para establecer si las mercancías se sujetan a un segundo reconocimiento.

➢ Las facultades de comprobación de las autoridades aduaneras, no se encuentran limitadas por el reconocimiento y segundo reconocimiento aduanero, por lo que si éstas omiten al momento del despacho objetar el valor de las mercancías o los documentos o informaciones que sirvan de base para determinar dicho valor, no se entenderá que éste ha sido aceptado o que existe resolución favorable al particular.

➢ Si con motivo de la revisión de documentos presentado a despacho, del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento o de la verificación de mercancías en transporte, las autoridades aduaneras tienen conocimiento de cualquier irregularidad la misma se hará constar por escrito o en acta circunstanciada que para tal efecto se levante, en los términos de los artículos 150 a 153, esto es, para iniciar el procedimiento administrativo en materia aduanera.

➢ **El inicio del procedimiento en materia aduanera,** se hará constar mediante acta que para tal efecto levanten las autoridades aduaneras, cuando **embarguen mercancías** en los términos previstos por la Ley Aduanera, con motivo:

- Del reconocimiento Aduanero;

- Del Segundo reconocimiento;
- De la verificación de mercancías en transporte o;
- Del ejercicio de las facultades de comprobación.

➢ En el acta que dé inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, **se hará constar**:

- La identificación de la autoridad que practica la diligencia.
- Los hechos y circunstancias que motivan el inicio del procedimiento.
- La descripción, naturaleza y demás características de las mercancías
- En su caso, la toma de muestra de las mercancías, y otros elementos probatorios necesarios para dictar la resolución correspondiente.
- El requerimiento al interesado:
  - Para que designe dos testigos y, si éstos no son designados o los designados no aceptan fungir como tales, quien practique la diligencia los designará.
  - Para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la circunscripción territorial de la autoridad competente para tramitar y resolver el procedimiento correspondiente, excepto, que se trate de pasajeros, en cuyo caso, podrá señalar dicho domicilio fuera de la referida circunscripción, con el apercibimiento de ley;
- El otorgamiento del plazo de 10 días, con que cuenta el interesado para ofrecer pruebas y formular alegatos que a su derecho convengan.

➢ La autoridad que levante el acta de inicio del procedimiento, deberá entregar copia de ésta al interesado en ese mismo momento, en el cual se considerará notificado.

➢ Las autoridades aduaneras, notificarán, a los importadores, exportadores y, además, al agente aduanal que lo representa en el despacho, de cualquier procedimiento que se inicie con posterioridad al despacho.

➢ También se dará inicio del procedimiento en materia aduanera, no obstante la improcedencia del embargo de mercancías, cuando proceda la determinación de contribuciones omitidas y, en su caso, la imposición de sanciones, con motivo:

- Del reconocimiento aduanero;
- Del segundo reconocimiento;
- De la verificación de mercancías en transporte;
- De la revisión de los documentos presentados durante el despacho o;
- Del Ejercicio de las facultades de comprobación.

➢ En este caso los hechos y omisiones que detecte la autoridad aduanera, los dará a conocer mediante escrito o acta circunstanciada, otorgando al interesado el plazo de 10 días para ofrecer pruebas y alegatos que a su derecho convengan.

➢ El interesado deberá presentar el escrito donde ofrezca pruebas y alegatos, ante la autoridad aduanera que levantó el acta, cuyo ofrecimiento, desahogo y valoración se regirá por lo dispuesto en los artículos 123 y 130 del Código Fiscal de la Federación.

➢ La determinación de la contribución que al respecto resulte, se hará en un plazo que no excederá de cuatro meses.

➢ **Procede suspender en el ejercicio de sus funciones al agente aduanal** hasta por noventa días o por el plazo que resulte, entre otros:

- Por estar sujeto a un procedimiento de cancelación, en cuyo caso tal suspensión durará hasta que se dicte resolución, excepto cuando en el pedimento correspondiente, se asienten datos de quien no hubiere solicitado la operación o cuando tales datos resulten falsos o inexistentes y, cuando se le transfieran clientes, se le retribuya o reciba pagos directa o indirectamente de un agente aduanal suspendido y por realizar trámites relacionados con la importación o exportación de mercancías propiedad de persona distinta al agente suspendido.

➢ **Se cancelará la patente de agente aduanal, independientemente de las sanciones que procedan por las infracciones cometidas**, entre otras, por las siguientes causas:

- Declarar con inexactitud algún dato en el pedimento o en la factura, tratándose de operaciones con pedimento consolidado, cuando la omisión en el pago de impuestos al comercio exterior, derechos y cuotas compensatorias, en su caso, exceda de $100,000.00 y dichas omisiones representen más del 10% del total de los que debieron pagarse.

➢ Cuando se trate de causas relativas a la cancelación de la patente del agente aduanal, las autoridades aduaneras, estarán a lo siguiente:

- Una vez conocidos los hechos y omisiones que originen las causas de cancelación de patente, la autoridad emitirá el acto de inicio debidamente circunstanciado, dándolo a conocer al agente aduanal,

- En ese mismo acto, se le otorgará al agente aduanal, un plazo de diez días hábiles para que ofrezca pruebas y exprese lo que a su derecho convenga y;

- Se ordenará la suspensión provisional del agente aduanal, hasta en tanto se dicte la resolución correspondiente.

- El acto de inicio como la resolución que ponga fin al procedimiento de cancelación de patente de agente aduanal, así como al procedimiento de suspensión, se notificarán al interesado por conducto de la aduana de su adscripción.

De la aplicación a los preceptos legales analizados, en relación con lo argumentado por las partes contendientes, llevan a concluir que el agente aduanal, hoy actor, fue sujeto de dos procedimientos, independientes entre sí, en los términos establecidos por el artículo 165, primer párrafo de la Ley Aduanera, lo que implica que la consecuencia de uno, no trasciende a la validez del otro, no obstante que los mismos derivan de la misma tramitación del despacho aduanal, respecto del pedimento de importación número 03 06 3737 3000092 y su rectificación 03 06 3737 3000124, ambos de fecha de pago 24 de abril de 2003, mediante el cual se introdujo a territorio nacional mercancía de procedencia extranjera, con trato arancelario preferencial.

Ello es así, pues mientras en el procedimiento en materia aduanera regulado en los términos previstos por los artículos 150 y 152 de la Ley Aduanera, se determina al actor como responsable solidario del importador un crédito fiscal que asciende a la cantidad total de $6’317,598.01, desglosado de la siguiente manera: $3’744,570.69, por concepto de impuesto general de importación omitido actualizado; $230,247.96, por derecho de trámite aduanero omitido actualizado; $596,195.04, por impuesto al valor agregado omitido actualizado, y; $1’746,584.32, por recargos; en el procedimiento de cancelación de patente de agente aduanal establecido en los artículos 165 y 167 de la misma ley de la materia, se determina la existencia de una lesión al fisco en cantidad de $3’441,384.70, por la conducta desplegada por el agente aduanal, como se explica a continuación.

En efecto, como quedó debidamente precisado en párrafos que anteceden, al llevarse a cabo la introducción de mercancías extranjera, consistentes en un kilo de

software, amparadas con el pedimento de importación señalado en el punto inmediato anterior, la autoridad aduanera, determinó que existía omisión en el pago de los impuestos de comercio exterior, por la irregularidad en que se incurrió al momento de transportar dicha mercancía, lo que la llevó a establecer que el pago que se realizó con preferencia arancelaria, al amparo de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, no era correcta, por lo que **conforme a lo dispuesto por el artículo 152, de la Ley Aduanera, dio inicio al procedimiento en materia aduanera**, resolviendo bajo el oficio número 326-SAT-UV-4-56378 de fecha 5 de agosto de 2005, que el C. Manuel Grañen Maynez, en su carácter de agente aduanal, era **responsable solidario** de la empresa importadora **Geomundo, S.A. de C.V.**, por el pago del impuesto general de importación, derecho de trámite aduanero, impuesto al valor agregado, actualizaciones y recargos, en cantidad total de $6,317,598.01.

Ahora bien, por la referida operación de comercio exterior, tramitada por el agente aduanal, hoy actor, el Administrador General de Aduanas, consideró que declaró en los campos del pedimento de que se trata la Clave “ZYA”, que de conformidad con el Anexo 22, de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para el año de 2003, lo que significa que la mercancía era originaria del Reino Unido de los Países Bajos, es decir, de Holanda, por la que declaró como tasa del impuesto general de importación la clave “EX”, que significa exento.

Sin embargo, para que dicha mercancía fuera afecta al trato arancelario preferencial conforme a la Decisión 2/2000 en comento, debió ser transportada directamente del territorio de la Comunidad Europea al de México, pero por alguna razón permaneció en territorio de un país distinto al de los países miembros del Decreto de que se trata, toda vez que la mercancía no llegó directo a territorio nacional procedente de Holanda que es el país de origen y venta declarado en el pedimento, sino de los Estados Unidos de América, en el que **dicha mercancía no estuvo bajo la vigilancia de la autoridad aduanera** al haber sido éste el país de tránsito, por lo que no era posible aplicarle el trato preferencial otorgado por el supracitado Decreto,

y por tanto, el agente aduanal, hoy actor, debió cumplir con la regulación arancelaria consistente en el pago del 13% por concepto de impuesto general de importación, al que la mercancía se encuentra sujeta conforme a su clasificación arancelaria 8524.91.01.

Así las cosas, en el oficio 800-00-00-00-00-2008-333 de fecha 11 de abril de 2008, emitido por la Administración citada, dio a conocer al hoy actor tales hechos de forma circunstanciada, determinando la existencia de una lesión al Fisco Federal, en cantidad de $3´441,384.70, al haber aplicado un trato arancelario a la mercancía que no le correspondía, omitiendo con ello determinar y realizar el pago total del impuesto general de importación, dando así inicio al procedimiento de cancelación de patente de agente aduanal, conforme lo establecido por los artículos 164, fracción IV, 165, fracción II, inciso a) y 167, párrafos, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y noveno de la Ley Aduanera.

En ese orden de ideas, del artículo 165, primer párrafo, de la Ley Aduanera, que establece las causas de cancelación de la patente de agente aduanal, se advierte que el procedimiento relativo se sustanciará “independientemente” de las sanciones que procedan por las infracciones cometidas.

Así, la determinación de legalidad o no, recaída a la resolución dictada con sustento en el procedimiento en materia aduanera, derivado del reconocimiento aduanero de mercancías, por una autoridad jurisdiccional, no debe tomarse en cuenta para determinar la legalidad o ilegalidad del procedimiento de cancelación de la patente de agente aduanal, ya que la autoridad aduanera, en uso de sus facultades, puede establecer la existencia de lesión al fisco Federal, al evaluar el correcto ejercicio de la función del agente aduanal, con independencia al crédito fiscal que se le finque en su carácter de responsable solidario del importador, pues el procedimiento de cancelación de patente reviste cualidades distintivas, enfocadas primordialmente al cuidado del servicio de despacho aduanero, para cuyo propósito se confieren facultades exclusivas al Administrador General de Aduanas, como se verá más adelante.

Por lo tanto, no obstante que el actor acredita que la resolución contenida en el oficio 326-SAT-IV-4-56378, de fecha 5 de agosto de 2005, derivada del referido procedimiento en materia aduanera, fue dejada sin efectos, así como sus consecuencias jurídicas, mediante el oficio 325-SAT-09-I-D-III-432 de fecha 31 de enero de 2006, visible a fojas 147 a 152 de autos, por la Administración Local Jurídica del Norte del Distrito Federal, del Servicio de Administración Tributaria, porque el escrito o acta circunstanciada que la sustenta, se emitió fuera del plazo de cuatro meses, en los términos previstos por el artículo 152 de la Ley Aduanera; ello no es suficiente para considerar ilegal la resolución impugnada en este juicio, en la que se determinó cancelar su patente de agente aduanal número 1363, dado que, la cancelación de su patente de agente aduanal, no puede considerarse como pena ni como sanción administrativa, sino como la pérdida de los atributos para desempeñar la función de agente aduanal, por las conductas que despliega en las operaciones de comercio exterior, toda vez que las causales establecidas en el artículo 165 de la Ley Aduanera, son previsiones legales que tienden a garantizar la prestación regular de su actividad como agente o los atributos personales que siempre debe conservar como parte de su estatus.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CLXI/2, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Enero de 2009, página 786, que al efecto señala:

> "**PATENTE DE AGENTE ADUANAL. SU CANCELACIÓN NO CONSTITUYE UNA PENA O SANCIÓN ADMINISTRATIVA, POR LO QUE NO VIOLA EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.**" [N.E. Se omite transcripción]

De igual forma es aplicable al caso la tesis XIX.1o.19 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Noveno Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Marco de 2007, página 1585, que señala:

"**AGENTE ADUANAL. PARA DAR INICIO AL PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN DE SU PATENTE NO DEBE TOMARSE EN CUENTA LA RESOLUCIÓN QUE RECAIGA AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA INICIADO CON MOTIVO DE SU ACTUACIÓN, PUES SON INDEPENDIENTES.**" [N.E. Se omite transcripción]

Bajo ese orden de ideas, resulta evidente que los agravios del actor encaminado a controvertir la resolución contenida en el oficio 326-SAT-IV-4-56378, de fecha 5 de agosto de 2005, derivada del procedimiento en materia aduanera, instaurado conforme al artículo 152 de la Ley Aduanera, resultan **inoperantes**, por los fundamentos y motivos precisados con anterioridad, razón por la que resulta inatendible el agravio resumido por esta Juzgadora en el puntos **6, del inciso D.1)**, en el que sostiene el actor, que no puede negarse la existencia de la resolución de que se trata en la que se determinó su responsabilidad solidaria, misma que quedó sin efectos.

Precisado lo anterior y atendiendo lo previsto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se procede a resolver los agravios del actor resumidos por esta Juzgadora en los puntos **1 y 4, del inciso D.1)** en los que hace valer la incompetencia de la Administración Central de Operación Aduanera, quien considera, no cuenta con facultades para determinar la comisión por infracción regulada por el artículo 165, fracción II, inciso a) de la Ley Aduanera y niega lisa y llanamente que exista el acto determinante del crédito fiscal, emitido por autoridad competente.

Los agravios de que se trata, se resuelven tomando en cuenta la causa de pedir del actor, con sustento, en la tesis jurisprudencial **P./J. 68/2000**, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XII, Agosto de 2000, página 38, que indica:

"**CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.**" [N.E. Se omite transcripción]

Asimismo, sustenta la determinación anterior, la tesis jurisprudencial **I.4o.A. J/73**, dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, página 1259, que refiere:

> "**SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SU CONTENIDO Y FINALIDAD EN RELACIÓN CON LA PRETENSIÓN DEDUCIDA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO).**" [N.E. Se omite transcripción]

También es aplicable, la tesis jurisprudencial **2a./J. 219/2007**, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 151, cuyo texto dice:

> "**COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU ESTUDIO CONFORME AL ARTÍCULO 238, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005, COINCIDENTE CON EL MISMO PÁRRAFO DEL NUMERAL 51 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL JUICIO DE NULIDAD Y EN JUICIO DE AMPARO DIRECTO.**" [N.E. Se omite transcripción]

En el caso, el **oficio 800-00-00-00-00-2008-333, de fecha 11 de abril de 2008, que contiene el Acuerdo de inicio del procedimiento de cancelación de patente de agente aduanal**, fue signado por el Administrador Central de Regulación Aduanera, en suplencia por ausencia del Administrador General de Aduanas y del Administrador Central de Operación Aduanera, cuyo texto quedó debidamente digitalizado en párrafos anteriores, en el que se precisan diversos dispositivos legales, para sustentar la actuación de la referida autoridad, en los siguientes términos:

[N.E. Se omite transcripción]

Conforme lo transcrito, se evidencia que el Acuerdo de que se trata se emite, con fundamento, entre otros, en los artículos 5º del Código Fiscal de la Federación; 1º, 5º, último párrafo, 14 fracción V, 15 fracción IX, 40, 44 y 46 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; 2º, 9º penúltimo párrafo, 11, fracción IV y párrafos siguientes a la fracción LXXVII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007; y artículo tercero, primer párrafo del Acuerdo por el que se establece la circunscripción territorial de las Unidades Administrativas del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 02 de noviembre de 2005, modificado el 24 de mayo de 2006, que en la parte que es de interés disponen:

[N.E. Se omite transcripción]

El artículo 5º del Código Fiscal de la Federación, establece que son de aplicación estricta:

➢ Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalen excepciones a las mismas;

➢ Las que fijan las infracciones y sanciones;

➢ Se considera que establecen cargas a los particulares, las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.

➢ Las demás disposiciones se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica y;

➢ A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común, cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal.

Por su parte, los artículos 14 y 15, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establecen los datos que debe indicar el escrito de demanda, en el juicio contencioso administrativo, así como los documentos anexos al mismo.

Ahora bien, de la interpretación conjunta y armónica a las disposiciones contenidas en el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007, se tiene lo siguiente:

1. Las Administraciones General de Aduanas, Central de Operación Aduanera y Central de Regulación Aduanera, son unidades administrativas centrales, del Servicio de Administración Tributaria.

2. La Administración General de Aduanas:

a) Está a cargo de un Administrador General.

b) Se integra por la Administración Central de Operación Aduanera y por la Administración Central de Regulación Aduanera,

c) Será auxiliado en el ejercicio de sus facultades por las Administraciones precisadas en el punto que antecede y quienes;

d) Lo suplirán en el orden previsto por el artículo 2 del propio reglamento, esto es, en primer término, por la Administración Central de Operación Aduanera y, después, por la Administración Central de Regulación Aduanera.

3. La Administración General de Aduanas, la Administración Central de Operación Aduanera y la Administración Central de Regulación Aduanera, tienen su sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, y ejercerán sus facultades en todo el territorio nacional.

4. La Administración General de Aduanas, es competente, entre otros:

a) Para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los agentes aduanales.

b) Determinar la lesión al interés fiscal, de algún dato declarado, entre otros, en el pedimento.

c) Cuando exista causal de suspensión o cancelación de patente de agente aduanal:

- Iniciar, tramitar y resolver los procedimientos de procedimientos de cancelación de patente de agente aduanal;

- Así como para suspenderlos o declarar la extinción del derecho de ejercer la patente de agente aduanal y;

- Efectuar las notificaciones de dichos procedimientos.

Bajo ese contexto, puede concluirse que la autoridad en el acuerdo de inicio del procedimiento de cancelación de patente de agente aduanal, cita los preceptos legales que llevan a determinar que su actuación se encuentra debidamente fundada, esto es, para determinar que por la actuación desplegada por el hoy actor en la operación de comercio exterior de que se trata, en su carácter de agente aduanal, existe una Lesión al Fisco Federal, en cantidad de $3’441,384.70.

No es óbice para llegar a la conclusión anterior, el que la autoridad invocara como fundamento, disposiciones legales de forma indebida, como lo son los artículos 14, fracción V y 15, fracción IX, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que no resultan aplicables al caso, sin embargo, ello no le resta validez a su actuación, dado que la cita de las disposiciones del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria antes precisadas, resultan suficientes para sustentar la facultad con la que actúa para determinar la existencia de la lesión al fisco

federal, y por tanto, para iniciar el procedimiento de cancelación de patente de agente aduanal, razón por la que no lesiona la esfera jurídica del hoy actor.

Sustenta lo anterior, el precedente **VI-P-SS-182,** emitido por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, consultable en la Revista No. 20, Sexta Época, Año II, Agosto 2009, página 149, que refiere:

> "**FUNDAMENTO INDEBIDO.- LA CITA EQUIVOCADA DE UN PRECEPTO NO LLEVA NECESARIAMENTE A QUE LA RESOLUCIÓN SE ENCUENTRE INDEBIDAMENTE FUNDADA, PUES PUEDEN SEÑALARSE OTROS QUE SEAN SUFICIENTES PARA SUSTENTARLA.**" [N.E. Se omite transcripción]

Ahora bien, del **oficio 800-02-00-00-00-2008-10999, de fecha 25 de agosto de 2008, que contiene la resolución impugnada** en el presente juicio, cuyo texto también quedó debidamente digitalizado en el Considerando Segundo de este fallo, se advierte que fue signado por el **Administrador de Regulación Aduanera "2", en suplencia por ausencia del Administrador Central de Regulación Aduanera y del Administrador de Regulación Aduanera "1"**, fundando su actuación en los siguientes términos:

[N.E. Se omite transcripción]

De lo transcrito, esta Juzgadora advierte que la autoridad emisora del acto controvertido, sustenta su actuación en disposiciones del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007, dentro de lo que se citan los artículos 2º, 9, penúltimo párrafo y 11, fracción IV, mismos que fueron transcritos al analizarse la competencia de la autoridad que dictó el acuerdo de inicio del procedimiento de cancelación de patente de agente aduanal, por lo que por economía procesal se tienen aquí por reproducidos, como si a la letra se insertaran.

Asimismo, se advierte que el Administrador Central de Regulación Aduanera, también sustenta su actuación y la Suplencia del Administrador de Regulación Aduanera "1", en los artículos 8, tercer párrafo y 12, Apartado B, y párrafos siguientes a la fracción LXXVII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007, que en la parte conducente establecen:

[N.E. Se omite transcripción]

Atendiendo las disposiciones legales citadas por el Administrador Central de Regulación Aduanera, se tiene que éste cuenta con plenas facultades para resolver el procedimiento de cancelación de patente de agente aduanal, de conformidad con lo previsto por los artículos 9º penúltimo párrafo, 12, Apartado B, fracción I, en relación con lo establecido por el artículo 11, fracción IV, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.

Sin embargo, dentro de los preceptos legales que se citan, no se advierte aquél, que otorgue la facultad al Administrador de Regulación Aduanera "2", para firmar en suplencia por ausencia del Administrador Central de Regulación Aduanera y del Administrador de Regulación Aduanera "1", dado que si bien es cierto cita el artículo 8, párrafo tercero, del referido reglamento, en el que se establece que los Administradores Centrales serán suplidos en sus ausencias, por los Administradores que de ellos dependan, en el orden establecido en el artículo 11, del mismo Reglamento Interior citado, no menos cierto es, que en la resolución controvertida se hace la cita del artículo 11, pero sólo en su fracción IV y también del artículo 12, Apartado B, y párrafos siguientes a la fracción LXXVII, siendo que este último artículo, no cuenta con dicha fracción, por lo que es evidente que no se cita el precepto legal que confiere la facultad al Administrador de Regulación Aduanera "2", de firmar en suplencia por ausencia de los Administradores de que se trata, lo que hace que la resolución impugnada se encuentre indebidamente fundada, respecto a la competencia de la autoridad que firma en suplencia del Administrador Central de Regulación Aduanera y del Administrador de Regulación Aduanera "1", que la emiten.

Apoya la determinación anterior, la tesis jurisprudencial **I.7o.A. J/35**, dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 1171, cuyo rubro y texto, son del tenor siguiente:

"**SUPLENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. REQUISITOS QUE DEBEN REUNIRSE PARA FUNDAR Y MOTIVAR LA ACTUACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO EN AUSENCIA DE OTRO.**" [N.E. Se omite transcripción]

Se aplica en forma analógica, la tesis jurisprudencial **I.5o.A. J/10**, dictada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, que dice:

"**FUNDAMENTACIÓN DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ES INSUFICIENTE SI NO SE SEÑALA CON EXACTITUD Y PRECISIÓN O, EN SU CASO, SE TRANSCRIBE LA PORCIÓN NORMATIVA QUE SUSTENTE SU COMPETENCIA TERRITORIAL.**" [N.E. Se omite transcripción]

Asimismo es aplicable la tesis jurisprudencial **2a./J. 115/2005**, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Septiembre de 2005, página 310, que señala:

"**COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA**

COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE." [N.E. Se omite transcripción]

Por tanto, se concluye que al ser un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, era necesario que la autoridad precisara exhaustivamente su competencia citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso del artículo 11, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, que prevé que el Administrador de Regulación Aduanera "2", se encuentra facultado para firmar en suplencia por ausencia del Administrador Central de Regulación Aduanera y del Administrador de Regulación Aduanera "1", ambos dependientes de la Administración General de Aduanas, por lo que al no ser así, es procedente declarar la nulidad de la resolución impugnada, conforme lo dispuesto por los artículos 51, fracciones I y II y 52, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

No obstante la determinación alcanzada, esta Juzgadora advierte que el actor plantea agravios que de resultar fundados implicarían un mayor beneficio, por lo que es procedente entrar a su estudio, en aplicación a la jurisprudencia **I.4o.A. J/73**, cuyo rubro y texto, quedaron debidamente transcritos en párrafos precedentes.

Asimismo, es aplicable la tesis jurisprudencial **I.4o.A. J/44**, dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Mayo de 2006, página 1646, que refiere:

"**SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EN ATENCIÓN AL ORDEN QUE SEÑALA EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE ANULACIÓN, DEBEN ANALIZARSE EN PRIMER LUGAR AQUELLOS QUE LLEVEN A DECLARAR LA NULIDAD MÁS BENÉFICA PARA EL ACTOR.**" [N.E. Se omite transcripción]

En ese contexto, atendiendo los planteamientos antes precisados, a consideración de esta Juzgadora la negativa lisa y llana del actor, respecto a que no existe el documento en el que se advierta la existencia de un crédito fiscal por la infracción por la que se le sanciona, resumida en el punto **2, del inciso D.1), es infundada**, dado que la lesión al fisco federal que se le imputa en cantidad de $3'441,384.70, se encuentra en el Acuerdo de inicio del procedimiento de cancelación de patente de agente aduanal, contenido en el oficio 800-00-00-00-00-2008-333, de fecha 11 de abril de 2008, el cual le fue legalmente notificado el 15 de abril de 2008, previo citatorio, tal como se acredita con las diligencias que en original fueron ofrecidas por el propio actor, visibles a fojas 79 a 80 de las presentes actuaciones., haciendo prueba plena en su contra, en los términos del artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

En ese mismo contexto, resulta igualmente **infundado** su agravio, resumido en el punto **3**, del referido inciso **D.1)**, pues contrario a lo que aduce, el procedimiento de cancelación de patente de agente aduanal, no está viciado desde su inicio, dado que en los términos previstos por el artículo 167, de la Ley Aduanera, una vez determinados los hechos y omisiones que configuraron las causas de cancelación de su patente de agente aduanal, la autoridad se los dio a conocer, precisamente a través del Acuerdo de referencia, en el que otorgó al actor, el plazo de 10 días para que ofreciera las pruebas y expresara lo que a su derecho conviniera, tal como ocurrió en la especie, a través de sus escritos presentados el 29 de abril y 5 de junio de 2008, como se precisa en el punto G, del capítulo de antecedentes del acto impugnado, y se acredita con tales documentos visibles a fojas 379 a 394 y 202 a 212 de autos respectivamente.

Asimismo, es **infundado** el agravio resumido en el punto 7 del inciso de que se trata, pues aun cuando es cierto que la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, mediante resolución contenida en el oficio 800-00-00-00-00-2008-544 de fecha 20 de junio de 2008, resolvió dejar sin efectos el acta de inicio del procedimiento de cancelación de patente de agente aduanal, como consta a fojas 177 a 194, dicho procedimiento fue instaurado en contra del C. Aram

Humberto Hodoyan Navarro, por lo que tal determinación, no puede serle aplicada en el caso, dado que si bien existe identidad en la causa, entendiéndose por ésta, como el hecho generador que las partes hacen valer como fundamento de las pretensiones que reclaman, para que proceda la cosa juzgada, es necesario que exista identidad en las personas, lo cual es evidente en la especie no ocurre, pues el agente aduanal, hoy actor, lo es el C. Manuel Grañen Maynez.

Sustenta lo anterior, la tesis jurisprudencial **1a./J. 161/2007**, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 197, que a la letra dice:

> "**COSA JUZGADA. PRESUPUESTOS PARA SU EXISTENCIA.**" [N.E. Se omite transcripción]

Lo mismo aplica, respecto del oficio 325-SAT-V-A-12272, de fecha 24 de septiembre de 2002, el cual fue emitido por el Administrador Central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal, de la Administración General Jurídica, del Servicio de Administración Tributaria, en respuesta a la consulta que formulara el C. AA Antonio Vadillo Sánchez, mas no por el hoy actor, respecto a que se confirmara el criterio de que no es procedente la causal de cancelación de patente, por la determinación del embargo precautorio, derivado de la omisión de presentación de permiso previo de importación por parte de la Secretaría de Economía, hecho que es diverso al planteado en este juicio, razón por la que los documentos en que se sustenta la pretensión del actor, no sean los idóneos para acreditar la ilegalidad de la resolución que controvierte.

Por otra parte, el agravio del actor precisado en el punto **8, del inciso D.1)**, en el que refiere que la cantidad de $3'441,294.70, determinada como supuesta lesión al fisco, es la misma que se determinó en la resolución 326-SAT-IV-V-56378 de 5 de agosto de 2005, el cual fue dejado sin efectos legales en el RA 5716/2005 de 31 de enero de 2006, es **infundado**.

La determinación anterior, se sustenta en principio, en que la invalidez determinada a dicha resolución, no alcanza al acto controvertido en este juicio, derivado del procedimiento de cancelación de patente de agente aduanal, como quedó precisado en párrafos que anteceden, pues mientras en aquella resolución, se consideró al C. Manuel Grañen Maynez, hoy actor, como responsable solidario del importador por el pago del crédito fiscal en cantidad total de $6,317,598.01, por concepto de impuesto general de importación, derecho de trámite aduanero, impuesto al valor agregado, actualizaciones y recargos, en el Acuerdo de inicio del procedimiento de cancelación de patente de agente aduanal, en que se sustenta la resolución impugnada, se determinó una lesión al fisco federal en cantidad de $ 3'441,284.70, por la actuación desplegada en su carácter de agente aduanal, en la operación de comercio exterior, supracitada.

De donde, es evidente que las cantidades precisadas en los procedimientos de que se trata, no son las mismas, por lo que su agravio al respecto deviene infundado.

Por último, en el agravio resumido por esta Juzgadora en el punto **5, del inciso D.1)**, el actor niega lisa y llanamente que exista un documento administrativo en el que se le haya dado a conocer la existencia de la inexactitud en el pedimento 3727-3000092 y su rectificación número 3727-3000124, ambos de fecha 24 de abril de 2003 y, sobre todo, en qué se hacen consistir los datos inexactos que refiere la autoridad, en qué campos y en qué bloque de los pedimentos citados, es substancialmente **fundado**, en atención a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho que a continuación se apuntan:

Del texto del Acuerdo de inicio del procedimiento de cancelación de patente de agente aduanal, contenido en el oficio 800-00-00-00-00-2008-333, de fecha 11 de abril de 2008, se advierte que la Administración General de Aduanas, en su fojas 9, 85 de autos, precisa:

[N.E. Se omite transcripción]

De la transcripción que antecede, resulta evidente que es la propia autoridad, quien reconoce que la información del pedimento es correcta, lo que evidencia que no se configura la causal prevista en el artículo 165, fracción II, inciso a) de la Ley Aduanera, el cual no obstante ya fue transcrito con antelación, dada su importación se precisa nuevamente su texto en la parte conducente:

[N.E. Se omite transcripción]

Del precepto legal transcrito, se tiene que, como causa para que sea cancelada la patente de agente aduanal, que se declare con inexactitud algún dato en el pedimento o en la factura, tratándose de operaciones con pedimento consolidado, siempre que la omisión en el pago de impuestos al comercio exterior, derechos y cuotas compensatorias, en su caso, exceda de $100,000.00.

De donde se sigue que el presupuesto sine qua non, en principio es que se declaren datos inexactos en el pedimento consolidado, mismo que no se da en la especie, por reconocimiento expreso de la autoridad en el acuerdo de inicio del procedimiento de cancelación de patente de agente aduanal, lo que hace prueba plena en términos del artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, máxime que no debe soslayar que conforme al artículo 5º del Código Fiscal de la Federación, en el que ella misma sustenta tal actuación, las disposiciones fiscales que establecen cargas a los particulares son de aplicación estricta.

Por tanto, es evidente que al ser el hoy actor, agente aduanal, es sujeto de aplicación de lo previsto por el artículo 165, de la Ley Aduanera, siempre que se dé el hecho generador que lo ubique en la hipótesis normativa, lo cual en el caso no ocurre, por lo que resulta ilegal que se haya cancelado su patente de agente aduanal.

Máxime, que a consideración de esta Juzgadora, tampoco existe la infracción a lo previsto por el artículo 13, del Anexo III, del Decreto Promulgatorio del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, la Decisión

del Consejo Conjunto de dicho Acuerdo; y la Decisión del Consejo Conjunto Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 2000, que al respecto dispone:

[N.E. Se omite transcripción]

De lo dispuesto por el artículo 13, del Anexo III, de la Decisión de que se trata, se tiene lo siguiente:

➢ Las mercancías transportadas directamente entre el territorio de la Comunidad Europea y México, tienen trato arancelario preferencia.

➢ De ser necesario, los productos que constituyan un único envío podrán ser transportados en tránsito por otros territorios con transbordo o depósito temporal, siempre:

- Que hayan permanecido bajo la vigilancia de las autoridades aduaneras del país de tránsito o de depósito, y;

- Que no hayan sido sometidos a operaciones distintas a las de descarga o cualquier otra destinada a mantenerlos en buen estado.

➢ Las condiciones citadas, se pueden acreditar ante las autoridades aduaneras del país de importación, entre otros:

- Con el documento único de transporte al amparo del cual se haya efectuado el transporte desde el país de exportación a través del país de tránsito; o

- Un certificado expedido por la autoridades aduaneras del país de tránsito que contenga:

- ✓ Una descripción exacta de los productos;
- ✓ La fecha de descarga y carga de las mercancías
- ✓ Cuando corresponda, los nombres de los barcos y otros medios de transporte utilizados, y;
- ✓ La certificación de las condiciones en las que permanecieron las mercancías en el país de tránsito; o

• En ausencia de ello, cualquier documento de prueba.

Precisado lo anterior, esta Juzgadora advierte que el actor, a través de su escrito de fecha 12 de agosto de 2008, ofreció ante la autoridad demandada el documento expedido por una autoridad aduanera de los Estados Unidos de América, para acreditar que la mercancía importada, estuvo en tránsito en Houston, Texas, bajo control y supervisión aduanera de aquel país, sin embargo a fojas 16 de la resolución impugnada, 75 de autos, se resolvió lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

De lo transcrito, se desprende que la autoridad demandada, desestimó el documento fechado el 12 de agosto de 2008, considerando para ello:

a) Que al no haber sido presentada en original o bien copia certificada, no es susceptible de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido y, además, porque no se encuentra adminiculada para que tuviera el carácter de indicio.

b) Que fue expedida en una Ciudad y por una autoridad diversa a la que geográficamente correspondía.

c) Que por tanto, no se acredita por el C. Manuel Grañen Maynez, que dicho documento fue expedido por quien dice que lo expidió y que la autoridad emisora, tenga competencia en materia y territorio para pronunciarse respecto de los actos que realizó la oficina del U.S. Custom and Border Protection, en la Ciudad de Houston, Texas.

La valoración que realiza la autoridad al documento fechado el 12 de agosto de 2008 resulta ilegal, tal como lo aduce el actor, pues es de relevancia precisar que si bien es cierto, dicho documento fue exhibido en copia simple, con su correspondiente traducción, al respecto el hoy actor, manifestó:

[N.E. Se omite transcripción]

Como se advierte, el actor fue enfático en manifestar a la autoridad que la exhibición del documento de cuenta, se hacía en copia simple, con su respectiva traducción, en razón de la premura de su emisión, estando en espera de la recepción de su original, lo que a juicio de esta Sentenciadora implica que dicho documento, pudo ser requerido por la autoridad, ya que nada se lo impedía, máxime que se presupone la existencia de su original, conforme lo dispuesto por el artículo 207, del Código Federal de Procedimientos Civiles, que al respecto establece:

[N.E. Se omite transcripción]

Asimismo, contrario a lo manifestado por la demandada, dicho documento tiene valor probatorio de la exactitud de los datos contenidos en él, dada la adminiculación que esta Juzgadora realiza del mismo, con el pedimento de importación 03 06 3727 3000092, clave A1, su respectiva rectificación número 03 06 3727 3000124, de fecha de pago de 24 de abril de 2003, la factura número C03JBV-P029, de 25 de febrero de 2005, las guías aéreas 0321 7561 y 6466162231, visibles a fojas 360-361, 366-367; 362, 372 y 373 de autos, respectivamente, exhibidas por la autoridad al contestar la demanda, los cuales hacen prueba plena, conforme lo dispuesto en el artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Admi-

nistrativo, por el reconocimiento que de dichos documentos, realiza la demandada tanto en el Acuerdo de inicio del procedimiento de cancelación de patente de agente aduanal, como en la resolución impugnada, de acuerdo a los diversos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, documentos cuya digitalización, tal como fueron exhibidos por la autoridad, son del tenor siguiente:

[N.E. Se omiten imágenes]

Relacionado el escrito fechado el 12 de agosto de 2008 y su correspondiente traducción, con los documentos digitalizados, se desprende que el C. Sergio Ramos, Oficial de la autoridad aduanera, en Laredo, Texas, de los Estados Unidos de América, bajo protesta de decir verdad (I hereby manifest that), manifestó:

1. Que la mercancía consistente en 1 kilogramo de software, importada de Amsterdam, a Ciudad del Carmen, **arribó al Aeropuerto de Houston, bajo fianza en tránsito, con número de entrada 666325056**, y guías aéreas AMS/HOU DHL **6466162231**, del 16 de abril de 2003 y HOU/CAR Aeromexpress **97603217561**, de 22 de abril de 2003.

2. Que dicha mercancía fue embarcada por la empresa Jason Geosystems B.V. de Rotterdam, Holanda, dirigida a la empresa Geomundo, S.A. de C.V. en Ciudad del Carmen, México.

3. Que la mercancía de que se trata permaneció en Houston, Texas del arribo a su entrega para salida en las instalaciones de Jason Geosystems, Houston en Ashford Suite 705 p.c. 77079, **bajo control y supervisión de la aduana** y con autorización especial debido al alto valor y reducido volumen de la carga, por razones de seguridad, a solicitud y responsabilidad del agente aduanal autorizado Atlantis Forwarding.

4. Que **el tránsito bajo fianza** se llevó a cabo en debido curso y **fue reembarcado en la misma condición en que fue recibido.**

Precisados los datos señalados en el escrito de 12 de agosto de 2008, adminiculados con los datos señalados en los pedimentos, factura y guías aéreas reproducidas, conforme lo establecido por los artículos 207 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, esta Juzgadora le concede valor probatorio al referido escrito, con el que se demuestra que la mercancía importada, estuvo en todo momento bajo resguardo de la autoridad aduanera de Houston, Texas, Estados Unidos de América.

Ello es así, pues si bien las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio.

En consecuencia, resulta falso que carezca de valor probatorio el escrito fechado el 12 de agosto de 2008, por el sólo hecho de carecer de certificación, pues la misma al haber sido considerada por la autoridad como un indicio, debió atender a los hechos que con ella se pretendían probar, en forma conjunta con los demás elementos probatorios que obren en autos, tal como lo hace esta Juzgadora, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgársele.

Sustenta lo anterior, la tesis jurisprudencial **I.3o.C. J/37**, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Mayo de 2007, página 1759, que señala:

> "**COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.**" [N.E. Se omite transcripción]

Sin que sea óbice a lo anterior, el argumento de la demandada vertido en la resolución impugnada, de que dicho escrito fue emitido en una Ciudad y por una autoridad diferente a la que geográficamente le correspondía, ya que no debe

soslayarse que el referido funcionario de la Aduana del Estado de Texas, quien da fe bajo protesta de decir verdad, precisó en el supracitado escrito, que la mercancía permaneció en Houston, Texas, bajo control y supervisión de la aduana, sin que exista precepto legal alguno que obligue al agente aduanal, a acreditar la competencia con que dicho funcionario extranjero suscribe el documento de que se trata, como ilegalmente lo pretende la demandada.

Por tanto, no basta que la autoridad en el acto impugnado, refiera que no es factible que tal escrito sea susceptible de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se puede confeccionar, ya que se hacía necesario que acreditara con documento idóneo que dicho escrito se encuentra alterado, lo cual no acontece en el caso, por lo que a consideración de esta Juzgadora, el mismo es suficiente para demostrar que la mercancía de que se trata, estuvo en tránsito en Houston, Texas, bajo el control y supervisión de la autoridad aduanera correspondiente, requisito que prevé el artículo 13, del Anexo III, de la Decisión 2/2000, para otorgar el trato arancelario a las mercancías importadas de la Comunidad Europea a México.

Siendo importante resaltar, lo manifestado por la autoridad a fojas 20 de la contestación a la demanda, 335 de autos, respecto a que no aplica la regla 2.6.20 contenida en las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2003, lo cual aun cuando es cierto, no le impedía que aplicara lo dispuesto por el artículo 13, del Anexo III, del Decreto por el que se aprueban el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra; la Decisión del Consejo Conjunto de dicho Acuerdo; y la Decisión del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, por una parte y la Comunidad Europea, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2000, dado que el escrito de 12 de agosto de 2008, se ajusta a la hipótesis contenida en dicho artículo y acredita la pretensión del actor, respecto a que la mercancía importada de la Comuni-

dad Europea, estuvo bajo control y resguardo en Houston, Texas, Estados Unidos de América, País por el que transitó.

Por tanto, procede declarar la nulidad de la resolución impugnada, conforme lo previsto por los artículos 51, fracción IV y 52, fracción IV y segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que los hechos en que se sustentó la autoridad se apreciaron de forma equivocada, aplicando, además, de forma indebida lo previsto por el artículo 165, fracción II, inciso a) de la Ley Aduanera, dejando de aplicar en cuanto al fondo, lo previsto por el artículo 13, del Anexo III, de la decisión 2/2000, supracitada, para el efecto de que no se cancele la patente de agente aduanal del C. Manuel Grañen Maynez y se informe, tanto al Administrador de la Aduana de adscripción del hoy actor, así como a los demás Administradores de las Aduanas en las que se encuentra autorizado para actuar, para que lo siga haciendo, lo que deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses contados a partir de que la sentencia quede firme.

Conforme la determinación alcanzada, esta Juzgadora se abstiene de analizar los tres restantes conceptos de impugnación del actor, en razón de que el resultado de los mismos, no cambiaría en nada el sentido de este fallo, ni irrogaría mayores beneficios al actor, que los aquí determinados.

No obstante lo anterior, resulta procedente resolver la solicitud del demandante en cuanto al pago de daños y perjuicios, en el siguiente considerando.

[...]

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 49, 50, 51, fracciones II y IV; 52 fracción IV y segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el artículo 18, fracción XV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se resuelve:

I.- Resultó procedente el presente juicio, en el que el actor acreditó su pretensión, por tanto:

II.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada precisada en el Resultando 1º de este fallo, por los fundamentos y motivos y para los efectos precisados en los Considerandos Quinto y Sexto del mismo.

III.- No ha lugar a reconocer el derecho a la indemnización, solicitado por el actor.

IV.- NOTIFÍQUESE.- Con copia autorizada de esta resolución devuélvanse los autos del juicio de nulidad a la Segunda Sala Regional Metropolitana, una vez que haya quedado firme, y, en su oportunidad archívese este expediente.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día 01 de septiembre de 2010, por mayoría de 8 votos a favor de los CC. Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Alejandro Sánchez Hernández, Alfredo Salgado Loyo, Silvia Eugenia Díaz Vega, Olga Hernández Espíndola, Juan Manuel Jiménez Illescas, Luis Carballo Balvanera y Francisco Cuevas Godínez y, 1 más con los puntos resolutivos de la C. Magistrada Nora Elizabeth Urby Genel. Estuvieron ausentes los CC. Magistrados Manuel Luciano Hallivis Pelayo y Jorge Alberto García Cáceres.

Fue Ponente el Magistrado Luis Carballo Balvanera, cuya ponencia fue aprobada.

Se elaboró el presente engrose el 14 de septiembre de 2010 y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 30, fracción V y 47, fracción III de la vigente Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO

VI-P-SS-417

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO.- CORRESPONDE AL RECLAMANTE DEMOSTRAR LOS ELEMENTOS ESENCIALES QUE LA LEY EXIGE PARA TENER DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN.- De conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, ésta tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado. Dentro de las bases a que se refiere el precepto legal citado, se destacan las establecidas en los artículos 4, 21 y 22 de la propia ley, cuya aplicación armónica y congruente permite establecer que, para reconocer el derecho a la indemnización, el reclamante debe demostrar fehacientemente la actividad administrativa irregular imputable al Estado, la existencia de los daños y perjuicios que constituyan la lesión patrimonial reclamada, mismos que habrán de ser reales, evaluables en dinero, directamente relacionados con una o varias personas y desiguales a los que pudieran afectar al común de la población; así como la relación causa-efecto entre estos elementos esenciales, exigencias que se justifican, ya que sería dogmático y arbitrario sostener que una actividad administrativa irregular por sí misma genera un daño, de ahí que los preceptos legales referidos limiten y determinen como indemnizable, sólo el daño que efectivamente se ocasione con motivo de una actividad administrativa irregular. En tal virtud, se concluye que el derecho a la indemnización no nace de manera automática, por el sólo hecho de actualizarse una actividad irregular del ente público federal, sino que para ello es necesario que además, el reclamante demuestre los demás elementos que la ley exige para que se actualice la responsabilidad patrimonial del Estado, esto es, la existencia real del daño sufrido, así como el nexo causal entre éste y la referida actuación administrativa irregular, por lo que de no cumplirse con estas exigencias deberá negarse la indemnización reclamada.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5327/08-05-01-7/2539/09-PL-10-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 27 de septiembre de 2010, por mayoría de 8 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretario: Lic. Oscar Elizarrarás Dorantes.
(Tesis aprobada en sesión de 27 de septiembre de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

TERCERO.- [...]

De una lectura integral realizada a la resolución impugnada, se advierte que la Primera Sala Regional del Norte-Centro II, resolvió negar la indemnización reclamada por la demandante, esencialmente, por los siguientes fundamentos y motivos:

- Que la hoy actora compareció a reclamar la indemnización de daños en cantidad de $52,000,000, por la presunta responsabilidad irregular atribuida al Delegado en Coahuila de la Procuraduría Federal del Consumidor, al haber emitido la orden de visita PFC.C.B.1.05/000002-2006, y por la clausura de los dispensarios de combustible que se encontraban en su domicilio, manifestando de manera simple y sencilla que el Juzgado de Distrito y los Magistrados de Circuito declararon que la autoridad actúo de manera ilegal al inmovilizar los referidos dispensarios de combustible, lo cual violó el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

- Que no obstante lo anterior, de una manera general y abstracta se limita a hacer dichas manifestaciones, sin probar la responsabilidad del Estado, tomando en consideración la causa o causas productoras del daño que sean identificables, la relación causa-efecto entre la lesión patrimonial y la

acción administrativa irregular imputable al Estado, pues no acreditó que el actuar de la autoridad le haya ocasionado un daño patrimonial, al no exhibir y desahogar las pruebas necesarias para acreditar su dicho, a lo cual se encontraba obligada en términos de lo establecido en los artículos 21 y 22 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

- Que los artículos 21 y 22 de la citada ley, establecen que el reclamante que considere lesionado su patrimonio, por no tener la obligación jurídica de soportarlo, deberá probar la responsabilidad del Estado, lo que no acontece en el caso concreto, pues la reclamante se limitó a atribuirle a la autoridad una violación genérica relacionada con la clausura de su establecimiento el día 04 de febrero de 2006, y que ello le ocasionó daños en cantidad de $52,000,000.00, sin embargo, tal argumento impide saber con certeza qué perjuicio le ocasionó la clausura referida y cómo cuantificó el supuesto daño en la cantidad reclamada.

- Que la reclamante afirmó que la actividad de la autoridad le ocasionó un daño en su patrimonio en cantidad de $52,000,000, al inmovilizar dispensarios de combustible de su domicilio, por lo que le correspondía demostrar que el daño patrimonial que invoca fue ocasionado en dicha cantidad, por lo que al no haberlo hecho, su simple afirmación resulta infundada para acreditar lo que pretende y, por lo tanto, es improcedente la indemnización que solicita.

La determinaciones que anteceden se encuentran ajustadas a derecho, ya que los artículos 1, 3, 4, 21 y 22 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, vigentes en la fecha en que la hoy actora presentó su reclamación ante la Primera Sala Regional del Norte-Centro II; y que sostiene fueron violentados al emitirse la resolución impugnada en el presente juicio, disponen lo siguiente.

[N.E. Se omite transcripción]

Como se advierte, el artículo 1 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, establece que dicha ley tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado; y al igual que el segundo párrafo del artículo 113 constitucional que reglamenta, dispone que la responsabilidad a cargo del Estado será objetiva y directa.

Asimismo, dicho precepto establece que por actividad administrativa irregular, se entenderá aquella que cause daño a los bienes y derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate.

Ahora bien, dentro de las bases a que se refiere el precepto legal en comento, se destacan las establecidas en los artículos 4, 21 y 22 de la propia ley, cuya aplicación armónica y congruente permite establecer que, para reconocer el derecho a la indemnización, el reclamante debe demostrar fehacientemente, la actividad administrativa irregular imputable al Estado, así como la existencia de los daños y perjuicios que constituyan la lesión patrimonial reclamada, mismos que habrán de ser reales, evaluables en dinero, directamente relacionados con una o varias personas y desiguales a los que pudieran afectar al común de la población; y la relación causa-efecto entre estos elementos esenciales, exigencias que se justifican, ya que sería dogmático y arbitrario sostener que una actividad administrativa irregular por sí misma genera un daño, de ahí que los preceptos legales referidos, limiten y determinen como indemnizables sólo el daño que efectivamente se ocasione con motivo de una actividad administrativa irregular.

Así, se concluye que el derecho a la indemnización, no nace de manera automática, por el sólo hecho de actualizarse una actividad irregular del ente público federal, sino que para ello es necesario que además el reclamante demuestre los demás elementos esenciales que la ley exige para que se actualice la responsabilidad patrimonial del Estado, esto es, la existencia real del daño sufrido, así como el nexo

causal entre éste y la referida actuación administrativa irregular, por lo que de no cumplirse con estas exigencias deberá negarse la indemnización reclamada.

En el caso que nos ocupa, la parte actora sostiene que la Primera Sala Regional del Norte-Centro II de este Tribunal, realizó una inexacta e indebida valoración de la prueba y aplicación de la ley, pues la responsabilidad patrimonial del Estado es objetiva y directa, por lo que sólo debió demostrar que la actuación del Estado fue irregular, **no que fue dolosa o culposa**, exigencia que se encuentra satisfecha en el caso concreto, pues demostró que los funcionarios cuya responsabilidad se reclama, actuaron en horas inhábiles, sin autorización alguna y que inmovilizaron los dispensarios de combustible instalados en su domicilio, impidiéndole vender al público gasolina y diesel.

Asimismo, afirma la enjuiciante que sí está acreditado en autos, que es una persona moral dedicada a la venta de gasolina y diesel; y que la autoridad inmovilizó los dispensarios para vender dichos combustibles, es indubitable que esa actuación irregular le causó daños y perjuicios que no tiene obligación de soportar, por lo que si la autoridad no controvirtió el monto de la indemnización reclamada, ni alegó causa de excepción alguna, ni demostró que la lesión jurídica obedece a una causa diferente a su actuación irregular, la Primera Sala Regional del Norte-Centro II, debió considerar fundada su pretensión declarando que existe la obligación del Estado de reparar la lesión patrimonial y condenar al pago de la indemnización reclamada.

Los argumentos que anteceden son infundados y, por lo tanto, deben desestimarse, porque por una parte la Primera Sala Regional del Norte-Centro II de este Tribunal, al negar la indemnización reclamada, en ningún momento consideró que la actora debía demostrar que la actuación del ente público federal del Estado, fue dolosa o culposa, por el contrario, consideró que la reclamante se limitó a realizar simples manifestaciones sin sustento probatorio alguno y que no acreditó que el actuar de la autoridad le haya ocasionado un daño patrimonial, al no haber exhibido y desahogado las pruebas necesarias para acreditar tal extremo, a lo cual se encontraba

obligada en términos de lo establecido en los artículos 21 y 22 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

Además, si bien es un hecho afirmado por la actora y que fue plenamente reconocido por la Procuraduría Federal del Consumidor, que los verificadores adscritos a la Delegación en el Estado de Coahuila de la citada Procuraduría, procedieron el día sábado **04 de febrero de 2006**, a colocar aflijas y sellos de inmovilización en las bombas o dispensarios de combustible instalados en la estación de servicio 4074 (Gasolinera) propiedad de la hoy actora y que ello le impidió a ésta vender al público dicho combustible, ello es insuficiente para tener por acreditada la responsabilidad patrimonial del Estado y, por ende el derecho a la indemnización que reclama, porque como se señaló con antelación, la ley exige que el reclamante demuestre fehacientemente la existencia real del daño sufrido, así como el nexo causal entre éste y la referida actuación administrativa irregular, lo que no acontece en el caso concreto, pues no existe constancia en autos que demuestre plenamente que la inmovilización de las referidas bombas o dispensarios de combustibles le generaron un daño a la actora, por lo que de no cumplirse con esta exigencia resulta apegado a derecho que se le haya negado la indemnización reclamada.

Sin que sea óbice a lo anterior, el argumento de la actora relativo a que la autoridad no controvirtió el monto de la indemnización reclamada, ni alegó causa de excepción alguna, ni demostró que la lesión jurídica obedece a una causa diferente a su actuación irregular, argumento que debe desestimarse, ya que el artículo 22 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, es categórico en establecer que la responsabilidad del Estado deberá probarla el reclamante que considere lesionado su patrimonio, por no tener la obligación jurídica de soportarlo, esto es, corresponde a la actora y no a la autoridad demostrar los elementos que exige la ley para que se configure la responsabilidad patrimonial del Estado.

Además, de la resolución impugnada se advierte que mediante oficio PFC.D.B.9/005618-2007/1352960/2008 de 18 de marzo de 2008, la Procuraduría Federal del Consumidor, dio contestación a la reclamación interpuesta por la hoy actora, en la

que sostuvo la improcedencia de la indemnización que reclama, por lo que es evidente que sí controvirtió la responsabilidad que le fue imputada, como lo hace en el presente juicio, pues al efecto sostuvo en su oficio PFC.D.B.9/005618-2007/1123450/ 2009 de 13 de marzo de 2009, visible a fojas 69 a 75 del expediente en que se actúa que suponiendo sin conceder que hubiera existido una actividad irregular del Estado, por conducto de la Procuraduría Federal del Consumidor, la indemnización solicitada por la demandante no procede, pues para ello, debió acreditar tanto la acción u omisión de la referida Procuraduría, como la auténtica generación y monto de los daños y perjuicios causados, así como la relación de causalidad, entre ambos, lo cual jamás aconteció.

En tal virtud, esta juzgadora concluye que los argumentos de agravio de la actora en estudio son infundados, porque como acertadamente lo sostuvo la Primera Sala Regional del Norte-Centro II, la actora se concreta a realizar manifestaciones sin probar la responsabilidad patrimonial que le atribuyó al Delegado en Coahuila de la Procuraduría Federal del Consumidor, pues no demostró fehacientemente que la actuación administrativa irregular que le atribuye a esa autoridad, consistente en la inmovilización de las bombas o dispensarios ubicados en una gasolinera de su propiedad, le haya generado efectivamente un daño patrimonial, ni mucho menos que éste haya sido por la cantidad de $52,000,000, pues ni en el procedimiento administrativo, ni el presente juicio demostró tales extremos, a lo que estaba obligada de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 4, 21 y 22 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, por lo que sus simples manifestaciones sin sustento probatorio, impiden saber con certeza qué perjuicio le ocasionó la inmovilización referida y cómo cuantificó el supuesto daño en la cantidad reclamada.

Por otra parte, la enjuiciante sostiene que la Primera Sala Regional del Norte-Centro II, no aplicó los principios de valoración de la prueba en el procedimiento administrativo, ya que las documentales que fueron ofrecidas como pruebas, constituyen actuaciones judiciales que hacen prueba plena y al no estimarlo así la Sala, violó en su perjuicio los preceptos constitucionales y legales invocados.

El argumento de agravio que antecede es inoperante, porque si bien es cierto que las actuaciones judiciales realizadas por los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados integrantes del Poder Judicial de la Federación, tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por constituir documentos públicos, también es verdad que en el caso concreto, la actora no ofreció ni exhibió como prueba, el escrito de 05 de septiembre de 2007, a través del cual, interpuso ante la Primera Sala Regional del Norte-Centro II, la reclamación de indemnización de daños, por lo que esta juzgadora se encuentra impedida para corroborar si efectivamente en el procedimiento tramitado por dicha Sala Regional, ofreció y exhibió como pruebas documentales, actuaciones practicadas por órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.

Caber referir, que es un hecho afirmado por la hoy actora en su demanda y que es reconocido por la Procuraduría Federal del Consumidor, que aquélla promovió juicio de garantías en contra de la inmovilización de las bombas o dispensarios de combustible ubicados en una gasolinera de su propiedad, que fue realizada por personal adscrito a la Delegación en el Estado de Coahuila de la citada Procuraduría, el día sábado **04 de febrero de 2006**.

Sin embargo, debe precisarse que la actora en el presente juicio no ofreció ni exhibió como pruebas las actuaciones que según su dicho, fueron realizadas por el Juzgado Segundo "A" de Distrito en la Laguna y por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito del Poder Judicial de la Federación, con motivo del juicio de amparo de mérito, por lo que esta juzgadora se encuentra impedida jurídicamente para confirmar la veracidad de sus afirmaciones, esto es, si efectivamente el referido Juzgado de Distrito le concedió el amparo solicitado, por haber considerado ilegal que los verificadores adscritos a la Delegación en el Estado de Coahuila de la citada Procuraduría, actuaron en horas inhábiles, **sin autorización alguna**.

Además, suponiendo sin conceder que se encuentre acreditado en autos que el referido Juzgado de Distrito le haya concedido el amparo a la empresa actora por los

motivos que señala en su demanda, ello sería insuficiente para acreditar la responsabilidad patrimonial de la Procuraduría Federal del Consumidor como ente público federal del Estado, pues se reitera, para ello la actora debió demostrar plenamente los daños que según su dicho le ocasionó la inmovilización de los dispensarios de combustible, lo que no acontece en la especie, pues ni en el procedimiento administrativo seguido ante la Primera Sala Regional del Norte-Centro II, ni en el presente juicio demostró tal extremo, por lo que debe desestimarse el argumento de agravio que sobre el particular formuló la parte actora, al no acreditarse la violación a los preceptos legales invocados.

Lo anterior se robustece, si se considera que el artículo 23 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, vigente en la época de los hechos, establece claramente que las resoluciones que dicte el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con motivo de las reclamaciones que prevé la presente Ley, deberán contener como elementos la existencia de la relación de causalidad entre la actividad administrativa y la lesión producida y la valoración del daño o perjuicio causado, así como el monto en dinero o en especie de la indemnización, explicitando los criterios utilizados para su cuantificación, por lo que es inconcuso que la empresa actora debió acreditar fehacientemente y, no mediante inferencias, los daños y perjuicios que según su dicho le fueron ocasionados con motivo de la inmovilización de las bombas o dispensarios de combustible que se encontraban en el establecimiento que fue motivo de verificación por parte de los inspectores de la Procuraduría Federal del Consumidor, lo que no acontece en el caso.

A este respecto es importante señalar, que no pasa desapercibido para esta juzgadora que la actora ofreció en su demanda como prueba de su parte, la pericial contable a cargo del contador público Jorge Márquez Salazar, para acreditar las ventas promedio que tuvo en los últimos meses anteriores a la referida inmovilización de sus bombas o dispensarios de combustible y así demostrar el daño que según su dicho le fue ocasionado, sin embargo, debe señalarse que mediante acuerdo de 02 de marzo de 2009, visible a fojas 63 y 64 del expediente principal en que se actúa, el Magistrado Instructor de la Primera Sala Regional del Norte-Centro II, **desechó di-**

cha prueba pericial por considerarla no apta para desvirtuar los motivos y fundamentos que sustentan la resolución impugnada, **determinación que no fue impugnada por la actora mediante recurso de reclamación** previsto en el artículo 59 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que dicha determinación debe considerarse consentida.

[...]

En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 49, 50 y 52, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de diciembre de 2007 y en vigor a partir del día siguiente al de su publicación, se resuelve:

I.- La parte actora no probó los extremos de su pretensión, en consecuencia;

II.- SE RECONOCE LA VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, señalada en el resultando primero de esta sentencia;

III.- NOTIFÍQUESE.- Con copia autorizada del presente fallo a las partes y una vez que haya quedado firme, archívese este expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 27 de septiembre de 2010, por mayoría de 8 votos a favor de los Magistrados Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Alejandro Sánchez Hernández, Alfredo Salgado Loyo, Silvia Eugenia Díaz Vega, Olga Hernández Espíndola, Juan Manuel Jiménez Illescas, Luis Carballo Balvanera y Francisco Cuevas Godínez; y 1 voto con los puntos resolutivos de la Magistrada Nora Elizabeth Urby Genel, encontrándose ausentes los Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez y Jorge Alberto García Cáceres.

Fue Ponente en este asunto el Magistrado Luis Carballo Balvanera, cuya ponencia se aprobó en sus términos.

Se elaboró el presente engrose el 14 de octubre de 2010 y con fundamento en los artículos 30, fracción V y 47, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de diciembre de 2007, firma el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos que da fe.

COMERCIO EXTERIOR

VI-P-SS-418

ORIGEN DE MERCANCÍAS IMPORTADAS DE UN PAÍS MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EUROPEA. PUEDE HACERSE CONSTAR EN LA FACTURA COMERCIAL, EL CONOCIMIENTO DE EMBARQUE O LA LISTA DE EMPAQUE, POR EL PAÍS EXPORTADOR NO MIEMBRO.- El artículo 20, de las Notas Explicativas del Anexo III de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino Sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2001, establece que las declaraciones en factura tienen que ser emitidas por un exportador establecido en el territorio de una de las Partes, sin embargo, en el caso que una factura se emita en un tercer país, la declaración en factura podrá aparecer en cualquier otro documento comercial, esto es, el conocimiento de embarque o lista de empaque (parking list). Siempre que describa los productos de que se trate de manera detallada para que puedan identificarse como originarios de un país miembro de la Comunidad Europea, de conformidad con el Anexo III, en cuyo caso, la identidad del exportador de las mercancías deberá figurar en el documento que contenga la declaración de origen y ajustar el texto de la declaración a lo previsto en el Apéndice IV del supracitado Anexo. De lo que se sigue, que en el caso de que en el juicio contencioso administrativo, tramitado ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se controvierta la resolución liquidatoria, que negó el trato arancelario preferencial considerando que la factura comercial o bien lista de empaque, fue emitida por un exportador de un país no miembro, debe proceder la declaración de su nulidad, cuando se acredite con la factura comercial, conocimiento de embarque o lista de empaque, que el exportador de un país no miembro de la referida Comunidad Europea, precisa debidamente que el origen de la mercancía importada es de un país miembro.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 28027/08-17-11-6/95/10-PL-10-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administra-

tiva, en sesión de 6 de octubre de 2010, por unanimidad de 9 votos a favor. - Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla.
(Tesis aprobada en sesión de 6 de octubre de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

CUARTO.- [...]

Atendiendo que en el Considerando que antecede, quedó debidamente precisado que en el caso, se está ante una litis abierta, a fin de resolver debidamente los planteamientos de las partes contendientes, se tiene que dicha litis a dilucidar, consiste en:

• Determinar si con los documentos exhibidos por el actor ante la autoridad en su recurso de revocación y ante este Órgano Colegiado, esto es, la factura número 7102180 de fecha 22 de noviembre de 2007, la lista de empaque ("PAQUING LIST") y el certificado de origen número 060762127, se acredita o no el origen de la mercancía importada a través del pedimento de importación número 07 43 3708 7000943.

Para estar en aptitud de resolver lo anterior, esta Juzgadora estima necesario precisar, que el 26 de junio de 2000, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se establecen las Reglas en Materia de Certificación de Origen de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino Sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, el cual en sus artículos 2, 3, establece lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Por su parte, los artículos 2, 15, 20 y 21 del Anexo III de la Decisión de que se trata, publicadas también en ese mismo Órgano Informativo el 26 de junio de 2000, a la letra disponen:

[N.E. Se omite transcripción]

De una interpretación armónica y conjunta a los preceptos legales transcritos del Acuerdo por el que se establecen las Reglas en Materia de Certificación de Origen de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino Sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y de su Anexo III, se tiene que los productos originarios de la Comunidad Europea para su importación a México y, los productos originarios de México para su importación a dicha Comunidad, gozarán de trato arancelario preferencial, si el importador cuenta con una prueba de origen válida, esto es, un certificado de circulación de mercancías EUR 1 ó la declaración en factura, en cuyo último caso, el exportador deberá describir los productos de que se trate, suficientemente detallados para su identificación y el número de exportador autorizado, otorgada por las autoridades aduaneras o gubernamentales competentes, del país de exportación.

Ahora bien, el artículo 20, de las notas explicativas del Anexo III de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino Sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2001, en lo conducente prevé:

[N.E. Se omite transcripción]

Conforme el artículo transcrito, se tiene que las declaraciones en factura pueden ser expedidas por exportador establecido en el territorio de una de las Partes o bien, de un tercer país, en cuyo caso la declaración en factura podrá aparecer en cualquier otro documento comercial, entendiéndose por éstos, el conocimiento de embarque o la **lista de empaque que acompañan a las mercancías**, siendo ello

plenamente reconocido por el Subadministrador Local Jurídico del Sur del Distrito Federal, quien suscribe en suplencia por ausencia del titular de dicha Administración, el oficio de contestación a la demanda, la autoridad, a fojas 11 del referido oficio, en los siguientes términos:

[N.E. Se omite transcripción]

Lo que se ve robustecido, con lo previsto en la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución en Materia Aduanera de la Decisión 2/2000, del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino Sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la comunidad Europea, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2006, y con lo estatuido en el Apéndice IV, del Anexo III de la Decisión citada, los cuales en la parte que es de interés, prevén:

[N.E. Se omite transcripción]

Bajo ese contexto, es evidente que el acreditamiento de que las mercancías importadas conforme la Decisión 2/2000 del Acuerdo Interino Sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, son originarias de un país miembro, puede establecerse en el certificado de circulación EUR1, o bien en la factura comercial o lista de empaque, expedida por el exportador de un tercer país, esto es, que no se ubique en la Comunidad Europea.

Bajo ese contexto, se tiene que a fojas 45 y 46, del expediente en que se actúa, obra agregada copia certificada del pedimento de importación número 07- 43-3708 7000943, de fecha de pago 27 de diciembre de 2007, cuyo texto digitalizado es el siguiente:

[N.E. Se omiten imágenes]

De la revisión al pedimento de importación de que se trata, se desprende que en el mismo se asentaron los siguientes datos:

1. Que el actor importó, entre otras mercancías, “Lactrex Loción 125 ML”, en 4520.000 unidades y “Lactrex Crema Corporal 60 GM”, en 7936.000 unidades, especificando textualmente que su país de origen es “FRANCIAS” y además, que al exportador y al país de origen les corresponde, respectivamente las Claves “CHE” y “FRA”.

2. Que el proveedor de la mercancía es la empresa: “Galderma, S.A.”, cuyo domicilio se ubica en: “AV. DE GRATTA-PAILLE NO. 2 INT CP453, C.P. CH1000, LAUSANNE 30 GREY, SUIZA (CONFEDERACIÓN).

3. Que a dicho pedimento se anexó, la factura comercial con precisión de origen autorización aduanera No. “FR 000140/004”, conocimiento marítimo y traducción de factura, conforme lo dispuesto por la regla de carácter general 2.6.1, 2.6.2 y 5.1.4, en materia de comercio exterior para 2007, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2007, que a la letra señalan:

[N.E. Se omite transcripción]

La regla 5.1.4, remite expresamente al anexo ANEXO 22, que establece el instructivo para el llenado del pedimento, en cuya parte que es de interés señala:

[N.E. Se omite transcripción]

Asimismo, dicho anexo 22, hace la remisión al apéndice 4, en el que se establecen las claves de los países, correspondiendo a las Claves “FRA” y “CHE”, lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

De lo que se sigue, que la empresa exportadora es de origen suizo, quien refiere que la mercancía que se importa, es de origen francés.

Ahora bien, de la regla de carácter general 2.6.1 y 2.6.2, se desprende que al pedimento de importación deben anexarse las facturas que podrán ser expedidas por proveedores nacionales o extranjeros y presentarse en original o copia.

Además, que la factura comercial deberá contener los siguientes datos:

1. Lugar y fecha de expedición.
2. Nombre y domicilio del destinatario de la mercancía. En los casos de cambio de destinatario, la persona que asuma este carácter anotará dicha circunstancia bajo protesta de decir verdad en todos los tantos de la factura.
3. La descripción comercial detallada de las mercancías y la especificación de ellas en cuanto a clase, cantidad de unidades, números de identificación, cuando éstos existan, así como los valores unitario y total de la factura que ampare las mercancías contenidas en la misma. No se considerará descripción comercial detallada, cuando la misma venga en clave y
4. Nombre y domicilio del vendedor.

Siendo el caso que la factura comercial a que hace referencia el actor, identificada con el número 71022180, es del tenor siguiente:

[N.E. Se omite imagen]

De la revisión a la factura apenas digitalizada, visible a fojas 48 y 49 del expediente en que se actúa, se desprende que la misma fue emitida el 22 de noviembre de 2007, por la empresa exportadora, en la que describe de forma detallada las mercancías importadas con el pedimento de importación de que se trata, consistentes en "LACREX NK LOT 125 MLS MEX" en cantidad de 4520, con valor por unidad de 28.38 y "LACTREX NF CRE 60 MG MEX" en cantidad de 7936, con valor unitario de 22.54, **refiriendo que dichas mercancías son de origen francés, pero además, se precisa la siguiente leyenda**:

[N.E. Se omite transcripción]

Bajo ese contexto, a juicio de esta Sentenciadora la factura comercial 710280 apenas citada, resulta suficiente para acreditar el origen de las mercancías importadas, dado que conforme a la normatividad transcrita en párrafos que anteceden, como lo son los artículos 15, 20 y 21 del Anexo III de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, en relación con el artículo 20 de las Notas explicativas del referido Anexo y las reglas 2.3.2 y 5.1.4, de las resoluciones en Materia Aduanera antes transcritas, dicha factura podrá ser expedida por una empresa que no se ubique en la Comunidad Europea, siempre que detalle con precisión el origen y las características de la mercancía importada, tal como ocurre en la especie.

Pero además, al amparo de la normatividad de la supracitada Decisión 2/2000, para acreditar el origen de las mercancías, con trato arancelario preferencial, se podrá hacer constar éste en una lista de empaque emitida por el exportador, como en el caso acontece, con la exhibición que realiza el actor de la referida lista ante esta Sentenciadora, misma que a continuación se digitaliza:

[N.E. Se omite imagen]

De este documento, se advierte que el exportador hace referencia a las mismas mercancías descritas en el pedimento de importación 07 43 3708 700043, precisando lo siguiente: “EL EXPORTADOR DE LOS PRODUCTOS INCLUIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO (AUTORIZACIÓN ADUANERA No. FR 000140/004 OTORGADA POR LA OFICINA DE ANNECY) DECLARA, QUE SALVO INDICACIÓN EN SENTIDO CONTRARIO, ESTOS PRODUCTOS GOZAN DE UN ORIGEN PREFERENCIAL FRANCÉS”.

[N.E. Se omite transcripción]

Sin que dicha lista de empaque “parking list”, se contraponga a la factura comercial anexa al pedimento de importación, acorde a lo previsto por el artículo 55 del Reglamento de la Ley Aduanera, vigente al momento de la importación y en el que el importador, hoy actor, fundó, entre otros, dicho pedimento, al prever dicho numeral en lo conducente, lo siguiente:

Por último, es de señalar que no obstante que el actor refirió a la autoridad emisora de la resolución impugnada que la factura y la lista de empaque fue anexada al pedimento de importación, y que en caso de que se negara reconocer la veracidad de la declaración en factura conforme al apéndice 4 del Anexo III de la supracitada Decisión 2/2000 (foja 42 de autos), también cuenta con el Certificado de Circulación EUR1, mismo que se exhibió con dicho recurso de revocación y además, ante esta Juzgadora, el cual es del tenor siguiente:

[N.E. Se omite imagen]

El Certificado de Circulación EUR apenas reproducido, la factura comercial número 71022180 de 22 de noviembre de 2007 y la lista de empaque, no obstante que fueron exhibidos ante esta Juzgadora en copia simple por la parte actora, hacen prueba plena de que las mercancías importadas son de origen francés, conforme lo previsto por los artículos 197 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que concatenadas entre sí y con el pedimento de importación 07 43 3708 7000943, de fecha de pago 27 de diciembre de 2007, crean convicción en esta Juzgadora que los datos contenidos en dichos documentos son ciertos, sin que la autoridad rebata lo contrario.

Cobra aplicación por analogía, el precedente **VI-P-SS-266,** emitido por el Pleno de esta Sala Superior, consultable en la Revista Número 26, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Sexta Época, Año III, Febrero 2010, página 169 que refiere:

> "**CERTIFICADOS DE ORIGEN EXHIBIDOS EN COPIA FOTOSTÁTICA. SON SUFICIENTES PARA ACREDITAR EL TRATO PREFERENCIAL ARANCELARIO SI SE ADMINICULAN CON OTRAS PROBANZAS.**" [N.E. Se omite transcripción]

Asimismo, es aplicable al caso el precedente **VI-P-SS-223** sustentado por este Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,

consultable en su Revista No. 24, Sexta Época, Año II, Diciembre 2009, página 127, que a la letra refiere:

> "**DECLARACIÓN EN FACTURA PARA ACREDITAR EL ORIGEN DE LAS MERCANCÍAS IMPORTADAS DE LA COMUNIDAD EUROPEA. DOCUMENTOS EN LOS QUE PUEDE CONSTAR.**" [N.E. Se omite transcripción]

Sin que sea óbice para llegar a la determinación anterior, el argumento de la autoridad, respecto a que ni en la factura ni en la lista de empaque que exhibió el actor al momento del despacho, se contiene la declaración de que las mercancías son de origen francés, pues contrario a lo que refiere los documentos de que se trata y cuyo texto se digitalizó anteriormente, fueron los exhibidos por la autoridad al contestar la demanda y obran integrados al expediente administrativo abierto a nombre del hoy actor, de los cuales quedó plenamente demostrado que sí fueron anexados al pedimento de importación y que sí se precisa el origen francés de las mercancías importadas.

Origen, que se robustece aún más, con la exhibición del certificado de circulación EUR 1 ante la autoridad demandada al momento de interponer el recurso de reclamación y ante esta Juzgadora, mismo que aun cuando el actor no lo hubiere exhibido anexo al pedimento de importación de cuenta, ello no es razón suficiente para considerar precluido su derecho para acreditar ante este Órgano Colegiado el origen de la supracitada mercancía de importación, pues en el juicio contencioso las pruebas que se exhiban deberán valorarse, aun cuando no se hubieran ofrecido en la instancia administrativa.

Apoya la determinación anterior la tesis jurisprudencial **IV-J-2aS-9**, emitida por la Segunda Sección de esta Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, consultable en su Revista Número 25, Cuarta Época, Año II, Agosto 2000, página 7, que refiere:

"**CERTIFICADO DE ORIGEN.- NO ACOMPAÑARLO AL PEDIMENTO NO IMPLICA LA PRECLUSIÓN DEL DERECHO DE RENDIR LA PRUEBA.**"

Asimismo, es aplicable la tesis jurisprudencial **2a./J. 69/2001**, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Diciembre de 2001, página 223, cuyo rubro y texto es el siguiente:

"**CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LAS PRUEBAS DEBEN ADMITIRSE EN EL JUICIO Y VALORARSE EN LA SENTENCIA, AUN CUANDO NO SE HUBIERAN OFRECIDO EN EL PROCEDIMIENTO.**" [N.E. Se omite transcripción]

Bajo ese contexto, resulta procedente declarar la nulidad de la resolución impugnada, así como de la recurrida, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción IV y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en razón de que el actor acredita plenamente que la mercancía importada al amparo de la supracitada Decisión 2/2000, es de origen francés.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 49, 50, 51 fracción IV y 52 fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 14 fracciones I y III y 18, fracción XV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se resuelve:

I. Resultó infundada la causal de improcedencia planteada por la autoridad demandada, en consecuencia;

II. No se sobresee el juicio.

III. La parte actora acreditó su pretensión, por tanto:

IV.- Se declara la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, así como de la recurrida, precisadas en el Resultando 1º de este fallo, por los fundamentos y motivos vertidos en el mismo.

V.- NOTIFÍQUESE.- Con copia autorizada de esta resolución devuélvanse los autos del juicio contencioso administrativo a la Primera Sala Regional Metropolitana, una vez que haya quedado firme o en su caso se resuelva en definitiva el presente asunto y, en su oportunidad archívese este expediente.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día 06 de octubre de 2010, por unanimidad de 9 votos a favor de los CC. Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Nora Elizabeth Urby Genel, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Alejandro Sánchez Hernández, Alfredo Salgado Loyo, Silvia Eugenia Díaz Vega, Olga Hernández Espíndola, Luis Carballo Balvanera y Francisco Cuevas Godínez. Estuvieron ausentes los CC. Magistrados Jorge Alberto García Cáceres y Juan Manuel Jiménez Illescas.

Fue Ponente el Magistrado Luis Carballo Balvanera, cuya ponencia fue aprobada.

Se elaboró el presente engrose el 15 de octubre de 2010 y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 30, fracción V, 47, fracción III, de la Ley Orgánica y 102, fracción VIII, del Reglamento Interior, ambos ordenamientos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos de la Segunda Sección, en suplencia de la Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

PRIMERA SECCIÓN

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

VI-P-1aS-368

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE.- NO SE ACREDITA LA UBICACIÓN DEL DOMICILIO FISCAL DE LA PARTE ACTORA, SI LA SITUACIÓN DEL DOMICILIO FISCAL ES "NO LOCALIZADO".- El último párrafo del artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, señala que se presumirá que el domicilio señalado en la demanda es el fiscal, salvo que la parte demandada demuestre lo contrario. Es por ello que en el supuesto de que la autoridad demandada interponga incidente de incompetencia en razón del territorio, debe acreditar con documento idóneo que el domicilio fiscal de la parte actora se encuentra ubicado en un lugar distinto al señalado en el escrito inicial de demanda, de conformidad con el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Por lo que si la autoridad incidentista exhibe el Reporte General de Consulta de Información de Contribuyente con la finalidad de acreditar la ubicación del domicilio fiscal de la parte actora, y de su análisis se advierte que en el rubro referente a "situación del domicilio fiscal" se ostenta la leyenda "NO LOCALIZADO", dicha documental no otorga certeza jurídica en relación a su ubicación; consecuentemente, la autoridad incidentista no habrá acreditado su pretensión y el argumento deberá declararse infundado.

Incidente de Incompetencia Núm. 405/09-09-01-1/478/10-S1-02-06.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 15 de junio de 2010, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto

en contra.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas.
(Tesis aprobada en sesión de 28 de septiembre de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

TERCERO.- [...]

Sentado lo anterior, a juicio de esta Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el incidente de incompetencia por razón del territorio planteado por la autoridad demandada es **INFUNDADO**, atento a los siguientes razonamientos y fundamentos de derecho.

Ahora bien, el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en vigor a partir del 7 de diciembre de 2007, la competencia de las Salas Regionales de este Tribunal se determina atendiendo al lugar donde se encuentre el **domicilio fiscal** del demandante, dispositivo legal que es del tenor literal siguiente:

[N.E. Se omiten transcripción]

De lo anterior se desprende que **las Salas Regionales conocerán de los juicios por razón del territorio, atendiendo al lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante**, con las excepciones descritas en el propio numeral; y se presumirá que el domicilio señalado en la demanda es el fiscal, **salvo que la parte demandada demuestre lo contrario**.

Ello es así, toda vez que para efectos de determinar la competencia de la Sala Regional que debe conocer del juicio contencioso administrativo interpuesto por

CONSTRUCTORA CAMAPE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., se debe atender al supuesto general señalado en el primer párrafo del artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; esto es, al domicilio fiscal de la parte actora, en virtud de que no se coloca en el supuesto de alguna de las excepciones señaladas en dicho numeral, puesto que de las constancias que obran en autos y de las manifestaciones de la incidentista, se advierte que la parte actora no es una empresa que forme parte del sistema financiero, ni que tenga el carácter de controladora o controlada y determine su resultado fiscal consolidado, ni que la resolución controvertida haya sido emitida por la Administración General de Grandes Contribuyentes o alguna unidad administrativa adscrita a ella, ni se trata de un residente en el extranjero sin domicilio fiscal en el país.

En este contexto, esta Juzgadora advierte de los autos que integran el juicio contencioso administrativo número 405/09-09-01-1, que la Primera Sección de la Sala Superior, mediante resolución dictada el 30 de junio de 2009 resolvió que la Sala Regional competente para conocer del juicio lo era la Sala Regional del Centro II, toda vez que en el escrito inicial de demanda, la parte actora señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en: "*Nogal número 204, Fraccionamiento Arboledas de esta Ciudad de* ***Querétaro****, Qro*.", el cual de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se presumió como su domicilio fiscal; sin embargo, la C. Administradora Local Jurídica de Querétaro de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al interponer el incidente de incompetencia que nos ocupa, exhibió copia certificada del Reporte General de Consulta de Información del Contribuyente, a efecto de evidenciar que a la fecha en que se presentó la demanda inicial, la **ubicación del domicilio fiscal** de la parte actora se encontraba en el Estado de Guanajuato; el cual se encuentra agregado a folios 121 de autos y se digitaliza a continuación:

[N.E. Se omite imagen]

De la digitalización anterior se advierte que si bien del Reporte General de Consulta de Información de Contribuyente se advierte un domicilio fiscal ubicado en Calle Plan de Ayutla, Colonia El Vergel, número 121, en el Municipio de Celaya, Guanajuato, también lo es que **del Reporte en comento se desprende que la situación del domicilio fiscal de la empresa actora es NO LOCALIZADO**, por lo que la autoridad incidentista no acreditó que el domicilio fiscal de la empresa actora al momento de interponer la demanda de nulidad se encontraba en el Estado de Guanajuato; consecuentemente, el argumento de la C. Administradora Local Jurídica de Querétaro de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es INFUNDADO.

Lo anterior es así, toda vez que la autoridad incidentista debió acreditar su pretensión en términos de lo previsto por el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, situación que no aconteció en la especie, toda vez que si bien presentó copia certificada del Reporte General de Consulta de Información de Contribuyente, dicha documental no otorga certeza a esta Juzgadora en relación a la ubicación del domicilio fiscal de la empresa actora, en virtud de que **el estado en el que se encuentra el domicilio fiscal es NO LOCALIZADO por lo que la autoridad incidentista no acreditó su pretensión**.

[...]

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 30 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el diverso 23, fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa vigente a partir del 7 de diciembre de 2007, se resuelve:

I.- Es **procedente** pero **infundado** el incidente de incompetencia por razón del territorio promovido por la C. Administradora Local Jurídica de Querétaro de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

II.- Es competente por razón del territorio para seguir conociendo del juicio contencioso administrativo 405/09-09-01-1 **la Sala Regional del Centro II de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; en consecuencia, remítansele los autos respectivos**.

III.- NOTIFÍQUESE.- Con copia autorizada a las partes, para su conocimiento.

Así lo resolvió la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en sesión de 15 de junio de 2010, por mayoría de 4 votos a favor de la ponencia de los CC. Magistrados Nora Elizabeth Urby Genel, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Alejandro Sánchez Hernández y Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, y un voto en contra del C. Magistrado Jorge Alberto García Cáceres, el cual se reservó su derecho para formular voto particular.

Fue Ponente en el presente asunto la C. Magistrada Nora Elizabeth Urby Genel, cuya ponencia se aprobó.

Se formuló el presente engrose el 18 de junio de 2010 y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción III y 48, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 6 de diciembre de 2007, vigente a partir del día siguiente a su publicación firma el C. Magistrado Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Presidente de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Lic. Sonia Sánchez Flores, Secretaria Adjunta de Acuerdos que da fe.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-P-1aS-369

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACIÓN DE CONTRIBUYENTE, TIENE VALOR PROBATORIO CUANDO SE EXHIBE EN COPIA CERTIFICADA, AUN CUANDO OSTENTE LA LEYENDA: "ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA S.H.C.P.".- En términos de lo establecido por el artículo 63, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, las copias o reproducciones que deriven de microfilm o discos ópticos de documentos que tengan en su poder las autoridades fiscales, tienen el mismo valor probatorio que tendrían los originales, siempre que dichas copias o reproducciones sean certificadas por funcionario competente, sin necesidad de cotejo con los originales. Luego, si en el incidente de incompetencia la demandada aporta copia certificada del reporte general de consulta de información de contribuyente, para demostrar cuál es el domicilio fiscal del demandante, dicha probanza tendrá pleno valor probatorio, aun cuando se señale que: "ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA S.H.C.P.", por tratarse de la reproducción de la información que deriva de los medios magnéticos, digitales y electrónicos que tiene en su poder la autoridad y que certificó en ejercicio de sus funciones.

Incidente de Incompetencia Núm. 463/10-12-01-8/733/10-S1-05-06.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 6 de julio de 2010, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Alejandro Sánchez Hernández.- Secretaria: Lic. María Laura Camorlinga Sosa.
(Tesis aprobada en sesión de 28 de septiembre de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

TERCERO.- [...]

En el caso, para determinar cuál es la Sala Regional a la que incumbe el conocimiento de este asunto, **se atenderá a la regla general prevista en el primer párrafo del artículo 34 de la Ley Orgánica de este Tribunal, es decir, al domicilio fiscal del demandante**, pues no existe prueba en autos de la que se advierta que se actualice alguno de los supuestos de excepción que se contemplan en las fracciones I, II y III del referido numeral.

En ese contexto, es menester tener a la vista el escrito inicial de demanda, que en la parte que interesa es del tenor siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

De la transcripción que antecede se desprende que en el proemio del escrito inicial de demanda, la actora señaló como domicilio fiscal el ubicado en "**Las Rosas número 202, Colonia Reforma de ésta (sic) Ciudad**", sin precisar a qué Ciudad o Entidad Federativa corresponde; también se aprecia que se señaló como domicilio convencional Avenida Morelos número 1010, interior 8, Segundo Piso, Centro de la Ciudad de Oaxaca, Oax. y que la demanda se suscribió en Puebla, Puebla.

En esa consideración de acuerdo a lo previsto por el artículo 34, primer y último párrafos de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Primera Sala Regional de Oriente de este Tribunal, atendió al domicilio expresamente señalado en el escrito de demanda con el carácter de fiscal, es decir, al ubicado en "**Las Rosas número 202, Colonia Reforma de ésta (sic) Ciudad**", infiriendo que corresponde a "PUEBLA, PUEBLA", donde se suscribió la demanda y, por ello, asumió el conocimiento de la presente controversia, como se advierte de los acuerdos de 15 y 19 de febrero de 2010, los cuales obran a fojas 330 y 335 de autos.

Sin embargo, la presunción establecida en el último párrafo del artículo 34 en comento, admite prueba en contrario por parte de la autoridad demandada, pues

claramente establece que debe presumirse como domicilio fiscal el señalado en la demanda, **salvo que la parte demandada demuestre lo contrario**.

Cobra aplicación la jurisprudencia VI-J-1aS-20 de esta Primera Sección, publicada en la Revista No. 24, Sexta Época, Año II, Diciembre 2009, página 87, del tenor siguiente:

> "**INCIDENTE DE INCOMPETENCIA TERRITORIAL. CUANDO ES PLANTEADO POR LA AUTORIDAD DEBE ACREDITAR LA UBICACIÓN DEL DOMICILIO FISCAL DEL ACTOR.**" [N.E. Se omite transcripción]

Precisado lo anterior, en el caso la demandada afirma que el domicilio fiscal de la actora, se ubica en "**Las Rosas número 202, Colonia Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68050**", y para acreditar su dicho exhibe copia certificada del reporte general de consulta de información de contribuyente, de la base de datos de la Administración Local de Recaudación de Puebla Sur, misma que corre agregada a fojas 6 de la carpeta de incompetencia y que para mayor claridad a continuación se inserta:

[N.E. Se omiten imágenes]

Acorde con el contenido de la digitalización del documento exhibido como prueba por parte de la autoridad incidentista, se advierte que:

1.- El contribuyente CONSTRUCTORA GAFA, S.A. DE C.V., inició operaciones "06/02/1979", esto es, el 6 de febrero de 1979.

2.- El último aviso de cambio de domicilio del hoy actor se presentó el 27 de abril de 2009 y que su domicilio fiscal se localiza en: **Calle Las Rosas número 202, Colonia Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68050** y que se encuentra localizado desde el 5 de octubre de 2009, por notificación.

3.- El Administrador Local Jurídico de Puebla Sur, certificó que la documental digitalizada concuerda fielmente con las constancias originales que obran en el expediente administrativo de la actora CONSTRUCTORA GAFA, S.A. DE C.V., en poder de la propia Administración, de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 9, fracción V y 10, fracción I del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.

En ese tenor, el reporte en comento, que se valora en términos de lo dispuesto por los artículos 46, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 63 penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, 79, 93, fracción VII, 188 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, **es prueba idónea** para demostrar que en la fecha de presentación de la demanda (12 de febrero de 2010), el demandante tenía su domicilio fiscal en: **Calle Las Rosas número 202, Colonia Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68050**, al menos desde el 27 de abril de 2009, en que se presentó el último aviso de cambio de domicilio.

En efecto, el Reporte general de consulta de información de contribuyente, anteriormente digitalizado, **hace prueba plena**, atento a que:

- El artículo 79, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, permite al juzgador apoyarse en cualquier cosa o documento, sea que pertenezcan a las partes o a un tercero, siempre que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos.

- Los artículos 93, fracción VII y 188 del código invocado en el párrafo anterior, reconocen como medios de prueba, a todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, mientras en el numeral 217 del código adjetivo citado, reconoce valor a las pruebas fotográficas o cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando se encuentren debidamente certificados.

- El artículo 46, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su parte conducente señala que harán prueba plena los hechos legalmente afirmados por la autoridad en documentos públicos, incluyendo los digitales.

- El artículo 63, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, ordena que las copias o reproducciones que deriven de microfilm o discos ópticos de documentos que tengan en su poder las autoridades fiscales, tienen el mismo valor probatorio que tendrían los originales, siempre que dichas copias o reproducciones sean certificadas por funcionario competente para ello, sin necesidad de cotejo con los originales.

En ese contexto, la copia certificada del reporte general de consulta de información de contribuyente en comento, tiene pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 46, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 63 penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, 79, 93, fracción VII, 188 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, mencionados, por tratarse de una copia certificada que contiene la reproducción de la documentación que consta en poder de la autoridad y que fue expedida por funcionario competente en ejercicio de sus funciones, como lo es el Administrador Local Jurídico de Puebla Sur.

En efecto, la autoridad en comento certificó el reporte, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 9, fracción V y 10, fracción I del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, los cuales establecen:

[N.E. Se omite transcripción]

De los numerales transcritos se aprecia que el Administrador Local Jurídico de Puebla Sur, es competente para certificar copias, impresiones o reproducciones que deriven del microfilm, disco óptico, medios magnéticos, digitales, electrónicos o magneto ópticos de documentos que tengan en su poder u obren en sus archivos.

Bajo ese contexto, esta Juzgadora arriba a la conclusión de que la autoridad incidentista, al tenor de lo señalado por los artículos 40 primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con la parte final del último párrafo, del numeral 34 de la Ley Orgánica de este Tribunal, logra acreditar que el domicilio fiscal de la demandante, efectivamente, se ubica en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, con la copia certificada del reporte general de consulta de información de contribuyente, que contiene la reproducción de la documentación que consta en poder de la autoridad y que fue expedida por funcionario competente en ejercicio de sus funciones.

Resulta aplicable al caso en estudio, la jurisprudencia VI-J-1aS-19 de esta Primera Sección, publicada en la Revista No. 24, Sexta Época, Año II, Diciembre 2009, página 84, cuyo rubro y contenido señalan lo siguiente:

> "**CERTIFICACIÓN DE PANTALLA DEL SISTEMA DE CÓMPUTO DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. SU VALOR PROBATORIO**" [N.E. Se omite transcripción]

No demerita la conclusión alcanzada, que en el reporte general de consulta de información de contribuyente se asiente: "ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA S.H.C.P.", pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, la referida documental tiene el valor de un original en virtud de que constituye una copia certificada de una reproducción que deriva de los medios magnéticos, digitales y electrónicos de documentos que tiene en su poder la autoridad y que certificó en ejercicio de sus funciones, es decir, con apoyo en las facultades que le otorgan los artículos 9, fracción V y 10, fracción I del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, como quedó apuntado.

Además, la lectura que se efectúa a tal leyenda no implica que la autoridad de motu proprio, renuncie al valor probatorio de la prueba que ella misma ofreció, sino que el **uso** de la información fiscal que ahí consta, **sólo incumbe** a la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público, y no a otras autoridades ni a los particulares, habida cuenta que es a la referida dependencia, por conducto de su órgano desconcentrado denominado Servicio de Administración Tributaria, a la que corresponde vigilar y asegurar que los contribuyentes cumplan con las disposiciones fiscales, como lo establecen los artículos 31, fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 2° de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.

[...]

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 30 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el diverso 23, fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se resuelve:

I.- Es procedente y fundado el incidente de incompetencia planteado por la autoridad demandada, en consecuencia.

II.- Es competente por cuestión de territorio para conocer del presente juicio, la Sala Regional del Sureste, por lo que mediante atento oficio que se gire, remítanse los autos del juicio y copia certificada del presente fallo, para los efectos legales conducentes.

III.- Mediante oficio que al efecto se gire a la Primera Sala Regional de Oriente, de este Tribunal, remítasele copia certificada de la presente resolución, para su conocimiento.

IV.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día 6 de julio de 2010, por mayoría de 4 votos a favor de los Magistrados Jorge Alberto García Cáceres, Manuel Luciano

Hallivis Pelayo, Alejandro Sánchez Hernández y Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez y 1 en contra de la Magistrada Nora Elizabeth Urby Genel.

Fue Ponente el Magistrado Alejandro Sánchez Hernández, cuya ponencia fue aprobada.

Se elaboró el presente engrose el 12 de agosto de 2010, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27, fracción III y 48, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma el Magistrado Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Presidente de la Primera Sección del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Licenciada Sonia Sánchez Flores, Secretaria Adjunta de Acuerdos, quien da fe.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-P-1aS-370

EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS.- DEBEN APLICARSE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A ÉSTE Y NO LAS CORRESPONDIENTES A EMBARGO DE BIENES MUEBLES.- El artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación, establece las reglas específicas del embargo de depósitos bancarios en términos del artículo 155, fracción I del mismo ordenamiento legal; en esa medida, no resultan aplicables las disposiciones relativas al embargo de bienes muebles, ya que cuando los bienes embargados consisten en depósitos bancarios se deben aplicar las disposiciones específicas para este tipo de embargo, al tener una regulación especial.

Recurso de Reclamación Núm. 5725/09-05-03-8/814/10-S1-02-05.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de julio de 2010, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas.
(Tesis aprobada en sesión de 28 de septiembre de 2010)

GENERAL

VI-P-1aS-371

EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS.- SE TRATA DE UN ACTO CONSUMADO Y NO PROCEDE SU LIBERACIÓN COMO UNA MEDIDA CAUTELAR.- El embargo de las cuentas bancarias tiene la naturaleza de un acto consumado, puesto que se realiza íntegramente y alcanza todos sus efectos desde el momento en que se perfecciona el propio embargo; es decir, se actualiza en el mismo acto de la diligencia, motivo por el cual, aun y cuando se solicite como medida

cautelar su suspensión, ello no es posible, toda vez que de otorgarse se estarían dando efectos restitutorios que no proceden en este caso.

Recurso de Reclamación Núm. 5725/09-05-03-8/814/10-S1-02-05.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de julio de 2010, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas.
(Tesis aprobada en sesión de 28 de septiembre de 2010)

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-P-1aS-372

LIBERACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS EMBARGADAS.- NO PROCEDE POR EL HECHO DE QUE EL CRÉDITO FISCAL QUE SE GARANTIZA, NO SE ENCUENTRE FIRME.- El artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación, entre otras cuestiones prevé, que en el caso de embargo de depósitos bancarios, la autoridad que haya ordenado el embargo girará oficio al gerente de la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, a efecto de que la inmovilice y conserve los fondos depositados; y por otra parte establece, que dichos fondos únicamente podrán transferirse al fisco federal una vez que el crédito fiscal relacionado quede firme, y hasta por el importe necesario para cubrirlo. En esa tesitura, si la inmovilización de las cuentas bancarias únicamente tiene como finalidad conservar los fondos depositados, el hecho de que el crédito fiscal no se encuentre firme no implica su liberación, ya que precisamente con el embargo de las cuentas bancarias, se está garantizando el interés fiscal del crédito requerido mientras se resuelven los medios de defensa interpuestos en su contra.

Recurso de Reclamación Núm. 5725/09-05-03-8/814/10-S1-02-05.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi-

nistrativa, en sesión de 8 de julio de 2010, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas.
(Tesis aprobada en sesión de 28 de septiembre de 2010)

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-P-1aS-373

SUBSTITUCIÓN DE GARANTÍA PARA EFECTOS DE LA LIBERACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS EMBARGADAS.- El artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación, entre otras cuestiones prevé, que en el caso de embargo de depósitos bancarios, el contribuyente titular de las cuentas bancarias embargadas podrá ofrecer otra forma de garantía de acuerdo con el artículo 141 del mismo Código, en substitución del embargo de las cuentas. En tal virtud, para la liberación de las cuentas bancarias embargadas, sólo tiene que ofrecer la substitución de garantía ante la autoridad fiscal cumpliendo los requisitos legales al efecto establecidos; por lo que, si no se acredita tal substitución, no es posible ordenar la liberación de las cuentas embargadas.

Recurso de Reclamación Núm. 5725/09-05-03-8/814/10-S1-02-05.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de julio de 2010, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas.
(Tesis aprobada en sesión de 28 de septiembre de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

TERCERO.- [...]

En principio se estima necesario precisar que son **INFUNDADOS** los **argumentos vertidos por la recurrente** en el apartado **SEÑALADO COMO A**, en el que hace valer substancialmente que de conformidad con el artículo 156-bis del Código Fiscal de la Federación a contrario sensu, no procede la inmovilización de las cuentas embargadas respecto de un crédito que se encuentra *sub judice*.

A efecto de dilucidar lo anterior se considera pertinente tomar en consideración el contenido textual del **artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación**, para así conocer lo que dispone en forma expresa y directa; dicho numeral a la letra establece lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

De la lectura realizada al precepto legal antes reproducido se aprecia que en la parte que nos interesa señala en forma expresa lo siguiente:

• En el caso de embargo de depósitos bancarios, la autoridad que haya ordenado el embargo **girará oficio** al gerente de la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, a efecto de que la **inmovilice y conserve los fondos depositados.**

• Los fondos **únicamente** podrán transferirse al fisco federal una vez que el crédito fiscal relacionado quede **firme**, y hasta por el importe necesario para cubrirlo.

• En tanto el crédito fiscal garantizado **no quede firme**, el contribuyente titular de las cuentas bancarias embargadas **podrá ofrecer** otra forma de garantía de acuerdo con el artículo 141 del Código en comento, en **sustitución** del embargo de las cuentas.

• La autoridad deberá resolver y notificar al contribuyente sobre la admisión o rechazo de la garantía ofrecida, o el requerimiento de requisitos adicionales, dentro de un plazo máximo de 10 días.

Así las cosas, se aprecia que el **artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación** prevé la inmovilización de los fondos que contengan las cuentas bancarias embargadas sólo a efecto de que se conserven, y por otra parte se establece que dichos fondos, **únicamente** podrán transferirse al fisco federal una vez que el crédito fiscal relacionado quede **firme**.

En esa tesitura, no se aprecia de forma alguna que el numeral en estudio establezca que se deba liberar una cuenta bancaria embargada por el hecho de que el crédito fiscal aún no se encuentre firme, máxime que contrario a ello, el precepto legal en comento prevé la inmovilización de la cuenta.

Por tanto la actora no acredita que la Sala de origen hubiese observado de forma indebida el numeral en cuestión.

A mayor abundamiento cabe precisar que no es posible jurídicamente interpretar una disposición contenida en el Código Fiscal de la Federación a contrario sensu como en la especie lo pretende la recurrente; ello en virtud de que el artículo 5º del mismo ordenamiento legal establece categóricamente que las disposiciones fiscales son de aplicación estricta.

No pasa inadvertido para los suscritos Magistrados que el propio artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación, establece que **los fondos de las cuentas bancarias embargadas únicamente se pueden transferir** al fisco federal una vez que el **crédito fiscal quede firme**, y hasta por el importe necesario para cubrirlo; ello es así, en virtud de que tal disposición se refiere única y exclusivamente a la facultad de la autoridad de transferir los fondos de las cuentas bancarias embargadas al fisco federal, lo cual **no implica que la inmovilización** de esas cuentas solamente se pueda realizar respecto a **créditos fiscales que se encuentren firmes,** ni implica

impedimento alguno para la autoridad fiscal de solicitar la inmovilización de las cuentas bancarias embargadas al gerente de la sucursal bancaria correspondiente para garantizar créditos que se encuentren pendientes de resolución firme, puesto que con la simple inmovilización no se transfieren los fondos de las cuentas al fisco federal, sino únicamente **se hace para conservar los fondos depositados**, máxime que el hecho de que el crédito fiscal se encuentre pendiente de resolución firme ello no hace procedente su petición, ya que precisamente se está garantizando el interés fiscal del crédito mientras se resuelve el juicio interpuesto en su contra.

Una vez dilucidado lo anterior, esta Sección procede al estudio de los **argumentos vertidos por la recurrente** en el apartado **SEÑALADO COMO B**, en los que hace valer substancialmente que sí resulta procedente la liberación de las cuentas bancarias embargadas, ya que el embargo ofrecido como garantía cubre el interés fiscal en exceso, aunado a que sus efectos son de tracto sucesivo, mismos que son susceptibles de ser paralizados.

Esta Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, **considera infundado** el argumento aludido en virtud de que **la hoy recurrente fue quien ofreció como garantía** del interés fiscal del crédito determinado en el oficio número 500-47-00-02-00-2009-1647 de fecha 30 de marzo de 2009, **el embargo trabado** mediante Mandamiento de Ejecución de fecha 18 de enero de 2010, y Acta de Requerimiento de Pago y Acta de Embargo, con fecha de 25 de enero del mismo año en forma conjunta, entre los cuales se encuentran las cuentas bancarias aludidas por la recurrente, razón por la cual los bienes que conforman la garantía del interés fiscal lo son los depósitos contenidos en las cuentas bancarias mencionadas, por tanto no es posible acceder a la petición de la recurrente en cuanto a **la libre disposición de sus contenidos,** dado que al embargarse las cuentas bancarias ello se hace respecto a las cuentas y a los recursos económicos contenidos en las mismas, puesto que en la especie el bien que sirve para garantizar el interés fiscal lo son los fondos que se contengan en las cuentas bancarias así como los bienes muebles señalados en la diligencia.

Sobre esa guisa resulta pertinente puntualizar que la hoy recurrente pretende desvincular las cuentas bancarias del embargo que ella misma ofreció como garantía del interés fiscal para que se liberen, por lo que independientemente de la suficiencia de la garantía que a decir de la recurrente es excedente, se debe considerar que **al haber sido ofrecido el embargo en su conjunto para garantizar el interés fiscal ante la Sala de origen**, el mismo fue considerado de esa manera al dictarse la sentencia recurrida.

Aunado a lo anterior, conviene precisar que la primer parte del último párrafo del artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación antes reproducido, señala que mientras que el crédito fiscal garantizado no quede firme, **el contribuyente titular de las cuentas bancarias embargadas puede ofrecer otra forma** de garantía de acuerdo con el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, **en substitución del embargo de las cuentas**; de lo que se desprende que si la empresa actora hoy recurrente pretende la liberación de las cuentas bancarias embargadas, debe cumplir con la disposición antes mencionada, dado que el ordenamiento legal en comento prevé la posibilidad de substituir esa forma de garantizar el interés fiscal.

Por tanto, la ahora reclamante debió ofrecer otra forma de garantía de acuerdo con el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación y seguir el procedimiento ahí establecido a efecto de obtener la liberación de sus cuentas bancarias, lo que no hizo.

En efecto, pues **la recurrente no menciona, ni mucho menos acredita, que haya ofrecido alguna substitución de garantía**, razón por la cual se insiste, su petición resulta improcedente, máxime que la recurrente no señala el precepto legal que establezca la **obligación por parte de la autoridad fiscal de formalizar ampliación de embargo con la finalidad de que se proceda a liberar las cuentas bancarias embargadas**.

En ese orden de ideas, esta Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, estima que es **infundado** que la recurrente argumente que es de explorado derecho que en tratándose del congelamiento de

cuentas bancarias, sí procede la suspensión para el efecto de que se tenga la libre disposición de los recursos económicos de las cuentas bancarias, apoyando sus manifestaciones en tres tesis aisladas; ello es así, dado que dichos criterios no resultan obligatorios para esta Juzgadora puesto que no constituyen Jurisprudencia de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, aunado a que se refieren a supuestos distintos a los que se estudian.

Por otra parte, esta Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, estima que también es **infundado** el argumento consistente en que **los efectos del embargo son de tracto sucesivo, y que por ello los mismos son susceptibles de ser paralizados**; en razón de que tal circunstancia no incide en forma alguna para declarar procedente la solicitud de la liberación de las propias cuentas, en virtud de que el embargo referido constituye la garantía del interés fiscal, por lo que en el supuesto no concedido de que proceda la liberación de las cuentas bancarias, quedaría sin garantizarse el interés fiscal; por tanto, la solicitud en análisis no depende de la realización del embargo, es decir si se efectuó en un solo acto o en varios, ni tampoco de que sus efectos sean de tracto sucesivo o no, sino que se debe atender a la finalidad de la suspensión consistente en que se mantengan las cosas como se encontraban al momento de que se solicitó; asimismo, se debe considerar que el interés fiscal se encuentre debidamente acreditado para que surta efectos la medida cautelar mencionada.

En esa misma guisa, esta Juzgadora estima que no asiste la razón a la recurrente cuando sostiene que el congelamiento de todas las cuentas bancarias de una empresa, **sólo la conducen a su inanición y extinción**, al verse impedida a realizar cualquier operación económica, o incluso obligación de pago a sus trabajadores y a otros servicios; ello es así, en virtud de que como se ha puntualizado en el presente Considerando, **la contribuyente hoy recurrente fue quien ofreció el embargo sobre esas cuentas** para garantizar el interés fiscal de los créditos derivados de la resolución recurrida en el juicio principal; aunado a que tiene la posibilidad, como se ha precisado, de acudir a la **substitución de garantía ante la autoridad fiscal** cumpliendo los requisitos legales, por tanto las razones que exponen no son suficien-

tes para ordenar la liberación de las cuentas bancarias como lo pretende, ya que en el supuesto de que no esté de acuerdo con esa forma de garantizar el interés fiscal, puede substituirla con otra forma de las previstas en el código tributario **ante la autoridad ejecutora**.

De igual forma, esta Juzgadora **estima infundado** el argumento de la actora en el que sostiene que la resolución recurrida se emitió de forma contradictoria ya que la misma **no permite la libre disposición** de los recursos contenidos en las cuentas bancarias embargadas **por considerarlo un acto consumado**; esto es así, ya que en efecto, el embargo de las cuentas bancarias se trata de un acto consumado puesto que se realizó íntegramente y alcanzó todos sus efectos; es decir, **se efectuó en el mismo acto de la diligencia de embargo**, lo cual se constata con el hecho de que ese mismo embargo sirvió para garantizar el interés fiscal de los créditos controvertidos, por tanto es correcta la determinación de la Sala de origen de haber negado la solicitud de liberación de las cuentas bancarias ya que éstas **consisten en la garantía del interés fiscal**, misma que fue ofrecida por la propia recurrente, por lo que independientemente de que sus efectos pudieran ser de tracto sucesivo, no procede la liberación de las cuentas bancarias puesto que en ese supuesto se dejaría de garantizar el interés fiscal del crédito combatido.

Finalmente esta Juzgadora estima que tampoco asiste la razón a la recurrente, cuando esgrime que la sentencia interlocutoria de fecha 25 de febrero de 2010, realiza un indebido análisis de los argumentos vertidos en su solicitud de suspensión, indicando que la formuló en términos de los artículos 28, fracción VI de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 144 del Código Fiscal de la Federación, para que se concediera de forma definitiva y se permitiera la libre disposición de los recursos contenidos en las cuentas bancarias, alegando que si bien es cierto que los oficios por los que se ordena embargar las cuentas bancarias a nombre de la demandante, son actos consumados, **estos oficios generan efectos y consecuencias susceptibles de ser paralizados**.

Lo anterior es así, en virtud de que **ni** el artículo 28 fracción VI de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, **ni** el diverso 144 del Código Fiscal de la Federación **establecen que procede otorgar una medida cautelar consistente en la liberación de las cuentas bancarias o cualquier otro bien embargado**, cuando dicho embargo constituye la garantía del interés fiscal.

Por último, esta Primera Sección procede al estudio de los **argumentos vertidos por la recurrente** en el apartado **SEÑALADO COMO C**, en el que hace valer substancialmente que a las cuentas bancarias embargadas no se les debe dar el mismo trato que a los bienes inmuebles.

Esta Juzgadora, en primer término, estima pertinente reproducir el contenido del artículo 155, fracciones I y III del Código Fiscal de la Federación, y reiterar el primer párrafo del diverso numeral 156-Bis del mismo código tributario para una mejor comprensión del tema, preceptos que a la letra señalan lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Del artículo 155 reproducido anteriormente, se desprende que entre otros, los bienes que pueden señalarse para trabar embargo son los depósitos bancarios y los bienes muebles diversos a los primeros; y el diverso numeral 156-Bis transcrito establece que cuando sean embargados los depósitos bancarios, la autoridad fiscal puede girar oficio al gerente de la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, a efecto de que la inmovilice y conserve los fondos depositados.

Sobre esa guisa, resulta pertinente concluir **que no asiste la razón a la actora**, puesto que resulta infundado el argumento consistente en que se les debe conceder el mismo trato a las cuentas bancarias embargadas que a los bienes.

Lo anterior es así, pues **el Código Fiscal de la Federación, le da un trato específico a los depósitos bancarios embargados**, y establece claramente que la autoridad fiscal puede solicitar la inmovilización de los fondos depositados.

Por tanto, no resultan aplicables las disposiciones relativas al depositario, ya que en la especie los bienes en cuestión no se tratan de objetos que puedan entregarse físicamente a una persona, puesto que en la especie los bienes embargados en cuestión son depósitos bancarios contenidos en tres cuentas bancarias que no pueden ser entregados físicamente a persona alguna al momento de diligenciarse el embargo respectivo, razón por la cual se debe atender a las disposiciones legales relativas a dicha forma de garantía.

[...]

En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

I.- Es procedente pero **INFUNDADO** el Recurso de Reclamación interpuesto por la parte actora, en consecuencia.

II.- Se confirma la sentencia interlocutoria dictada el 25 de febrero de 2010 por la Tercera Sala Regional del Norte-Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

III.- Mediante atento oficio que se gire a la Tercera Sala Regional del Norte-Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, remítasele copia certificada del presente fallo.

IV.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en sesión del 08 de julio de 2010, por mayoría de 04 votos a favor de los CC. Magistrados Nora Elizabeth Urby Genel, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Alejandro Sánchez Hernández, y Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, y 1 voto en contra del Magistrado Jorge Alberto García Cáceres.

Fue Ponente en el presente asunto la C. Magistrada Nora Elizabeth Urby Genel, cuya ponencia se aprobó.

Se formuló el presente engrose el 09 de agosto de 2010 y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción III y 48, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 6 de diciembre de 2007, vigente a partir del día siguiente a su publicación. Firma el C. Magistrado Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Presidente de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Lic. Sonia Sánchez Flores, Secretaria Adjunta de Acuerdos que da fe.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-1aS-374

MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES. DEBE OTORGARSE LA GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 28, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, tratándose de la suspensión de la ejecución en contra de actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, deberá concederse la suspensión del crédito combatido siempre que se reúnan los requisitos de procedencia señalados por el artículo 24 y 28 de la referida ley, pero condicionada su efectividad a que el solicitante garantice el interés fiscal ante la autoridad ejecutora o en todo caso acredite que ya lo hizo. Ahora bien, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° del Código Fiscal de la Federación, se tiene que las multas administrativas federales, tienen el carácter de créditos fiscales que el Estado o sus organismos descentralizados tienen derecho a percibir. Por tanto, en el caso en que se solicite la suspensión de la ejecución del cobro de una multa administrativa federal, resulta procedente conceder dicha suspensión, condicionando su efectividad a que el solicitante garantice el interés fiscal o acredite haberlo hecho.

Recurso de Reclamación Núm. 1916/10-17-12-1/1270/10-S1-03-05.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 17 de agosto de 2010, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretaria: Lic. Alma Rosa Navarro Godínez.
(Tesis aprobada en sesión de 17 de agosto de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

TERCERO.- [...]

De lo anterior, se desprende que las multas impuestas por infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias que no sean de carácter fiscal, pertenecen al concepto de aprovechamientos, los cuales son los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de los que obtiene por contribuciones o ingresos derivados de financiamientos y de los ingresos que obtienen los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal.

Así entonces, la multa controvertida constituye un crédito fiscal conforme a lo dispuesto en el artículo 4º del Código Fiscal de la Federación establece:

[N.E. Se omite transcripción]

Conforme a dicho precepto, son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan, entre otros, de aprovechamientos, por lo que si la multa impuesta a la hoy actora tiene el carácter de aprovechamiento, es claro que para evitar su ejecución es necesario que el actor la garantice mediante alguna de las formas establecidas en el Código Fiscal de la Federación y únicamente con el monto de la sanción impuesta, pues dicha multa administrativa no genera recargos, esto último en términos del párrafo noveno del artículo 21 del citado Código, el que dispone:

[N.E. Se omite transcripción]

Por su parte, el artículo 144 del Código Fiscal de la Federación establece lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

En términos del anterior precepto invocado, no se ejecutarán los actos administrativos cuando se garantice el interés fiscal, satisfaciendo los requisitos legales, ni tampoco se ejecutará el acto que determine un crédito fiscal hasta que venza el plazo de 45 días siguientes a la fecha en que surta efectos su notificación. Si a más tardar del vencimiento de ese plazo se acredita la impugnación que se hubiera intentado y se garantiza el interés fiscal, satisfaciendo los requisitos legales, se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución.

Resulta aplicable la siguiente jurisprudencia emitida por este Órgano Jurisdiccional, cuyos datos de localización: R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 80. Agosto 2007. p. 9.

"**V-J-2aS-27**

"**SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, TRATÁNDOSE DE UNA MULTA ADMINISTRATIVA NO FISCAL.- PARA OTORGARSE SE REQUIERE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL.**" [N.E. Se omite transcripción]

En esos términos, al constituir un crédito fiscal la multa administrativa impuesta al hoy actor, es evidente que para evitar su ejecución, dicha actora al solicitarla en su demanda presentada en el juicio de origen, debió tomar en cuenta lo establecido en el artículo 28, fracción VI de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establece lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

De la transcripción anterior se advierte claramente, que cuando se trate de la solicitud de la suspensión de la ejecución contra actos relativos a la determinación, liquidación o ejecución de créditos de naturaleza fiscal, procederá la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos sí se ha constituido o se constituye la garantía

del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables.

Resulta aplicable el precedente emitido por la Primera Sección de la Sala Superior, aprobado en sesión de 15 de junio de 2010, pendiente de publicarse en la Revista de este Tribunal, el cual se reitera en esta sentencia, que es del tenor siguiente:

> "**MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES. DEBE OTORGARSE LA GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.**" [N.E. Se omite transcripción]

Por último, se tiene que resulta infundado el argumento de la autoridad recurrente en el que sostiene que con el otorgamiento de la medida cautelar se violan los intereses de la colectividad cuya protección resulta ser de mayor jerarquía que el interés particular, ya que si bien la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro es de orden público y de interés social, también lo es que la multa que se impuso a la hoy actora en el oficio N° D00/400/5542/2009, resolución impugnada en este juicio, tiene como origen el incumplimiento a las disposiciones de carácter general que regulan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, por lo que se considera que no es una conducta grave que pueda contravenir el orden público ni el interés social.

En esa tesitura, es procedente revocar la sentencia interlocutoria de 9 de marzo de 2010, otorgando a la actora el plazo de tres días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del presente fallo, para que constituya ante la autoridad exactora la garantía del interés fiscal por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, apercibiéndola de que en caso de no hacerlo en tiempo y forma de ley, la suspensión dejará de surtir sus efectos.

En mérito de lo expuesto y con fundamento en el artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el artículo 23, frac-

ción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, vigente al día siguiente de su publicación, se resuelve:

I.- Resultó procedente y parcialmente fundado el recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada, en contra de la sentencia interlocutoria de 9 de marzo de 2010, dictada por la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, en consecuencia:

II.- Se revoca la referida sentencia, en los términos y por los motivos resueltos en el Considerando Tercero de este fallo.

III.- Remítase copia certificada de esta sentencia, a la Sala Regional correspondiente, una vez que haya quedado firme la presente resolución y, en su oportunidad, archívese la carpeta de reclamación.

IV.- Notifíquese.

Así lo resolvió la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en sesión efectuada el **diecisiete de agosto de dos mil diez**, por mayoría de 4 votos a favor de la ponencia de los CC. Magistrados Nora Elizabeth Urby Genel, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Alejandro Sánchez Hernández y Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, y un voto en contra del C. Magistrado Jorge Alberto García Cáceres, quien se reservó su derecho para formular voto particular.

Fue Ponente en el presente asunto el Magistrado Manuel L. Hallivis Pelayo, cuya ponencia se aprobó.

Se elaboró el presente engrose el **veinte de agosto de dos mil diez**, con fundamento en lo previsto por los artículos 26 y 27 fracción III y 48, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Firma el

Magistrado Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Presidente de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Lic. Sonia Sánchez Flores, Secretaria Adjunta de Acuerdos quien da fe.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL C. MAGISTRADO JORGE ALBERTO GARCÍA CÁCERES EN EL RECURSO DE RECLAMACIÓN NÚM. 1916/10-17-12-1/1270/10-S1-03-05

El Magistrado Jorge Alberto García Cáceres, se reservó su derecho para formular voto particular en el presente asunto, el cual respetuosamente se manifiesta en los siguientes términos:

V O T O P A R T I C U L A R

El primer motivo de mi desacuerdo deriva del hecho de que la mayoría al resolver la reclamación interpuesta, determinó **modificar la parte considerativa**, pues determinan que lo procedente es "*...otorgar a la actora el plazo de tres días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del presente fallo, para que constituya ante la autoridad exactora la garantía del interés fiscal por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, apercibiéndola que en caso de no hacerlo en tiempo y forma de ley, la suspensión dejará de surtir sus efectos...*", siendo que las Secciones de la Sala Superior de este Tribunal no cuentan con facultades para modificar las sentencias, pues en todo caso corresponde a la Sala Regional siguiendo los lineamientos precisados por esta Sección, dictar una nueva sentencia interlocutoria.

En ese sentido, me aparto de lo resuelto por la mayoría, toda vez que considero que la resolución interlocutoria recurrida, sólo debe revocarse y remitir el asunto a la Sala Instructora, a fin de que dicte una nueva resolución conforme a los lineamientos expuestos en el presente fallo, pues únicamente corresponde a dicha Sala precisar los

efectos del fallo dictado, —*como es en el caso concreto, otorgar el plazo a la actora para que constituya el interés fiscal*— y no a esta Primera Sección.

Lo anterior es así, con base en los artículos 23 de la Ley Orgánica de este Tribunal; 24, penúltimo y último párrafos, 25 segundo párrafo, 26 y 28, fracción IX, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que a la letra establecen:

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

"**ARTÍCULO 23.-** Son facultades de las Secciones, las siguientes:
"**I.** Dictar sentencia definitiva en los juicios que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior, a excepción de aquéllos en los que se controvierta exclusivamente la aplicación de cuotas compensatorias;
"**II.** Resolver los juicios con características especiales, en términos de las disposiciones aplicables;
"**III.** Dictar sentencia interlocutoria en los incidentes y recursos que procedan en contra de los actos emitidos en el procedimiento seguido ante el Presidente de la Sección para poner en estado de resolución un asunto competencia de la propia Sección, inclusive cuando se controvierta la notificación de los actos emitidos por ésta, así como resolver la aclaración de sentencias, la queja relacionada con el cumplimiento de las resoluciones y determinar las medidas que sean procedentes;
"**IV.** Ordenar que se reabra la instrucción, cuando se amerite en términos de las disposiciones aplicables;
"**V.** Dictar sentencia definitiva en los juicios promovidos por los Secretarios, Actuarios y demás personal del Tribunal, en contra de sanciones impuestas por la Junta de Gobierno y Administración, en aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;

"**VI.** Establecer, suspender y modificar la jurisprudencia de la Sección y apartarse de ella, conforme a las disposiciones legales aplicables, aprobar las tesis y los rubros de los precedentes y Ordenar su publicación en la Revista del Tribunal;
"**VII.** Resolver los conflictos de competencia que se susciten entre las Salas Regionales, y
"**VIII.** Resolver los demás asuntos que establezcan las leyes."

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

"**ARTÍCULO 24.-** Una vez iniciado el juicio contencioso administrativo, pueden decretarse todas las medidas cautelares necesarias para mantener la situación de hecho existente, que impidan que la resolución impugnada pueda dejar el litigio sin materia o causar un daño irreparable al actor, salvo en los casos en que se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público.
"(...)
"El **Magistrado Instructor** podrá ordenar una medida cautelar, cuando considere que los daños que puedan causarse sean inminentes. En los casos en que se pueda causar una afectación patrimonial, el Magistrado Instructor exigirá una garantía para responder de los daños y perjuicios que se causen con la medida cautelar.
"En los demás casos que conozca la **Sala Regional**, ésta podrá dictar las medidas cautelares cuando las pida el actor pero deberá motivar cuidadosamente las medidas adoptadas; para ello, el particular justificará en su petición las razones por las cuales las medidas son indispensables."

"**ARTÍCULO 25.-** (...)

"Dentro del plazo de cinco días contados a partir de que haya recibido el informe o de que haya vencido el término para presentarlo, la **Sala Regional** dictará resolución definitiva en la que decrete o niegue las medidas cautelares solicitadas, decida, en su caso, sobre la admisión de la garantía ofrecida, la cual deberá otorgarse dentro de un plazo de tres días. Cuando no se otorgare la garantía dentro del plazo señalado, las medidas cautelares dejarán de tener efecto.
"(...)"

"**ARTÍCULO 26.-** La **Sala Regional** podrá decretar medidas cautelares positivas, entre otros casos, cuando, tratándose de situaciones jurídicas duraderas, se produzcan daños substanciales al actor o una lesión importante del derecho que pretende, por el simple transcurso del tiempo."

"**ARTÍCULO 28.-** El demandante, podrá solicitar la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, cuando la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución, cumpliendo con los siguientes requisitos.
"(...)"
"**IX.** El **Magistrado Instructor**, en el auto que acuerde la solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado, podrá decretar la suspensión provisional, siempre y cuando con ésta no se afecte al interés social, se contravenga disposiciones de orden público o quede sin materia el juicio, y se esté en cualquiera de los siguientes supuestos:
"(...)"

De los preceptos transcritos, se advierte que las Secciones de la Sala Superior no cuentan con facultades para conceder, negar **o modificar la suspensión** de la ejecución del acto impugnado ni cualquier otra medida cautelar dentro del juicio, en virtud de que dicha facultad es exclusiva del Magistrado Instructor de manera provisional o, en su caso, de la Sala Regional en forma definitiva.

En el caso que nos ocupa, la mayoría de los integrantes de esta Primera Sección, resolvieron negar la suspensión definitiva, sin embargo de conformidad con el artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, las Secciones de la Sala Superior como único caso de excepción, conocerán de los recursos de reclamación en contra de las sentencias interlocutorias que concedan o nieguen la suspensión de la ejecución del acto impugnado, teniendo la facultad de revocar o confirmar dichas sentencias, por lo tanto, discrepo del criterio mayoritario, en virtud de que las Secciones de la Sala Superior no cuentan con facultades para modificar la parte considerativa de la sentencia recurrida y tampoco **cuentan con facultades para condicionar el otorgamiento de una suspensión** "**que aún no se ha decretado**" ya que en todo caso, esta Primera Sección debió revocar la interlocutoria recurrida y remitir el asunto a la Sala Instructora a fin de que dictara otra resolución siguiendo los lineamientos contenidos en el presente fallo.

El segundo motivo de disenso se origina en virtud de que una vez revocada la sentencia recurrida, si la mayoría estimó que esta Primera Sección es competente para otorgar o negar la suspensión, entonces previo a emitir dicha determinación, debe de manera preferente verificar que se cumplan los requisitos de procedencia previstos en el artículo 28 primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y solamente si estos se cubren por la solicitante, procederá atender a los requisitos de eficacia.

En relación a los requisitos de procedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó la jurisprudencia 2a./107/2008 en la que establece la constitucionalidad del primer párrafo, del artículo 28, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo tanto, es de orden público su aplicación y obligatoria para este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, la cual dice:

"Registro No. 169178
"Localización: Novena Época

"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XXVIII, Julio de 2008
"Página: 518
"Tesis: 2a./J.107/2008
"Jurisprudencia
"Materia(s): **Constitucional**, Administrativa

"**SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. EL ARTÍCULO 28, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE PREVÉ LOS CASOS EN QUE PUEDE SOLICITARSE, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA.-** El artículo 28, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al establecer que el demandante podrá solicitar la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado cuando la autoridad ejecutora la niegue, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución, no transgrede la garantía de acceso a la justicia contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no condiciona dicha suspensión a la acción de la autoridad demandada, sino que se estructuró sobre la presunción de un requisito razonable para que un órgano jurisdiccional decida sobre la paralización de un acto que ha sido negado por aquella autoridad, **consistente en que el interesado en suspender la ejecución del acto administrativo haya exteriorizado su intención al presentar la solicitud respectiva ante la autoridad ejecutora y que ésta se haya negado a concederla**. Además, el indicado precepto prevé una oportunidad adicional para que se revise la negativa de la suspensión, siempre que tal pretensión, como se estableció, se haya exteriorizado por el interesado, lo cual presupone un actuar lógico indispensable de éste para que el Magistrado se pronuncie en el juicio contencioso administrativo, toda vez que no puede decidir sobre una cuestión que no le ha sido planteada.

"Amparo en revisión 522/2007. Gustavo Achach Abud. 19 de septiembre de 2007. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Javier Arnaud Viñas.

"Amparo en revisión 938/2007. José Alfredo Fernández Galeana. 31 de octubre de 2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García.

"Amparo en revisión 75/2008. Óscar Vicente Hernández Delgadillo. 20 de febrero de 2008. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Óscar Rodríguez Álvarez.

"Amparo en revisión 90/2008. Gabriela Aguilera Sánchez. 12 de marzo de 2008. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Guadalupe de la Paz Varela Domínguez.

"Amparo en revisión 188/2008. María Auxilio Rivera Pérez. 30 de abril de 2008. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Paula María García Villegas.

"Tesis de jurisprudencia 107/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dos de julio de dos mil ocho."

A fin de esclarecer el correcto sentido y aplicación de la jurisprudencia de mérito se acude a la ejecutoria[1] que sirvió de sustento para su formulación, la cual en su parte conducente señala:

"(...) es necesario subrayar que este Alto Tribunal ya ha determinado que el derecho a la tutela judicial, puede verse conculcado por normas que impongan

[1] http://www2.scjn.gob.mx/ius2006/UnaEj.asp?nEjecutoria=20526&Tpo=2 consultada el 25 de agosto de 2010.

requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carecen de razonabilidad o proporcionalidad, respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Así, esta Suprema Corte de Justicia ha establecido que resultan inconstitucionales las normas que establecen; por ejemplo, que para comparecer ante un tribunal, necesariamente debe contarse con el asesoramiento o representación de un perito en derecho o la necesidad de agotar un sistema de arbitraje o conciliación obligatorio, previo al acceso a los tribunales, o el impedir que el escrito inicial de impugnación sea presentado ante la oficina de correos cuando el domicilio del demandante sea distinto al lugar de residencia de la autoridad administrativa competente.(5)

"Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden ser tachados de inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de este derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos.

"(...)

"La existencia de determinadas formas y de plazos concretos para acceder a la justicia no tiene su origen en una intención caprichosa del Constituyente de dotar al legislador ordinario con un poder arbitrario. Por el contrario, responde a la intención de aquél de facultar a éste para que pueda establecer mecanismos que garanticen el respeto a las garantías de seguridad jurídica y dentro de éstas, la de legalidad e igualdad en los procedimientos.

"Esas garantías de seguridad jurídica se manifiestan como la posibilidad de que los gobernados tengan certeza de que su situación jurídica no será

modificada más que por procedimientos regulares, establecidos previamente, es decir, bajo los términos y plazos que determinen las leyes, como lo establece el precitado artículo 17 constitucional. De esta forma, se dota al legislador ordinario con la facultad de emitir leyes procesales mediante las cuales se regulen los modos y condiciones para la actuación de los sujetos de la relación jurídica procesal que nace con éste.

"A manera de ejemplo de las condiciones antes mencionadas, cabe citar, entre otras, el órgano que debe conocer del procedimiento (competencia); los plazos y la forma en que se deben realizar las actuaciones; los medios permitidos para que se acrediten las pretensiones de las partes (pruebas); cuáles son las personas que pueden demandar y cuáles pueden ser demandadas (legitimación); el procedimiento que el legislador previó para el caso concreto (vía), etcétera.

"Entonces, esas condiciones que se establecen previniendo los posibles conflictos que puedan darse, son mecanismos que sirven para preservar la seguridad jurídica de los implicados en la tutela jurisdiccional. Así, el solicitante sabrá exactamente cuándo y ante quién debe ejercer su derecho, los requisitos que debe reunir para hacerlo, los plazos para ofrecer y desahogar sus pruebas, etcétera. De la misma manera, la parte demandada sabrá cuándo y cómo contestar la demanda, ofrecer y desahogar sus pruebas, etcétera, ya que esas condiciones pueden variar dependiendo de cada uno de los procedimientos establecidos por las leyes procesales.

"Ahora bien, precisamente porque esas condiciones y plazos encuentran un fundamento constitucional (garantía de seguridad jurídica), deben ser acatados, como ya se dijo, tanto por el órgano encargado de la función jurisdiccional, como por las partes que solicitan el funcionamiento de dicho órgano.

"Dentro de esas condiciones se encuentra la forma de presentación de los medios de acceso a la justicia, la cual, como se ha referido, compete al legislador

establecer en cada una de las leyes que regulen la sustanciación de algún medio de defensa legal.

"(...)

"En el caso que nos ocupa, el quejoso se duele del primer párrafo del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual establece:

"'*Artículo 28. El demandante, podrá solicitar la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, cuando la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución, cumpliendo con los siguientes requisitos* (...)'

"Es infundado lo que alega, en virtud de que, ciertamente con establecer que los gobernados podrán solicitar la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, cuando la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución, no se coarta de manera injustificada el acceso a la justicia a que todo individuo tiene derecho, toda vez que con independencia de lo que se decida sobre la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, ello no impide u obstaculiza el procedimiento jurisdiccional y el que se resuelva sobre la legalidad de dicho acto en el juicio de nulidad, dado que la figura de la suspensión es accesoria al juicio principal, pues por lo que en ella se decida no prejuzga sobre lo que se determine en aquél.

"Asimismo, lo establecido por el artículo impugnado no está supeditando la referida suspensión al actuar de la autoridad demandada, sino que por el contrario, tal figura se establece con el objeto de que la parte interesada en obtener la suspensión de la ejecución del acto administrativo que por alguna razón haya sido negada por la autoridad demandada, pueda solicitarla ante el

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuando impugne en el juicio de nulidad la resolución que le perjudica.

"Así, el que se establezca que el demandante, podrá solicitar ante la Sala Fiscal la suspensión de la ejecución del acto administrativo, cuando la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución, no está condicionado tal suspensión a un accionar de la autoridad demandada, sino que por el contrario la norma impugnada simplemente está estructurada sobre la presunción de un requisito razonable para que un órgano jurisdiccional pueda decidir sobre la paralización de un acto que ha sido negado por la autoridad demandada, cumpliendo además con los otros requisitos que para su concesión establece el propio artículo: **el que la parte demandante interesada en suspender la ejecución del acto administrativo haya exteriorizado tal intención, mediante la presentación de una solicitud al respecto ante la autoridad ejecutora y que esta última se haya negado a conceder dicho derecho es una condición razonable, ya que de no haberse exteriorizado tal pretensión de suspender la ejecución del acto administrativo, no podría haber resistencia o negativa de la contraparte (autoridad ejecutora) y por ende no podría haber materia que resolver por parte de la Sala Fiscal, en cuanto a la referida suspensión**.

"Más aún, el primer párrafo del referido artículo 28 no niega el acceso a la justicia, sino que **establece una oportunidad adicional para que se revise la negativa a la suspensión de la ejecución del acto administrativo, siempre que tal pretensión haya sido exteriorizada por la parte actora**, de ahí que en lugar de contrariar el artículo 17 constitucional, lo cumple cabalmente, ya que el numeral reclamado al prever la suspensión de la ejecución del acto administrativo, cuando la autoridad ejecutora la haya negado, está presuponiendo un actuar indispensable de la parte interesada en obtener la suspensión de dicho acto**, como lo es el que haya solicitado la suspensión de la ejecución del acto impugnado en nulidad ante la autoridad ejecutora, lo cual es presupuesto indispensable para que en el juicio**

contencioso administrativo el Magistrado se pueda pronunciar, toda vez que no resultaría razonable pensar que aquél pueda decidir sobre una cuestión que no ha sido ni siquiera planteada por la interesada.

"En esta tesitura es incuestionable que, **para precisamente no romper con la esencia de un proceso jurisdiccional efectivo entre las partes la redacción del referido artículo 28 encuentra su lógica, pues en todo proceso litigioso en principio se requiere que el demandante o parte interesada exteriorice su pretensión ante la autoridad competente** (en este caso solicitar la suspensión de la ejecución del acto reclamado ante la autoridad ejecutora) y que ante ese accionar la contraparte (autoridad ejecutora) se niegue a satisfacer tal exigencia, ya que un razonamiento contrario nos podría llevar al absurdo de considerar que el acceso a la justicia implica que las pretensiones de la parte actora no tengan que respetar las formas y/o plazos establecidos para dar una respuesta jurisdiccional a dichas pretensiones, lo que podría obligar al órgano jurisdiccional a pronunciarse sobre un litigio inexistente.

"De donde, para que un órgano jurisdiccional esté en aptitud de pronunciarse en cuanto a lo solicitado, es menester que el interesado (demandante) lleve a cabo las **actividades mínimas necesarias para asegurar la activación del mecanismo de protección, lo que implica en muchas circunstancias cumplir con determinados requisitos; en el caso, el haber externado su voluntad en el sentido de impulsar la actividad de la autoridad competente**."

Entonces, la invocada jurisprudencia 2a./J. 107/2008 define que el artículo 28 primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al establecer que el demandante podrá solicitar la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado cuando: la autoridad ejecutora la niegue, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución, no transgrede la garantía de acceso a la justicia contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; **lo**

que no es un pronunciamiento de esta Primera Sección sino la sola aplicación de la citada jurisprudencia. Así, el interesado en suspender la ejecución del acto administrativo **debe exteriorizar su intención al presentar la solicitud respectiva ante la autoridad ejecutora** y que ésta se niegue a concederla, rechace la garantía o reinicie la ejecución.

Se tiene entonces, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el sentido y alcance del artículo 28, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para efectos del **acceso a la justicia**, declarando que tal disposición legal está dentro del marco de la Constitución General de la República y que **se estructuró sobre la presunción de un requisito razonable para que un órgano jurisdiccional decida sobre la paralización de un acto que ha sido negado por aquella autoridad**.

En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación define en la referida jurisprudencia que el primer párrafo del referido artículo 28 establece una oportunidad adicional para que se revise la negativa a la suspensión de la ejecución del acto administrativo, **siempre que tal pretensión haya sido exteriorizada por la parte actora**, es decir, que está presuponiendo un actuar indispensable de la parte interesada en obtener la suspensión de dicho acto, **como lo es el que haya solicitado la suspensión de la ejecución del acto impugnado en nulidad ante la autoridad ejecutora, lo cual es presupuesto indispensable para que en el juicio contencioso administrativo el Magistrado se pueda pronunciar, toda vez que no resultaría razonable pensar que aquél pueda decidir sobre una cuestión que no ha sido ni siquiera planteada por la interesada**.

En esta tesitura dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que **para no romper con la esencia de un proceso jurisdiccional efectivo entre las partes, la redacción del referido artículo 28 encuentra su lógica, pues en todo proceso litigioso en principio se requiere que el demandante o parte interesada exteriorice su pretensión ante la autoridad competente**, en este caso solicitar la

suspensión de la ejecución del acto reclamado ante la autoridad ejecutora, y que ante ese accionar la contraparte (autoridad ejecutora) se niegue a satisfacer tal exigencia.

En efecto, para que un órgano jurisdiccional esté en aptitud de pronunciarse en cuanto a lo solicitado, es menester que el interesado (demandante) lleve a cabo las actividades mínimas necesarias para asegurar la activación del mecanismo de protección, lo que implica en muchas circunstancias cumplir con determinados requisitos; en el caso, el haber externado su voluntad en el sentido de impulsar la actividad de la autoridad competente.

Bajo los lineamientos de la jurisprudencia 2a./J. 107/2008, se tiene que en caso de solicitar la suspensión de la ejecución en contra de actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, el interesado debe cumplir con los requisitos que establece el artículo 28, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, consistentes en:

1. Que la autoridad ejecutora niegue la suspensión; rechace la garantía ofrecida, o reinicie la ejecución (párrafo primero). ***Como requisito razonable para que un órgano jurisdiccional decida sobre la paralización de un acto que ha sido negado por aquella autoridad***.

2. Exige acompañar copias de la promoción en la que solicite la suspensión y de las pruebas documentales relativas al ofrecimiento de garantía; a la solicitud de suspensión presentada ante la autoridad **ejecutora**; la negativa de la suspensión; el rechazo de la garantía, o el reinicio de la ejecución (fracción III).

3. La eficacia de la suspensión se sujeta que se haya constituido o se constituya el interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales (fracción VI).

En este orden de ideas, del análisis practicado a las constancias que integran la carpeta en que se actúa, no se desprende que el demandante haya acreditado en el presente juicio, que previo a su interposición, hubiere cumplido el requisito estructural de la medida cautelar, solicitando **ante la autoridad ejecutora** la suspensión de la ejecución del acto que le determinó el crédito fiscal, y que ésta haya negado la suspensión; rechazado la garantía ofrecida, o reiniciado la ejecución.

Por tanto, es claro que no se cumplen con el requisito de procedencia señalado en el punto 1 citado anteriormente y en consecuencia tampoco con el referido en el número 2, de donde se tiene que la solicitud de suspensión es improcedente por no reunir los requisitos del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

El sentido de la jurisprudencia 2a./J. 107/2008 referida en párrafos precedentes, se robustece porque la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció la Jurisprudencia **2a./J. 68/2010**, publicada en el Semanario Judicial de la Federación en el mes de mayo de 2010 página 843, que a la letra señala:

> "**SUSPENSIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS PARA QUE PROCEDA CUANDO SE SOLICITA CONTRA ACTOS RELATIVOS A LA DETERMINACIÓN, LIQUIDACIÓN, EJECUCIÓN O COBRO DE CONTRIBUCIONES O CRÉDITOS DE NATURALEZA FISCAL.-** De la interpretación gramatical del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y en congruencia con la voluntad externada por el legislador durante el proceso legislativo, se advierte que el primer párrafo de dicho numeral contiene el presupuesto general requerido para la procedencia de la suspensión en todos los casos en los que se solicite esa medida, esto es, que la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución, cumpliendo con los demás requisitos enlistados a continuación en la norma, respecto de los cuales el legislador especificó algunos tratándose del cobro de contribuciones. De ahí que para la procedencia de la suspensión contra actos

relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, concurren los siguientes requisitos: 1. Precisa que la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución; 2. Exige acompañar copias de la promoción en la que solicite la suspensión y de las pruebas documentales relativas al ofrecimiento de la garantía, la solicitud de suspensión presentada ante la autoridad ejecutora, la negativa de la suspensión, el rechazo de la garantía o el reinicio de la ejecución; y, 3. La eficacia de la suspensión se sujeta a que se haya constituido o se constituya el interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales. En ese sentido, resultan inaplicables los requisitos previstos en las fracciones IV, V, VII y IX del propio artículo 28 y la Sala Regional carece de discrecionalidad para otorgarla; pero sí está facultada para reducir el importe de la garantía si el monto de los créditos excede la capacidad económica del actor y si se trata de tercero distinto al sujeto obligado directa o solidariamente al pago del crédito.

"Contradicción de tesis 489/2009.- Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar con residencia en Guadalajara, Jalisco y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.- 12 de mayo de 2010.- Cinco votos.- Ponente: Luis María Aguilar Morales.- Secretaria: Jesicca Villafuerte Alemán.

"Tesis de jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de mayo del dos mil diez."

Es de reiterar que las anteriores jurisprudencias son de observancia obligatoria para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, y se encuentra obligado a aplicarla.

En ese orden de ideas, concluyo que la sentencia interlocutoria recurrida es ilegal, puesto que de manera previa a determinar si se encuentra debidamente garantizado el interés fiscal o no, el cual constituye un requisito de eficacia, se tiene

que analizar la procedencia de la solicitud de suspensión formulada por el demandante, siendo que, como ya se analizó en párrafos anteriores, la solicitud de suspensión contenida en la demanda formulada directamente ante este Tribunal, no cumple con los requisitos de procedencia contenidos en el primer párrafo del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

En las relatadas consideraciones, lo procedente era revocar la sentencia interlocutoria de fecha 09 de marzo de 2010, emitida por la Sala al ser improcedente la solicitud de suspensión promovida por la parte actora, sin que ello impida a la demandante, el que pueda solicitar la suspensión ante la autoridad a efecto de cumplir con los supuestos del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Cabe precisar como hecho notorio, que el asunto es igual al proyectado en la Ponencia de la Magistrada Urby Genel con número de expediente 2117/10-17-12-3/ 1268/10-S1-02-05, del actor SCOTIA SIEFORE BÁSICA 4, S.A. DE C.V., que se vio en sesión de 10 abril de 2010, aprobado por mayoría de 3 votos a favor y 2 votos en contra de los Magistrado Sánchez Hernández y Delgadillo Gutiérrez; aplicando en esa ocasión la jurisprudencia 68/2010 por considerar que de lo argumentado por la recurrente se advertía que planteaba en esencia la violación de los requisitos establecidos por el artículo 28 primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo que llevó a revocar la sentencia recurrida y a declarar improcedente la solicitud de suspensión de la actora, por lo que el mismo criterio debería aplicarse aquí.

MAG. JORGE ALBERTO GARCÍA CÁCERES

SEGUNDA SECCIÓN

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-2aS-611

MODIFICACIÓN DE LOS EFECTOS DE UNA SENTENCIA RECURRIDA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 62 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Es procedente la modificación de una sentencia interlocutoria recurrida a través del recurso de reclamación previsto en el artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en la que la Sala Regional del conocimiento hubiese omitido pronunciamiento respecto a la solicitud de una medida cautelar relativa al levantamiento de las cuentas bancarias embargadas, quedando intocado lo que no fue controvertido, en el entendido de que es procedente la solicitud del actor al haber quedado debidamente garantizado el interés fiscal por otro medio.

Recurso de Reclamación Núm. 7552/07-11-03-4/931/09-S2-06-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 27 de abril de 2010, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Carlos Augusto Vidal Ramírez.
(Tesis aprobado en sesión de 17 de agosto de 2010)

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-2aS-612

SENTENCIA QUE DECRETA LA CONCESIÓN DE UNA MEDIDA CAUTELAR, DEBE CUMPLIRSE DE INMEDIATO.- Si en la sentencia pronunciada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se decreta la concesión de una medida cautelar, debe precisarse además, que la autoridad deberá proceder de inmediato al cumplimiento del fallo, para garantizar la eficacia de la medida concedida.

Recurso de Reclamación Núm. 7552/07-11-03-4/931/09-S2-06-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 27 de abril de 2010, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Carlos Augusto Vidal Ramírez.
(Tesis aprobado en sesión de 17 de agosto de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

CUARTO.- [...]

Esta Juzgadora advierte que el recurso de reclamación se hizo valer en contra del acuerdo de 1º de diciembre de 2008, emitido por el Magistrado Instructor de la Tercera Sala Regional Hidalgo-México, en el que se resolvió tener por no interpuesto el incidente de medidas cautelares, así como negar el levantamiento del embargo de las cuentas bancarias; asimismo se impugnó la sentencia interlocutoria de la misma fecha, pronunciada por esa Tercera Sala.

Para analizar el recurso interpuesto en relación al acuerdo referido en primer término, es preciso transcribirlo a continuación:

[N.E. Se omite imagen]

Esta Juzgadora considera que el recurso interpuesto en contra del acuerdo del Magistrado Instructor, precisado en líneas anteriores es improcedente en virtud de que el artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que como único caso de excepción las sentencias interlocutorias que conceden o nieguen la suspensión definitiva, podrán ser impugnadas mediante el recurso de reclamación; y es el caso de que la resolución impugnada es un acuerdo, luego entonces, no se ajusta a lo establecido en dicho precepto, transcrito enseguida, y en consecuencia resulta ser improcedente el recurso por lo que hace a este aspecto.

[N.E. Se omite transcripción]

No constituye óbice a esta conclusión, la circunstancia alegada por el recurrente de que el acuerdo de 1º de diciembre de 2008, cumple con el contenido material de una sentencia interlocutoria, y en apoyo de lo afirmado arguye entre otras cuestiones que fue emitido por la Tercera Sala Regional Hidalgo-México; aseveración absolutamente infundada, pues basta su lectura, para advertir que fue emitido solo por el Magistrado Instructor de esa Sala, de manera que no puede revestir el carácter de sentencia interlocutoria por no haber intervenido en su emisión, todos los Magistrados integrantes de la misma.

Sirve de apoyo lo que se ha sostenido, la tesis V-PaS-775, que se inserta a continuación:

"**DESECHAMIENTO A LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO IMPUGNADO, POR ACUERDO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR.- EL RECURSO DE RECLAMACIÓN ES IMPROCEDENTE PARA IMPUGNARLO.**" [N.E. Se omite transcripción]

En virtud de lo anterior, esta Segunda Sección concluye que el recurso de reclamación interpuesto en contra del acuerdo 1º de diciembre de 2008, es **IMPROCEDENTE**.

Ahora bien, tocante al recurso interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de 1º de diciembre de 2008, es **PROCEDENTE** y **FUNDADO** para **MODIFICAR** la sentencia recurrida, en razón de las siguientes consideraciones:

En contra de la sentencia interlocutoria de mérito el recurrente hace valer como agravio, que solo atendió a la solicitud de la suspensión de la ejecución presentada el 15 de enero de 2008, en la que si bien es cierto decretó la suspensión de la ejecución omitió pronunciarse respecto de la liberación de embargo de las cuentas bancarias.

Para comprender el agravio precisado, es menester referirnos a los antecedentes a tomar en cuenta sobre el particular:

El 15 de de enero de 2008, la actora solicitó la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución; el día 30 de ese mes y año se concedió la suspensión provisional; habiendo rendido el siguiente 30 de abril la autoridad el informe que le fue solicitado, para que el 1º de diciembre del mismo año se pronunciara sentencia que concedió la suspensión definitiva.

Ahora bien, durante el trámite de dicho procedimiento la actora presentó un escrito el 30 de junio de ese año, en el que solicitó que se levantara el embargo de sus cuentas bancarias arguyendo que si en fecha posterior a éste también le fue embargada su negociación y siendo ésta bastante para garantizar los créditos reclamadas, no existe razón para que permanezcan embargadas las cuentas, ya que por otra parte le es perjudicial al impedirle que pueda realizar depósitos o extraer dinero de estas, lo que es indispensable en la activación de su negocio.

Esta Juzgadora advierte que la solicitud de que se levantara el embargo de las cuentas bancarias de mérito, guarda estrecha relación con la materia de la suspensión

del procedimiento administrativo de ejecución, y aunque fueron solicitados en diverso momento, habiéndose pronunciado la Sala Instructora en la misma fecha respecto de ambos planteamientos, esto es, el 1º de diciembre de 2008, debió hacerlo en la misma interlocutoria. En efecto, al no haberse pronunciado conjuntamente sino dictar dos resoluciones paralelas, o sea un acuerdo pronunciado por el Magistrado Instructor, y la sentencia interlocutoria por la Sala Regional, dio lugar a que la primera no pudiera combatirse a través de la interposición de un recurso y la segunda sí.

Ahora bien, al no haberse resuelto conjuntamente los planteamientos de la actora en la interlocutoria recurrida, se incurrió en una violación procesal en su contra, por lo que se estima que en este aspecto el agravio es fundado, en virtud de lo cual esta Juzgadora se sustituye a la Sala Regional en el tema que debió abordar respecto al levantamiento del embargo de las cuentas bancarias, decisión que encuentra apoyo en la jurisprudencia V-J-2aS-18, que puede leerse a continuación:

> "**EFECTOS DE LA SENTENCIA PRONUNCIADA EN EL RECURSO DE RECLAMACIÓN, INTERPUESTO EN CONTRA DE LA CONCESIÓN O NEGATIVA DE SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS.**" [N.E. Se omite transcripción]

Para resolver sobre lo solicitado por la recurrente, es menester el conocimiento del escrito relativo que enseguida se transcribe:

[N.E. Se omite transcripción]

En principio, debe mencionarse que la sentencia recurrida queda firme tocante a la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución de los créditos fiscales determinados, concedida en la sentencia del 1º de diciembre de 2008, en virtud de que no fue objeto de impugnación.

Ahora bien, tomando en cuenta que el 13 de septiembre de 2007, personal adscrito a la Administración Local de Recaudación de Toluca, se constituyó en el

domicilio de la actora para llevar a cabo diligencias de requerimiento de pago y embargo de los créditos fiscales reclamados, habiendo procedido al embargo de las cuentas bancarias abiertas en las instituciones de crédito, Banamex, S.A., Grupo Financiero Banorte, S.A. y Banco Santander, S.A. números 2857950890, 00143747644 y S1-90805919-6, respectivamente; y que posteriormente el día 25 de ese mes y año, el mismo personal señalado se constituyó nuevamente en el domicilio de la actora para ampliar el embargo, el cual se trabó en la negociación en su conjunto en todo lo que de hecho y por derecho le corresponde; es decir, existe un embargo genérico que recayó en la negociación de la hoy actora, con todo lo que de hecho y por derecho corresponde, incluyendo las cuentas de activo como son los depósitos bancarios; por ende, en dicho embargo están inmersas las cuentas bancarias, de manera que no se justifica el congelamiento de las mismas, lo que impide a la empresa actuar con la regularidad y normalidad que su funcionamiento exige. En estas condiciones no es necesaria la existencia de otro embargo como se desprende del artículo 156-bis, con base en el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, y en consecuencia, como lo solicita la demandante, procede levantar el embargo de las cuentas bancarias, máxime que la autoridad demandada no demostró que el embargo practicado en la negociación sea insuficiente para garantizar los créditos fiscales reclamados, ya que a ella le correspondía la carga de la prueba.

Cabe señalar que el embargo coactivo sobre cuentas bancarias implica un acto que al ejecutarse resulta consecuencias de imposible reparación, a virtud de los efectos económicos, comerciales y jurídicos que puede producir ante la imposibilidad de disponer libremente de los fondos contenidos en la cuenta bancaria que impacta en las actividades del contribuyente, y que de conformidad con el artículo 156-bis del Código Fiscal de la Federación implica la inmovilización de los depósitos y permanece hasta que el crédito fiscal no quede firme, con lo que el particular no puede ser restituido del tiempo que duró el aseguramiento de su cuenta bancaria, ni del perjuicio sufrido por la imposibilidad de usarlo un su beneficio. Así, habiéndose otorgado una diversa garantía, procede el levantamiento del embargo de las cuentas bancarias, con lo que se evita se ocasionen al actor daños y perjuicios mayores. Se apoya este criterio en el emitido por esta Segunda Sección que se inserta a continuación:

"**EMBARGO COACTIVO SOBRE CUENTAS BANCARIAS.- ES UN ACTO DE EJECUCIÓN QUE OCASIONA DAÑOS Y PERJUICIOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN SOLICITADA PARA EL EFECTO DE QUE CESE EL ESTADO DE INMOVILIZACIÓN DE LA CUENTA RELATIVA, SI EL INTERÉS FISCAL SE ENCUENTRA ASEGURADO CON OTRA FORMA DE GARANTÍA.**" [N.E. Se omite transcripción]

En opinión de los Tribunales Colegiados de Circuito, procede la suspensión si en el juicio de garantías se impugna el embargo precautorio o aseguramiento de cuentas bancarias y existe un crédito fiscal, líquido y exigible, para permitir al contribuyente manejarlas libremente, si otorga garantía en términos del artículo 135 de la Ley de Amparo, lo que robustece la conclusión a que se arriba en el presente asunto, toda vez que el libre manejo de sus cuentas, evitaría los perjuicios causados al no poderla utilizar en su beneficio. Tesis que se inserta a continuación:

"**EMBARGO PRECAUTORIO O ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA CUANDO EXISTE UN CRÉDITO FISCAL LÍQUIDO Y EXIGIBLE, PARA QUE SE PERMITA AL CONTRIBUYENTE MANEJARLAS LIBREMENTE, SIEMPRE QUE OTORGUE GARANTÍA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO.**" [N.E. Se omite transcripción consultable en SJF. Novena Época. XXX. Septiembre de 2009. IV.2o.A.259. p. 3132]

Ahora bien, para que se dé el debido cumplimiento al presente fallo, una vez que le sea notificado la autoridad, deberá proceder de inmediato a levantamiento de la congelación de las cuentas bancarias.

En consecuencia, habiendo resultado el agravio fundado, se modifica la sentencia interlocutoria de mérito, quedando firme lo determinado respecto a la suspen-

sión de la ejecución de los créditos impugnados; procediendo se decrete el levantamiento del embargo de las cuentas bancarias, por las razones expuestas.

En mérito de lo expuesto y, con fundamento en los artículos 23, fracción VIII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, y 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

R E S O L U T I V O S

I.- Resultó **PROCEDENTE** pero **INFUNDADO** el recurso de reclamación promovido por la autoridad demandada.

II.- Es **IMPROCEDENTE** el recurso de reclamación promovido por la actora por lo que hace al acuerdo del 1º de diciembre de 2008, pronunciado por el Magistrado Instructor de la Tercera Sala Regional Hidalgo-México.

III.- Es **PROCEDENTE** y **FUNDADO** el recurso de reclamación promovido por la actora, en contra de la sentencia de 1º diciembre de 2009, en consecuencia;

IV.- Se **MODIFICA** la sentencia recurrida en los términos y para los efectos señalados en el último considerando de esta sentencia.

V.- Envíese copia del presente fallo a la Tercera Sala Regional Hidalgo-México, para que sea integrada a la carpeta de suspensión correspondiente.

VI.- NOTIFÍQUESE.- Con copia autorizada del presente fallo a las partes y una vez que haya quedado firme, archívese este expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de fecha 27 de abril de 2010, por mayoría de cuatro votos a favor de los Magistrados Luis Carballo Balvanera, Olga Hernández

Espíndola, Silvia Eugenia Díaz Vega y Juan Manuel Jiménez Illescas; y, un voto en contra del Magistrado Alfredo Salgado Loyo, quien se reservó el derecho de formular voto particular.

Fue Ponente el Magistrado Alfredo Salgado Loyo, cuya ponencia fue aprobada.

Se formuló el presente engrose el 29 de abril de 2010, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción III, y 48 fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007 y en vigor a partir del día siguiente, firma el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior, ante el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos de la misma Sección, quien autoriza y da fe.

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

VI-P-2aS-613

ESTADOS DE ADEUDOS, CONSULTA NUMÉRICA DE PATRONES Y ESTADOS DE CUENTA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- NO SON IDÓNEOS PARA ACREDITAR LA UBICACIÓN DEL DOMICILIO FISCAL DEL ACTOR.- El último párrafo del artículo 30 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que cuando se considere que una Sala Regional esté conociendo de un juicio que sea competencia de otra, las partes pueden acudir ante el Presidente del Tribunal, a fin de que las Secciones, resuelvan qué Sala es la competente para conocer del juicio. Ahora bien, si es la autoridad demandada quien interpone incidente de incompetencia por razón de territorio, argumentando que el domicilio fiscal del actor no es el que señaló en su escrito de demanda, y a efecto de acreditar su pretensión, en términos de lo previsto en el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, exhibe los estados de adeudos, consulta numérica de patrones y estados de cuenta del Instituto Mexicano del Seguro Social, se debe considerar que los mismos no son los idóneos para desvirtuar la presunción del domicilio fiscal a que se refiere el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que no se desprende fehacientemente que el domicilio allí indicado, sea el domicilio fiscal de la parte actora, dado que en todo caso, la documental idónea para acreditarlo es el aviso de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes o bien el aviso de modificación de domicilio fiscal.

Incidente de Incompetencia Núm. 24251/08-17-01-3/621/10-S2-09-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 29 de junio de 2010, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretario: Lic. Juan Carlos Mateo Leyva.
(Tesis aprobada en sesión de 29 de junio de 2010)

EN EL MISMO SENTIDO:

VI-P-2aS-614

Incidente de Incompetencia Núm. 7587/09-11-02-4/301/10-S2-08-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de agosto de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 10 de agosto de 2010)

VI-P-2aS-615

Incidente de Incompetencia Núm. 23443/09-17-11-6/1211/10-S2-07-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 9 de septiembre de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez.
(Tesis aprobada en sesión de 9 de septiembre del 2010)

PRECEDENTE:

VI-P-2aS-435
Incidente de Incompetencia Núm. 5739/08-11-03-2/2027/08-S2-10-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de mayo de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretario: Lic. Luis Edwin Molinar Rohana.
(Tesis aprobada en sesión de 27 de noviembre del 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 27. Marzo 2010. p. 248

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

VI-P-2aS-616

INCIDENTE DE INCOMPETENCIA INTERPUESTO POR LA DEMANDADA.- CASO EN QUE ÉSTA PRUEBA CON EL REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACIÓN DE CONTRIBUYENTE EL DOMICILIO FISCAL DE LA ACTORA A LA FECHA DE INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA.- El artículo 34 de la Ley Orgánica de este Tribunal actualmente en vigor, establece en su primer párrafo que las Salas Regionales conocerán de los juicios por razón de territorio atendiendo al lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante, y en su último párrafo preceptúa que se presumirá como domicilio fiscal el señalado en la demanda, salvo que la demandada demuestre lo contrario. Ahora bien, la demandada demuestra el domicilio fiscal que tenía la actora a la fecha de interposición de la demanda con el documento denominado "Reporte General de Consulta de Información de Contribuyente", si en el mismo se contienen elementos que permitan deducir dicho extremo, como lo es el que en el apartado de "Situación del Domicilio Fiscal" se indique "Localizado", que la fecha de emisión del reporte en cita sea posterior al día en que se interpuso la demanda, y que entre ambas fechas no haya ocurrido un cambio de domicilio fiscal; caso en el cual debe concluirse que el domicilio fiscal de la actora a la fecha de interposición de la demanda, es el que se indica en la mencionada documental pública ofrecida como prueba por la autoridad incidentista.

Incidente de Incompetencia Núm. 24251/08-17-01-3/621/10-S2-09-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 29 de junio de 2010, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretario: Lic. Juan Carlos Mateo Leyva.
(Tesis aprobada en sesión de 29 de junio de 2010)

PRECEDENTES:

VI-P-2aS-419
Incidente de Incompetencia Núm. 326/09-12-02-8/1029/09-S2-06-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de septiembre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Pedro Martín Ibarra Aguilera.
(Tesis aprobada en sesión de 15 de octubre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 26. Febrero 2010. p. 226

VI-P-2aS-420
Incidente de Incompetencia Núm. 34729/08-17-10-2/2040/09-S2-09-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de noviembre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretaria: Lic. Thelma Semíramis Calva García.
(Tesis aprobada en sesión de 19 de noviembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 26. Febrero 2010. p. 226

VI-P-2aS-543
Incidente de Incompetencia Núm. 844/09-12-03-1/1512/09-S2-09-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 11 de mayo de 2010, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretario: Lic. Juan Carlos Mateo Leyva.
(Tesis aprobada en sesión de 11 de mayo de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 31. Julio 2010. p. 159

VI-P-2aS-581
Incidente de Incompetencia Núm. 2648/09-12-01-2/2286/09-S2-06-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi-

nistrativa, en sesión de 1 de junio de 2010, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Pedro Martín Ibarra Aguilera.

(Tesis aprobada en sesión de 1 de junio de 2010)

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 33. Septiembre 2010. p. 77

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

VI-P-2aS-617

INCIDENTE DE INCOMPETENCIA.- CASO EN QUE QUEDA SIN MATERIA.- Si durante el trámite de dos incidentes de incompetencia, los juicios de los que se derivan fueren acumulados en la Sala Regional del conocimiento; habiendo resuelto la Sección cuál de éstas es la competente por razón de territorio para conocer del asunto vinculado con el que fue atraído y tomando en consideración que a virtud de la acumulación sólo estamos en presencia de un juicio, ya no es necesario pronunciarse en el incidente restante, toda vez que la determinación de la competencia también se extiende a éste, motivo por el cual lo procedente es declararlo sin materia.

Incidente de Incompetencia Núm. 681/09-07-01-8/1459/09-S2-06-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 29 de junio de 2010, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Carlos Augusto Vidal Ramírez.
(Tesis aprobada en sesión de 17 de agosto de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

CUARTO.- Para los efectos de la conclusión a que se arribe en el incidente de incompetencia que se revisa, debe mencionarse que en la sentencia interlocutoria de 3 de junio de 2009, pronunciada por la Primera Sala Regional de Occidente de este Tribunal en el incidente de acumulación de autos planteado en el juicio de nulidad 684/09-07-03-01, atraído al juicio 681/09-07-01-8; se decretó su acumulación al ac-

tualizarse las hipótesis previstas por la fracción I del numeral 31 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, atendiendo a que las partes son las mismas, y se invocan idénticos agravios, no obstante que las resoluciones impugnadas sean distintas, por lo que se advirtió que en ambos juicios se controvierten cuestiones relacionadas entre sí.

Ahora bien, al haberse promovido **incidente de incompetencia** por la autoridad demandada respecto del juicio **684/09-07-03-01**, que fue atraído a los autos del juicio 681/09-07-01-8, la Magistrada Instructora de este último, ordenó que mediante oficio que se girara a la entonces Presidenta de la Segunda Sección de la Sala Superior de este Tribunal, se remitieran los autos de los juicios acumulados de referencia, a efecto que de estimarse procedente se continuara el trámite del incidente de incompetencia. El 17 de noviembre de 2009, esta Segunda Sección pronunció la sentencia que resolvió dicho incidente de incompetencia por razón de territorio planteado por el Administrador Local Jurídico de Guadalajara del Servicio de Administración Tributaria, declarándolo procedente, fundado y competente por razón de territorio para conocer del juicio a la Sala Regional Hidalgo-México que por turno corresponda.

Por otra parte, por oficio número 600-37-2009-04873 de 20 de mayo de 2009, la autoridad demandada interpuso en los autos del juicio **681/09-07-01-8 (atrayente)**, el **incidente de incompetencia** por razón de territorio, que ahora se resuelve.

En la sentencia pronunciada por esta Segunda Sección de 17 de noviembre de 2009, en el juicio 684/09-07-03-1 (atraído), se observó que:

[N.E. Se omite transcripción]

Además, debe tomarse en cuenta que las demandas de los juicios de nulidad 681/09-07-01-8 (atrayente) y 684/09-07-03-1 (atraído) fueron presentadas el 4 de febrero de 2009, habiendo sido radicadas en la Primera y Tercera Salas Regionales de Occidentes, respectivamente.

Por oficio número 600-37-2009-03180 de 26 de marzo de 2009, la autoridad demandada comunicó al Magistrado Instructor del juicio 684/09-07-03-1(atraído), la presentación del oficio 600-37-2009-03061 de ese mismo mes y año, mediante el cual interpuso incidente de incompetencia ante el Presidente de este Tribunal, pero a virtud de que había suspendido el procedimiento y remitido los autos a la Primera Sala para el efecto de que se analizara la procedencia de su acumulación, ordenó enviarlo a ésta para que se acordara lo procedente. Por sentencia interlocutoria de 3 de junio de 2009, la referida Primera Sala decretó la acumulación de esos juicios.

Al recibir la Magistrada Instructora del juicio 681/09-07-01-8 (atrayente) la notificación de que se interpuso incidente de incompetencia en el juicio de nulidad 684/09-07-03-1 (atraído), ordenó remitir los autos de ambos juicios a esta Segunda Sección, los cuales se recibieron en la misma el 12 de agosto de 2009.

Ahora bien, en virtud de que la autoridad promovió incidentes de incompetencia por separado ante este Tribunal, en relación a los juicios de nulidad, también se tramitaron con independencia uno del otro, radicándose en diferentes ponencias, motivo por el cual al requerirse la remisión de los autos y recibirse en la Oficialía de Partes de la Sala Superior, se enviaron a la ponencia del Magistrado Guillermo Domínguez Belloc, aprobándose el 17 de noviembre de 2009, en relación al juicio de nulidad atraído; para que con posterioridad por auto de 29 de marzo de 2010, la Magistrada Presidenta de esta Segunda Sección turnara los autos a la Ponencia del Magistrado Alfredo Salgado Loyo; de manera que si bien para entonces ya se había decretado la acumulación de los autos, los incidentes de incompetencia se tramitaron por separado.

Tomando en cuenta la situación descrita, al haberse decretado la acumulación de los juicios de nulidad y pronunciado esta Segunda Sección en el juicio atraído, en el sentido de que es competente por razón de territorio para conocer del juicio la Sala Regional Hidalgo-México, que por turno le corresponda, no es factible pronunciarse de nueva cuenta sobre la misma cuestión, porque equivaldría a dictar dos sentencias

en un juicio, toda vez que los acumulados forman una unidad; por tanto, lo procedente es declarar sin materia el que ahora se analiza.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 29, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; 23 fracción VII, 32 y 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en vigor a partir del 7 de diciembre de 2007, esta Segunda Sección de la Sala Superior resuelve:

R E S O L U T I V O S

I.- Resultó procedente pero **HA QUEDADO SIN MATERIA** el incidente de incompetencia hecho valer por Administrador Local Jurídico de Guadalajara, del Servicio de Administración Tributaria, en los términos del último considerando.

II.- Mediante atento oficio que se gire a la Primera Sala Regional de Occidente, remítasele copia de esta resolución para su conocimiento. Asimismo, remítase copia de esta resolución y los autos del juicio a la Oficialía de Partes Común de la Sala Regional Hidalgo-México, para que se envíen a la que por turno le tocó conocer de los autos del juicio de nulidad 684/09-07-03-1/881/09-S2-10-6 (acumulado) al presente.

III.- NOTIFÍQUESE.- Con copia certificada a las partes, para su conocimiento.

Así lo resolvió la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de fecha 29 de junio de 2010, por unanimidad de cuatro votos a favor de los Magistrados Olga Hernández Espíndola, Alfredo Salgado Loyo, Silvia Eugenia Díaz Vega y Juan Manuel Jiménez Illescas. Estando ausente el Magistrado Luis Carballo Balvanera.

Fue Ponente el Magistrado Alfredo Salgado Loyo, cuya ponencia fue aprobada.

Se formuló el presente engrose el 2 de julio de 2010, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción III, y 48 fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007 y en vigor a partir del día siguiente, firma el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior, ante el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos de la misma Sección, quien autoriza y da fe.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-2aS-618

GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL. EL RECONOCIMIENTO DE QUE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NO TIENE QUE CONSTITUIRLA PARA EFECTO DE OBTENER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE UN CRÉDITO FISCAL, NO IMPLICA DISPENSA DE LA OBLIGACIÓN RELATIVA.- De la interpretación armónica de los artículos 5 y 255 de la Ley del Seguro Social, 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 1o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se desprende que el Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo público descentralizado que forma parte de la Administración Pública Federal paraestatal, en contra del cual nunca podrá dictarse mandamiento de ejecución ni providencia de embargo y estará exento de prestar garantías, como la señalada en el artículo 28, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En tal virtud, si bien es cierto que el artículo 141, cuarto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, establece que en ningún caso las autoridades fiscales podrán dispensar el otorgamiento de garantía, no menos cierto es que la palabra dispensar, en el contexto de tal precepto, significa eximir de una obligación o de lo que se quiere considerar como tal, siendo que en el caso no se está ante una dispensa, pues para que pudiera hablarse de ella tendría que existir la obligación de garantizar, que no existe a cargo del referido Instituto.

Recurso de Reclamación Núm. 15626/08-17-09-9/489/10-S2-06-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 6 de julio de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Ernesto Christian Grandini Ochoa.
(Tesis aprobada en sesión de 17 de agosto de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

TERCERO.- [...]

Por otra parte el argumento vertido por la recurrente, sintetizado en el inciso **b)**, también es **fundado** pero igualmente **insuficiente**, ya que de la sentencia recurrida de 30 de junio de 2009, se observa que en el último párrafo de su página 3 (*previamente reproducida*), la *a quo* señaló que se estaba ante la suspensión de la ejecución de una multa que tiene la naturaleza de aprovechamiento, derivada de infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, atribuidas a la accionante.

Tal afirmación de la Sala Regional es desacertada, en la medida en que la resolución impugnada en el juicio es el oficio número 600-26-2008-7149, de 21 de abril de 2008, suscrito por el Subadministrador, en suplencia por ausencia del Administrador Local Jurídico del Centro del Distrito Federal del Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual se resuelve desechar el recurso de revocación interpuesto por la parte actora en contra del mandamiento de ejecución de 25 de enero de 2008, diligenciado el 12 de febrero siguiente mediante acta de requerimiento de pago, actos emitidos por la Administración Local de Recaudación del Centro del Distrito Federal, relativos al crédito H-1243578, en cantidad de $2,324’777,956.35.

A su vez tal adeudo tiene su origen en el oficio 330-SAT-VI-397, de 5 de marzo de 2007, emitido por la Administradora Central de Fiscalización al Sector Gobierno y de Procedimientos Legales de Auditoría, de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, documento que obra en la carpeta en que se actúa a folios 45 a 89, mediante el cual se determinaron al Instituto Mexicano del Seguro Social diversos conceptos por el ejercicio fiscal de 2003, entre ellos el impuesto sobre la renta por la cantidad a que asciende el crédito H-1243578, materia de los actos recurridos.

En este orden de ideas, es evidente que el crédito cuya ejecución fue materia de la suspensión definitiva decretada en el fallo recurrido, no deriva de una multa por infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, sino del impuesto sobre la renta determinado al Instituto Mexicano del Seguro Social por el ejercicio de 2003.

No obstante lo anterior, tenemos que la sentencia reclamada sí precisó correctamente la resolución impugnada en su resultando 1°, por lo que el error en el origen del adeudo que se contiene en el último párrafo de la página 3, no es de tal trascendencia que lleve a revocar el propio fallo, pues se estima que la a quo sí tuvo clara la materia de la medida cautelar que decretó.

Asimismo resulta que en términos del artículo 4°, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones (*en el caso impuesto sobre la renta*), o de aprovechamientos (*multas administrativas*), entre otros conceptos, por lo que en ese sentido el tratamiento que se le dio en la sentencia recurrida al adeudo como **crédito fiscal**, de cualquier forma fue **correcto**.

Finalmente el argumento vertido por la recurrente, sintetizado en el inciso **c)**, es **infundado**.

Lo anterior es así porque la Ley del Seguro Social dispone en su artículo 255, que enseguida se transcribe, que el Instituto Mexicano del Seguro Social se considera de acreditada solvencia y por lo mismo no se encuentra obligado a constituir depósitos o fianzas legales.

[N.E. Se omite transcripción]

En adición a lo anterior resulta que el artículo 4°, del Código Federal de Procedimientos Civiles, dispone:

[N.E. Se omite transcripción]

Mientras que el artículo 5° de la Ley del Seguro Social, dice:

[N.E. Se omite transcripción]

Y el artículo 1° de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece:

[N.E. Se omite transcripción]

De la interpretación armónica de los numerales apenas transcritos, resulta que el Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo público descentralizado que forma parte de la Administración Pública Federal paraestatal, en contra del cual nunca podrá dictarse mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, y estará exento de prestar garantías.

Ahora bien, el artículo 28 fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dispone lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Conforme a este último numeral, si bien es cierto tratándose de la solicitud de la suspensión de la ejecución en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, procederá la suspensión y surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables; no menos cierto es que el Instituto Mexicano del Seguro Social está exento de constituir garantía para que surta efectos la suspensión, por los fundamentos y motivos expuestos en párrafos anteriores, razón por la cual es válido decretar la medida cautelar con plena eficacia, sin necesidad de garantía.

Robustece este criterio el siguiente precedente de esta Segunda Sección, que en este fallo **SE REITERA**:

"**VI-P-2aS-156**

"**GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL. EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NO TIENE QUE CONSTITUIRLA PARA EFECTO DE OBTENER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE UN CRÉDITO FISCAL.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en el R.T.F.J.F.A., Sexta Época. Año II. No. 15. Marzo 2009. pág. 352]

No es óbice a lo anterior el hecho de que el artículo 141, cuarto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, establezca que en ningún caso las autoridades fiscales podrán dispensar el otorgamiento de garantía, pues la palabra "***dispensar***", conforme al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, vigésima segunda edición, en el contexto de tal precepto significa "***eximir de una obligación***, o de lo que se quiere considerar como tal".

En este orden de ideas, no se está ante una dispensa del otorgamiento de garantía, que prohíbe el artículo 141, cuarto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, pues para que pudiera hablarse de ello primero tendría que existir la obligación de garantizar, cuando en la especie no existe tal obligación por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, por los fundamentos y motivos ya expresados.

Aunado a lo anterior, las previsiones de los artículos 255 de la Ley del Seguro Social y 4° del Código Federal de Procedimientos Civiles, resultan ser las **normas especiales** aplicables al caso, que **prevalecen sobre la disposición general**, siendo ésta la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en su artículo 28 fracción VI, y el Código Fiscal de la Federación en su artículo 141, en la medida en que estos dos últimos ordenamientos establecen las cuestiones que en términos generales operarán respecto de los solicitantes de la suspensión, pero los primeros ordenamientos en cita contienen cuestiones especiales que operan tratándose de instituciones como la hoy actora.

Por último, es infundado el argumento en el sentido de que el artículo 255 de la Ley del Seguro Social, se refiere a la inembargabilidad de los bienes del Instituto Mexicano del Seguro Social afectos a la prestación directa de sus servicios, y no de todos, por lo que la actora debió acreditar que existió un embargo y que se trabó sobre aquél tipo de bienes.

Lo anterior es infundado porque en la sentencia interlocutoria recurrida no se calificó la legalidad o ilegalidad de un embargo trabado sobre bienes del Instituto demandante – *máxime que tal diligencia no consta en autos* –, sino se decretó la suspensión definitiva de la ejecución por el hecho de que la parte actora está exenta de otorgar garantía para gozar de la medida cautelar.

En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 23, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se

R E S U E L V E :

I.- Es **procedente** y parcialmente **fundado** el presente recurso de reclamación planteado por la autoridad demandada, pero **insuficiente** para revocar la sentencia interlocutoria recurrida, en consecuencia:

II.- Se **confirma** la sentencia interlocutoria de 30 de junio de 2009, dictada por la Novena Sala Regional Metropolitana de este Tribunal.

III.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en sesión de 6 de julio de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor de los Magistrados Luis Carballo Balvanera, Olga Hernández Espíndola, Alfredo Salgado Loyo, Silvia Eugenia Díaz Vega y Juan Manuel Jiménez Illescas.

Fue Ponente en este asunto el Magistrado Alfredo Salgado Loyo, cuya ponencia fue aprobada.

Se formuló el presente engrose el 3 de agosto de 2010 y con fundamento en los artículos 27, fracción III y 48, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en vigor, firma el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior, ante el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos de la misma Sección, quien autoriza y da fe.

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

VI-P-2aS-619

INCIDENTE DE INCOMPETENCIA TERRITORIAL. LA CÉDULA DE LIQUIDACIÓN DE CUOTAS Y LA CÉDULA DE LIQUIDACIÓN POR CONCEPTO DE MULTA, EMITIDAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, ASÍ COMO EL AVISO DE INSCRIPCIÓN PATRONAL O DE MODIFICACIÓN EN SU REGISTRO (Afil-01), PRESENTADO POR EL PATRÓN ANTE EL MENCIONADO INSTITUTO, NO LOGRAN DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN LEGAL ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 34, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.- Del referido precepto, en sus párrafos primero y último, se desprende que las Salas Regionales conocerán de los juicios por razón de territorio, atendiendo al lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante, debiendo presumirse que el domicilio señalado en la demanda es el fiscal, salvo que la parte demandada demuestre lo contrario. En este sentido, si la autoridad, para desvirtuar dicha presunción legal, ofrece como pruebas, por una parte, los actos impugnados consistentes en "cédula de liquidación de cuotas" y "cédula de liquidación por concepto de multa", emitidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y por otra, el "aviso de inscripción patronal o de modificación en su registro" (afil-01), presentado por el patrón ante el mencionado Instituto, tales documentos no logran desvirtuar la citada presunción legal, ya que de los mismos no se advierte de manera fidedigna, que el domicilio en ellos indicado sea el domicilio fiscal de la actora, menos aún que lo haya sido precisamente a la fecha de interposición de la demanda, por lo que la presunción legal prevista en el último párrafo del artículo 34 de la Ley Orgánica de este Tribunal, debe subsistir al no haberse demostrado lo contrario con los referidos documentos.

Incidente de Incompetencia Núm. 7587/09-11-02-4/301/10-S2-08-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de agosto de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 10 de agosto de 2010)

EN EL MISMO SENTIDO:

VI-P-2aS-620

Incidente de Incompetencia Núm. 20737/09-17-09-6/1000/10-S2-07-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 de septiembre de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez.
(Tesis aprobada en sesión de 7 de septiembre de 2010)

PRECEDENTES:

VI-P-2aS-527
Incidente de Incompetencia Núm. 5205/09-11-03-3/2968/09-S2-06-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 9 de marzo de 2010, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Pedro Martín Ibarra Aguilera.
(Tesis aprobada en sesión de 20 de abril de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año. III. No. 31. Julio 2010. p. 43

VI-P-2aS-528
Incidente de Incompetencia Núm. 2037/09-11-03-6/3062/09-S2-09-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi-

nistrativa, en sesión de 11 de mayo de 2010, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas. Secretario: Lic. David Alejandro Alpide Tovar.
(Tesis aprobada en sesión de 11 de mayo de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año. III. No. 31. Julio 2010. p. 43

VI-P-2aS-587
Incidente de Incompetencia Núm. 5944/09-11-01-8/244/10-S2-06-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 15 de junio de 2010, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Pedro Martín Ibarra Aguilera.
(Tesis aprobada en sesión de 15 de junio de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 33. Septiembre 2010. p. 105

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

VI-P-2aS-621

INCIDENTE DE INCOMPETENCIA INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD, A ELLA CORRESPONDE DEMOSTRAR EL DOMICILIO FISCAL QUE TENÍA LA PARTE ACTORA A LA FECHA DE LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA.- El artículo 34 de la Ley Orgánica de este Tribunal actualmente en vigor, establece en su primer párrafo que las Salas Regionales conocerán de los juicios por razón de territorio atendiendo al lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante, y en su último párrafo preceptúa que se presumirá como domicilio fiscal el señalado en la demanda, salvo que la demandada demuestre lo contrario, de lo cual se colige que lo que ésta debe demostrar es el domicilio fiscal de la parte actora a la fecha de interposición de la demanda, y por tanto, si con la probanza que ofrezca no acredita ese extremo, debe considerarse como infundado el incidente de incompetencia, por prevalecer la presunción establecida en el último párrafo del artículo en comento, sin que baste, para demostrarlo, el informe del Servicio de Administración Tributaria en el que se indique el domicilio registrado en su base de datos a la fecha en que el mismo fue emitido, salvo que el propio informe indique o de él se deduzca que a la fecha de la presentación de la demanda, ese era su domicilio fiscal.

Incidente de Incompetencia Núm. 918/09-06-01-4/159/10/S2-10-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de agosto de 2010, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.
(Tesis aprobada en sesión de 19 de agosto de 2010)

EN EL MISMO SENTIDO:

VI-P-2aS-622

Incidente de Incompetencia Núm. 6953/09-11-03-2/2950/09-S2-10-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 de septiembre de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.
(Tesis aprobada en sesión de 7 de septiembre de 2010)

PRECEDENTES:

VI-P-2aS-292
Incidente de Incompetencia Núm. 5405/08-11-03-4/312/09-S2-06-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 25 de junio de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Pedro Martín Ibarra Aguilera.
(Tesis aprobada en sesión de 25 de junio de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 21. Septiembre 2009. p. 213

VI-P-2aS-509
Incidente de Incompetencia Núm. 1379/09-11-01-4/2841/09-S2-10-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 9 de marzo de 2010, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretario: Lic. Oscar Elizarrarás Dorantes.
(Tesis aprobada en sesión de 9 de marzo de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 29. Mayo 2010. p. 159

VI-P-2aS-523

Incidente de Incompetencia Núm. 2506/08-11-03-4/1515/08-S2-08-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 23 de marzo de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé.

(Tesis aprobada en sesión de 23 de marzo de 2010)

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 30. Junio 2010. p. 188

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-P-2aS-623

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO CONTENCIOSO EN CONTRA DE ACTOS EMITIDOS ANTES DEL REMATE POR CARECER DE DEFINITIVIDAD, CONFORME AL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 127 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 29 DE JUNIO DE 2006.- Hasta el 28 de junio de 2006, el primer párrafo del artículo 127 del Código Fiscal de la Federación disponía que, en el supuesto de que el recurso de revocación se interpusiera porque el procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a la ley, las violaciones cometidas antes del remate podrían hacerse valer en cualquier tiempo, antes de la publicación de la convocatoria en primera almoneda, salvo que se tratara de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables; de actos de imposible reparación material; o bien, de los previstos por el artículo 129 del propio Código. Es el caso que, mediante decreto publicado el 28 de junio de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se modificó el primer párrafo del artículo 127 del mencionado ordenamiento, para establecer que, las violaciones cometidas en el procedimiento administrativo de ejecución hasta antes del remate, solo podrán impugnarse mediante el recurso de revocación ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate, y dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria; que sólo tratándose de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables o de actos de imposible reparación material, el plazo para interponer el recurso de revocación se computará a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o del día hábil siguiente al de la diligencia de embargo. Por lo anterior, a partir del 29 de junio de 2006, resulta improcedente el juicio contencioso administrativo en contra de violaciones cometidas hasta antes del remate, al carecer del carácter de actos o resoluciones definitivos, de conformidad con el artículo 8, fracción XVI de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el artículo 14 primer y antepenúltimo párrafos de la

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y sólo podrán impugnarse hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate, y dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria; excepto tratándose de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables o de actos de imposible reparación material, en cuyo caso, podrán controvertirse a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o del día hábil siguiente al de la diligencia de embargo.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 26418/07-17-01-2/689/10-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 de septiembre de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 7 de septiembre de 2010)

PRECEDENTE:

VI-P-2aS-331
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4459/07-06-02-1/1392/08-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de marzo de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 2 de julio de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 23. Noviembre 2009. p. 114

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-2aS-624

COPIAS ILEGIBLES. CARECEN DE VALOR PROBATORIO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 46, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con los artículos 197 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, el valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará a la prudente apreciación de la Sala. De donde se sigue, que si las pruebas exhibidas por cualquiera de las partes, son ilegibles, debe considerarse que carecen de valor probatorio, dado que imposibilitan su examen.

Incidente de Incompetencia Núm. 30943/09-17-06-5/579/10-S2-10-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 de septiembre de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla.
(Tesis aprobada en sesión de 7 de septiembre de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

CUARTO.- [...]

Por último, cabe precisar que el actor al verter las manifestaciones que consideró procedentes, con relación al incidente de que se trata, en su escrito presentado ante este Tribunal el veintidós de junio de dos mil diez, ofreció como prueba copia

simple del "Formulario de Registro R1", visible a fojas 33 de la carpeta incidental, en el que según su dicho, consta que su domicilio fiscal se encuentra ubicado dentro de la Jurisdicción de las Salas Regionales Metropolitanas; sin embargo, esta Juzgadora le niega valor probatorio a dicho documento, conforme lo previsto por los artículos 46, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 197 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, dado que el mismo resulta ilegible, lo que imposibilita su examen.

En efecto, los artículos citados, disponen que el valor probatorio de las pruebas rendidas por las partes, queda al prudente arbitrio de este Tribunal, en los siguientes términos:

[N.E. Se omite transcripción]

De conformidad con lo dispuesto por los artículos transcritos, se tiene que el valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará a la prudente apreciación de la Sala. De donde se sigue, que si las pruebas exhibidas por cualquiera de las partes, son ilegibles, debe considerarse, que carecen de valor probatorio, dado que imposibilitan su examen, como acontece en el caso, con el documento exhibido por el actor, denominado "Formulario de Registro R1".

No obstante lo anterior, como ya se dijo, la autoridad no desvirtúa con documento idóneo alguno, que el domicilio fiscal de la empresa demandante antes precisado, se encuentre dentro de la jurisdicción de las Salas Regionales Metropolitanas, en atención a lo dispuesto por los artículos 21 fracción XVII y 22 fracción XVII, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que en lo conducente disponen:

[N.E. Se omite transcripción]

Es aplicable al caso, la jurisprudencia **VI-J-2aS-12**, emitida por esta Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, consultable en su Revista Número 18, Sexta Época, Año II, Junio 2009, página 125, que señala:

> "**COMPETENCIA TERRITORIAL DE LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.- CONFORME AL ARTÍCULO 34 DE SU LEY ORGÁNICA EN VIGOR A PARTIR DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2007, SE DETERMINA ATENDIENDO AL DOMICILIO FISCAL DEL DEMANDANTE.**"
> [N.E. Se omite transcripción]

En consecuencia, al no haber desvirtuado la autoridad que el domicilio fiscal señalado por el actor en su escrito de demanda, se ubica en la Ciudad de México, Distrito Federal, es procedente remitir los autos del juicio en que se actúa a la Sexta Sala Regional Metropolitana, para que siga conociendo de la substanciación del mismo y, en su oportunidad, dicte la sentencia que conforme a derecho corresponda.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 29, fracción I y 30 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 23, fracción VII, de la Ley Orgánica de este Tribunal, vigente a partir del 7 de diciembre de 2007, 21, fracción XVII y 22, fracción XVII, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en vigor, se resuelve:

I.- Ha resultado **procedente**, pero **infundado** el incidente de incompetencia por razón de territorio planteado por el Subgerente Contencioso Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por tanto:

II.- Es competente territorialmente la **Sexta Sala Regional Metropolitana de este Tribunal**, por lo que deberán remitirse los autos del juicio de que se trata, con copia autorizada del presente fallo, para que siga conociendo de la substancia-

ción del mismo y, en su oportunidad, dicte la sentencia que conforme a derecho corresponda.

III.- NOTIFÍQUESE con copia certificada de esta sentencia incidental a las partes contendientes, para su conocimiento.

Así lo resolvió la Segunda Sección de la H. Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 07 de septiembre de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor de los CC. Magistrados Luis Carballo Balvanera, Olga Hernández Espíndola, Alfredo Salgado Loyo, Silvia Eugenia Díaz Vega y Juan Manuel Jiménez Illescas.

Fue Ponente en el presente asunto el Magistrado Luis Carballo Balvanera, cuya ponencia se aprobó en sus términos.

Se formuló el engrose el día 21 de septiembre de 2010, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27, fracción III y 48, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-2aS-625

QUEJA IMPROCEDENTE. NO DEBE PREVENIRSE AL PROMOVENTE PARA QUE LA PRESENTE COMO DEMANDA, CUANDO YA HAYA INTERPUESTO UN NUEVO JUICIO EN CONTRA DE LA MISMA RESOLUCIÓN QUE MOTIVÓ AQUÉLLA INSTANCIA.- De acuerdo a los lineamientos establecidos en el artículo 58, fracción II y último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuando se considere que es improcedente la queja promovida en contra de una resolución definitiva, porque se planteen cuestiones novedosas que desborden el cumplimiento en sí mismo de la sentencia definitiva, entonces la Sala Regional, la Sección o el Pleno prevendrán al promovente para que se presente la queja como demanda, cumpliendo los requisitos previstos por los artículos 14 y 15 de esa Ley, ante la misma Sala Regional que conoció del primer juicio, la que será turnada al mismo Magistrado Instructor de la queja; sin embargo, si se encuentra acreditado en autos que la parte actora también promovió un juicio contencioso administrativo en el que está siendo materia de impugnación la resolución que motivó la queja, en ese supuesto no debe hacerse la prevención de mérito, sino remitirse el escrito de queja con sus anexos a la Sala Regional que ya se encuentra instruyendo el nuevo juicio, para que esté en posibilidad de considerarlos en alcance de la demanda que dio lugar al mismo o darles el trámite que corresponda.

Queja Núm. 6539/06-06-01-7/426/08-S2-06-04(QC).- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 9 de septiembre de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Ernesto Christian Grandini Ochoa. (Tesis aprobada en sesión de 9 de septiembre de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

SEGUNDO.- [...]

En principio esta Segunda Sección estima que es infundada la argumentación de la quejosa relativa a la supuesta repetición de la resolución anulada.

Para arribar a tal conclusión, esta Juzgadora toma en cuenta que tanto la resolución anulada en la sentencia de 1° de octubre de 2009, como la resolución que motivó la queja que nos ocupa, tienen igual sentido de afectación hacia el gobernado, pues en ambas se determinó que no es procedente confirmar el criterio sustentado por **EDIFICACIONES LM, S.A. DE C.V.**, en el sentido de considerar que puede efectuar la deducción en el ejercicio de 2004, de la cantidad de $539'726,173.00, en los términos del artículo 29 fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como la forma con que se pretende amparar dicha deducción.

Sin embargo ello no es suficiente para estimar que existe repetición de la resolución anulada, toda vez que tal anulación se fundó en el artículo 51, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque hubo omisión de los requisitos formales de fundamentación y motivación exigidos por la ley, en lo relativo a la negativa de confirmar el criterio jurídico sometido a la consideración de la autoridad fiscal.

En efecto, en la resolución anulada para resolver en sentido adverso a las pretensiones de la actora, se citaron los artículos 5° y 6°, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, 29, fracción I, **46 y 47, primer párrafo**, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, **71 y 72 de su Reglamento**.

En el fallo de 1° de octubre de 2009, esta Juzgadora advirtió que los fundamentos referidos en el párrafo anterior no sustentaron la motivación de no considerar

como descuento a la quita de una deuda; de condicionar la deducibilidad de un descuento a que si el concepto principal es un crédito o cuenta por cobrar a favor de una empresa, se deba identificar con los ingresos acumulables y propios de su actividad, y de que el descuento tenga que haber sido otorgado con motivo de la acumulación de los ingresos propios de tal actividad.

En la resolución que motivó la queja se citaron los artículos 5° y 6°, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, 29, fracción I y 31, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 75, **fracción XXIV, del Código de Comercio, 288, 289 y 290, de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, 46, fracción IV, de la Ley de Instituciones de Crédito, 2,209 y 2,212 del Código Civil Federal**.

Los preceptos resaltados en "***negritas***" en el párrafo anterior, son novedosos respecto de los invocados en la resolución anulada.

Asimismo en la resolución que motivó la queja se plasmó una motivación que difiere respecto de la expresada en la resolución anulada, pues ya no se condicionó la deducibilidad de un descuento a que si el concepto principal es un crédito o cuenta por cobrar a favor de una empresa, se deba identificar con los ingresos acumulables y propios de la actividad del contribuyente, ni a que el descuento haya sido otorgado con motivo de la acumulación de los ingresos propios de tal actividad.

Lejos de ello, se citaron fundamentos para pretender sustentar que todas las deducciones autorizadas por la Ley del Impuesto sobre la Renta, deben ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad que realiza el contribuyente (artículo 31 de ese ordenamiento); que lo relativo a los descuentos y quiénes los pueden realizar está regulado en los artículos 288, 289 y 290, de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito y 46, fracción IV, de la Ley de Instituciones de Crédito, y que la quita no es un descuento sino una remisión de deuda (artículos 2,209 y 2,212 del Código Civil Federal).

Como se ve, la fundamentación y motivación citada en la resolución que motivó la queja difiere substancialmente de la expresada en la resolución anulada por esta Segunda Sección, habiéndose subsanado los vicios de forma que dieron lugar a tal anulación, razón por la cual no existe la repetición alegada por la quejosa.

Sustenta lo anterior, por analogía, la siguiente jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

> "**REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. NO EXISTE CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE EMITE UN NUEVO ACTO EN QUE SUBSANA LOS VICIOS DE FORMA QUE MOTIVARON LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en el S.J.F. Tomo V. Enero de 1997. Novena Época. Tesis: 1a./J. 1/97. pág. 181]

En este orden de ideas, si en la nueva resolución ya hay fundamentación en cuanto a que las deducciones autorizadas por la Ley del Impuesto sobre la Renta deben ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad que realiza el contribuyente (artículo 31 de ese ordenamiento), así como en lo relativo a qué son los descuentos (artículos 288, 289 y 290, de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito y 46, fracción IV, de la Ley de Instituciones de Crédito), y qué es la quita (artículos 2,209 y 2,212 del Código Civil Federal); entonces la cuestión a dilucidar es si es debida o no la fundamentación y motivación del oficio 600-48-2010-455, mas no si dicho documento incurrió en vicios formales por ausencia de tales requisitos.

No se pierde de vista lo sostenido por la quejosa en el sentido de que en la nueva resolución la autoridad no señaló los preceptos legales precisos y correctos que condicionan la deducibilidad de un descuento a que el concepto principal del crédito o cuenta por cobrar de una empresa se deba identificar con ingresos acumulables y propios de la actividad del contribuyente, y a que haya sido otorgado con motivo de la acumulación de tales ingresos.

La apreciación de la quejosa es infundada, pues si bien es cierto en el fallo de 1° de octubre de 2009, esta Segunda Sección advirtió que la autoridad demandada no fundó aquéllas cuestiones en la resolución entonces impugnada, no menos cierto es que dicha sentencia sólo obligó a la autoridad a que dejara insubsistente su acto y emitiera otro que, debidamente fundado y motivado, diera respuesta a la actora respecto de la consulta que planteó.

Así las cosas, la autoridad hubiera estado constreñida a fundar las consideraciones jurídicas que hace notar la actora, sólo en el caso de que en la nueva resolución se hubiera reiterado la motivación de la primigenia, pero como no fue así en la medida en que se produjo una motivación distinta, acompañada con su correspondiente fundamentación, entonces no existe el defecto en el cumplimiento de la sentencia de 1° de octubre de 2009, en los términos en que se plantea.

Por otra parte, la quejosa sostiene que de ninguno de los artículos invocados por la autoridad en la nueva resolución se desprende que los descuentos deducibles a que se refiere el artículo 29 fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sólo son aquellos de que son objeto los créditos abiertos en los libros de comerciantes y que sólo pueden celebrar las instituciones de crédito, por lo que la demandada distinguió donde el legislador no lo hizo, cuando debió atender al significado literal y general de la palabra "*descuento*" que es precisamente la rebaja de una parte de la deuda, como la efectuada por la actora.

Tales argumentos resultan ser novedosos, pues no fueron materia de la litis planteada en el juicio que le dio origen, porque a la vez se encuentran vinculados con fundamentación y motivación también novedosa propia de la resolución que propició la presente queja.

En este orden de ideas sucede que los planteamientos de la ahora quejosa en realidad tienen que ver con el alcance que se debe dar a lo dispuesto por el artículo 29, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en lo relativo a los descuentos que son deducibles, es decir, con la debida interpretación de tal precepto, en unión

de los demás que invocó el Administrador Local Jurídico de Monterrey del Servicio de Administración Tributaria para definir lo que es un descuento y una quita o remisión de deuda, lo que no supone propiamente un problema sobre vicios formales del acto controvertido conforme a la fracción II del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (falta de fundamentación y motivación), sino implica una cuestión que atañe al fondo del asunto, en el sentido de si el oficio 600-48-2010-455 se dictó o no en contravención de las disposiciones aplicadas dejando de aplicar las debidas de acuerdo con la fracción IV del referido numeral 51.

Ante tal situación esta Segunda Sección estima que se está en presencia de cuestiones novedosas que desbordan el cumplimiento, en sí mismo, de la sentencia de 1° de octubre de 2009, lo que representa una variación de la litis que en todo caso debe ser materia de un nuevo juicio.

Resulta aplicable el precedente V-P-2aS-238, sustentado por la Segunda Sección de la Sala Superior de este Tribunal, publicado en la Revista del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, Quinta Época, Año III, N° 32, agosto de 2003, página 208, Fe de Erratas R.T.F.J.F.A. Quinta Época, Año III, N° 33, septiembre de 2003, página 280, que dice:

> "**QUEJA.- CUANDO SU IMPROCEDENCIA SE TRADUCE EN LA INSTAURACIÓN DE UN NUEVO JUICIO.**" [N.E. Se omite transcripción]

Asimismo es aplicable el razonamiento substancial contenido en el precedente IV-P-2aS-110, sustentado por la Segunda Sección de la Sala Superior de este Tribunal, publicado en la Revista del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, Cuarta Época, Año II, N° 10, mayo de 1999, página 117, que dice:

> "**QUEJA IMPROCEDENTE. CASO EN EL QUE DEBE ORDENARSE QUE SE INSTRUYA COMO JUICIO.**" [N.E. Se omite transcripción]

Por tanto, la presente queja es improcedente al no actualizarse los supuestos normativos de repetición y defecto que se hacen valer, pero la instancia se promovió en contra de una resolución definitiva en el ámbito administrativo.

Al respecto el artículo 58, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que en tal caso se prevendrá al promovente para que dentro del plazo de cuarenta y cinco días presente la queja como demanda, cumpliendo los requisitos previstos por los artículos 14 y 15 de dicha Ley, ante la misma Sala Regional que conoció del primer juicio, la que será turnada al mismo Magistrado Instructor de la queja.

Ahora bien, es un hecho notorio para esta Segunda Sección que se invoca en términos de lo dispuesto por el artículo 50, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que la parte actora además de la presente queja ya promovió un juicio contencioso administrativo en contra del oficio 600-48-2010-455 de 25 de enero de 2010, asunto que se encuentra radicado en la Segunda Sala Regional del Noreste con el número de expediente 1814/10-06-02-6, la que por auto de 1° de junio del mismo año, propuso a la Sala Superior de este Tribunal el ejercicio de la facultad de atracción.

Lo anterior dio lugar a que por auto de 30 de junio de 2010, el Magistrado Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior acordara ejercer la facultad de atracción, ya que el juicio 1814/10-06-02-6 reviste características especiales en razón de su cuantía.

En este orden de ideas, tomando en cuenta que ya se encuentra en trámite un juicio diverso al en que se actúa, en el que está siendo materia de impugnación la resolución que motivó la queja que nos ocupa, esta Segunda Sección estima que no debe ordenarse instruir otro juicio más, sino lo procedente es remitir a la brevedad posible el escrito de queja con sus anexos a la Segunda Sala Regional del Noreste, a fin de que ésta los integre al expediente 1814/10-06-02-6 que se encuentra instruyendo

y en el momento procesal oportuno se esté en posibilidad de considerarlos en alcance de la demanda que dio lugar a dicho juicio, conforme al trámite que corresponda.

El anterior criterio ha sido sustentado por esta Segunda Sección en el precedente VI-P-2aS-366, publicado en la Revista de este Tribunal, Sexta Época, Año II, N° 23, noviembre de 2009, página 221, que dice:

> "**QUEJA IMPROCEDENTE. NO DEBE ORDENARSE QUE SE INSTRUYA COMO JUICIO NUEVO, SI ÉSTE YA FUE PROMOVIDO EN CONTRA DE LA MISMA RESOLUCIÓN QUE MOTIVÓ AQUÉLLA INSTANCIA, CONFORME AL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005.**" [N.E. Se omite transcripción]

Sin que sea jurídicamente posible que la instancia que nos ocupa se siga "*ante la misma Sala Regional que conoció del primer juicio*", ni que sea "*turnada al mismo Magistrado Instructor de la queja*", como lo establece el último párrafo del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues en la especie no fue una Sala Regional la que resolvió el primer juicio, sino lo hizo esta Segunda Sección de la Sala Superior, mientras que la queja que nos ocupa no tuvo un "*Magistrado Instructor*", sino fue tramitada por la Presidencia de la propia Sección, la que designó a un Magistrado Ponente para elaborar el proyecto de resolución respectivo.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 58, fracción II y último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 23, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se

R E S U E L V E :

I. Es **improcedente** la presente instancia de queja, por las razones expuestas en el Considerando Segundo de este fallo, pero existe resolución definitiva, en consecuencia:

II. Remítase el escrito de queja con sus anexos y copia certificada de esta resolución a la Segunda Sala Regional del Noreste de este Tribunal, para que los integre al expediente 1814/10-06-02-6 que se encuentra instruyendo y sean considerados en alcance de la demanda que dio lugar a dicho juicio, conforme al trámite que corresponda.

III. NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en sesión de 9 de septiembre de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor de los Magistrados Luis Carballo Balvanera, Olga Hernández Espíndola, Alfredo Salgado Loyo, Silvia Eugenia Díaz Vega y Juan Manuel Jiménez Illescas.

Fue Ponente en este asunto el Magistrado Alfredo Salgado Loyo, cuya ponencia fue aprobada.

Se formuló el presente engrose el 22 de septiembre de 2010 y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción III, y 48, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior, ante el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos de la misma Sección, quien autoriza y da fe.

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

VI-P-2aS-626

INSTITUCIONES DE FIANZAS. LA COMPETENCIA TERRITORIAL DE LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA PARA CONOCER DE LOS JUICIOS ANTE ELLAS INSTAURADOS SE DETERMINA ATENDIENDO A LA SEDE DE LA AUTORIDAD QUE EMITIÓ EL ACTO IMPUGNADO.- Conforme a lo establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la regla general que determina la competencia territorial de las Salas Regionales del Tribunal, es el lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante. Además señala tres casos de excepción: cuando se trate de personas morales, que formen parte del sistema financiero o que tengan el carácter de controladoras o controladas de conformidad con lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en caso que el demandante resida en el extranjero y no tenga domicilio fiscal en el país y por último, cuando se impugnen resoluciones emitidas por la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria o por las unidades administrativas adscritas a dicha Administración General, y en estos supuestos será competente la Sala Regional de la circunscripción territorial en que se encuentre la sede de la autoridad que haya dictado la resolución impugnada. En consecuencia, si la actora es una institución de fianzas, que de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pertenece al sistema financiero, para determinar la Sala Regional competente por razón de territorio, debe atenderse a la sede de la autoridad que dictó la resolución impugnada, por darse el supuesto de excepción que contempla el precepto en comento.

Incidente de Incompetencia Núm. 26173/08-17-06-3/1232/10-S2-10-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 9 de septiembre de 2010, por unanimidad de 5 votos a

favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretario: Lic. Oscar Elizarrarás Dorantes.
(Tesis aprobada en sesión de 9 de septiembre de 2010)

EN EL MISMO SENTIDO:

VI-P-2aS-627

Incidente de Incompetencia Núm. 4369/09-06-02-1/970/10-S2-09-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 9 de septiembre de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretario: Lic. David Alejandro Alpide Tovar.
(Tesis aprobada en sesión de 9 de septiembre de 2010)

PRECEDENTE:

VI-P-2aS-294
Incidente de Incompetencia Núm. 3535/08-12-01-6/593/09-S2-07-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 30 de junio de 2009, por unanimidad de 5 votos.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 30 de junio de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 21. Septiembre 2009. p. 223

VI-P-2aS-487
Incidente de Incompetencia Núm. 2343/09-06-01-3/2490/09-S2-08-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 18 de febrero de 2010, por unanimidad de 4 votos a

favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 18 de febrero de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 28. Abril 2010. p. 139

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-2aS-628

EMBARGO SOBRE CUENTAS BANCARIAS.- CONSTITUYE UN MEDIO DE GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL, PARA EFECTOS DE OBTENER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO IMPUGNADO.- Si el embargo practicado sobre las cuentas bancarias de la actora, realizado coactivamente por la autoridad ejecutora, se constituye como garantía del interés fiscal desde el momento en que el crédito que se pretende hacer efectivo a través de dicha ejecución se encuentra también impugnado ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se cumplen los requisitos que prevé la fracción VI del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para que la Sala Regional del conocimiento conceda la suspensión de la ejecución, en virtud de que el artículo 144 del Código Fiscal de la Federación, expresamente señala que no se ejecutarán los actos administrativos cuando se garantice el interés fiscal, satisfaciendo los requisitos legales, previendo en su séptimo párrafo que no se exigirá garantía adicional si en el procedimiento administrativo de ejecución ya se hubieran embargado bienes suficientes para garantizar el interés fiscal o cuando el contribuyente declare bajo protesta de decir verdad que son los únicos que posee, caso este último en el que, de comprobar la autoridad fiscal que dicha declaración es falsa, podrá exigir garantía adicional, sin perjuicio de las sanciones que correspondan. En tales consideraciones, si la autoridad no verificó el saldo de las cuentas embargadas a la actora y por tal motivo no exigió garantía adicional, es evidente que consideró que ya se encontraba debidamente garantizado el interés fiscal; infiriéndose por tanto que los créditos exigidos de pago a la actora se encuentran garantizados en forma suficiente, por virtud del embargo coactivo a las cuentas bancarias; y en esa medida, es correcto conceder la suspensión de la ejecución de los créditos controvertidos jurisdiccionalmente.

Recurso de Reclamación Núm. 925/09-02-01-3/672/10-S2-10-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi-

nistrativa, en sesión de 9 de septiembre de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretario: Lic. Oscar Elizarrarás Dorantes.
(Tesis aprobada en sesión de 9 de septiembre de 2010)

PRECEDENTE:

VI-P-2aS-497
Recurso de Reclamación Núm. 69/09-16-01-7/1113/09-S2-10-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de enero de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Gabriela Badillo Barradas.- Encargado del engrose: Magistrado Luis Carballo Balvanera.
(Tesis aprobada en sesión de 18 de marzo de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 29. Mayo 2010. p. 113

LEY DEL SEGURO SOCIAL

VI-P-2aS-629

GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL. EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NO TIENE QUE CONSTITUIRLA PARA EFECTO DE OBTENER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE UN CRÉDITO FISCAL.- El artículo 255 de la Ley del Seguro Social dispone que el Instituto Mexicano del Seguro Social se considera de acreditada solvencia y no estará obligado a constituir depósitos o fianzas legales, ni aun tratándose del juicio de amparo y que sus bienes afectos a la prestación directa de sus servicios serán inembargables. En consecuencia, si bien es cierto que en el artículo 28, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se prevé que tratándose de créditos fiscales, para que se conceda la suspensión de la ejecución del acto combatido debe garantizarse el interés fiscal, también lo es que en el caso, atento a lo dispuesto en el referido precepto de la Ley del Seguro Social, si el instituto, como parte actora en el juicio, solicita la suspensión de la ejecución de un crédito fiscal, no estará obligada a constituir depósito o fianza legal, por ser de acreditada solvencia.

Recurso de Reclamación Núm. 1903/10-17-12-7/1506/10-S2-10-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 14 de septiembre de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla.
(Tesis aprobada en sesión de 14 de septiembre de 2010)

EN EL MISMO SENTIDO:

VI-P-2aS-630

Recurso de Reclamación Núm. 28919/09-17-10-1/1115/10-S2-10-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y

Administrativa, en sesión de 31 de agosto de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.
(Tesis aprobada en sesión de 31 de agosto de 2010)

PRECEDENTES:

VI-P-2aS-156
Recurso de Reclamación Núm. 226/08-08-01-3/1014/08-S2-10-05.- Resuelto por la Segunda Sección del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 9 de octubre de 2008, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Isabel Margarita Messmacher Linartas.
(Tesis aprobada en sesión de 20 de enero de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 15. Marzo 2009. p. 352

VI-P-2aS-593
Recurso de Reclamación Núm. 14660/09-17-07-8/654/10-S2-08-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 29 de junio de 2010, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé.
(Tesis aprobada en sesión de 29 de junio de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 33. Septiembre 2010. p. 117

VI-P-2aS-594
Recurso de Reclamación Núm. 15626/08-17-09-9/489/10-S2-06-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 6 de julio de 2010, por unanimidad de unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Ernesto Christian Grandini Ochoa.
(Tesis aprobada en sesión de 6 de julio de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 33. Septiembre 2010. p. 117

LEY DEL SEGURO SOCIAL

VI-P-2aS-631

GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL. EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, ÓRGANO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, NO ESTÁ OBLIGADO A SU OTORGAMIENTO.- En el artículo 22 de la Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de 2002, el legislador dejó sin efectos las exenciones relativas a los gravámenes a bienes inmuebles a favor de organismos descentralizados, previstas en leyes federales, sobre contribuciones locales, salvo en lo que se refiere a bienes propiedad de dichos organismos que se consideren del dominio público de la Federación. Lo que implica que, a partir de la entrada en vigor de la referida Ley de Ingresos de la Federación, los organismos descentralizados, tienen la obligación de pagar los impuestos en los términos precisados en su artículo 22, pues no debe soslayarse que el término exención, en la doctrina mexicana se considera como aquella figura jurídico-contributiva, en virtud de la cual se eliminan de la regla general de causación ciertos hechos o situaciones gravables por razones de equidad, de conveniencia o de política económica; mientras que el término gravamen, en el derecho fiscal, se utiliza como sinónimo de tributo e impuesto, siendo estos últimos los términos técnicos correctos. De lo que resulta evidente, que lo dispuesto en el citado artículo 22, de la Ley de Ingresos de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de enero de 2002, no tiene relación alguna con la garantía del interés fiscal, de un crédito fiscal federal, por concepto de aprovechamientos consistentes en una multa impuesta por la Comisión Nacional del Agua, que pretenda la autoridad debió otorgar el Instituto Mexicano del Seguro Social, en su carácter de organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, dentro del juicio contencioso administrativo, tramitado ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para efectos de la suspensión de la ejecución del crédito fiscal impugnado; pues conforme al artículo 255 de la Ley del Seguro Social, dicho organismo es de reconocida solvencia, y por lo tanto, se encuentra exceptuado de constituir tal garantía.

Recurso de Reclamación Núm. 1903/10-17-12-7/1506/10-S2-10-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 14 de septiembre de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla.
(Tesis aprobada en sesión de 14 de septiembre de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

TERCERO.- [...]

En principio se hace relevante señalar, que contrario a lo argumentado por la autoridad recurrente, el artículo 22 de la Ley de Ingresos de la Federación, publicada el 1º de enero de 2002, no resulta aplicable al caso, dado que el mismo a la letra dispone:

[N.E. Se omite transcripción]

Conforme lo previsto en el artículo que se analiza, se tiene que el legislador dejó sin efectos las **exenciones relativas a los gravámenes a bienes inmuebles** a favor de organismos descentralizados, previstas en leyes federales, sobre contribuciones locales, excepto cuando se refieran a bienes propiedad de dichos organismos que se consideren del dominio público de la Federación.

Lo que implica que, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Ingresos en comento, los organismos descentralizados, tienen la obligación de pagar los impuestos establecidos en las leyes locales respecto de contribuciones sobre bienes inmuebles, salvo cuando se refieran a bienes propiedad de dichos organismos que se consideren del dominio público de la Federación.

De lo que resulta evidente, que el artículo 22 de la Ley de ingresos de la Federación para el ejercicio de 2002, no tiene relación alguna con la garantía del interés fiscal, de un crédito fiscal federal, por concepto de aprovechamientos consistentes, en una multa impuesta por la Comisión Nacional del Agua que pretende la autoridad debió otorgar el Instituto Mexicano del Seguro Social, en su carácter de organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, pues conforme al artículo 255 de la Ley del Seguro Social, dicho Organismo es de reconocida solvencia y por tanto, se encuentra exceptuado de constituir tal garantía, precepto que al no coincidir con la materia de exenciones, no puede haber quedado sin efectos.

Ello es así, pues no debe soslayar la autoridad hacendaria, hoy recurrente, que el término exención en la doctrina mexicana se considera como aquella figura jurídico-contributiva, en virtud de la cual se eliminan de la regla general de causación ciertos hechos o situaciones gravables por razones de equidad, de conveniencia o de política económica; mientras que el término gravamen, en el derecho fiscal, se utiliza como sinónimo de tributo e impuesto, siendo estos últimos los términos técnicos correctos.[1]

Puntualizado lo anterior, los Magistrados integrantes de esta Segunda Sección de la Sala Superior de este Tribunal, consideran **parcialmente fundados, pero insuficientes** los argumentos de la recurrente, para revocar la sentencia combatida, en atención a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho que se apuntan.

El Instituto Mexicano del Seguro Social, parte actora, en su escrito de demanda, en la parte que es de interés, precisó lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

---

[1] RÍOS Granados Gabriela, *Diccionario de Derecho Fiscal Financiero,* Editorial Porrúa, México, D.F., págs. 262 y 312

De las transcripciones que anteceden, se desprende que la parte actora impugna tanto la resolución contenida en el oficio 600-26-2009-16118 de 29 de octubre de 2009, a través de la cual el Administrador Local Jurídico del Centro del Distrito Federal, del Servicio de Administración Tributaria, desecha el recurso de revocación, así como los actos emitidos dentro del procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo el crédito fiscal 1397530, en cantidad de $6,863.27, determinada por la Comisión Nacional del Agua, por concepto de multa.

Desprendiéndose de igual forma, que la suspensión que solicita, es precisamente, para que no se ejecute el crédito fiscal determinado a cargo del Instituto demandante, lo que significa evitar se proceda al cobro de la multa, determinada en cantidad de $6,863.27.

Ahora bien, de la transcripción que de la interlocutoria de que se trata, se realizó en párrafos que anteceden, se desprende que en lo sustancial, consideró que, "...en términos de lo establecido por el artículo 255 de la Ley del Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social **tiene acreditada solvencia**, por lo que no tiene obligación de garantizar el interés fiscal de la Federación en términos de lo previsto por los artículos 141, fracción V y 144 del Código Fiscal de la Federación, razón por la que resulta procedente decretar la suspensión definitiva del crédito fiscal 1397530", con fundamento en lo previsto por los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Conforme lo anterior, queda evidenciado que **le asiste la razón a la recurrente**, en aquella parte en la que aduce que la suspensión de la ejecución del acto combatido, se encuentra regulada por el artículo 28, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y no así conforme a los artículos 24 y 25 de la misma ley.

Ello es así, atendiendo a lo previsto por la fracción VI, del artículo 28, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual dispone:

[N.E. Se omite transcripción]

Conforme al numeral transcrito se tiene que, tratándose de la solicitud de la suspensión de la ejecución en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, procederá la suspensión del acto reclamado, hipótesis que se configura en la especie, pues como se dijo con anterioridad el actor controvierte los actos emitidos dentro del procedimiento administrativo de ejecución, para hacer efectivo el crédito fiscal 1397530, determinado en cantidad total de $6,863.27.

Asimismo, el artículo que se analiza, establece que dicha suspensión de la ejecución del acto combatido, procederá cumpliendo con los requisitos señalados en el primer párrafo, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables; sin embargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social está exento de constituir garantía para que surta efectos la suspensión, por lo que los argumentos vertidos por la autoridad recurrente al respecto, resultan **infundados** atendiendo a las consideraciones que a continuación se apuntan.

El artículo 4° del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia fiscal, establece que las instituciones, servicios y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas, estarán exentos de prestar las garantías que se exijan de las partes, en los siguientes términos:

[N.E. Se omite transcripción]

Por su parte, el artículo 5° de la Ley del Seguro Social, establece, lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Asimismo el artículo 255 de la Ley del Seguro Social dispone que el Instituto Mexicano del Seguro Social, se considera de acreditada solvencia, razón por la cual, no se encuentra obligado a constituir depósitos o fianzas legales, en el siguiente tenor:

[N.E. Se omite transcripción]

Por su parte, el artículo 1° de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, dispone lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

De la interpretación armónica de los artículos transcritos, resulta que el Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo público descentralizado que forma parte de la Administración Pública Federal Paraestatal, en contra del cual nunca podrá dictarse mandamiento de ejecución ni providencia de embargo y, estará exento de presentar garantías, durante la tramitación de procesos judiciales en los que sea parte, razón por la cual resulta ajustado a derecho que se decretara la medida cautelar con plena eficacia, sin necesidad de garantía.

Sustenta lo anterior, el precedente **VI-P-2aS-156**, emitido por esta Segunda Sección de la Sala Superior, publicado en la Revista número 15, Sexta Época, Año II, marzo de 2009, página 352, cuyo rubro y texto precisan:

> "**GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL. EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NO TIENE QUE CONSTITUIRLA PARA EFECTO DE OBTENER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE UN CRÉDITO FISCAL.**" [N.E. Se omite transcripción]

No es óbice a lo anterior, que el artículo 141, cuarto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, establezca que en ningún caso las autoridades fiscales podrán dispensar el otorgamiento de la garantía, pues la palabra "*dispensar*", conforme al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, vigésima segunda edición, en el contexto de tal precepto significa "*eximir de una obligación, de lo que se quiere considerar como tal*".

De lo que se sigue, que en el caso no se está ante una dispensa del otorgamiento de la garantía, que prohíbe el mencionado artículo 141, cuarto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, pues para que pudiera hablarse de ello primero tendría que

existir la obligación de garantizar, cuando en la especie no existe tal obligación por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, por los fundamentos y motivos ya expresados.

Aunado a lo anterior, las previsiones de los artículos 255 de la Ley del Seguro Social y 4° del Código Federal de Procedimientos Civiles, resultan ser **normas especiales** aplicables al caso, que **prevalecen sobre la disposición general,** siendo esta la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 141, en la medida en que estos ordenamientos establecen cuestiones que en términos generales operaran respecto de los solicitantes de la suspensión, pero los primeros ordenamientos en cita contienen cuestiones especiales que operan tratándose de instituciones como la hoy actora.

La eximente en comento favorece al Instituto Mexicano del Seguro Social, por ser un organismo público descentralizado, ya que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal crea las bases de organización de la administración pública federal, centralizada paraestatal, y establece en sus artículos 1o., 3o. y 45, que forman parte de la administración pública los **organismos públicos descentralizados**; por tanto, conforme a la Ley del Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo público descentralizado que está exceptuado de la obligación de otorgar garantías para obtener la suspensión en los juicios seguidos ante este Tribunal.

Son aplicables al caso las tesis **I.7o.A.487 A y I.7o.A.488 A**, emitidas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultables en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, páginas 1343 y 1352, que a la letra, respectivamente, precisan:

> "**GARANTÍAS FISCALES. NO EXISTE ANTINOMIA EN CUANTO A SU OTORGAMIENTO ENTRE LOS ARTÍCULOS 255 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y 141 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.**" [N.E. Se omite transcripción]

"**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SE ENCUENTRA EXENTO DE OTORGAR GARANTÍAS FISCALES, AUN CUANDO EL ARTÍCULO 255 DE LA LEY QUE LO RIGE SÓLO MENCIONE QUE NO ESTARÁ OBLIGADO A CONSTITUIR DEPÓSITOS O FIANZAS LEGALES.**" [N.E. Se omite transcripción]

Asimismo, es aplicable por analogía la **tesis jurisprudencial V.2o. J/45**, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Laboral del Quinto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, página 805, que precisa:

"**SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO COMO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO ESTÁ EXENTO DE OTORGAR GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS.**" [N.E. Se omite transcripción]

Es también aplicable la tesis **I. 8o. C. 12 K**, emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Octubre de 1994, página 334, que señala:

"**ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. ESTÁN EXENTOS DE PRESTAR LAS GARANTÍAS QUE EXIGE A LAS PARTES LA LEY DE AMPARO.**" [N.E. Se omite transcripción]

Por último, es también **infundado** el argumento de la recurrente, en el sentido de que la autoridad exactora no llegó a la etapa del embargo, al encontrarse ante la presencia de bienes inembargables, pues no fue el fundamento de la sentencia recurrida, sino que decretó la suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado, por el hecho de que la actora está exenta de otorgar garantía.

En ese contexto, no obstante las deficiencias de la sentencia recurrida, lo cierto es que sí resulta procedente la suspensión definitiva de la ejecución de los actos

impugnados, atento a lo dispuesto por los artículos 28, fracción VI de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 255 de la Ley del Seguro Social, por lo que se impone confirmar la sentencia interlocutoria de fecha 1 de marzo de 2010, dictada por la Décima Segunda Sala Regional Metropolitana de este Tribunal.

[...]

En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 23, fracción VIII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

I.- Resultó **procedente** y **parcialmente fundado** el recurso de reclamación promovido por el Titular de la Administración Local Jurídica del Centro del Distrito Federal, del Servicio de Administración Tributaria, **pero insuficiente para revocar la sentencia recurrida**, por tanto:

II.- Se confirma la sentencia interlocutoria de 1o. de marzo de 2010, en la que se concedió la suspensión definitiva de la ejecución de las resoluciones impugnadas.

III.- Envíese copia del presente fallo a la Décima Segunda Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, para que sea integrada a la carpeta de suspensión correspondiente.

IV.- NOTIFÍQUESE.- Con copia autorizada de la presente resolución a las partes, para su conocimiento.

Así lo resolvió la Segunda Sección de la H. Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 14 de septiembre de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor de los CC. Magistrados Luis Carballo Balvanera, Olga Hernández Espíndola, Alfredo Salgado Loyo, Silvia Eugenia Díaz Vega y Juan Manuel Jiménez Illescas.

Fue Ponente en el presente asunto el Magistrado Luis Carballo Balvanera, cuya ponencia se aprobó en sus términos.

Se formuló el engrose el día 22 de septiembre de 2010, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27, fracción III y 48, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

TERCERA PARTE

CRITERIOS AISLADOS DE SALA SUPERIOR Y DE SALAS REGIONALES

SALA SUPERIOR

PLENO

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-TASS-48

MARCAS DESCRIPTIVAS DEL LUGAR DE ORIGEN. NO ES PROCEDENTE SU REGISTRO.- El artículo 90 fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, establece los supuestos por los que no procede el registro de las marcas, entre las cuales encontramos como impedimento, que atendiendo al conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca, o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción, por lo que, si la marca propuesta a registro, como lo es "Tierras auténticas de Jalisco", pretende amparar productos consistentes en bebidas alcohólicas, es claro que la marca describe el lugar de origen de los productos. Por tanto, no resulta procedente el registro de aquéllas marcas que refieran a algún lugar, pues éstas describen una cualidad o característica de los productos o servicios, al indicar el lugar de origen de los mismos.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1445/09-EPI-01-7/3126/09-PL-04-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 de abril de 2010, por mayoría de 5 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 3 votos en contra.- Magistrado Instructor: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. Javier Armando Abreu Cruz.
(Tesis aprobada en sesión de 27 de septiembre de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

TERCERO.- [...]

A juicio de los Magistrados integrantes del Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, son **INFUNDADOS** los argumentos de la parte actora por las siguientes razones:

En primer término se estima necesario tener presente el contenido de la resolución impugnada con número de oficio MA/M/1985/0931176 de fecha 25 de marzo de 2009, la cual corre agregada a fojas 34 a 37 de autos, misma que a continuación se digitaliza:

[N.E. Se omiten imágenes]

De lo anterior se advierte esencialmente que la autoridad demandada resolvió negar el registro de la marca nominativa "TIERRAS AUTÉNTICAS DE JALISCO" toda vez que considerando el conjunto de características de la denominación propuesta a registro, indica que las bebidas alcohólicas que pretende amparar tienen como cualidad o característica el de provenir de una región o lugar originario del estado que se conoce con el nombre de Jalisco, sin que ello permita distinguir de su especie o clase.

Que los vocablos que integran la denominación propuesta a registro al conservar el significado que naturalmente le corresponde, contribuyen a una clara y directa descripción del lugar de origen de los productos a distinguir, por lo que de otorgarse el registro del signo propuesto resultaría un privilegio injustificado, frente a los demás prestadores de fabricantes en el ramo, ya que se estaría convalidando que un particular se apropie, para uso exclusivo, de la enunciación del lugar de origen de los productos a amparar.

Que al actualizarse la hipótesis contenida en la fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial, procedió a negar el registro de la marca.

Una vez señalado lo anterior, esta Juzgadora considera necesario tener presente el contenido del artículo que sirvió de base a la autoridad para negar el registro marcario.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

"Artículo 90." [N.E. Se omite transcripción]

Como se desprende del precepto legal transcrito, respecto a la fracción IV, se advierte categóricamente que no serán registrables como marca lo siguiente:

- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, **sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca**.

- Las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, **lugar de origen de los productos** o la época de producción.

Cabe precisar que uno de los objetivos de la mencionada ley, es evitar la coexistencia de marcas iguales o semejantes en grado de confusión, por tal motivo, para que un signo pueda constituir una marca, es necesario que, entre otros requisitos, tenga una eficacia distintiva, es decir, que revista un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, además esa distinción debe ser objetiva o real, con el propósito de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes.

Dentro de las principales funciones que pueden atribuirse a un signo marcario de acuerdo a la doctrina son:

a) Distinción;
b) Protección;
c) Garantía de calidad; y,
d) Propaganda.

La función de distinción deriva de la esencia misma de la marca, por cuando que su objetivo está destinado a distinguir un producto de otro del mismo género. De acuerdo con tal función es el producto considerado en sí mismo a lo que el consumidor dirige normalmente su atención.

La función de protección de la marca tiende a identificar a su titular frente a sus presuntos concurrentes, protegiendo simultáneamente al público consumidor de los usurpadores, dado que es en virtud de la marca que el comprador reclama el producto.

La función de garantía de calidad, radica como su nombre lo indica, en la calidad del producto y esto intrínsecamente lo califica, ya que lo que el comprador busca al adquirir un producto es una calidad determinada, con prescindencia de la empresa que lo fábrica, cuyo conocimiento es algo secundario para el consumidor.

Finalmente, la función de propaganda constituye un reclamo del producto, es decir, la marca es el único nexo que existe entre el consumidor del producto o el servicio y su titular, y es a través de la misma que su titular recogerá los beneficios o no, de su aceptación por parte del público consumidor, de tal manera que la marca es lo que el comprador ha de pedir y es lo que el titular de la misma tratará que pida, y para ello la buena calidad del producto o servicio debe ir acompañada de una publicidad adecuada, dado que serían vanos los esfuerzos para lograr la mejor calidad si el producto o servicio es desconocido.

Ahora bien, como ya se expresó, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten; sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad correspondiente, según así lo establece el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, estableciéndose además en los artículos 89 y 90 de dicho ordenamiento legal, las hipótesis para poder constituir una marca, así como los supuestos que pueden originar el no registro de la misma.

En ese sentido, el artículo 90, en su fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial contempla la prohibición de inscribir una marca que sea descriptiva o indicativa

del producto que trata de amparar, sus características íntimas o particulares y que sea descriptiva en general de cualquier cosa, por lo que si se pretende registrar como marca una denominación que indica el lugar de origen de los productos a distinguir, la misma resulta ser descriptiva, y por lo tanto, está prohibido su registro.

Respecto de las marcas descriptivas, el Poder Judicial de la Federación emitió las siguientes tesis cuyos textos son:

> "**MARCAS. DESCRIPTIVIDAD.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en el S.J.F. Tomo III. Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989. Octava Época. pág. 454]
>
> "**MARCAS DESCRIPTIVAS.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en el S.J.F. Tomo III. Séptima Época. pág. 476]
>
> "**MARCAS COMPUESTAS. DESCRIPTIVIDAD Y CONDICIÓN DISTINTIVA DE LAS.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en el S.J.F. Tomo VIII. Septiembre de 1991. Octava Época. pág. 155]

De las tesis invocadas se advierte que está prohibido el registro de una marca cuando describa o pretenda describir la calidad de sus productos, sin una indicación o característica específica que los distinga de los productos semejantes de los demás productores, porque cuando la denominación o expresión, hace referencia de alguna calidad del producto sin tener características propias e individuales que permitan diferenciar el producto, entonces no es susceptible de registro.

Ahora bien, en el expediente administrativo exhibido en juicio por la demandada, se encuentra la copia certificada de la solicitud de registro de marca, el cual se digitaliza a continuación:

[N.E. Se omite imagen]

De lo anterior se observa que la parte actora el día 2 de mayo de 2008 solicitó el registro de la marca nominativa "**TIERRAS AUTÉNTICAS DE JALISCO**", la cual no se ha usado, para amparar productos correspondientes a la **clase internacional 33; a saber Bebidas Alcohólicas** (excepto cervezas).

Como ya quedó precisado anteriormente, el artículo 90, fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial anteriormente transcrito dispone que, ***no serán registrables como marca las palabras*** descriptivas o ***indicativas que en el comercio sirvan para designar*** la especie, la calidad, la cantidad, la composición, el destino, el valor, ***el lugar de origen de los productos***, o la época de producción.

Entonces si la actora solicitó el registro del signo "**TIERRAS AUTÉNTICAS DE JALISCO**" para amparar con dicha marca los productos correspondientes a la clase internacional 33, que son: "bebidas alcohólicas" (excepto cervezas), es evidente que la resolución impugnada se encuentra apegada a derecho, ya que se actualizan los supuestos de prohibición contenidos en la fracción IV, del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, pues contrariamente a lo señalado por la actora la denominación citada es indicativa del lugar de origen, esto es del Estado de Jalisco, pues la misma indica que las bebidas alcohólicas que pretende amparar tienen como cualidad o característica el de provenir de una región o lugar originario del estado citado, sin que ello permita distinguir un producto de su especie o clase.

Es importante señalar que, la limitación de registrar una marca descriptiva o indicativa de los productos que pretende amparar, tiene como finalidad, que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante frente a sus competidores, pues éstos estarían impedidos de utilizar dicha denominación, siendo que, como lo refiere la autoridad demandada, de otorgarse el registro del signo propuesto, resultaría un privilegio injustificado frente a los demás fabricantes en el ramo, puesto que se estaría convalidando que un particular se apropie, para su uso exclusivo de la enunciación del lugar de origen de los productos a amparar.

[...]

Con fundamento en los artículos 49, 50 y 52, fracción I, y segundo párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

I.- La parte actora no acreditó los extremos de su pretensión, en consecuencia.

II.- Se reconoce la validez de la resolución impugnada, detallada en el Resultando 1° del presente fallo, por las razones y motivos expuestos en la parte considerativa de esta sentencia.

III.- NOTIFÍQUESE.- Con copia autorizada de esta resolución, devuélvanse los autos del juicio de nulidad a su Sala de origen una vez que haya quedado resuelto en definitiva y, en su oportunidad, archívese este expediente.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 de abril de 2010, por mayoría de 5 votos a favor de los Magistrados Nora Elizabeth Urby Genel, Jorge Alberto García Cáceres, Silvia Eugenia Díaz Vega, Olga Hernández Espíndola y Luis Carballo Balvanera y 1 voto con los puntos resolutivos del Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas y 3 votos en contra de los Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Alejandro Sánchez Hernández y Alfredo Salgado Loyo. Estando ausentes los Magistrados Manuel L. Hallivis Pelayo y Francisco Cuevas Godínez.

Fue Ponente en este asunto el Magistrado Jorge Alberto García Cáceres, cuya ponencia se aprobó.

Se elaboró el presente engrose el 7 de mayo de 2010, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, fracción V y 47 fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa vigente, firma el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Lic. Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL C. MAGISTRADO ALEJANDRO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 1445/09-EPI-01-7/3126/09-PL-04-10

Contrario a lo que sostiene la mayoría, estimo que el presente asunto no se ubica dentro del ámbito espacial de la competencia del Pleno de la Sala Superior, y por lo tanto procede su devolución a la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual.

En efecto, el artículo 18, fracción XV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, prevé:

> "***ARTÍCULO 18.-*** *Son facultades del Pleno, las siguientes:*
> "(...)
> "*XV. Las que se funden en un Tratado o Acuerdo Internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos Tratados o Acuerdos, y*
> "(...)"

De conformidad con el dispositivo transcrito, corresponde al Pleno de la Sala Superior de este Tribunal resolver los juicios en los que la resolución impugnada se funde en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por México o cuando el demandante haga valer en un concepto de impugnación que no se hubieran aplicado a su favor alguno de estos tratados o acuerdos.

En el caso, del análisis efectuado a la resolución impugnada no se advierte que la misma se funde en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por nuestro país, ni tampoco se evidencia del escrito inicial de demanda que la actora haya expresado concepto de impugnación alguno en

el que haga valer que no se le hubiera aplicado a su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos.

No obsta a la conclusión anterior, el que la parte actora hubiese señalado que atendiendo a lo dispuesto por el artículo 6, Quinquies B) la autoridad debió estudiar si el término "TIERRAS AUTÉNTICAS DE JALISCO" describe los productos que se pretenden proteger; lo anterior es así, porque con tal manifestación, la actora no formula ningún agravio tendente a demostrar la inaplicación de un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por México, sino que sólo hace referencia al contenido de un artículo del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

De ahí que el conocimiento y resolución del asunto de mérito incumba exclusivamente a la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual.

Por estas consideraciones, es que el suscrito no comparte el criterio mayoritario que antecede.

MAG. ALEJANDRO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

SALAS REGIONALES

PRIMERA SALA REGIONAL METROPOLITANA

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2010

VI-TASR-I-12

MULTAS. LA NO IMPOSICIÓN, EN TÉRMINOS DEL SEXTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2010, CONSTITUYE UNA FACULTAD REGLADA Y NO DISCRECIONAL DE LA AUTORIDAD FISCAL.- El sexto párrafo del artículo 15 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2010, dispone que no se impondrá la sanción correspondiente cuando se esté en los siguientes supuestos: a) Que con anterioridad al 1º de enero de 2010, se hubiere incurrido en infracción a las disposiciones aduaneras en los casos a que se refiere el artículo 152 de la Ley Aduanera; b) Que a la fecha de entrada en vigor de la Ley de Ingresos citada no le haya sido impuesta la sanción correspondiente; y c) Si, por las circunstancias del infractor o de la comisión de la infracción, el crédito fiscal aplicable no excede a 3,500 unidades de inversión o su equivalente en moneda nacional al 1º de enero de 2010. En consecuencia, si el particular se ubica en todos y cada uno de los supuestos establecidos por la norma en cuestión, no procede que la autoridad determine la multa respectiva, toda vez que dicho precepto legal establece una facultad reglada, que le impide imponer la sanción correspondiente, y no constituye una facultad discrecional, pues no deja a su arbitrio la no determinación de la multa, sino que, contiene supuestos que de actualizarse, no procedería su imposición.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 8229/10-17-01-1.- Resuelto por la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 3 de septiembre de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Enrique Rábago de la Hoz.- Secretaria: Lic. Gabriela Ramírez López.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-I-13

FACULTADES DE COMPROBACIÓN, TRATÁNDOSE DE LA REVISIÓN DEL DICTAMEN FISCAL QUE PREVÉ El ARTÍCULO 52-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DEBE MOTIVARSE DEBIDAMENTE EL POR QUE SE ENTIENDE DIRECTAMENTE CON EL CONTRIBUYENTE Y NO CON EL CONTADOR PÚBLICO.- El artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación, regula el procedimiento del ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, tratándose de la revisión del dictamen fiscal elaborado por contador público registrado, siendo que el orden establecido para el ejercicio de dicha facultad se constriñe en que, en primer término sea requerido de información y documentación al Contador Público Registrado y posteriormente al contribuyente en caso de que la información no resulte suficiente para la autoridad fiscal; sin embargo, se prevén excepciones al orden establecido, y puede realizarse directamente con el contribuyente cuando se actualice cualquiera de los supuestos establecidos en el quinto párrafo del artículo en cuestión. En ese sentido y en relación con el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, al considerar la autoridad que se actualiza algún supuesto de excepción para entender la revisión directamente con el contribuyente, no basta que señale cuál es el supuesto que se actualiza, sino que también debe exponer los motivos, razones y circunstancias por las cuales considera que se actualizó tal supuesto, pues de lo contrario se deja a su arbitrio el practicar directamente la revisión con el contribuyente, sin exponer motivadamente que se actualizó tal supuesto, haciendo de esta manera nugatorio el procedimiento, orden y reglas que el legislador estableció en el artículo en análisis.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 9323/10-17-01-1.- Resuelto por la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 10 de septiembre de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Enrique Rábago de la Hoz.- Secretaria: Lic. Gabriela Ramírez López.

QUINTA SALA REGIONAL METROPOLITANA

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

VI-TASR-V-19

PAGO DE LO INDEBIDO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS.- NO LO HAY TRATÁNDOSE DE LA EXPORTACIÓN DE DIESEL MARINO CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LOS AÑOS 2001, 2002 Y 2003.- Como es de explorado derecho, para que exista pago de lo indebido es necesario la conjunción de tres elementos: 1) Una erogación hecha a favor del sujeto activo de la contribución; 2) Que ese entero se haya efectuado por concepto del pago de un tributo; y 3) Que exista una situación de hecho o derecho que provoque la ilegalidad del pago. Por tanto, cuando se demanda la devolución por el pago de lo indebido por el traslado y retención que realiza Petróleos Mexicanos, ante la afirmación de que se efectuó sobre una actividad (exportación) que en 2001 le resultaba aplicable la tasa 0%, y en 2002 y 2003 estaba exenta, tal situación de ninguna manera se puede traducir en un pago de lo indebido, pues el obligado al pago de dicho impuesto lo es Pemex Refinación quien es el sujeto que realizó el supuesto previsto en la ley, consistente en la enajenación de diesel en territorio nacional, en tanto que la empresa actora simplemente resintió el traslado del impuesto que la propia ley autoriza. Asimismo es necesario precisar, en los términos indicados al inicio de la presente tesis, que para acreditar la existencia de un pago de lo indebido de la contribución, deben aportarse los elementos necesarios para acreditar que se hubiesen realizado pagos del impuesto especial sobre producción y servicios que a la actora no le correspondía enterar, pues aún en el supuesto de que se hubiese exhibido como prueba en el juicio la solicitud de devolución correspondiente, ello únicamente comprobaría la existencia de dicha solicitud, pero no así el derecho a obtener la devolución por un pago de lo indebido.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5488/05-17-05-6.- Resuelto por la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 7 de octubre de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Francisco Cárdenas Elizondo.- Secretario: Lic. Daniel Caporal Ortiz.

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

VI-TASR-V-20

SUJETO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS.- QUIÉN DEBE SER CONSIDERADO COMO TAL Y QUIÉN NO TIENE ESE CARÁCTER CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LOS AÑOS 2001, 2002 Y 2003.- El concepto de sujeto pasivo del impuesto comprende dos aspectos esenciales: 1) Ser sujeto de la obligación tributaria y 2) Ser elemento subjetivo del hecho imponible, esto es, en el caso en los términos de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la ley de la materia, el sujeto del impuesto es la persona física o moral que enajene en territorio nacional o importe los siguientes productos: Bebidas alcohólicas y cerveza, Tabacos labrados, Gasolina y Diesel (y además tratándose del año 2001, también las enajenaciones realizadas con motivo de las exportaciones gravadas a la tasa 0%), así como aquéllas personas que presten servicios de Comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución con motivo de la enajenación de Bebidas alcohólicas y cerveza, Tabacos labrados, Gasolina, Diesel, la realización de juego y apuestas y los que se proporcionen en territorio nacional a través de una o más redes públicas de telecomunicaciones. Por otro lado, se puede afirmar que las personas que no son consideradas contribuyentes o sujetos del impuesto, por exclusión, son aquéllas que no realicen las enajenaciones ni presten los servicios a que se alude en líneas anteriores; y además en cuanto a los ejercicios fiscales correspondientes a los años 2002 y 2003, igualmente no deben ser consideradas como contribuyentes del impuesto, aquéllas personas comprendidas en el supuesto previsto en el artículo 8, fracción I, inciso c)

de la ley, toda vez que el legislador estableció de manera expresa que las enajenaciones realizadas por las personas diferentes de los fabricantes, productores o importadores de los bienes consistentes en: tabacos labrados, gasolinas, diesel y gas, no se pagará el impuesto por dichas enajenaciones.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5488/05-17-05-6.- Resuelto por la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 7 de octubre de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Francisco Cárdenas Elizondo.- Secretario: Lic. Daniel Caporal Ortiz.

SÉPTIMA SALA REGIONAL METROPOLITANA

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-XVIII-9

ARTÍCULO 2, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- SU ALCANCE RESPECTO DE LOS ACTOS EMITIDOS POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.- El artículo 2°, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dispone que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es competente para conocer de los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos. por su parte, el artículo 92, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el titular del Ejecutivo Federal puede emitir reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes.- Respecto a los reglamentos, no existe incertidumbre sobre su impugnación, pues el legislador determinó expresamente que no fueran combatibles mediante el juicio contencioso administrativo federal.- En lo tocante a los decretos, doctrinalmente se reconoce que el titular del Ejecutivo puede emitir los llamados "decreto ley" y "decreto delegado".- El primero de ellos, es emitido en términos del artículo 29, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para suspender las garantías individuales en caso de emergencia, con la misma jerarquía que guardan las leyes emanadas del Poder Legislativo. Por su parte, el "decreto delegado", se encuentra previsto en el segundo párrafo del artículo 131, de la propia Carta Magna, el cual tiene como finalidad que el Presidente de la República pueda aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de importación y exportación, expedidas por el Congreso de la Unión; igual que en el caso anterior, se considera dentro de la misma jerarquía que las leyes, por tanto, ambos escapan a la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.- No obstante, existen decretos emitidos por el presidente de la república de contenido netamente administrativo

como los de descentralización y los de organización interna de las dependencias estatales, los cuales pese a su carácter general y abstracto, suelen tener repercusiones sobre sujetos determinados respecto a los cuales se estima si es competente el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues a diferencia de los anteriores no tienen la misma jerarquía que las leyes. Finalmente, los acuerdos y órdenes del Presidente de la República, pueden entenderse como las decisiones que toma para resolver un problema concreto, como en el caso de desastres naturales o cuando emite disposiciones cuyo propósito es facilitar, modificar o establecer trámites administrativos, los cuales igualmente tienen una naturaleza administrativa y por ende, debe considerarse que encuadran en los señalados por el artículo 2, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Recurso de Reclamación Núm. 13722/09-17-07-8.- Resuelto por la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 11 de diciembre de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: María Isabel Gómez Muñoz.- Secretario: Lic. Enrique Camarena Huezca.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-XVIII-10

INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA PARA CONOCER DE LA LEGALIDAD DE LOS ACTOS EMITIDOS POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN USO DE LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS OTORGADAS POR EL ARTÍCULO 131, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- Los actos que emite el titular del Ejecutivo Federal en uso de las facultades contenidas en el segundo párrafo del artículo 131, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de importación y

exportación, expedidas por el Congreso de la Unión, constituye lo que doctrinalmente se conoce con el nombre de "decreto delegado".- Esta clase de decreto, constituye una excepción al principio de división de poderes, pues las normas emitidas bajo este supuesto tienen la misma naturaleza y jerarquía que las leyes emanadas del propio Congreso, tan es así que dicho titular no se encuentra obligado a explicar los fundamentos o motivos por los cuales los expide y promulga, según fue establecido en el criterio de jurisprudencia sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por título: "fundamentación y motivación de los decretos expedidos por el Presidente de la República, en uso de las facultades extraordinarias otorgadas por el artículo 131, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". derivado de lo anterior, al concluirse que esta clase de decreto tiene la misma jerarquía que las leyes emanadas del Congreso de la Unión, resulta evidente que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, carece de competencia para conocer de su impugnación; aun cuando el artículo 2, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establezca que el juicio contencioso administrativo federal procede contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos; pues, se trata de un acto que no participa de la misma naturaleza que los referidos.

Recurso de Reclamación Núm. 13722/09-17-07-8.- Resuelto por la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 11 de diciembre de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: María Isabel Gómez Muñoz.- Secretario: Lic. Enrique Camarena Huezca.

DÉCIMO SEGUNDA SALA REGIONAL METROPOLITANA

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VI-TASR-XLII-1

VALOR AGREGADO. DEVOLUCIÓN. NO PROCEDE EN TRATÁNDOSE DE LA ADMINISTRACIÓN Y COBRO DE CARTERA VENCIDA.- En términos de los artículos 1-C párrafo primero y segundo fracción II y IV, en adición a la fracción VII del artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la actividad de administración y cobro de cartera vencida se encuentra exenta del pago del impuesto al valor agregado; en consecuencia, si el particular solicitó la devolución de saldos a favor proveniente de dicha actividad, no tiene derecho a la misma, pues por disposición de la propia Ley de la materia, no puede efectuarse el traslado de un impuesto que en el último de los casos no se paga; además que al no poder acreditarlo, se tiene que absorber como gasto o costo y por ello no procede la devolución solicitada.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 30485/06-17-12-3.- Resuelto por la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 9 de abril de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Javier Ramírez Jacintos.- Secretario: Lic. Jaime Santiago García.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

VI-TASR-XLII-2

NEGATIVA FICTA.- PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO CUANDO AQUELLA SE CONFIGURA RESPECTO A UN RECUR-

SO DE INCONFORMIDAD INTENTADO CONTRA UNA RESOLUCIÓN DE PROCEDENCIA DE RETIRO POR INUTILIDAD EN SEGUNDA CATEGORÍA EN ACTOS FUERA DE SERVICIO.- Si se demanda la nulidad de una resolución negativa ficta, configurada en relación a un recurso de inconformidad intentado contra la diversa resolución de procedencia de retiro por inutilidad en segunda categoría en actos fuera de servicio, procede el sobreseimiento del juicio relativo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 8°, fracción II y 9°, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que esta última no representa el producto final de la manifestación de voluntad de la autoridad administrativa, pues sólo constituye una mera declaración provisional, a fin de que el interesado manifieste su conformidad o inconformidad, ya que acorde con lo previsto en los artículos 188 y 193 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas una vez declarada la procedencia del retiro o la improcedencia del mismo, se notificarán al militar para que dentro de un plazo de quince días hábiles manifieste su conformidad o formulen su inconformidad expresando objeciones y en los casos en que los militares y los familiares de éstos hubieran formulado objeciones a las declaraciones pronunciadas por la Secretaría que corresponda, como en la especie acaeció con el escrito respecto del cual se configuró la negativa ficta impugnada, dicha Secretaría formulará dentro de los 45 días hábiles siguientes, su declaración definitiva en la cual resolverá las objeciones aceptándolas o rechazándolas, y haciendo pormenorizada valorización de las pruebas y cuestiones alegadas, además de que si los militares o los familiares manifestaran su conformidad a las declaraciones provisionales o dejaren transcurrir el primer plazo señalado en el artículo 188 de dicha Ley -lo que se considerará como una aceptación tácita-, se tendrá como definitiva dicha declaración, de lo que se deduce que efectivamente la resolución recurrida no tiene el carácter de definitiva pues sólo es una declaración provisional. En tal contexto, debe concluirse que si la resolución recurrida no tiene el carácter de resolución definitiva, entonces es concluyente que dicha resolución no es de aquellas cuya impugnación pueda conocer este Tribunal y por ende también resulta improcedente la negativa ficta recaída al recurso de inconformidad promovido en su contra.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 26754/06-17-12-2.- Resuelto por la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 15 de abril de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Silvia Lavín Hernández.- Secretario: Lic. Ricardo Juárez Martínez.

LEY ADUANERA

VI-TASR-XLII-3

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA.- NO PUEDE ATRIBUIRSE A QUIEN FUNJA COMO CONSIGNATARIO DE UNA GUÍA AÉREA.- De lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley Aduanera no se advierte que se señale como responsable solidario a los consignatarios, por lo que en tal contexto si con el carácter de consignatario se determinó a la demandante la responsabilidad solidaria del crédito contenido en la resolución combatida, es evidente que la misma es ilegal, surtiendo por ende la causal de ilegalidad prevista en el artículo 51, fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y por ende procede declarar la nulidad de la resolución impugnada acorde con lo previsto en el artículo 52, fracción II de la citada Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sin que sea óbice a ello que el crédito impugnado se haya determinado a cargo de la actora conforme a lo previsto en el artículo 1° de la Ley Aduanera, pues si bien conforme a este último numeral están obligados al cumplimiento de las disposiciones señaladas en su primer párrafo quienes introducen mercancías al territorio nacional o las extraen del mismo, ya sean, entre otros, sus destinatarios, también lo es que aun y cuando la ahora actora tenga además del carácter de consignataria, el de destinataria lo cierto es que en el referido artículo 53 de la Ley Aduanera no se contemplan tampoco como responsables solidarios a los destinatarios.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 13686/09-17-12-2.- Resuelto por la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi-

nistrativa, el 21 de abril de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Silvia Lavín Hernández.- Secretario: Lic. Ricardo Juárez Martínez.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO

VI-TASR-XLII-4

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO.- SE EXCEPTÚAN DE LA OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR, DE ACUERDO CON DICHA LEY, ENTRE OTRAS HIPÓTESIS, LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE NO SEAN CONSECUENCIA DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IRREGULAR DEL ESTADO.- Acorde con lo dispuesto en los artículos 1°, 3° y 22 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, a efecto de que se reconozca el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos, se hace necesario que dichos daños sean consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado, entendiéndose por actividad administrativa aquella que comprende los actos administrativos, los cuales constituyen una declaración unilateral de la voluntad que es realizada en el ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos de forma inmediata, es decir, cualquiera que sea su forma, la actividad administrativa se traduce en hechos y actos administrativos, siendo estos últimos en sentido amplio los que se aplican a toda clase de manifestaciones de la actividad de los sujetos de la administración pública; y en el sentido estricto, comprende y abarca a las "Manifestaciones de la voluntad del Estado para crear efectos jurídicos", particularmente esta última, de significación más restringida y específica, se constituye en el verdadero eje del derecho administrativo, de ahí que cuando la afectación de los bienes y derechos que reclama el particular no derivan directamente de la actividad administrativa irregular por parte del Estado, sino de bloqueos permanentes y temporales por parte de particulares, los mismos no pueden ser imputables directamente al Estado pues no derivan de su actividad administrativa, es decir, dichos bloqueos no

fueron ocasionados por la declaración unilateral de la voluntad del Estado en el ejercicio de la función administrativa.

Reclamación de Responsabilidad Patrimonial del Estado Núm. 3548/07-17-12-2.- Resuelto por la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 27 de abril de 2010.- Sentencia: por mayoría de 2 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Tesis: por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Silvia Lavín Hernández.- Secretario: Lic. Ricardo Juárez Martínez.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

VI-TASR-XLII-5

SEGURO DE VIDA MILITAR. SOLO PUEDE SER PROPORCIONADO A LOS MILITARES CUANDO HUBIEREN CAUSADO ALTA EN SITUACIÓN DE RETIRO POR INUTILIDAD CLASIFICADA EN PRIMERA O SEGUNDA CATEGORÍAS.- Del artículo 35 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas se advierte que el seguro de vida militar es la prestación que tiene por objeto proporcionar un beneficio económico, entre otros, a los militares que hayan causado baja del activo y alta en situación de retiro por inutilidad clasificada en primera o segunda categorías, de conformidad con las tablas anexas en la Ley de la materia, contraída en actos del servicio o como consecuencia de ellos, es decir, se hace necesario que la situación de retiro sea por inutilidad y que sea clasificada en primera o segunda categorías, por lo que si a efecto de que el seguro de vida militar sea proporcionado a los militares, se hace necesario que hayan causado baja del activo y alta en situación de retiro por inutilidad clasificada en primera o segunda categorías y si el demandante causó alta en situación de retiro clasificada en tercera categoría, es evidente que al no situarse en la hipótesis normativa de procedencia prevista en el artículo 60 de la Ley del Instituto de Seguridad

Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas no tiene derecho a que se le proporcione el beneficio económico consistente en el seguro de vida militar, máxime si en la presente instancia no acredita con documental alguna que hubiera causado alta en situación de retiro por inutilidad clasificada en primera o segunda categorías.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1909/10-17-12-2.- Resuelto por la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 30 de abril de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructora: Silvia Lavín Hernández.- Secretario: Lic. Ricardo Juárez Martínez.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XLII-6

CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA, ADMINISTRACIÓN Y PAGO, POR EL QUE SE TRANSMITEN BIENES PARA SU ENAJENACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO A DIVERSOS DEUDORES, RESERVÁNDOSE EL FIDEICOMITENTE EL DERECHO DE READQUIRIR LOS BIENES FIDEICOMITIDOS; NO ES UNA TRANSMISIÓN DE PROPIEDAD PARA EFECTOS FISCALES.- En el Derecho Común, la "propiedad fiduciaria" siempre está limitada o acotada por los fines del fideicomiso; por ello, en general la constitución del fideicomiso en sí no implica enajenación o transmisión de la propiedad en el sentido del Derecho Común, máxime cuando los fines del fideicomiso son en beneficio total o parcial del fideicomitente como sucede en el caso (en garantía del pago de deudas del propio fideicomitente y con derecho de éste a readquirir los bienes fideicomitidos). Entonces, fuera del Derecho Común, el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, determina sólo para efectos fiscales, las hipótesis en que se considera que hay enajenación al destinarse bienes o derechos en fideicomiso; la primera acontece en el acto en el que el fideicomitente designa o se obliga a designar fideicomisario diverso de él y siempre que no tenga derecho a readquirir de la fiduciaria los bienes y la segunda, en el acto en el que el

fideicomitente pierda el derecho a readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiera reservado tal derecho; por ello, si en autos se acreditó que a través del fideicomiso, el fideicomitente se reservó el derecho de readquirir los bienes fideicomitidos, la enajenación propiamente ocurre hasta que la fiduciaria enajena esos bienes, mas no en la celebración misma del contrato de fideicomiso. Dicho en otras palabras, dadas las características del negocio fiduciario, no es lícito considerar que existe enajenación en el sentido del Derecho Común en otras situaciones de constitución y ejecución de un fideicomiso. De lo contrario, se estaría dando a las hipótesis del referido precepto, que determinan situaciones de enajenación para efectos fiscales, un alcance extensivo inusitado para atribuir características jurídicas de las que carece el negocio fiduciario en el Derecho Común y cambiar la naturaleza jurídica de la "propiedad fiduciaria" y del "patrimonio fiduciario". Es así que resulta ilegal la resolución que niega la confirmación del criterio solicitado, pues contrario a lo sostenido por la autoridad demandada, la contribuyente –fideicomitente- al determinar el resultado fiscal correspondiente al ejercicio fiscal de 1998, fue correcto que incluyera como concepto deducible la pérdida derivada de la enajenación de acciones, pues atento a la finalidad y naturaleza del fideicomiso en cuestión, el fiduciario no puede obtener ninguna ventaja personal de los bienes que se le transmitieron, como lo es el beneficiarse de la pérdida fiscal derivada de la enajenación de acciones, dado que con ellos debe cumplir un objetivo fijado en el fideicomiso en provecho de la propia fideicomitente -enajenación de acciones para pagar deudas de sus acreedores-; por lo que la acumulación de los ingresos derivados de las ventas de los bienes en fideicomiso, así como las deducciones correspondientes deben ubicarse en el fideicomitente.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 13297/06-17-12-7.- Resuelto por la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 3 de mayo de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Juan Manuel Terán y Contreras.- Secretaria: Lic. Claudia Rosana Morales Lara.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

VI-TASR-XLII-7

AUDIENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, SE PUEDE ANTICIPAR SU DESAHOGO, POR CAUSAS IMPUTABLES AL SERVIDOR PÚBLICO.- El precitado artículo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, no establece la posibilidad de diferir o modificar la fecha de la audiencia. En efecto, el procedimiento administrativo de responsabilidades, se inicia con la cita del presunto responsable a una audiencia, notificándole que deberá comparecer personalmente a rendir su declaración en torno a los hechos que se le imputen y que puedan ser causa de responsabilidad en los términos de la Ley, y demás disposiciones aplicables; además, se establece que en la notificación deberá expresarse el lugar, día y hora en que tendrá verificativo la audiencia; la autoridad ante la cual se desarrollará ésta; los actos u omisiones que se le imputen al servidor público y el derecho de éste a comparecer asistido de un defensor; también, se establece que entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar un plazo no menor de cinco ni mayor de quince días hábiles; conforme lo antes narrado, se colige que el precepto legal que nos ocupa, señala expresamente que una vez hecha la notificación, si el servidor público deja de comparecer sin causa justificada, se tendrán por ciertos los actos u omisiones que se le imputan. Ahora bien, la autoridad demandada podrá desahogar la audiencia, con anterioridad al día y horas establecidos en el citatorio, cuando se actualicen los requisitos siguientes: a) que la audiencia se desahogue un plazo no menor de cinco ni mayor de quince días hábiles, siguientes a la fecha de la notificación de la citación; y b) que la modificación de la fecha se sustente en una petición expresa del servidor público; esto es, por causas imputables al interesado. Lo anterior, dado que de llevarse a cabo la audiencia en los términos precisados, no implica una violación al procedimiento administrativo en cuestión, al no afectar las defensas del particular y trascender en el sentido de la resolución impugnada.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 34567/07-17-12-7.- Resuelto por la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 17 de mayo de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Juan Manuel Terán y Contreras.- Secretario: Lic. Raúl Tovar Gutiérrez.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-XLII-8

DEMANDA.- PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO SE INTERPONE CONTRA EL OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA NO PRONUNCIARSE SOBRE EL ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSMISIÓN BIDIRECCIONAL DE DATOS, HASTA EN TANTO SE RESUELVA LO CONDUCENTE RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL TÍTULO DE CONCESIÓN RESPECTIVO.- Acorde lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se pone fin al procedimiento administrativo con la resolución del mismo; en tal sentido con la emisión del oficio a debate la demandada determinó no pronunciarse sobre el análisis de las solicitudes para prestar los servicios de transmisión bidireccional de datos, hasta en tanto se resuelva lo conducente respecto a la solicitud de prórroga del título de concesión correspondiente otorgado a la actora, es evidente que con dicho oficio no se ha puesto fin al procedimiento administrativo respectivo, pues ello se hará una vez que se resuelva lo conducente respecto a la citada solicitud de prórroga del título de concesión de mérito, y por ende dicha resolución no puede adquirir el carácter de definitiva y por tanto no puede ser impugnable ante este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Recurso de Reclamación Núm. 2744/10-17-12-2.- Resuelto por la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de junio de 2010.- Sentencia: por mayoría de 2 votos a favor y 1 voto con los

puntos resolutivos.- Tesis: por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Silvia Lavín Hernández.- Secretario: Lic. Ricardo Juárez Martínez.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

VI-TASR-XLII-9

RENTA. BASE PARA EL ACREDITAMIENTO EN TRATÁNDOSE DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS O UTILIDADES.- El artículo 11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que cuando los contribuyentes distribuyan dividendos o utilidades y como consecuencia de ello paguen el impuesto podrán acreditarlo: a) contra el impuesto sobre la renta del ejercicio que resulte a cargo de la persona moral en el ejercicio en el que se pague el impuesto; b) el monto del impuesto que no se pueda acreditar conforme a lo anterior, podrá acreditarse hasta en los dos ejercicios inmediatos siguientes contra el impuesto del ejercicio y contra los pagos provisionales de los mismos, y c) cuando el contribuyente no acredite dicho impuesto pudiendo haberlo hecho conforme al mismo, perderá el derecho a hacerlo en los ejercicios posteriores hasta por la cantidad en la que pudo haberlo efectuado. En este sentido, si la actora durante el ejercicio de distribución de dividendos o utilidades no tenía impuesto sobre la renta a cargo contra el cual realizar el acreditamiento citado, podía hacerlo hasta en los dos ejercicios inmediatos siguientes contra el impuesto del ejercicio y contra los pagos provisionales de los mismos; por tanto, resulta ilegal que la autoridad determinara que aquella perdió el derecho al acreditamiento pudiendo haberlo hecho por considerar que sí tuvo impuesto a su cargo, pues éste es aquel que efectivamente tiene que enterar el particular; esto es, el que resulta después de disminuirle el impuesto del ejercicio, los pagos provisionales y demás conceptos que permite deducir la Ley, pues dicha cantidad corresponde al pagado sobre su resultado fiscal, y del cual se conoce su auténtica capacidad contributiva, tal y como lo establece el artículo 10 de la Ley en cita, situación en que no se encontró el particular en el presente caso.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 9224/09-17-12-6.- Resuelto por la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 4 de junio de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Javier Ramírez Jacintos.- Secretario: Lic. Jaime Santiago García.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

VI-TASR-XLII-10

HEREDERO Y/O ALBACEA DEL PENSIONADO.- CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA SOLICITAR DERECHOS SOBRE LA PENSIÓN DE AQUÉL.- Para que el interés jurídico del gobernado sufra menoscabo, basta con que algún acto de autoridad le cause un agravio personal y directo, entendiendo por ello no sólo el impacto que le ocasiona a su esfera de derechos, sino que la afectación sea actual o inminente, concreta y objetiva.- En ese orden de pensamiento, carece de interés jurídico alguno el sujeto que ocurre a juicio contencioso administrativo, alegando ser el heredero y/o albacea de persona diversa que tuvo el carácter de pensionado, con la intención de reclamar algún derecho derivado de la pensión reconocida a nombre del *de cujus*, ya que cualquier controversia que pudiera pensarse surja con relación a dicho derecho, sólo afecta al que fue el beneficiario en vida, y sólo éste podría ocurrir a juicio contencioso administrativo en el caso de que aún siguiera con vida. Ello atiende al hecho de que el derecho a la pensión, no resulta heredable, aunque sí transferible pero sólo en los casos a los que aluden los numerales 131 a 138 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 7595/10-17-12-6.- Resuelto por la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 5 de agosto de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Javier Ramírez Jacintos.- Secretaria.- Lic. E. I. Penélope Gómez Rivas.

LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

VI-TASR-XLII-11

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DEL AHORRO PARA EL RETIRO. ESTÁ FACULTADO GENÉRICAMENTE PARA EMITIR TODO TIPO DE DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL, CON EXCEPCIÓN DE LAS QUE EXPRESAMENTE SE ATRIBUYEN A LA JUNTA DE GOBIERNO DE DICHA COMISIÓN.- De una interpretación armónica, integral y teleológica, de los artículos 5º, fracción I, 8º, fracciones IV, V y VI, y 12 fracción I de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, se advierte que dichos numerales le otorgan plena competencia genérica al Presidente de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro para emitir disposiciones de carácter general, pues el artículo 12, fracción I lo faculta para tener a su cargo la representación legal y el ejercicio de las facultades de la Comisión, lo cual debe entenderse en concordancia con la fracción I del artículo 5º de la misma Ley, la cual otorga la facultad a la Comisión como organismo para emitir disposiciones de carácter general; de lo cual se desprende que el Presidente de la Comisión, efectivamente cuenta con las facultades para emitir disposiciones de carácter general, con excepción únicamente de las facultades a salvo atribuidas por el artículo 8º, a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, tal y como se desprende de la propia fracción en comento. Por lo que, las Circulares que emita el Presidente, como la Circular CONSAR 19-8, en las que se regule la transmisión de información entre los participantes de los sistemas de ahorro para el retiro y las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, serán plenamente válidas en cuanto a la competencia del Presidente de la Comisión, responsable de su emisión.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1913/10-17-12-1.- Resuelto por la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 16 de agosto de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Juan Manuel Terán y Contreras.- Secretario: Lic. Christian Humberto Vicente Vásquez.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VI-TASR-XLII-12

COMPETE A LA AUTORIDAD FISCAL VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LOS COMPROBANTES EXPEDIDOS POR TERCEROS Y EXHIBIDOS PARA EL ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. NO PUEDE IMPONERSE ESA CARGA AL CONTRIBUYENTE, POR LO QUE ES ILEGAL SU RECHAZO EN AUSENCIA DEL CORRESPONDIENTE EJERCICIO DE TALES FACULTADES DE VERIFICACIÓN.- La ejecutoria que resolvió la Contradicción de Tesis 164/2005-SS., entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, emitida por la Segunda Sala del más Alto Tribunal de la República interpreta de manera congruente los artículo 22, 27, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, así como el 11 del su Reglamento; al hacerlo determina que conforme a dichos preceptos la autoridad fiscal está facultada para llevar a cabo la verificación de que los documentos con los que se ejerce el derecho al acreditamiento del impuesto al valor agregado para solicitar en su caso la devolución de saldo a favor son auténticos y no apócrifos. Pero ello no implica que la exigencia de esa verificación pueda imponerse al contribuyente que ejerce tal derecho, para negárselo si no acredita la autenticidad de la referida documentación, puesto que sería absurdo atribuirle semejante carga. Es principio jurídico y, aún administrativo, que las funciones se asignen a a quien se encuentra en las mejores condiciones para llevarlas a cabo. La observancia de esa racionalidad legal y administrativa es particularmente importante en las cuestiones fiscales y tributarias, conforme a los principios clásicos de la comodidad y economía en la imposición de tributos. Lo cual está definitivamente considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria y tesis jurisprudencial aludidos. En tales condiciones si la autoridad demandada, deja de atender con escrúpulo las disposiciones que rigen su actuación en el estado de Derecho no puede desplazar al contribuyente una función que le corresponde por Ley y por lógica administrativa, puesto que es la que cuenta con las facultades de verificación necesarias. Por ello es ilegal y específicamente contrario a

las jurisprudencias 2a./J. 161/2005 y 2a./J. 160/2005, que se rechace la documentación que exhibe el contribuyente para acreditar el impuesto al valor agregado sin que para ello la propia autoridad acredite que conforme a la verificación llevada a cabo por la misma, en términos de Ley, se haya demostrado que se trata de documentación apócrifa.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4111/10-17-12-1.- Resuelto por la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 26 de agosto de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Juan Manuel Terán y Contreras.- Secretario: Lic. Christian Humberto Vicente Vásquez.

SEGUNDA SALA REGIONAL DEL NOROESTE I

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XLIII-1

GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL MEDIANTE EL EMBARGO EN LA VÍA ADMINISTRATIVA. ES ILEGAL SU RECHAZO POR EL SÓLO MOTIVO DE QUE EL INMUEBLE REPORTE GRAVÁMENES.- El artículo 66, fracción II, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 7 de diciembre de 2007 (cuyo contenido sustancial reproduce el artículo 97 del nuevo Reglamento del Código Fiscal), establece que cuando se solicite garantizar el interés fiscal mediante el embargo en la vía administrativa previsto en la fracción V del artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, el contribuyente señalará los bienes de su propiedad sobre los que deba trabarse el embargo, debiendo ser suficientes para garantizar el interés fiscal y cumplir los requisitos y porcentajes que establece el artículo 62 del propio Reglamento (artículo 93 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente). Por lo tanto, es ilegal que la autoridad rechace la garantía de interés fiscal ofrecida mediante el embargo en la vía administrativa, en que el inmueble reporta gravámenes; en razón de que el artículo 62, fracción II, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación (y su correlativo artículo 93, fracción II, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente), permite que el inmueble otorgado en garantía del interés fiscal reporte gravámenes, siempre que la suma del monto total de éstos y el interés fiscal a garantizar no exceda del 75% del valor.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1722/09-01-02-3.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 14 de abril de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. Luis Antonio Sandoval Romero.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XLIII-2

LA MULTA ES ILEGAL. CONTEMPLADA EN EL PRECEPTO 95 BIS, DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO. ES ILEGAL AL NO ESTABLECER UN MÍNIMO.- Resulta ser ilegal que la autoridad demandada a su libre arbitrio fije los días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, para la aplicación de la multa contemplada en el precepto legal 95 Bis, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, al no establecer dicho precepto legal un monto mínimo y no señalar las reglas que para su imposición debe considerar la autoridad, que deben consistir en la facultad de examinar la capacidad económica, la reincidencia y la conducta de levedad del hecho infractor, lo cual resulta suficiente para decretar la nulidad del oficio sancionador para efectos que se emita otro en el que se cumpla con los requisitos previstos en el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 272/09-01-02-2.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 16 de abril de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Yolanda García Medina.- Secretaria: Lic. Georgina Mireya Millán Salazar.

LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

VI-TASR-XLIII-3

COMPETENCIA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. DEBE FUNDARSE EN EL ARTÍCULO 8, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, ADEMÁS DE LOS ARTÍCULOS DEL REGLA-

MENTO INTERIOR QUE CORRESPONDAN.- La garantía de fundamentación contenida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir actos de molestia. Por lo tanto, las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, a fin de tener por satisfecha la garantía de la debida fundamentación que establece el referido precepto constitucional, la cual se encuentra trasladada al ámbito fiscal en el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, y en atención al principio de jerarquía normativa, en el mandamiento escrito que contenga el acto de molestia, además de los artículos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, que correspondan, deben citar el artículo 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, el cual los faculta para ejercer la competencia de dicho órgano desconcentrado y además remite a que en un ordenamiento reglamentario se establezcan las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria y se distribuyan entre ellas las atribuciones que la misma Ley otorga al propio órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 334/09-01-02-3.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 3 de mayo de 2010, por mayoría de votos.- Magistrada Instructora: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. Luis Antonio Sandoval Romero.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XLIII-4

NO IMPONE OBLIGACIONES LA REGLA 1.2.12.2 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL AÑO 2008.- La regla 1.2.12.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2008, no transgrede el contenido del artículo 35 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que si bien es cierto, genera la obligación de presentar escrito libre ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente,

acompañando copia del documento por el que se ejerció la opción de pago en parcialidades, también lo es que, dichos requisitos son necesarios para hacer efectivo un beneficio, como lo es el pago en parcialidades, luego entonces, desde un punto de vista general, la mencionada regla no está imponiendo obligaciones a los particulares, sino que está dando el derecho y la oportunidad de pagar en parcialidades una obligación fiscal.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2994/09-01-02-2.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 3 de mayo de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Yolanda García Medina.- Secretaria: Lic. Georgina Mireya Millán Salazar.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XLIII-5

COMPETENCIA EN LA ORDEN DE VISITA. PARA FUNDARLA DEBIDAMENTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEBE CITAR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- El primer párrafo del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, establece la finalidad de los actos de comprobación y por ende, el límite de las facultades fiscalizadoras, mientras que en las fracciones de la I a VIII, se establece el tipo de atribución que puede ser ejercida para verificar a los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados, corroborando si éstos han cumplido con las diversas disposiciones fiscales. En tal virtud para considerar que la autoridad administrativa funda sus atribuciones de manera correcta, al momento de iniciar sus facultades de comprobación, deberá señalar el párrafo primero y la fracción que sea aplicable al caso, ya que en el primer párrafo es donde se prevén los límites a la facultad fiscalizadora y el alcance de las mismas, incluido el tipo de atribución ejercida, la cual tiene un sólo objetivo: brindar certeza y seguridad jurídica al particular, ya que al desconocer la norma legal que la faculta a emitir dicho acto,

afecta la esfera jurídica del contribuyente y contraviene lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reproducida en la fracción IV, del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, que obliga a las autoridades a fundar su competencia al emitir el acto de molestia, como requisito esencial que brinda eficacia o validez del acto.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3072/09-01-02-9.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 11 de mayo de 2010, por mayoría de votos.- Magistrada Instructora: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. Gerardo Elizondo Polanco.

SALA REGIONAL DEL NOROESTE II

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-VII-49

NOTIFICACIONES POR CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO. DEBEN CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES SEÑALADAS EN LA LEY DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO Y SU REGLAMENTO.- Si bien es cierto, que de conformidad con el artículo 134, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, las notificaciones de los actos administrativos se harán, entre otras, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, cuando se trate de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos o actos administrativos que puedan ser recurridos; también no deja de ser verdad que, ante la laguna del citado Código Fiscal de la Federación, respecto a los lineamientos a seguir cuando se trata de una notificación con acuse de recibo, debe seguirse el procedimiento establecido en la Ley del Servicio Postal Mexicano, que en su artículo 42 dispone que el servicio de acuse de recibo de envíos o correspondencia registrados, consiste en recabar en un documento especial la firma de recepción del destinatario o de su representante legal y entregar ese documento al remitente como constancia, en caso de que por causas ajenas al organismo no pueda recabarse la firma del documento se procederá conforme a las disposiciones reglamentarias. En tanto que el diverso artículo 59, fracción I, de la citada ley, precisa que los remitentes de correspondencia y envíos tienen como derechos: I. Que la correspondencia y envíos se entreguen a sus destinatarios. Asimismo, el diverso numeral 61, fracción I, de dicha ley, indica que los destinatarios de correspondencia y envíos tienen como derechos: I. Recibir correspondencia y envíos que le sean destinados. Además de que el artículo 31 del Reglamento para la Operación del Organismo Servicio Postal Mexicano, establece que el servicio de acuse de recibo de envíos o correspondencia registrada, deberá solicitarse en el momento del depósito y consiste en recabar en un documento especial

la firma de recepción del destinatario o de su representante legal y entregar ese documento al remitente como constancia. Y el diverso numeral 33 de dicho reglamento precisa que en los casos en que el destinatario se niegue a firmar el documento de constancia o no se encuentre en el domicilio en un plazo de diez días contados a partir del aviso escrito, o no acuda a la oficina correspondiente a recoger la pieza postal, ésta será devuelta al remitente a su costa y sin responsabilidad para el organismo. De ahí que para que las notificaciones que en términos de la legislación tributaria puedan hacerse por correo certificado con acuse de recibo tengan eficacia jurídica, es necesario que éstas se ajusten a lo establecido en los artículos 42, 59, fracción I y 61, fracción I, de la Ley del Servicio Postal Mexicano, es decir, que la correspondencia registrada sea entregada únicamente al destinatario o a su representante legal y recibida por cualquiera de esas dos personas sea recabada en un documento especial la firma de recepción, que se entregará a su vez al remitente, como constancia, que sólo de esa manera puede conseguirse la finalidad de la notificación por correo certificado, que garantiza la mejor manera posible que la pieza postal sea del conocimiento del destinatario, tomando en consideración el específico tratamiento que esta forma de comunicación implica, es decir, que la correspondencia registrada, a diferencia del correo ordinario, habrá de ser entregada precisamente a quien sea dirigida y no a otra persona ajena. En consecuencia, para que las notificaciones practicadas, por correo certificado con acuse de recibo, tengan eficacia jurídica, es necesario que se ajuste a lo establecido en los artículos 42, 59, fracción I, y, 61, fracción I, de la Ley del Servicio Postal Mexicano, esto es, que la correspondencia registrada sea entregada únicamente al destinatario o su representante legal y que una vez recibida por cualquiera de esas dos personas se recabe la firma de recepción.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 464/09-02-01-2.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 3 de mayo de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Rosa Heriberta Círigo Barrón.- Secretario: Lic. Manuel Barrientos Martínez.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-VII-50

FIANZAS PENALES. EL PLAZO DE CADUCIDAD QUE ESTABLECE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ES SÓLO APLICABLE EN CUANTO EL TÉRMINO QUE PREVÉ PARA COMPUTAR LA CADUCIDAD, QUE ES DE 180 DÍAS, PERO DEBERÁ SEGUIRSE EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 130 DE LA LEY RELATIVA.- El artículo 120 de la Ley de Instituciones de Fianzas, es aplicable tratándose de fianzas penales, únicamente en lo que refiere al término que tiene la autoridad para requerir de pago a la afianzadora a fin de que no opere la caducidad, pero deberá seguirse el procedimiento que establece el artículo 130 de la Ley de Instituciones de Fianzas, para requerir de pago de conformidad con la fracción III, del artículo en mención, esto es la fianza será exigible desde el día hábil siguiente al del vencimiento del plazo fijado a la afianzadora para la presentación del fiado, sin que lo haya hecho, siendo evidente que no existe premura para que la autoridad judicial se pronuncie de inmediato sobre el incumplimiento de la afianzadora de presentar al fiado y de comunicarlo lo más pronto posible a la autoridad fiscal ejecutora, toda vez que a fin de hacer efectiva la fianza correspondiente, aquélla no está sujeta al plazo a que se refiere el artículo 120, segundo párrafo, de la citada legislación federal, que establece: “Si la afianzadora se hubiera obligado por tiempo indeterminado, quedará liberada de sus obligaciones por caducidad, cuando el beneficiario no presente la reclamación de la fianza dentro de los ciento ochenta días naturales siguiente a partir de la fecha en que la obligación garantizada se vuelva exigible, por incumplimiento del fiado…” . Pues tal plazo debe computarse de conformidad con el artículo 130, fracción III, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas que establece que la fianza será exigible desde el día hábil siguiente al del vencimiento del plazo fijado a la afianzadora para la presentación del fiado, sin que lo haya hecho.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 66/10-02-01-5.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 25 de mayo de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Rosa Heriberta Círigo Barrón.- Secretaria: Lic. Guadalupe Quiñónez Armenta.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-VII-51

DEMANDA DE NULIDAD.- EFECTOS DE SU ENVÍO SI NO SE HACE DEL LUGAR DE RESIDENCIA DEL DEMANDANTE.- Conforme al antepenúltimo párrafo del artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se tiene que la demanda de nulidad, en la vía tradicional, debe presentarse personalmente en la Oficialía de Partes de la Sala Regional competente, permitiendo el dispositivo legal hacerlo a través del correo certificado con acuse de recibo como supuesto de excepción a la regla general con la única condicionante de que se haga en el lugar de residencia del demandante. Por ello, para la presentación de la demanda de nulidad, el demandante debe tomar en cuenta en el envío su lugar de residencia, caso en el cual válidamente se deberá tener como fecha de presentación aquélla en que se reciba en la oficina postal correspondiente, de donde se desprende que de hacerlo de un lugar diferente y ello se observe de las constancias de autos, se tendrá como presentada la demanda hasta la fecha en que la reciba materialmente la Sala Regional a la que se envía.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 341/09-02-01-2.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 1 de junio de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Rosa Heriberta Círigo Barrón.- Secretario: Lic. Manuel Barrientos Martínez.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-VII-52

ACREDITAMIENTO DE LOS PAGOS PROVISIONALES O DEFINITIVOS HECHOS POR EL CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. ES SUFICIENTE LA COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE DEL ACUSE DE RECIBO DEL BANCO OBTENIDO DE LA RED DE INTERNET, AL CUMPLIRSE CON LAS OBLIGACIONES FISCALES A TRAVÉS DE ESA VÍA.- De lo dispuesto por el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación, se concluye que al tener el contribuyente la posibilidad de rendir declaraciones vía Internet, la copia fotostática simple del recibo bancario de pago de contribuciones federales, obtenida mediante esa vía, es suficiente para acreditar el interés jurídico en el juicio contencioso administrativo, toda vez que las constancias de referencia son los únicos documentos que el contribuyente puede obtener al realizar su pago de esa forma, siendo el contenido de la misma lo que interesa, pues al utilizarse los medios electrónicos para el cumplimiento de obligaciones fiscales, la información relativa sólo puede enviarse a través de documentos digitales, entendiéndose por éstos, aquellos mensajes de datos que contienen información o escritura generada, enviada, recibida o archivada por medios de dicha índole, ópticos o de cualquier otra tecnología y, por tanto, el único medio previsto para autentificar y acreditar que dichos documentos fueron recibidos por la autoridad debida es el acuse de recibo enviado por la misma vía con el sello digital correspondiente, a través del cual se identifica a la dependencia que recibió el documento, el cual se materializa a través de la cadena de caracteres (conjunto de letras, números y símbolos) asignada por el Banco o el Servicio de Administración Tributaria, al presentarse las declaraciones o pagos, según se trate, a través de un documento digital, lo cual tiene valor probatorio pleno. Consecuentemente, se colige que al existir regulación específica sobre la manera de cumplir con las obligaciones fiscales, no es válido aplicar las normas que rigen en materias de naturaleza diversa, en las cuales a las copias fotostáticas simples se les otorga el carácter de mero indicio, pues en la especie lo trascendente es demostrar que se presentó la declaración y se efectuó el pago por concepto del impuesto, lo cual se

logra con la exhibición de las multicitadas documentales en la que aparecen los datos suficientes para identificar si se aplicaron o no los dispositivos legales reclamados.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 441/07-02-01-2.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 21 de junio de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Rosa Heriberta Círigo Barrón.- Secretario: Lic. Manuel Barrientos Martínez.

TERCERA SALA REGIONAL DEL NORTE-CENTRO II

LEY ADUANERA

VI-TASR-XXXVII-151

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA.- PARA SU INICIO Y SUBSTANCIACIÓN ES INDISPENSABLE QUE MEDIE ORDEN DE VERIFICACIÓN AL TRATARSE DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE.- Si bien es cierto que la autoridad aduanera notificó la orden de verificación de mercancía de procedencia extranjera en transporte, al poseedor de dicha mercancía y con éste se inició el procedimiento administrativo en materia aduanera, también lo es, que una vez que el poseedor acreditó ante la autoridad que la mercancía pertenece a una tercera persona; la autoridad estaba obligada a notificarle a dicho tercero la orden de verificación materia de la controversia de conformidad con los artículos 150, 151, fracciones II y III, y 153 de la Ley Aduanera, a fin de respetar el procedimiento en su integridad, cuya emisión, levantamiento y conocimiento negó lisa y llanamente la parte actora en su escrito inicial de demanda; y no únicamente -como lo hizo- notificarle el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera. En este contexto, la omisión de la autoridad en la substanciación del procedimiento administrativo en materia aduanera genera como consecuencia que quede nulo todo lo actuado con base en una orden de verificación que no fue conocida ni notificada a la actora, porque jurídicamente debe iniciarse el procedimiento administrativo en materia aduanera con la notificación de una orden de verificación, y no con la notificación del acta de inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera como lo fue realizado por la hoy demandada, y procede declarar la nulidad de la resolución combatida, que no es mas que consecuencia y fruto de actos viciados como lo es la falta de notificación de la orden de verificación a la actora, lo anterior acorde a lo dispuesto

por el artículo 51 fracciones II y IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2035/09-05-03-7.- Resuelto por la Tercera Sala Regional del Norte-Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 20 de septiembre de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: José Manuel Bravo Hernández- Secretaria: Lic. Norma Santacruz González.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-XXXVII-152

BOLETA DE INFRACCIÓN EMITIDA POR PERSONAL DE LA POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, MEDIANTE LA CUAL SE IMPONE SANCIÓN CONSISTENTE EN 100 DÍAS DE SALARIO MÍNIMO. SUPUESTO EN QUE RESULTA ILEGAL POR INDEBIDA COMPETENCIA TERRITORIAL DE SU EMISOR.- Del texto de los artículos 16, primer párrafo, Constitucional y 3º, fracciones IV y V, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se desprende, que un requisito indispensable que todo acto administrativo de autoridad debe observar para que tenga eficacia jurídica es el relativo a que sea emitido por autoridad competente material y territorialmente. Ahora bien, del análisis y valoración de la Boleta de Infracción impugnada, se advierte que la autoridad emisora de la sanción controvertida en modo alguno cumple cabalmente con fundar su competencia territorial, pues si bien cita, entre otros, el artículo 29 del Reglamento de la Policía Federal Preventiva, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 2000, en el que se apoya para imponer la sanción controvertida, el cual dispone: "*Las comisarías de sector son órganos de mando y dirección, dependientes de las comandancias regionales, sus titulares serán responsables del exacto cumplimiento de la Ley, del presente reglamento y demás disposiciones aplicables y ejercerán sus atribuciones en las áreas que la comandancia regional determine*".; luego entonces, si la autoridad que

dicta la sanción es omisa en expresar en el acto de molestia impugnado el artículo, acuerdo, o decreto donde se contenga o se determine de manera clara y precisa la circunscripción territorial de la Comisaría de Sector a la que se encuentra adscrito el Sub-Oficial que impone la sanción impugnada, es que ese acto impugnado resulta a todas luces ilegal, pues en modo alguno se colma el requisito de fundamentación de la competencia territorial, como lo exige el artículo 16 Constitucional y 38 fracción IV del Código Fiscal de la Federación, máxime cuando el propio artículo 29 del Reglamento de Mérito, dispone que: "*Las comisarías de sector ... ejercerán sus atribuciones en las áreas que la comandancia regional determine*", y es el caso, que en modo alguno se acredita en la resolución impugnada cuál es el área que determinó la Comandancia Regional en donde la comisaría de sector, que es en donde se encuentra adscrito el sub-oficial que levanta e impone la sanción impugnada, va a ejercer sus atribuciones, como lo dispone el citado artículo 29 transcrito, por lo que procede decretar la nulidad lisa y llana de la sanción combatida.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2811/10-05-03-5.- Resuelto por la Tercera Sala Regional del Norte-Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 30 de septiembre de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Rubén Rocha Rivera.- Secretario: Lic. Mario Rodríguez Junco.

PRIMERA SALA REGIONAL DEL NORESTE

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-IX-32

DECRETOS DE CARÁCTER GENERAL. PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN SU CONTRA, ES NECESARIO ATENDER A LA NATURALEZA DEL DECRETO CONTROVERTIDO, PUES NO SON IMPUGNABLES ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MAYOR JERARQUÍA QUE LOS REGLAMENTOS.- El artículo 2, párrafo segundo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dispone que procede el juicio contencioso administrativo federal en contra de los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos. De una correcta interpretación a la citada disposición normativa se desprende una distinción por parte del legislador en el sentido de que los actos de carácter general impugnables deben ser de menor jerarquía que los reglamentos. Lo anterior, puesto que aunque bajo una interpretación gramatical y de estricta lógica, podrían considerarse impugnables todos los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, siempre que sean distintos a los reglamentos, sin embargo, debe atenderse a la naturaleza de lo que se controvierta, pues existen casos como los decretos que modifican la Constitución o las leyes de la Unión, que no pueden controvertirse ante este Tribunal a pesar de consistir en decretos de observancia general. En esa tesitura, el *Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 18 de marzo de 2009, por el que se modifica el artículo 1 del diverso por el que se establece la tasa aplicable durante 2003, del impuesto general de importación, para las mercancías originarias de América del Norte, por lo que respecta a las mercancías originarias de los Estados Unidos de América, publicado el 31 de diciembre de 2002*, emitido por el Presidente de la República en ejercicio de la facultad

legislativa delegada en el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 4, fracción I, de la Ley de Comercio Exterior, constituye un acto cuya jerarquía es la misma que la de las leyes emanadas del Congreso de la Unión, que no es impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a pesar de ser un decreto de observancia general, puesto que su naturaleza es la de un acto tanto material, como formalmente legislativo, en virtud de que se está ante una excepción al principio de división de poderes, consistente en que el presidente de la República podrá emitir actos formalmente legislativos cuando el Congreso de la Unión lo autorice para expedir disposiciones de carácter general en materia arancelaria o no arancelaria. En esa tesitura, el juicio no procede en su contra, ya que el conocimiento de tales actos se encuentra reservado a los Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo.

Recurso de Reclamación Núm. 3752/09-06-01-1.- Resuelto por la Primera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 11 de marzo de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Ernesto Manuel del Bosque Berlanga.- Secretario: Lic. Ernesto Garza Osti.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

VI-TASR-IX-33

RECTIFICACIÓN DE LA PRIMA DEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO DERIVADA DE UN LAUDO LABORAL. CASO EN QUE ES IMPROCEDENTE LA MULTA.- Conforme al artículo 50 de la Ley del Seguro Social, en relación con el 34 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, es obligación de la parte patronal llevar un registro pormenorizado de su siniestralidad y recabar la documentación relativa a accidentes o enfermedades de trabajo hasta su terminación. Por otro lado, el artículo 156 del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, dispone que un riesgo de trabajo se considera terminado

cuando no se expidan certificados de incapacidad temporal para el trabajo, subsecuentes o de recaída, en el periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre del año que se trate, o bien, que dictamine incapacidad permanente o defunción por riesgo de trabajo en un laudo o convenio. De una interpretación armónica a los citados preceptos, se puede considerar que si bien es cierto que los patrones están obligados a recabar la documentación correspondiente a cada caso de siniestralidad, sin embargo, ello será mientras se termine cada caso. Terminación que, por regla general, se da cuando recibe el alta el trabajador y no se le expiden a éste certificados de incapacidad temporal subsecuentes. En tal virtud, se estima que, salvo que se comunique lo contrario, los patrones pueden considerar terminado un caso de riesgo de trabajo si en el periodo que marca el reglamento aplicable, no se extienden certificados de incapacidad al trabajador afectado, con lo que concluye la obligación del patrón de llevar el registro del accidente concreto. En tal medida, si posteriormente a la terminación, se emite un laudo arbitral en el que se modificó el dictamen de incapacidad permanente del 70% al 100%, sin que exista constancia de que se hubiera hecho del conocimiento del patrón, en tal supuesto no puede la autoridad imputar a éste como infracción el no haber incluido en el cálculo de la revisión anual de su siniestralidad la modificación de la calificación, derivada del laudo laboral que le era desconocido. Lo anterior, sin perjuicio de que la rectificación sea procedente en derecho, ni de que la obligación de fondo relativa al entero de cuotas con la prima correcta, subsista.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5635/08-06-01-1.- Resuelto por la Primera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 9 de junio de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Ernesto Manuel del Bosque Berlanga.- Secretario: Lic. Ernesto Garza Osti.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-IX-34

PLAZO PARA INTERPONER JUICIO DE NULIDAD EN CONTRA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS REGULADOS POR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, COMIENZA A CORRER A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUÉL EN QUE SE NOTIFICARON.- Tratándose de actos administrativos, como lo es la delimitación de zona federal realizada por la Comisión Nacional del Agua, el cómputo del plazo a que se refiere el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para la interposición del juicio de nulidad en su contra, debe ceñirse a lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que establece que las notificaciones personales surtirán efectos el día en que se hubiesen practicado; en consecuencia, es a partir del día hábil siguiente a aquél en que se llevó a cabo la notificación del acto administrativo, que comienza a transcurrir el plazo de cuarenta y cinco días hábiles, previstos en el artículo 13, fracción I, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4571/09-06-01-3.- Resuelto por la Primera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 3 de agosto de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Adriana Cabezut Uribe.- Secretaria: Lic. Mayela Guadalupe Villarreal de la Garza.

LEY DE AMPARO

VI-TASR-IX-35

FIANZAS.- LAS OTORGADAS EN LA SUSPENSIÓN EN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE RIGEN POR LA LEY DE AMPARO.- Cuando se

trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías que se otorguen con motivo de la suspensión solicitada en un amparo indirecto, en términos del artículo 129 de la Ley de Amparo, se tramitará ante la autoridad que conozca de ella un incidente, que deberá promoverse dentro de los seis meses siguientes al día en que se notifique a las partes, la ejecución del amparo, en la inteligencia de que de no presentarse en ese término, se procederá a la devolución o cancelación de la garantía o contragarantía. Por tanto, para hacer efectivas esas fianzas no resulta aplicable el procedimiento establecido en los artículos 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y 143, tercer párrafo, inciso a) del Código Fiscal de la Federación, en atención a que, el procedimiento que regulan esos numerales es aplicable en los juicios que enderecen los particulares con motivo de las fianzas otorgadas para responder por las obligaciones civiles contraídas por aquéllos, o para la ejecución de fallos judiciales que requieren del otorgamiento de una garantía que responda de su ejecución y para el caso de que sea adversa la sentencia definitiva que dicten los tribunales *ad quem*.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2521/09-06-01-6.- Resuelto por la Primera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 6 de octubre de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Adriana Cabezut Uribe.- Secretaria: Lic. Norma Tienda Díaz.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-IX-36

VERIFICACIÓN OCULAR DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.- NO ES UN ACTO DE MOLESTIA.- De acuerdo con los artículos 16 de nuestra Carta Magna y 38 del Código Fiscal de la Federación, el acto de molestia a un particular debe estar contenido en mandamiento escrito de autoridad competente a efecto de fundar y motivar la causa legal del procedimiento. Entendido el acto de molestia, como aquel acto administrativo que con su emisión afecta los

bienes jurídicos de un particular, llámese en su persona, domicilio, propiedad o posesiones. Siguiendo ese orden de ideas, el documento denominado "Verificación Ocular del Registro Federal de Contribuyentes" no es un acto de molestia propiamente dicho, en tanto que se traduce sólo en un medio probatorio de la existencia del domicilio fiscal del contribuyente, pero no implica comunicación ni notificación alguna de un acto administrativo lesivo a los intereses del particular y menos aun entraña la intromisión del personal encargado de practicar la verificación al domicilio del particular.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2344/08-06-01-9.- Resuelto por la Primera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 11 de octubre de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Adriana Cabezut Uribe.- Secretaria: Lic. Mabel Vázquez Granados.

PRIMERA SALA REGIONAL HIDALGO-MÉXICO

LEY ADUANERA

VI-TASR-XII-I-26

EMBARGO PRECAUTORIO DE CHEQUE. ORIGINA LA PRÁCTICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY ADUANERA, Y NO EN EL DIVERSO NUMERAL 150 DE LA MISMA LEY, AL TRATARSE DE UN EMBARGO QUE SE EXCEPTÚA DEL ARTÍCULO 151 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL.- Los artículos 150 y 152 de la Ley Aduanera regulan procedimientos en materia aduanera distintos, pues el primer numeral establece como presupuesto para que las autoridades aduaneras levanten el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, que con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte o por el ejercicio de las facultades de comprobación, se embarguen precautoriamente mercancías en los términos previstos por la Ley Aduanera. Mientras que el procedimiento regulado por el artículo citado en segundo lugar, se actualiza en los casos en que con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte, de la revisión de los documentos presentados durante el despacho o del ejercicio de las facultades de comprobación, en que proceda la determinación de contribuciones omitidas, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, no sea aplicable el artículo 151 de la Ley Aduanera, supuesto bajo el cual las autoridades aduaneras procederán a su determinación, sin necesidad de sustanciar el procedimiento establecido en el artículo 150 de la misma Ley. De lo anterior se sigue que, la aplicación del artículo 151 de la Ley de la materia, el cual consagra los casos en los que las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten, delimita el procedimiento administrativo al amparo del cual la autoridad

aduanera procederá a la determinación de contribuciones. De tal suerte que, si con motivo del reconocimiento aduanero la autoridad traba embargo precautorio de cantidades amparadas en cheques nacionales o extranjeros, a efecto de concretar la aplicación de uno u otro procedimiento administrativo en materia aduanera, se debe atender al precepto que regula ese tipo de embargos. Entonces, si en las VII fracciones que integran el artículo 151 de la Ley Aduanera vigente en 2009, no se contempla ese tipo de mercancía, es evidente que el embargo precautorio que se trabe sobre las mismas no se encuentra amparado por este precepto legal. De ahí, que si la actuación de la autoridad aduanera al embargar precautoriamente una pieza de cheque que ampara cierta cantidad, se despliega al amparo de la facultad que le confiere la fracción XXX del diverso artículo 144 de la Ley Aduanera, y no conforme al referido cardinal 151 de la misma Ley, resulta ajustado a derecho que a fin de determinar contribuciones omitidas y en su caso la imposición de sanciones, la autoridad constriña su actuación al procedimiento previsto en el artículo 152 de la Ley de la materia. Por lo tanto, si en el juicio contencioso administrativo se demanda la nulidad de una resolución en la que la autoridad embargó precautoriamente un cheque y con motivo de ello procedió a determinar un crédito fiscal al amparo del procedimiento regulado en el artículo 152 de la Ley Aduanera, porque ese embargo precautorio lo practicó en términos del numeral 144 fracción XXX del mismo ordenamiento legal, resulta apegado a derecho que la Sala Regional que conozca del asunto determine correcto el procedimiento seguido por la autoridad.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 9647/09-11-01-9.- Resuelto por la Primera Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 6 de septiembre de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: José Antonio Rodríguez Martínez.- Secretaria: Lic. Liliana Ponce Monzón.

SEGUNDA SALA REGIONAL HIDALGO-MÉXICO

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XII-II-62

FUNDAMENTACIÓN. BASTA CON CITAR EL ARTÍCULO 42 Y LA FRACCIÓN RESPECTIVA, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN EL ACTO CON EL QUE LA AUTORIDAD FISCALIZADORA INICIA EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, SIN QUE SEA NECESARIA LA CITA DE SU PRIMER PÁRRAFO, POR SER INSOSLAYABLE SU LECTURA PARA LA COMPRENSIÓN DE DICHO PRECEPTO LEGAL.- De acuerdo a la jurisprudencia I.4o.A. J/43, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo: XXIII, de mayo de dos mil seis, página 1531, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN.", el alcance de la fundamentación y motivación en el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad, no puede llegar al extremo de que en cada acto que emita la autoridad señale, una amplitud o abundancia superflua de razones y fundamentos en los que sustenta su acción, ya que resulta suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado; luego entonces, resulta inconcuso que no se transgrede lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de nuestra norma suprema y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, por la falta de precisión dentro de la orden de revisión del "primer párra-

fo", del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, ya que tal omisión no incide en la esfera jurídica de la actora, en tanto que al referirse al artículo 42 y a su fracción respectiva, conlleva inmediatamente al contenido de dicho precepto legal, del cual se advierten las facultades de comprobación que tiene expeditas la autoridad para verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Por lo que el hecho de que la autoridad fiscalizadora, dentro del acto por el cual da inicio al ejercicio de sus facultades de comprobación, únicamente cite el artículo 42, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, no significa que el acto de autoridad se encuentre indebidamente fundado, si tomamos en cuenta que la comprensión de cualquier precepto legal parte de la lectura de su párrafo inicial, pues éste además de ser la introducción de la o las hipótesis normativas del precepto, es también el marco de referencia de las mismas, por lo que resulta insoslayable atender a aquél para una adecuada interpretación de la norma, de ahí que sea intrascendente el que dentro del acto de molestia se haya o no citado el primer párrafo, del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, ya que de aceptar lo contrario se obligaría a las autoridades, al emitir sus actos de molestia, a señalar en todos los preceptos legales que les sirvieron de apoyo, el primer párrafo de éstos, lo que sin duda va más allá de lo prescrito en el artículo 16 constitucional.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 7540/09-11-02-8.- Resuelto por la Segunda Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 23 de septiembre de 2010, por mayoría de votos.- Magistrado Instructor: Rubén Ángeles Enríquez.- Secretario: Lic. José Enrique Gómez Villalva.

TERCERA SALA REGIONAL HIDALGO-MÉXICO

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

VI-TASR-XXXIII-11

RETIRO DE LOS MILITARES POR LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. EL ESTUDIO DE LA RESOLUCIÓN QUE LA DETERMINA NO ES PROCEDENTE PARA CONOCER LA LEGALIDAD DE LA COMPENSACIÓN OTORGADA POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS.- En términos del artículo 14, fracción V de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, las Salas de este Tribunal, que dicten sentencias en las que resuelvan sobre las resoluciones que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones, sólo tienen facultades para pronunciarse respecto de la cuantía de la prestación pecuniaria otorgada al militar, mas no respecto de la determinación de la Secretaría de la Defensa Nacional, Fuerza Aérea o Armada Nacional en la que decida el retiro de los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas. En ese contexto, aun cuando la accionante plantee conceptos de impugnación en la demanda encaminados a demostrar la ilegalidad de la resolución que determinó el retiro del militar, las Salas del Tribunal sólo podrán pronunciarse respecto de la concesión de la prestación social otorgada por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en relación con el monto pecuniario otorgado a dicho sujeto, mas no de la forma en que se ordenó el retiro. Pues de la legalidad de aquel acto no le corresponde conocer a este Tribunal, máxime que en términos de los artículos 188 y

193 de la Ley del Instituto señalado, los interesados cuentan con un plazo para promover su inconformidad y no interponerlo significa que se ha consentido el cómputo de sus servicios y el grado con el que es retirado. En ese tenor, lo procedente es que sólo se resuelva la litis sobre la determinación del Instituto.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2789/08-11-03-3.- Resuelto por la Tercera Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 21 de mayo de 2010.- Sentencia: por mayoría de 2 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Tesis: por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Héctor Francisco Fernández Cruz.- Secretario: Lic. Yoshio Levit Aguilar Marín.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XXXIII-12

NOTIFICACIÓN EN EL ÚLTIMO DOMICILIO FISCAL DEL DE CUJUS. RESULTA ILEGAL CUANDO EL ALBACEA DEMUESTRA EN EL JUICIO QUE PRESENTÓ AVISO DE DEFUNCIÓN, AUN Y CUANDO NO SE PRUEBEN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 14, FRACCIÓN IV Y 22, FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- En términos de los artículos 14, fracción IV y 22, fracción II del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, el albacea de la sucesión testamentaria debe dar aviso de la apertura de sucesión en el caso de que una persona obligada a presentar declaraciones periódicas fallezca, dentro del mes siguiente al día en que se acepte el cargo. En ese sentido, la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el precedente "DOMICILIO FISCAL DE LA SUCESIÓN AL FALLECIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE" consideró que si no se cumple con este requisito es válido que los actos de autoridad se dirijan al contribuyente fallecido y las notificaciones se realicen en el último domicilio que se tuviera señalado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes, conforme al artículo 136, segundo párrafo del citado Código Fiscal de la Federación. No obstante

lo anterior, en el propio numeral 22, segundo párrafo, in fine, existe un caso de excepción en el que se libera al albacea de dar ese aviso y tiene lugar cuando el de cujus hubiera estado obligado a presentar declaración periódica únicamente por servicios personales, en tal supuesto, basta con que se presente el aviso de cancelación del Registro Federal de Contribuyentes por defunción y el representante legal del de cujus se encuentre inscrito ante el registro señalado para que la autoridad hacendaria dirija los actos y notifique al albacea de la sucesión en su domicilio fiscal. Ahora, en caso de que el albacea manifieste que no presentó el aviso de apertura de la sucesión, porque se encontraba en el supuesto de excepción antes señalado y de las constancias de autos se desprenda que la autoridad fiscal le reconoció el carácter de albacea al haber emitido actos que dirigió a ese sujeto, aun y cuando sólo se haya presentado el aviso de cancelación del Registro Federal de Contribuyentes por defunción, resultan ilegales las actuaciones que la autoridad fiscal haya realizado en el último domicilio del de cujus, pues únicamente con la presentación del aviso señalado, tuvo conocimiento de quién es el encargado de representar los intereses del contribuyente fallecido y su domicilio fiscal, de lo contrario no habría dirigido actos administrativos al albacea.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 7606/08-11-03-3.- Resuelto por la Tercera Sala Regional-Hidalgo México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 22 de junio de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Héctor Francisco Fernández Cruz.- Secretario: Lic. Yoshio Levit Aguilar Marín.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-XXXIII-13

DETERMINACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES CONFORME AL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN POR OBRA O TIEMPO DETERMINADO. RESULTA ILEGAL SI LA AUTORI-

DAD SE APOYÓ EN LAS CONSULTAS NUMÉRICAS S.I.N.D.O. Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, PERO NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA.- En términos del artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que las resoluciones y actos administrativos se presumirán legales, sin embargo, cuando el demandante niegue lisa y llanamente los hechos en que se sustentan los mismos, la autoridad tiene el deber de justificar su existencia o realización. En consecuencia, si del análisis que se realiza a la resolución emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social se aprecia que la motivación del mismo se basó en los "datos con los que cuenta", en términos de lo dispuesto por el artículo 251, fracción XV de la Ley del Seguro Social, consistentes en "Licencias de Construcción y Consulta Numérica de Patrones S.I.N.D.O", y el actor negó lisa y llanamente conocerlos, la autoridad tenía la carga de probar la existencia de los mismos en el presente juicio, pues son los documentos que le sirvieron de base para determinar créditos fiscales conforme al artículo 18 del Reglamento de la Ley del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, al no traerlos a juicio, no sustenta la veracidad de la información en la que se apoyó para determinar los créditos fiscales a cargo de la demandante, por lo tanto se concluye que los actos de autoridad no cumplen con el requisito de debida fundamentación y motivación que establece el artículo 38 fracción IV del Código Fiscal de la Federación, resultando procedente declarar su nulidad lisa y llana en términos de los artículos 51, fracción IV y 52, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 972/10-11-03-3.- Resuelto por la Tercera Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 22 de junio de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Héctor Francisco Fernández Cruz.- Secretario: Lic. Yoshio Levit Aguilar Marín.

TERCERA SALA REGIONAL DE ORIENTE

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-XXXIX-35

ACTOS QUE EXIJAN EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. SON IMPUGNABLES EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CUANDO SE ALEGUE QUE ÉSTOS SE HAN EXTINGUIDO O QUE SU MONTO REAL ES MENOR AL EXIGIDO.- De la interpretación que se realiza al numeral 117, se desprende que en la fracción II, se regula la procedencia del recurso de revocación contra los actos de autoridades fiscales federales, los cuales subdivide en: a) los actos que exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido y b) los actos que se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución y se alegue que éste no se ha ajustado a la Ley. Por otra parte, el ordinal 127, prevé la temporalidad para la interposición del recurso administrativo cuando se interponga contra actos del procedimiento administrativo de ejecución alegando que no se ajustaron a la Ley, violaciones cometidas antes del remate, sólo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate, y dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria, acorde con la hipótesis normativa del inciso b), fracción II, del artículo 117. Tal y como se interpreta en la Jurisprudencia número 2a./J. 18/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "*PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, POR REGLA GENERAL, LAS VIOLACIONES COMETIDAS ANTES DEL REMATE SON IMPUGNABLES MEDIANTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO HASTA QUE SE PUBLIQUE LA CONVOCATORIA RESPECTIVA, ACORDE CON EL ARTÍCULO 127, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN,*

REFORMADO MEDIANTE DECRETO PÚBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE JUNIO DE 2006." En ese tenor, el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, no resulta aplicable a los actos que exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, supuesto contemplado en la hipótesis normativa del inciso a) de la fracción II del artículo 117 del citado Código, casos en que el plazo para interponer el recurso se computará a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o del día hábil siguiente al de la diligencia de requerimiento. Por tanto, al ser impugnables éstos actos del procedimiento administrativo de ejecución a través del recurso administrativo de revocación, en su contra procede el juicio contencioso administrativo de acuerdo a lo indicado en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues el alcance de la definitividad para el juicio se da cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa y conforme al artículo 120 del Código Fiscal de la Federación, la interposición del recurso de revocación es optativa.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3372/09-12-03-6.- Resuelto por la Tercera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 24 de febrero de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: José Tapia Tovar.- Secretaria: Lic. María del Carmen Marcela Martínez Pérez.

SEGUNDA SALA REGIONAL DEL GOLFO

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XL-37

COMPROBANTES FISCALES.- NO CORRESPONDE AL ADQUIRENTE DEL BIEN O SERVICIO LA CARGA DE AVERIGUAR SI QUIEN LO EXPIDIÓ SE ENCUENTRA LOCALIZABLE EN SU DOMICILIO FISCAL, SINO SÓLO LA DE ADVERTIR SI EL COMPROBANTE TIENE IMPRESO DICHO DOMICILIO.- En concordancia con la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 160/2005 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro "COMPROBANTES FISCALES. EL CONTRIBUYENTE A FAVOR DE QUIEN SE EXPIDEN SÓLO ESTÁ OBLIGADO A VERIFICAR CIERTOS DATOS DE LOS QUE CONTIENEN", donde medularmente se sostiene que el usuario del documento debe cerciorarse de que los datos previstos en el artículo 29-A fracción I del Código Fiscal de la Federación se contengan impresos en el comprobante relativo, ya que de ello deriva la procedencia de la deducción o el acreditamiento del tributo y que por ello dicho cercioramiento únicamente vincula al contribuyente, a favor de quien se expide el comprobante, a verificar que esos datos estén impresos en el documento y no la comprobación del cumplimiento de los deberes fiscales a cargo del emisor.- En esa virtud, debe considerarse que los artículos 29 y 29-A, fracción I, del Código Fiscal de la Federación no establecen a cargo de la persona que recibe el comprobante del bien o servicio que adquirió, la carga de que le sea necesario comprobar que quien expidió dicho comprobante se encuentre localizable en el domicilio fiscal manifestado al registro federal de contribuyentes, para que sólo bajo esa premisa tal comprobante sea válido, sino que el único requisito que en ese sentido se establece es el relativo a que el comprobante fiscal respectivo contenga impreso el domicilio fiscal de quien lo expidió.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1026/08-13-02-8.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de agosto de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Antonio Miranda Morales.- Secretario: Lic. Alejandro Zirancámaro Díaz Morales.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-XL-38

PRUEBA PERICIAL EN INGENIERÍA MECÁNICA.- ES LA IDÓNEA A EFECTO DE DETERMINAR EL NÚMERO DE SERIE QUE IDENTIFICA EN SU CONJUNTO A UNA RETROEXCAVADORA O ALGUNA OTRA MAQUINARIA SIMILAR Y NO LA PERICIAL EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA.- Si en el caso, el perito tercero claramente señaló que el número de serie que identifica a la Retroexcavadora se encuentra en el chasis, al costado izquierdo desde la perspectiva del operador o conductor del equipo, en una placa color metálico en material de aluminio con número JJG0304202, en tanto que la serie JJG0325061, identifica solamente a la cabina de la máquina, pero no identifica a la retroexcavadora como tal en su conjunto y, considerando que el anterior medio de prueba merece valor probatorio pleno en términos del artículo 46 fracción III de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que fue rendido por un profesional de la ingeniería mecánica y apoyado documentalmente en manuales del tipo de la retroexcavadora embargada, con investigación de campo en la compañía distribuidora de la máquina en controversia.- En esa virtud, al resultar la pericial en ingeniería mecánica el medio de convicción idóneo a efecto de demostrar cuál de las placas de la retroexcavadora es la que ostenta la serie de dicha maquinaria, debe estimarse que no asiste la razón a la enjuiciada cuando señala que el dictamen de clasificación arancelaria identificó de manera correcta la serie que identifica a la maquinaria y que en todo caso la parte actora debía aportar los pedimentos y facturas de las demás partes de la retroexcavadora para acreditar su dicho, ya que la

mercancía en controversia lo fue la citada maquinaria en su conjunto y no las partes que la integran.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1026/08-13-02-8.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de agosto de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Antonio Miranda Morales.- Secretario: Lic. Alejandro Zirancámaro Díaz Morales.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-XL-39

DEMANDA DE NULIDAD. SU ENVÍO POR CORREO CERTIFICADO DEBE REALIZARSE EN EL LUGAR DONDE RESIDA EL DEMANDANTE, ENTENDIÉNDOSE ÉSTE COMO SU DOMICILIO FISCAL.- De la interpretación armónica realizada entre los artículos 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se advierte que cuando el demandante tenga su domicilio fuera de la circunscripción territorial en que se encuentre la Sala competente, la demanda de nulidad podrá enviarse a través de Correos de México mediante correo certificado con acuse de recibo, siempre que el envío se efectúe en el lugar en que resida el demandante, entendiéndose como tal su domicilio fiscal. En este sentido, debe entenderse como domicilio fiscal de las personas físicas el local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios o aquél que utilicen para el desempeño de sus actividades y únicamente cuando no cuenten con un local, podrá considerarse como su domicilio fiscal su casa habitación. En el caso concreto, si bien la actora manifiesta que su lugar de residencia se encuentra ubicado en Veracruz, Veracruz -situación que pretende acreditar con la exhibición de una constancia de domicilio-, pero su domicilio fiscal se encuentra ubicado en Alvarado, Veracruz, la demanda debió depositarse en la Oficina de Correos de este último lugar o presentarse directa-

mente en la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales del Golfo y no como lo hizo en la especie la promovente, al realizar el depósito desde la Oficina de Correos de México en Veracruz, Veracruz, por lo que debe tomarse como fecha de presentación de la demanda aquella en que fue recepcionada en la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales del Golfo de este Tribunal.

Recurso de Reclamación Núm. 1378/10-13-02-1.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 12 de agosto de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Juana Griselda Dávila Ojeda.- Secretaria: Lic. Claudia Selene Sagrero Rosas.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-XL-40

CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA.- CASO EN QUE LA EMISIÓN DEL NUEVO ACTO DEBE CUMPLIRSE EN EL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- El artículo 153 de la Ley Aduanera establece que las autoridades deberán dictar resolución definitiva en un plazo que no excederá de cuatro meses, contados a partir del día siguiente a aquél en que se encuentre debidamente integrado el expediente, pues de no hacerlo, quedarán sin efecto las actuaciones de la autoridad que dio inicio al procedimiento. Por su parte el artículo 52, fracción III y último párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, señala que si la sentencia definitiva obliga a la autoridad a emitir un determinado acto, deberá cumplirlo en el plazo de cuatro meses a partir de que la sentencia quede firme. En virtud de lo anterior, cuando se advierta que la resolución controvertida se emitió en cumplimiento a la sentencia dictada en un juicio en la que se declaró la nulidad del acto cuestionado, con fundamento en la fracción III del ordenamiento en cita, para el efecto de que se emitiera una nueva, debe estimarse que la autoridad

estaba sujeta a cumplimentarla en el plazo previsto en el tercer párrafo del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y no el diverso 153 de la Ley Aduanera, como lo pretende la contraparte, al acreditarse que el acto no derivó de la instauración de un procedimiento, sino en acatamiento a un fallo dictado en un juicio de anulación.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 600/10-13-02-8.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el 26 de agosto de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Ponente: Antonio Miranda Morales.- Secretario: Lic. Alejandro Zirancámaro Díaz Morales.

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

VI-TASR-XL-41

SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SI LAS RESOLUCIONES ORIGINALMENTE RECURRIDAS ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA NO SON DEFINITIVAS, EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LAS MISMAS.- De la correcta interpretación hecha al artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se entiende que cuando las resoluciones recurridas mediante un recurso administrativo ante diversa autoridad no sean definitivas y éstas las desechen por improcedentes, este Tribunal no es competente para conocer del asunto, toda vez que aunque sea una resolución recaída a un recurso administrativo, lo cierto es que el artículo 14, fracción XII, dice que las resoluciones recurridas deben ser de las impugnables en el juicio contencioso administrativo; de manera que si el artículo 14 mencionado en su primero y segundo párrafos señalan que las resoluciones que se combaten en el juicio citado deben ser definitivas y los actos recurridos no tienen esta característica, no se configura ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 14

de la Ley Orgánica de este Tribunal por lo tanto debe sobreseerse el juicio contencioso administrativo.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1097/10-13-02-7.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 31 de agosto de 2010, por mayoría de votos.- Magistrada Instructora: Juana Griselda Dávila Ojeda.- Secretaria: Lic. Olivia Gómez Toral.

REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

VI-TASR-XL-42

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 14, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE SU REGLAMENTO INTERIOR, NO CONSTITUYE UNA NORMA COMPLEJA.- El artículo 14 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, que enlista las facultades competencia de la Administración General de Servicios al Contribuyente, en su penúltimo párrafo, contiene un listado de las unidades administrativas que se encuentran adscritas a dicha Administración General, entre ellas las Locales; en esa virtud se considera que éste párrafo no constituye una norma compleja y por ende, es innecesaria la transcripción del apartado correspondiente a dichas Administraciones Locales en el acto controvertido, dado que tal apartado no constituye en forma alguna fundamento de su competencia, sino un listado de autoridades administrativas.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1140/10-13-02-2.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 20 de septiembre de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Antonio Miranda Morales.- Secretaria: Lic. Eva María González Madrazo.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-XL-43

COMISIÓN MERCANTIL. SU PRUEBA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Si la autoridad en la resolución impugnada, rechaza las deducciones de la empresa actora atendiendo a que no cumplió con la obligación fiscal de pagar mediante cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario, puesto que la proveedora es una persona diversa de aquélla a quien se expidieron los cheques; y la actora exhibe un contrato de comisión mercantil por virtud del cual, la Comisionista tiene el mandato de efectuar el cobro extrajudicial al hoy actor y que a su nombre sean expedidos dichos cheques, resulta evidente que a dicho Contrato debe concederse valor probatorio para acreditar la Comisión, máxime si dichos cheques reúnen los requisitos fiscales, puesto que por virtud de la comisión, la Comisionista recibe los cheques a nombre del beneficiario.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 946/10-13-02-2.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 30 de septiembre de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Antonio Miranda Morales.- Secretaria: Lic. Eva María González Madrazo.

SALA REGIONAL PENINSULAR

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

VI-TASR-XVI-54

RÉGIMEN DE PENSIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.- SU ELECCIÓN SÓLO SE DEMUESTRA CON EL FORMATO OFICIAL DEBIDAMENTE LLENADO POR EL PENSIONADO.- El artículo SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado dispone que a partir del primero de enero de dos mil ocho, los trabajadores tendrían seis meses para optar por el régimen previsto en el artículo décimo transitorio o por la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE. La opción adoptada por el trabajador debería comunicarla por escrito al Instituto a través de las Dependencias y Entidades, en los términos que se establezcan y se le hayan dado a conocer, y será definitiva, irrenunciable y no podrá modificarse. El formato que se apruebe para ejercer este derecho deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. Conforme a ello, si la parte actora aduce que es ilegal que se haya suspendido el pago de la pensión que le fue otorgada bajo el régimen del artículo décimo transitorio de la Ley relativa, bajo el contexto de que se otorgó de manera ilegal ya que a decir de la autoridad, había elegido la diversa opción de acreditación de bonos de pensión, lo cual niega lisa y llanamente en términos del artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la autoridad demandada estaba obligada a exhibir el formato oficial debidamente llenado por el pensionado a efecto de demostrar que hizo esa elección, pero al no cumplir la enjuiciada con dicha carga procesal, se concluye que los hechos que motivaron la suspensión del pago de la pensión que se le otorgó al actor bajo el régimen del artículo décimo transitorio de la ley relativa, no se realizaron y en consecuencia, se debe dar de alta nuevamente la

referida pensión en el sistema correspondiente y reanudarse los pagos desde la fecha en que fueron suspendidos.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1878/09-16-01-7.- Resuelto por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 6 de septiembre de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Jaime Romo García.- Secretario: Lic. Juan Pablo Zapata Sosa.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

VI-TASR-XVI-55

DESTITUCIÓN DEL PUESTO. LA IMPOSICIÓN DE ESTA SANCIÓN ADMINISTRATIVA AL SERVIDOR PÚBLICO, POR COMETER UNA INFRACCIÓN GRAVE, NO RESULTA ILEGAL NI DESPROPORCIONADA.- El artículo 113 Constitucional dispone en su primer párrafo, que las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones, así como las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran y los procedimientos y las autoridades competentes para aplicarlas. También dispone dicho precepto que las sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, que deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones. Por su parte, el artículo 8º de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, establece las obligaciones que éstos deben acatar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, cuyo incumplimiento dará lugar a la substanciación del procedimiento administrativo disciplinario y a la imposición de las sanciones que correspondan. En concordancia con lo anterior, el artículo 13 del mismo orde-

namiento legal señala las sanciones que se impondrán a los servidores públicos, al cometer faltas administrativas, entre las que se encuentra la destitución del puesto; y también establece que en caso de infracciones graves, se impondrá, además de las que se consideren aplicables en su caso, la sanción de destitución, definiendo este precepto en su antepenúltimo párrafo, lo que se considera como infracción grave, a saber, el incumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXII y XXIII del artículo 8º de la ley aludida. Por lo tanto, en aquellos casos en que el órgano interno de control de la dependencia o entidad paraestatal de la Administración Pública Federal instruya el procedimiento administrativo de responsabilidades a un servidor público y determine que cometió una infracción grave, al no cumplir con alguna de las obligaciones previstas en el artículo 8º, fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXII y XXIII, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la imposición de la sanción consistente en la destitución del puesto no resulta ilegal ni desproporcionada, ya que se encuentra expresamente regulada en la normatividad aplicable en el régimen de responsabilidades de los servidores públicos, es decir, que se encuentra jurídicamente sustentada la potestad disciplinaria de la autoridad administrativa para imponer dicha sanción, al definirse en forma clara los supuestos y las consecuencias jurídicas que configuran su aplicación.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1848/09-16-01-9.- Resuelto por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 20 de septiembre de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Virginia Pétriz Herrera.- Secretaria: Lic. Martha Beatriz Dorantes Cardeña.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-XVI-56

PRUEBAS. EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DEL CUAL DERIVA LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. ES PROCEDENTE SU ADMISIÓN EN EL

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Si el demandante a través del juicio contencioso administrativo federal impugna la resolución recaída a un recurso administrativo al no quedar satisfecho su interés jurídico, de conformidad con el artículo 1°, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, debe entenderse que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso; en ese sentido, de la interpretación del numeral en cita, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 14, fracción V, penúltimo y último párrafos, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se concluye que es procedente el ofrecimiento y admisión de la prueba consistente en el expediente administrativo del cual deriva la resolución recurrida, pues ésta se encuentra igualmente impugnada, máxime si se considera que en dicho expediente se contiene toda la información relacionada con el procedimiento que dio lugar a la resolución recurrida, es decir, contiene la documentación correspondiente al inicio del procedimiento y los actos administrativos posteriores que fueron considerados para la emisión de la resolución que definió la situación jurídica del demandante y que fue combatida de manera inicial en la instancia administrativa, por lo que resulta indubitable que su contenido tiene relación directa con la decisión que pone fin al asunto. Considerar lo contrario equivaldría a negar a las partes el ejercicio de la correcta defensa de sus intereses, siendo que una vez exhibido el expediente relativo por la autoridad que lo tenga, debe ser valorado en su justa medida, teniendo en consideración que el juicio de nulidad es una contienda en el que la litis la fijan las partes, quienes tienen la obligación de acreditar los hechos constitutivos de sus pretensiones y sus excepciones respectivamente.

Recurso de Reclamación Núm. 1113/10-16-01-7.- Resuelto por la Sala Regional del Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 22 de septiembre de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Jaime Romo García.- Secretario: Lic. Juan Pablo Zapata Sosa.

REGLAS DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2009

VI-TASR-XVI-57

REGLAS DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2009. EL PLAZO DE 60 DÍAS PREVISTO EN LA REGLA 3.3.26, PARA RETORNAR AL EXTRANJERO O EFECTUAR EL CAMBIO DE RÉGIMEN DE LAS MERCANCÍAS IMPORTADAS TEMPORALMENTE, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE LA FECHA DE CANCELACIÓN DEL PROGRAMA IMMEX, Y NO A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA RELACIÓN DE EMPRESAS CON PROGRAMAS CANCELADOS.- El artículo 25 del "Decreto por el que se modifica el diverso para el fomento y operación de la industria maquiladora de exportación", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de noviembre de 2006, establece que las empresas con programa otorgado en base a dicho Decreto, tienen la obligación de presentar, ante la Secretaría de Economía, un reporte anual del total de ventas y exportaciones, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, a más tardar el último día hábil del mes de mayo; que en caso de que dicho reporte no se presente dentro del plazo antes enunciado, se suspenderá el beneficio de importar temporalmente las mercancías autorizadas en el programa, en tanto no se subsane la omisión; que si para el último día hábil del mes de agosto del año que corresponda, las empresas suspendidas no presentan el reporte aludido, entonces el programa autorizado quedará cancelado a partir del 1º de septiembre del año de que se trate; y que para efectos de la cancelación antes indicada, la Secretaría de Economía publicará en el Diario Oficial de la Federación, durante el mes de septiembre del año de que se trate, el nombre del titular y número de programa cancelado. Por su parte, la regla 3.3.26 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2009, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de abril de 2009, establece que las empresas con Programa IMMEX contarán con un plazo de 60 días naturales, a partir de la cancela-

ción de su programa, para retornar al extranjero o efectuar el cambio de régimen de las mercancías importadas temporalmente; otorgándose la facilidad de que la Administración Local Jurídica que corresponda al domicilio fiscal de la empresa, entre otras autoridades, podrá autorizar por una única vez, un plazo de hasta 180 días naturales, para que las empresas cuyos programas hayan sido cancelados, cumplan con la obligación referida; y para ello deberán solicitar dicha prórroga, mediante escrito libre, con una anticipación de 15 días anteriores al vencimiento del plazo de los 60 días naturales otorgados por la Secretaría de Economía, independientemente de la fecha de emisión de la prórroga. Por lo que de acuerdo a lo anterior, la fecha en que las empresas con Programa IMMEX, que no cumplieron con su obligación de presentar ante la Secretaría de Economía, su reporte anual del total de ventas y exportaciones, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, tienen conocimiento o se les tiene por notificadas sobre la cancelación de su programa autorizado, es el 1º de septiembre del año de que se trate, y no en la fecha en que la Secretaría de Economía publica en el Diario Oficial de la Federación, en el mes de septiembre del año de que se trate, la relación de los nombres de los titulares y sus programas cancelados. Sin que deba considerarse que esta publicación constituye una notificación o un medio a través del cual se haga del conocimiento por primera vez, a las empresas afectadas, sobre la cancelación de sus programas IMMEX, ya que el artículo 25 del Decreto aludido, es categórico al fijar de manera indubitable, a partir de qué momento se cancela el programa autorizado, a saber el 1º de septiembre del año de que se trate; y la publicación que realiza la Secretaría de Economía, sólo tiene fines de divulgación, una vez ya cancelados los programas autorizados.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 735/10-16-01-6.- Resuelto por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 27 de septiembre de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Virginia Pétriz Herrera.- Secretario: Lic. Juan Carlos Cámara Maldonado.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

VI-TASR-XVI-58

FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA TERRITORIAL DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS.- En el régimen jurídico de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, la competencia territorial de los órganos internos de control encuentra su base en el artículo 4º de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que establece que para la investigación, tramitación, sustanciación y resolución de los procedimientos y recursos establecidos en dicho ordenamiento legal, serán autoridades competentes los contralores internos y los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades de los aludidos órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Así como también se sustenta en los artículos 79, primer párrafo, y 80, primer párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2009, los cuales establecen que los titulares de los órganos internos de control y los titulares de sus áreas de responsabilidades, auditoría y quejas tendrán, en el ámbito de la dependencia, de sus órganos desconcentrados o entidad en la que sean designados o de la Procuraduría, la facultad de citar al presunto responsable e iniciar el procedimiento de investigación, a fin de determinar las responsabilidades a que haya lugar e imponer, en su caso, las sanciones aplicables en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y determinar la suspensión temporal del presunto responsable de su empleo, cargo o comisión, si así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones, de conformidad con lo previsto en el referido ordenamiento. De esta manera, la competencia territorial de los órganos internos de control de los organismos públicos descentralizados, se determina de acuerdo a los preceptos antes citados, ya que dichas normas circunscriben el ejercicio de las facultades de investigación, tramita-

ción, sustanciación y resolución de los procedimientos y recursos previstos en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al ámbito de la dependencia, de sus órganos desconcentrados o entidad en la que sean designados los titulares de los órganos internos de control y los titulares de sus áreas de responsabilidades, auditoría y quejas; es decir, que la actuación de dichas autoridades se encuentra supeditada al espacio en donde desplieguen su actividad administrativa, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a las que sean adscritos por designación del Secretario de la Función Pública; apoyando lo anterior, la disposición contenida en el primer párrafo del artículo 62 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que establece que los órganos de control interno serán parte integrante de la estructura de dichas entidades. Por lo que resulta suficiente la cita de los preceptos antes indicados, para que el titular del órgano interno de control o los titulares de sus áreas de responsabilidades, auditoría y quejas, de un organismo público descentralizado, funden su competencia territorial, en el procedimiento administrativo disciplinario.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 506/10-16-01-6.- Resuelto por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 30 de septiembre de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Virginia Pétriz Herrera.- Secretario: Lic. Juan Carlos Cámara Maldonado.

REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

VI-TASR-XVI-59

ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORÍA FISCAL. TIENEN FACULTADES PARA DETERMINAR Y LIQUIDAR LAS CANTIDADES COMPENSADAS INDEBIDAMENTE CONFORME AL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE

OCTUBRE DE 2007.- De lo dispuesto en los artículos 17 fracción XXXII y 19, primer párrafo, apartado A, fracción I, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007, se advierte que las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal tienen facultades para determinar y liquidar las cantidades compensadas indebidamente, por lo que es suficiente que en las resoluciones que determinan la procedencia o improcedencia de las compensaciones realizadas por el contribuyente, la Administración Local de Auditoría Fiscal de Mérida, cite esos dispositivos legales para sustentar su competencia material, sin que sea obstáculo que el artículo 41-A del Código Fiscal de la Federación, únicamente le confiera a las autoridades fiscales facultades para requerir informes, datos y documentos a fin de aclarar la información asentada en los avisos de compensación, mas no para determinar y liquidar las cantidades compensadas indebidamente.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1777/09-16-01-2.- Resuelto por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 1 de octubre de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Ana Luz Brun Iñárritu.- Secretario: Lic. José del Jesús Rodríguez Ortegón.

SALA REGIONAL CHIAPAS-TABASCO

LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

VI-TASR-XXXV-19

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO TIENE COMPETENCIA MATERIAL, PARA CONOCER RESPECTO DE LA IMPUGNACIÓN DE SANCIONES POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS, IMPUESTAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.- La competencia de origen del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deriva del artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que restringe su función jurisdiccional al dictado de fallos con plena autonomía, para dirimir las controversias entre los particulares y la Administración Pública Federal, la cual comprende según el artículo 1° de su Ley Orgánica, la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas, y los fideicomisos; de ahí que, al ser el Instituto Federal Electoral un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, conforme al artículo 41, fracción V, Constitucional, independiente en sus decisiones y funcionamiento de los Poderes de la Unión, incluso claro el Ejecutivo del cual depende aquél órgano jurisdiccional, es inconcuso que no pertenece a tal Administración; por lo tanto, las resoluciones del referido Instituto, aun las de naturaleza disciplinaria en materia de responsabilidades provenientes de su Contraloría General, son ajenas al control de legalidad de dicho Tribunal y por ello deben desecharse por improcedentes las demandas en las que se pretenda su nulidad, sin que sea óbice que el

artículo 15 de la Ley Orgánica de ese ente jurisdiccional, lo autorice para conocer de la impugnación de resoluciones sobre responsabilidades administrativas de funcionarios públicos, porque tal competencia en principio está limitada por el hecho de que la autoridad sancionadora sea, necesaria e indefectiblemente, una dependencia o entidad de la Administración Pública Federal.

Recurso de Reclamación Núm. 326/10-19-01-5.- Resuelto por la Sala Regional Chiapas-Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 26 de agosto de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Luis Alfonso Marín Estrada.- Secretario: Lic. José Francisco Espino Herrera.

LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

VI-TASR-XXXV-20

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. CARECE DE COMPETENCIA MATERIAL PARA CONOCER SOBRE LA IMPUGNACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO, RECAÍDO A UNA SOLICITUD DE CESE DE DESCUENTOS SALARIALES Y REINTEGRO DE LOS APLICADOS A UN CRÉDITO HIPOTECARIO DEL FOVISSSTE.- La falta de respuesta a la petición de un particular para que se le deje de descontar su salario y le devuelvan los descuentos aplicados al pago de un crédito hipotecario, por parte del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no se relaciona con la materia pensionaria civil con cargo a dicho Instituto, sino más bien se trata de un asunto de índole eminentemente laboral atendiendo a la naturaleza de la prestación afectada, esto es, el salario percibido por un trabajador en activo, puesto que la privación de ese producto del trabajo contraviene las restricciones a los descuentos al sueldo contenidas en los artículos 38, fracción VI, y último párrafo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y 123, Apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; de ahí que no se surte la competencia material del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para conocer de ese tipo de actos, en tanto que el silencio administrativo que se pretende atacar no se ubica en la fracción XIV del artículo 14 de la Ley Orgánica del propio Tribunal, al no relacionarse con ninguna de las demás hipótesis contenidas en el mismo precepto legal, por ende, la demanda de nulidad relativa se debe desechar por notoriamente improcedente.

Recurso de Reclamación Núm. 680/10-19-01-5.- Resuelto por la Sala Regional Chiapas-Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 26 de agosto de 2010, por mayoría de votos.- Magistrado Instructor: Luis Alfonso Marín Estrada.- Secretario: Lic. José Francisco Espino Herrera.

SALA REGIONAL DEL CARIBE

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-XXXVI-122

CONDENA A LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS PREVISTA POR EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- NO PUEDE APOYARSE EN SIMPLES INFERENCIAS.- Si bien se prevé la obligación a cargo de la autoridad para resarcir a los gobernados con motivo de su actuación irregular, ello no debe interpretarse al extremo que por el simple hecho de que haya cometido una falta grave al dictar el acto impugnado y se anule la resolución, deba indemnizarlo por cualquier erogación que demuestre haber realizado, aun cuando no se acredite plenamente el nexo causal entre el daño sufrido y la conducta irregular del Estado, dicho de otra forma, la condena al pago de la indemnización, no puede descansar en una mera inferencia; siendo así, cuando la conducta ilegal incurrida por la autoridad, radicó en suspender el servicio de energía eléctrica en su domicilio particular y la ocursante no acreditó que derivado de ello, haya tenido que cambiar temporalmente su residencia a diverso lugar; resulta inconcuso que ésta se encuentra obligada a probar no sólo que durante cierto lapso temporal se allegó de un determinado medio de generación de energía eléctrica, sino que su uso tuvo lugar precisamente en el domicilio donde se suspendió dicho servicio, para de tal forma establecer con certeza el nexo causal entre la conducta observada por la autoridad y la erogación que alega haber realizado; aceptar lo contrario, implicaría asumir que por el simple hecho de que en un determinado domicilio, la autoridad suspendió el servicio de energía eléctrica, deba restituirse al gobernado por la integridad de las presuntas erogaciones relacionadas con bienes o servicios de energía eléctrica, cuando tales gastos bien pudieran tener

como destino el allegarse de la energía eléctrica para un lugar o finalidad diversa al de proveer al domicilio donde en específico, se suspendió el servicio.

Incidente de Indemnización por Daños y Perjuicios Núm. 819/09-20-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 1 de septiembre de 2010, por mayoría de votos.- Magistrado Instructor: Alberto Romo García.- Secretario: Lic. Edgar Alan Paredes García.

LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS

VI-TASR-XXXVI-123

CALIDAD DE SOCIO EN UNA COOPERATIVA.- SUPUESTO EN EL CUAL NO SE ACREDITA.- De la interpretación armónica de lo establecido por los artículos 6, 11, 16, 36 y 51, de la Ley General de Sociedades Cooperativas, se advierte que se regirán por sus bases constitutivas, bajo las cuales se establecerán, entre otras cuestiones, los requisitos y procedimientos para la admisión voluntaria de los socios, aunado a que la Asamblea General de socios resolverá todos los negocios y problemas de importancia para la cooperativa, establecerá las reglas generales sobre el funcionamiento social y tendrá la facultad de resolver sobre la citada aceptación de socios; de tal forma, no es dable tener por plenamente acreditado el efectivo carácter de socio cooperativista, cuando se omiten exhibir las bases constitutivas, así como el elemento de convicción bajo el cual se probara en forma indubitable la efectiva aceptación como socio por parte de la referida asamblea o por el órgano legalmente facultado para ello, sin que obste para lo anterior, la simple exhibición de un documento donde conste una presunta solicitud de inscripción, así como un documento referido como certificado de aportación de socio cooperativista, ni aun de uno diverso intitulado como carta de aceptación social, cuando incluso este último carece siquiera de las firmas de los presuntos emisores.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 111/10-20-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 1 de septiembre de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Alberto Romo García.- Secretario: Lic. Edgar Alan Paredes García.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XXXVI-124

VISITA DOMICILIARIA.- SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA SU CONCLUSIÓN ACORDE AL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- En el artículo citado al rubro, el legislador dispuso un plazo máximo dentro del cual se debe concluir una visita domiciliaria, así como una hipótesis normativa bajo la cual se suspenderá dicho plazo, verbigracia, la interposición de un medio de defensa; lo que cumple dos funciones esenciales, a saber: 1.- Salvaguardar la seguridad jurídica del gobernado, al prever un lapso temporal máximo dentro del cual debe culminar el ejercicio de las facultades de comprobación; y 2.- Salvaguardar la debida consecución del procedimiento fiscalizador cuando pueda verse obstaculizado o incluso impedido en su seguimiento, por causas ajenas a la propia autoridad; en adición a lo expuesto, se pondera el hecho de que la hipótesis legal en comento, radica en la suspensión del plazo para culminar la revisión, mas no que la fiscalización misma deba suspenderse, de tal forma que si en el devenir de una auditoría, el visitado promueve un medio de defensa, donde por la naturaleza jurídica del acto controvertido o por la impugnación planteada, no se ve obstaculizada la debida consecución de las facultades de revisión, verbigracia, una multa impuesta por el incumplimiento a una obligación formal en el desarrollo de la visita, impugnada únicamente por sus propios motivos y fundamentos, no es dable asumir que irrestrictamente la autoridad debe suspender la visita; por el contrario, la debida interpretación del cardinal en estudio conlleva a establecer que el lapso temporal que se comprenda desde la interposición del medio de defensa, hasta su resolución definitiva, no se computará en perjuicio de la autoridad, estimar lo contrario, no sólo implicaría obstaculizar el

debido desarrollo de sus facultades de comprobación, sino además, implicaría prolongar el lapso temporal dentro del cual el gobernado debe resentir en su esfera jurídica los efectos del acto de molestia, verbigracia, la intromisión en su domicilio y revisión de su documentación, aun cuando no hubiera un motivo real que impidiera el seguimiento de la revisión respectiva.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 111/10-20-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 1 de septiembre de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Alberto Romo García.- Secretario: Lic. Edgar Alan Paredes García.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-XXXVI-125

NEGATIVA FICTA RECAÍDA A UNA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN.- SUPUESTO EN EL CUAL PROCEDE NEGAR LO PEDIDO.- Al tratarse de una resolución negativa ficta configurada debe resolverse el fondo del asunto, no obstante, el simple hecho de que la autoridad no exponga los motivos y fundamentos en que sustenta su negativa, no implica *per se* que irrestrictamente se deba tener por cierto lo expuesto por el interesado y se reconozca su derecho subjetivo para obtener la devolución pretendida; lo anterior, en virtud de que el propio cardinal 19 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé como supuesto de excepción que el hecho imputado a la autoridad puede ser desvirtuado por la convicción que arrojen los elementos probatorios que obren en autos, así como por hechos notorios; por lo cual, si se parte de que la pretensión expuesta por la demandante en sede administrativa, descansa en dos hechos, donde el primero es la anulación de determinadas resoluciones liquidatorias y el segundo, que llevó a cabo su pago, pero sólo obra constancia de la existencia del primero de los hechos cuestionados, resulta inconcuso que no es dable resolver de conformidad con lo solicitado, ya que la

viabilidad de la devolución, no radica únicamente en la anulación del acto de autoridad, sino que además se debe probar en forma plena haber realizado su entero, lo que al no acreditarse, conlleva a negar la devolución respectiva.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1064/09-20-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 10 de septiembre de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Alberto Romo García.- Secretario: Lic. Edgar Alan Paredes García.

LEY ADUANERA

VI-TASR-XXXVI-126

ACTA DE HECHOS REALIZADA CON MOTIVO DEL EXTRAVÍO DE MERCANCÍA EN RECINTO FISCALIZADO, SE ENCUENTRA SUJETA AL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ PARA SU LEVANTAMIENTO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY ADUANERA AL SUSTENTAR LA AUTORIDAD EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN LO PREVISTO POR EL DIVERSO NUMERAL 152 DE LA CITADA LEY.- No obstante que el levantamiento del acta de hechos se sustente en el incumplimiento del control, seguridad y manejo de mercancías de comercio exterior, con motivo del extravío de mercancía en un recinto fiscalizado, su realización se encuentra sujeta al principio de inmediatez previsto por el artículo 46 de la Ley Aduanera, ya que es la propia autoridad que de manera expresa señala que, con fundamento en el citado precepto legal en relación con el diverso numeral 152 de la Ley Aduanera, procede a realizar dicha actuación y su notificación al representante legal del recinto fiscalizado y por ende, dicha acta se debe realizar a partir de la fecha en que la autoridad tuvo conocimiento del extravío de la mercancía y no con posterioridad a ésta.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 361/09-20-01-1.- Resuelto por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 13 de septiembre

de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Manuel Carapia Ortiz.- Secretaria: Lic. Patricia Aracelly Mukul Basulto.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XXXVI-127

REQUERIMIENTO EMITIDO POR LA AUTORIDAD CON MOTIVO DE UN AVISO DE COMPENSACIÓN.- DEBE EXIGIR LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE ESTIME NECESARIOS PARA CONSTATAR SU LEGALIDAD Y NO SÓLO PARTE DE ELLOS.- Como premisa inicial se tiene que en nuestro sistema legal impera el principio de autodeterminación de las contribuciones, bajo el cual, recae en el gobernado la obligación de llevar a cabo el cálculo y entero de las obligaciones a su cargo, lo que se lleva a cabo bajo un principio de buena fe y presunción de veracidad; no obstante lo anterior, en adición a ello, la autoridad ostenta un cúmulo de facultades legales para constatar el debido cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contribuyentes y, en su caso, determinar en cantidad líquida lo omitido; en ese orden de ideas, de la interpretación armónica de lo establecido por los artículos 23 del Código Fiscal de la Federación, 17, fracciones XXXII y XXXV, y 19, primer párrafo, apartado A, fracción I y último párrafo, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, se advierten los siguientes puntos trascendentes: 1.- La compensación procede en tratándose de los saldos a favor de un contribuyente; 2.- A fin de verificar la procedencia de la devolución, las autoridades fiscales cuentan con la facultad para requerir al contribuyente los datos, informes o documentos que consideren necesarios y que estén relacionados con la misma; y, 3.- Derivado de la revisión efectuada a la documentación aportada, las autoridades podrán incluso determinar y liquidar las cantidades compensadas indebidamente; lo anterior, lleva a establecer que si al verificar la información y documentación vinculada con un aviso de compensación, la autoridad estima una insuficiencia o irregularidad en lo aportado y, con motivo de ello, emite un requeri-

miento, no debe considerarse que se encuentra en legal aptitud de exigir en forma parcial o aislada cierta información, sino que está conminada a requerir la exhibición de la integridad de la información y documentación que estime necesaria para resolver la cuestión efectivamente planteada, aceptar lo contrario, conllevaría al absurdo de asumir que dicha facultad, puede ser ejercida en forma discrecional y parcial, donde no obstante de estimar necesario un cúmulo de elementos para resolver la cuestión solicitada, pueda requerir la exhibición de sólo parte de ellos, pero que finalmente, niegue lo pedido al no haberse aportado elementos que no fueron requeridos en sede administrativa.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 441/10-20-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 14 de septiembre de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Alberto Romo García.- Secretario: Lic. Edgar Alan Paredes García.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VI-TASR-XXXVI-128

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, ACREDITAR LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES MUEBLES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS INMUEBLES DESTINADOS PARA CASA HABITACIÓN OTORGADOS EN ARRENDAMIENTO NO CONSTITUYE REQUISITO PREVISTO EN LEY PARA DETERMINAR SI DICHA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA GRAVADA O EXENTA Y POR ENDE, NEGAR LA DEVOLUCIÓN DE DICHO IMPUESTO.- En términos de lo previsto por los artículos 19 y 20, fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado se entiende por uso o goce temporal de bienes, entre otros, el arrendamiento y no se pagará el impuesto de los bienes inmuebles otorgados en arrendamiento destinados o utilizados para casa habitación; sin embargo, dicha exención no es aplicable a los inmuebles o parte de ellos que se proporcionen amueblados o se destinen o utilicen como hoteles o casas de hospedaje. De los citados

preceptos legales no se desprende que para efectos de determinar si se encuentra exento o gravado el arrendamiento de inmuebles amueblados destinados a casa habitación, sea necesario acreditar la adquisición de los muebles que se encuentra dentro de los inmuebles para determinar si dicha actividad se encuentra gravada o exenta y por ende, carece de sustento legal la determinación de la autoridad que al no acreditar la adquisición de los muebles que se ubican dentro del inmueble se trata de actividades exentas, por lo que, resulta improcedente el acreditamiento del impuesto cuya devolución solicita la actora.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 901/09-20-01-1.- Resuelto por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 20 de septiembre de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Manuel Carapia Ortiz.- Secretaria: Lic. Patricia Aracelly Mukul Basulto.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XXXVI-129

PREFERENCIA PARA OBTENER EL PAGO DE LOS CRÉDITOS A FAVOR SOBRE LOS CRÉDITOS FISCALES A CARGO DE UN TERCERO.- OPORTUNIDAD DE SU OPOSICIÓN.- De la interpretación sistemática del artículo 128 del Código Fiscal de la Federación, se desprenden supuestos donde un tercero ajeno del contribuyente al que se dirige el acto de autoridad, puede instar el recurso de revocación para defender su interés jurídico, entre ellos, por tener una prelación a satisfacer los créditos a su favor en forma previa a los créditos fiscales liquidados a cargo de un contribuyente determinado, como puede ocurrir en tratándose de un acreedor que tiene en su favor una garantía real sobre el bien inmueble rematado por la autoridad, siendo que para este supuesto, el legislador estableció un límite temporal para la interposición del medio de defensa, verbigracia, antes de que se haya aplicado el importe del remate a cubrir el crédito fiscal; no obstante lo anterior, se parte de la base razonable de que al tratarse de un tercero ajeno a la relación

jurídica establecida entre el contribuyente deudor y la autoridad fiscal, puede resultarle particularmente complejo enterarse oportunamente de la situación jurídica que implique la necesidad de accionar el medio de defensa respectivo; así, para tales efectos, el diverso cardinal 177 del código en cita, prevé que los acreedores que aparezcan del certificado de gravámenes correspondiente a los últimos diez años, serán notificados personalmente del periodo de remate señalado en la convocatoria; de tal forma si el interesado se hizo sabedor de la notificación en comento en una fecha anterior al remate y consecuentemente a la aplicación de su producto al adeudo correspondiente, resulta inconcuso que se encontró en legal aptitud de interponer oportunamente el medio de defensa de mérito, por lo que al no hacerlo así, se apega a derecho que la autoridad, declare actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 124, fracción IV, del código de referencia, relativa al consentimiento del acto, al no promover el medio de defensa dentro del lapso temporal otorgado para tal finalidad.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 229/10-20-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 20 de septiembre de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Alberto Romo García.- Secretario: Lic. Edgar Alan Paredes García.

REGLAS DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2009

VI-TASR-XXXVI-130

SUSPENSIÓN EN EL PADRÓN DE IMPORTADORES.- SUPUESTO EN EL CUAL RESULTA LEGAL SU APLICACIÓN.- La regla 2.2.4., numeral 16, de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior para 2009, con sus respectivas resoluciones de modificación, prevé una pluralidad de motivos para declarar la suspensión en el padrón de importadores, entre los cuales destaca que no se localice al proveedor en el domicilio fiscal señalado en el pedimento; en concordancia con lo anterior, el artículo 25 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación,

prevé que se deberá presentar el aviso de cambio de domicilio fiscal dentro del mes siguiente a aquél en que se actualice el supuesto jurídico o el hecho que lo motive; de tal forma que si la demandante reconoce expresamente que su proveedor no era localizable en el domicilio fiscal señalado en el pedimento de mérito, pero que lo anterior se debió a un cambio en el domicilio fiscal y exhibe el aviso respectivo, pero es omisa en acreditar la efectiva fecha de desocupación del lugar (elemento indispensable para constatar la oportunidad del aviso en comento), no es dable tener por acreditado su dicho; máxime cuando en contraposición a ello, los únicos elementos indiciarios radican en las manifestaciones expuestas por los vecinos que auxiliaron al personal que verificó el anterior domicilio, mismos que refirieron tal desocupación con considerable antelación a la fecha alegada por el interesado; motivo por el cual, si se acredita que a la fecha de presentación del pedimento, el proveedor no era localizable en el domicilio en comento, no se cuenta con la efectiva fecha de desocupación de inmueble y únicamente se prueba que con considerable posterioridad a ello el proveedor presentó un aviso de cambio de domicilio fiscal; por lo que, acorde al principio de aplicación estricta de la norma fiscal, se apega a derecho que la autoridad decretara la suspensión en el padrón de importadores respectiva.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 404/10-20-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 20 de septiembre de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Alberto Romo García.- Secretario: Lic. Edgar Alan Paredes García.

LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS

VI-TASR-XXXVI-131

JUICIO DE NULIDAD.- PROCEDE CONTRA EL REQUERIMIENTO DE PAGO RELATIVO A UNA FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES.- Acorde al cardinal 95 de la Ley Federal de

Instituciones de Fianzas, las fianzas otorgadas a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros estarán a lo previsto por el Código Fiscal de la Federación, específicamente en lo inherente para hacerlas efectivas, mas no para efectos de su impugnación, por otra parte, el artículo 126 de dicho código, determina la improcedencia del recurso de revocación precisamente contra los actos inherentes a la ejecución del interés derivado de obligaciones fiscales, garantizado mediante fianza; por lo cual, no debe supeditarse la procedencia del juicio de nulidad a los parámetros establecidos en el artículo 127 del código en cita, ya que si bien es cierto que es dable asumir la afinidad que guardan los actos en general que se emiten en el procedimiento administrativo de ejecución y los que necesariamente deben emitirse para hacer efectivas dichas fianzas, no debe acotarse la procedencia de un diverso medio de defensa (juicio de nulidad), al cumplimiento de las formalidades relativas al recurso de revocación, cuando este último excluye expresamente su procedencia; sin que cobre aplicación en la especie la jurisprudencia 2a./J. 18/2009, con número de registro 166,665, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que radica en la interpretación del referido artículo 127, para determinar la procedencia del recurso de revocación en tratándose de los actos del procedimiento administrativo de ejecución, como parámetro para establecer la procedencia optativa de su impugnación mediante el juicio de nulidad seguido ante este Tribunal; así, es evidente que las reglas para la oportunidad y viabilidad de dicho recurso, no deben aplicarse para la impugnación de una resolución que se excluye expresamente de la materia de su conocimiento, máxime que el artículo 14, fracción IX, de la Ley Orgánica de este Tribunal, prevé la competencia de esta Juzgadora, para conocer sobre la impugnación de las resoluciones que requieran el pago de garantías a favor de la Federación.

Recurso de Reclamación Núm. 609/10-20-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 20 de septiembre de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Alberto Romo García.- Secretario: Lic. Edgar Alan Paredes García.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

VI-TASR-XXXVI-132

OPTATIVIDAD.- EL ARTÍCULO 180 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, NO LA CONTEMPLA, ENTRE LA POSIBILIDAD DE INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN Y JUICIO DE NULIDAD.- Toda vez que esta Sala en la tesis consultable en la revista que edita este Tribunal, correspondiente al año VII, tomo IV, del mes de enero de 2007, página 2081, cuyo rubro es: "INTERÉS JURÍDICO. LOS ARTÍCULOS 176 Y 180 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, EN SU INTERPRETACIÓN ARMÓNICA LO CONTEMPLAN PARA EFECTOS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO"; sostuvo que la persona física o moral que sea integrante de una comunidad afectada con una resolución administrativa que contravenga disposiciones en materia ambiental tiene derecho a controvertirla vía juicio de nulidad, pues se estimó que dichos artículos contenían un derecho subjetivo reconocido materializado en un recurso administrativo de carácter optativo; sin embargo, de un nuevo análisis que se realizó a los artículos 176 y 180 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, esta Sala arribó a una nueva conclusión; esto es, que tratándose del recurso de revisión contemplado en el segundo de los numerales citados no se desprende que el mismo sea optativo sino que necesariamente debe agotarse previamente antes de acudir al juicio de nulidad. Lo anterior es así, pues estos numerales establecen los supuestos en los cuales el recurso de revisión de mérito puede ser interpuesto, en ese tenor, tratándose de la hipótesis contenida en el artículo 176, se desprende que permite, además de la interposición del recurso, acudir a las instancias jurisdiccionales competentes, como lo sería el juicio de nulidad, lo que se hace evidente al haber utilizado el Legislador el verbo: "podrán" y la conjunción "o", vocablos que denotan la posibilidad de acudir al medio de defensa y además, elegir entre uno (recurso) u otro (juicio); situación que no acontece tratándose de la hipótesis contenida en el artículo 180 aludido, ya que éste sólo alude a que cuando se preten-

dan controvertir las obras o actividades ahí descritas se debe interponer el recurso sin dar opción a acudir a otras instancias, tan es así que ahí se plasmó el verbo: "deberán", el cual tiene implícito un significado de obligatoriedad. Lo anterior se fortalece al tener presente que de acuerdo con la exposición de motivos que dio lugar a la reforma del artículo 180 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el propósito de tal modificación fue otorgar a los miembros de las comunidades afectadas por obras o actividades contrarias a la normatividad ambiental, la posibilidad de impugnar los actos administrativos respectivos a través del recurso de revisión; es decir, que los ciudadanos en general pudiesen tener más capacidad de defensa del medio ambiente, para lo cual se estableció la posibilidad de que pudiesen acudir ante la autoridad administrativa a hacer valer dicho recurso, sin que dicha reforma estuviese orientada a plasmar la optatividad del recurso con otro medio de defensa. En ese tenor, para que alguna persona, como parte integrante de alguna comunidad afectada por la actualización de los supuestos establecidos en el numeral 180 aludido, pueda acudir a juicio ante este Tribunal, es menester que primero interponga el recurso administrativo para que así les sea reconocida una facultad de exigencia respecto del acto de autoridad que en su caso se impugnará vía juicio y no sólo ostentar un interés cualificado respecto de la legalidad del acto combatido; por lo que si acude a juicio directamente, la demanda debe desecharse por improcedente al carecer de interés jurídico dicha persona; pues en todo caso sólo gozará de interés legítimo, el cual no es suficiente para la interposición del juicio de nulidad federal. Por otra parte, no es ajeno que el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, establece que los afectados por actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión, o cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda; ni que el artículo segundo transitorio de dicha Ley, dispone que se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en ella, en particular los diversos recursos administrativos de las diferentes leyes administrativas en las materias reguladas por dicho ordenamiento; así como que el numeral 1º de la misma Ley establece que sus disposiciones se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal Centralizada; sin embargo, se estima que tratándose del recurso de revisión a

que alude el numeral 180 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, no son aplicables tales disposiciones ya que éste es el ordenamiento especial que rige la materia, mismo que fue adicionado por decreto publicado el 13 de diciembre de 1996; esto es, con posterioridad a la entrada en vigor del artículo segundo transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, lo cual fue, el 1º de junio de 1995; por ende, bajo el principio jurídico "*Leges posteriores priores contraria abrogant*" (Las leyes posteriores derogan a las anteriores, si son contrarias) debe entenderse que lo dispuesto en el artículo 180 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente prevalece sobre las disposiciones citadas de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Recurso de Reclamación Núm. 554/10-20-01-3.- Resuelto por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 24 de septiembre de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Alberto Romo García.- Secretario: Lic. Marcos Gutiérrez Martínez.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-XXXVI-133

SUSPENSIÓN DEFINITIVA, RESULTA INSUFICIENTE PARA SOLICITAR LA MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN EL HECHO SUPERVENIENTE DE QUE LA AUTORIDAD EXACTORA RECHAZA LA GARANTÍA OFRECIDA POR LA ACTORA, CONSISTENTE EN DOS BILLETES DE DEPÓSITO.- De conformidad con lo previsto por el artículo 25, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo mientras no se dicte sentencia definitiva, la Sala Regional que hubiere conocido del incidente, podrá modificar o revocar la resolución que haya decretado o negado las medidas cautelares, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. Sin embargo, resulta insuficiente para revocar la suspensión concedida a la actora el hecho superveniente sustentado en el

oficio emitido por la autoridad exactora en el cual resuelve no aceptar la garantía ofrecida por la actora, consistente en billetes de depósito porque éstos no cumplen con los términos en que fueron requeridos por la exactora, esto es, exhibir en un solo billete de depósito el importe total a garantizar y plasmar en el cuerpo de dicho billete el número de crédito, resolución determinante y conceptos; en razón que, dichos requisitos no se encuentran previstos por los artículos 141 de Código Fiscal de la Federación y 99 de su Reglamento, aunado a que, dichos billetes de depósitos sí resultan suficientes para garantizar el interés fiscal, ya que el monto total de ambos billetes cubren la cantidad y conceptos requeridos por la exactora.

Incidente de Medidas Cautelares Núm. 357/10-20-01-1.- Resuelto por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 1 de octubre de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Manuel Carapia Ortiz.- Secretaria: Lic. Patricia Aracelly Mukul Basulto.

CRITERIOS AISLADOS DE SALAS REGIONALES PUBLICADOS DURANTE 2010

Metropolitanas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Primera (SR-I)	0	3	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	8
Segunda (SR-II)	3	8	0	0	1	5	0	1	0	0	0	0	18
Tercera (SR-III)	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
Cuarta (SR-IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quinta (SR-V)	0	0	0	6	0	0	2	3	0	4	2	0	17
Sexta (SR-VI)	3	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	8
Séptima (SR-XVIII)	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	2	0	5
Octava (SR-XIX)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Novena (SR-XX)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décima (SR-XXI)	6	4	0	0	1	1	4	0	0	1	0	0	17
Décima Primera (SR-XXII)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Décima Segunda*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12
TOTAL	12	16	3	7	8	6	12	4	0	5	18	0	91

CRITERIOS AISLADOS DE SALAS REGIONALES PUBLICADOS DURANTE 2010

Foráneas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Primera Noroeste I (Tijuana) (SR-XXV)	0	13	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	16
Segunda Noroeste I* (Tijuana)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Noroeste II (Cd. Obregón) (SR-VII)	0	11	0	0	6	16	0	0	9	2	4	0	48
Noroeste III (Culiacán) (SR-XXXI)	0	2	0	0	0	9	7	0	3	0	0	0	21
Norte – Centro I (Chihuahua) (SR-XXX)	0	0	0	0	0	6	11	1	0	4	0	0	22
Primera del Norte – Centro II (Torreón) (SR-VIII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Segunda del Norte – Centro II (SR-XXXII)	0	10	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	14
Tercera del Norte – Centro II (SR-XXXVII)	8	12	7	12	4	9	10	2	0	8	2	0	74
Primera del Noreste (Monterrey) (SR-IX)	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	5	0	12
Segunda del Noreste (Monterrey) (SR-XXIV)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
Primera de Occidente (Guadalajara) (SR-X)	0	0	0	0	0	0	7	0	0	4	0	0	11
Segunda de Occidente (Guadalajara) (SR-XXVIII)	1	1	0	4	0	0	0	0	0	3	0	0	9
Tercera de Occidente (Guadalajara) (SR-XXXVIII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CRITERIOS AISLADOS DE SALAS REGIONALES PUBLICADOS DURANTE 2010 (continuación)

Foráneas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Centro I (Aguascalientes) (SR-XXIX)	6	5	0	12	0	4	0	0	2	4	0	0	33
Centro II (Querétaro) (SR-XXIII)	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	28
Centro III (Celaya) (SR-XI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
Primera Hidalgo – México (Tlalnepantla) (SR-XII-I)	1	7	2	0	5	0	1	1	2	0	1	0	20
Segunda Hidalgo – México (Tlalnepantla) (SR-XII-II)	0	0	0	7	6	4	3	0	0	4	1	0	25
Tercera Hidalgo – México (Tlalnepantla) (SR-XXXIII)	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	8
Primera de Oriente (Puebla) (SR-XIII)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	60
Segunda de Oriente (Puebla) (SR-XXVI)	0	1	1	1	0	0	0	23	1	0	0	0	27
Tercera de Oriente (Puebla) (SR-XXXIX)	0	0	0	2	4	2	8	5	4	0	1	0	26
Primera del Golfo (Jalapa) (SR-XXVII)	0	14	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15
Segunda del Golfo (Jalapa) (SR-XL)	0	2	3	1	1	0	4	0	3	3	7	0	24
Pacífico (Acapulco) (SR-XVII)	5	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	10

CRITERIOS AISLADOS DE SALAS REGIONALES PUBLICADOS DURANTE 2010
(continuación)

Foráneas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Sureste (Oaxaca) (SR-XV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peninsular (Mérida) (SR-XVI)	1	8	0	5	0	2	1	4	5	4	6	0	36
Golfo – Norte (Cd. Victoria) (SR-XXXIV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chiapas – Tabasco (Tuxtla Gutiérrez) (SR-XXXV)	1	4	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	10
Caribe (Cancún) (SR-XXXVI)	5	13	2	8	8	6	6	0	0	9	12	0	69
Pacífico Centro (Morelia) (SR-XLI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad Intelectual (D.F.) (SR-EPI)	27	75	51	21	49	0	17	0	0	0	0	0	240
TOTAL	100	186	66	76	89	61	103	39	34	75	49	0	878

CUARTA PARTE

ACUERDOS GENERALES DE LA SALA SUPERIOR Y ACUERDOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN*

* Los Acuerdos Generales del Pleno de la Sala Superior y Específicos de la Junta de Gobierno y Administración que falten en número consecutivo se publicarán en una Revista posterior.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/20/2010

SE FIJA LA JURISPRUDENCIA N° VI-J-SS-68

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 18, fracción IX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al haberse resuelto la contradicción de sentencias 24665/06-17-02-1/106/09-PL-05-10/Y OTRO/2440/09-PL-01-01, el 30 de junio de 2010, por mayoría de 9 votos a favor y 2 votos en contra, se fija la jurisprudencia N° VI-J-SS-68, bajo los siguientes rubro y texto:

SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN. CUANDO SE OMITE PRESENTAR LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS EN IDIOMA DISTINTO, EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ESTÁ OBLIGADO A REQUERIR AL INTERESADO PARA QUE SUBSANE ESA OMISIÓN.- Conforme a lo dispuesto por los artículos 3, 26 y 39 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), y los artículos 38, 38 bis, 40, 41 y 50 de la Ley de la Propiedad Industrial, se puede presentar una solicitud de registro de patente, incluyendo una solicitud internacional (PCT), en cualquier Estado que sea parte de aquél, y en el caso de nuestro país ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Instituto), quien deberá realizar un examen de forma a la solicitud y a la documentación anexa. Ahora bien, existe coincidencia entre las estipulaciones del Tratado y de la Ley referidos, en el sentido de que ninguna solicitud de patente (internacional o local), puede desecharse o considerarse abandonada por el incumplimiento de algún requisito establecido en tales ordenamientos, sin dar previamente al solicitante la oportunidad de corregir, subsanar o cumplir el requisito faltante. En tal virtud, como el tratado mencionado remite a la legislación nacional para que se dé al solicitante de una patente la oportunidad referida, es completamente válido conside-

rar lo que al respecto establece el artículo 50 de la Ley de la Propiedad Industrial, por el ser el precepto legal que de manera específica regula la situación relativa a que cuando una solicitud de patente y la documentación anexa a la misma resulte imprecisa u omisa en algún aspecto, como no adjuntar la traducción al español de una solicitud anterior que se pretenda sea reconocida como prioridad, el Instituto pueda requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario, o se subsanen las omisiones detectadas, dentro de un plazo de dos meses, y que si el solicitante no cumple ese requerimiento, su solicitud se considerará abandonada, es decir, que no puede desecharse de plano o considerarse abandonada una solicitud con omisiones, sin ese requerimiento previo. Cabe señalar que el vocablo "podrá" utilizado en el numeral 50 en comento no significa que se trate de una facultad discrecional para el Instituto, sino que esa expresión se refiere a la obligación de hacerlo en caso de ser necesario; esto es, el precepto aludido señala con certeza los casos en que procede el requerimiento respectivo, para que se precise o aclare la solicitud o para que se subsanen sus omisiones, y ese señalamiento obliga al Instituto a dar la oportunidad al solicitante de subsanar lo que corresponda a su solicitud de patente, como también lo establece el artículo 26 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, sin que deba aplicarse lo que establece el artículo 5° del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, en su antepenúltimo párrafo, en virtud de que es la propia ley, en su artículo 50, la que de manera específica regula la situación concreta.

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día treinta de junio de dos mil diez, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO JURISDICCIONAL DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/22/2010

SE FIJA LA JURISPRUDENCIA N° VI-J-SS-70

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75 y 76 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 18, fracción IX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al haberse resuelto en el mismo sentido los juicios contencioso administrativos 17240/06-17-05-6/1049/07-PL-03-04, por mayoría de 9 votos a favor y 2 votos en contra, 13821/07-17-05-7/634/08-PL-07-04, por mayoría de 10 votos a favor y 1 voto en contra, y 35821/07-17-01-6/907/09-PL-07-04, por mayoría de 8 votos a favor y 2 votos en contra, se fija la jurisprudencia N° VI-J-SS-70, bajo los siguientes rubro y texto:

CIRCULARES EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO. SU LEGALIDAD.- De conformidad con el artículo 5, fracción II, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro tiene facultades para emitir reglas de carácter general a las que deben sujetarse los participantes de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, por lo cual, si la Comisión en uso de esas atribuciones determina en una Circular que los formatos de solicitud de registro y de constancia de registro deben incluir determinados íconos, como lo son la leyenda “siembra y cosecha”, la precisión del sitio web “e-sar” y la identificación de la página de internet del Sistema, con la especificación de que es factible cambiar de Afore por internet, no puede considerarse que ello exceda el esquema de la ley de la materia, pues la Comisión tiene facultades expresamente conferidas por el legislador para tales efectos, máxime que el manejo de estos fondos se considera de interés público, por lo cual si la incorporación de los elementos descritos tiende a mantener informados a los trabajadores respecto al estado de sus respectivas cuentas, e incluso les brinda información para que puedan cambiar de Afore si así lo consideran

pertinente, la emisión de la Circular no constituye una actuación de la Comisión que vaya más allá de lo establecido en ley, sino que precisamente en uso de una facultad específicamente delegada por el legislador y atendiendo al interés público de que está revestido el Sistema de Ahorro para el Retiro, es que puede emitir este tipo de reglas que tienden a hacer más claro y transparente para los trabajadores el manejo de los fondos que aportan.

Así lo acordó el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día ocho de septiembre de dos mil diez, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO JURISDICCIONAL DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/23/2010

SE FIJA LA JURISPRUDENCIA N° VI-J-SS-71

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75 y 76 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 18, fracción IX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al haberse resuelto en el mismo sentido los juicios de convenios para evitar la doble tributación 27939/07-17-06-3/1329/08-PL-03-09, por mayoría de 9 votos a favor y 2 votos en contra, 3687/06-17-06-5/418/09-PL-08-09, por unanimidad de 9 votos a favor, y 28006/07-17-02-6/358/09-PL-01-09, por mayoría de 7 votos a favor y 3 votos en contra, se fija la jurisprudencia N° VI-J-SS-71, bajo los siguientes rubro y texto:

> **CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN.-** Para la aplicación de Convenios de esta naturaleza, no sólo se deben reunir los requisitos que establece el artículo 5° de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sino que es conveniente que además se analicen los siguientes elementos: a) Si el ingreso está o no gravado conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta en México; b) Apreciar si existe en el Convenio respectivo algún beneficio respecto del gravamen que en su caso se genere; c) Analizar si es factible o no aplicar el beneficio, a la luz de los requisitos que se establezcan en la Ley del Impuesto sobre la Renta; y, d) Estudiar los efectos del beneficio. Una vez valorados estos requisitos se podrá concluir si el Convenio en cuestión es aplicable o no al caso concreto.

Así lo acordó el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día ocho de septiembre de dos mil diez, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO JURISDICCIONAL DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/24/2010

SE FIJA LA JURISPRUDENCIA N° VI-J-SS-72

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75 y 76 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 18, fracción IX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al haberse resuelto en el mismo sentido los juicios de convenios para evitar la doble tributación 27939/07-17-06-3/1329/08-PL-03-09, por mayoría de 9 votos a favor y 2 votos en contra, 3687/06-17-06-5/418/09-PL-08-09, por unanimidad de 9 votos a favor, y 28006/07-17-02-6/358/09-PL-01-09, por mayoría de 7 votos a favor y 3 votos en contra, se fija la jurisprudencia N° VI-J-SS-72, bajo los siguientes rubro y texto:

> **BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 5° DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.-** De la lectura del artículo 5º de la Ley del Impuesto sobre la Renta se desprende con claridad que los beneficios de los Tratados para evitar la doble tributación sólo serán aplicables a los contribuyentes que acrediten ser residentes en el país de que se trate, y cumplan con las disposiciones del propio Tratado, de donde se concluye que cuando en un Convenio de esta naturaleza se establece un porcentaje de retención menor al que se señala en la Ley de la Materia, no se está en presencia del establecimiento de una nueva tasa impositiva, sino de la aplicación de un beneficio derivado del Tratado y reconocido con ese carácter por el legislador en el artículo 5º citado.

Así lo acordó el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día ocho de septiembre de dos mil diez, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO JURISDICCIONAL DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/25/2010

SE FIJA LA JURISPRUDENCIA N° VI-J-SS-73

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75 y 76 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 18, fracción IX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al haberse resuelto en el mismo sentido los juicios de convenios para evitar la doble tributación 27939/07-17-06-3/1329/08-PL-03-09, por mayoría de 9 votos a favor y 2 votos en contra, 3687/06-17-06-5/418/09-PL-08-09, por unanimidad de 9 votos a favor, y 28006/07-17-02-6/358/09-PL-01-09, por mayoría de 7 votos a favor y 3 votos en contra, se fija la jurisprudencia N° VI-J-SS-73, bajo los siguientes rubro y texto:

> **REGALÍAS. EL PAGO POR EL USO DE CUALQUIER TIPO DE SOFTWARE LAS GENERA.-** El artículo 15-B del Código Fiscal de la Federación, en su primer párrafo señala que se consideran regalías, entre otros, los pagos de cualquier clase por el uso o goce temporal de patentes, certificados de invención o mejora, marcas de fábrica, nombres comerciales, derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas y grabaciones para radio o televisión, así como de dibujos o modelos, planos, fórmulas, o procedimientos y equipos industriales, comerciales o científicos, así como las cantidades pagadas por transferencia de tecnología o informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, u otro derecho o propiedad similar; es decir, abarca todo el género de creaciones científicas como regalías. Y, en su segundo párrafo, hace una distinción precisando que incluye a los programas o conjunto de instrucciones para computadoras. De esta forma, es válido apuntar que el software utilizado para el funcionamiento de conmutadores telefónicos genera regalías. Por ello, debe entenderse que dichos programas de software comparten la calidad de obra científica, y forman parte del género al que el primer párrafo del artículo

15-B considera como regalía. El hecho de que el segundo párrafo se refiera a los programas de cómputo es a manera de ejemplo, puesto que utiliza el vocablo “entre otros”, lo cual evidencia que no son los únicos que abarca. De esta forma, no puede circunscribirse la aplicación del artículo 15-B únicamente a los programas de computadoras, porque no resulta congruente con la finalidad del ordinal, que solamente los programas para computadoras u ordenadores generen el pago de regalías, y que cualquier otro software para algún otro dispositivo no las genere.

Así lo acordó el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día ocho de septiembre de dos mil diez, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO JURISDICCIONAL DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/26/2010

SE FIJA LA JURISPRUDENCIA N° VI-J-SS-74

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75 y 76 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 18, fracción IX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al haberse resuelto en el mismo sentido los juicios de convenios para evitar la doble tributación 27939/07-17-06-3/1329/08-PL-03-09, por mayoría de 9 votos a favor y 2 votos en contra, 3687/06-17-06-5/418/09-PL-08-09, por unanimidad de 9 votos a favor, y 28006/07-17-02-6/358/09-PL-01-09, por mayoría de 7 votos a favor y 3 votos en contra, se fija la jurisprudencia N° VI-J-SS-74 bajo los siguientes rubro y texto:

> **REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO DE UN CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN.-** De conformidad con el artículo 5º de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para poder aprovechar los beneficios derivados de los tratados para evitar la doble tributación, es necesario que el contribuyente que pretende acogerse a los mismos acredite ser residente del país con el que se celebró el Convenio. Para ello, el citado precepto establece que será el propio contribuyente que pretende obtener esos beneficios el que debe solicitar a quien realice el pago de los bienes o servicios que le efectúe la retención correspondiente, o solicitar con posterioridad la devolución correspondiente, lo cual, en el primer caso, implica que es el propio residente en el extranjero el que debe solicitar que se efectúe la retención a una menor tasa, de lo que válidamente se puede inferir que en vez de que se le aplique la tasa correspondiente, se acoge al beneficio.

Así lo acordó el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día ocho de septiembre de dos mil diez, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Fir-

man el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO JURISDICCIONAL DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/28/2010

SE FIJA LA JURISPRUDENCIA N° VI-J-SS-65

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 18, fracción IX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al haberse resuelto la contradicción de sentencias 20394/06-17-06-7/Y OTRO/211/09-PL-09-01, el 16 de junio de 2010, por unanimidad de 10 votos a favor, se fija la jurisprudencia N° VI-J-SS-65, bajo los siguientes rubro y texto:

JEFE DE LA UNIDAD DE REVISIÓN Y LIQUIDACIÓN FISCAL, DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. ES INNECESARIA LA INVOCACIÓN DE LA FUNDAMENTACIÓN DE SU COMPETENCIA TERRITORIAL, DADO SU CARÁCTER DE AUTORIDAD FEDERAL Y ENCONTRARSE ESTABLECIDAS SUS ATRIBUCIONES EN EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.- Para cumplir con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 constitucional, es necesario que la autoridad, sea fiscal o administrativa, precise su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida. Así, la competencia en cuanto es territorial, encuentra su razón en la organización propia del ente que esté ejerciendo esas atribuciones; en relación a ello, debe partirse de la consideración de que las autoridades federales tienen a priori competencia en todo el territorio nacional, porque tienen jurisdicción federal. En consecuencia, debe distinguirse la manera en la cual las autoridades de carácter federal y las locales atienden el requisito de fundamentación y motivación de su competencia por razón del territorio en el que pueden ejercer las facultades otorgadas; las hipótesis que deben distinguirse son: a) Cuando existe el precepto jurídico que

expresamente dispone el ámbito espacial de competencia de las autoridades federales, es claro que aunque las mismas tienen originariamente competencia en todo el territorio nacional, cumplen con el requisito de fundamentación y motivación referido con la cita del precepto legal o reglamentario correspondiente; b) Cuando la norma reglamentaria establece a una determinada unidad administrativa federal el ejercicio de alguna atribución -prevista originariamente en la ley-, sin distinguir su ámbito de aplicación o cuando el Reglamento omite indicar que su ejercicio abarca todo el territorio nacional, debe entenderse que su aplicación puede efectuarse en todo ese ámbito espacial, dado el carácter federal de la autoridad de que se trate y, por ende, con jurisdicción en todo el territorio nacional, por lo que es lógico concluir que no existe el deber de citar precepto alguna relativo a la competencia espacial, al no existir el mismo y, sobretodo, porque tal competencia la tiene originariamente en todo el territorio nacional, dado su carácter de autoridad federal; c) En el supuesto de las autoridades locales o regionales, se exige indefectiblemente la invocación de los instrumentos normativos que especifican su circunscripción territorial, mediante la invocación de los preceptos previstos en ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida. Por tanto, el Jefe de la Unidad de Revisión y Liquidación Fiscal, de la Comisión Nacional del Agua, no requiere citar los preceptos jurídicos que le conceden competencia en todo el territorio nacional, pues aunque el Reglamento en estudio omite precisar el ámbito de aplicación de las atribuciones previstas en los artículos 45, fracción XI, y 55, fracciones IV, V, VI, IX, XI, y XIV, del Reglamento Interior de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, lo cierto es que por tener el carácter de autoridad federal y no el de una autoridad regional, puede ejercer esas facultades en todo el ámbito del territorio nacional, al ser esa unidad depositaria de las atribuciones que la Comisión Nacional del Agua, tiene conferidas específicamente y que le son otorgadas sin limitación de territorio. Lo anterior, sin perjuicio de estar obligada a fundar debidamente su competencia material, a través de la cita de los artículos mencionados, el último en la fracción que corresponda a la facultad que la autoridad ejerza, así como los demás que corresponda.

Así lo acordó el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día veinte de septiembre de dos mil diez, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO JURISDICCIONAL DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/30/2010

SE FIJA LA JURISPRUDENCIA N° VI-J-SS-69

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 18, fracción IX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al haberse resuelto la contradicción de sentencias 24665/06-17-02-1/106/09-PL-05-10/Y OTRO/2440/09-PL-01-01, el 30 de junio de 2010, por mayoría de 9 votos a favor y 2 votos en contra, se fija la jurisprudencia N° VI-J-SS-69, bajo los siguientes rubro y texto:

SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN. LEGISLACION APLICABLE AL REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OMISIÓN DE PRESENTAR LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE LOS DOCUMENTOS QUE LA ACOMPAÑEN.- El artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece que cuando los escritos que presenten los interesados no contengan los datos o no cumplan con los requisitos aplicables, la dependencia u organismo descentralizado correspondiente deberá prevenirlos, por escrito y por una sola vez, para que subsanen la omisión dentro del término que establezca la dependencia u organismo descentralizado, el cual no podrá ser menor de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación; transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar la prevención, se desechará el trámite. También establece que de no realizarse la prevención referida dentro del plazo aplicable, no se podrá desechar el trámite argumentando que está incompleto. Al respecto cabe destacar que conforme al artículo 1º de la citada ley, ésta resulta aplicable a los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal Paraestatal, como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de conformidad con el artículo 6º de la Ley de la Propiedad Industrial. Además, tratándose de solicitudes de registro de patentes de invención, internacionales o

locales, el artículo 50 de la Ley de la Propiedad Industrial, que es la ley especial que regula ese trámite, establece que una vez que se presenta la solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, éste debe realizar un examen de forma de la documentación, con la obligación de requerir al solicitante que se precise o aclare en lo que considere necesario, o se subsanen sus omisiones, así como que sólo en el caso de que el solicitante no cumpla dicho requerimiento en un plazo de dos meses, se considerará abandonada la solicitud, lo que corrobora la obligación que tiene la autoridad de prevenir o requerir al particular para que aclare o subsane cualquier solicitud cuando ésta sea imprecisa, poco clara o no cumpla con todos los requisitos necesarios, en forma previa a desechar aquélla, como lo establece, de forma general, el artículo 17-A, referido en primer término.

Así lo acordó el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día veinte de septiembre de dos mil diez, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO JURISDICCIONAL DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/32/2010

SE FIJA LA JURISPRUDENCIA N° VI-J-SS-76

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75 y 76 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 18, fracción IX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al haberse resuelto en el mismo sentido los juicios de tratados internacionales 427/08-18-01-8/2798/09-PL-07-10, por unanimidad de 7 votos a favor, 4249/08-07-01-8/3004/09-PL-07-10, por mayoría de 8 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 1 voto en contra, y 952/07-09-01-8/575/08-PL-03-10, por unanimidad de 9 votos a favor, se fija la jurisprudencia N° VI-J-SS-76 bajo los siguientes rubro y texto:

> **JURISPRUDENCIA DEL PODER JUDICIAL FEDERAL. RESULTA OBLIGATORIA PARA EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA CUANDO SEA APLICABLE A LA HIPÓTESIS CONCRETA SOMETIDA A SU CONSIDERACIÓN.-** Los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo disponen que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en Pleno o en Salas, así como la jurisprudencia que establezca cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito, es obligatoria para los Tribunales Administrativos, como lo es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Por tal motivo, si el Poder Judicial ha declarado la inconstitucionalidad de una norma legal, este Tribunal Federal al aplicar la jurisprudencia no realiza pronunciamiento alguno relativo a la inconstitucionalidad de la norma, ni la aplica en forma retroactiva, ni suple la deficiencia de la queja, sino únicamente se constriñe a dar acatamiento a lo señalado por los referidos artículos de Ley de Amparo aplicando la jurisprudencia conducente. Por lo antes expuesto, la obligatoriedad que el artículo 192 de la Ley de Amparo dispone en la aplicación de las jurisprudencias que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

funcionando en Pleno o en Salas, no supone la suplencia de la deficiencia de la queja en los juicios contencioso administrativos cuando el acto cuya nulidad se reclama se funda o pretende escudarse en leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia, pues tal situación está supeditada a que en el caso concreto sea procedente su aplicación.

Así lo acordó el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día veinte de septiembre de dos mil diez, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO JURISDICCIONAL DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/33/2010

SE FIJA LA JURISPRUDENCIA N° VI-J-SS-77

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75 y 76 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 18, fracción IX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al haberse resuelto en el mismo sentido los juicios de tratados internacionales 28876/07-17-01-3/1816/08-PL-07-10, por mayoría de 8 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 2 votos en contra, 1589/08-EPI-01-7/1449/09-PL-08-10, por mayoría de 8 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 1 voto en contra, y 992/08-EPI-01-1/2620/09-PL-08-10, por mayoría de 9 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 1 voto en contra, se fija la jurisprudencia N° VI-J-SS-77 bajo los siguientes rubro y texto:

MARCAS INDICATIVAS O DESCRIPTIVAS.- NO SE DA ESE SUPUESTO CUANDO SUS ELEMENTOS NO SON CARACTERÍSTICOS DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE PRETENDEN PROTEGER.- El artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial establece en su primer párrafo y fracción IV que no serán registrables como marcas, las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en ese supuesto las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción. La fracción VI de dicho precepto establece que no serán registrables como marca la traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables. Por lo que, si del estudio integral de una marca se advierte que sus elementos no son indicativos ni descriptivos de los productos que pretende proteger en una clase determinada, esto en relación a la especie, calidad, canti-

dad, composición, destino, valor, lugar de origen o la época de producción, además de que la traducción de los elementos de dicha marca no se advierta que son indicativos de los productos a proteger, es evidente que debe concederse el registro de la misma.

Así lo acordó el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día veinte de septiembre de dos mil diez, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO JURISDICCIONAL DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/34/2010

SE FIJA LA JURISPRUDENCIA N° VI-J-SS-78

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75 y 76 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 18, fracción IX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al haberse resuelto en el mismo sentido los juicios de tratados internacionales 981/08-06-01-9/1440/09-PL-06-10, por mayoría de 10 votos a favor y 1 voto en contra, 14767/06-17-03-9/1729/09-PL-08-10, por mayoría de 8 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 1 voto en contra, y 770/08-18-01-8/363/09-PL-08-10, por mayoría de 8 votos a favor y 1 voto en contra, se fija la jurisprudencia N° VI-J-SS-78 bajo los siguientes rubro y texto:

AGENTE ADUANAL. PARA QUE OPERE LA EXCLUYENTE DE SU RESPONSABILIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN III, DE LA LEY ADUANERA, BASTA CON QUE SE ACREDITEN LOS REQUISITOS EXPRESAMENTE CONTEMPLADOS EN LA NORMA.- El precepto mencionado establece que el agente aduanal no será responsable de las contribuciones omitidas que se deriven de la aplicación de un arancel preferencial, cuando de conformidad con algún tratado o acuerdo internacional del que México sea parte se requiera de un certificado de origen que ampare las mercancías, siempre que conserve copia del mismo y se asegure que se encuentra en el formato oficial aprobado, que ha sido llenado en su totalidad conforme a su instructivo y se encuentra vigente a la fecha de la importación. En este sentido, basta con que estén acreditados en autos los anteriores supuestos normativos para que opere la excluyente de responsabilidad relativa, sin que puedan exigirse requisitos adicionales, como el consistente en que el agente aduanal conserve y presente la documentación comprobatoria de la custodia de las mercancías por parte de la autoridad de un país no miembro del tratado o acuerdo internacional correspondiente, o bien, del cum-

plimiento de todas las formalidades que, a pesar de resultar necesarias para la aplicación del trato arancelario preferencial, sean diversas a certificados de origen. Adoptar un criterio distinto implicaría agregar requisitos diversos a los expresamente establecidos por el legislador federal para que opere una excluyente de responsabilidad, en contravención al principio de legalidad al que deben ajustarse los actos de autoridad.

Así lo acordó el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día veinte de septiembre de dos mil diez, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

SALA SUPERIOR
SEGUNDA SECCIÓN
ACUERDO G/S2/24/2010

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 75, segundo párrafo, y 76, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; 23, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y 18, fracción I, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; al haberse aprobado en los correspondientes Incidentes de Incompetencia en Razón del Territorio cinco precedentes en el mismo sentido, no interrumpidos por otro en contrario, se fija la Jurisprudencia VI-J-2aS-53, correspondiente a la Sexta Época, cuyo tenor es el siguiente:

JURISPRUDENCIA VI-J-2aS-53

COMPETENCIA POR RAZÓN DEL TERRITORIO. SI LA DEMANDA SE ENVÍA POR CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO, LA SALA REGIONAL DEBE RESOLVER SOBRE SU COMPETENCIA, APLICANDO LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN LA FECHA EN QUE SE DEPOSITÓ LA DEMANDA EN EL SERVICIO POSTAL MEXICANO.- De acuerdo con el criterio adoptado por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la tesis de jurisprudencia V-J-SS-41, la competencia territorial de las Salas Regionales debe ser analizada a la luz de las disposiciones legales vigentes en la fecha en que se presentó la demanda, ya que es en este momento cuando las Salas pueden declararse legalmente incompetentes para conocer del asunto. Bajo este contexto, si la parte actora envía su demanda por correo certificado con acuse de recibo satisfaciendo las exigencias previstas en el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es inconcuso que la Sala Regional respectiva deberá resolver sobre su competencia territorial, aplicando las disposiciones vigentes en la fecha en que se depositó el

escrito de demanda en el Servicio Postal Mexicano, no así en la fecha en que materialmente se recibió en la Oficialía de Partes correspondiente.

PRECEDENTES PUBLICADOS:

VI-P-2aS-94

Incidente de Incompetencia en Razón del Territorio 2171/07-14-01-5/3019/08-17-08-7/523/08-S2-09-06, en el juicio contencioso administrativo promovido por Fypasa Construcciones, S.A. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 12 de junio de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrado Luis Carballo Balvanera, Ponencia asumida por el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Secretario: Licenciado Oscar Elizarrarás Dorantes. Precedente aprobado en la sesión privada ordinaria celebrada el martes 1° de julio de 2008, de la Sexta Época. Año I. Número 10. Octubre 2008. Página 435.

VI-P-2aS-95

Incidente de Incompetencia en Razón del Territorio 3148/07-09-01-3/2624/08-17-08-4/595/08-S2-07-06, en el juicio contencioso administrativo promovido por Avon Cosmetics, S. de R.L. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 8 de julio de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Secretaria: Licenciada María Elda Hernández Bautista. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año I. Número 10. Octubre 2008. Página 435.

VI-P-2aS-157

Incidente de Incompetencia en Razón del Territorio 9/08-18-01-1/9963/08-17-04-8/1057/08-S2-09-06, promovido por Avon Cosmetics, S. de R.L. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 23 de octubre de 2008, por unanimidad de 4 votos a favor. Ponente: Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Secretaria: Licenciada María Teresa Martínez García. Prece-

dente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año II. Número 15. Marzo 2009. Página 362.

VI-P-2aS-321
Incidente de Incompetencia en Razón del Territorio 1568/08-02-01-1/34054/08-17-06-4/340/09-S2-06-06, en el juicio contencioso administrativo promovido por Grupo Corporativo de Organización Administrativa S.C. de R.L. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 6 de agosto de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor. Ponente: Magistrado Alfredo Salgado Loyo, Secretario: Licenciado Ernesto Christian Grandini Ochoa. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año II. Número 22. Octubre 2009. Página 191.

VI-P-2aS-542
Incidente de Incompetencia en Razón del Territorio 844/09-12-03-1/1512/09-S2-09-06, en el juicio contencioso administrativo promovido por José Sifuentes Aguilar. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 11 de mayo de 2010, por unanimidad de 4 votos a favor. Ponente: Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Secretario: Licenciado Juan Carlos Mateo Leyva. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año III. Número 31. Julio 2010. Página 157.

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el martes diecinueve de octubre de dos mil diez.- Firman para constancia, el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

SALA SUPERIOR
SEGUNDA SECCIÓN
ACUERDO G/S2/25/2010

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 75, segundo párrafo, y 76, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; 23, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y 18, fracción I, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; al haberse aprobado en los correspondientes Incidentes de Incompetencia en Razón del Territorio cinco precedentes en el mismo sentido, no interrumpidos por otro en contrario, se fija la Jurisprudencia VI-J-2aS-54, correspondiente a la Sexta Época, cuyo tenor es el siguiente:

JURISPRUDENCIA VI-J-2aS-54

INCOMPETENCIA TERRITORIAL.- CONOCERÁN DEL INCIDENTE LAS SECCIONES DE LA SALA SUPERIOR QUE POR TURNO CORRESPONDA.- Con fundamento en el artículo 23, fracción VII de la Ley Orgánica de este Tribunal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, en vigor desde el 7 siguiente del mismo mes y año, son facultades de las Secciones, entre otras resolver los conflictos de competencia que se susciten entre las Salas Regionales. En ese orden de ideas, si una de las partes en el juicio plantea la incompetencia en razón del territorio a que se refiere el artículo 30, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, vigente desde enero de 2006, corresponderá conocer de la misma a las Secciones de la Sala Superior que por turno corresponda.

PRECEDENTES PUBLICADOS:

VI-P-2aS-142

Incidente de Incompetencia en Razón del Territorio 30742/06-17-07-8/1052/08-S2-07-06, en el juicio contencioso administrativo promovido por Juan Reyes Morales, representante legal de Tekrenta, S.A. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 16 de octubre de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Secretaria: Licenciada Adriana Domínguez Jiménez. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año II. Número 14. Febrero 2009. Página 373.

VI-P-2aS-226

Incidente de Incompetencia en Razón del Territorio 1937/08-07-02-9/18381/08-17-08-3/404/09-S2-08-06, en el juicio contencioso administrativo promovido por Cimexlana, S. de R.L. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 23 de abril de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrada Olga Hernández Espíndola, Secretario: Licenciado Juan Carlos Perea Rodríguez. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año II. Número 18. Junio 2009. Página 639.

VI-P-2aS-250

Incidente de Incompetencia en Razón del Territorio 5531/08-11-02-9/99/09-S2-08-06, en el juicio contencioso administrativo promovido por Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 26 de mayo de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrada Olga Hernández Espíndola, Secretario: Licenciado Juan Carlos Perea Rodríguez. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año II. Número 20. Agosto 2009. Página 233.

VI-P-2aS-403

Incidente de Incompetencia en Razón del Territorio 4919/09-17-02-9/1274/09-S2-07-06, en el juicio contencioso administrativo promovido por Silverio Guiño Barbosa. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 22 de octubre de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor. Ponente: Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Secretario: Licenciado José de Jesús González López. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año III. Número 25. Enero 2010. Página 162.

VI-P-2aS-545

Incidente de Incompetencia en Razón del Territorio 72/09-21-01-3/2688/09-S2-10-06, en el juicio contencioso administrativo promovido por Ge Capital CEF, México, S. de R.L. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 20 de mayo de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrado Luis Carballo Balvanera, Secretaria: Licenciada Rosa Guadalupe Olivares Castilla. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año III. Número 31. Julio 2010. Página 163.

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el martes diecinueve de octubre de dos mil diez.- Firman para constancia, el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

SALA SUPERIOR
SEGUNDA SECCIÓN
ACUERDO G/S2/26/2010

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 75, segundo párrafo, y 76, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; 23, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y 18, fracción I, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; al haberse aprobado en los correspondientes Recursos de Reclamación cinco precedentes en el mismo sentido, no interrumpidos por otro en contrario, se fija la Jurisprudencia VI-J-2aS-55, correspondiente a la Sexta Época, cuyo tenor es el siguiente:

JURISPRUDENCIA VI-J-2aS-55

SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO IMPUGNADO EN JUICIO. NO PROCEDE CONCEDERLA CUANDO SE PRETENDE GARANTIZAR MEDIANTE EL EMBARGO PRECAUTORIO, EN VIRTUD DE QUE ESTE ÚLTIMO TIENE UNA FINALIDAD DIVERSA DEL EMBARGO EN LA VÍA ADMINISTRATIVA Y DEL EMBARGO EN LA VÍA EJECUTIVA, ESTOS DOS ÚLTIMOS RESPECTO DE LOS CUALES SÍ SURTE EFECTOS DICHA MEDIDA CAUTELAR.- Con fundamento en el artículo 28 fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se establece que surtirá efectos la suspensión del acto impugnado relativo a la ejecución de créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Ahora bien, las leyes fiscales establecen como formas de garantías fiscales las previstas en el artículo 141, del Código Fiscal de la Federación, que en su fracción V, alude al embargo en la vía administrativa ofrecido por el propio interesado ante la autoridad ejecutora, así como la prevista en el artículo 144, penúltimo párrafo en relación con los artículos 145 y 151, fracciones I y II, del Código

Fiscal de la Federación, referente al embargo en la vía ejecutiva que es practicado de oficio por la propia autoridad interesada dentro del procedimiento administrativo de ejecución, por el que se permite no exigir garantía adicional si en el procedimiento administrativo de ejecución ya se hubieran embargado bienes suficientes para garantizar el interés fiscal. Por su parte, el embargo precautorio sobre mercancías tiene como fin garantizar el respeto al orden público y la satisfacción del interés social que exige el acatamiento de las normas legales respectivas, ello conforme a lo dispuesto en los artículos 146 de la Ley Aduanera, en relación con los artículos 60, 144 fracción X, 151 fracción III y 155, de la Ley Aduanera. Máxime, que las mercancías embargadas precautoriamente como una sanción impuesta en la resolución liquidatoria correspondiente pasan a propiedad del fisco federal, con fundamento en el artículo 183-A, de la Ley Aduanera. Por todo ello, las mercancías embargadas precautoriamente no constituyen una forma de garantizar el interés fiscal. En consecuencia dicho embargo precautorio no permite que surta efectos la suspensión de la ejecución de un crédito fiscal.

PRECEDENTES PUBLICADOS:

VI-P-2aS-15

Recurso de Reclamación 9054/06-11-02-2/1265/07-S2-07-05, en el juicio contencioso administrativo promovido por Chung Kwan Lee, representante legal de Moduni, S.A. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 7 de febrero de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Secretaria: Licenciada Adriana Domínguez Jiménez. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año I. Número 3. Marzo 2008. Página 145.

VI-P-2aS-62

Recurso de Reclamación 2085/07-14-01-1/429/08-S2-07-05, interpuesto por el Administrador Local Jurídico de Acapulco, en el Estado de Guerrero, del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público, en el juicio contencioso administrativo promovido por Anel Reyes Rebolledo. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 6 de mayo de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Secretario: Licenciado José de Jesús González López. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año I. Número 7. Julio 2008. Página 165.

VI-P-2aS-168

Recurso de Reclamación 707/08-14-01-8/1807/08-S2-07-05, interpuesto por el Administrador Local Jurídico de Acapulco, en el Estado de Guerrero, del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el juicio contencioso administrativo promovido por Juan José Valle Romero. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 27 de enero de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Secretaria: Licenciada María Elda Hernández Bautista. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año II. Número 15. Marzo 2009. Página 428.

VI-P-2aS-432

Recurso de Reclamación 17816/07-17-09-2/1902/08-S2-09-05, interpuesto por el Administrador Local Jurídico del Norte del Distrito Federal, del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el juicio contencioso administrativo promovido por Vivian Masri de Michan. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el viernes 27 de noviembre de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor. Ponente: Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Secretaria: Licenciada Thelma Semíramis Calva García. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año III. Número 26. Febrero 2010. Página 248.

VI-P-2aS-517

Recurso de Reclamación 758/08-02-01-7/154/10-S2-10-05, en juicio contencioso administrativo promovido por Daniel Cárdenas Ambris. Resuelto en la

sesión pública ordinaria celebrada el martes 23 de marzo de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrado Luis Carballo Balvanera, Secretaria: Licenciada Mónica Guadalupe Osornio Salazar. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año III. Número 30. Junio 2010. Página 170.

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el martes diecinueve de octubre de dos mil diez.- Firman para constancia, el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

ACUERDO G/JGA/22/2010

DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES CONCLUIDOS HASTA EL AÑO 2006.

La Junta de Gobierno y Administración, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 41, fracciones I y XXV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y para los efectos establecidos en los artículos 43, fracción II, 44, fracción II, 45, fracción VIII, y 97 fracción VII, del Reglamento Interior de este Tribunal, tiene a bien emitir el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Se ordena la depuración, baja y destrucción de los expedientes que hayan sido del conocimiento de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como de los expedientes tramitados en las Salas Regionales de este Órgano Jurisdiccional, que hayan concluido totalmente, a más tardar, el último día del año 2006, independientemente del año en que dichos expedientes dieron inicio, incluyendo muestras, pruebas y documentos agregados a los mismos.

SEGUNDO.- Para los efectos señalados en el numeral PRIMERO de este Acuerdo, el Jefe de Archivo del Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior y Secciones, el Jefe del Archivo General del Tribunal, y los Archivistas adscritos a las ponencias de las Salas Regionales, en el ámbito de su competencia deberán:

I) Realizar la depuración de los expedientes terminados con anterioridad y hasta el último día del año de 2006, y elaborar los listados de los expedientes a ser destruidos, e

II) Identificar los expedientes que tengan valor histórico o documental para su selección y envío al Archivo General de la Nación, considerando los siguientes criterios:

a) El asunto más cuantioso que se haya tramitado durante el año 2006;

b) Un expediente por cada tema de los más reiterados durante ese ejercicio;

c) El asunto de mayor relevancia de acuerdo a su significación e importancia por el tema jurídico novedoso;

d) Los expedientes que hayan servido de base para que la Sala Superior haya establecido precedente o jurisprudencia, y

e) Los expedientes que se hayan tomado en consideración para publicar tesis en la Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

TERCERO.- Para la depuración e identificación de los expedientes a que se refiere el numeral SEGUNDO de este Acuerdo, el Secretario de Acuerdos que corresponda de conformidad a la asignación que otorga el Sistema de Control y Seguimiento de Juicios, deberá:

I) Validar electrónicamente en el Sistema de Control y Seguimiento de Juicios, únicamente las sentencias que ya se encuentren registradas en dicho Sistema y que concluyeron definitivamente el juicio de los expedientes clasificados para destrucción o para envío al Archivo General de la Nación;

II) Verificar que el texto de las sentencias que constan en dicho Sistema, coinciden fiel y exactamente con sus originales que obran en los referidos expedientes, y

III) Otorgar expresamente su visto bueno para llevar a cabo la destrucción de los expedientes y, en su caso, el envío de expedientes al Archivo General de la Nación, firmando autógrafamente la relación correspondiente.

CUARTO.- Las partes interesadas que hayan presentado pruebas, muestras y documentos en los expedientes a destruir, deberán acudir al domicilio de la Sala en la

que se encuentren radicados a solicitar su devolución o expedición de las copias certificadas de su interés, en el término de 30 días contados a partir del día siguiente a la publicación de este Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo procederá su destrucción.

QUINTO.- A más tardar el 5 de noviembre del año en curso, los listados de expedientes a destruir, así como los expedientes clasificados conforme a los criterios de la fracción II del numeral SEGUNDO debidamente relacionados, se remitirán a la Contraloría Interna de este Órgano Jurisdiccional en los términos que la misma indique, atendiendo los lineamientos emitidos por el Archivo General de la Nación, para que dicha área haga la concentración que corresponda a fin de integrar el "Acervo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa" en el Archivo General de la Nación.

En tal virtud, la Sala que corresponda no dará trámite alguno a las solicitudes de devolución de documentos o expedición de copias certificadas de los expedientes enviados al Archivo en cita, ya que éstos integrarán el acervo histórico para ser consultados por los investigadores, no así para consulta por interés legal de las partes.

SEXTO.- La Contraloría Interna comunicará al Coordinador o, en su caso, al Presidente de las Salas Regionales con sede fuera del Distrito Federal, al Coordinador de las Salas Regionales Metropolitanas, al Secretario General de Acuerdos y al Jefe del Archivo General, la autorización del Archivo General de la Nación consistente en el Acta de Baja Documental, a fin de que se proceda a la destrucción de expedientes en la forma más conveniente para el Tribunal y de acuerdo con los medios disponibles, debiéndose levantar un acta por los servidores públicos responsables de llevar a cabo el acto de destrucción, pudiendo contar con la presencia de un representante de la Contraloría Interna del Tribunal. Asimismo, se deberá remitir una copia del acta señalada tanto a la Junta de Gobierno y Administración, como a la Contraloría Interna para su conocimiento y archivo correspondiente.

SÉPTIMO.- Se deberá colocar copia del presente Acuerdo en cada una de las ventanillas de las Oficialías de Partes, en los Estrados de este Órgano Jurisdiccional,

así como en otros lugares visibles del edificio de la sede que corresponda, donde tengan acceso tanto las partes como el público en general, levantando acta de la colocación de la misma, remitiendo copia de dicha acta a la Contraloría Interna de este Tribunal y a la Junta de Gobierno y Administración para su constatación y archivo.

OCTAVO.- La Contraloría Interna del Tribunal se encargará de la supervisión y cumplimiento del presente Acuerdo, así como de llevar a cabo las gestiones que se requieran ante el Archivo General de la Nación en todo lo relativo a la destrucción de expedientes.

NOVENO.- En las visitas que se realicen a las Salas Regionales durante el año 2010, los Magistrados Visitadores verificarán el debido cumplimiento del presente Acuerdo.

DÉCIMO.- Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.

Dictado en sesión del día primero de junio de dos mil diez.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Rabindranath Guadarrama Martínez, Secretario Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración, quien da fe, con fundamento en el artículo 52, fracciones II y III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con relación a los artículos 78, fracciones VIII y XI, y 103 del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

ACUERDO G/JGA/23/2010

PERSONAL QUE REALIZARÁ GUARDIAS DURANTE EL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL AÑO 2010.

La Junta de Gobierno y Administración, con fundamento en los artículos 41, fracción I, y 55, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como lo establecido en los artículos 46, fracción II, y 47 del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa los cuales establecen que durante las vacaciones del Tribunal, corresponde a esta Junta determinar el personal que deberá realizar las guardias necesarias en las diferentes regiones, para la atención de los asuntos que se requieran, así como dictar los acuerdos y disposiciones de carácter obligatorio y observancia general que regulen y den eficacia y eficiencia a sus actividades; tiene a bien dictar el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Se determina que durante el primer periodo vacacional del año 2010, el personal que realizará las guardias será el necesario únicamente para la recepción de promociones en la Oficialía de Partes que corresponda, en el horario de 8:30 a 15:30 horas señalado en el artículo 39 del Reglamento Interior del Tribunal, quienes serán designados por el Coordinador de Salas Regionales o Presidente de Sala Regional y el Secretario General de Acuerdos, según corresponda, conforme a lo establecido en el artículo 11, fracciones VII y VIII, del Reglamento Interior del Tribunal, eligiendo preferentemente al personal que no tenga derecho a vacaciones.

SEGUNDO.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como al Acuerdo G/2/2010 emitido por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior, en el periodo comprendido del 15 al 30 de julio de 2010 no correrán los plazos, por lo que los servidores públicos designados para realizar las guardias señaladas, deberán abstenerse de reali-

zar cualquier otra actividad jurisdiccional distinta a la establecida en el numeral Primero de este Acuerdo.

La documentación ingresada durante el citado periodo vacacional, se tendrá por recibida en el primer día hábil siguiente a su presentación, por lo que deberá asentarse de igual manera en el Sistema de Control y Seguimiento de Juicios.

TERCERO.- El personal designado rendirá a la Junta de Gobierno y Administración, por conducto de los servidores públicos señalados en el numeral PRIMERO del presente Acuerdo, un informe de las incidencias procesales o hechos relevantes acaecidos en el referido periodo vacacional, tales como las solicitudes de medidas cautelares y las solicitudes de suspensión presentadas en este periodo. Dicho informe deberá ser rendido a más tardar el 16 de agosto de 2010.

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.

Dictado en sesión del día veintinueve de junio de dos mil diez.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Rabindranath Guadarrama Martínez, Secretario Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración, quien da fe, con fundamento en el artículo 52, fracciones II y III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con relación a los artículos 78, fracciones VIII y XI, y 103 del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

ACUERDO G/JGA/24/2010

ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍA EN TRES DÍAS HÁBILES LA FECHA PARA PRESENTAR EL REPORTE MENSUAL DE MOVIMIENTOS DE EXPEDIENTES EN EL SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010.

La Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 41, fracciones I y XXIII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en relación con el artículo 66, fracción VIII del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y

CONSIDERANDO

Que corresponde a la Junta de Gobierno y Administración expedir los acuerdos necesarios para el buen funcionamiento del Tribunal, así como evaluar el funcionamiento del área de informática, a fin de constatar la adecuada prestación de sus servicios;

Que los días 23, 24 y 25 de agosto de 2010, se celebrará la XIX Reunión Anual de Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, evento al que han sido invitados los Magistrados de las Salas Regionales de este Órgano Jurisdiccional;

Que con motivo de su asistencia a la Reunión mencionada en el Considerando anterior, los Magistrados se verán imposibilitados para presentar el reporte mensual de movimientos de expedientes en el Sistema de Control y Seguimiento de Juicios, correspondiente el mes de agosto de 2010;

Que a fin de que los Magistrados de Salas Regionales presenten el reporte mensual de movimientos de expedientes correspondiente el mes de agosto de 2010,

resulta necesario ampliar en tres días hábiles el término para incorporar la información relativa a dicho reporte en el Sistema de Control y Seguimiento de Juicios;

Que por tratarse de un asunto de interés para el Tribunal, concretamente para las Salas Regionales, ha tenido a bien expedir el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Se amplía en tres días hábiles el término para presentar el reporte mensual de movimientos de expedientes en el Sistema de Control y Seguimiento de Juicios, correspondiente al mes de agosto de 2010, por lo que la fecha límite será el viernes 3 de septiembre de 2010 a las 23:50 horas.

SEGUNDO.- Comuníquese este Acuerdo a la Dirección General de Informática, para el efecto de que tome las medidas necesarias a fin de garantizar el acceso al Sistema de Control y Seguimiento de Juicios, por parte de las Salas Regionales del Tribunal durante los días 1, 2 y 3 de septiembre de 2010, hasta el horario señalado en el punto anterior.

TERCERO.- Infórmese el presente Acuerdo a los Magistrados Presidentes de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para que lo divulguen entre los servidores públicos de las Salas correspondientes.

Dictado en sesión del día diecinueve de agosto de dos mil diez.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Rabindranath Guadarrama Martínez, Secretario Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración, quien da fe, con fundamento en el artículo 52, fracciones II y III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con relación a los artículos 78, fracciones VIII y XI, y 103 del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

ACUERDO E/JGA/15/2010

REFORMA DEL ACUERDO E/JGA/7/2010, POR EL QUE SE EXPIDE EL PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE SOLICITUDES RELATIVAS A CORREGIR INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS.

La Junta de Gobierno y Administración, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 41, fracciones I, XXII, XXIII y XXXV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con relación al artículo 66, último párrafo, del Reglamento Interior del Tribunal, y

CONSIDERANDO

Que es facultad de la Junta de Gobierno y Administración expedir en el ámbito administrativo, los acuerdos necesarios para el buen funcionamiento del Tribunal, dirigir la buena marcha de este Órgano Jurisdiccional dictando las medidas necesarias para el despacho pronto y expedito de los asuntos administrativos del mismo, así como evaluar el funcionamiento del área de informática, a fin de constatar la adecuada prestación de sus servicios;

Que la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aprobó en sesión de 16 de febrero de 2010, el "Procedimiento para la autorización de solicitudes relativas a corregir información contenida en el Sistema de Control y Seguimiento de Juicios", mismo que quedó inserto en el Acuerdo E/JGA/7/2010, y

Que las necesidades del servicio demandan celeridad y facilidad para el trámite de las solicitudes relativas a corregir la información contenida en el Sistema de Control y Seguimiento de Juicios, por lo que se estima procedente modificar el Acuerdo

E/JGA/7/2010, particularmente en los numerales PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y QUINTO; por lo que este Órgano Colegiado ha tenido a bien expedir el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Se reforman los numerales PRIMERO, primer párrafo; SEGUNDO, único párrafo; TERCERO, único párrafo; CUARTO, primer párrafo e incisos a) y b), así como QUINTO, único párrafo y se adiciona un segundo párrafo al numeral QUINTO, del Acuerdo E/JGA/7/2010, que contiene el procedimiento para la autorización de solicitudes relativas a corregir información contenida en el Sistema de Control y Seguimiento de Juicios, para quedar como sigue:

"***PRIMERO.-*** *En caso de ser necesario corregir la información contenida en el Sistema de Control y Seguimiento de Juicios, la Sala Regional respectiva por conducto de su Presidente, el Titular de la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales Metropolitanas o el Coordinador de la Actuaría Común de las Salas Regionales Metropolitanas, deberá presentar su solicitud para corregir la información del referido Sistema ante la Unidad de Preparación y Seguimiento de Visitas, mediante oficio dirigido a la Junta de Gobierno y Administración, en el que se precisará la motivación de la petición, señalando el alcance y trascendencia de dicha solicitud, y en su caso, las consecuencias procesales que tendría la autorización o negativa de la modificación solicitada.*

...

...

SEGUNDO.- *La Unidad de Preparación y Seguimiento de Visitas analizará la solicitud de corrección y examinará las constancias de autos, cuando sea necesaria tal revisión para emitir su opinión, la cual someterá a consideración del Magistrado Visitador de la Sala Regional en donde este radicado*

el juicio de que se trate, quien otorgará, en su caso, su conformidad con la opinión formulada por la citada Unidad.

TERCERO.- *Realizado lo anterior, la Unidad de Preparación y Seguimiento de Visitas remitirá a la Junta de Gobierno y Administración, la solicitud de corrección y la opinión recaída a la misma, a fin de que la Junta, mediante acuerdo que al efecto dicte, autorice formalmente la solicitud de corrección, debiendo girar copia del acuerdo correspondiente a la Unidad de Preparación y Seguimiento de Visitas para su registro y control.*

CUARTO.- *Una vez que la Unidad de Preparación y Seguimiento de Visitas reciba el pronunciamiento de la Junta de Gobierno y Administración, procederá de la siguiente manera:*

a) En caso de que se hubiere autorizado la corrección solicitada, lo deberá comunicar a la Dirección General de Informática para que la efectúe de inmediato en el Sistema de Control y Seguimiento de Juicios, así como al Presidente de la Sala Regional que la hubiere solicitado, o en su caso, al Titular de la Oficialía de Partes Común o al Coordinador de la Actuaría Común referidos en el numeral PRIMERO de este Acuerdo.

b) Realizado el ajuste solicitado, verificará que la Dirección General de Informática lo haya comunicado por oficio al Presidente de la Sala Regional que hubiere solicitado la corrección, o en su caso, al Titular de la Oficialía de Partes Común o al Coordinador de la Actuaría Común referidos en el numeral PRIMERO de este Acuerdo, de lo cual dicha Dirección deberá enviar oficio a la Unidad de Preparación y Seguimiento de Visitas.

c) ...
d) ...

QUINTO.- *Para los efectos señalados en el punto TERCERO del presente acuerdo, las solicitudes, opiniones, y en su caso, propuestas de corrección de la información contenida en el Sistema de Control y Seguimiento de juicios serán elevadas al conocimiento de la Junta de Gobierno y Administración en las sesiones del mes en que se presenten tales peticiones.*

La Unidad de Preparación y Seguimiento de Visitas presentará un informe a la Junta de Gobierno y Administración, sobre las solicitudes para corregir la información aprobadas, o en su caso, rechazadas por dicho Órgano Colegiado, a más tardar en la segunda Sesión del mes siguiente."

SEGUNDO.- Comuníquese los términos de las reformas al Acuerdo E/JGA/7/2010 a los Presidentes de las Salas Regionales, al Titular de la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales Metropolitanas, al Coordinador de la Actuaría Común de las Salas Regionales Metropolitanas, a la Unidad de Preparación y Seguimiento de Visitas, así como a la Dirección General de Informática para su observancia.

Dictado en sesión del día diez de junio de dos mil diez.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Rabindranath Guadarrama Martínez, Secretario Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración, quien da fe, con fundamento en el artículo 52, fracciones II y III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con relación a los artículos 78, fracciones VIII y XI, y 103 del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

ACUERDO E/JGA/17/2010

LINEAMIENTOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DEL LOGOTIPO DE JUICIO EN LÍNEA.

La Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con fundamento en el artículo 41, fracciones I, XXII, y XXXI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y conforme a lo establecido en los artículos 3, 47, 67 y 68, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y

CONSIDERANDO

Que corresponde a la Junta de Gobierno y Administración expedir en el ámbito administrativo, los acuerdos necesarios para el buen funcionamiento del Tribunal, dirigir su buena marcha dictando las medidas necesarias para el despacho de los asuntos administrativos;

Que de igual manera, corresponde a la Junta de Gobierno y Administración supervisar la correcta operación y funcionamiento del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal para la tramitación de los juicios en línea, así como emitir los acuerdos normativos que contengan los lineamientos técnicos y formales que deban observarse en la substanciación del mencionado procedimiento electrónico;

Que en el artículo Tercero Transitorio, párrafo segundo, del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se establece que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deberá promover una campaña masiva entre los usuarios de los servicios del Tribunal para difundir las disposiciones del Juicio en Línea;

Que es necesario establecer Lineamientos para la correcta aplicación del logotipo de Juicio en Línea, a fin de que se refleje identidad y pertenencia del logo al organismo jurisdiccional;

Que la Junta de Gobierno y Administración realizó una minuciosa revisión del Logotipo que dota de identidad gráfica a la definición de "Juicio en Línea" y el "Manual de Aplicación y de Elementos Gráficos del Logotipo Juicio en Línea", propuestos por el Presidente del Tribunal y de este Cuerpo Colegiado, a efecto de dar cumplimiento al mandato establecido en la fracción XIII del artículo 1-A de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, la Junta de Gobierno y Administración acordó aprobar los siguientes:

LINEAMIENTOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DEL LOGOTIPO DE JUICIO EN LÍNEA.

PRIMERO.- Los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Secretario General de Acuerdos, los Titulares de las Secretarías Técnica, Operativas y Auxiliar, los Directores Generales, el Contralor Interno del Tribunal y en general todo el personal de este Órgano Jurisdiccional que genere documentos y/o productos en los que se incluya el logotipo de Juicio en Línea, deberán ajustarse a las indicaciones establecidas en el "Manual de Aplicación y de Elementos Gráficos del Logotipo Juicio en Línea", mismo que se anexa a los presentes Lineamientos.

SEGUNDO.- Para garantizar la correcta aplicación del logotipo de Juicio en Línea en los documentos y/o productos que sea incluido, se enviarán a la Dirección General de Comunicación Social de este Tribunal, por oficio y/o correo electrónico, la solicitud de visto bueno y las muestras de los documentos o productos en los que se utilizará el logotipo referido.

TERCERO.- Analizadas las muestras y/o documentos por la Dirección General de Comunicación Social, y de no existir observaciones o correcciones en el uso del logotipo Juicio en Línea, o una vez aplicadas éstas, se notificará el visto bueno correspondiente por oficio y/o correo electrónico en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de recepción en la mencionada unidad; si transcurrido el lapso mencionado no se han emitido observaciones por parte de la Dirección General, el uso del logotipo se tendrá por aprobado.

CUARTO.- La impresión de documentos o productos que no cuenten con visto bueno no serán responsabilidad de la Dirección General de Comunicación Social.

QUINTO.- Se instruye al Secretario Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración para comunicar los términos de estos Lineamientos a los servidores públicos señalados en el numeral primero de este Acuerdo, y publicarlo en la página Web del Tribunal para su difusión.

Dictado en sesión del día trece de julio de dos mil diez.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Rabindranath Guadarrama Martínez, Secretario Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración, quien da fe, con fundamento en el artículo 52, fracciones II y III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con relación a los artículos 78, fracciones VIII y XI, y 103 del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

ACUERDO E/JGA/18/2010

FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011.

La Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 41, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mismo que establece que le corresponde formular anualmente el proyecto de Presupuesto del Tribunal, para ser aprobado por el Pleno de la Sala Superior de este Órgano de Justicia, ha tenido a bien dictar el siguiente

A C U E R D O

PRIMERO.- Conforme a la información que fue presentada por la Secretaría Técnica Ejecutiva, en términos del artículo 41, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Junta de Gobierno y Administración tiene por formulado el Proyecto de Presupuesto del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para el Ejercicio Fiscal 2011, el cual asciende a la cantidad de $1’752’506,492.00 (Un mil setecientos cincuenta y dos millones quinientos seis mil cuatrocientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.), atendiendo al techo presupuestario comunicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SEGUNDO.- Remítase esta determinación al Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a fin de que proceda en términos del segundo párrafo del artículo 1º de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para su posterior presentación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el plazo conferido.

Dictado en sesión del día diecinueve de agosto de dos mil diez.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Rabindranath Guadarrama Martínez, Secretario Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración, quien da fe, con fundamento en el artículo 52, fracciones II y III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con relación a los artículos 78, fracciones VIII y XI, y 103 del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

ACUERDO E/JGA/19/2010

PLAN ADICIONAL DE PENSIONES DE CONTRIBUCIONES DEFINIDAS PARA LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

La Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con fundamento en lo establecido por los artículos 127, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretada *a contrario sensu*; 79 y 82 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 3 y 54 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 65 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 39 y 41, fracciones XII y XXII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 44 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 34 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 46, fracción III y 47 del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y

CONSIDERANDO

Que el Pleno de la Sala Superior, en sesión celebrada el día 9 de enero de 2008, acordó que hasta en tanto se integrara la Junta de Gobierno y Administración, el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con efectos a partir de la fecha de su nombramiento, tomara las decisiones que a la misma correspondan, a fin de continuar con la marcha normal del Tribunal, que permitiera garantizar a los gobernados la impartición de justicia pronta, completa e imparcial como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Que con base en el acuerdo referido en el considerando que antecede, el Presidente del Tribunal fijó entre otras líneas estratégicas para enfrentar la problemática

detectada en el Tribunal, las relativas a desarrollar un programa emergente para enfrentar el rezago, un proyecto de juicio en línea y un proyecto de sistema pensionario para Magistrados del Tribunal;

Que la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal quedó constituida el 6 de junio de 2008 y en sus sesiones celebradas los días 8 de julio de 2008, 27 de enero de 2009 y 5 de enero de 2010, con el objeto de asegurar el avance con fluidez y certidumbre del proyecto de sistema pensionario iniciado, autorizó al Presidente del Tribunal para continuar las gestiones necesarias a fin de llevar a cabo su implementación, concediéndosele las facultades suficientes para su diseño, cabildeo y presentación, asumiendo los Magistrados integrantes de dicha Junta el compromiso de apoyar al Presidente del Tribunal en la consecución del sistema pensionario, lo cual se hizo constar en las actas levantadas para tal efecto en cada una de las sesiones referidas;

Que conforme al contenido de la fracción IV del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado *a contrario sensu*, sólo se concederán jubilaciones o pensiones por servicios prestados, cuando éstas se encuentren asignadas por la ley;

Que los artículos 79 y 82 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, señalan que con el propósito de incrementar el monto de las pensiones e incentivar el ahorro interno de largo plazo, se fomentarán las aportaciones voluntarias y complementarias de retiro que puedan realizar los trabajadores o los patrones a las subcuentas correspondientes, y que los planes de pensiones establecidos por dependencias o entidades para su registro por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), deberán otorgarse en forma general en beneficio de todos los trabajadores, dictaminarse por Actuario registrado ante la CONSAR y cumplir con los requisitos que se determinen mediante disposiciones de carácter general;

Que con base en lo expuesto en los considerandos que anteceden, así como en las opiniones formuladas al respecto por distintas áreas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Presidencia del Tribunal elaboró un “Proyecto de Plan

Adicional de Pensiones de Contribuciones Definidas para los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa", el cual tiene por objeto establecer las reglas conforme a las cuales, los Magistrados del Tribunal que decidan incorporase, podrán recibir aportaciones que el propio Tribunal realice en la Subcuenta de Aportaciones Complementarias para el Retiro, de cada una de las Cuentas Individuales para Pensiones que los Magistrados aperturen en alguna institución financiera autorizada para abrir y administrar este tipo de cuentas, a fin de mejorar sus condiciones de jubilación o retiro previo cumplimiento de los requisitos establecidos en dicho Plan;

Que conforme a los artículos 39 y 41, fracciones XII y XXII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Junta de Gobierno y Administración es el órgano que tiene a su cargo la administración y vigilancia de dicho Órgano Jurisdiccional, con autonomía técnica y de gestión para el adecuado cumplimiento de sus funciones, y que cuenta con las atribuciones para acordar la distribución de los recursos presupuestales conforme a la ley, dictar las órdenes relacionadas con su ejercicio y supervisar su legal y adecuada aplicación, así como dirigir la buena marcha del Tribunal dictando las medidas necesarias para el despacho pronto y expedito de los asuntos administrativos del Tribunal, y

Que del análisis realizado al proyecto de Plan Adicional de Pensiones referido en el Considerando Sexto, y con el objeto de que el mismo pueda ser presentado a la CONSAR para su aprobación y registro en términos de las disposiciones aplicables, la Junta de Gobierno y Administración tiene a bien expedir el siguiente

PLAN ADICIONAL DE PENSIONES DE CONTRIBUCIONES DEFINIDAS PARA LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 1.- CONSTITUCIÓN DEL PLAN.- Con fecha 1o. de octubre de 2010 se constituye el Plan Adicional de Pensiones de Contribución Definida para los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los términos y condiciones de este documento.

ARTÍCULO 2.- OBJETO DEL PLAN.- El presente Plan tiene por objeto establecer las reglas conforme a las cuales se llevarán a cabo las contribuciones que en el mismo se establecen, a las Subcuentas de Aportaciones Complementarias de Retiro de las cuentas individuales de los Participantes, así como las condiciones para el retiro de los Beneficios del Plan, que permitan mejorar o adquirir alguna pensión.

ARTÍCULO 3.- GLOSARIO DE TÉRMINOS.- Para los efectos de este Plan se denominará:

Actuario:	El profesionista en materia actuarial que cuente con la certificación correspondiente del Colegio Nacional de Actuarios, A. C. para el ejercicio de la profesión, con especialidad en valuación de pasivos laborales contingentes, designado para la elaboración de los cálculos requeridos dentro del Plan, así como para el asesoramiento exigido para el adecuado funcionamiento del mismo y que se encuentre inscrito en el registro de actuarios autorizados de la CONSAR.
Administrador del Plan:	El Secretario Operativo de Administración.
AFORE:	La entidad financiera que cuente con autorización de la CONSAR para operar con tal carácter en la República Mexicana y que se dedica a administrar las cuentas individuales de los trabajadores, así como las instituciones públicas que realicen funciones similares.
Aseguradora:	La institución de seguros autorizada para operar los Seguros de Pensiones derivados de las Leyes de Seguridad Social.

Beneficios del Plan:	El derecho de los Participantes sobre las contribuciones que se realicen a sus Subcuentas de Aportaciones Complementarias de Retiro, a que se refiere el artículo 5 del Plan.
Comité Técnico:	El órgano integrado por las personas a que se refiere el Artículo 9 del presente documento, responsable del control y vigilancia del Plan.
CONSAR:	La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
Contribución de los Participantes al Plan:	La aportación mensual que realice cada uno de los Participantes, a la Subcuenta de Aportaciones Complementarias de Retiro de su cuenta individual, la cual podrá ser hasta por un monto que no exceda del equivalente al 5% (cinco por ciento) de su Salario de Cotización.
Contribución del Tribunal:	La aportación mensual que realice el Tribunal a la Subcuenta de Aportaciones Complementarias de Retiro de la cuenta individual de cada uno de los Participantes, la cual será equivalente a la Contribución de los Participantes al Plan.
Fecha de Aniversario del Plan:	El 31 de Diciembre de cada año subsecuente a la fecha de constitución del Plan, señalada en el Artículo 1 de este documento.
ISSSTE:	El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Jubilación o Pensión:	La renta o retiro programado, según lo define el artículo 6º fracción XVII, de la Ley del ISSSTE.

Ley Orgánica:	La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Participantes:	Los Magistrados del Tribunal a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 3 de la Ley Orgánica, que cumplan con los requisitos señalados en el artículo 4 del Plan.
Plan:	El Plan Adicional de Pensiones de Contribución Definida para los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a que se refiere el presente documento.
Sueldo o Salario de Cotización:	El Sueldo integral o integrado mensual, consignado en el Tabulador del Tribunal.
Subcuenta de Aportaciones Complementarias de Retiro:	La subcuenta de aportaciones complementarias de retiro de la cuenta individual que, en términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, tenga aperturada cada Participante en una AFORE, donde se depositará tanto la Contribución del Participante al Plan, como la Contribución del Tribunal.
Tribunal:	El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

ARTÍCULO 4.- REQUISITOS PARA SER PARTICIPANTE.- Los Magistrados del Tribunal a que se refiere el Artículo 3, fracciones I, II y III de la Ley Orgánica tendrán derecho a ser Participantes, siempre y cuando, en términos de lo establecido por el artículo 30-A fracción I del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, otorguen su consentimiento expreso para formar parte del Plan, en los formatos que para tal efecto le sean proporcionados por el Administrador del Plan.

Adicionalmente, cada Magistrado deberá:

I. Manifestar por escrito el monto de la aportación complementaria para el retiro que decida realizar mensualmente conforme a este Plan, la cual podrá ser hasta por un monto que no exceda del equivalente al 5% (cinco por ciento) de su Salario de Cotización, y

II. Autorizar al Tribunal para que realice, quincenalmente, los descuentos en nómina correspondientes a su aportación señalada en la fracción anterior, para que los deposite en su Subcuenta de Aportaciones Complementarias de Retiro.

ARTÍCULO 5.- BENEFICIOS Y REQUISITOS DE PAGO.- Los Beneficios del Plan constituyen el derecho de los Participantes sobre las contribuciones que se realicen a su Subcuenta de Aportaciones Complementarias de Retiro.

Los Beneficios del Plan estarán siempre a disposición de cada uno de los Participantes o de sus beneficiarios al 100%, más los rendimientos que se generen y únicamente podrán ser retirados en la forma y términos que a continuación se indican:

I. Cuando el Participante ejerza su derecho a un seguro de retiro, o bien se jubile por cesantía en edad avanzada o por vejez, conforme a lo establecido en las Secciones I, II, y III, del Capítulo VI, del Título Segundo de la Ley del ISSSTE;

II. En los casos de invalidez del Participante dictaminada en términos de lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley del ISSSTE;

III. Por muerte del Participante, o

IV. En los casos en que el Participante cumpla con los requisitos que establezcan las disposiciones legales en materia de los sistemas de ahorro para el retiro.

Una vez retirados los Beneficios del Plan, el Participante o sus beneficiarios podrán disponer libremente de ellos con las limitaciones establecidas por la Ley y destinarlos, entre otros objetos para adquirir alguna pensión, seguro de vida, seguro de

gastos médicos, para mejorar alguna pensión o para cualquier otro fin legalmente permitido.

ARTÍCULO 6.- BENEFICIARIOS.- Los Participantes del Plan tendrán derecho a designar beneficiarios para el caso de su fallecimiento o incapacidad física o mental ante la AFORE que administre su cuenta individual.

ARTÍCULO 7.- FINANCIAMIENTO DEL PLAN.- El Plan se financiará con las Contribuciones de los Participantes al Plan y la Contribución del Tribunal, mismas que serán depositadas por el Tribunal en la Subcuenta de Aportaciones Complementarias de Retiro de cada uno de los Participantes.

Si hubiere algún error al determinar cualquiera de las contribuciones referidas en el párrafo anterior que sean depositadas en la Subcuenta de Aportaciones Complementarias de Retiro de algún Participante, el Tribunal, oyendo la opinión del Participante, llevará a cabo los ajustes correspondientes, de tal manera que dicho error sea rectificado.

El Administrador del Plan, en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto del Tribunal para cada ejercicio fiscal, deberá integrar los recursos necesarios para llevar a cabo las Contribuciones del Tribunal a que se refiere el presente Plan, conforme a las estimaciones que realice para tal efecto la Dirección General de Programación y Presupuesto del Tribunal.

ARTÍCULO 8.- TERMINACIÓN, SUSPENSIÓN O MODIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN.- La Contribución de un Participante al Plan y la correspondiente Contribución del Tribunal a su Subcuenta de Aportaciones Complementarias de Retiro terminarán en los siguientes casos:

I. En el momento en que concluya su nombramiento como Magistrado del Tribunal;

II. Cuando se separe voluntariamente de su cargo por cualquier causa;

III. En el caso de que sea privado de su cargo en términos de lo establecido por el primer párrafo del Artículo 7 de la Ley Orgánica;

IV. Cuando se dé su retiro forzoso por cualquiera de las causas previstas en el segundo párrafo del artículo señalado en la fracción anterior, o

V. Cuando solicite por escrito su separación del Plan.

Las contribuciones referidas en el primer párrafo del presente artículo se suspenderán en aquellos casos en que los Participantes se separen temporalmente de su cargo ya sea por licencia sin goce de sueldo, por enfermedad o por suspensión de los efectos de su nombramiento conforme a la legislación federal aplicable. La suspensión de las contribuciones permanecerá por todo el tiempo que dure su separación temporal, y al término de la suspensión se reanudarán las contribuciones en sus mismos términos.

ARTÍCULO 9.- DE LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL PLAN.- La administración del Plan estará encomendada al Secretario Operativo de Administración, quien se auxiliará de los Directores Generales de Programación y Presupuesto y de Recursos Humanos del Tribunal, conforme a las atribuciones que tienen conferidas en el Reglamento Interior del Tribunal.

El Administrador del Plan podrá aceptar como válidas las tablas, valuaciones, certificaciones, informes, opiniones y determinaciones e instrucciones proporcionadas por un Actuario. Al hacerlo así, quedará liberado de toda responsabilidad con respecto a cualquier acción ejecutada de buena fe derivada de dicha aceptación.

Para el control y vigilancia del Plan, se constituirá un Comité Técnico integrado por el Presidente del Tribunal, quien lo presidirá, así como por los dos Magistrados de Sala Superior y los dos Magistrados de Sala Regional integrantes de la Junta de Gobierno y Administración.

A las sesiones del Comité se invitará de manera permanente, con voz pero sin voto, a los Secretarios Técnico Ejecutivo y Operativo de Administración de la Junta de Gobierno y Administración, así como al Contralor Interno del Tribunal, sin perjuicio de que el Comité pueda invitar a las personas que estime conveniente.

El Secretario Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración fungirá como Secretario Técnico del Comité, el cual no será miembro del mismo y concurrirá en las sesiones del Comité, sin derecho a voto, y estará encargado de convocar a las sesiones, elaborar las actas y hacer llegar a los miembros del Comité los asuntos a tratar en cada sesión.

Los cargos en el Comité Técnico serán honoríficos y por su desempeño no se percibirá remuneración alguna. Para que dicho Comité Técnico funcione legalmente deberán asistir a sus juntas o reuniones por lo menos la mayoría de sus integrantes, y sus decisiones serán válidas cuando sean tomadas por la mayoría de las personas presentes. De cada junta o reunión que efectúe el Comité Técnico se deberá levantar el acta correspondiente que firmará el Presidente y el Secretario Técnico del Comité.

El Comité Técnico se reunirá por lo menos una vez al año, con carácter ordinario, dentro de los cuatro meses que sigan a Fecha de Aniversario del Plan y de manera extraordinaria las veces que se requiera y tendrá las facultades siguientes:

I. Resolver todas aquellas cuestiones que sobre el Plan sometan a su consideración los Participantes o cualquiera autoridad que cuente con atribuciones relacionadas con el mismo;

II. Recibir el informe anual que deberá rendir el Secretario Operativo de Administración que contenga el monto de la Contribución del Tribunal y de los Participantes a las Subcuentas de Aportaciones Complementarias de Retiro de cada uno de ellos y, en su caso, emitir las observaciones o recomendaciones que correspondan;

III. Solicitar los informes que estime necesarios para verificar la ejecución del Plan;

IV. Supervisar la adecuada operación del Plan, interpretar sus disposiciones y, en su caso, dictar las medidas necesarias para su correcto funcionamiento, y

V. Aprobar cualquier modificación al Plan y en su caso, acordar la suspensión o terminación del mismo.

ARTÍCULO 10.- GENERALIDADES.- Los Beneficios del Plan serán considerados como un anticipo a cualquier otro beneficio que se determine por alguna otra disposición legal o contractual que en la materia exista o llegara a existir. En consecuencia, las Contribuciones del Tribunal a este Plan y los beneficios constitutivos del mismo deberán considerarse hechos a cuenta y en cumplimiento de las disposiciones legales o contractuales referidas.

El Tribunal no tendrá más obligaciones que las estipuladas específicamente en este Plan.

ARTÍCULO 11.- VIGENCIA.- El Plan iniciará su vigencia el primer día del mes de octubre del año dos mil diez y estará en vigor de manera indefinida.

Los depósitos de las contribuciones que, en términos del presente documento, deba realizar el Tribunal a la Subcuenta de Aportaciones Complementarias de Retiro de cada Participante, se realizarán una vez iniciada la vigencia del Plan, siempre y cuando la CONSAR haya aprobado y registrado el Plan y el Magistrado que corresponda haya cumplido con los requisitos establecidos por el Artículo 4 del Plan.

El Tribunal, por causas debidamente justificadas, tendrá el derecho de suspender o dar por terminado el presente Plan en cualquier momento, debiendo dar aviso de lo anterior a los Participantes, con cuando menos treinta días naturales de anticipación.

En caso de que el Tribunal dé por terminado el Plan, los Participantes tendrán derecho al retiro de los Beneficios del Plan, en términos de lo establecido por el artículo 5 de este instrumento jurídico.

ARTÍCULO 12.- GASTOS E IMPUESTOS.- Los gastos por concepto de comisiones y por la administración de las contribuciones que se realicen en las Subcuentas de Aportación Complementaria de Retiro, se regirán y serán cubiertas conforme a las condiciones y comisiones que tengan vigentes las AFORES que administren cada una de las cuentas individuales de los Participantes.

Los costos y gastos de los estudios y asesorías actuariales que se ordenen para la correcta administración del Plan por su administrador o por el Comité Técnico, serán a cargo del Tribunal.

Cualquier impuesto que pueda causarse por la implantación del Plan deberá ser cubierto por el Tribunal.

El impuesto a que estuvieren sujetos los Participantes al recibir los Beneficios del Plan, será a cargo exclusivo de los mismos, de conformidad con las fracciones III y X del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

ARTÍCULO 13.- INTERPRETACIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento del presente Plan, se estará a lo establecido en las disposiciones de la Ley del ISSSTE y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, según corresponda.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El Secretario Operativo de Administración del Tribunal, con fundamento en lo establecido por el artículo 82 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, deberá llevar a cabo los trámites que correspondan, para obtener la autorización y registro ante la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro,

del presente Plan Adicional de Pensiones de Contribuciones Definidas para los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

SEGUNDO.- El Secretario Operativo de Administración del Tribunal llevará a cabo las gestiones que correspondan con el objeto de que se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias que permitan cubrir las Contribuciones del Tribunal que procedan en términos del Plan durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2010.

Dado en sesión del día catorce de septiembre de dos mil diez.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Lic. Rabindranath Guadarrama Martínez, Secretario Auxiliar de la unta de Gobierno y Administración, quien da fe, con fundamento en el artículo 52, fracciones II y III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en relación con los artículos 78, fracciones VIII y XI y 103 del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

QUINTA PARTE

ÍNDICES GENERALES

ÍNDICE ALFABÉTICO DE JURISPRUDENCIAS DE SALA SUPERIOR

AGENTE Aduanal. Para que opere la excluyente de su responsabilidad conforme al artículo 54, fracción III, de la Ley Aduanera, basta con que se acrediten los requisitos expresamente contemplados en la norma. VI-J-SS-78.... 62

BENEFICIOS establecidos en el artículo 5° de la Ley del Impuesto sobre la Renta. VI-J-SS-72 52

CIRCULARES emitidas por la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro. Su legalidad. VI-J-SS-70 48

COMPETENCIA por razón del territorio. Si la demanda se envía por correo certificado con acuse de recibo, la Sala Regional debe resolver sobre su competencia, aplicando las disposiciones vigentes en la fecha en que se depositó la demanda en el Servicio Postal Mexicano. VI-J-2aS-53 64

CONVENIOS para evitar la doble tributación. VI-J-SS-71 50

INCOMPETENCIA territorial.- Conocerán del incidente las Secciones de la Sala Superior que por turno corresponda. VI-J-2aS-54..... 67

JEFE de la unidad de revisión y liquidación fiscal, de la Comisión Nacional del Agua. Es innecesaria la invocación de la fundamentación de su competencia territorial, dado su carácter de autoridad federal y encontrarse establecidas sus atribuciones en el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. VI-J-SS-65..... 7

JURISPRUDENCIA del Poder Judicial Federal. Resulta obligatoria para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cuando sea aplicable a la hipótesis concreta sometida a su consideración. VI-J-SS-76..... 58

MARCAS indicativas o descriptivas.- No se da ese supuesto cuando sus elementos no son característicos de los productos o servicios que pretenden proteger. VI-J-SS-77 60

REGALÍAS. El pago por el uso de cualquier tipo de software las genera. VI-J-SS-73 54

REQUISITOS para ser beneficiario de un Convenio para Evitar la Doble Tributación. VI-J-SS-74 56

SOLICITUD de registro de patente de invención. Cuando se omite presentar la traducción al español de los documentos adjuntos en idioma distinto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial está obligado a requerir al interesado para que subsane esa omisión. VI-J-SS-68 24

SOLICITUD de registro de patente de invención. Legislación aplicable al requerimiento para subsanar la omisión de presentar la traducción al español de los documentos que la acompañen. VI-J-SS-69 25

SUSPENSIÓN definitiva del acto impugnado en juicio. No procede concederla cuando se pretende garantizar mediante el embargo precautorio, en virtud de que este último tiene una finalidad diversa del embargo en la vía administrativa y del embargo en la vía ejecutiva, estos dos últimos respecto de los cuales sí surte efectos dicha medida cautelar. VI-J-2aS-55 70

ÍNDICE ALFABÉTICO DE PRECEDENTES DE SALA SUPERIOR

CANCELACIÓN de patente de agente aduanal. El procedimiento que lo prevé es independiente del procedimiento en materia aduanera. VI-P-SS-412 ... 286

CANCELACIÓN de patentes de agente aduanal.- Es competente el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para conocer de ellas. VI-P-SS-413 287

CERTIFICADO de circulación EUR-1. Cuando no sea aceptado por motivos técnicos, deberá devolverse para su corrección, antes de que concluyan los tres años de su vigencia. VI-P-SS-400 200

COMPETENCIA del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.- Se surte cuando en la demanda se invoca la violación a disposiciones contenidas en una regla de carácter general para la aplicación de diversas disposiciones de los tratados en materia comercial. VI-P-SS-411 283

COMPETENCIA del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Se surte cuando la demandante formula concepto de impugnación respecto de la violación al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. VI-P-SS-408 262

CONVENIO de París para la Protección de la Propiedad Industrial.- Alcance de la cláusula “tal cual es”. VI-P-SS-387 127

CONVENIO de París para la Protección de la Propiedad Industrial.- Alcance del artículo 6 quinquies tratándose de marcas descriptivas que hayan sido registradas en un país que lo suscribió. VI-P-SS-391 143

COPIAS ilegibles. Carecen de valor probatorio en el juicio contencioso administrativo federal. VI-P-2aS-624 428

DERECHO de oposición a la distribución de la obra.- Agotamiento internacional. VI-P-SS-394 172

DERECHO de oposición a la distribución de obras.- Es irrelevante el territorio dentro del cual se efectúe la primera venta. VI-P-SS-395 173

DERECHO moral y derecho patrimonial.- Diferencias. VI-P-SS-396 174

EMBARGO de cuentas bancarias.- Deben aplicarse las disposiciones relativas a éste y no las correspondientes a embargo de bienes muebles. VI-P-1aS-370 360

EMBARGO de cuentas bancarias.- Se trata de un acto consumado y no procede su liberación como una medida cautelar. VI-P-1aS-371 360

EMBARGO sobre cuentas bancarias.- Constituye un medio de garantía del interés fiscal, para efectos de obtener la suspensión de la ejecución del acto impugnado. VI-P-2aS-628 444

ESTADOS de Adeudos, Consulta Numérica de Patrones y Estados de Cuenta del Instituto Mexicano del Seguro Social.- No son idóneos para acreditar la ubicación del domicilio fiscal del actor. VI-P-2aS-613 403

FUNCIÓN distintiva de una marca.- Forma de constatación para su registro. VI-P-SS-403 229

FUNDAMENTO indebido.- La cita equivocada de un precepto no lleva necesariamente a que la resolución se encuentre indebidamente fundada, pues pueden señalarse otros que sean suficientes para sustentarla. VI-P-SS-414 .. 288

GARANTÍA del interés fiscal. El Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene que constituirla para efecto de obtener la suspensión de la ejecución de un crédito fiscal. VI-P-2aS-629 446

GARANTÍA del interés fiscal. El Instituto Mexicano del Seguro Social, órgano descentralizado de la Administración Pública Federal, no está obligado a su otorgamiento. VI-P-2aS-631 448

GARANTÍA del interés fiscal. El reconocimiento de que el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene que constituirla para efecto de obtener la suspensión de la ejecución de un crédito fiscal, no implica dispensa de la obligación relativa. VI-P-2aS-618 413

INCIDENTE de incompetencia.- Caso en que queda sin materia. VI-P-2aS-617 408

INCIDENTE de incompetencia interpuesto por la autoridad, a ella corresponde demostrar el domicilio fiscal que tenía la parte actora a la fecha de la interposición de la demanda. VI-P-2aS-621 423

INCIDENTE de incompetencia interpuesto por la demandada.- Caso en que ésta prueba con el Reporte General de Consulta de Información de Contribuyente el domicilio fiscal de la actora a la fecha de interposición de la demanda. VI-P-2aS-616 405

INCIDENTE de incompetencia territorial. La Cédula de Liquidación de Cuotas y la Cédula de Liquidación por Concepto de Multa, emitidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el Aviso de Inscripción Patronal o de Modificación en su Registro (Afil-01), presentado por el patrón ante el mencionado Instituto, no logran desvirtuar la presunción legal establecida en el artículo 34, último párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. VI-P-2aS-619 420

INCOMPETENCIA por materia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para conocer del juicio interpuesto en contra de disposiciones

emitidas por el titular del Ejecutivo Federal en ejercicio de su facultad reglamentaria. VI-P-SS-399 190

INSTITUCIONES de fianzas. La competencia territorial de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para conocer de los juicios ante ellas instaurados se determina atendiendo a la sede de la autoridad que emitió el acto impugnado. VI-P-2aS-626 441

LIBERACIÓN de cuentas bancarias embargadas.- No procede por el hecho de que el crédito fiscal que se garantiza, no se encuentre firme. VI-P-1aS-372 361

MANUALES de procedimientos. Son obligatorios para los servidores públicos a quienes van dirigidos. VI-P-SS-409 264

MARCAS.- Debe otorgarse el registro si no se refieren a elementos esenciales del producto o servicios al que se proponen destinar, ni a sus aplicaciones generales. VI-P-SS-404 230

MARCAS en idioma extranjero.- Si al traducirse no son descriptivas de los servicios que pretende proteger deben registrarse. VI-P-SS-405 231

MARCAS evocativas. Definición. VI-P-SS-410 265

MARCAS evocativas.- Procede otorgar su registro si la denominación en su conjunto goza de suficiente distintividad. VI-P-SS-390 129

MARCAS indicativas o descriptivas.- No se da ese supuesto cuando sus elementos no son característicos de los productos o servicios que pretende proteger. VI-P-SS-406 233

MARCAS propuestas a registro en idioma extranjero. No existe impedimento legal para que la autoridad sustente su estudio en definiciones o traducciones obtenidas en la Internet. VI-P-SS-407 237

MODIFICACIÓN de los efectos de una sentencia recurrida en términos del artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. VI-P-2aS-611 394

MULTAS administrativas federales. Debe otorgarse la garantía del interés fiscal para conceder la suspensión de su ejecución conforme al artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. VI-P-1aS-374 .. 372

OFICIO de impedimento legal. Su indebida motivación no afecta las defensas del particular cuando en el juicio se determina que el signo propuesto es registrable. VI-P-SS-401 217

OPOSICIÓN al derecho de distribución de la obra.- Doctrina de la primera venta. VI-P-SS-397 174

ORDEN de inspección emitida por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, cuando ésta es ilegal por ausencia de fundamentación de su competencia territorial, procede declarar la nulidad de la resolución sancionadora, sin necesidad de analizar los conceptos de impugnación del actor. VI-P-SS-393 166

ORIGEN de mercancías importadas de un país miembro de la Comunidad Europea. Puede hacerse constar en la factura comercial, el conocimiento de embarque o la lista de empaque, por el país exportador no miembro. VI-P-SS-418 336

PROCEDIMIENTO administrativo de ejecución. Es improcedente el juicio contencioso en contra de actos emitidos antes del remate por carecer de

definitividad, conforme al primer párrafo del artículo 127 del Código Fiscal de la Federación vigente a partir del 29 de junio de 2006. VI-P-2aS-623 426

QUEJA improcedente. No debe prevenirse al promovente para que la presente como demanda, cuando ya haya interpuesto un nuevo juicio en contra de la misma resolución que motivó aquélla instancia. VI-P-2aS-625 432

REGLAMENTOS expedidos por el Poder Ejecutivo.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es incompetente para conocer de los mismos. VI-P-SS-384 75

REPORTE General de Consulta de Información de Contribuyente, tiene valor probatorio cuando se exhibe en copia certificada, aun cuando ostente la leyenda: "este documento es de uso exclusivo de la S.H.C.P." VI-P-1aS-369 352

REPORTE General de Consulta de Información del Contribuyente.- No se acredita la ubicación del domicilio fiscal de la parte actora, si la situación del domicilio fiscal es "no localizado". VI-P-1aS-368 347

RESPONSABILIDAD patrimonial del Estado.- Corresponde al reclamante demostrar los elementos esenciales que la ley exige para tener derecho a la indemnización. VI-P-SS-417 325

SECRETARÍA de Comunicaciones y Transportes.- Está facultada para emitir una Norma Oficial Mexicana sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal. VI-P-SS-385 76

SEMEJANZA entre signos.- La semejanza fonética actualiza el impedimento contenido en el artículo 90, fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial. VI-P-SS-392 157

SENTENCIA que decreta la concesión de una medida cautelar, debe cumplirse de inmediato. VI-P-2aS-612 395

SUBSTITUCIÓN de garantía para efectos de la liberación de cuentas bancarias embargadas. VI-P-1aS-373 362

TERCERO interesado.- Tiene ese carácter el titular del derecho de autor, por ser incompatible con la pretensión del actor y por ende debe ser emplazado a juicio. VI-P-SS-402 224

TRATADO de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derecho de Autor.- Tratándose del derecho de distribución, remite a la legislación interna de cada país. VI-P-SS-398 175

TRATO Arancelario Preferencial de Mercancías Importadas desde la Comunidad Europea. Es aplicable aun cuando no sean transportadas directamente entre el territorio de la Comunidad Europea y el de México, siempre que se acredite que permanecieron bajo vigilancia de la autoridad aduanera del país de tránsito. VI-P-SS-415 289

TRATO Arancelario Preferencial de Mercancías Importadas desde la Comunidad Europea.- Prueba idónea de la vigilancia por las autoridades aduaneras del país de tránsito hacia México. VI-P-SS-416 290

VALOR probatorio de las actas consulares, cuando un particular se retracta de lo inicialmente manifestado ante un Cónsul de México. VI-P-SS-386 111

ÍNDICE ALFABÉTICO DE CRITERIOS AISLADOS DE SALA SUPERIOR

MARCAS descriptivas del lugar de origen. No es procedente su registro. VI-TASS-48 461

ÍNDICE ALFABÉTICO DE CRITERIOS AISLADOS DE SALAS REGIONALES

ACREDITAMIENTO de los pagos provisionales o definitivos hechos por el contribuyente del impuesto especial sobre producción y servicios. Es suficiente la copia fotostática simple del acuse de recibo del banco obtenido de la red de Internet, al cumplirse con las obligaciones fiscales a través de esa vía. VI-TASR-VII-52 502

ACTA de hechos realizada con motivo del extravío de mercancía en recinto fiscalizado, se encuentra sujeta al principio de inmediatez para su levantamiento en términos del artículo 46 de la Ley Aduanera al sustentar la autoridad el inicio del procedimiento administrativo en lo previsto por el diverso numeral 152 de la citada ley. VI-TASR-XXXVI-126 546

ACTOS que exijan el pago de créditos fiscales. Son impugnables en el juicio contencioso administrativo cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto real es menor al exigido. VI-TASR-XXXIX-35 521

ADMINISTRACIONES locales de auditoría fiscal. Tienen facultades para determinar y liquidar las cantidades compensadas indebidamente conforme al Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007. VI-TASR-XVI-59 537

ARTÍCULO 2, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.- Su alcance respecto de los actos emitidos por el Presidente de la República. VI-TASR-XVIII-9 476

AUDIENCIA prevista por el artículo 21, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se puede anticipar su desahogo, por causas imputables al servidor público. VI-TASR-XLII-7 486

BOLETA de infracción emitida por personal de la Policía Federal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública, mediante la cual se impone sanción consistente en 100 días de salario mínimo. Supuesto en que resulta ilegal por indebida competencia territorial de su emisor. VI-TASR-XXXVII-152..... 505

CALIDAD de socio en una cooperativa.- Supuesto en el cual no se acredita. VI-TASR-XXXVI-123 543

COMISIÓN mercantil. Su prueba en el juicio contencioso administrativo. VI-TASR-XL-43 529

COMPETE a la autoridad fiscal verificar la autenticidad de los comprobantes expedidos por terceros y exhibidos para el acreditamiento del impuesto al valor agregado. No puede imponerse esa carga al contribuyente, por lo que es ilegal su rechazo en ausencia del correspondiente ejercicio de tales facultades de verificación. VI-TASR-XLII-12 491

COMPETENCIA de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria. Debe fundarse en el artículo 8, fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, además de los artículos del reglamento interior que correspondan. VI-TASR-XLIII-3 494

COMPETENCIA en la orden de visita. Para fundarla debidamente la autoridad administrativa debe citar el primer párrafo del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. VI-TASR-XLIII-5 496

COMPROBANTES fiscales.- No corresponde al adquirente del bien o servicio la carga de averiguar si quien lo expidió se encuentra localizable en su domicilio fiscal, sino sólo la de advertir si el comprobante tiene impreso dicho domicilio. VI-TASR-XL-37 523

CONDENA a la indemnización por daños y perjuicios prevista por el artículo 6 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.- No puede apoyarse en simples inferencias. VI-TASR-XXXVI-122 542

CONTRATO de fideicomiso irrevocable de garantía, administración y pago, por el que se transmiten bienes para su enajenación y aplicación del producto a diversos deudores, reservándose el fideicomitente el derecho de readquirir los bienes fideicomitidos; no es una transmisión de propiedad para efectos fiscales. VI-TASR-XLII-6 484

CUMPLIMIENTO de sentencia.- Caso en que la emisión del nuevo acto debe cumplirse en el plazo previsto en el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. VI-TASR-XL-40 526

DECRETOS de carácter general. Para determinar la procedencia del juicio contencioso administrativo en su contra, es necesario atender a la naturaleza del decreto controvertido, pues no son impugnables actos administrativos de mayor jerarquía que los reglamentos. VI-TASR-IX-32 507

DEMANDA.- Procede su desechamiento cuando se interpone contra el oficio en el que se determina no pronunciarse sobre el análisis de las solicitudes para prestar los servicios de transmisión bidireccional de datos, hasta en tan-

to se resuelva lo conducente respecto a la solicitud de prórroga del título de concesión respectivo. VI-TASR-XLII-8 487

DEMANDA de nulidad.- Efectos de su envío si no se hace del lugar de residencia del demandante. VI-TASR-VII-51 501

DEMANDA de nulidad. Su envío por correo certificado debe realizarse en el lugar donde resida el demandante, entendiéndose éste como su domicilio fiscal. VI-TASR-XL-39 525

DESTITUCIÓN del puesto. La imposición de esta sanción administrativa al servidor público, por cometer una infracción grave, no resulta ilegal ni desproporcionada. VI-TASR-XVI-55 531

DETERMINACIÓN de créditos fiscales conforme al artículo 18 del Reglamento de la Ley del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado. Resulta ilegal si la autoridad se apoyó en las consultas numéricas S.I.N.D.O. y licencias de construcción, pero no demuestra su existencia. VI-TASR-XXXIII-13 519

EMBARGO precautorio de cheque. Origina la práctica del procedimiento administrativo en materia aduanera previsto en el artículo 152 de la Ley Aduanera, y no en el diverso numeral 150 de la misma ley, al tratarse de un embargo que se exceptúa del artículo 151 del mismo ordenamiento legal. VI-TASR-XII-I-26 513

FACULTADES de comprobación, tratándose de la revisión del dictamen fiscal que prevé el artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación, debe motivarse debidamente el por que se entiende directamente con el contribuyente y no con el contador público. VI-TASR-I-13 471

FIANZAS.- Las otorgadas en la suspensión en juicio de amparo indirecto se rigen por la Ley de Amparo. VI-TASR-IX-35 510

FIANZAS penales. El plazo de caducidad que establece el segundo párrafo del artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, es sólo aplicable en cuanto el término que prevé para computar la caducidad, que es de 180 días, pero deberá seguirse el procedimiento establecido en el artículo 130 de la ley relativa. VI-TASR-VII-50 500

FUNDAMENTACIÓN. Basta con citar el artículo 42 y la fracción respectiva, del Código Fiscal de la Federación, en el acto con el que la autoridad fiscalizadora inicia el ejercicio de sus facultades de comprobación, sin que sea necesaria la cita de su primer párrafo, por ser insoslayable su lectura para la comprensión de dicho precepto legal. VI-TASR-XII-II-62 515

FUNDAMENTACIÓN de la competencia territorial de los órganos internos de control de los organismos públicos descentralizados. VI-TASR-XVI-58 536

GARANTÍA del interés fiscal mediante el embargo en la vía administrativa. Es ilegal su rechazo por el sólo motivo de que el inmueble reporte gravámenes. VI-TASR-XLIII-1 493

HEREDERO y/o albacea del pensionado.- Carece de interés jurídico para solicitar derechos sobre la pensión de aquél. VI-TASR-XLII-10 489

IMPUESTO al valor agregado, acreditar la adquisición de los bienes muebles que se encuentran dentro de los inmuebles destinados para casa habitación otorgados en arrendamiento no constituye requisito previsto en ley para determinar si dicha actividad se encuentra gravada o exenta y por ende, negar la devolución de dicho impuesto. VI-TASR-XXXVI-128 548

INCOMPETENCIA del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para conocer de la legalidad de los actos emitidos por el Presidente de la República, en uso de las facultades extraordinarias otorgadas por el artículo 131, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. VI-TASR-XVIII-10 477

JUICIO de nulidad.- Procede contra el requerimiento de pago relativo a una fianza otorgada para garantizar obligaciones fiscales. VI-TASR-XXXVI-131 551

LA MULTA es ilegal. Contemplada en el precepto 95 Bis, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Es ilegal al no establecer un mínimo. VI-TASR-XLIII-2 494

LEY Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.- Se exceptúan de la obligación de indemnizar, de acuerdo con dicha ley, entre otras hipótesis, los daños y perjuicios que no sean consecuencia de la actividad administrativa irregular del estado. VI-TASR-XLII-4 482

MULTAS. La no imposición, en términos del sexto párrafo del artículo 15 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2010, constituye una facultad reglada y no discrecional de la autoridad fiscal. VI-TASR-I-12 470

NEGATIVA ficta.- Procede decretar el sobreseimiento del juicio cuando aquella se configura respecto a un recurso de inconformidad intentado contra una resolución de procedencia de retiro por inutilidad en segunda categoría en actos fuera de servicio. VI-TASR-XLII-2 479

NEGATIVA ficta recaída a una solicitud de devolución.- Supuesto en el cual procede negar lo pedido. VI-TASR-XXXVI-125 545

NO IMPONE obligaciones la regla 1.2.12.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el año 2008. VI-TASR-XLIII-4 495

NOTIFICACIÓN en el último domicilio fiscal del de cujus. Resulta ilegal cuando el albacea demuestra en el juicio que presentó aviso de defunción, aun y cuando no se prueben los supuestos de los artículos 14, fracción IV y 22, fracción II del Reglamento del Código Fiscal de la Federación. VI-TASR-XXXIII-12 518

NOTIFICACIONES por correo certificado con acuse de recibo. Deben cumplir con las formalidades señaladas en la Ley del Servicio Postal Mexicano y su Reglamento. VI-TASR-VII-49 498

OPTATIVIDAD.- El artículo 180 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, no la contempla, entre la posibilidad de interponer recurso de revisión y juicio de nulidad. VI-TASR-XXXVI-132 553

PAGO de lo indebido del impuesto especial sobre producción y servicios.- No lo hay tratándose de la exportación de diesel marino conforme a la legislación vigente en los años 2001, 2002 y 2003. VI-TASR-V-19 473

PLAZO para interponer juicio de nulidad en contra de actos administrativos regulados por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, comienza a correr a partir del día siguiente a aquél en que se notificaron. VI-TASR-IX-34 510

PREFERENCIA para obtener el pago de los créditos a favor sobre los créditos fiscales a cargo de un tercero.- Oportunidad de su oposición. VI-TASR-XXXVI-129 549

PRESIDENTE de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro. Está facultado genéricamente para emitir todo tipo de disposiciones de carácter general, con excepción de las que expresamente se atribuyen a la Junta de Gobierno de dicha Comisión. VI-TASR-XLII-11 490

PROCEDIMIENTO administrativo en materia aduanera.- Para su inicio y substanciación es indispensable que medie orden de verificación al tratarse de mercancía de procedencia extranjera en transporte. VI-TASR-XXXVII-151 504

PRUEBA pericial en ingeniería mecánica.- Es la idónea a efecto de determinar el número de serie que identifica en su conjunto a una retroexcavadora o alguna otra maquinaria similar y no la pericial en materia de clasificación arancelaria. VI-TASR-XL-38 524

PRUEBAS. Expediente administrativo del cual deriva la resolución recurrida. Es procedente su admisión en el juicio contencioso administrativo. VI-TASR-XVI-56 532

RECTIFICACIÓN de la prima del seguro de riesgos de trabajo derivada de un laudo laboral. Caso en que es improcedente la multa. VI-TASR-IX-33 ... 508

RÉGIMEN de pensión establecida en el artículo décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Su elección sólo se demuestra con el formato oficial debidamente llenado por el pensionado. VI-TASR-XVI-54 530

REGLAS de Carácter General en materia de Comercio Exterior para 2009. El plazo de 60 días previsto en la regla 3.3.26, para retornar al extranjero o efectuar el cambio de régimen de las mercancías importadas temporalmente, debe computarse a partir de la fecha de cancelación del Programa IMMEX, y no a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de la relación de empresas con programas cancelados. VI-TASR-XVI-57 534

RENTA. Base para el acreditamiento en tratándose de distribución de dividendos o utilidades. VI-TASR-XLII-9 488

REQUERIMIENTO emitido por la autoridad con motivo de un aviso de compensación.- Debe exigir la totalidad de los elementos que estime necesarios para constatar su legalidad y no sólo parte de ellos.
VI-TASR-XXXVI-127 547

RESPONSABILIDAD solidaria.- No puede atribuirse a quien funja como consignatario de una guía aérea. VI-TASR-XLII-3 481

RETIRO de los militares por la Secretaría de la Defensa Nacional. El estudio de la resolución que la determina no es procedente para conocer la legalidad de la compensación otorgada por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. VI-TASR-XXXIII-11 517

SEGURO de vida militar. Solo puede ser proporcionado a los militares cuando hubieren causado alta en situación de retiro por inutilidad clasificada en primera o segunda categorías. VI-TASR-XLII-5 483

SERVICIO de Administración Tributaria. El artículo 14, penúltimo párrafo, de su Reglamento Interior, no constituye una norma compleja.
VI-TASR-XL-42 528

SOBRESEIMIENTO del juicio contencioso administrativo. Si las resoluciones originalmente recurridas ante la autoridad administrativa no son definitivas, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no es competente para conocer de las mismas. VI-TASR-XL-41 527

SUJETO del impuesto especial sobre producción y servicios.- Quién debe ser considerado como tal y quién no tiene ese carácter conforme a la legislación vigente en los años 2001, 2002 y 2003. VI-TASR-V-20 474

SUSPENSIÓN definitiva, resulta insuficiente para solicitar la modificación o revocación el hecho superveniente de que la autoridad exactora rechaza la garantía ofrecida por la actora, consistente en dos billetes de depósito. VI-TASR-XXXVI-133 555

SUSPENSIÓN en el padrón de importadores.- Supuesto en el cual resulta legal su aplicación. VI-TASR-XXXVI-130 550

TRIBUNAL Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Carece de competencia material para conocer sobre la impugnación del silencio administrativo, recaído a una solicitud de cese de descuentos salariales y reintegro de los aplicados a un crédito hipotecario del FOVISSSTE. VI-TASR-XXXV-20 .. 540

TRIBUNAL Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. No tiene competencia material, para conocer respecto de la impugnación de sanciones por responsabilidad administrativa de funcionarios públicos, impuestas por la Contraloría General del Instituto Federal Electoral. VI-TASR-XXXV-19 539

VALOR agregado. Devolución. No procede en tratándose de la administración y cobro de cartera vencida. VI-TASR-XLII-1 479

VERIFICACIÓN ocular del registro federal de contribuyentes.- No es un acto de molestia. VI-TASR-IX-36 511

VISITA domiciliaria.- Suspensión del plazo para su conclusión acorde al artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación. VI-TASR-XXXVI-124..... 544

ÍNDICE ALFABÉTICO DE ACUERDOS GENERALES

ACUERDO por el que se amplía en tres días hábiles la fecha para presentar el reporte mensual de movimientos de expedientes en el sistema de control y seguimiento de juicios, correspondiente al mes de agosto de 2010. G/JGA/24/2010 600

DESTRUCCIÓN de expedientes concluidos hasta el año 2006. G/JGA/22/2010 594

FORMULACIÓN del proyecto de presupuesto del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para el ejercicio fiscal 2011. E/JGA/18/2010 609

LINEAMIENTOS para la correcta aplicación del logotipo de juicio en línea. E/JGA/17/2010 606

PERSONAL que realizará guardias durante el primer periodo vacacional del año 2010. G/JGA/23/2010 598

PLAN adicional de pensiones de contribuciones definidas para los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. E/JGA/19/2010 611

REFORMA del acuerdo E/JGA/7/2010, por el que se expide el procedimiento para la autorización de solicitudes relativas a corregir información contenida en el sistema de control y seguimiento de juicios. E/JGA/15/2010 602

SE FIJA la jurisprudencia N° VI-J-SS-65. G/28/2010 573

SE FIJA la jurisprudencia N° VI-J-SS-68. G/20/2010 563

SE FIJA la jurisprudencia N° VI-J-SS-69. G/30/2010 576

SE FIJA la jurisprudencia N° VI-J-SS-70. G/22/2010 565

SE FIJA la jurisprudencia N° VI-J-SS-71. G/23/2010 567

SE FIJA la jurisprudencia N° VI-J-SS-72. G/24/2010 568

SE FIJA la jurisprudencia N° VI-J-SS-73. G/25/2010 569

SE FIJA la jurisprudencia N° VI-J-SS-74. G/26/2010 571

SE FIJA la jurisprudencia N° VI-J-SS-76. G/32/2010 578

SE FIJA la jurisprudencia N° VI-J-SS-77. G/33/2010 580

SE FIJA la jurisprudencia N° VI-J-SS-78. G/34/2010 582

SE FIJA la jurisprudencia VI-J-2aS-53. G/S2/24/2010 584

SE FIJA la jurisprudencia VI-J-2aS-54. G/S2/25/2010 587

SE FIJA la jurisprudencia VI-J-2aS-55. G/S2/26/2010 590

DIRECTORIO DE LA REVISTA

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA:
Mag. Francisco Cuevas Godínez

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA:
Lic. Minko Eugenio Arriaga y Mayés

DIRECTOR DE PUBLICACIONES
Lic. Juan Carlos Ramírez Villena

Compilación, clasificación, ordenación y revisión de tesis, elaboración de índices, corrección tipográfica y vigilancia de la edición:

Lic. Ana Lidia Santoyo Avila
C. Elba Carolina Anguiano Ramos
C. María Goreti Álvarez Cadena

PUBLICACIÓN OFICIAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Certificado de Licitud de Título No. 3672
Certificado de Licitud de Contenido No. 3104
Número de Reserva al Título en Derechos de Autor: 04-2001-012517410700-102
Distribuidor principal: Fideicomiso para Promover la Investigación del Derecho Fiscal y Administrativo, Insurgentes Sur 881 Torre 'O', Colonia Nápoles, Deleg. Benito Juárez, C.P. 03810, México , D.F.
Impresión:Talleres Gráficos de México. Secretaría de Gobernación, Av. Canal del Norte No. 80, Col. Felipe Pescador, C.P. 06280, México D.F.
Insurgentes Sur No. 881, Torre 'O', Col. Nápoles, Deleg. Benito Juárez, C.P. 03810, México, D.F.

Las obras podrán adquirirse en la Dirección de Publicaciones, en las Librerías Jurídicas Especializadas y en las Salas Regionales Foráneas, en página web o bien, por correo, enviando cheque a nombre del **Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa**, a la siguiente dirección:

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES

Torres Adalid No. 21, Piso 2, Col. Del Valle Norte
Deleg. Benito Juárez. C.P. 03100
México, D.F.
Tel. 50-03-70-00 Ext. 3219
Mail: mangeles.gonzalez@tfjfa.gob.mx

PÁGINA WEB:

www.tfjfa.gob.mx/publicaciones

LIBRERÍAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS

METROPOLITANAS

SUCURSAL INSURGENTES
AV. INSURGENTES SUR No. 881,
MEZANINE COL. NÁPOLES
DELEG. BENITO JUÁREZ
C.P. 03810 MÉXICO, D.F.
TEL.(55) 50 03 70 00 Ext. 4144
FAX: (55) 50 03 74 02
Mail: libreria.insurgentes@mail.tfjfa.gob.mx

SUCURSAL TLALNEPANTLA
AV. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
No. 18 - P.B.
COL. CENTRO, C.P. 54000
TLALNEPANTLA
ESTADO DE MÉXICO
TEL. (55)53 84 05 44
Mail: libreria.tlalnepantla@mail.tfjfa.gob.mx

LIBRERÍAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS

FORÁNEAS

SUCURSAL TORREÓN
BLVD. DIAGONAL REFORMA
No. 2984 ZONA CENTRO,
C.P. 27000, TORREÓN, COAH.
TEL. (871) 7 93 89 39
7 93 90 54 EXT. 240
FAX: (871) 7 93 89 37
Mail: libreria.torreon@mail.tfjfa.gob.mx

SUCURSAL CELAYA
EJE VIAL MANUEL J. CLOUTHIER
(NORPONIENTE) No. 508 FRACCIÓN
DE LA SEGUNDA SECCIÓN DE LA
HACIENDA SAN JUANICO
COL. LOS PINOS (FRENTE A LOS
JUZGADOS CIVILES)
C.P. 38020 CELAYA, GTO.
TEL. (461) 6 14 20 89
Mail: libreria.celaya@gmail.com

SUCURSAL OAXACA
AV. PINO SUÁREZ 700 INTERIOR 16-B
COL. CENTRO
C.P. 68000 OAXACA, OAX.
TEL. (951) 5 13 78 99
Mail: libreriajuridicaoax@prodigy.net.mx

SUCURSAL CULIACÁN
PASEO NIÑOS HÉROES No. 520
ORIENTE, P.B. COL. CENTRO
C.P. 80000 CULIACÁN, SIN
TEL. (667) 7 12 90 39
Mail: libreria.culiacan@mail.tfjfa.gob.mx

SUCURSAL ACAPULCO
AV. COSTERA MIGUEL ALEMÁN No. 63-2° PISO
LOCALES C-1 Y C-2 FRACC. CLUB DEPORTIVO
INTERIOR DEL CENTRO DE CONGRESOS COPACABANA
C.P. 33690, ACAPULCO, GRO.
TEL. (744) 4 81 36 39
Mail: libreria.acapulco@mail.tfjfa.gob.mx

DIRECTORIO

SALAS REGIONALES FORÁNEAS

PRIMERA SALA REGIONAL DE ORIENTE
AV. OSA MENOR 84
DE LA RESERVA ATLIXCAYOTL,
CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI.
CP:72810
CHOLULA, PUEBLA
TEL. 01 (222) 237 7860, 243 2341, 243 2549

SALA REGIONAL PENINSULAR
CALLE 56-A No. 483B,
(PASEO DE MONTEJO)
ESQ. CON CALLE 41, COL. CENTRO
C.P. 97000
MÉRIDA, YUCATÁN
TEL 01 (999) 9 23 21 22 DTO.
9 28 04 19 EXT. 210

PRIMERA SALA REGIONAL DEL GOLFO
AV. CIRCUITO CRISTOBAL COLÓN No. 5,
OCTAVO Y DÉCIMO PISOS.
COL. JARDINES DE LAS ÁNIMAS,
SECCIÓN "TORRE ÁNIMAS"
C.P. 91190
JALAPA, VERACRUZ
TEL. 01 (228) 812 56 31

SALA REGIONAL DEL NOROESTE I
AV. PASEO DE LOS HÉROES 9691,
FRACC. DESARROLLO URBANO
DEL RÍO TIJUANA
C.P. 22320
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE
TEL. 01 (664) 684 84 61

SALA REGIONAL DEL NOROESTE II
CALLE CHIHUAHUA No. 133 NTE.
ENTRE CALLES HIDALGO Y ALLENDE
COL. CENTRO
C.P. 85000
CD. OBREGÓN, SONORA
TEL. 01 (644) 414 70 05

PRIMERA Y SEGUNDA SALA REGIONAL DE OCCIDENTE
AV. AMÉRICAS No. 877
ENTRE COLOMOS Y FLORENCIA
COL. PROVIDENCIA, SECTOR HIDALGO
C.P. 44620
GUADALAJARA, JALISCO
TEL. 01 (33) 38 17 15 25 Y 38 17 73 35

DIRECTORIO

SALAS REGIONALES FORÁNEAS

SALA REGIONAL DEL NORTE CENTRO I
AV. ZARCO No. 2656
COL. FRANCISCO ZARCO
C.P. 31020
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TEL. 01 (614) 418 80 57 EXT. 214

SALA REGIONAL DEL CENTRO I
AV. LÓPEZ MATEOS, PLAZA KRYSTAL
TORRE "A" 1001
ESQ. HÉROE DE NACOZARI SUR
COL. SAN LUIS
C.P. 20250
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
TEL. 01 (449) 915 29 12

SALA REGIONAL DEL GOLFO-NORTE
AV. HIDALGO No. 260
ESQ. MIER Y TERÁN
COL. CENTRO
C.P. 87000
CD. VICTORIA, TAMAULIPAS
TEL. 01 (834) 315 59 82

SALA REGIONAL DEL CARIBE
SUPER MANZANA 36,
MANZANA 2, LOTE 2
LOCALES B-4, B-8 AL B-21
CENTRO PLAZA LAS PALMAS
ENTRE AV. XCARET Y AV. COBA,
ESQ. LA COSTA
COL. BENITO JUÁREZ
C.P. 77500
CANCÚN, QUINTANA ROO
TEL. 01 (998) 898 08 93

SALA REGIONAL CHIAPAS-TABASCO
PRIMERA CALLE PONIENTE NORTE No. 152
ESQUINA PRIMERA CALLE NORTE PONIENTE
COL. CENTRO
C.P. 29000
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
TEL. 01 (961) 612 07 09 EXT. 5528
612 06 61 DTO.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

El Instituto de Estudios sobre Justicia Fiscal y Administrativa

Revista Digital

La revista PRAXIS DE LA JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, *se edita en forma electrónica dentro de la página web del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,* con el objeto de aportar y difundir los estudios e investigaciones de los Magistrados, Secretarios, colaboradores académicos y especialistas sobre los temas que comprenden todas las especialidades inherentes a la Administración Pública, incluyendo nuevos aspectos del Derecho Informático que estudia y desarrolla todas las áreas del derecho, y que domina las actividades en el actual siglo XXI.

Las opiniones que se aportan son de estricta responsabilidad personal de los autores y no reflejan el criterio oficial del Tribunal, sin embargo, enriquecen el medio académico y científico aportando nuevos enfoques y análisis de los principales temas en diversas ramas del derecho.





Consúltala en: www.tfjfa.gob.mx



TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
Instituto de Estudios sobre Justicia Fiscal y Administrativa

Revista de Investigaciones y Estudios Jurídicos



Revista Número 3



Revista Número 4

Artículos Publicados en la Revista Número 3

●Cumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Mag. María Teresa Olmos Jasso

●Origen y antecedentes legislativos de la Jurisprudencia.
Mag. María Concepción Martínez Godínez

●Ruta crítica para la aplicación de la informática en los Tribunales.
Mtro. Noé Adolfo Riande Juárez

●El Desacato y el Carácter Obligatorio de la Jurisprudencia.
Lic. Verónica Roxana Rivas Saavedra

● De la Inconstitucionalidad del Artículo 6, Fracción II, Inciso H), del nuevo Reglamento del CFF.
Lic. Juan Manuel Ángel Sánchez

● ¿Es el control difuso de la Constitución un instrumento para la integración de un orden constitucional?
Lic. Xochitl Garmendia Cedillo

● La Argumentación Jurídica a la luz del Maestro Manuel Atienza.
Lic. Héctor Lerma González

Artículos Publicados en la Revista Número 4

●La Jurisprudencia en el Juicio Contencioso Administrativo.
Mag. Doctor Sergio Martínez Rosaslanda

●Las Aguas Nacionales como Patrimonio del Estado.
Mag. Maestra Adriana Cabezut Uribe
Lic. Norma Tienda Díaz

●La Concesión Administrativa. Algunos aspectos Teóricos y Análisis de un caso práctico.
Mag. Maestra Luz María Anaya Domínguez
Mag. Maestra María Concepción Martínez Godínez
Mag. Maestra María Teresa Olmos Jasso

●Patrimonio Nacional. Islas, Territorio Insular Mexicano.
Maestra Xochitl Garmendia Cedillo

●"Regulación del Espectro radioeléctrico en México" Análisis de la Derogada Ley Televisa.
Maestro Miguel Ángel Pérez Martínez
Maestro Fernando Pardo Hernández
Lic. Guadalupe del Consuelo Zurita Mezquita

●La explicación de la fecha del Bicentenario ante el Derecho Internacional, México y la Doctrina Uti Possidetis.
Doctor Juan de Dios Gutiérrez Baylón

●Aplicación del principio "*Non Bis In Ídem*" en el Ámbito Fiscal.
Doctor José Ramón Morales Hernández

●La (In) Definición del Derecho.
Maestro Alfonso E. Ochoa Hofmann

●Los Derechos Fundamentales y la Impartición de Justicia.
Doctor Raymundo Gil Rendón

●El Poder Judicial Electrónico en Iberoamérica en el 2009, Estado del Arte.
Doctor José Miguel Busquets

Consúltala en: www.tfjfa.gob.mx

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

REVISTA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA



La Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se publica mensualmente para dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 75 y 78 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 26, fracción XXV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Su objetivo es el difundir los criterios establecidos en las tesis de jurisprudencia, precedentes o criterios aislados que surgen al resolver los juicios planteados ante el propio Tribunal. Además de las tesis y la parte relativa de la sentencia que la motivó, se publica una selección de jurisprudencia y tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materia fiscal y administrativa.

La suscripción anual comprende 12 ejemplares que van de enero a diciembre del mismo año en impreso; y para 2010 se incluye, además, en CD. También la puede adquirir por semestre que comprende de enero a junio o de julio a diciembre, o por ejemplar suelto.

$330.00* ***Ejemplar suelto**

SUSCRIPCIÓN ANUAL

ENERO A DICIEMBRE 2010 $ 3,650.00 Incluye Revista con disco compacto

ENERO A DICIEMBRE 2009	$ 3,650.00
ENERO A DICIEMBRE 2008	$ 3,500.00
ENERO A DICIEMBRE 2007	$ 3,100.00
ENERO A DICIEMBRE 2006	$ 3,100.00
ENERO A DICIEMBRE 2005	$ 2,915.00

SUSCRIPCIÓN SEMESTRAL

ENERO A JUNIO 2010 $ 1,880.00
JULIO A DICIEMBRE 2010 $ 1,880.00

ENERO A JUNIO 2009	$ 1,880.00
ENERO A JUNIO 2008	$ 1,800.00
ENERO A JUNIO 2007	$ 1,670.00
ENERO A JUNIO 2006	$ 1,670.00
ENERO A JUNIO 2005	$ 1,574.00

NOVEDADES

DISCOS COMPACTOS

PROPIEDAD INTELECTUAL
(compendio legislativo en CD)



Contiene

Jurisprudencia

Jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y criterios aislados de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual; con diversos índices para su búsqueda y localización.

Legislación Federal, Tratados Internacionales y Legislación Histórica.

ISBN 9786079509613

$100.00

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
(compendio legislativo en CD)



Reúne en un solo disco todo lo necesario para analizar un problema en materia de protección al consumidor:

Legislación histórica y actualizada en versión HTML, PDF y Word.

Incluye una compilación de jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con opción de búsqueda alfabética, por materia, cronológica o por código de voz.

ISBN 9786079509613

$30.00

DVD

"JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 2010"

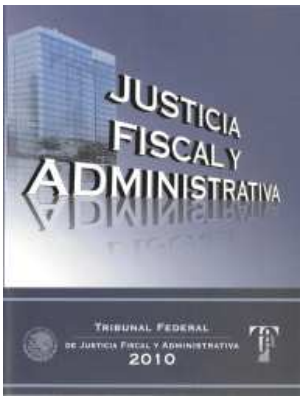
Contiene:

Jurisprudencia, tesis aisladas, ejecutorias y votos que ha emitido y publicado el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de enero de 1937 a diciembre de 2009 (Primera a Sexta Época).

Noticia Histórica sobre la creación, evolución y competencia otorgada a dicho Tribunal.
Catálogo de claves

Requerimientos técnicos necesarios:

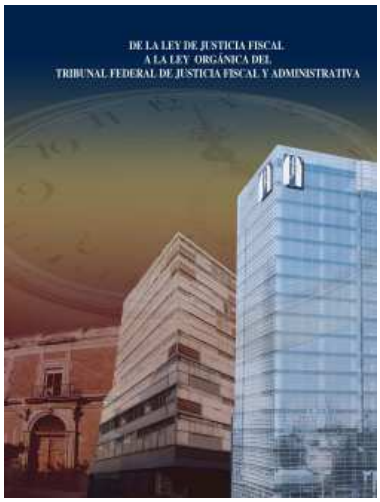
- 1.0 GB de memoria RAM
- 1.0 GB de espacio en disco duro
- Computadora personal con sistema basado en procesador x86 Sistema operativo Windows XP con SP 2 (service pack 2) o superior; Windows Vista Home Premium o superior
- Monitor a color, configuración 1024 x 768 (mínimo)
- Mouse indispensable



ISBN 9786074681703

$150.00

COMPILACIÓN



ISBN 968-7626-48-8

$290.00

DE LA LEY DE JUSTICIA FISCAL A LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Muestra con un sentido histórico la memoria legislativa del Tribunal, las huellas de un largo camino de evolución constante y modernización del Contencioso Administrativo Federal inserto en la realidad nacional.

Temas: Antecedentes Legislativos del modelo Contencioso Administrativo en México, Notas periodísticas relativas al inicio de labores del Tribunal Fiscal de la Federación, Ley de Justicia Fiscal (D.O.F. 31 de agosto de 1936), Código Fiscal de la Federación (D.O.F. 31 de diciembre de 1938), Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación (D.O.F. 19 de enero de 1967), Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación (D.O.F. 2 de febrero de 1978), Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación (D.O.F. 15 de diciembre de 1995), así como las Reformas que se hicieron a estos Ordenamientos.

COMPILACIÓN DE TESIS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA Y EL PODER JUDICIAL FEDERAL EN MATERIA DE LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, TRATADOS INTERNACIONALES, PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR

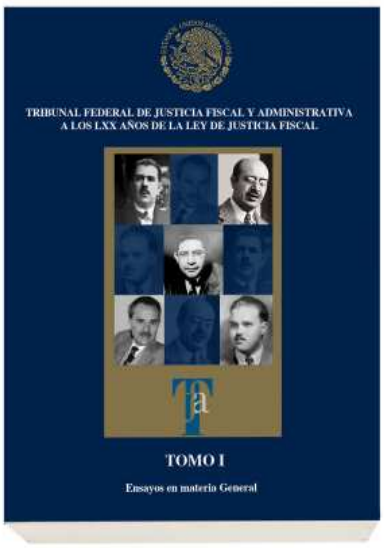
Incluye las tesis publicadas en las Revistas de este Tribunal de enero de 1994 a octubre de 2004 y las publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de enero de 1994 a agosto de 2004.

$350.00



ISBN 968-7626-49-6

OBRAS CONMEMORATIVAS DE LOS ANIVERSARIOS DE LA PROMULGACIÓN DE LA LEY DE JUSTICIA FISCAL



ISBN 968-7626-57-7

$ 1,350.00

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA A LOS LXX AÑOS DE LA LEY DE JUSTICIA FISCAL EN CINCO TOMOS

En el marco de la conmemoración del LXX aniversario de la promulgación de la Ley de Justicia Fiscal, fue presentada esta magna obra que constituye el testimonio de lo que actualmente es la justicia fiscal y administrativa, vista por sus propios actores. A partir de la valiosa colaboración de destacados juristas nacionales y extranjeros se desarrollan, en cinco tomos, temas de trascendencia para el contencioso administrativo, tales como: Ensayos en materia General (Tomo I); Cuestiones constitucionales, control de legalidad de los actos de la Administración Pública y nuevas perspectivas para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (Tomo II); Recursos administrativos, juicio contencioso administrativo y responsabilidad patrimonial del Estado y de los servidores públicos (Tomo III); Tratados internacionales en materia económica y tributaria; ensayos en materia fiscal, aduanera y comercio exterior (Tomo IV); y Seguridad social, propiedad intelectual, protección al consumidor, aguas nacionales y bioseguridad de organismos genéticamente modificados (Tomo V).



ISBN 968-7626-60-7

$ 150.00

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA (TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN) MAGISTRADOS PRESIDENTES DEL TRIBUNAL 1937-2006 TESTIMONIOS Y SEMBLANZAS

En el LXX aniversario de la creación del hoy Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se hace un homenaje a los hombres y mujeres que han tenido a su cargo dirigir los destinos de este Tribunal, a través de esta obra que incluye el testimonio de los licenciados Antonio Carrillo Flores y Guillermo López Velarde, Magistrados Fundadores, quienes en dos artículos relataron las circunstancias en que fue creado este Órgano Jurisdiccional, y sus primeros años de vida; los discursos pronunciados por los Presidentes de la República y por los Presidentes del Tribunal con motivo de diversos aniversarios de la Promulgación de la Ley de Justicia Fiscal; la trayectoria de los Presidentes de este Órgano de impartición de justicia; y un apartado fotográfico.

OBRAS CONMEMORATIVAS DE LOS ANIVERSARIOS DE LA PROMULGACIÓN DE LA LEY DE JUSTICIA FISCAL

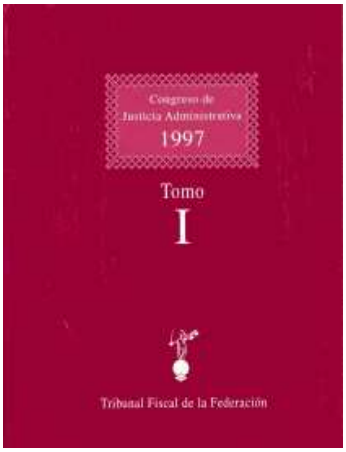


TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA A LOS LXV AÑOS DE LA LEY DE JUSTICIA FISCAL 2001 EN SEIS TOMOS

Al cumplir 65 años el Tribunal, se edita una obra que reune a grandes tratadistas nacionales y extranjeros, los ensayos relativos se incluyen en los tres primeros tomos de la obra. También en los tomos IV y V se presenta una compilación de las tesis emitidas por el Tribunal, durante los últimos cinco años, que comprenden en su totalidad la cuarta época de la revista, dichas tesis se clasifican según la instancia emisora, el tipo de tesis y dentro de esta clasificación, en orden alfabético. El tomo VI contiene un índice temático en el que aparecen los rubros de las tesis identificando los preceptos jurídicos que fueron señalados en cada una de ellas, así como la materia correspondiente a dicho precepto y los preceptos de otros ordenamientos jurídicos que se correlacionaron en dicha tesis.

ISBN 968-7626-29-1

$1,200.00



CONGRESO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 1997 LXI ANIVERSARIO DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN EN DOS TOMOS

En 1997 se conmemora el 61 aniversario de la promulgación de la Ley de Justicia Fiscal, celebrándose el Congreso de Justicia Administrativa 1997, con la participación nuevamente de algunos de los Presidentes de los Tribunales Fiscales de países de América Latina y España, de los Magistrados del propio Tribunal y de eminentes juristas nacionales y extranjeros. Se tratan temas de gran importancia y trascendencia para nuestro país, tales como: “Cuotas Compensatorias; Alcances de la Declaración de Inconstitucionalidad por el Poder Judicial Federal; y La Suspensión en Materia de Responsabilidades de Servidores Públicos”.

ISBN 968-7626-11-9

$425.00

MEMORIAS DE LAS REUNIONES NACIONALES

MEMORIA DEL XVII CONGRESO NACIONAL DE MAGISTRADOS "VISIÓN DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL ANTE LOS RETOS DEL CAMBIO SOCIAL"



Realizado en la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, del 27 al 29 de agosto de 2008, este Congreso se dividió en cuatro temas de disertación: “Cambios en el Contencioso Administrativo”; “Misión y Visión de la Junta de Gobierno y Administración”; “Nuevas Competencias del Tribunal”; y “La Justicia Pronta y Expedita en el Contencioso Administrativo. Juicio en Línea”; temas magistralmente expuestos en sesiones plenarias, a las cuales sucedieron ocho mesas de trabajo, divididas a su vez en subtemas, marco ideal de discusión de los tópicos tratados, y cuyo testimonio se recoge en esta Memoria.

ISBN 978-607-95096-0-6

$80.00

"LA COMPETENCIA ACTUAL Y LAS NUEVAS COMPETENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, PROBLEMÁTICA Y POSIBLES SOLUCIONES"

XVI REUNIÓN ANUAL DE MAGISTRADOS QUERÉTARO, QUERÉTARO, AGOSTO 2007

La Reunión se dividió en dos grandes rubros: en el primero, se trató la competencia del Tribunal, incluyéndose la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado; la impugnación de actos administrativos de carácter general diversos a los Reglamentos; medidas cautelares y suspensión de la ejecución del acto impugnado; entre otros. El segundo tema incluyó las reflexiones realizadas en torno a las nuevas competencias del Tribunal, tratándose temas como las implicaciones de la promulgación de su nueva Ley Orgánica y su autonomía presupuestaria.



Disco Compacto

ISBN 9789689468011

$80.00



ISBN. 968-7626-61-5

$450.00

MEMORIAS DEL TERCER CONGRESO DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA (PERSPECTIVA DEL DERECHO FISCAL Y ADMINISTRATIVO EN AMÉRICA Y EUROPA EN LA PRIMERA PARTE DEL SIGLO XXI EN DOS TOMOS

Congreso celebrado en la ciudad de México del 24 al 28 de agosto de 2006. Los temas abordados recorrieron todas las materias del ámbito de competencia del Tribunal, manifestados en la visión de los juristas participantes respecto de las “Perspectivas del Derecho Fiscal y Administrativo en América y Europa en la primera parte del Siglo XXI”.

OBRAS DE LAS REUNIONES

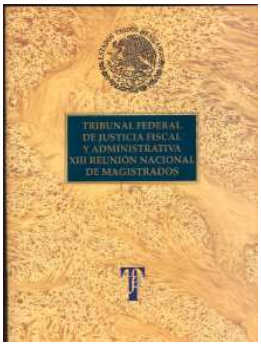
ANTE LOS RETOS DEL FUTURO, VALORES Y CAPACIDADES DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL XIV REUNIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS (2005)

Temas tratados: Ética y Valores, Nuevas formas de controversia del Contencioso Administrativo Federal, responsabilidad patrimonial del Estado, Evolución de la competencia material del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, su proyección hacia el futuro y la búsqueda de nuevas fórmulas de controversia, al encuentro de un sistema renovado del Contencioso Administrativo Federal, La responsabilidad del Estado, Reflexiones en torno al Acceso de la Justicia Administrativa en materia de Responsabilidad Patrimonial del Estado, Interpretación constitucional en materia patrimonial del Estado.



$290.00

ISBN 968-7626-54-2



ISBN 968-7626-53-4

$370.00

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA XIII REUNIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS (2004)

Temas tratados: El Contencioso Administrativo a la luz de un sistema integral y coherente de impartición de justicia en el Estado Mexicano, Aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA XII REUNIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS (2003)

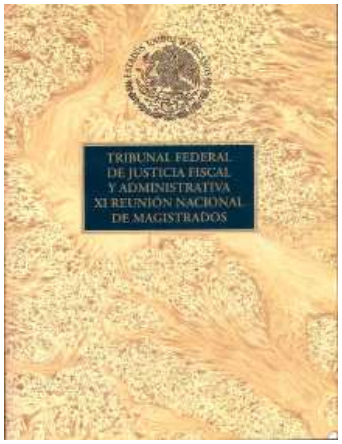
Temas tratados: La Supresión del Contencioso Administrativo en México, Estado actual del Contencioso Administrativo en Europa, en América Latina y el Contencioso Administrativo Federal en México evolución y situación actual, iniciativa de la Ley Federal de Justicia Administrativa en la Función Pública, Nuevo Esquema en Materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos.



ISBN 968-7626-47-X

$130.00

OBRAS DE LAS REUNIONES



TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA XI REUNIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS (2002)

Temas tratados: Demanda, Suspensión, Pruebas, Alcances de la Sentencia y su Impugnación, Efectividad, Obligatoriedad de la Jurisprudencia, ISR, Aspectos de la Reforma Fiscal, Ley del IMSS, Iniciativa de la Ley de Telecomunicaciones.

ISBN 968-7626-42-9

$260.00



CONTROL DE LEGALIDAD EN EL MODERNO ESTADO DE DERECHO EN AMÉRICA Y EUROPA X REUNIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS (2001)

Esta obra contiene los trabajos presentados con motivo del Segundo Congreso Internacional de Justicia Fiscal y Administrativa, celebrado con motivo del 65 aniversario de la expedición de la Ley de Justicia Fiscal, en el que participaron el Vicepresidente del Consejo de Estado de Francia **Sr. Renaud Denoix de Saint Marc**, el Presidente de la Corte de Impuestos de Canadá **Alban Garon**, el Presidente del Consejo de Tribunales Administrativos de Canadá **Lic. Murray Walter Chitra**, y en representación de la Asociación Iberoamericana de Tribunales Fiscales y Administrativos, participaron el **Dr. Manuel Urueta Ayola**, Presidente del Consejo de Estado de Colombia y el **Dr. Luis Rodríguez Picado,** Presidente del Tribunal Fiscal Administrativo de Costa Rica; representantes del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo **Ministro Juan Díaz Romero**, **Senador Fauzi Handam** y el Procurador Fiscal de la Federación **Lic. Gabriel Reyes Orona**; por los Tribunales Administrativos Estatales **Magistrada Teresita Rendón Huerta** presidenta del Tribunal Contencioso Administrativo de Guanajuato; así como de la Academia Mexicana del Derecho Fiscal y Magistrados de la Sala Superior y Salas Regionales del propio Tribunal.

ISBN 968-7626-37-2

$210.00

OBRAS DE LAS REUNIONES

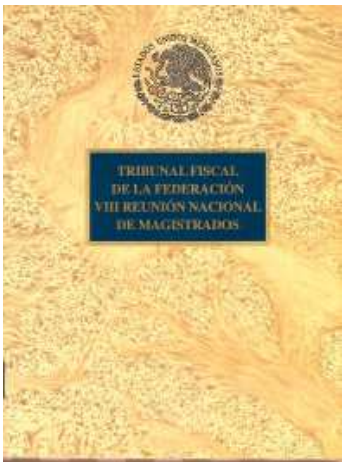
TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN IX REUNIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS (2000)



Temas tratados: Validez Actual del Contencioso Administrativo en México, Competencia del Tribunal Fiscal de la Federación, Eficacia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa Local, Principios Fundamentales del Procedimiento Contencioso Administrativo, Cumplimiento y Ejecución de Sentencias, Análisis de Derecho Comparado, Contencioso Objetivo y Subjetivo de Anulación, El Procedimiento Contencioso Administrativo.

ISBN 968-7626-27-5

$210.00



TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIII REUNIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS (1999)

En 1999 se realiza la VIII Reunión Nacional, con la presentación de trabajos presentados por Magistrados, los cuales se enmarcan en importantes temas de Derecho Procesal Fiscal: Competencia prorrogada o prórroga de competencia y validación de actos de autoridades incompetentes; Problemática de Competencia territorial entre dos Salas con Sede en diferentes Estados; Notificaciones por correo certificado; Improcedencia; Resoluciones que dejan sin efectos los créditos recurridos; Impugnación de actos de ejecución; Idoneidad de la prueba; Problemas en la admisión, desahogo y valoración de la prueba pericial; La prueba de inspección judicial; La prueba confidencial en materia de comercio exterior internacional y precios de transferencia; Los efectos de las sentencias del Tribunal; Las sentencias que se dictan en 24 horas; Formación de jurisprudencia; Regulación de la queja, violación del plazo de cumplimiento de la sentencia; y diversos trabajos sobre el Procedimiento Administrativo y Derecho Sustantivo.

ISBN 968-7626-18-6

$130.00

COLECCIÓN DE ESTUDIOS JURÍDICOS

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN MÉXICO

La manipulación de las condiciones en que los miembros de un mismo grupo de interés pactan las operaciones entre sí genera importantes problemas recaudatorios, que impactan como un factor determinante en la vida de los gobiernos, de las empresas multinacionales y de sus operaciones internacionales.

Ante esta manipulación de precios de transferencia, la OCDE ha recomendado medidas "antídoto", adoptadas en gran medida por México, pero ¿Son estas medidas congruentes con nuestro sistema constitucional?

En este libro, el Maestro Mario Barrera Vázquez realiza un análisis serio de la regulación mexicana sobre los precios de transferencia, desde un punto de vista estrictamente jurídico, brindando al lector una herramienta de consulta indispensable para conocer o profundizar en este tema, lo que le valió ser acreedor al "Premio de Estudios sobre Justicia Fiscal y Administrativa", otorgado por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.



ISBN 607-950-964-4

$ 310.00



ISBN 607-950-963-7

$ 310.00

LA MUERTE DEL INFRACTOR COMO FORMA DE EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL POR INFRACCIONES A LAS LEYES FISCALES FEDERALES

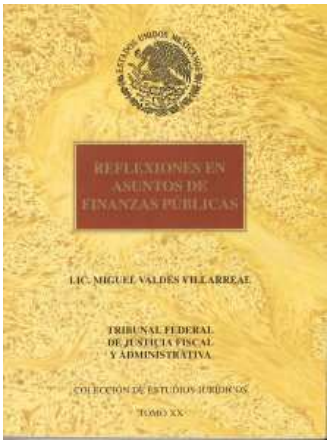
¿Es la muerte causa de extinción de obligaciones fiscales derivadas de la imposición de una sanción? De acuerdo con el criterio del Fisco Federal, la obligación subsiste.

La muerte, lo único cierto que sabemos nos va a suceder, tiene implicaciones en diversos ámbitos, incluido por supuesto el fiscal. La finitud del ser humano implica la de sus derechos y obligaciones; sin embargo, estas le trascienden, por un tiempo al menos.

Es de todos conocido que el patrimonio se transmite por herencia, tanto en activo como en pasivo, pero en el caso de las multas, conservando sin lugar a duda su carácter de pasivo, ¿no es acaso una sanción? Recordemos entonces la prohibición constitucional a la trascendencia de la sanción.

Son estos los elementos de un tema polémico e interesante que la licenciada Dione Rivera aborda con claridad y precisión, misma que le valió el ser galardonada con el "Premio de Estudios sobre Justicia Administrativa 2007", otorgado por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

COLECCIÓN DE ESTUDIOS JURÍDICOS



ISBN 968-7626-56-9

$280.00

REFLEXIONES EN ASUNTOS DE FINANZAS PÚBLICAS.- TOMO XX.- 2005, LIC. MIGUEL VALDÉS VILLARREAL

Como un homenaje a la trayectoria del Maestro Miguel Valdés Villarreal, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa realiza la compilación de sus trabajos, estructurada en dos capítulos: en el primero se incluyen aquellas reflexiones presentadas por el Maestro en diversos foros, principalmente la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que versan sobre política fiscal, Necesidad de Tribunales Contencioso Administrativos locales, Asentamientos humanos, Amparo contra Leyes, Administración de Justicia, Misión del abogado hacendario, entre otros.

El capítulo segundo comprende los mensajes dados en diversos Congresos anuales del Colegio Nacional de Profesores e Investigadores de Derecho Fiscal, así como los trabajos presentados en los mismos, relativos a Coordinación Fiscal, Modernización del Sistema Tributario Mexicano, Reforma Fiscal integral, Estado de Derecho y una visión integral de un Sistema Jurídico de Contribuciones.



ISBN 968-7626-45-3

$165.00

EFECTOS DEL SILENCIO ANTE UN PAGO DE LO INDEBIDO EN MATERIA TRIBUTARIA FEDERAL, CONFORME AL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CONSTITUCIONALIDAD VS. LEGALIDAD.- TOMO XIX.- 2003, LIC. ANA RUTH HERRERA GÓMEZ

Temas: El pago de lo indebido en Materia Tributaria, Devolución, Plazos para solicitar la Devolución de un pago indebido.

COLECCIÓN DE ESTUDIOS JURÍDICOS

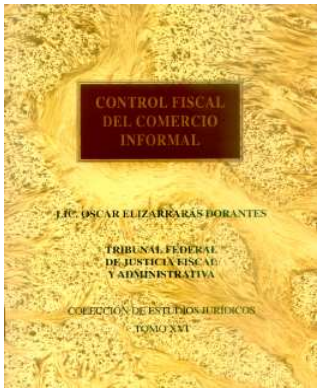


ISBN 968-7626-44-5

$250.00

LA DOBLE TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EN EL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS, ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA UNIÓN EUROPEA.-TOMO XVIII.- 2003, LIC. MARÍA ELENA PÁEZ MEDINA

Temas: Conceptos, La Unión Europea “Sinopsis acerca de la relación jurídico económica existente entre los estados Unidos Mexicanos y la Unión Europea en el marco de la globalización internacional", “Tratamiento en el Derecho Mexicano a la doble contribución Internacional del Impuesto sobre la Renta”, “Tratados Internacionales celebrados entre los Estados Unidos Mexicanos y los países integrantes de la comunidad Europea, en material de doble tributación”, “Solución de Controversias”



ISBN 968-7626-39-9

$170.00

CONTROL FISCAL DEL COMERCIO INFORMAL.- VOL. XVI LIC. OSCAR ELIZARRARÁS DORANTES

Temas: Generalidades del Comercio Informal, Breves Antecedentes de la regulación fiscal del Comercio Informal, Régimen Fiscal del Comercio Informal, Asistencia fiscal especializada para el Comercio Informal.



ISBN 968-7626-25-9

$100.00

SISTEMA FISCAL FEDERAL MEXICANO.- SU REVISIÓN ANTE LAS TEORÍAS Y LOS PRINCIPIOS JURÍDICOS Y ECONÓMICOS. VOL. XV LIC. LUIS GERARDO DEL VALLE TORRES

SU REVISIÓN ANTE LAS TEORÍAS Y LOS PRINCIPIOS JURÍDICOS Y ECONÓMICOS. Esta obra forma parte de la Colección de Estudios Jurídicos, que se encuentra formada en sus últimos tomos por las tesis que resultan premiadas en el Certamen “Revista del Tribunal Fiscal de la Federación”, o Certamen “Premio de Estudios sobre Justicia Administrativa”. Además de ser premiada, el Jurado Calificador determinó que este trabajo reunía la calidad para ser publicado en dicha colección.

COLECCIÓN DE OBRAS CLÁSICAS



ISBN 968-7626-38-0

$100.00

LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN EL DERECHO TRIBUTARIO MEXICANO. TOMO II. LIC. SERVANDO J. GARZA

Obra escrita por el maestro de la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia, contribuyó notablemente a la construcción de esa Doctrina de la que hoy nos sentimos orgullosos.

Algunos Temas: Derecho y equidad, El Principio de Igualdad del Artículo 13, Proporcionalidad y Equidad, La autentica violación del Principio de Justicia, El Impuesto sobre dividendos, El principio de Irretroactividad, Sanción y Acción, La Sentencia como Norma concreta y El Principio de su Unicidad.

COEDICIONES



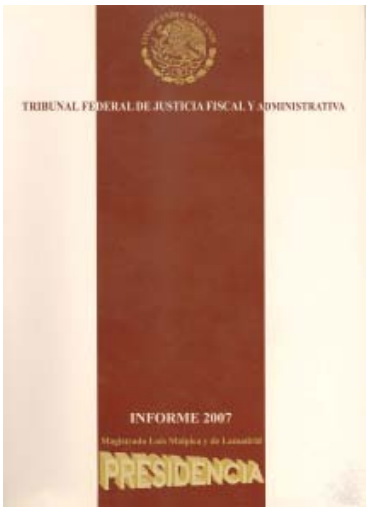
ISBN 968-6080-24-4

$160.00

EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MÉXICO-FRANCIA MEMORIA DEL SEMINARIO INTERNACIONAL 1999

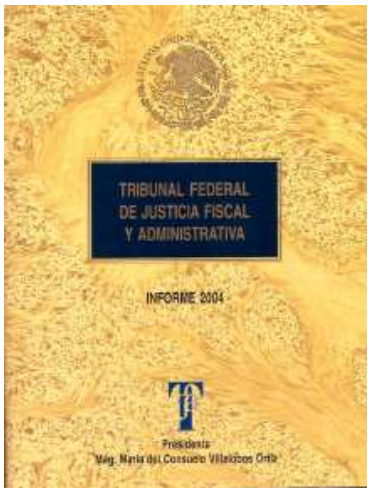
Memorias del Seminario Internacional sobre lo Contencioso Administrativo. Trabajos presentados por Funcionarios del Consejo de Estado Francés y por Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en los que trataron los temas de: La Reforma del Estado y La Jurisdicción en México y Francia; La Organización y Las Competencias de la Jurisdicción Administrativa en México; La eficiencia de las Jurisdicciones Administrativas y La ejecución de las sentencias en Francia y México; La Jurisdicción administrativa. El Derecho Internacional y La Globalización; y La Modernización Tecnológica e Informática en las Jurisdicciones Administrativas en Francia y México.

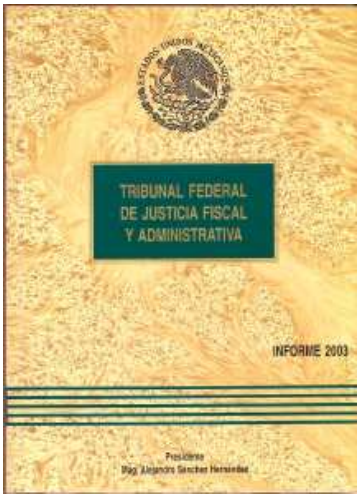
INFORMES ANUALES

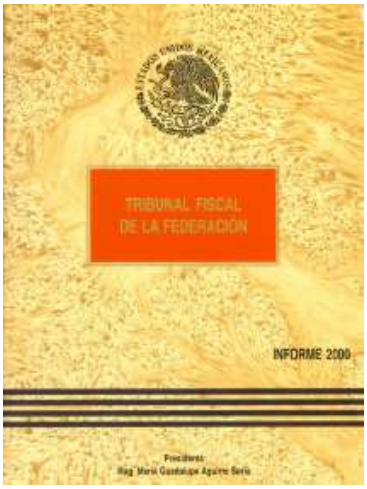












INFORME DE LABORES 2007	$310.00	ISBN 978-968-9468-00-4
INFORME DE LABORES 2006	$300.00	ISBN 968-7626-63-1
INFORME DE LABORES 2005	$292.00	ISBN 968-7626-55-0
INFORME DE LABORES 2004	$275.00	ISBN 968-7626-46-1
INFORME DE LABORES 2003	$250.00	ISBN 968-7626-43-7
INFORME DE LABORES 2002	$200.00	ISBN 968-7626-41-0
INFORME DE LABORES 2001	$190.00	ISBN 968-7626-28-3
INFORME DE LABORES 2000	$155.00	ISBN 968-7626-7

CORREO ELECTRÓNICO: **publicaciones@mail.tfjfa.gob.mx**

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN DE ESTAS PUBLICACIONES COMUNICARSE AL TELÉFONO 50-03-70-00 EXT. 3219 ó 3227

SALA REGIONAL DEL NOROESTE II



- **PUNTO DE VENTA**

CALLE CHIHUAHUA No. 133 NTE.
ENTRE CALLES HIDALGO Y ALLENDE
COL. CENTRO
C.P. 85000
CIUDAD OBREGÓN, SONORA
TEL. (644) 414 70 05